





INSTITUTA
DE LA
JURISPRUDENCIA

ESTABLECIDA POR LAS

Exmas. CÁMARAS DE APELACIONES

DE LA

CAPITAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN SUS SENTENCIAS, POR ORDEN NUMÉRICO Y ALFABÉTICO

POR EL

DE J. F. HALL

ABOGADO

Comprende los tomos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Serie 3^a de la Jurisprudencia Civil
y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la 1^a Serie de la Jurisprudencia
Criminal y Comercial

TOMO VI—PRIMERA PARTE



BUENOS AIRES

FELIX LAJOUANE, EDITOR

79-PREU-96





Abandono de la acusación— Véase: *Acusación*, núm. 3.
— *Delito*, núm. 15.

1^a. **Abandono de una casa**—Justificada la fuga de un comerciante y el abandono de su casa, procede la declaración de quiebra —Jur. Com., tom. 5, pág. 139, Ser. 4^a.

1^b. **Abogado**—La intervención del abogado en los incidentes de la testamentaria, supone que también lo es del espediente principal, y en consecuencia, el término para la prescripción de cinco años solo empieza á correr desde que aparece en autos la dirección de otro letrado. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 170, Ser. 3^a.

1^a—Art. 1394 del Cód. de Com.

1^b.—La prescripción de los honorarios de abogado solo empieza á correr desde que la parte se presenta en autos patrocinada por otro abogado. Véase: Inst., tom. 1^o, verb. *Prescripción*, núms. 2133 y 2138; *Prescripción de honorarios*, núm. 2138; tom. 3^o, mismo verbo, núm. 1. En cuanto á que la intervención del abogado en el incidente hace suponer su intervención en lo principal, consideramos bien lógico esto, pues no es de suponerse que se ocupe á un abogado en este último y á otro en aquél. Esta resolución es una consecuencia lógica de otra de la Cámara en la que se resolvió que el término para prescribir los honorarios devengados en un incidente, solo empieza á correr desde que cesa de patrocinarse en los autos principales. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Prescripción de honorarios*, núm. 2. La razón del sumario es que no es posible que la prescripción se opere en el espediente principal, cuando el mismo



2. **Abogado**—Para que el término de dos años que la ley fija para la prescripción de los honorarios del abogado empiece á correr, el pleito debe haber terminado por sentencia ó transacción.—Jur. Civ., tom. 10, página 170. Ser 3ª.

3. **Abogado**—El abogado consultor está obligado á prestar declaración en el juicio, si no tiene la dirección del promovido y lo pide la misma parte que lo consultó.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 390. Ser. 3ª.

4. **Abogado**—Si por error, el abogado y procurador abogado defiende derechos de la parte en los incidentes, porque la locación de servicios profesionales no se interrumpe, pues tanto el juicio principal como sus incidentes están íntimamente ligados, no pudiendo aplicarse la disposición del art. 4032 del Cód. Civ. Es conveniente tener en cuenta que para que tal cosa suceda es necesario que los incidentes puedan considerarse tales en el sentido del art. 403 del Cód. de Proc., esto es, que tengan relación directa con el expediente principal. En el caso que nos ocupa no es de aplicación el art. 4032 citado del Cód. Civ.

2—Así lo establece terminantemente el art. 4032 en la segunda parte del inc. 1º del Cód. Civ., cuando dice: «El tiempo para la prescripción corre desde que feneció el pleito *por sentencia ó transacción.*»

3—El abogado fué presentado como testigo por la misma parte que lo consultó. Si un abogado tiene el deber de guardar el secreto profesional, es tan solo en cuanto puede perjudicar los intereses de las personas que han requerido su consejo. Por consiguiente, tratándose de preguntas hechas por la misma parte que requirió sus servicios, desaparece la razón del deber en que se encuentra de guardar secreto. Sería otra la cuestión si quien presenta al abogado como testigo lo fuese la parte contraria de aquella que la consultó.

4—Confirmada con costas una resolución de 1ª Inst., se regularon los honorarios devengados ante el Superior á favor de la parte vencida en 1ª y 2ª Inst. Esta regulación fué un mero error de hecho. La parte vencedora abonó los honorarios regulados al vencido, y después pidió ante la misma Cámara que los honorarios abonados por error fuesen devueltos al que los pagó en ese carácter, la Cámara no hizo lugar porque no tiene jurisdicción para remediar como juez originario un error de esta naturaleza y que la parte debía ocurrir donde correspondía.



vencidos, han cobrado honorarios regulados al vencedor. la Cámara carece de jurisdicción para obligarlos á su devolucíón. —Jur. Com., tom. 1, pág. 268, Ser. 4^a.

5. **Abogado**.—El abogado es responsable criminalmente de las imputaciones que se hagan en el escrito de su patrocinado, ya sean calumniosas ó injuriantes. —Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

6. **Abogado**.—Los acreedores con privilegio general — honorarios de abogado y síndico — solo tienen prelación sobre los de privilegio especial — *alquileres* — en la parte necesaria para la venta de los bienes afectados. — Jur. Comercial, tom. 10, pág. 214, Ser. 4^a.

Evidentemente que se trataba de una acción ordinaria sobre devolución de sumas pagadas indebidamente, para lo que como decia la Cámara debía ocurrir á primera instancia.

5.—El fundamento aducido por el Juez de 1^a Inst., decia: «La prueba propucida por el querellante acredita suficientemente que la imputación pertenecía de un modo esclusivo al letrado, siendo su cliente del todo ajeno á ella, y que en tal virtud las responsabilidades legales que de esa imputación puedan surgir, pesan esclusivamente sobre el abogado.» La Cámara al confirmar esta sentencia, dijo: «Pienso igualmente que dados los antecedentes de autos, no es admisible la escepción opuesta por el querellado, de que esas frases injuriosas las ha escrito como letrado y en defensa de los derechos de su cliente á quien correspondia la responsabilidad que de ellas pudiera resultar. La libertad de la defensa, por más amplia que sea, no autoriza á emplear la injuria ó la calumnia como medio de obtener fines lícitos, y esta doctrina la ha sostenido esta Cámara entre otros casos en la causa Pizarro y Del Campo.

6.—Si bien tienen privilegio general, según el art. 1490 del Cód. de Com., los créditos por gastos para la seguridad de los bienes, administración de la cosa fallida y demás diligencias judiciales ó extrajudiciales, en beneficio común, verificadas con la debida autorización, tal privilegio no tiene lugar respecto de aquellos créditos, para cuya seguridad y libre ejercicio no era necesaria la declaración de quiebra, respecto de los cuales solo tienen privilegio las costas que se refiriesen especialmente á ellos. El crédito del locador por los alquileres que le adeude el locatario, ó por cualquiera otra obligación derivada del contrato, goza de

7. **Abogado**—Y procurador, son responsables de los delitos que cometan por medio de los escritos, sin que en ningún caso puedan escusarlos como medio necesario para la defensa de sus representados ó patrocinados. — Jur. Crim., tom. 3, pág. 55, Ser. 4^a.

privilegio especial, concedido por los arts. 3883 y 3884, Cód. Civ., sin necesidad de mediar declaración de quiebra—art. 1578—y por consiguiente se halla regido por el segundo aparte del inc. 1º, art. 1492. «El locador garantido suficientemente con las cosas introducidas por el inquilino y para quienes la administración de la quiebra es más bien un embarazo que un auxilio, no ceden al privilegio por los gastos generales de la quiebra, y si únicamente á los gastos especiales á que la realización de los bienes afectados á su privilegio diese lugar»—Segovia, nota 4778 al Cód. de Com.

7—Ante todo es de tenerse presente que el querellante dirigió su acción contra el abogado, el procurador y el representado de éste. En el juicio de conciliación el representado manifestó que no tenía motivo alguno para hacer imputaciones al querellante, y que no había autorizado á su procurador para hacer imputación alguna á aquél, quedando éste excluido de la acusación en virtud de esta explicación suministrada. Entre tanto, manifestó el abogado acusador que se ratificaba en los cargos hechos en el escrito presentado, que las apreciaciones que su escrito contenía le pertenecían exclusivamente, y por lo tanto solo á él le correspondía la responsabilidad que pudiera caberle. El procurador en la misma acta aceptaba la responsabilidad del escrito que había firmado. Más tarde el abogado insistió en sus mismas acusaciones al contestar la demanda. Desde luego se trataba en este caso de una responsabilidad plena y ampliamente aceptada por los querellados, que podría escusar de la tarea de examinar si en tésis general el abogado y el procurador son legalmente responsables, cuando con motivo del ejercicio de su profesión cometen el delito de calumnia. Los derechos inherentes á la libertad de la defensa son muy respetables, y sin embargo esa libertad está limitada por el derecho ajeno y muy especialmente por el respeto debido á los magistrados. Es por esta causa que los jueces de 1ª Inst. y los Tribunales, tienen facultad para penar las faltas contra su autoridad ó su decoro, ya sea que se cometan en las audiencias ó en los escritos—arts. 75 y 103 de la Ley Org. de los Tribunales.—Y si la ley considera punibles las faltas á la consideración y al respeto debido á los magistrados, en manera alguna podría





8. **Abogado—Patrocinante**, tiene derecho á pedir testimonio de las piezas que afecten sus derechos é intereses, aun cuando haya cesado su intervención en el litigio.—Jur. Com., tom. 2, pág. 207. Ser. 4ª.

Abogado—Véase: *Confirmación*, núm. 1—*Inhabilidad de título*, núm. 3—*Honorarios*, núms. 6, 7, 8 y 9—*Recusación con causa*, núm. 10.

1. **Aborto provocado**—Debe castigarse con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 280, Ser. 4ª.

2. **Aborto provocado**—Si la reo declara que el niño nació muerto y no está probado lo contrario, solo puede ser castigada como culpable de aborto provocado.—Jur. Criminal, tom. 5, pág. 280, Ser. 4ª.

autorizar que se cometiera contra ellos los delitos de injurias, verbales ó reales el más grave aun de calumnia. Las consideraciones debidas á la defensa, no pueden autorizar á cometer delitos, y lo es, y muy grave el de calumnia. Por otra parte, examinando el espíritu del art. 81 del Cód. Penal, que determina las causas que eximen de pena, no siempre resultará que la defensa no puede ampararse en el ejercicio profesional para quedar exento de pena.

8—El abogado de un concurso, después de haber sido abonado de sus honorarios se presentó pidiendo testimonio de la regulación; el juez no hizo lugar á lo pedido, y la Cámara revocó el auto estableciendo que el testimonio debía darse con la citación correspondiente.

1—El art. 104 del Cód. Pen. castiga este delito con uno á tres años de prisión.

2—Se sostuvo por el Fiscal de la Cámara que el delito debiera calificarse de infanticidio, porque es regla general que el feto de tiempo nace vivo: de modo, que quien invoca que ha nacido muerto debe probarlo. Esta tesis es equivocada porque, para que el aborto mereciera la calificación de infanticidio sería menester que estuviesen demostradas en la causa las varias condiciones características de este delito, una de las cuales es que la criatura haya nacido viva, porque si hubiese nacido muerta el homicidio hubiera sido imposible.—Chauveau Ad., tom. 3º, núm. 1211.—Si según Legraud Du Saulle—Medicina legal, tom. 3º, pág. 131—no basta en esta materia encontrarse ante el cadáver de un recién nacido que tenga señales de violencia para

Absolución—Véase: *Acreeedores pagados*, núm. 1.

Absolución del demandado—Véase: *Costas*, núm. 3.

1. **Absolución de posiciones**—No procede la absolución de posiciones como diligencia preparatoria de un juicio.—*Jur. Com.*, tom. 4, pág. 234, Ser. 4^a.

declarar que se ha cometido un crimen, sino que es necesario probar que la criatura ha vivido y que su vida ha cesado á consecuencia de maniobras criminales; si esta comprobación independiente es necesaria cuando existen en el cadáver signos de violencia ¿cómo no ha de requerirse cuando ni siquiera existen tales señales, pues por el contrario el informe espedido revelaba que no había podido constatarse violencia y no existía fractura de los huesos? Verdad es que el informe aseveraba que el cadáver era de un niño nacido á término; pero esto solo no bastaría para concluir de una manera segura é inequívoca que nació con vida, por más que ello sea la regla general, desde que aún en los nacidos á término, la muerte puede producirse antes y durante el parto por diversas causas, muchas de ellas completamente inocentes.—Vide, obra citada, pág. 152, y Orfila, *Medicina legal*, tom. 2^o, pág. 155.—Cuando la inculpada sostiene, dice Chaveau Adolphe, que el niño ha nacido muerto, es necesario que la cuestión de saber si ha nacido vivo, se proponga al Juez, porque si la muerte ha procedido al nacimiento ó si ella ha sido el resultado accidental del parto, la voluntad misma de consumarlo, no bastaría para constituir el crimen; le faltaría su elemento material.—N. 1217 y fallos de la Corte de Casación que cita.—No existiendo datos que contradigan la declaración de la procesada debe admitirse su indivisibilidad, conforme á lo dispuesto en el art. 318 del Cód. de Proc. Crim. y responsabilizarla en consecuencia por el aborto provocado.

1.—La parte solicitó que aquel á quien iba á demandar absolviera posiciones á fin de acreditar el carácter de comerciante que le atribuía, fundándose al solicitar esta medida en el art. 126 del Código de Proc. No se hizo lugar porque el art. 125 solo autoriza esa medida desde que se contesta la demanda hasta la citación para sentencia, ó antes cuando se promueve algún artículo previo. Consideramos que esta resolución es equivocada por cuanto el art. 67 establece que el juicio puede prepararse pidiendo que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo á su personalidad.—inc. 1^a.—El carácter de comerciante de una persona es un hecho relativo á su personalidad, y por consiguiente puede ser materia de interrogaciones previas á la entrada ó iniciación del juicio.





2. **Absolución de posiciones**—Aun alegada justa causa para no comparecer a la absolución de posiciones, procede la rebeldía si no se ofrece la prueba.—Jur. Com., tom. 9, pág. 252, Ser. 4^a.

3. **Absolución de posiciones**—La causal legítima alegada para no comparecer á la absolución de posiciones debe recibirse á prueba.—Jur. Com., tom. 10, pág. 235, Serie 4^a.

Absolución de posiciones—Véase: *Posiciones*, núms. 1 y siguientes.

1. **Absolución del reo**—Procede si la única prueba consiste en la declaración del que confesándose cómplice solo niega ser el autor.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 385, Serie 4^a.

2. **Absolución del reo**—Si las conclusiones de la prueba

2—La Cámara dijo que «no habiéndose ofrecido la prueba prescrita por el art. 127 del Cód. de Proc.» procedía la agregación del pliego para tenerla en cuenta en la estación oportuna del juicio.

3—Siempre que la contraparte exija esa comprobación, pues de lo contrario no habría razón para producir una prueba innecesaria.

1—Un individuo compró tres arañas, y para llevarlas se hizo acompañar de un tercero: al cargar las arañas, en vez de tres cargaron cuatro: el comprador preguntó al otro cómo era aquello, a lo que se le contestó por el tercero que él había comprado la otra. El comprador de las tres arañas supo después, que la cuarta araña no había sido comprada sino hurtada, y denunció el hecho. Fué absuelto el denunciante, porque el único elemento de convicción existente en la causa para comprobar el delito era la declaración del que robó una araña, declaración que además de ser singular no tenía valor legal; quedando como único elemento de prueba la declaración del pretendido culpable, la que no estando desvirtuada por otras constancias del proceso debían ser tenidas como la expresión de la verdad, teniéndose en cuenta además la indivisibilidad de la confesión; todo de acuerdo con los principios sentados en los arts. 306, 307, inc. 4^a, y 276, inc. 2^a; Ley 10, tit. 16, Partida 3^a.

2—La prueba circunstancial ó de presunciones es como una cadena de la cual cada presunción ó indicio constituye un eslabón que debe es-



de presunciones pueden dejar duda sobre la culpabilidad del procesado corresponde su absolución.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 383, Ser. 4^a.

3. Absolución del reo—De la acusación criminal, importa la irresponsabilidad del acusado y hace improcedente la reserva de acciones civiles al acusador.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 290, Ser. 4^a.

4. Absolución del reo—Aun comprobado el delito, las simples presunciones que recaigan sobre los acusados no bastan para fundar una condena: procede la absolución.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 297, Ser. 4^a.

Absolución del reo —Véase: *Legítima defensa*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 2—*Antecedentes del procesado*, núm. 1—*Homicidio en defensa propia*, núm. 1—*Coautores*, núm. 1.

Absolvente. Véase: *Posiciones*, núm. 1.

1. Abuso de autoridad—No existe en el castigo inmediato

tar probado por prueba directa y ligarse sin esfuerzo con el anterior y con el siguiente, de modo que por su íntima relación y concurrencia, conduzcan inequívocamente desde el punto de partida hasta el fin buscado, haciendo imposibles conclusiones diversas—art 358, Cód. de Proc. Crim.—porque si es posible, simplemente posible, que de ellas pueda deducirse otra conclusión, tal género de prueba sería ineficaz para fundar una condenación en causa criminal. Esto es lo que enseña Mittermayer en su Tratado de la Prueba y la doctrina incorporada en el art. 358 citado, especialmente en su inc. 4^o.

3—Se inició acción por defraudación de una suma de dinero, y su reintegro. El acusado fué absuelto del delito imputado. Como ese reintegro fué pedido como sustraído su importe por medio de un acto calificado de delito, desde que se resuelve que el delito no existe, tampoco corresponde hacerse la reserva de derecho, teniendo en cuenta la disposición del art. 496 del Cód. de Proc. Crim.

4—De acuerdo con los fundamentos aducidos en el núm. 2.

1—Un detenido al ser conducido preso, asestó una bofetada al vigilante que lo custodiaba: éste sacó su machete y le dió dos golpes en el brazo. Basta esta simple exposición para dejar establecido que el agre-



de una ofensa personal al agente que la representa.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 8. Ser. 4^a.

2. **Abuso de autoridad**—Teniendo jurisdicción propia el Comisario de policía, para castigar la ebriedad y el desorden, no puede imputársele abuso de autoridad por el ejercicio de esa facultad.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 126, Serie 4^a.

3. **Abuso de autoridad**—La prisión del que produce el desorden, no importa un abuso de autoridad.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 290. Ser. 4^a.

4. **Abuso de autoridad**—Si de autos resulta la comisión de un delito, ya sea abuso ó usurpación, debe formarse sumario, no obstante el desistimiento del Agente Fiscal.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 290. Ser. 4^a.

dido procedió en un momento primo, bajo la reacción natural y hasta cierto punto puramente física contra el ataque injusto. El vigilante inmediatamente guardó el machete, sin continuar pegándole como habría podido hacerlo, si verdaderamente hubiese querido abusar de su autoridad, dada la magnitud de la ofensa inferida—art. 434, inc. 3° del Código de Proc. Crim.

2—Los comisarios de policía obran dentro de las facultades que les son privativas, cuando por faltas determinadas detienen a una persona, y de ese proceder si fuera agravante para los derechos del que se crea damnificado, éste tiene el recurso que establece el art. 30 del Cód. de Proc. Crim. En el art. 243 del Cód. Pen. en que se enumeran los casos en que se comete el delito de abuso de la autoridad no figura como tal el que se espresa, por razón de que el funcionario tiene jurisdicción para proceder en la forma establecida—art. 200, Cód. de Proc. Crim.

3—Es una contravención policial cuya represión se hace en cumplimiento de la ley, siendo un acto perfectamente lícito.

4—La Policía como autoridad ordenó el secuestro y entrega de un caballo, del cual un tercero tenía la posesión de buena fe, a pedido del dueño del animal. Este pedido, solo pudo fundarse en una de estas dos causales: extravío ó pérdida casual del animal, ó hurto ó robo del mismo. En el primer caso, procedía la acción de reivindicación ante las autoridades civiles ó espresamente creadas para entender en estos reclamos, siempre que se encontrara la cosa estraviada en poder de un



1. **Abuso de confianza**—No existe, si el reo tuvo conocimiento del dinero robado independientemente de la voluntad del damnificado.—Jur., Crim., tom. 2, pág. 5, Serie 4^a.

Abuso de confianza—Véase: *Hurto*, núms. 2 y 6.

Accesoría—Véase: *Obligación accesoria*, núm. 1.

poseedor de buena fe, y la acción de defraudación, cuando el poseedor sin título alguno se negare á restituir la cosa ajena que hubiese encontrado perdida—art. 203, inc. 9° del Cód. Pen.—En el segundo caso, la acción hubiera sido eminentemente penal, dada la naturaleza misma del hecho supuesto. En cualquiera de los casos mencionados, la autoridad policial no era la competente para declarar la propiedad, ni resolver por consiguiente, si el derecho á poseer el caballo correspondía á su dueño, ni pudo, dado el supuesto de la imputación de un delito, proceder con autoridad propia, como lo hizo al secuestrar el caballo y archivar de las actuaciones, sin abrogarse facultades que solamente pueden ejercer los jueces correccionales ó del crimen. Constaba además de autos que la policía no había dado cuenta á autoridad alguna del pedido del propietario, resolviendo el litigio pendiente entre éste y el poseedor actual por sí misma. El caballo le fué sustraído á su dueño del corralón, hacia próximamente dos años; y por el testimonio de la nota pasada por el comisario al señor jefe de Policía, constaba que el caballo había sido estimado por el denunciante en 800 pesos moneda nacional, por lo que resultaba claramente especificado un delito previsto y penado por el Código Penal—art. 193—de jurisdicción Crim.—arts. 28 y siguientes del Cód. de Proc. en lo Crim.—El Fiscal dijo que el caso no estaba especificado en el tit. 2° del Cód. Pen. y que si el damnificado quería se le reparasen los perjuicios tenía espedida la vía correspondiente y que por consiguiente debía subsanarse definitivamente en la causa, á lo que no se hizo lugar teniendo en cuenta las consideraciones legales espuestas anteriormente.

1.—La víctima del hurto depositó en un baul una suma de dinero en presencia del delincuente. Este, después sustrajo el dinero con la misma llave de la víctima. Se sostuvo por la acusación que el hurto se había cometido con la circunstancia agravante de abuso de confianza. Se resolvió que el hecho de no haberse ocultado el dueño del dinero al guardarlo, no importaba una confianza en él depositada y de la cual éste haya abusado, pues fué meramente accidental el hecho.

1. Accidentes — La expedición de boletos de pasaje por

1.—Entablada una demanda por daños y perjuicios contra la empresa del ferrocarril del Sud, ésta se exceptuó diciendo que el boleto acompañado por el actor comprobaba que el tomó su boleto en una estación del ferrocarril de la Ensenada siendo por consiguiente con esta empresa con la que contrató el damnificado. Por otra parte, la catástrofe que motivó la demanda tuvo por causa la rotura del eje de un coche del ferrocarril de la Ensenada, y los arreglos existentes entre ambas compañías no impone responsabilidad alguna a la empresa del ferrocarril del Sud, y los reglamentos ingleses que hacen regla en la materia declaran que en casos de tal naturaleza, es la empresa propietaria del carruaje la única responsable de los perjuicios causados por el accidente. Siendo esto así, el demandante ha debido dirigir su acción contra la empresa del ferrocarril de la Ensenada. Aun admitiendo por vía de hipótesis, que la empresa del ferrocarril del Sud pudiera ser demandada, estaría exenta de responsabilidad, desde que el suceso provino de la fractura de un eje *por defecto de la fabricación y ese defecto no era aparente*, hecho que constituye un caso fortuito ó de fuerza mayor, siendo solo el do lo culpa ó negligencia, los elementos esenciales de toda responsabilidad, en casos análogos al presente. No puede decirse que el actor haya contratado su transporte hasta Ayacucho donde se dirigía con la empresa del ferrocarril de la Ensenada, por el solo hecho de aparecer expedido el boleto en una de las estaciones de esta línea. Desde la estación Tres Esquinas hasta la estación Ayacucho el pasajero debía necesariamente ocupar la vía del ferrocarril del Sud, y entonces no puede abrigarse duda de que el actor al adquirir el boleto celebró un doble contrato con la empresa del ferrocarril de la Ensenada en cuanto debía recorrer su línea hasta el empalme con la línea de la empresa del ferrocarril del Sud, y con esta última empresa en cuanto debía también recorrer una gran parte de su línea. El primer contrato celebrado directamente entre el actor y la empresa de la Ensenada creaba derechos y obligaciones entre ambos en todo lo relativo al transporte del pasajero hasta el empalme con la línea del Sud. El segundo contrato celebrado con la empresa del Sud por intermedio de la otra empresa creaba asimismo derechos y obligaciones entre ambos en todo lo concerniente al transporte del pasajero desde el empalme hasta el punto del destino, es decir, hasta la estación de Ayacucho. Y que la empresa de la Ensenada se hallaba autorizada para contratar por la del Sud, lo demuestra palmariamente el informe expedido por el gerente de la empresa del ferrocarril de la Ensenada, al que acompaña la copia del contrato, y lo confesó





una empresa de transporte por ferrocarril, para recorrer

por el gerente de la empresa demandada, contestando la segunda pregunta de las posiciones. Interrogado el señor gerente al tenor de la pregunta citada, dice: «que la empresa del ferrocarril del Sud admite pasajeros con boletos vendidos por la empresa del ferrocarril de la Ensenada, en virtud de un convenio celebrado entre las dos empresas, llevándose una cuenta entre los mismos respecto a estos boletos.» Siendo esto así, la excepción opuesta es inadmisibile desde que como se ha visto, la empresa del ferrocarril de la Ensenada al vender al actor el boleto ha obrado también como mandatario de la empresa demandada y dentro de los límites del mandato; considerándose el acto en consecuencia, como ejecutado directamente por el mandante, con arreglo a lo dispuesto en el art. 1946 del Cód. Civ. La empresa demandada se exceptiona asimismo sosteniendo que la catástrofe ha sido motivada por la rotura del eje de un coche perteneciente a la empresa del ferrocarril de la Ensenada. Consta en efecto, que el furgón núm. 7, cuyo eje se rompió dando lugar a la catástrofe que motiva la demanda, pertenecía a la empresa del ferrocarril de la Ensenada; pero esta circunstancia no influye absolutamente en cuanto a la procedencia de la acción deducida, ni respecto a la responsabilidad que pueda caber a la empresa del ferrocarril del Sud, con motivo de este suceso. Se ha visto ya, que el actor al comprar el boleto, ha contratado su pasaje en cuanto éste debía efectuarse por la línea del Sud con la empresa demandada; y consta del propio reconocimiento de ésta y de la prueba producida, que la catástrofe tuvo lugar en la línea del ferrocarril del Sud. El vagón roto se encontraba pues, bajo el manejo y vigilancia de esta empresa, siendo ella con relación al actor, la única responsable. Así lo establece el artículo 11 del reglamento para el tráfico común de los ferrocarriles de Buenos Aires de fecha 1.^o de Octubre de 1879, que dice así: «Desde que un tren ó vehículo está colocado en la vía de tráfico común, quedará bajo la responsabilidad de la empresa que deba remolcarlo a descargarlo.» El compromiso contraído por las empresas de ferrocarriles determinaba que «inmediatamente que cualquier vehículo de una empresa pase a la vía de otra, la empresa sobre cuya vía está, es la responsable por todos los daños y perjuicios que se originen de su uso, a menos que se pruebe de una manera que no admita duda, que tales daños son originados por algún defecto en el material ó construcción.» Por lo estipulado al final de este convenio se pretendía hacer caer la responsabilidad por los daños causados cuando éstos provengan de defectos en el material ó construcción del vehículo sobre la empresa a

las vías de otras. importa el cumplimiento de un man-

que éste pertenece. Pero este convenio no puede en manera alguna, obligar al pasajero que contrata su pasaje con la empresa conductora. Podría quizás, autorizar á la empresa demandada á gestionar de la de la Ensenada, el reembolso del importe de los perjuicios que se vea en el caso de abonar por causa del accidente, si cree que éste se debe á defectos en el material ó construcción del vehículo; pero no puede oponerse á los terceros, en cuya categoría se encuentra el actor, porque para éste es *res inter alios acta*. Así lo ha establecido la Corte de París en sentencia de 29 de Marzo de 1862, en la que declaró: que las convenciones por las cuales las empresas se libentan de toda responsabilidad por el material destinado á servicio recíproco «no pueden ser opuestas á terceros que no han tomado parte en esas convenciones—Dalloz Recueil, 2.^a parte, págs. 375 y 376.—Es por consiguiente inadmisibles la pretensión de la parte demandada, de que el actor ha debido dirigir su acción contra la empresa del ferrocarril de la Ensenada, pues cualquiera que pueda ser la responsabilidad que quepa á esta empresa, esa responsabilidad podría hacerla efectiva, si así viere convenirle, la empresa del ferrocarril del Sud, pero de ningún modo puede ésta pretender eximirse con ella, de la que directamente le concierne para con el demandante como empresa conductora. La empresa demandada fundó la escepción de caso fortuito ó fuerza mayor en que la catástrofe provino de la fractura del eje de un furgón debido á defecto de fabricación, siendo irresponsable, desde que en tal caso, segun ella, no existe el dolo, la culpa ó negligencia, elementos esenciales que constituyen en casos como el presente. El caso fortuito según lo establece el art. 314 del Cód. Civ. es el «que no ha podido preverse, ó que previsto no ha podido evitarse:—*Vis major est ea que consilio humano neque provideri neque vitari potest*:—Ahora bien, el defecto de fabricación de los materiales que se emplean en el servicio de una línea férrea ¿constituye el caso fortuito ó fuerza mayor que de acuerdo con las prescripciones legales, exonera de toda responsabilidad? La primera obligación de toda empresa de transporte, dice Bedarride—Chemins de fer, tom. 2.^o, pág. 47—es la de proveer con la mayor solicitud á la seguridad de los pasajeros. Esta obligación se impone sobre todo á las compañías de caminos de hierro, por el número de personas que viajan y por las desastrosas consecuencias que traen consigo los descarrilamientos ó las colisiones de los trenes. En estas condiciones, las empresas de ferrocarriles se hallan ante todo en el deber de someter á una inspección y vigilancia prolijas, todos los materiales que emplean en los transportes. Ahora bien, ¿ha



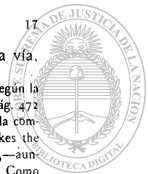


dato y en consecuencia la responsabilidad por los accidentes.

podido escapar á esa inspección y vigilancia minuciosas cualquier defecto ó vicio de fabricación de los mismos materiales? El distinguido comentador citado poco antes, se pronuncia de una manera decidida en sentido negativo. «El vicio del material, dice, no puede ser, no es un hecho imposible de prever y al cual no se podría resistir»: investigaciones prolijas habrían conducido necesariamente á descubrirlo. Y agrega: «Si una compañía ha aceptado como bueno lo que es malo, si el fabricante ha abusado de su confianza, ella misma debe soportar las consecuencias desfavorables de ese exceso de confianza de una parte y de esa mala fe de la otra. ¿Sería legal, razonable y equitativamente posible hacer pesar las consecuencias sobre aquel que las sufre, y al cual no podría dirigirse el más mínimo reproche? Basta pues, que el suceso que ha ocasionado el descarrilamiento sea debido á «vicio propio de la cosa» para que todas sus consecuencias sean á cargo de la compañía—autor citado, pág. 54.—Estos mismos principios han sido establecidos también por la Corte de París en la sentencia de 27 de Noviembre de 1866. Entre otras consideraciones la sentencia consigna las siguientes: «Que el conductor responde de las averías de las cosas á él confiadas á menos que pruebe que estas averías se deben á caso fortuito ó fuerza mayor; que este principio se aplica con más razón al transporte de personas y proteje la seguridad de los viajeros, que así en el caso, el viajero herido no está obligado á probar la culpa de la compañía del camino de hierro; que es por el contrario á la compañía á quien incumbe la obligación de probar los hechos que la exoneran de responsabilidad; que la ruptura ha sido ocasionada por defecto en la fabricación del hierro del bandaje ó calce de la rueda. . . . ; que si este defecto no se había manifestado por ningún signo exterior y si el calce, presentando las apariencias de una buena fabricación, había sido recibido después de las pruebas de uso, estas circunstancias no constituyen ni caso fortuito ni fuerza mayor en descargo de la compañía, y por lo tanto, el accidente tiene por causa determinante un vicio material del cual es responsable el conductor—autor citado, pág. 53.—En idéntico sentido ha sido resuelto un caso por el tribunal de Nevers en sentencia de Abril de 1867. «La rotura de un riel, dice la sentencia citada, *aunque se debiese á un caso oculto*, no es una circunstancia de fuerza mayor que pueda librar á una compañía de su responsabilidad por las consecuencias de esa rotura. Es, por el contrario, el caso de aplicar los principios que han dictado los arts. 1386 y 1721 del Cód. Napoleón.»—Véase á Lemé Fleury, *code annoté des chemins de fer en explotación*.—Los Tribunales de New

tes recaen siempre sobre la empresa propietaria de la vía.

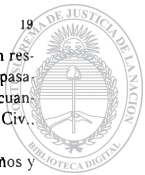
York, colocándose en esta misma corriente de ideas, han ido según la expresión de Pierce, en su obra «On American Railway Law», pág. 472 *in fine*, hasta establecer la regla en virtud de la cual se hace á la compañía garante del esmero y fidelidad de sus fabricantes,—Makes the company warranter of the skill and fidelity of such manufacturer,—aun que estos no sean en ningún sentido empleados de la empresa. Como se ha visto, el defecto de fabricación no pudo constituir caso fortuito ó fuerza mayor, ni aun en el supuesto de que ese defecto «no hubiese sido aparente» y que el material empleado hubiese sido sometido á las pruebas establecidas en las leyes y reglamentos á que están sujetas las empresas de transporte. En el caso que motivaba este juicio, la situación de la empresa demandada era aun mucho más desventajosa, pues, no se justificó siquiera que la ruptura del eje se debiese á defectos de fabricación, ni que el mismo eje hubiese sido sometido al reconocimiento que determina el art. 54 de la Ley de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires. En efecto, un inspector general de Ferrocarriles de la Provincia de Bs. As., afirmaba: que la fractura del eje presentaba una falla cuyo origen no podía atribuirse sino á una de dos causas, ó á que el eje haya sido añadido y la soldadura no se hubiese hecho con perfección, ó á un defecto de fabricación; y que no había constancia en los libros de la compañía de la exacta procedencia del eje roto, ni de las pruebas á que hubiese sido sometido á su recepción en la fábrica. El Departamento de Ingenieros hizo notar que no fué posible averiguar las condiciones de la fabricación y de recibo del eje que ocasionó la catástrofe y que, «dadas las rigurosas pruebas á que debe someterse especialmente este material en su recibo y al esmero que exige en su fabricación, es esta una deficiencia que no se concibe y que no debe permitirse.» Se violaron las disposiciones que contienen los arts. 54 y 58 de la Ley general de Ferrocarriles, que imponen á las empresas de éste género la obligación de someter al examen previo del inspector general, toda máquina ó vehículo que deba ponerse en servicio y la de llevar registros foliados en los que deben figurar las locomotoras y vehículos en servicio, anotando la fecha en que éste tuvo principio, el trabajo que prestaron, las composturas ó modificaciones que sufrieron, y las renovaciones sucesivas de las diversas piezas. En el caso de que se trata la responsabilidad de la empresa demandada era tanto más evidente y más grave, cuanto que no pudo alegar siquiera, que la fractura del eje se hubiese producido de una manera imprevista, de tal modo que el accidente hubiese sido imposible evitarse—art. 514, Cód. Civ.—





aun cuando no lo fuera del vehículo.—Jur. Civ., tom. 8. pág. 148, Ser. 3^a.

En efecto, un empleado de la empresa dió cuenta varias veces á la administración, por medio de informes escritos, del mal movimiento del furgón roto. Hubo, pues, negligencia culpable por parte de la empresa al no atender inmediatamente esos avisos, que demostraban el mal estado del vehículo, faltando al proceder de esa manera á lo dispuesto en el art. 63 de la ley citada de ferrocarriles que exige que el tren rodante ha de ser de primer orden, y muy particularmente á la primera obligación de toda empresa de transporte, que es, como dice Bedarride, tomo 2^o, pág. 47, la de proveer con la mayor solicitud á la seguridad de los pasajeros. Las empresas, dice Pierce,—obra citada, pág. 471—están obligadas á usar de la mayor precaución y diligencia para proveerse de vehículos, máquinas, calderas, etc.; según esto, se ha resuelto que si el accidente proviene de un defecto que ha podido ser precavido empleándose el mayor cuidado y medios de examen, ese accidente debe imputarse á negligencia, y la compañía será responsable. Por lo dicho, hubo negligencia culpable por parte de la empresa demandada. Bastaría esta circunstancia para hacer inadmisibile la escepción que se opuso, aun en el supuesto de que la fractura del eje de que se hizo mérito, pudiera considerarse un accidente, «que no ha podido preverse, ó que previsto no ha podido evitarse»—arts. 513 y 514, Cód. Civ.—En tal concepto, la empresa del ferrocarril del Sud debió ser responsable hacia el actor por el daño causado á éste y estar obligada á la reparación del perjuicio, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 94 de la Ley de Ferrocarriles de la Prov. de Bs. As. de fecha 17 de Agosto de 1880, 53 de la Ley de Ferroc. Nacionales de 18 de Sbre. de 1872, y 1109 del Código Civ. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1083 del Cód. Civ., todo daño sea material ó moral, causado por un delito, debe resolverse en una indemnización pecuniaria que fijará el juez, salvo el caso en que hubiera lugar á la restitución del objeto que hubiere hecho la materia del delito. Este precepto de ley es perfectamente aplicado al caso que nos ocupa, aun cuando se trate de un delito, desde que con arreglo á lo dispuesto por el art. 1109 del mismo Cód., la obligación de reparar el perjuicio que nace de la ejecución de hechos que por culpa ó negligencia ocasionan un daño á otro, es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil. El juzgado para fijar la indemnización pecuniaria que debía satisfacer la empresa del ferrocarril del Sud, tuvo que tomar en consideración no solo el daño causado al actor, sino también el daño moral con sujeción á los



2. **Accidentes**—Las empresas de ferrocarriles son responsables de los daños y perjuicios causados á los pasajeros, por accidentes debidos á su negligencia, aun cuando no pueden ser calificados como delitos.—Jur. Civ. tom. 8, pág. 148, Ser. 3ª.

3. **Accidentes**—No procede indemnización de daños y términos espresos del art. 1083 antes citado. Esta obligación por parte de la empresa, es tanto mayor, cuanto mayor ha sido el deber de obrar con la prudencia que le impone la naturaleza de los servicios que está llamada á prestar al público, no solo por el número de personas que viajan, sino tambien por las desastrosas consecuencias que traen consigo los descarrilamientos y colisiones de los trenes. Los hechos revelaban el daño materialmente experimentado por el actor en razón del tiempo que habia sufrido las consecuencias de las heridas y contusiones y de honorarios y gastos efectuados á consecuencia de ellas, como asimismo el perjuicio moral que debió producirle la misma enfermedad, el dolor y la aflicción de la familia naturalmente alarmada por la perspectiva desesperante de perder al jefe de ella, ó quedar éste imposibilitado para el trabajo, de acuerdo con el pronóstico de los facultativos. Este perjuicio moral debe concurrir como un elemento indispensable á la apreciación pecuniaria que estaba llamado á efectuar el juez, no solo en razón de los términos del art. 1083 sino también porque es ésta la doctrina aceptada por los tratadistas que se ocupan de la materia. Entre otros Laurent—Principios de Derecho Civil, tom. 2º, núm. 525—al sostener que el juez en la evaluación que hace, del perjuicio causado por el delito ó cuasi-delito, *debe también tener en cuenta el perjuicio moral*, recuerda en apoyo de esas ideas una sentencia de la Corte de Aix, que decidió que para apreciar la extensión del perjuicio se debía tener en cuenta no solo la pérdida material causada por la muerte de un padre arrebatado á la familia á la edad de cincuenta y siete años, *sino también el perjuicio moral que resulta de ella*, sea bajo la relación de la dirección é influencia saludables del padre de que se veían privados los demandantes, sea bajo la relación de los lazos de familia rotos para siempre, y *el dolor de perder un esposo y un padre en condiciones tan desgarradoras*. La Cámara aceptó en todas sus partes la doctrina del inferior.

2—Véase el número precedente.

3—El caso era el siguiente: el día 11 de Enero de 1889, entre cuatro y cinco de la tarde, corría por la calle de Cuyo entre Passo y Castelli, un coche jardinera del tranway Ciudad de Buenos Aires. A

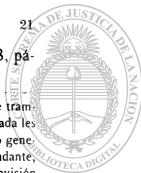


perjuicios si el accidente solo puede ser el resultado de

esa altura y muy próximo á la vía, yacía roto un carro de llevar basuras. En tal circunstancia, y pocos metros antes de llegar á este escollo, el actor pretendió subir al coche; pero antes de penetrar al interior de éste para tomar asiento, fué derribado al suelo junto con el mayoral que cobraba boletos en el estribo, recibiendo la contusión que motivó la acción instaurada. El cuerpo del lesionado había chocado con el carro roto que se encontraba próximo á la vía, yendo ese momento los caballos del vehículo al trote natural. Esta fué la versión exacta de los antecedentes del pleito, tomada de las declaraciones producidas, tanto en el expediente civil como el que se agregó instruido por la policía, y la que conciliaban las afirmaciones de demandante y demandado, para dar al litigio la solución que en derecho corresponde. Ni se deducía de la demanda que el actor permaneciera en el estribo del coche, mayor tiempo que el necesario para poder entrar á tomar asiento, como equivocadamente lo insinuaba el demandado, ni que el tramway fuera sumamente despacio, como lo decía el mayoral, ni el demandante hizo parar el tramway, ni probó que hiciera señas para ello; declarando los testigos que no lo habían visto, y llegando uno de ellos hasta afirmar categóricamente que el lesionado no hizo seña para que el cochero detuviera la marcha del coche, ni es dudoso que á no haberse interpuesto el actor con su cuerpo entre el tramway y el carro, existiera el pasaje necesario para el tránsito de aquél, ni por último se demostró tampoco la afirmación de la demanda de que el cochero del tramway hiciera ademán de detener el vehículo. Tampoco era negable el hecho del choque, ni que éste ocasionara contusiones, por más que no existían en los autos elementos hábiles para determinar la gravedad de aquellas. Fué también apreciada en juicio criminal la conducta del cochero, sobreseyéndose definitivamente en la causa, y dejándose á salvo en toda su integridad el buen nombre y fama del procesado. Era necesario dar, pues, al litigio su solución dentro de los términos espuestos en esta relación de antecedentes, rehuendo de propósito la cuestión relativa al valor de la cosa juzgada en juicio criminal en relación al civil sobre indemnización de daño por no considerarse necesario traer al debate un punto que tiene tan divididas las opiniones de jueces y abogados, de jurisperitos propios y extraños. Sobre un punto estaban de acuerdo todos, y es que, independientemente de la intención criminal, para que el autor de un hecho que ocasiona daño sea responsable de perjuicios, es necesario que le sea imputable culpa ó negligencia. Así lo estatuye el art. 1109 de nuestro Cód. Civ., en que el demandante

la imprudencia del damnificado.—Jur. Civ., tom. 8, página 174, Ser. 3ª.

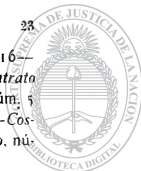
fundaba su derecho. ¿Había existido culpa en los conductores de tramway que dañó al actor? La negativa es forzosa, no solo porque nada les imputaba la demanda misma, no solo por la naturaleza del hecho generador del daño y la participación activa que en él copo al demandante, sino también porque la acción misma estaba fundada en la imprevisión del cochero y en la circunstancia que se desprende de no haber aminorado la marcha del vehículo al pasar por el costado del carro que dejaba estrecho paso para el tránsito del tramway. La ley, la doctrina y la jurisprudencia tienden de consuno y de día en día á aumentar las garantías de las vidas y de los bienes confiados á las empresas de transporte, redoblando las responsabilidades de éstas para que ellas á su vez no omitan esfuerzos respondiendo á los fines de su institución benéfica, que no es el lucro desmedido, sino el comercio humano dentro de los límites impuestos por la civilización y el progreso. Pero así como debe reprimirse con mano firme los abusos, así también es de la acción madura de los magistrados, darse cuenta exacta en cada caso de los derechos y obligaciones recíprocas, dando á cada uno lo suyo, pero no hiriendo tampoco, para cumplir con los fines de la justicia. Démonos cuenta de lo que es un tramway, vehículo puesto al alcance de todo el mundo, moral y materialmente hablando; accesible á todos los bolsillos por la baratura del transporte, y de fácil subida y bajada, para no causar trastornos en el tránsito de las vías públicas. Es un hecho público y que puede presenciarse muchas veces en el día, el que ofrecen personas inespertas, que asaltando, puede decirse, los coches de las empresas de tramways ponen á prueba la paciencia de los mayores, para hacerlos bajar de los estribos donde corten gran riesgo ó para obligar á los pasajeros á bajarse por exceder del número reglamentario. Al lado de tales hechos que abonan la conducta de esos empleados, ¡cuánto conductor imprudente! ¡cuántos choques! ¡cuántas desgracias! ¡cuánta negligencia! ¿Quiere esto decir que ha de presumirse la culpa? ¿conviene dificultar la acción de esas empresas benéficas, que lo son doblemente en poblaciones como la nuestra? Demostrado que en la práctica diaria, que en las condiciones ordinarias, que procediendo dentro de los reglamentos, las empresas pueden servir al público sin perjudicarse, todo se allana exigiendo el respeto debido á la ley, de conductores y pasajeros. Es decir, pues, que no solo han de ser prudentes los conductores sino también el público que se sirve del tramway. Ahora bien, ¿existe esa prudencia? ¿se encuentra dentro de los reglamentos el pasajero que sube al tram



Accidentes—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 1 y 35
— *Condómino*, núm. 3.

way sin hacerlo detener? Contesta el art. 8º del reglamento que impone una multa al pasajero que suba á un vehículo en movimiento. Cuántas desgracias se habrán evitado el día que el público haga respetar sus derechos, haciendo efectivas en los conductores de tramways las multas que la ley impone cuando no detienen la marcha, para que los pasajeros no hagan alarde de valor ó de pericia subiendo y bajando de los coches mientras éstos se encuentran en movimiento. Hoy por hoy, sin embargo, la imprudencia no puede aprovechar al que la comete, y si es rudimentario que los conductores de vehículos pongan el mayor cuidado en no dañar á los pasajeros que conducen, no es de buena lógica, que un hecho propio, espontáneo y libre, pueda considerarse consecuencia forzosa del hecho de otro, y que así un acto imprevisto, casi imposible de prevenir á veces como el que se tira del coche sin hacer parar, ó el que se toma de él repentinamente sin hacer señales, pueda dar lugar á imputabilidad de negligencia en otro. La Cámara ha declarado ya, que no procedía responsabilidad para la empresa de tramways en el caso de un pasajero que se rompió un brazo por haberse bajado del coche que no parara tan pronto como él deseara, y recién temente acababa de absolver también á otra empresa en que la víctima del accidente desgraciado había pretendido subir á un coche que marchaba con velocidad anti-reglamentaria. No podría ser de otro modo, si, como es natural, se alía al art. 902 del Cód. Civ. su verdadero alcance, aplicándolo tanto á uno como á otro litigante—siquiera se hubiera probado que se hizo señal al cochero para que parara y éste no obedeció...—Pero de que «cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos» como lo estatuye el art. 902 del Cód. Civ., en que el actor fundaba su expresión de agravios, no se ve qué responsabilidad puede deducirse para los conductores del tramway en este caso. Por lo contrario, el artículo demostraría que quien es mayormente responsable es quien ha debido poner el mayor cuidado, ¿ha visto el cochero al actor, preocupado como debía estar de que el tramway pasara sin dificultad al lado del carro? Esa misma atención del cochero ¿no exigía doble precaución de señales para hacer parar? ¿Y quién obligaba al lesionado á subir sin hacer detener el coche en movimiento, infringiendo el reglamento, y precisamente cuando estaba á punto de salvarse un paso difícil? ¿Pudo prever el cochero que el pasajero al pasar al lado del tramway se to





Acción—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 16—*Comisionista*, núm. 1—*Contrato ilícito*, núm. 1—*Contrato entre corredores*, núm. 1—*Contrato de sociedad*, núm. 5—*Cosa juzgada*, núm. 2—*Compraventa*, núm. 19—*Costas*, núm. 36—*Apoderado*, núm. 4—*Escrito ofensivo*, número 2.

Acción del acreedor—Véase: *Graduación de créditos*, número 2—*Acreedor privilegiado*, núm. 1.

maría de éste para penetrar en él? Este hecho espontáneo no es consecuencia de la marcha al trote, como lo habría sido, por el contrario, el choque del tramway con el carro, que hubiera causado lesiones á los pasajeros que iban dentro. Tampoco puede sostenerse con ánimo tranquilo que existiendo pasaje para el tramway el golpe del actor sea consecuencia de que los caballos fueran al trote; no habría sido apretado del mismo modo su cuerpo entre el carro y el tramway, si los caballos fueran al paso? ¿qué lesiones habrían sido de mayores consecuencias? No es fácil establecerlo *a priori*. «Las consecuencias mediatas son imputables al autor del hecho, dice el art. 904 del Cód., cuando las hubiera previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas.» Si el actor hubiera fijado su atención, fácilmente se habría dado cuenta del peligro que corría subiendo al tramway en momento de acercarse á un pasaje difícil. Nadie lo obligaba á subir en esas condiciones, y por el contrario, se hacía pasible de una multa por ello mismo; el mayoral no podía verlo en ese momento, y el cochero es verosímil que no lo viera tampoco, preocupado, el mayoral, del escollo que tenía delante y que debía salvar en bien de los demás pasajeros. Caso de haberlo visto, pudieron creer también que el pasajero no insistiera en subir desde que el coche no paraba. En estas condiciones, pues, por sensible que haya sido la desgracia sufrida por el actor, llamados los jueces á determinar la culpa ó la negligencia de los conductores del tramway, dentro del justo límite que determina la prudencia; es el caso de negar la procedencia de responsabilidad de la empresa demandada. Este fué el fundamento del voto de uno de los camaristas al que se adhirieron los otros dos, pero uno de ellos dijo que: aceptaba las consideraciones espuestas, en cuanto ellas se dirigían á demostrar la inculpabilidad del conductor del vehículo, sin que esto importara adherirse á la doctrina que se desarrolla en los demás fundamentos espuestos.

Acción de adulterio—Véase: *Adulterio*, núm. 1.

Acción de calumnia—Véase: *Calumnia*, núms. 6, 8, 9, 10, 11 y 14—*Cosa juzgada*, núm. 1—*Delito*, núms. 11 y 13.

1^a. **Acción con carta de pobreza**—La deducida en esta forma, debe instaurarse ante el juez en turno.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 402, Ser. 3^a.

1^b. **Acción civil**—No procede salvedad de las acciones civiles contra el denunciante en el auto de sobreseimiento definitivo, si no hubiese sido parte acusadora.—Jur. Criminal, tom. 2, pág. 179, Ser. 4^a.

2. **Acción civil**—La absolución de la acusación criminal importa la irresponsabilidad del acusado y hace im-

1^a—Se produjo la información á fin de acreditar los extremos requeridos por la ley y que facultan á litigar por pobre. Aprobada la información y dada la autorización, el interesado dedujo su acción ante el mismo juez, que á la sazón no estaba de turno. Se resolvió que la demanda debía deducirse ante el juez de turno, pues el juicio especial de información había terminado y la demanda constituía un nuevo juicio. Puede compararse esta resolución con la que corre publicada en el tom. 5^o, verb. *Arraigo*, núm. 3, Inst., donde se ordenó que la parte ocurriera al juez en turno para acreditar el carácter de pobre: esa resolución está de acuerdo con el sumario, pues de su espíritu resulta que la información de pobreza es un juicio completamente separado, como lo establece el art. 593 del Cód. de Proc.

1^b—Según disposición del art. 168 del Cód. de Proc. Crim., el denunciante no incurre en responsabilidad alguna, salvo el caso de calumnia. Sin embargo, cuando la denuncia es maliciosa parece que incurre en responsabilidad, pero es de cargo de la parte que sostiene ser maliciosa la denuncia, comprobar el carácter de ésta.

2—Entablada querella por defraudación el acusado fué absuelto en 1^a Inst., pero dejándosele al querellante á salvo las acciones civiles para el reintegro de la suma que se decía defraudada. La reintegración de la suma se pidió por el querellante como sustraída en virtud de un delito, declarándose la inexistencia del delito, no corresponde hacerse reserva alguna de acciones civiles en virtud de lo dispuesto por el art. 496 del Cód. de Proc. Crim.





procedente la reserva de acciones civiles al acusador.—
Jur. Crim., tom. 5, pág. 290, Ser. 4^a.

Acción civil—Véase: *Defraudación*, núms. 6 y 13.—
Adulterio, núm. 7—*Daños y perjuicios*, núm. 34.

Acción comercial—Véase: *Acto comercial*, núm. 4.

Acción entre corredores—Véase: *Diferencias de bolsa*,
núm. 2.

1. **Acción criminal**—Las relaciones entre mandante y
mandatario se rijen por las leyes civiles, pero no pue-
den fundar una acción criminal.—Jur. Crim., tom. 2, pá-
gina 330, Ser. 4^a.

2. **Acción criminal**—Los arreglos sobre daños causa-
dos por un delito, importan la renuncia de las accio-
nes criminales.—Jurisprudencia Crim., tom. 7, pág. 75,
Serie 4^a.

Acción criminal—Véase: *Derechos de propiedad*, núm. 1

1—El querellante había firmado como garante un pagaré que el que-
rellado y un tercero habían otorgado, cuyo pagaré fué renovado á su
vencimiento con la firma del tercero. La garantía otorgada por el que-
rellante fué tan solo hasta que un comerciante del Brasil le remitiera los
fondos para levantar el pagaré: el dinero fué remitido al querellado,
pero éste no canceló la obligación. Uno de los Camaristas dijo: que
por muy severamente que se juzgasen los actos del acusado y por posi-
tivas que fuesen sus responsabilidades civiles, era evidente que no podía
considerarse como un acto de defraudación ó estafa. Otro de los ca-
maristas dijo: que si el acto ejecutado por el acusado, distraiendo para
otros fines, el dinero que recibió para abonar el pagaré garantido por el
querellante, pudiera constituir el delito de defraudación con relación á
aquél, según el art. 207, inc. 6^o, no lo constituye con relación al fiador
ó garante del documento, porque el dinero distraído ó apropiado no era
de éste ni fué dado por él, ni para ser entregado á él. Según lo dispuesto
en ese inciso, solo los que entreguen los bienes á aquellos á quienes
ellos pertenecen ó para quienes son destinados, podrían considerarse
defraudados, pero el querellante en este caso no había sido víctima de
ese hecho.

2—Art. 1077 del Cód. Civ.



—*Defraudación*, núms. 9 y 13—*Adulterio*, núms. 7 y 9
—*Falsedad del pagaré*, núm. 1.

Acción de daños y perjuicios—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 2, 3, 4, 17, 21, 22, 27, 32, 33 y 35—*Menores*, núm. 4—*Comprador de mercaderías*, núm. 2—*Escepción de litispendencia*, núm. 11—*Contrato de compraventa*, número 20.

1^a. **Acción deducida**—Presentado el contrato en que se funda la acción, es improcedente la escepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 113, Ser. 3^a.

Acción deducida—Véase: *Contrato*, núm. 7—*Demandante*, núm. 1—*Nulidad de un laudo*, núm. 1—*Acto comercial*, núm. 2—*Personería*, núm. 2—*Tasación de inmuebles*, núm. 1—*Prueba de la demanda*, núm. 1—*Prueba del demandante*, núm. 1.

Acción desdorosa—Véase: *Calumnia equívoca*, núm. 1.

1^b. **Acción desistida**—Trabado el cuasi contrato por la

1^a—Tampoco la falta de presentación del contrato podría dar lugar á la escepción mencionada, pues la no presentación tiene su sanción legal en los arts. 72 y 73 del Cód. de Proc. La Cámara ha dicho constantemente, que la falta de presentación de documentos no puede fundar la escepción de defecto legal.

1^b—El actor se presentó invocando los derechos que le acordaba un boleto que acompañó entablado demanda á fin de que se obligase al demandado á subsanar los defectos de que adolecían los títulos, y á practicar una mensura del terreno objeto del contrato. El *petitum* del escrito decía testualmente: "En mérito de los hechos aducidos y de las disposiciones legales citadas, vengo á entablar formal demanda, para que el demandado subsane las deficiencias del título de propiedad del terreno objeto del contrato, objeto del instrumento acompañado, á fin de que V. S. le obligue á llenar las formalidades legales, para la tradición del dominio á mi favor del área que se comprometió á venderme haciéndolo responsable y condenándolo oportunamente á la indemnización de daños y perjuicios y al pago de las costas causidicas. El demandado contestando á la demanda instaurada sostuvo no estar obligado á hacer mensura previa alguna, ni que existiesen gravámenes que levan-



contestación á la demanda, el desistimiento del actor, de la acción deducida, y la petición de otros pronunciamientos. importa el término del litigio y obliga al Juzgado á la sustanciación de nueva demanda.—Jur. Civ. tom. 8. pág. 339. Ser. 3ª.

tar, ni deficiencias que subsanar. Pidiendo en consecuencia, el rechazo con costas de la demanda, «declarándose que el actor está obligado á cumplir el contrato celebrado, quedando á salvo los derechos que me confiere, para en caso de no escriturar inmediatamente, dejar ó no sin efecto el convenio, con pérdida de las sumas entregadas. Trabada así la *litis-contestatio*, y quedando el juicio en estado de alegar de bien probado, la parte actora presentó un escrito dejando de lado diligencias solicitadas y pidiendo se ordenase la escrituración dentro del perentorio término, con costos, costas, daños y perjuicios al demandado. Este se manifestó de acuerdo en que se dé por desistido el actor de la demanda instaurada dejándole á salvo los derechos que le correspondían en virtud del boleto. En cuanto á la escrituración que también se pidió, el demandado se opuso: 1º, porque esa solicitud importaba una demanda nueva; 2º, porque importaría una modificación del boleto, y 3º, porque ante el desistimiento de la demanda, ésta desaparece y la situación de los interesados es la misma en que se hallarían si ella no se hubiese interpuesto. Con estos antecedentes, el Inferior falló condenando á escriturar el terreno comprado dentro del perentorio término de diez días bajo apercibimiento de perder la seña dada y de declararse á su cargo los daños y perjuicios si así no lo hiciese. De esta resolución interpuso el demandado los recursos de nulidad y apelación, recursos que le fueron dados por desierto, según él. Ahora bien, el art. 216 del Cód. de Proc. establece que los jueces deben conformar sus fallos á las acciones deducidas en el juicio. Siendo esto así es evidente que, iniciada la demanda, á efecto de que se obligase al demandado, á practicar una mensura del terreno vendido y á subsanar los defectos que el actor atribuía al título, diligencias con las que no estaba conforme el demandado, como lo espresaba al contestar la demanda, el Inferior no pudo disponer, como lo ordenó la sentencia, la escrituración del terreno, desde que la acción deducida no era de escrituración, ni hubo contra-demanda al respecto por parte del demandado. Podría tal vez decirse que el escrito formulando nuevas peticiones importaba un desistimiento de la demanda, pero como en él se deducía también una acción nueva, al solicitarse la escrituración, acción que no fué sustanciada en forma, el juez *a quo* no



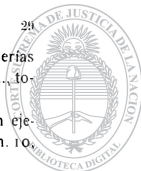
Acción desistida—Véase: *Desistimiento de la acción*, números 1 y 3—*Costa*, núm. 19.

Acción de divorcio—Véase: *Adulterio*, núms. 1 y 2—*Prueba privilegiada*, núm. 1.

1. **Acción ejecutiva**—En tanto no resulte plenamente justificada en autos la obligación de pagar los honorarios, no procede la acción ejecutiva.—*Jur. Com.*, tom. 4, pág. 194, Ser. 4^a.

podía tomarla en consideración, si no fuera á efecto de dar ó no por desistido al actor de la demanda, pero en manera alguna para dictar resolución sobre la escrituración pedida en el recordado escrito, pues importaría admitir el derecho de una parte para cambiar la acción después de trabado el pleito. Una vez hecha la contestación, dice Escriche, no puede el demandante dejar de proseguir la causa ni mudar su acción contra la voluntad del demandado, ni al contrario, porque en su virtud queda celebrado entre los litigantes un cuasi-contrato—V. contestación.—Por consiguiente, la sentencia no se ajustaba á estos principios que son esenciales para su validez, siendo ella completamente nula.

1.—El auto de 1^a Inst. decía lo siguiente: «No resultando de autos el derecho claro y evidente del actor para gestionar ejecutivamente contra el demandado el cobro de honorarios, que ha devengado como árbitro en la causa de la referencia y regulados en la suma de 1,000 pesos por cuanto no aparece *prima facie* que el ejecutado sea el deudor de ellos, ni resolución que así lo ordene, sosteniendo éste, por el contrario, que no estaba obligado á hacer manifestación alguna sobre la cuenta presentada ni sobre su regulación, porque el nombramiento del árbitro no emanaba de su parte, sino de sus contrarios á quienes incumbía su abono; que en tal caso el derecho que pueda tener y tenga el actor no es la ejecutiva que debe ejercitarse, sino la ordinaria y el Juzgado reservarse para pronunciarse oportunamente al respecto, sin que le sea permitido en la vía ejecutiva hacerlo como se pretende, pues sería resolver *á priori*, las cuestiones de fondo que envuelve la demanda y debe en consecuencia declarar que la cuestión que se deduce no está comprendida en ninguno de los incs. del art. 465 del Cód. de Proc. y que de conformidad con lo prescripto por el art. 472 del mismo Código, no procede la ejecución. La Cámara confirmó la resolución diciendo, que el título que sé invocaba para deducir acción ejecutiva no era ninguno de los que traen aparejada ejecución según el art. 465 del Cód. de Proc.



2. **Acción ejecutiva**—El simple recibo de mercaderías no basta para preparar acción ejecutiva. —Jur. Com., tomo 10, pág. 208, Ser. 4^a.

3. **Acción ejecutiva**—El librador no tiene acción ejecutiva contra el aceptante de la letra. —Jur. Com., tomo 10, pág. 222, Ser. 4^a.

4. **Acción ejecutiva**—No procede acción ejecutiva entre librador y aceptante de una letra de cambio. —Jur. Com., tomo 7, pág. 98, Ser. 4^a.

Acción ejecutiva—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 1.—*Protesto*, núm. 3.

2—No puede considerarse como un documento que por sí solo produzca obligación por cuanto solo acusa el recibo de mercaderías, no pudiendo considerársele comprendido dentro de las prescripciones del artículo 465 del Cód. de Proc.

3—Pero tendría acción cuando comprobase que hubo provisión de fondos;—art. 669 del Cód. de Com., aparte 3^o—este extremo solo puede constatarse en juicio ordinario. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst. tomo 4^o, verb. *Acción ejecutiva*, números 1 y 3.

4—De acuerdo con la jurisprudencia. Véanse los núms. 2 y 3 precedentes. La aceptación de la letra de cambio solo obliga al aceptante con relación al propietario de la letra en la fecha en que aquélla tiene lugar y á las personas á quienes fuere endosada en adelante—art. 647, Cód. de Com.; Story on Bills of Exchange, núms. 113 y 119; Pothier Duchange, núms. 115 y 117; Pardessus Droit, Com., núms. 375 á 377.—Con respecto al librador ó endosantes anteriores á la aceptación, las relaciones de derecho que contrae el aceptante con ellos son los del mandatario—art. 598, Cód. de Com. y obras citadas, Story, núms. 115 y 119; Pothier, núms. 91 á 97, y Pardessus, núms. 361 á 379.—La acción que pueda corresponder al librador contra el aceptante no nace de la letra sino del contrato de mandato que tal aceptación importa y no puede en consecuencia el librador acogerse al beneficio del art. 673, que solo corresponde al portador—art. 669—y al endosante que ha pagado la letra contra los endosantes anteriores hasta el librador.—arts. 726 y 727.



1. **Acción de falsedad**—La prueba de falsedad de un testamento ológrafo, después de la protocolización, co-

1.—El testamento ológrafo, vale como acto público y solemne; pero puede ser atacado por su fecha, firma ó escritura, ó por la capacidad del testador, por todos aquellos á quienes se oponga, pudiendo éstos servirse de todo género de pruebas, según lo dispone el art. 3650 del Cód. Civ. Esta importancia legal del testamento ológrafo, no la tiene ciertamente en sí mismo, sino mediante su verificación y protocolización, es decir, cuando se llenen las formalidades prescriptas por el artículo 3695. Hasta entonces, el testamento ológrafo, legalmente no merece fe; pero después que los testigos han declarado sobre la identidad de la letra y firma del testador, previa citación de los herederos legítimos ab-intestato, como lo dispone el art. 715 del Cód. de Proc., y que el juez lo rubrica y manda protocolizar, queda revestido de la autenticidad necesaria para producir los efectos que le son propios. El testamento ológrafo es un instrumento privado, pero una vez llenadas las formalidades que prescribe el art. 3692 del Cód. Civ., y el título vigésimo quinto del de Proc., con su protocolización se convierte en instrumento público como lo dispone el art. 984, y es bien sabido que los instrumentos públicos hacen plena fe, de las enunciaciones de hechos ó actos jurídicos, directamente relativas al acto jurídico que forma el objeto principal, no solo de las partes sino también respecto de terceros—art. 995.—Resulta entonces, que el testamento ológrafo protocolizado por juez competente, tiene en su favor, la presunción *juris* de sinceridad y por consiguiente, el que lo ataca como falso debe probar su falsedad. La teoría que se sostiene pretendiendo de que es á cargo del que presenta, la prueba de la autenticidad del testamento ológrafo, es inaceptable ante nuestra legislación, siendo inconducente la cita que se hace de Laurent y de los comentadores del Cód. Francés, por la diferencia que existe entre éste y nuestro Cód. Civ. sobre la materia. En efecto, el Cód. de Napoleón no exige la verificación previa de la letra y firma del testamento ológrafo, para que éste produzca sus efectos legales y solo prescribe en el art. 1067, que antes de ser ejecutado el testamento ológrafo, será presentado al presidente del Tribunal de 1ª Inst. del distrito en que se abrió la sucesión; que si el testamento está cerrado, será abierto por el presidente, que levantará acta de la presentación, de la apertura y del estado del testamento, después de lo cual ordenará el depósito en manos del notario. No es, entonces, extraño, que ante la ley francesa, cargue con el peso de la prueba, el demandado que se defiende invocando un testamento ológrafo por el que se le instituye heredero cuando

responde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. I, pág. 38, Ser. 3^a.

2. **Acción de falsedad**—Si los informes de los peritos son terminantemente asertivos, forman prueba plena de

el heredero de sangre ó ad-intestato, desconoce la autenticidad de dicho testamento ó lo arguye de falso. Esto no obstante es un punto vivamente discutido entre los comentadores del Cód. de Napoleón si la prueba corresponde al heredero que invoca el testamento ó al pariente que desconoce su autenticidad ó lo ataca de falsedad. La opinión de los primeros se funda que en el testamento ológrafo no es más que un instrumento privado, cuya autenticidad, debe comprobar el que lo invoca para fundar un título hereditario; y á parte de numerosas resoluciones de las Cortes de justicia que así lo han declarado, esa es la opinión sostenida por Demolombe, tom. 4^o, § 1048; Marcade, tom. 4^o, § 111 y siguientes; Vazeille, sobre el art. 1008; Zachariæ sobre Aubre y Rau, tom. 5^o, § 669, y nota 6^a y otras. Pero la opinión contraria, de que la prueba incumbe al que desconoce la autenticidad del testamento ó lo ataca de falso, también está sostenida por numerosas resoluciones de las Cortes de Casación y por tratadistas tan respetables como Troplong, tomo 3^o, § 1498 y siguientes; Toullier, tom. 3^o, núm. 503, como Delisle, Bonnier, Javero, etc. Esta divergencia no puede existir entre nuestro Código, que satisface las razonables exigencias de los que como Demolombe, no ven en el testamento ológrafo, más que un instrumento privado; cuando prescribe que para producir los efectos que le son propios debe comprobarse la identidad de la letra y firma del testador, para elevarlo seguidamente á instrumento público mediante su protocolización. Y una vez hecha la verificación y protocolización, dispone que el testamento ológrafo, vale como acto público y solemne, pudiendo ser atacado por su fecha, forma ó escritura ó por la capacidad del testador, por todos aquellos á quienes se oponga, pudiendo éstos servirse de todo género de pruebas—art. 3650 citado.—Resulta evidente ante el espíritu y ante la letra clara y terminante de nuestro Código que la prueba de falsedad del testamento ológrafo incumbe á la parte que la ataca, la que puede servirse al efecto de todo género de pruebas.

2.—El principio sentado en el sumario respecto á la fuerza probatoria del dictamen de los peritos, cuando éste es terminantemente asertivo y tienen título, es exacto—art. 178 del Cód. de Proc.—Pero como en el caso presente el dictamen de los peritos no fué terminantemente asertivo, pues solo hubo mayoría, resulta que el sumario no expresa con



la autenticidad, y debe, en consecuencia, ser rechazada la acción de falsedad del testamento ológrafo.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 38, Ser. 3ª.

Acción de filiación—Véase: *Filiación natural*, núms. 4, 5 y 6.

Acción fiscal—Véase: *Delito*, núm. 15.

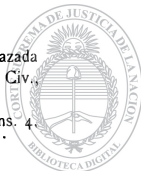
Acción contra los herederos—Véase: *Deudas del causante*, núm. 1.

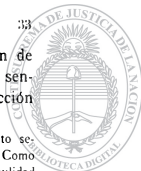
Acción de interdicto—Véase: *Interdicto de despojo*, número 1.

1. **Acción de nulidad**—El término para que la acción de nulidad de un acto jurídico se prescriba para los acreedores, corre desde que formado concurso civil, el inmueble no aparece entre los bienes del concursado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 3ª.

exactitud lo que se resolvió. El juez decía: «El número de opiniones de los peritos, es favorable á la autenticidad del testamento, es decir, favorable á la presunción legal, y el Juzgado después del cotejo que hizo según resulta del acta de fs. 419, no encuentra razón para apartarse de la presunción *juris* y de la opinión de la mayoría. Es verdad, que el Juzgado puede con calidad de para mejor proveer, nombrar nuevos peritos, pero ha creído inútil ordenarlo, porque siempre quedaría subsistente la divergencia de opiniones entre los peritos, careciendo de fuerza probatoria sus conclusiones y también porque no hay otros peritos calígrafos con título registrado ó inscripto ante Exma. la Cámara como lo requiere el art. 164 del Cód. de Proc.»

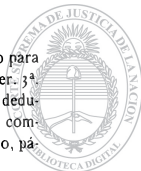
1.—La acción de nulidad de los actos jurídicos por violencia, intimidación, dolo, error ó falsa causa, se prescribe por dos años, desde que la violencia ó intimidación hubiese cesado, ó desde que el error, el dolo ó la falsa causa, fuese conocida—art. 4030, Cód. Civ.—En estos casos queda entonces reducida la cuestión á saber la época en que el perjudicado por ese acto tuvo conocimiento de la enajenación cuya simulación pretende establecer. Si los acreedores no han tenido conocimiento de la enajenación hasta hecha manifestación de bienes que hace un concursado, es evidente que de acuerdo con el recordado artículo, la prescripción debe empezar á correr desde que llegó á su conocimiento que el inmueble que consideraba de su acreedor dejó de pertenecerle.





2. Acción de nulidad—Es improcedente la acción de nulidad de un expediente después de ejecutoriada la sentencia definitiva, aun cuando el fundamento de la acción

2—La acción se encaminaba á obtener la nulidad de un pleito seguido, sustanciado y sentenciado en definitiva por la Cámara. Como fundamento de la resolución se argumentaba que la acción de nulidad estaba autorizada por la ley 2ª, tit. 26, Part. 3ª, y podía intentarse ante el mismo juez que pronunció la sentencia, ó ante el Superior, acompañada con el recurso de apelación: pero este recurso ha desaparecido completamente con la vigencia del Cód. de Proc. que en su art. 239 dispone que el recurso de nulidad debe interponerse juntamente y en el mismo término que el de apelación. Se objetará que dicho art. 239 se refiere á la nulidad como recurso y no á la nulidad como acción; pero esta objeción sería sofística desde que en uno y otro caso, la petición de nulidad tiene el mismo objeto; conseguir que se declare la nulidad de la sentencia para evitar sus consecuencias legales, y desde el momento que el Cód. de Proc. reglamenta el recurso de nulidad en los arts. 237 y siguientes, estableciendo el tiempo y forma en que puede hacerse valer, sin acordar la acción de nulidad, es porque la ha suprimido. La nulidad del procedimiento, ó la de las sentencias es siempre un recurso, y la acción de nulidad que las antiguas leyes acordaban, no era más que una forma especial de interponerlo ó hacerlo valer. No interponiendo en el tiempo y forma que prescribe el Cód. de Proc., la nulidad es inaceptable é improcedente como acción, siendo esta la jurisprudencia establecida por la Exma. Cámara, como puede verse en los casos que se registran en el tom. 2º, pág. 415; tom. 3º, pág. 399, y 7º, pág. 566, de la primera serie de sus fallos. Aparte de esto y aún suponiendo en vigencia la Ley 2ª, tit. 26, Part. 3ª, siempre resultaría improcedente la acción de nulidad que podía intentarse ante el mismo juez que dictó la sentencia, ó ante el superior, acompañada con el recurso de apelación. En el caso presente se pedía la nulidad de todo lo actuado, y en ese todo está comprendida la sentencia de la Exma. Cámara; la demanda no se entabló ante el mismo juez que dictó la sentencia ni tampoco ante el superior, y es elemental que el Juez inferior no puede rehacer las resoluciones del Superior ni menos declararlas nulas, como lo pretendía el actor. Las nulidades en los pleitos ó juicios, deben referirse necesariamente á las sentencias ó al procedimiento, y tienen lugar cuando aquellas se han pronunciado con violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes, ó cuando en este se han omiti-



repose en la carencia de facultades del mandatario para intervenir en el juicio—Jur. Civ., tom. 11, pág. 16, Ser. 3ª.

3. **Acción de nulidad**—De una sentencia, debe deducirse ante el juez en turno; el que la dicte solo es competente para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, página 94, Ser. 3ª.

Acción de nulidad—Véase: *Arbitros*, núm. 2—*Esposa*, núm. 2—*Fraude*, núm. 2—*Nulidad de títulos*, núm. 1—*Nulidad del procedimiento*, núm. 2.

Acción ordinaria—Véase: *Protesto*, núm. 3.

1. **Acción personal**—Si ha sido deducida á nombre per-

do las formas sustanciales del juicio, ó incurrido en algún defecto de los que por expresa disposición de derecho, anulen las actuaciones,—art. 227, Cód. citado.—La nulidad de la sentencia es improcedente, y la nulidad por defectos del procedimiento lo es igualmente, porque queda subsanada siempre que no se reclame la reparación de aquéllos en la misma instancia que se hayan cometido. Si la 1ª y 2ª Inst. terminaron con las sentencias correspondientes, sin que entonces se alegara la nulidad del procedimiento, ella quedó subsanada—art. 240.

3—Para la Cámara no hay juez competente para entender en la acción de nulidad de una sentencia, pues según se ha visto en el número precedente, aun después de admitida una demanda de esta naturaleza por un juez de lo civil en turno, se declaró incompetente y la Cámara por mayoría confirmó la resolución. Sin embargo, en el fallo anterior tan solo se resolvió no hacer lugar á la demanda de nulidad, porque en el estado actual de nuestra legislación no se admite recurso alguno de nulidad contra las sentencias definitivas pasadas en autoridad de cosa juzgada. En el caso del sumario se resolvió como allí se establece porque, estando terminado el pleito, el juez que dictó la sentencia solo tiene jurisdicción para entender en su ejecución, concluyendo su imperio para todas las demás cuestiones que no importen medidas tendientes á su ejecución. Debe estarse á la ley que ordena que las demandas se presenten ante el juez que esté de turno el día de su iniciación.

1—El juicio solo puede seguirse con las mismas partes entre quienes se trata el cuasi-contrato de litiscontestación. Admitir que una persona que no es parte pueda tomar intervención, sería contrariar las re-

sonal por un heredero, sus coherederos no son partes en el juicio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 65, Ser. 3ª.

Acción de petición de herencia.—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 29.—*Inhibición*, núm. 11.

1. Acción posesoria.—El que solo invoca un derecho á poseer, no puede deducir acciones posesorias, que la ley acuerda exclusivamente al que posee ó ha poseído.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 348, Ser. 3ª.

2. Acción posesoria.—Es improcedente la deducción de las sustanciales del procedimiento. Del mismo modo que no puede cambiarse la acción instaurada una vez contestada la demanda, ni modificarse los hechos que la fundan, ni agregar otros nuevos á los ya alegados, salvo el caso del art. 109, no podría tampoco aceptarse el ingreso, al juicio, de quienes no son parte legítima en él, pues es doctrina admitida que la sentencia debe referirse al estado de la litiscontestación, tanto en lo que respecta á la cosa demandada como á la persona de los litigantes.

1—Arts. 2468, 2470, 2473, 2482, 2487, 2490, 2493, 2494 y 2495 del Cód. Civ.

2—Esta es una de las cuestiones más debatidas en materia de posesión. El fallo consignado en el sumario fué resuelto en 1ª Inst. en ese sentido y confirmado por la Cámara, pero sin estudio alguno y aceptando las consideraciones aducidas por el Inferior y sin agregar un solo fundamento. Hoy la misma Cámara ha confirmado otra sentencia de 1ª Inst. que consagra el principio diametralmente opuesto al del sumario. Estas contradicciones frecuentes en que incurren los Tribunales superiores son debidas á que los jueces inferiores estudian bien las cuestiones y cuando van en apelación, la Cámara queda convencida con los argumentos de aquéllos, y sin entrar á estudiar si esos argumentos responden á las prescripciones jurídicas que rijen el caso, confirman por sus fundamentos las sentencias. Así en el caso que nos ocupa, donde se tratan cuestiones de tan trascendental importancia ellas han quedado resueltas en un sentido contradictorio, porque las sentencias de 1ª Inst. así las han resuelto. Este caso está en contradicción con el que acaba de dictar esta misma Cámara de lo Civil en el juicio seguido por Furnus con Lagraña. El Dr. Furnus encaró con habilidad la cuestión, provocando de esta manera una resolución favorable en el sentido de que las acciones posesorias pueden deducirse en juicio ordinario. De los ar-





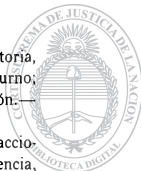
acciones posesorias en juicio ordinario; solo los inter-

gumentos aducidos por el Dr. Furnus, abogado que fué de esta cuestión, estractaremos oportunamente los principales. Por ahora debemos dejar consignados los establecidos en el caso del sumario. Se decía que la acción deducida por el actor en su demanda, es una de las posesorias que se fundan en el hecho de la posesión y que están legisladas en el título «de las acciones posesorias del Cód. Civ., en el que se encuentran todas las disposiciones legales invocadas como fundamento del derecho que se ejercita.» Ahora bien, las acciones posesorias que se originan en el hecho de la posesión, se llaman interdictos, y como fundadamente lo observaba el demandado, deben ser juzgadas sumariamente y en la forma que prescriben las leyes de procedimientos judiciales, como lo dispone el art. 2501 del Cód. Civ., y lo reglamenta el tit. 17 del de Proc. «La forma del juicio ordinario no es aplicable á los interdictos, y si bien el Juzgado no ha podido menos de tramitar ordinariamente la demanda del actor, porque éste al deducirla espresamente manifestó que entablaba una acción posesoria ordinaria, hoy al pronunciar sentencia es llegada la oportunidad de declarar la improcedencia é ilegalidad de la acción posesoria en forma de juicio ordinario, lo que no podía hacer sin evidente prejuzgamiento antes de ahora.» El demandante sostenía que la disposición del art. 2501 del Cód. Civ., es una ley sustantiva ó de fondo, que no puede prevalecer sobre la de forma que espresamente autoriza la deducción en juicio ordinario de las acciones posesorias, como se ve en el art. 579 del Cód. de Proc., el que dispone que cualquiera que sea la sentencia que se dicte en el juicio sumario de interdicto, se entenderá sin perjuicio de las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido, con arreglo á derecho. Este es un gravísimo error, que nace de la confusión que el actor hace de las acciones posesorias con las acciones de posesión, bien diferentes por cierto, en su fundamento, en su naturaleza, y aun en su objeto, puesto que aunque en definitiva unas y otras se refieran á la posesión, las acciones posesorias tienden á que se declare el derecho de poseer. Las primeras deben ser juzgadas sumariamente, las segundas en juicio ordinario. El hecho de la posesión, dice el primer artículo del Código invocado por el demandante, el 2470, da el derecho de protegerse en la posesión, porque nadie puede turbarla arbitrariamente cualquiera que sea su naturaleza—art. 2469—y para el ejercicio de ese derecho la ley ha creado las acciones posesorias, los interdictos. Ya sea que se considere que el poseedor tiene la presunción de ser propietario de la cosa, como lo sostiene Troplong, y que la

dictos responden á ese objeto.—Jur. Civ., tom. 9, página 348, Ser. 3^a.

ley asimilando el poseedor al propietario, prohíbe que sea turbado en la posesión hasta que se pruebe que el poseedor no es propietario: ó sea que las acciones posesorias reconozcan el origen que les atribuye Savigni, con más razón jurídica, cuando sostiene que el motivo de la protección á la posesión y de su asimilación á un derecho, es la conexión íntima que existe entre el hecho de la posesión y el poseedor, y el respeto debido á la persona que refleja indirectamente sobre el hecho, de manera, que teniendo la persona el derecho de ser garantida contra toda violencia, cuando ésta se produce contra la posesión, ese respeto y garantía quedan heridos, en cierto modo respecto al poseedor: y la ley para reparar ese agravio debe proteger ó restablecer ese estado de hecho al cual ha atacado la violencia; en uno y otro caso, decía, lo cierto es que las acciones posesorias tienen su origen en el hecho de la posesión, y por objeto inmediato evitar que nadie se haga justicia por sí mismo. Así, pues, las acciones posesorias nacen del hecho de la posesión y tienden á evitar que ella sea perturbada por hechos arbitrarios, de manera que las cuestiones posesorias son siempre cuestiones de hecho, sin que en ellas pueda alegarse ni resolverse nada que afecte el derecho á la posesión. Las acciones posesorias, dice el art. 2501 del Cód. Civ., serán juzgadas sumariamente y en la forma que prescriban las leyes procesales; y el Cód. de Proc. en el tit. 17 prescribe la forma del juicio sumario de los interdictos, esto es, de las acciones posesorias. Cualquiera que sea la sentencia en el juicio de interdicto ó de las acciones posesorias, se entenderá siempre sin perjuicio de las acciones de posesión ó de dominio que puedan corresponder al vencido, con arreglo á derecho, dice el art. 579 del Cód. de Proc., es verdad, pero esas acciones que quedan á salvo no son las acciones posesorias que se han discutido y resuelto en el juicio de interdicto, sino las acciones de posesión, esto es, las que se fundan en el derecho de poseer. Así por ejemplo, el usufructuario, el usuario, el acreedor anticresista, tienen derecho á la posesión, y si fuesen vencidos en el juicio de las acciones posesorias, en el juicio de interdicto, siempre les quedaría á salvo su derecho para hacerlo valer en el juicio ordinario petitorio, no ya de dominio, puesto que no son propietarios, sino de posesión. En ese juicio ordinario, sobre posesión, se discutiría y resolvería sobre el derecho de poseer, juicio petitorio, porque en él se pide la posesión, mientras que en el juicio posesorio se discuten hechos y las cuestiones á resolver son también de hechos. La acción





1ª. **Acción de prescripción**—La prescripción liberatoria, como acción, solo debe deducirse ante el juez en turno; el de la causa solo puede resolverlo como excepción.—Jur. Com., tom. 10, pág. 191, Ser. 4ª.

1ª. **Acción prescripta**—La prescripción de las acciones no es cuestión de orden público, y en consecuencia,

posesoria de despojo interpuesta por el actor, era entonces improcedente como acción ordinaria. La Cámara al confirmar la sentencia solo dijo: «Otra disyuntiva igualmente desfavorable para el demandante está calcada en el derecho de poseer, en cuyo caso se explicaría la vía ordinaria en que él ha insistido para el ejercicio de su derecho, pero se hace nuevamente necesario el título no exhibido en el término de prueba, ó no tiene otro apoyo que *supposideo quia possideo*, el hecho solo de su posesión, y en ese supuesto, no cabía otra vía que la del interdicto, y su acción ordinaria no puede prosperar.

1ª—Esta cuestión no fué directamente resuelta por la Cámara; pero puede decirse que es un corolario de otra resolución dictada. Iniciado un juicio y obtenido un embargo preventivo, se paralizó la causa en estado de prueba. El demandado se presentó en el mismo expediente alegando la prescripción de la acción, pidiendo el levantamiento del embargo, á lo que no se hizo lugar porque no se deducía la prescripción como excepción sino como acción, y que el embargo cuyo levantamiento se solicitaba es siempre un accesorio del crédito á que se refiere—art. 524 del Cód. Civ.—y mientras no se declare en juicio ó se reconozca en forma la extinción del crédito, no puede legalmente pretenderse por el deudor la cesación de la medida de seguridad decretada para garantizarlo.

1ª—Se trataba de un contrato de seguro el cual en una de sus cláusulas establecía que: «todo derecho y recurso contra la compañía que no haya sido reconocido como fundado por ella en el espacio de seis meses, á contar desde el día del accidente, ó que no haya sido objeto de una demanda regular ante juez competente, será prescripta.» Esta cláusula que establece un término especial para la prescripción ¿tiene fuerza legal? Evidentemente que sí, porque las partes pueden libremente pactar sobre todos aquellos puntos que no estén incluidos entre los que la ley prohíbe—arts. 530 y 531 del Cód. Civ.—Tampoco es de aquellos que hacen depender de la sola voluntad del deudor, la fuerza de la obligación, porque si bien es cierto que para evitar la prescripción se requiere que la compañía reconozca como fundado el reclamo, en

el término puede ser libremente pactado por las partes contratantes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 53, Ser. 4^a.

2. Acción prescripta.—El término para la prescripción

cuyo caso el derecho depende de su voluntad, también es cierto que el acreedor tiene la facultad de demandar ante los jueces é impedir que de ese modo prevalezca la voluntad del deudor.

2.—Vencido un pagaré se inició ejecución por su importe: pero como no estuviere estendido en el sello correspondiente, tuvo que sustanciarse previamente el pago de la multa en que se había incurrido: en este trámite se pasó mucho tiempo de tal modo que cuando se libró mandamiento había ya transcurrido el término requerido por la ley para la prescripción. Citado de remate el deudor, opuso la escepción de prescripción. El Juez de 1^a Inst. no hizo lugar á ella, por cuanto si bien era cierto que desde la época en que se presentó el actor, hasta aquella en que se dió intervención al ejecutado, habían transcurrido más de tres años, no por eso puede decirse que la acción se haya prescripto, porque el término para la prescripción quedó interrumpido por el incidente previo de la multa de la que el mismo deudor fué el causante por haber suscrito una obligación en un sello que no correspondía, violando así la Ley de Papel sellado. La prescripción es un derecho acordado al deudor para libertarse de una obligación, por no haber ejecutado el acreedor su acción dentro del plazo fijado por la ley. ¿Podría decirse que el acreedor no había hecho uso de su derecho? Evidentemente que no, porque su voluntad de cobrar estaba manifestadamente expresada en sus peticiones relativas al pago de la multa. La prescripción se funda en la renuncia presunta del acreedor, y aquí no podía admitirse esa presunción, por cuanto su voluntad de cobrar estaba bien expresadamente manifestada. Esta bien fundada sentencia fué revocada por la Cámara, fundándose en que el acreedor solo citó al deudor á reconocer su firma cuando ya habían transcurrido los tres años establecidos por la ley para la consumación de la prescripción. Que en presencia de lo que disponen los arts. 1^o, tit. Preliminar, 844 y 848 del Cód. de Com., anterior á la doctrina del art. 1010, inc. 2^o del vigente á la época del vencimiento del pagaré, y el art. 4051 del Cód. Civ., es procedente y está justificada la escepción. Además la cuestión debe resolverse de acuerdo con las prescripciones del actual Cód. de Com. Se dijo por otro de los Camaristas, que la escepción debía resolverse con arreglo á las disposiciones del actual Cód. de Com., y las del Cód. Civ., que de acuerdo con el art. 844 de aquél, son su complemento en esta materia de





corre aun después de iniciada acción judicial, siempre que entre dos diligencias la acción se paralice durante el tiempo que la ley fija.—Jur. Com., tom. 10, pág. 116, Serie 4^a.

1. Acción pro-socio—Es improcedente la de rendición de cuentas, en tanto no se justifique la existencia de la sociedad, y como consecuencia, que el demandado ejerció actos de administración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 39, Ser. 3^a.

la prescripción más corta que la del antiguo Cód., como lo es la del art. 848. Esa prescripción, se ha operado por el mero transcurso del tiempo legal, contado desde que empezó á regir el nuevo Cód., fecha que es el día *a quo* de esta prescripción, según lo dispuesto en el art. 4051 del Cód. Civ., hasta el día que por primera vez se notificó al deudor. El art. 3986 del Cód. Civ., establece que la prescripción se interrumpe *por demanda* contra el poseedor, pero la doctrina y la jurisprudencia han entendido siempre que esta demanda debía ser notificada al deudor, para que surtiera el efecto en cuestión. Así lo indican las fuentes mismas de donde fué tomada dicha disposición, citadas por el codificador en su nota—Ley 29, tit. 29, Part. 3^a; Cód. Francés, art. 2244; Goyena 1944; y Vazeille, *Traité des prescriptions*, tom. 1^o, núm. 188.—Es por eso que la Suprema Corte Nacional ha establecido que los artículos 3984 y 3989 del Cód. Civ., concordantes con la ley 29, tit. 29, Part. 3^a, requieren actos directos contra el deudor para interrumpir la prescripción empezada por éste—Fallos, Ser. 2^a, tom. 21, pág. 632 y tom. 10, pág. 354.—Por otra parte, la opinión común de los autores es atribuir este efecto interruptor de la prescripción, no á la demanda misma sino á la citación ó emplazamiento del demandado. Así lo enseñan Caravantes, núm. 573; y Reus, tom. 1^o, pág. 399. El Dr. Malaver en su curso de procedimientos judiciales, núm. 595, atribuye también esa cualidad á la notificación ó emplazamiento y transcribe como fundamento precisamente la ya citada ley de Partida y el art. 3986 del Cód. Civ.

1—La acción de rendición de cuentas autorizada por el art. 1696 del Cód. Civ., supone necesariamente la existencia de una sociedad legalmente constituida, de un socio administrador, y ante todo, la escritura pública exigida bajo pena de nulidad en el art. 1184, cuando como en el caso del sumario concurren las circunstancias previstas en el inc. 3^o.



1. Acción reivindicatoria—Para que prospere, el demandante debe justificar que había adquirido por medio de la tradición, traslativa de la posesión, el dominio del inmueble.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 301, Ser. 3ª.

2. Acción reivindicatoria—Procede la acción reivindicatoria por el sobrante que el lindero posea fuera de su título si se justifica que le falta al reivindicante.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 106, Ser. 3ª.

1—Debe aplicarse el principio sentado en el sumario, tan solo al caso práctico que motivó la resolución, allí se presentó título traslativo del dominio, siendo indispensable según disposición de un artículo del Código Civil, que la tradición de la cosa siga al otorgamiento de la escritura de enagenación—arts. 577, 2601 y 3265.—Pero es de advertir que la acción reivindicatoria se dá á favor de aquel que ha tenido el *dominio* de la cosa—art. 2758—y ese dominio se adquiere por la *tradición*—artículo 2524, inc. 4º—como asimismo por la *prescripción*—inc. 7º del art. citado.—Para la adquisición del dominio por prescripción no se necesita la tradición, basta la posesión que uno mismo adquiere por su sola voluntad de tener la cosa para sí, en ciertos casos—art. 4016.—En esta prescripción no se requiere la tradición como en la del art. 3099. Luego pues, cuando el sumario dice, que para que prospere la acción reivindicatoria es requisito esencial justificar el dominio por medio de la tradición, debe entenderse en un sentido limitado; y que es equivocado el principio aplicado á la posesión adquirida por otros medios que no sea la tradición. Viniendo á los fundamentos del sumario, debemos decir que para averiguar si procede ó no la acción reivindicatoria, debe tenerse en cuenta que el art. 2758 del Cód. Civ. dice, que esta acción nace del *dominio* que cada uno tiene de cosas particulares, por el cual el propietario que ha perdido la posesión de una cosa, la reclama y reivindica contra aquel que se encuentra en posesión de ella. Nuestra legislación civil—art. 577 y su nota—á diferencia de la francesa, establece que el acreedor antes de la tradición de la cosa, no adquiere sobre ella ningún derecho real. En presencia del precepto legal de este artículo y de los demás que lo son concordantes, el actor debe acreditar—Ley 1ª, tít. 14. Part. 3ª—que adquirió el inmueble por medio de la tradición ó de la prescripción; es decir que debe comprobar el dominio del inmueble, por ser éste un requisito indispensable para justificar la procedencia de la demanda.



3. Acción reivindicatoria—El heredero forzoso entra en posesión de la herencia después de la muerte del causante y en consecuencia tiene acción reivindicatoria contra el detentador, aun cuando no haya tenido la posesión material.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 305, Ser. 3ª.

4. Acción reivindicatoria—El embargo preventivo autorizado en caso de reivindicación, solo procede cuando haya de entablarse acción real.—Jur. Com., tomo 8, página 166, Ser. 4ª.

5. Acción reivindicatoria—Para que proceda el embargo preventivo sobre el bien reivindicado, deben acompañarse justificativos que hagan verosímil la acción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 71, Ser. 3ª.

Acción reivindicatoria—Véase: *Posesión*, núm. 9—*Bienes de la esposa*, núm. 1.

Acción del rematador—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 6.

3—Arts. 2758 y 3410 del Cód. Civ.; Ley 43, tít. 32, lib. 2º, Rec. de Indias.

4—No se dedujo acción reivindicatoria y por esa causa no se hizo lugar al embargo preventivo.

5—Esta resolución fué fundada en que el embargo preventivo en el caso que señala el art. 447 del Cód. de Proc., requiere que se acompañen con la petición, documentos que hagan presumir verosíblemente que en efecto se ha de entablar la acción reivindicatoria, pues si se admitiera para gravar con un embargo un bien, la simple afirmación de que se procederá á reivindicarlo, no habría seguridad en el dominio privado, lo que sobre ser contrario á la ley sería violatorio de los principios generales de justicia é introduciría la anarquía en la sociedad. En el caso del sumario, se pedía el embargo preventivo sin deducir la acción reivindicatoria, pero prometiendo instaurarla inmediatamente de trabado el embargo. Si se deduce la acción reivindicatoria y como una medida de garantía se solicita el embargo preventivo de la cosa, los jueces no podrían negarse á otorgar el embargo por cuanto el artículo 477 citado no exige ningún requisito.



Acción de rescisión—Véase: *Contrato rescindido*, número 1.

1^a. **Acción de simulación**—De un acto jurídico, se prescribe á los dos años.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Serie 3^a.

Acción de simulación—Véase: *Acto jurídico*, num. 1—*Acto simulado*, núm. 1.

Acción entre socios—Véase: *Contrato de sociedad*, número 3—*Embargo preventivo*, núm. 28.

1^b. **Acción del tercerista**—Al tercerista corresponde justificar los fundamentos de su acción.—Jur. Com., tom. 8, pág. 383, Ser. 4^a.

Acción de tercería—Véase: *Bienes muebles*, núm. 2—*Tercería de dominio*, núm. 15.

Acción contra terceros—Véase: *Heredero*, núm. 1.

Acciones—Véase: *Accionista*, núm. 1.

1^c. **Acciones y derechos**—Para que el acreedor pueda

1^a—Art. 4030 del Cód. Civ.

1^b—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^c—Si bien el art. 1196 del Cód. Civ. faculta al acreedor para ejercer las acciones y derechos de su deudor, esta disposición no se puede tomar en términos absolutos sino en un sentido jurídico y legal que debe buscarse en los motivos, y en la razón que el legislador ha tenido para dictarla. El principio general es que los acreedores tienen derecho á ser pagados de sus créditos con las bienes de sus deudores, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, comprendiéndose en esa denominación los objetos inmateriales susceptibles de valor, como las acciones y derechos—art. 2312 del Cód. Civ.—Así pues, el acreedor puede hacerse pago de su crédito, tanto con el dinero como con los muebles, y aun con las acciones y derechos que formen el patrimonio de su deudor, siempre que los últimos no sean inherentes á la persona de éste, como lo dice el art. 1196. Pero, así como no puede el acreedor tomar por sí los bienes muebles ó inmuebles de su deudor, para pagarse de su crédito, sino que debe ocurrir á la justicia para obtener el pago por su intermedio, á fin de que ésta autorice la venta de esos bienes ó la dación en pago, tratándose de acciones y derechos tampoco



ejercitar los derechos y acciones del deudor, debe existir subrogación judicial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 14, Ser. 3^a.

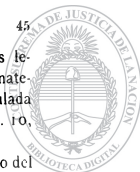
1^a. **Acciones embargadas**—No es obligatoria la venta en remate, de los títulos ó acciones dadas en prenda; puede verificarse por intermedio de un corredor en la Bolsa de Comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 132, Ser. 4^a.

1^b. **Acciones ó títulos**—Para que el contrato de compra-

puede el acreedor apoderarse y usar de ellos, sino mediante la autorización de los jueces. Y que esta es la interpretación que debe darse al art. 1196 del Cód. Civ., no solo lo enseñan los principios generales del derecho, sino que también resultan de las mismas fuentes en que el legislador se ha inspirado para dictarlo. En efecto, en la nota explicativa de dicho artículo se cita, como concordante, el art. 1166 del Código Francés, y como único comentario se dice: Marcadé sobre este artículo trata de esta materia perfectamente y resuelve todas las dificultades que parece presentar. De manera que la opinión de Marcadé es la que acepta el autor de nuestro Cód. sobre este punto. Veamos á Marcadé: «Es bien entendido, dice, que el acreedor no puede ejercitar el derecho ó la acción, sino bajo la triple condición de que su crédito esté vencido, de que el deudor no lo haya satisfecho, y que este deudor rehuse ejercitar por sí mismo el derecho á la acción para ceder el provecho al acreedor. Pero, aun en este último caso, ¿podrá él obrar directamente, ó bien deberá hacerse autorizar por la justicia si el deudor no les trasfiere su derecho ó no lo constituye su mandatario á efecto de que pueda obrar? La Corte de Casación está por la negativa y decide que nuestro artículo—el 1166, Francés—permite al acreedor obrar «de plano» y sin necesidad alguna de hacerse subrogar, mientras que todos los autores sin excepción enseñan lo contrario. En este conflicto, tan grande entre la jurisprudencia y la doctrina, creemos que la verdad está del lado de esta última, y la necesidad de una subrogación convencional ó judicial nos parece resultar claramente de los principios generales y de las tradiciones históricas—tom. 4º, § 493.—Necesita pues el acreedor, subrogarse judicialmente en los derechos y acciones de su deudor para poderlos ejercitar legalmente, de manera que carece de acción el acreedor mientras esto no se cumpla.

1^a—Art. 585, inc. 2º del Cód. de Com.

1^b—Arts. 209, 210, 535 y 536 del Cód. de Com. ant., vigente en la época en que se celebró el contrato.



venta de acciones ó títulos al portador surta efectos legales, la consignación judicial de los que fueron materia del contrato, debe verificarse en la fecha estipulada para la entrega.—Jurisprudencia Com., tom. 9, pág. 10, Ser. 4^a.

1^a. **Accionista**—Siendo condición esencial del voto del accionista el depósito en la caja de la Sociedad, de las acciones en que funda su carácter de tal, la omisión de esa formalidad no puede ser suplida por un certificado de su existencia en poder de terceros.—Jur. Com., tom. 1, pág. 41, Ser. 4^a.

1. **Aceptación**—Véase: *Contrato nuevo*, núm. 1—*Comisión sindical*, núm. 1—*Letra de cambio*, núm. 4—*Consignación en pago*, núm. 3.

1^a—Los estatutos sociales decían: «para tener derecho á votar los accionistas depositarán sus acciones al portador en la caja de la sociedad, hasta tres días antes del fijado para la Asamblea, quedando desde luego cerrado el libro de transferencias.» Como se vé el artículo exigía el depósito en la «Caja de la Sociedad» para tener derecho á votar. Se demostró en autos que los que habían votado en esa Asamblea como accionistas, no habían constatado su calidad de tales, por la presentación material de las acciones para que fuesen depositadas en la caja social sino que se les espidió boletas de entrada por certificados de depósito de dichas acciones dadas por algunos bancos ó casas particulares de comercio donde ellas existían. Tales certificados, ni son títulos que comprueben la posesión de las acciones por el que se dice accionista, ni pueden ellos reemplazar la presentación material de las acciones mismas, exigidas por los estatutos, para tener derecho á votar. No comprobado el derecho á votar, dentro de los términos prescriptos por los estatutos que son la ley del contrato, ese derecho no pudo ser acordado en la forma que lo fué, pues la caja de la Sociedad, no es la *caja* de los Bancos ni de las casas particulares, donde aparecen depositados, ni la presentación de la *acción* emitida por la Sociedad es la presentación de certificados de depósitos en dichos Bancos y casas. No habiéndose constituido la Asamblea en la forma prescripta, no tuvieron título habilitante los accionistas que la formaban, y desde luego, son antes las disposiciones de sus estatutos, como si ella no existiese.



1^a. **Aceptante**—El librador no tiene acción ejecutiva contra el aceptante de la letra.—Jur. Com., tom. 10, página 222, Ser. 4^a.

Aceptante—Véase: *Excepción de caducidad*, núms. 1 y 3—*Inhabilidad de título*, núm. 4—*Pagaré á la orden*, número 1—*Acción ejecutiva*, núm. 4—*Protesto*, núm. 6.

Acontecimiento—Véase: *Delito*, núm. 6.

Acrecer—Véase: *Colegatarios*, núm. 1.

1^b. **Acreedor**—Para que el acreedor pueda ejercitar los derechos y acciones del deudor, debe existir subrogación judicial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 14, Ser. 3^a.

Acreedor—Véase: *Depositario judicial*, núm. 5—*Embargo*, núms. 4 y 11—*Excepción de pago*, núm. 2—*Excepciones*, núm. 4—*Honorarios*, núm. 6—*Papeles de comercio*, núm. 1—*Fiador solidario*, núm. 1—*Obligación alternativa*, núm. 1—*Obligación sin plazo*, núm. 1—*Contrato*, núm. 4—*Costas*, núm. 41—*Concurso*, núm. 1—*Confesión del acreedor*, núm. 1—*Excepción de prescripción*, núm. 4—*Excepción de inhabilidad*, núm. 12—*Excepción de espera*, núm. 6—*Declaración de testigo*, número 4—*Pago por error*, núm. 1—*Poder especial*, núm. 4—*Consignación en pago*, núm. 5—*Contrato de fianza*, núm. 1—*Adjudicación in solutium*, núm. 1—*Condiciones*, núm. 4—*Fuerza irresistible*, núm. 1.

1^c. **Acreedor hipotecario**—Los gastos de tasación y venta del bien hipotecado, aun practicados en ejecución seguida

1^a—Véase: *Acción ejecutiva*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Acciones y derechos*, núm. 1.

1^c—Porque esos gastos son hechos en beneficio directo del acreedor hipotecario. Y además en el caso del sumario este acreedor tomó participación en el juicio continuando las diligencias relativas á la es-
crituración del bien hipotecado vendido en la ejecución.

por un tercero, son de cargo del acreedor hipotecario.—Jur. Com., tom. 1, pág. 55, Ser. 4^a.

2^a. **Acreedor hipotecario**— Puede pedir la quiebra del deudor sin necesidad de justificar la insuficiencia de la garantía si ella se reconoce espresamente por el mismo deudor ó su representante legal.—Jur. Com., tom. 6, pág. 249, Ser. 4^a.

1. **Acreedor prendario**—La posesión material es esencial para que el acreedor prendario pueda invocar los privilegios legales resultantes de tal contrato.—Jur. Com., tomo 6, pág. 173, Ser. 4^a.

2^b. **Acreedor prendario**— La prenda para garantizar un

2^a—El art. 1393 del Cód. de Com. establece en uno de sus incisos que los acreedores hipotecarios y prendarios no serán admitidos á solicitar la declaración de quiebra, sino en el caso que justifiquen que los bienes afectados no son suficientes para el pago de sus créditos. La mejor forma de justificar ese extremo es la confesión de la misma parte deudora que declara la insuficiencia de la garantía.

1—El hecho de la posesión material es esencial en el contrato de prenda, y para que el acreedor prendario pueda invocar los privilegios legales resultantes de tal contrato—arts. 3204, 3205 y 3206 del Cód. Civ.

2^b—El actor fundó su acción en el contrato, é invocando uno de sus artículos sostuvo tener derecho á poseer las cosas á que el mismo se refería. Por ese contrato el actor se obligó á hacer abrir con su garantía al demandado un crédito en cuenta corriente por seis mil pesos y el demandado se obligó á abonar al Banco dicho crédito en su misma cuenta hasta cancelario en el término de seis meses; en el artículo 3^o se convino testualmente lo siguiente: «El Sr. Barthel entrega en garantía de las obligaciones que establece esta escritura todas las existencias que contiene su taller, que resultan del inventario que original le entrega á este propósito, y de las que por pretesto alguno podrá disponer sin el acuerdo previo y escrito del Sr. Silva, á cuya orden quedan en garantía del crédito que le abre en el Banco mencionado en el art. 1^o.» El contrato es la ley que rige en primer término las relaciones jurídicas de los contratantes—art. 1197, Cód. Civ.—y en presencia de ese artículo, el derecho del demandante para pedir la tradición





crédito bancario, puede y debe ser entregada al acreedor prendario, desde que se haga uso del crédito, sin que el término fijado al deudor para la devolución del préstamo pueda influir en el derecho á garantizarse.—Jur. Com., tom. 8, pág. 347, Ser. 4^a.

Acreedor prendario—Véase: *Prenda*, núm. 1.

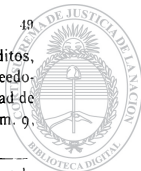
1 Acreedor privilegiado—Cuyo derecho preferente se

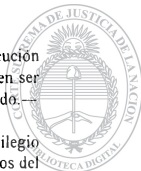
de las existencias inventariadas no es dudoso. Ese derecho surgió en su favor desde el momento mismo de la celebración del contrato, por que desde ese momento declaró y convino el demandado que dichas existencias quedaban á la orden del actor, y aun entregadas á éste, hecho que no ocurrió y que motivó el juicio. El derecho del actor á entrar en posesión de esos bienes no estaba, pues, sujeto á término ni á otra condición que la de hacer abrir el crédito en favor del demandado, y que la cumplió, resultaba reconocido por el Banco y por el demandado; no estaba subordinado aquel derecho á que este usara ó no usara de tal crédito, ni á que fuera ó no cancelado dentro del término fijado al efecto. Abierto el crédito, el actor quedaba ligado con el Banco, y para su responsabilidad, estipuló la fianza pactada en el art. 3º, el demandado la aceptó: la ley no lo prohíbe, luego debe cumplirla, porque para los contratantes tiene la fuerza de la ley misma.

1—En un concurso se estableció la graduación de créditos en esta forma: 1º Los acreedores por costas judiciales; 2º Banco de la Provincia; 3º J. B. Sivori; 4º Banco de la Provincia; 5º Pedro Esnaola; 6º J. B. Sivori; 7º Banco Nacional; 8º Cané de Fabiani. El acreedor hipotecario Esnaola recibió una parte de su crédito previa la fianza determinada en el art. 3938 del Cód. Civil. Más tarde, el Banco de la Provincia, hallándose impago de su crédito preferente al anterior, demandó á Esnaola para que oblate en el Banco Nacional y á la orden del Juzgado, la cantidad que tenía recibida en las condiciones á que se ha hecho referencia. El demandado no negó la verdad de los hechos espuestos por el representante del Banco, ni discutió sus privilegios ni la prelación de su crédito arguyendo únicamente en el sentido de no hallarse obligado á devolver el total de la suma percibida, sino solo la diferencia que bastase á cubrir el importe de dicho crédito, pues habiendo Cané de Fabiani, recibido igualmente bajo fianza de acreedor de mejor derecho una suma de trece mil trescientos noventa y un pesos,

ha reconocido en el estado de graduación de créditos, puede dirigir su acción contra cualquiera de los acreedores de grado inferior que haya afianzado, sin necesidad de hacerlo contra el de último término.— Jur. Civ., tom. 9, pág. 23, Ser. 3ª.

y encontrándose ésta en quinto lugar y grado, era contra ella que debía accionar el demandante, pues su responsabilidad se limitaba á la susodicha diferencia, ó sea la suma de dos mil setenta y siete pesos moneda nacional.—El art. 3938, ya citado dice: los acreedores hipotecarios no están obligados á esperar las resultas del concurso general para proceder á ejercer sus acciones contra las respectivas fincas, bastará que consignen ó afiancen una cantidad que se juzgue suficiente para el pago de los créditos que sean privilegiados á los de ellos, y que restituyan á la masa concursada, lo que sobrase después de cubiertas sus acciones. Esta disposición importa, como se ve, un beneficio á favor del acreedor hipotecario, acordado evidentemente en razón de la índole de su crédito, pero como el ejercicio de su acción, ya por la forma y el tiempo en que pueda hacerse valer, ya por la fuerza y efectos que le imprimen su mismo carácter de real, podría en definitiva lesionar los derechos de los acreedores declarados preferentes, la ley para ser consecuente consigo misma, ha debido buscar los medios de salvar estos últimos, como así lo ha verificado. Es á estos fines que corresponde indudablemente la consignación ó fianza de acreedor de mejor derecho; é importaría desde luego desconocerlas y contrariarlas, si el que goza de privilegio, no hubiera de tener al mismo tiempo la facultad de hacerlo efectivo sobre el acreedor que le subsiguiese en grado, sino sobre los demás colocados en los grados sucesivos, pasando por aquél, como lo pretendía el demandado.—Habría un reato á su derecho que no está escrito en la ley ni dice á su espíritu, resultando desde entonces que no sería el propio acreedor privilegiado, sino los inferiores en lugar y grado, los que impondrían en cada caso los procedimientos á seguirse en pugna con la misma razón determinante de la reserva á que se subordina el ejercicio de la acción hipotecaria, que no es otra que la de asegurar la eficacia del privilegio y el pago preferente del crédito á que él se refiere.—En este orden de ideas, el Banco ha podido observar con razón que lo pretendido actualmente por la sucesión Esnaola, pudo pretender á su vez Sivori y así se habría visto al Banco, en cuestión con este último, el cual exigiría á su vez fuese primero contra Esnaola y éste contra la señora Cané de Fabiani, discusión





2. **Acreedor privilegiado**—Los gastos de la ejecución seguida por un acreedor de privilegio especial deben ser abonados por él, en tanto su crédito no sea verificado.—Jur. Com., tom. 2º, pág. 210, Ser. 4ª.

3. **Acreedor privilegiado**—El acreedor con privilegio especial no puede discutir la prelación de los embargos del excedente; debe depositarlo judicialmente.—Jur. Com., tom. 3º, pág. 11, Ser. 4ª.

4. **Acreedor privilegiado**—El acreedor con privilegio que se reproduciría cuando se cobrase el crédito de los gastos ulteriores: como también que si hubiere de considerarse á la referida señora deudora de la testamentaria demandada, según ésta lo sostiene, por estar en un grado posterior, la sucesión Esnaola lo era del Banco por el mismo motivo.

2. En un concurso se quiso que los gastos de remate de la finca afectada con privilegio, fuesen abonados por la masa; no se hizo lugar porque esos gastos fueron devengados en el interés exclusivo de dicho acreedor y no en el interés común del concurso.

3.—Un acreedor hipotecario seguía ejecución contra el deudor por cobro de su crédito: en el mismo juicio se había trabado embargo á solicitud de otros acreedores que también gestionaban sus créditos ante otros jueces. Vendido el inmueble quedó un excedente, y el ejecutante que era el Banco se negó á depositar ese excedente. Se le obligó á hacer el depósito fundándose la resolución en que el Banco no tenía personería para discutir los derechos de preferencia que puedan pretender otros acreedores que en distintos otros juicios hayan hecho embargar ó inhibir al deudor ejecutado, pues esa cuestión debe ser tratada entre ellos. Estaba reconocido que el exceso que resultaba después de pagado el Banco quedaba embargado á la orden de otro juez. Así trabado el embargo, es á este juez á quien corresponde en prosecución del juicio ejecutivo ordenar la aplicación que debe darse á la cosa embargada, de acuerdo con las disposiciones legales de dicho juicio. Por otra parte, no existía requisitoria alguna dirigida al primer juez embargante por los jueces que embargaron con posterioridad, ni había diligencia alguna promoviendo concurso al ejecutado ó preferencia de otros créditos sobre el bien embargado.

4.—Si bien tienen privilegio general, según el art. 1499, Cód. de Comercio, los créditos por gastos para la seguridad de los bienes, adminis-

general—honorarios de abogado y síndico,—solo tiene prelación sobre los de privilegio especial—alquileres—en la parte necesaria para la venta de los bienes afectados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 214, Ser. 4ª.

Acreedor privilegiado—Véase: *Costas*, núm. 10—*Estado de graduación*, núm. 1.

Acreedor verificado—Véase: *Recusación con causa*, número 4.

Acreedor no verificado—Véase: *Graduación de créditos*, núm. 2.

Acreedores—Véase: *Bienes suficientes*, núm. 1—*Comisión sindical*, núm. 1—*Inscripción tardía*, núm. 1—*Dación en pago*, núm. 1—*Síndico*, núm. 5—*Seguros*, núm. 8—*Auto inapelable*, núm. 2.

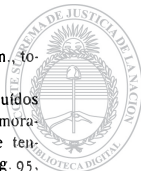
Acreedores del fallido—Véase: *Concordato*, núm. 1.

1. **Acreedores pagados**—Para la rehabilitación de un comerciante concursado, deben acompañarse los comprobantes del pago hecho á los acreedores; la sentencia ab-

tración de la casa fallida y demás diligencias judiciales ó extrajudiciales, en beneficio común verificadas con la debida autorización, tal privilegio no tiene lugar respecto de aquellos créditos para cuya seguridad y libre ejercicio no era necesaria la declaración de quiebra, respecto de los cuales solo tienen privilegio las costas que se refieren especialmente á ellos. El crédito del locador por los alquileres que le adeude el locatario, ó por cualquiera otra obligación derivada del contrato, goza de privilegio especial, concedido por los arts. 3883 y 3884, Cód. Civil, sin necesidad de mediar declaración de quiebra—art. 1578—y por consiguiente se halla regido por el segundo aparte del inc. 1º, art. 1492. «El locador garantido suficientemente con las cosas introducidas por el inquilino y para quienes la administración de la quiebra es más bien un embarazo que un auxilio, no ceden al privilegio por los gastos generales de la quiebra, y si únicamente á los gastos especiales á que la realización de los bienes afectados á su privilegio diese lugar».—Segovia, nota 4778 al Cód. de Comercio.

1—Art. 1570 del Cód. de Com.





solutoria en lo criminal no es bastante.—Jur. Com., tomo 8, pág. 131, Ser. 4^a.

1. **Acreedores reconocidos**—Solo pueden ser incluidos en la lista de los acreedores á los efectos de las moratorias, los reconocidos por el fallido ó aquellos que tengan justificativo indiscutible.—Jur. Com., tom. 7, pág. 95, Ser. 4^a.

Acta de nombramiento— Véase: *Liquidador*, núm. 1.

Activo y pasivo Véase: *Nulidad del juicio*, núm. 1—*Concurso*, núms. 3—*Socio*, núm. 2.

Acto—Véase: *Disparidad de cultos*, núm. 1—*Declaraciones de testigos*, núm. 7—*Daños y perjuicios*, números 13 y 22.

1—El procedimiento en los juicios de moratorias debe ser sumarísimo en atención á su naturaleza, y para que no se frustren los objetos á que él tiende y los derechos reciprocos del deudor y de los acreedores. Este procedimiento está regido por las disposiciones del tit. 16, libro 4º del Cód. de Com., pudiendo aplicarse por similitud de causa y de propósito los artículos pertinentes del mismo Código que reglamentan el procedimiento en las quiebras. En el juicio de moratorias se establece—art. 1587—el nombramiento de dos acreedores, que verifiquen la exactitud del balance, y que la lista de acreedores para su informe, se lea en el día señalado para la reunión de acreedores la que no puede ser prorrogada—art. 1588.—Por lo tanto, en esa junta solo intervienen y están los acreedores aparentes, según el informe de la comisión, sin que pueda demorarse el acto con una verificación de créditos que no sería posible hacer en la forma sumarísima prevenida para estos juicios de moratorias. En el mismo juicio de quiebra tanto los acreedores como el fallido pueden hacer observaciones á las pretensiones de cualquier acreedor—art. 1449—y el que se encuentre en este caso no puede tomar parte en las votaciones correspondientes—art. 1446, inc. 3º—hasta que su crédito resulte verificado. Cuando un acreedor no tiene el carácter de indubitado y hay oposición, no puede incluirse entre los acreedores reconocidos, sin perjuicio de que el Juzgado al resolver sobre la moratoria solicitada, pueda tener presente esta gestión en virtud de las facultades conferidas por los arts. 1589 y 1591 del Cód. de Com.



1. **Acto civil**—La venta de comestibles para el consumo es un acto civil, y en consecuencia la obligación de pagar su importe se prescribe en el término de un año.—Jur. Com., tom. 6, pág. 111, Ser. 4ª.

2. **Acto civil**—Siendo el mandato un acto civil, no es indispensable para la tramitación de asuntos comerciales que el poder sea conferido ante un registro de esta jurisdicción.—Jur. Com., tom. 8, pág. 118, Ser. 4ª.

3. **Acto civil**—Si no revisten carácter mercantil, las

1—Tratándose de la prescripción liberatoria, como lo era la alegada por el demandado, es la naturaleza de la obligación la que debe servir de norma para la aplicación de uno u otro Código; y que siendo civil el acto de comprar mercaderías para el uso ó consumo del comprador, es la ley civil la que debe regir la prescripción liberatoria de la obligación de pagar el precio de ellas. La ley comercial es ley de excepción, y en esta materia el Código así lo declara espresamente. La prescripción mercantil, dice el art. 844, está sujeta á las reglas establecidas para las prescripciones por el Cód. Civ. en todo lo que no se opongan á lo que disponen los artículos siguientes. La acción á que se refiere el art. 849 no puede referirse sino á la que emana de una compraventa mercantil: esto es, á una compraventa en que el comprador adquiere la cosa *para venderla ó alquilar su uso*—art. 450—contrayendo por eso una obligación mercantil, pero no á la que corresponde al vendedor contra quien ha comprado para el uso ó consumo propio. En este caso rige la regla del art. 4035, inc. 4ª, Cód. Civ., y en aquél la excepción del art. 849, Cód. de Com.

2—El art. 980 del Cód. Civ. establece que para la validez del acto, como instrumento público, es necesario que el oficial público obre en los límites de sus atribuciones respecto á la naturaleza del acto, etc. Se trataba de una demanda por cobro de pesos, en este caso el mandato es civil, pues no cabe dentro de la definición del art. 223 del Código de Com., cuando dice, «el mandato comercial, por generales que sean sus términos solo puede tener por objeto actos de comercio». Jamás puede decirse que el cobro judicial de una cuenta sea un acto de comercio.

3—El acto materia de la cuestión no era por su naturaleza mercantil, ni tampoco eran comerciantes las partes que intervenían en él.



cuestiones que se susciten son de competencia de la jurisdicción civil.—Jurisprudencia Com., tom. 9, pág. 283, Ser. 4^a.

4. **Acto civil**—Corresponde á la jurisdicción civil el conocimiento de las controversias sobre actos civiles ejecutados por un comerciante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 219, Ser. 4^a.

Acto civil—Véase: *Fianza civil*, núm. 1—*Comerciante*, núms. 3 y 6—*Defraudación*, núm. 26.

1. **Acto comercial**—Para que se repunte comercial, basta que lo sea para una de las partes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 116, Ser. 3^a.

2. **Acto comercial**—Si el demandante es comerciante y la acción se funda en un acto de comercio, corresponde el conocimiento del litigio á la jurisdicción mercantil, aun

4—La jurisdicción mercantil nace de los actos de comercio, pues el Código de la materia no ha hecho de ella fuero personal, sino que ha dejado bajo la jurisdicción común los actos civiles, aun cuando éstos sean ejecutados por comerciantes, y bajo la jurisdicción mercantil los contratos comerciales aun cuando los ejecute una persona que no es comerciante. Desde luego, es la naturaleza del acto la que determina la competencia sin que obste á esta conclusión lo prescripto por el artículo 5º, que establece que los actos de los comerciantes se presumen *prima facie* actos de comercio, salvo la prueba en contrario, porque este artículo se refiere á aquellos actos que puedan ser civiles ó comerciales, según la intención del que los ejecute; y entonces es natural que si quien los realiza es comerciante, la ley establezca la presunción *juris tantum* de su comerciabilidad, pero que en definitiva es la naturaleza del acto jurídico la que determina la competencia de jurisdicción.

1—El art. 7º del Cód. de Com. dice, que si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los contrayentes quedan por razón de él sujetos á la Ley mercantil, con las escepciones que dicho artículo establece. Véase el núm. 2.

2—El principio general de que el actor debe seguir el fuero del reo, sufre aquí una escepción en virtud de la disposición del art. 7º del Cód. de Com. Véase el número precedente.



cuando el demandado no sea comerciante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 391, Ser. 4^a.

3. **Acto comercial**—El préstamo ó mutuo entre comerciantes, aun cuando accesoriamente se encuentre garantido con hipoteca, es un acto de comercio cuya nulidad ó validez deben juzgar los Tribunales de lo Comercial.—Jur. Com., tom. 8, pág. 120, Ser. 4^a.

4. **Acto comercial**—La competencia de la jurisdicción comercial depende exclusivamente de la comercialidad del acto en que se funda la acción.—Jur. Com., tom. 9, página 225, Ser. 4^a.

Acto comercial—Véase: *Comerciante*, núm. 3—*Comisiones*, núm. 1—*Jurisdicción mercantil*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 10 y 12—*Defraudación*, núm. 26.

1. **Actos de la esposa**—El marido como representante

3—Según lo dispuesto en el art. 49 de la Ley de Organización de los Tribunales, los Jueces de Comercio son competentes para conocer y decidir en 1^a Inst. de los asuntos regidos por los Códigos y leyes comerciales. Siendo mercantil la obligación principal del préstamo, y correspondiendo por ello su conocimiento al fuero comercial, el derecho accesorio de hipoteca que garante dicha obligación, debe ser también decidido en el mismo fuero y conjuntamente con aquella: así lo tiene ya resuelto la Cámara de lo Comercial en casos análogos—Fallos, Ser. 2^a, tom. 4^o, pág. 500—y lo establece claramente el art. 5^o del Cód. de Proc. aplicando la conocida regla de derecho *accessorium sequitur principali actum*.

4—De acuerdo con el principio sentado en el número precedente.

1—La esposa al otorgar la escritura dijo, que era de estado viuda, ocultando su estado de casada. Ahora bien, con relación á los actos jurídicos y á los contratos, debe tenerse presente que el derecho favorece á los incapaces cuando son engañados, y no cuando procediendo ellos mismos con malicia se convierten en engañadores; doctrina sumamente razonable y que viniendo del Derecho Romano, ha sido aceptada también por la jurisprudencia francesa y consignada últimamente de un modo expreso en nuestro Cód. Civ. El art. 1106, dice: «Si el incapaz hubiese procedido con dolo para inducir á la otra parte á contratar, ni



legal de la esposa, carece de personería para pedir la nulidad de actos en que aquella haya intervenido invocando un carácter falso, pues el derecho favorece á los incapaces cuando son engañados, pero nó si procediendo ellos mismos con malicia se convierten en engañadores. —Jur. Civ., tom. 9, pág. 213, Ser. 3ª.

1. **Acto ilícito**—Para que un acto ilícito que no puede calificarse como delito, aporte responsabilidad por daños y perjuicios, debe justificarse que el autor tuvo la culpa ó que por lo menos procedió con negligencia. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 304, Ser. 3ª.

2. **Acto ilícito**—No puede calificarse como delito un

él ni sus representantes ó sucesores tendrán derecho para anular el contrato, á no ser que el incapaz fuere menor, ó el dolo consistiere en la ocultación de la incapacidad. Este artículo niega al incapaz y á sus representantes ó sucesores el derecho de anular el contrato, cuando aquel hubiera procedido con dolo para inducir á la otra parte á contratar; y aun cuando el precepto tenga su escepción espresa se observa que ella no alcanza á la esposa, desde que el dolo no ha consistido únicamente en ocultar su incapacidad dejando de manifestar como debía hacerlo, que era mujer casada, sino en la afirmación de un hecho positivo ó falso, cual era el de atribuirse la calidad de viuda.

1—Tratando de los actos ilícitos que no son delitos, prescribe el Cód. Civ., que todo el que ejecuta un hecho que por culpa ó negligencia ocasiona un daño á otro, está obligado á la reparación del perjuicio; agregando que esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas á los delitos del derecho civil. Esta prescripción es la misma que consagran varios códigos extranjeros, como el francés en sus arts. 1382 y 1383; el de Chile, el que lleva el núm. 1900, del doctor Goyena, concordando además con la ley 6ª, tit. 15, Part. 7ª, conforme todos con una máxima de jurisprudencia universal, fundada en el principio eterno de justicia de que la culpa no debe perjudicar sino á su autor, y en consecuencia, que corresponde al mismo reparar el daño causado á un tercero con ella *sua cuique culpa nocet*.

2—Se dijo que se trataba de un contrato de compraventa en cuya inejecución pudo haber mediado dolo, pero por entonces no aparecía ningún hecho criminoso claro y definido,

acto de compraventa perfectamente definido.—Jur. Com., tom. 9, pág. 319, Ser. 4^a.

3. **Acto ilícito**—La declaración de que un acto es ilí-

3—La acción que dió origen á esta resolución se fundaba en que el demandante habia hecho operaciones de compra y venta de títulos de comercio que dieron pérdida al comitente demandado, la que pagó el actor, adeudando el demandado por tales pérdidas y comisiones devengadas, una suma por la que entabla demanda. El Juez de 1^a Inst. rechazó la demanda por cuanto la acción de reembolso por el mandatario de lo que ha pagado por su mandante es improcedente porque se trataba de operaciones que se resolvían por juegos de diferencias, y que siendo ilícitos según el art. 80 del Cód. de Com. ant. no producen acción en juicio, aun cuando esta disposición sea de fecha anterior á los contratos que motivaron el pleito. Esta sentencia fué revocada por la Cámara fundándose en que ella era abiertamente contraria á la jurisprudencia y á las leyes que rigen el caso. Las leyes disponen para lo futuro, no tienen efecto retroactivo y solo son obligatorias después de su promulgación—arts. 2^o y 3^o del Cód. Civ.—Es verdad que las leyes de orden público tienen efecto retroactivo, pero este principio no es aplicable al caso en que dichas leyes declaran como delitos actos que no lo eran cuando se ejecutaron. La retroactividad de la ley civil, tiene un carácter muy diverso del de la ley penal. Hoy es doctrina corriente, la de que las leyes que declaran delictuosos los actos de los ciudadanos, no tienen efecto retroactivo. Así los actos jurídicos, lícitos ó amparados por las leyes vigentes en la época en que han pasado, no pierden este carácter cuando una ley posterior los declara ilícitos, porque no es admisible la retroactividad penal en tales casos. Desde nuestro antiguo derecho estaba establecido, «que el pleito ó postura ó yerro que fuese fecho deve ser librado por el fuero viejo . . . E esto porque el tiempo en que son comenzadas é fechas las cosas deve siempre ser catado—Ley 15, tit. 14, Part. 3^a.—*Nullus videtur dolum facere qui suo jure utitur*—Ley 55, Dig. de Reg. Juris. y art. 1072 del Cód. Civ.—Por eso el art. 1067 de este Código dice, que ningún acto voluntario tendrá el carácter de acto ilícito si no fuera espresamente prohibido por la ley. La Constitución en el art. 18 establece, que nadie puede ser penado sino por la ley anterior al hecho del proceso, y esta prescripción tiene su aplicación á toda clase de pena que se imponga por actos delictuosos. Por consiguiente, habiendo sido perfectamente lícitas las operaciones de Bolsa, aun las que se resolvían por juegos de diferencia, en virtud de la ley de 6 de Noviembre de 1889, vigente en la fecha en que pasaron los actos que motiva-



cito, verificada por ley posterior al acto, no le es aplicable. siempre que por ley anterior se le reconociera como ilícito.—Jur. Com., tom. 4, pág. 98, Ser. 4ª.

ron esta causa, ni actor, ni demandado violó ley alguna, sino que ejecutó actos perfectamente legales, cuyas consecuencias jurídicas subsisten, á pesar del art. 82 del nuevo Cód. de Com. que rigió recién el 1º de Mayo de 1890. ¿Habrá perdido su acción el actor por el hecho de haber solventado con su propio dinero las obligaciones de su comitente? De ninguna manera. Es verdad, que por la citada ley de 6 de Noviembre de 1889 los corredores de Bolsa quedaban sometidos á las prescripciones del Cód. de Com., y que una de ellas es, que estos corredores no pueden encargarse de hacer cobranzas ó pagos por cuenta ajena, pero también lo es, que esta prohibición no tiene por efecto el que el corredor que paga por su comitente pierda su acción de reembolso. Este acto no tiene otra sanción que el perdimiento de oficio del corredor—art. 105, inc. 2º del Cód. de Com.—y como es una disposición escepcional, debe interpretarse restrictivamente, y no darle otro alcance penal que el que está especialmente sancionado. Sería violar el principio de equidad natural, según el cual nadie debe enriquecerse con daño de otro. Alauzet comentando el art. 83 francés de donde procede el nuestro, dice: «Puede suceder que el agente de cambio, contrariando las prescripciones legales haga anticipos á sus comitentes; es de asombrarse que los deudores hayan podido oponer la pretensión de no estar obligados á su reembolso: una jurisprudencia constante ha rechazado tan injustas pretensiones, y difícilmente se explica que ellos hayan podido producirse»—tom. 2, pág. 30, núm. 667.—*Nemine æquum est cum alterius damnum locupletior*. En este principio está fundada la acción de *in rem verso* que se acuerda aun al poseedor y al edificador de mala fe. En él reposa el art. 727 del Cód. Civ. que da derecho al que ha pagado por otro—como en el caso que nos ocupa—para pedir al deudor el valor de que hubiese dado en pago. En el derecho de reembolsarse que tiene el mandatario contra su mandante por las cantidades anticipadas para la ejecución del mandato—art. 1151, Cód. Civil—que es perfectamente aplicable, porque está decidido por la jurisprudencia de esta Cámara, entre otros casos el de Baron contra Moine, de fecha 10 de Octubre de 1888, que el corredor de Bolsa con relación al comitente es un mandatario; y debe tenerse presente que se trata de una obligación comercial y que ella obligan á las consecuencias que la equidad impone en los contratos—art. 209 del Cód. anterior.





Acto ilícito—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 21.

1^a. **Acto jurídico**—La acción de nulidad de actos jurídicos, fundada en la simulación ó fraude, se prescribe en el término de dos años contados desde la fecha en que se justifica que el accionista conoció su existencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 135, Ser. 3^a.

2. **Acto jurídico**—El término para que la acción de nulidad de un acto jurídico se prescriba para los acreedores, corre desde que formado concurso civil, el inmueble no aparece entre los bienes del concursado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 3^a.

3. **Acto jurídico**—La acción de simulación de un acto jurídico se prescribe á los dos años.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 3^a.

Acto jurídico --Véase: *Coherederos*, núm. 1—*Mandato*, núm. 17.

Acto lícito—Véase: *Hurto*, núm. 5.

Acto nulo—Véase: *Inhabilidad sobreviniente*, núm. 1.

1^b. **Acto posesorio**—El pago de la contribución directa sobre un terreno, no importa un acto posesorio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 301, Ser. 3^a.

1. **Acto simulado**—O fraudulento, para que la nulidad de los actos simulados ó fraudulentos, practicados por el marido en perjuicio ó fraude de los derechos de la esposa ó sus herederos, pueda ser declarada, se requiere prueba plena, que corresponde al que deduce la acción. Jur. Civ., tom. 9, pág. 135, Ser. 3^a.

1^a—Art. 4030 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Acción de nulidad*, núm. 1.

3—Art. 4030 del Cód. Civ.

1^b—Ese hecho no se encuentra comprendido en los términos de los arts. 2377, 2378 y 2379 del Cod. Civ. Bien puede abonarse dicho impuesto sobre un terreno que en realidad no se posee.



Acto simulado—Véase: *Muebles*, núm. 1—*Simulación*, núm. 1—*Escritura simulada*, núms. 1 y 2.

Actos—Véase: *Contrato*, núm. 1—*Excepción de legitimidad de defensa*, núm. 1.

Actos de administración—Véase: *Acción pro-socio*, número 1.

Actos distintos—Véase: *Notificación de una sentencia arbitral*, núm. 1.

1. **Actos extranjeros**—Los requisitos que la ley exige

2—Esta resolución fué dictada por mayoría de cuatro votos contra uno. El caso es el siguiente: Una compañía anónima obtuvo en Estados Unidos de Norte-América una sentencia favorable. Se pidió su ejecución aquí por medio de un mandatario constituido por el representante de dicha compañía; pero el Escribano al autorizar el poder no transcribió el instrumento habilitante del que lo otorgaba, condición requerida por nuestro Cód. Civ. para que el instrumento tenga fuerza legal. Se resolvió como lo establece el sumario, porque el principio *locus regit actum* ha sido espresamente incorporado á nuestra legislación positiva, estableciéndose en los arts. 12 y 950 del Cód. Civ., que la forma y solemnidades de los contratos y de los instrumentos públicos, son regidas por las leyes del país de su otorgamiento, con arreglo á las cuales debe ser juzgada la validez ó nulidad de aquellos. Por forma de un acto jurídico se entiende el conjunto de prescripciones legales relativas á las solemnidades que corresponden observar al tiempo de celebrarse el acto, tales como que la escritura del mismo se haga por escribano ú otro oficial público, etc.—art. 974, Cód. citado.—Entre estas formas estrínsecas del acto, se hallan comprendidas las prescripciones relativas á la inserción de los documentos habilitantes, pues á ésta y demás formalidades antes mencionadas, se refiere el art. 1007 del mismo Cód., cuando después de establecer que son nulas las escrituras que no tuviesen la designación de la fecha, nombre y firma de las partes y testigos, y la transcripción ó referencia de las procuraciones, declara que «la inobservancia de las otras formalidades, no anula las escrituras, etc.» Es con arreglo á estas disposiciones legales que la Suprema Corte Nacional ha decidido que la validez de los documentos públicos otorgados en país extranjero, no puede ser impugnada por falta de las formas ó solemnidades exigidas por nuestras leyes, porque solo las leyes del país de su otorgamiento son las que rijen las mencionadas formas de los



para la validez de ciertos actos, solo son aplicables á los otorgados en la República; los espedidos en país estran-

contratos é instrumentos públicos—Ser. 2^a, tom. 14, pág. 526.—El voto en disidencia decía: «que el demandado había opuesto la escepción dilatoria de falta de personería en el actor, alegando que el poder que invoca, ha sido otorgado por una persona que se dice secretario de la Compañía y que no consta que tal secretario tenga facultad para representarla y otorgar ese poder. Que esta escepción por su carácter de dilatoria—inc. 2^a del art. 84 del Cód. de Proc.—debe ser tratada previamente. Que examinado el poder mencionado inserto en la escritura de sustitución, se ve que él fué otorgado á nombre de la «Famous Manufacturing Company, Compañía debidamente matriculada con arreglo á las leyes del Estado de Illinois establecida en la ciudad de Chicago, Condado de Cook, según en dicho poder se espresa, y que quien únicamente firma y sella ese poder es Ed. W. Wickey, como secretario de la Compañía. Que el escribano público, Paul Brown, cuyo carácter de tal está debidamente justificado por las legalizaciones necesarias, certifica la autenticidad de la firma y sello de dicho Wickey y su carácter de secretario de la Compañía antedicha; pero nada dice sobre las facultades que el espresado secretario tenga para representar ú obligar á la Compañía, ó la autorización que haya recibido de alguna asamblea ó directorio, ó de quien corresponda por los estatutos de la «Famous Manufacturing Company.» Que según la legislación vigente en los Estados Unidos, las compañías—*corporations*—se rigen por los estatutos—*by laws*—que ellas mismas hubiesen sancionado, determinando quiénes sean los directores, administradores, y los que puedan por sus actos obligar legalmente á la compañía, obrando dentro de los límites que los mismos estatutos determinen. Que esta doctrina, que es también conforme á la legislación universal en esta materia, la enseña Story—*Of Agency*, § 14 y 52,—Kent—*Commentaries of American law*, volumen 2^o, pág. 364,—Bouvier—*Institutes of America*, volumen 2^o, pág. 74;—el Juez Marshall citado en este último volumen y página, y el Juez Taine, que enseña que los actos de las compañías no solamente deben ser autorizados por los estatutos—*chartes*—sino que deben ser ejecutados por tales oficiales ó agentes, y en tal manera que los estatutos autoricen—caso del Banco de Agust con Earle, citado en la nota de Kent, á la pág. 366 del vol. 2^o.—Que en su consecuencia, en el caso presente el actor ha debido justificar y probar la autorización ó facultad del secretario firmante del poder para otorgarlo á nombre de la compañía, lo cual no ha verificado, ni intentado probar, durante el término de prueba,



jero se rijen única y exclusivamente por las leyes del país de su otorgamiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 4^a.

Actos del mandatario—Véase: *Mandato*, núms. 15 y 16.

1^a. **Actos preparatorios**—No existe delito ni aun tentativa si el acusado desistió de su comisión por voluntad propia, aun después de practicados los actos preparatorios.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 53, Ser. 4^a.

Actos del representante—Véase: *Poder especial*, núm. 4.

1^b. **Actos sucesivos**—La defraudación por actos sucesivos cualquiera que sea el monto total de la suma defraudada, solo debe castigarse con arreglo á la mayor

como consta del certificado correspondiente. Que por consiguiente, es procedente y arreglada á derecho la escepción dilatoria de falta de personería que se ha opuesto al actor por no haber justificado con arreglo á derecho la que invocaba. Este voto incurre en una verdadera petición de principio, pues dice que el que presenta el poder debe probar que está de acuerdo con las leyes vigentes en el lugar de su otorgamiento. Pero ¿por qué debe él probar ese extremo cuando tiene á su favor la presunción legal de su validez? Da como razón una causa que á su vez puede perfectamente tener su razón de ser en el hecho que se trata de fundar. Si la presunción favorece al que presenta el documento, es un absurdo pretender que se prueba precisamente aquello que tiene á su favor dicha presunción legal—*juris tantum*.—La prueba incumbe al que aduce un hecho nuevo en juicio, según los principios que rijen el procedimiento. De manera que la prueba de que una escritura pública otorgado en país extranjero no contiene los requisitos legales exigidos para su otorgamiento, corresponde al que afirma el hecho, no solo de acuerdo con lo prescripto por la ley de forma sino también de acuerdo con la prescripción terminante de la ley de fondo.

1^a—El art. 14 del Cód. Pen. dice, que los actos preparatorios de un delito, solo son punibles cuando importan una contravención, salvo disposición expresa del mismo Código.

1^b—Un cobrador defraudó á su comitente en la suma de 3500 pesos en diversas partidas que había cobrado. Se trata de un caso previsto en el art. 86 del Cód. Pen. que dispone que si un delito de la misma especie se comete varias veces contra una misma persona ó cosa, se



suma que se haya apropiado el reo en una de las diversas ocasiones en que ha reiterado el delito.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 103, Ser. 4^a.

2. **Actos sucesivos**—La defraudación por actos sucesivos, solo puede ser penada con arreglo á la mayor suma distraida en un solo acto, cualquiera que haya sido el monto de la cantidad defraudada.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

Autor—Véase: *Excepción de defecto legal*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 3 — *Demanda*, núm. 3 — *Demanda nula*, núm. 1—*Comerciante*, núms. 5 y 9—*Contrato de compra-venta*, núm. 6 — *Documentos agregados*, núm. 1 — *Documentos acompañados*, núm. 1— *Acción desistida*, núm. 1 — *Excepciones*, núm. 18—*Interdicto de obra nueva*, número 1—*Lindero*, núm. 1.

Actuaciones—Véase: *Certificados*, núm. 1—*Nulidad de la ejecución*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, números 1 y 2.

1. **Actuaciones nulas**—La presentación de nuevo apoderado importa la revocación de los poderes anteriores, y en consecuencia son nulas las actuaciones pos-

castigará el acto más grave y los otros se considerarán como circunstancias agravantes. Aquí debe castigarse la defraudación de la cuenta de mayor cantidad cobrada, constituyendo todas las demás en su carácter de inferiores, circunstancias agravantes del delito mayor.

2—Véase el número precedente.

1—El art. 1962 del Cód. Civ. establece que el mandato caduca por la cesación de los poderes del mandatario que hace la sustitución. Desde el momento en que cesa el mandatario, deja de ser parte en el juicio, y por consiguiente las notificaciones que se le hagan no tienen ningún valor, é invalidan el procedimiento ulterior pudiendo la parte legítima reclamar de esa nulidad—art. 240, inc. 1^o del Cód. de Procedimientos.



teriores que se hayan tramitado con el primitivo apoderado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 3ª.

2. **Actuaciones nulas**—El que ha sostenido la validez de las actuaciones nulas, carece de personería para pedir la condenación en costas al Juez y la multa al secretario.—Jur. Com., tom. 5, pág. 466, Ser. 4ª.

A cuenta—Véase: *Letra de cambio*, núm. 6—*Garantía*, núm. 3—*Moneda de oro*, núm. 2.

Auerdo previo—Véase: *Bando*, núm. 1—*Complot*, números 1 y 2.

Auerdo de voluntades—Véase: *Escepción de espera*, número 4.

2—La Cámara de lo Com. al fundar su resolución dijo: que estando establecido por el art. 240 del Cód. de Proc. que la nulidad por defectos de procedimientos queda subsanada si no ha sido reclamada en la misma instancia en que se produjo, es en beneficio de la parte que reclama de dicha nulidad y á cuya voluntad queda librado el recurso y que tiene establecida la última parte de dicho artículo la imposición de las costas á cargo del juez que ha incurrido en ella. Esta teoría es completamente equivocada en nuestro modo de pensar. El art. 240 no distingue y por el contrario dice en una forma enfática y general que en uno y otro caso serán las costas á cargo del Juez. Cuando se produce una nulidad que es alegada por uno de los litigantes, el que la aduce casi nunca tiene costas devengadas, pues precisamente es debido á su no intervención en forma que se anulan los procedimientos. El caso es más claro aun, cuando se trata de la nulidad de una sentencia, las dos partes tienen honorarios devengados ¿á quién perjudica generalmente la anulación de una sentencia? A la parte vencedora, pues la vencida es la que siempre dice de nulidad. ¿Y es de presumirse que esa imposición de las costas al juez de la causa sea en beneficio de la parte vencida? ¿No sería esto odioso y repugnante á los principios de equidad y de justicia que son la base de la ley? Lo que indudablemente ha habido aquí, es que si bien no ha querido protegerse al que adujo la nulidad, la Cámara ha querido exonerar al juez de las costas que esa ley le imponía. Es una resolución de puro favoritismo y que no haría camino cuando los Tribunales estén compuestos de miembros que hagan abstracción completa del sujeto del derecho.



1ª. **Acumulación de penas**—No siendo posible la de las penas de arresto y prisión, el hurto solo debe tenerse en cuenta como circunstancia agravante del atentado con armas á la autoridad.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 295. Ser. 4ª.

Acusable—Véase: *Falta de moralidad*, núm. 1.

1ª. **Acusación**—Es procedente la acusación contra la esposa adúltera únicamente, si el cómplice ha fallecido.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 210, Ser. 4ª.

2. **Acusación**—En el escrito de acusación deben pedirse las diligencias necesarias para la comprobación del delito.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 244, Ser. 4ª.

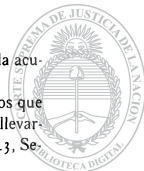
3. **Acusación**—El delito de estafa debe seguirse de ofi-

1ª—No siendo posible la acumulación de las penas de arresto y prisión que respectivamente señalan para el hurto y el atentado con armas, los arts. 193, inc. 1º, y 235, inc. 1º, Cód. Pen., el delito menos grave, el hurto, debe considerarse como agravante del atentado, según la espresa disposición del art. 85. En tal caso, y no concurriendo circunstancia atenuante alguna, la pena que correspondería aplicar sería el máximo de la prescripta en el referido art. 235.

1ª—El art. 124 del Cód. Pen. dice, que la acusación debe dirigirse contra ambos culpables, pero los antecedentes jurídicos y las prácticas judiciales están de acuerdo en que esa disposición no obsta á una querrela de adulterio cuando la falta de acusación de uno de ellos provenga de la circunstancia de haber fallecido el otro, pues hay una imposibilidad completa para entablar la acción conjunta, y si ésta se lleva contra uno solo, no es por afecto ú odio, sino por circunstancias superiores á la voluntad del querellante. Nuestra antigua legislación establecía esto de una manera espresa. La ley 80 de Toro que en la Recopilación Castellana corresponde á la Ley 2ª, tit. 20, lib. 8º, decía: «El marido no puede acusar de adulterio á uno de los adúlteros siendo vivos.» Y así se ha seguido entendiendo y practicando por los Tribunales.

2—Art. 136 del Cód. de Proc. Crim.

3—El delito de estafa debe ser perseguido de oficio, ó á instancia del Ministerio Fiscal: el art. 174 del Cód. de Proc. Crim. se refiere á querellas entabladas por delitos que solo pueden perseguirse á instancia de parte.



cio, aun cuando el querellante haga abandono de la acusación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 292, Ser. 4^a.

4. **Acusación**—Siempre que de ella resulten hechos que justificados sean considerados delitos públicos, debe llevarse adelante el sumario.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 243, Serie 4^a.

5. **Acusación**—En tanto ésta no exista, no procede la escepción de prescripción del derecho de acusar.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 284, Ser. 4^a.

6. **Acusación**—Corresponde al Juez del Crimen conocer en la acusación, si existen dudas sobre la gravedad de las heridas inferidas.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

7. **Acusación**—La escepción de falta de personería puede ser opuesta en el plenario, antes de contestar la acusación, aun cuando en el sumario se haya admitido sin discusión. El representante de una persona jurídica, á la que se haya retirado la personería, debe justificar nuevamente la que invoca por otro título.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 240, Ser. 4^a.

4—Por las mismas razones aducidas en el núm. 3.

5—No formulándose acusación falta la base indispensable para tomar en consideración la procedencia ó improcedencia de la prescripción, á no ser que el tiempo transcurrido sea tal que se considere suficiente para que se opere la prescripción más larga admitida por el Código.

6—En la duda debe estarse en favor de la jurisdicción del Juez del Crimen, porque es más estensa que la del de lo Correccional, y aquél está habilitado para aplicar tanto las penas que exceden como las que no exceden de la competencia del Juez Correccional.

7—Según resulta de la última parte del art. 456 del Cód. de Proc. Crim., las escepciones con carácter de artículo previo, pueden ser opuestas después de concluido el sumario: concordando esta disposición con lo que disponen los arts. 444 y 445, se vé que las escepciones de este carácter pueden oponerse en cualquier estado del sumario y durante el plenario antes de contestarse la acusación. Esto en cuanto á la primera parte del sumario; en cuanto á la segunda, tiene su fundamento en que todo el que se presenta en juicio debe acreditar el carácter que invoca—art. 13 del Cód. de Proc. Civ.



8. Acusación—No puede calificarse de calumnia la acusación, si por la clase de los hechos y constancia de autos, han existido decisiones judiciales que han conceptualado la imputación verosímil.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 278, Ser. 4^a.

9. Acusación—La madre tiene personería para inter-

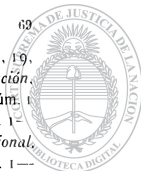
8—Los hechos que motivaron la querella por defraudación—querella que dió lugar después á la acusación por calumnia—constaban de los escritos presentados al Juzgado por terceros, habiendo la querella por defraudación producido como prueba esas mismas circunstancias. En este caso podía haber error en la calificación de los hechos constantes de ese expediente, pero no una falsa imputación. Podía haber malicia en la calificación, pero este supuesto es inadmisibile cuando el juez que entiende en la querella ve en los hechos denunciados y comprobados por esas constancias, el delito previsto por el art. 203, inc. 6°; y cuando la Cámara declara igualmente que esos hechos, si bien no pueden autorizar la prosecución del juicio, tampoco autorizan un sobreseimiento definitivo, viéndose la justicia obligada á sobreseer provisionalmente; cuando estas circunstancias concurren no puede suponerse malicia en un querellante y consiguientemente no puede dar lugar á una acusación por calumnia.

9—El art. 14 del Cód. de Proc. en lo Crim. establece que de todo delito nacen dos clases de acciones: *públicas*, cuando debe ejercitarlas el Ministerio Fiscal, sin perjuicio del derecho de acusar ó intervenir como parte querellante en el juicio, que incumbe á las *personas* ofendidas ó *damnificadas* por el delito, ó á sus representantes legales; y *privadas*, cuando su ejercicio incumbe solamente á éstas. El art. 170 del mismo Código contiene otra disposición que se relaciona con la anterior. En él se dice: «la persona *particularmente* ofendida por un delito del cual nace acción pública, podrá asumir el rol de querellante y promover en tal carácter el juicio criminal.» De estas disposiciones resulta con claridad que lo que se ha llamado acción popular, ha quedado escluida en la legislación del Código; pero si bien no existe esa acción ¿cómo han de entenderse los conceptos, *personas ofendidas* ó *damnificadas por el delito* del art. 14, y *personas* sobre quienes directamente recaía el delito, ó sus representantes legales? eran los que podían acusar ó querellarse, y si bien así deben entenderse cuando esa persona puede acusar, es decir, cuando se trata de cualquier delito que no sea homicidio, ha de ensancharse el criterio de interpretación cuando sea



venir como parte acusadora en el sumario formado por el homicidio del hijo.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 325, Ser. 4.^a.

éste el delito perseguido. Si se trata de lesiones, de robo, de incendio, etc., solo el lesionado, el robado ó el dueño del bien incendiado será admitido á intervenir como parte querellante en el juicio respectivo; pero si el caso es de homicidio, debe admitirse que los parientes próximos son *personas ofendidas ó damnificadas y aun particularmente ofendidas*, si se quiere. En estos casos, decía el derecho Romano, el acusador representa la causa del dolor: *causant agit dolores*. «Estos aatales, dicen las partidas, se mueven con derecha razón ó con dolor.» El Cód. Civil contiene las siguientes reglas: todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio que por él resultare á otra persona. Esa reparación no solo comprende la indemnización de las pérdidas é intereses sino también el agravio moral que el delito hubiese hecho sufrir á la persona, molestándola en su seguridad personal ó en el goce de sus bienes ó hiriendo sus afecciones legítimas. La obligación de reparar el daño causado por un delito, existe no solo respecto de aquel á quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta. La indemnización por muerte de una persona puede exigirla la viuda, los hijos, y en general los herederos necesarios del muerto, si no fueren culpables del delito, como autores ó cómplices, ó si no lo impidieron pudiendo hacerlo—arts. 1077, 1078, 1079, 1084 y 1085.—De estas reglas se infiere que hay agravio y daños para los efectos de la acusación de todos los que son herederos necesarios de la persona que ha sido objeto de un homicidio y, que por consiguiente, todas ellas pueden figurar como parte acusadora, y no podría ser de otro modo desde que la indemnización del daño causado por el delito solo puede ser demandada por acción civil independientemente de la acción criminal—art. 1096 del mismo Código—y después de la absolución del acusado en el juicio criminal, no se puede alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución—art. 1003—El Ministerio Público puede hacer, y hace en efecto, todo esfuerzo para obtener la condenación de los delincuentes, pero esto no satisface muchas veces á la parte agraviada, lo que no sucederá cuando la acción fuese conjunta y el damnificado pudiese valerse de muchos medios de prueba que en ciertos casos no están al alcance del Ministerio Público. Con arreglo á este orden de ideas y tratándose de una heredera necesaria como es la madre, debe admitírsela como parte querellante una vez que justifique el parentesco que invoca.



Acusación—Véase: *Calumnia*, núms. 1, 7, 9, 10, 13, 19, 21 y 23—*Adulterio*, núm. 7—*Fianza de escarcelación*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 2—*Prejuzgamiento*, núm. 1—*Costas*, núm. 12—*Antecedentes de la causa*, núm. 12—*Defraudación*, núms. 13, 28 y 38—*Delito correccional*, núm. 1—*Derecho de acusar*, núm. 2—*Editor*, núm. 1—*Absolución del reo*, núm. 3—*Injurias*, núms. 2, 3 y 11—*Persona jurídica*, núm. 3—*Querella*, núm. 3—*Sobreseimiento*, núms. 4, 6 y 7—*Acusador*, núm. 2—*Corredor*, núm. 5—*Acción civil*, núm. 2—*Injuria*, núm. 9—*Injuria grave*, núm. 4—*Cuestiones prejudiciales*, núm. 2.

1^a. **Acusación por calumnia**—La calificación indeterminada de ladrón importa injuria; en tanto no se impute un hecho concreto, no puede fundar una acusación por calumnia.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 321, Ser. 4^a.

1^b. **Acusación desistida**—La nulidad del desistimiento de la acusación, debe recibirse á prueba.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 239, Ser. 4^a.

1^c. **Acusación sobre falsedad**—De un documento, no debe ser suspendida por la ejecución iniciada en juicio civil, pues no está comprendida en las cuestiones prejudiciales que la ley declara.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

1^d—Solo la imputación de un delito concreto puede dar lugar á una acusación por calumnia.

1^b—La Cámara mandó recibir el incidente de desistimiento á prueba por vía de justificación.

1^c—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de la Cámara constituida en Tribunal de Interlocutorias, la que se fundó en que la acción civil cuya resolución manda suspender el artículo 1101, es la que nace del delito para la indemnización de los perjuicios causados por el mismo, y por consiguiente es intentada, como la criminal, contra la misma persona responsable del delito ó sus sucesores, según resulta de los propios términos de ese artículo y de los anteriores y siguientes, y del encabezamiento del capítulo á que ese artículo corresponde. La minoría formada por el Dr. Saavedra dijo que: «En cuanto al fundamento relativo



1. **Acusado**—No procede la representación del acusado en causas criminales.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 274, Ser. 4^a.

2. **Acusado**—Si el acusado por calumnia no ha pedido en oportunidad prueba testimonial, no procede el reconocimiento de documentos emanados de terceros.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 117, Ser. 4^a.

3. **Acusado**—Si el acusado por calumnia da explica-

al alcance del art. 1101 del Cód. Civ., por considerar que habiendo identidad de razones, dicha disposición debe aplicarse á cualquiera acción que reconozca por base la existencia de un delito, como lo enseña la doctrina casi uniforme de los autores—Haus, Droit Penal Belge, tom. 2º, núms. 1410 y siguientes; Bonnier, tom. 2º, núms. 909 y siguientes; Duranton, tom. 13, núm. 436; Aubry y Rau, tom. 8º, núm. 769 bis; nota del Codificador al art. 1101, Cód. Civ.

1—Hasta la promulgación del Cód. de Proc. Crim. les era prohibido á los procesados la representación por apoderados—Ley 6ª, tit. 1º, Partida 7ª.—Promulgado el Cód., el único derecho que en él se les acuerda, es el de la defensa personal, con la limitación establecida en el art. 9, que queda librada al prudente arbitrio judicial. Esta es la jurisprudencia observada por la Cámara, como puede verse en la causa seguida contra Felipe Cernadas, fecha 16 de Marzo de 1893.

2—Solicitar el reconocimiento de la firma de un documento por parte de un tercero, importa lo mismo que presentarlo como testigo para que declare sobre el hecho á que el documento presentado se refiere. No puede darse otro carácter á la diligencia solicitando el reconocimiento de una firma, siéndole consiguientemente aplicable lo dispuesto en el art. 483 del Cód. de Proc. Crim.

3—En el juicio de conciliación la parte acusada dijo que: «no había hecho las imputaciones que le atribuían los acusadores, pues no ha tenido ni tiene motivo alguno para hacerlas, reconociendo que los demandantes son personas de bien; que asimismo debe agregar que él es una persona incapaz de hacer imputaciones de ningún género á persona alguna, por el mal estado en que se encuentra su salud desde hace tiempo, estando afectado moralmente por su enfermedad». La parte contraria espuso: que no le satisfacía la explicación que acababa de darse, y pedía que la causa se llevase adelante. Se sobreseyó definitivamente por que lo único que lícitamente puede apeteer el que entabla esta clase



ciones que importen una retractación, debe archivarse el expediente.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 203, Ser. 4ª.

4. Acusado—Su presentación chancela la fianza.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 297, Ser. 4ª.

Acusado—Véase: *Apoderado*, núm. 5 y 12—*Adulterio*, núm. 8—*Defraudación*, núms. 12, 16 y 20—*Sobreseimiento provisorio*, núms. 1, 2 y 5—*Acusador*, núm. 1—*Calumnia*, núms. 2, 3, 4, 6, 14, 15 y 22—*Calumnia manifiesta*, núm. 2—*Costas*, núm. 30—*Confesión del reo*, núms. 1 y siguientes—*Confesión calificada*, número 1—*Delito*, núms. 9 y 26—*Plenario*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 7—*Presunciones simples*, núm. 1—*Injuria*, núm. 8—*Prisión preventiva*, núms. 1 y 8—*Presunciones*, núm. 2—*Injuria grave*, núm. 3—*Prueba*, número 1—*Objetos robados*, núms. 3 y 4—*Sobreseimiento provisorio*, núm. 4—*Escepción*, núm. 5—*Confesión indivisible*, núm. 4—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 6—*Sentencia consultada*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núm. 11—*Nulidad del sumario*, núm. 1—*Amistad*

de juicios, es que quede claramente establecido que su honra y buen nombre no han padecido ni un ápice en el concepto público; y la declaración hecha era excluyente á ese respecto. Importando una retractación lo manifestado por el querellado, desde que manifiesta no haber tenido ni tener motivo alguno para hacer las imputaciones que se le atribuyen, y reconoce espresamente que los querellantes son personas de bien, además el art. 595 del Cód. de Proc. autoriza esta actitud.

4—Con la comparecencia del procesado cesa la responsabilidad del fiador, según se desprende del texto y espíritu del art. 379 del Cód. de Proc. Crim. La fianza personal no es el *judicandum solvi* del derecho común; ella garante tan solo la comparecencia del reo, y por escepción el art. 379 citado, hace responsable al fiador de los gastos é indemnizaciones del juicio en caso de la no comparecencia del reo. Otra interpretación haría imposible la fianza personal, perjudicando así á los procesados, contra el espíritu de la ley, siendo evidente que esta ha sido establecida en su beneficio.



intima, núm. 1—*Sumario formado*, núm. 1—*Reconocimiento del damnificado*, núm. 1—*Madre acusada*, número 1.

1^a. **Acusado-socio**—El reconocimiento del carácter de socio en el acusado, no permite calificar el hecho como defraudación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

1^b. **Acusador**—El denunciante tiene derecho para apelar de todos los autos dictados en la fecha en que asuma el carácter de acusador, pues para él no hacen cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

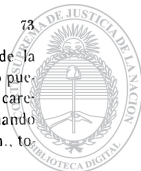
2. **Acusador**—La declaración del acusador de que remite la pena renunciando á las acciones y derechos que la sentencia puede concederle, no importa un desistimiento de la acusación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 328, Ser. 4^a.

3. **Acusador**—Los hechos que denunciados por el querellante no sirven de fundamento al auto de prisión preventiva, no pueden ser materia de decisión en la sentencia del plenario, si el acusador consistió el auto.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 278, Ser. 4^a.

1^a—Este caso no cabe dentro de la disposición del art. 204 del Código Penal. Desde que existe sociedad, cada uno es dueño en parte de la cosa materia de la defraudación, faltando así el principal requisito del delito, *cosa ó bien ajeno*. La conducta de un socio por irregular que sea tendrá siempre su correctivo en el cumplimiento del contrato y en la indemnización de perjuicios que se siguiere ante la jurisdicción correspondiente.

1^b—Mientras el denunciante no asume el rol de querellante no es considerado como parte legítima en el juicio, y por tanto carece de facultad para consentir ó recurrir de las resoluciones dictadas. Si no es parte, ninguna resolución puede pasar en autoridad de cosa juzgada para aquel que viene á asumir el rol de parte. Cuando el denunciante se presenta como parte querellante debe restablecerse el estado del juicio.

2—No importa otra cosa que la manifestación del propósito de remitir la pena y renunciar á las acciones que á consecuencia del juicio puede corresponder al querellante—art. 186, inc. 1^o del Cód. Civ.



4. **Acusador**—Particular, el recurso de apelación de la sentencia, interpuesto por el acusador particular, no puede ser tomado en consideración por la Cámara si carecía de personería para asumir ese carácter, aun cuando anteriormente no haya sido discutido.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 401, Ser. 4^a.

Acusador—Véase: *Absolución del reo*, núm. 3—*Acción civil*, núms. 1 y 2—*Costas*, núm. 13—*Calumnia*, números 16 y 24—*Calumnia manifiesta*, núm. 1—*Posiciones*, núms. 10 y 30—*Escepción de arraigo*, núm. 1—*Escepción de falta de personería*, núm. 11—*Defraudación*, núms. 16, 17, 20 y 21—*Sobreseimiento*, núm. 10—*Prisión preventiva*, núm. 9—*Desistimiento del acusador*, núm. 1.

1^a. **Acusador por calumnia**—No está obligado á absolver posiciones.—Jur. Crim., tom. 8, págs. 147 y 313. Ser. 4^a.

1^b. **Acusador fiscal**—No procede la escarcelación bajo

4—El recurso de apelación en un juicio por homicidio lo interpuso el hermano de la víctima. Esta intervención no se halla autorizada por ley alguna, como lo tiene resuelto la Cámara en las causas seguidas contra Camacho y contra Bogan, por homicidio.

1^a—Así lo tiene declarado esta Cámara en las causas de Ojeda con el diario «El Nacional»; Pizarro con del Campo y otro; Hugo Marcus con «El Diario»; el acusado por delito de calumnia no está obligado á absolver posiciones por cuanto el art. 18 de la Constitución Nacional prescribe que nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo, y de conformidad á su letra el acusador en juicios de esta naturaleza no puede pretender probar el delito que imputa al que se dice calumniado, por la propia confesión de éste. Tal es el alcance que corresponde dar á lo dispuesto en el art. 470 del Cód. de Proc.

1^b—La escarcelación bajo fianza solo procede cuando el hecho que ha dado lugar á la prisión tiene pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximo no exceda de dos años de prisión—art. 376 del Cód. de Proc.—El delito que se imputaba al procesado en el caso del sumario, tenía una penalidad mayor, pues le correspondía de uno á tres años de prisión. La circunstancia de que el Ministerio Fiscal pida solo dos años de prisión,



fianza si el delito puede ser castigado con más dos años de prisión, aun cuando el acusador fiscal haya pedido esa pena.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 14, Ser. 4^a.

Adhesión al recurso—Véase: *Apelación*, núm. 3.

1. **Adjudicación «in solutum»**—Se considera justo título la sentencia ejecutoriada que adjudica *in solutum* una propiedad en pago de una deuda mayor, y existe buena fe si consta la entrega judicial de la posesión al acreedor.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 241, Ser. 3^a.

1^a. **Administración**—Es improcedente la acción pro-socio de rendición de cuentas, en tanto no se justifique la existencia de la sociedad, y como consecuencia, que el demandado ejerció actos de administración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 39, Ser. 3^a.

Administración—Véase: *Rendición de cuentas*, núm. 7—*Tutor*, núm. 2—*Tutor reconocido*, núms. 1 y 2—*Contrato de Sociedad*, núm. 12—*Bienes de menores*, núm. 3—*Defraudación*, núm. 13.

1^b. **Adulteración de un documento**—Declarada la adulteración de un documento privado que la parte pretende hacer valer en juicio, procede su remisión al Juzgado de Instrucción para la averiguación del delito.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 417, Ser. 4^a.

2. **Adulteración de un documento**—La declaración de falsedad ó adulteración de un documento privado recaída

como lo hizo en el caso que nos ocupa, no puede tener influencia en la decisión del incidente de escarcelación, pues no obstante esta petición el reo puede ser condenado á una pena más grave, y la ley no autoriza la escarcelación sino á condición de que en ningún caso pueda corresponder mayor pena que la de dos años.

1^a—Véase: *Acción pro-socio*, núm. 1.

1^b—Art. 160 del Cód. de Proc.

2—Art. 1105 del Cód. Civ.



en el juicio civil, no forma prueba en el juicio criminal.
—Jur. Crim., tom. 2, pág. 95, Ser. 4^a.

1^a. **Adulteración de una letra**—De cambio, en requisitos esenciales, como ser la fecha y el lugar del pago, hace procedente la escepción de falsedad.—Jur. Com., tom. 5^a, pág. 239, Ser. 4^a.

1^b. **Adulterio**—Fundándose la acción de divorcio en la causal de adulterio, la prueba privilegiada ó de presunciones es admisible.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 200, Serie 3^a.

2. **Adulterio**—Justificado el adulterio, debe decretarse el divorcio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 200, Ser. 3^a.

3. **Adulterio**—Justificado el adulterio, debe condenarse

1^a—Donde decía la letra, «Paris, casa de los Sres. Popper y C.^a», fué borrado sustituyendo dichas palabras con las de «Rep. Argentina, Buenos Aires». También la fecha de su vencimiento fué enmendada. La adulteración de la verdad en cualquier de los *requisitos esenciales* de la letra, como la época y lugar del pago—art. 599 del Cód. de Com.—hace procedente la escepción de falsedad que el art. 656 permite oponer contra la acción ejecutiva de una letra de cambio. Siempre que las enmiendas se hagan con posterioridad á la aceptación de la letra y sin intervención del aceptante y demás partes contratantes, la letra no puede producir efectos legales, porque tales documentos no son admisibles en juicio, según expresa disposición del art. 211.

1^b—Toda clase de pruebas es permitida en los juicios de divorcio, con escepción de la confesión ó juramento de los cónyuges, dice el artículo 70 de la misma Ley de matrimonio. El delito de adulterio, es de prueba privilegiada por la dificultad de justificarse hechos que naturalmente se procuran ocultar, circunstancia que por sí sola, demuestra que debe admitirse la prueba de presunciones en tales juicios. A estas consideraciones hay que agregar, que no se trata del ejercicio de una acción criminal dirigida á obtener el castigo del delito de adulterio, en cuyo caso se explicaría la inadmisibilidad de la prueba privilegiada con respecto al principio consagrado por la Ley 12, tit. 14, Part. 3^a, sino tan solo como se ha dicho de la acción civil.

2—Art. 64 de la Ley de Matrimonio civil.

3—Art. 122 del Cód. Pen.



á la esposa á dos años de prisión y al cómplice á dos de destierro.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 90, Ser. 4^a.

4. **Adulterio**—Siendo el adulterio un delito continuo, el término para la prescripción solo puede contarse desde que cesó de cometerse.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 210, Ser. 4^a.

5. **Adulterio**—El adulterio, si se justifican los malos tratamientos, debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 210, Ser. 4^a.

6. **Adulterio**—No procede la detención de la acusada por este delito, si está depositada en casa de confianza.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 428, Ser. 4^a.

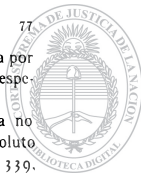
7. **Adulterio**—La acusación criminal puede coexistir

4—Al tratar de esta cuestión, la Cámara la resuelve en muy pocas palabras diciendo: «Estando probado en autos por declaración de la misma procesada que hacía vida marital hasta el fallecimiento de la persona con quien vivía en esa forma, y no habiendo trascurrido desde ese fallecimiento hasta el día de promovida la acusación, es evidente que no ha corrido el tiempo fijado para la prescripción por el art. 89, inc. 3º del Cód. Pen.» Este fué el fundamento del voto de uno de los Camaristas al que se adhirieron todos los demás.

5—Se trataba del adulterio de la mujer, habiendo comprobado ésta los malos tratamientos de que había sido víctima antes de cometer el delito, lo que debe considerarse como circunstancia que atenúa la responsabilidad de la delincuente por la analogía que esta circunstancia guarda con otras de las que espresamente enumera el art. 83 del Código Penal en su inc. 7º.

6—El Juez de 1ª Inst. así lo resolvió diciendo que: «No resultando de autos mérito suficiente para constituir en detención á la acusada, la que por otra parte se encuentra depositada en poder de persona en quien este Juzgado encuentra suficiente garantía.» La Cámara confirmó esta resolución por sus fundamentos.

7—Según resultaba de los antecedentes, el juicio de divorcio que el querellante tenía pendiente ante el Juez Civil respectivo contra su esposa, estaba fundado en el adulterio de ésta con dos individuos distintos. Con posterioridad á la iniciación de dicho juicio de divorcio, la misma esposa cometió nuevamente el delito de adulterio con un tercero.



con la acción civil del divorcio, siempre que tenga por base actos ó delitos distintos aunque de la misma especie.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 269, Ser. 4^a.

8. **Adulterio**—La confesión de la esposa acusada no forma prueba contra el cómplice que niega en absoluto la comisión del delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 339, Ser. 4^a.

9. **Adulterio**—La vida común después de cometido y conocido el adulterio, importa la renuncia de toda acción criminal fundada en aquel delito.—Jur. Crim., tom. 4, página 181, Ser. 4^a.

Como se ve, aun cuando los hechos delictuosos que dieron origen á uno y otro juicio tengan la misma calificación legal de adulterio, no son sin embargo un mismo é idéntico acto ni se consumaron entre las mismas personas. En tal caso no se trata del ejercicio simultáneo de la doble acción civil de divorcio y criminal de adulterio, emergentes del mismo é idéntico acto delictuoso, que es á lo que se refiere el art. 126 del Cód. Pen., sino de hechos distintos verificados en épocas diversas y con otras personas, razón por la cual no era aplicable al caso la limitación consignada.

8—Esa confesión no constituye una prueba legal contra el codelincuente, y solo puede considerarse como indicación según el art. 276 del Cód. de Proc. Crim.

9—La circunstancia de que el esposo vuelve á hacer vida marital con la esposa después de conocer éste la comisión del adulterio, importa el perdón del delito y lo inhabilita para querellarse por él. La acción para acusar por adulterio solo corresponde al cónyuge ofendido, según el art. 124, Cód. Pen., y á él le ha sido acordada la facultad de remitir *en cualquier tiempo* la pena, según el art. 125. Esa remisión no está sujeta á forma especial, y siempre ha sido reconocida en nuestras leyes por el hecho de la unión de los esposos. «Cuando algún acusare á su muger que ficiera adulterio, decía la Ley 12, tit. 8^o, Part. 7^a, é ella discre que quiere probar que el mesmo le perdonara ya aquel yerro, ó que la habia despues recibido por muger, si esto probare, non debe el marido ser oido» y más esplicita aún es la Ley 8^a, tit. 17, Partida citada, la que concluía así: «Otrosi dezimos, que si despues que la muger ha hecho el adulterio la ha recibido el marido en su lecho á sabiendas ó la tiene en su casa como á su muger, que del yerro que oviesse fecho en



10. **Adulterio**—Para que el juicio civil por adulterio obste á la tramitación del juicio criminal, debe fundarse en el mismo hecho; si los cómplices son distintos pueden coexistir ambos juicios.—Jur. Crim., tom. 6, página 281, Ser. 4^a.

11. **Adulterio**—Los hijos menores en el periodo de lactancia, deben estar en poder de la madre, aun cuando acusada de adulterio se encuentre detenida.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 302, Ser. 4^a.

12. **Adulterio**—La fianza del cómplice del adulterio, de-

ante que la acogiese *non la podría despues acusar*; é maguer la acusasse non seria tenuta de responder a la acusacion, ca pues que asi la acogió en su casa, *entiéndese que la perdonó* é non le pesó el yerro que le fizo.» Esta Ley no pugna con ninguna de las disposiciones del Cód. de Proc. Crim. vigente, y armoniza con la letra y espíritu del art. 125 del Cód. Penal. Según este art. del Cód. Pen., el cónyuge ofendido puede en cualquier tiempo remitir la pena á su consorte, debiendo en este caso también perdonar al ofensor. Las consideraciones de orden privado y social en que se funda esta doctrina, es aplicable al caso en que el perdón se haya otorgado antes de iniciar la querella. Ese perdón manifestado por el hecho de continuar la vida marital, importa la remisión no solo de la pena sino el desistimiento de toda acusación. Desde que ha llegado un momento en que el esposo agraviado ha renunciado á hacer valer los derechos que la ley le acuerda, debe considerar su resolución como definitiva, pues no sería justo ni prudente dejarle permanentemente una facultad para que haga uso en el momento que mejor le parezca y que como espada de Damocles estaría amenazando constantemente á su consorte.

10—De acuerdo con la jurisprudencia sentada por este Tribunal. Véase el núm. 7.

11—El auto de 1^a Inst. que fué confirmado por la Cámara, por sus fundamentos, decia así: «Que este Juzgado no es competente para declarar á quién corresponde la criatura: que sin embargo de esto, la procesada *ipso facto*, es por el momento la persona que debe estar á cargo de dicha criatura, por ello se declara que el niño debe quedar en poder de ella.

12—Se fijó en 100 nacionales el importe de la fianza y para ello se tuvo presente que la pena que correspondería al escarcelado sería la de

be ser de poca importancia —Jur. Crim., tom. 8, página 303, Ser. 4^a.

Adulterio—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 5.

Agente de autoridad—Véase: *Provocación con armas*, núm. 1.

Agente fiscal—Véase: *Apelación*, núms. 5 y 12—*Abuso de autoridad*, núm. 4.

1^a. **Agente de policía**—La tentativa de robo con violencia, debe ser castigada con tres años de presidio si el reo investía el carácter de agente de policía.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 68, Ser. 4^a.

1. **Agente de seguros**—Justificado que un agente de

destierro, y que la fianza debe graduarse en proporción á la naturaleza de dicha pena, que es una de las últimas de la escala establecida en el art. 54 del Cód. Pen.

1^a—Es la pena que resultó corresponder aplicando las disposiciones de los arts. 189, inc. 1^o; 84, inc. 11; y 12 del Cód. Pen.

1—La existencia del contrato de seguro y del incendio que destruyó las cosas, fueron probadas y reconocidas por ambas partes. No hubo cuestión al respecto; pero la compañía aseguradora, contestando la demanda, alegó que el asegurado había incurrido en declaración falsa y reticente, ya al manifestar que el edificio que aseguraba era de material y techo de fierro, ya al haberse declarado propietario del terreno en que estaba construido, no siéndolo, lo cual autorizaba á declarar la nulidad del contrato, con arreglo á los arts. 3^o y 4^a de la póliza y 498 del Código de Com. Sostuvo, además, que el asegurado había perdido el derecho á indemnización por no haber dado aviso del siniestro en el término del art. 21 de la póliza, y finalmente, que en caso de ser procedente la indemnización, la suma que se reclamaba era exagerada. El Juez Inferior en la sentencia que fué apelada, dijo que la falsedad y reticencia de la declaración del asegurado en cuanto á la calidad y composición del edificio, no se había probado en la forma que exige la ley, pero consideró que esa falsedad ó reticencia consagraba una injusticia en esa parte y errónea la apreciación del juez sobre el particular: 1^o Porque de un documento testimoniado que se presentó resultaba que el asegurado había comprado en Enero de 1890 el terreno en que construyó el edificio que aseguró en 4 de Diciembre siguiente, según





la compañía aseguradora recibió aviso del siniestro, la ley considera llenado este requisito del contrato como si fuera hecha á la gerencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

Agravación de la pena—Véase: *Apelación*, núm. 5.

1. **Agravios**—Aun cuando se conceda el recurso interpuesto por el Agente Fiscal, debe dársele por desistido, si el Ministro en 2^a Inst. no espresa agravios, limitándose á pedir la confirmación de la sentencia.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 32, Ser. 4^a.

Agravios—Véase: *Pena*, núm. 2—*Contrato de compra-venta*, núm. 31.

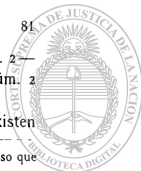
la póliza presentada y por consiguiente, la poseía á título de dueño y aunque su propiedad fuera revocable como lo era en virtud del título mismo de adquisición. 2º Porque en la póliza se declaraba que él mismo procedió «en calidad de propietario», dado el tenor del documento presentado, él no podía considerar propietario al que le vendió con pacto de retroventa el terreno en que había construido el edificio que aseguraba, sino á sí mismo que lo había comprado y pagado el precio en treinta y nueve pagarés. 3º Porque aunque así no fuera, no es toda reticencia de circunstancia y falsa declaración la que produce la nulidad del seguro, sino aquellas «que á juicio de peritos hubiese impedido el contrato ó modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de la cosa»—art. 498 del Cód. de Com.—El juicio de peritos tiene sobre el particular capital importancia, y no hay lógica en reconocer su importancia decisiva para la apreciación del alcance de la reticencia ó falsedad y declarar la nulidad del seguro por esa causa á pesar de no existir en autos ese elemento de ilustración y de juicio. Tampoco puede invocarse para legitimar tal conclusión los términos de la condición tercera, porque á ésta le precedía el pedido circunstanciado á que se refiere la condición tercera que es el que formulaba el asegurado, mientras que la póliza no la hace él sino el gerente de la Compañía, según se consignaba al final de la misma. El silencio de la póliza sobre la calidad de lo asegurado en cuanto al terreno no puede imputársele mientras la Compañía no pruebe que también existió en el pedido circunstanciado del seguro, lo que no se había hecho. Por consiguiente, no militaba en este caso la falsa declaración que se invocaba por el demandado y por el juez para declarar la nulidad del contrato. En el supuesto de que se

Agregación — Véase: *Documento agregado*, núm. 2—*Sentencia definitiva*, núm. 2—*Informe pericial*, núm. 2—*Escritura pública*, núm. 7.

1. **Agresión**—Si de los antecedentes del hecho existen

declarara subsistente el seguro, la compañía alegó la falta de aviso que prescribe el art. 21 de la póliza, y el juez así lo declaró. Sobre ese punto la sentencia no era acertada. Pero el asegurado comprobó que el aviso fué dado á su debido tiempo.

1—Los antecedentes del caso fueron los siguientes: Encontrándose el procesado en compañía de unos amigos, tocando la guitarra en casa de su señora madre, pretendieron entrar la víctima y dos compañeros; el procesado les negó la entrada en términos irreprochables, y no obstante esto, media hora después aquéllos se encontraban todavía en las inmediaciones de dicha casa, siendo detenidos el procesado y sus acompañantes por el presunto agresor, que pidió al primero explicaciones por su negativa á dejarle entrar al baile. Después que el procesado explicó nuevamente su conducta, siguiendo los dos grupos en la misma dirección y cuando aquel en que iba el procesado se detuvo en la puerta de la casa de uno de los que lo componían, el lesionado se adelantó hacia éstos en actitud agresiva y siguió avanzando á pesar de los gritos de «alto» que por repetidas veces le dió el procesado. En esta situación fué que éste descerrajó el tiro que causó la lesión que motivó el proceso. De esta precedente e posición de hechos, resulta evidentemente acreditada la escepción de legítima defensa alegada por el reo. La actitud del agresor al esperar durante media hora la salida del reo después de la negativa de éste, el subsiguiente pedido de explicaciones, y su conducta posterior al adelantarse hacia donde se encontraba el procesado, sin hacer caso de sus observaciones ni de las de sus amigos, son hechos que no se explican de otro modo que por el propósito decidido de vengarse, castigando la supuesta ofensa recibida. Este juicio que cualquiera se forma al detener su examen en el conjunto de los hechos, debió presentarse con caracteres más acentuados en el espíritu del reo, á quien el peligro que creía ver delante de sí no le permitía la serenidad necesaria para discernir si la actitud del agresor podía responder á otro objeto que no fuese la venganza. ¿Qué hacer en tal situación? ¿Qué hubiese hecho en igualdad de circunstancias un hombre cualquiera? Seguramente impedir que se le aproximase aquel que no podía ser considerado sino como agresor. Pretender otra cosa, sería pedir al hombre lo que no puede dar de sí, porque no se puede exigir á





motivos fundados para temer una agresión, debe calificarse de legítima defensa el disparo de arma de fuego con lesiones contra el que llevó el ataque, aun cuando el peligro no resulte inminente.—Jur. Crim., tom. 9, página 315, Ser. 4^a.

Agresión—Véase: Excepción de legítima defensa, núm. 1
—*Disparo de arma de fuego, núm. 4.*

1. Agresión legítima—Si falta prueba de la intención

cualquiera la calma y la sangre fría necesarias para esperar hasta el último momento, cuando esa espera puede tener resultados funestos y fatales. Si se agrega á esto la afirmación del procesado de que el agresor llevaba un arma en la mano, hecho corroborado por testigos, y circunstancias que resultaban de la hora y el sitio en que el hecho se produjo, se llega á la conclusión de que en el presente caso concurrieron todos los requisitos legales de la legítima defensa—inc. 8º, art. 81 del Cód. Pen.

1—Varios individuos se hallaban viviendo juntos; se llamaban respectivamente Avellaneda, Maciel, Fernández y Gómez, tomaban una damajuana de bebida alcohólica. Estando ya ébrios, se promovió disputa entre los tres primeros en la que intervino Gómez, y entonces Avellaneda sacó una pistola y lo hirió á Gómez levemente. Sobre este delito no había duda posible. Acto continuo, Avellaneda arrojó la pistola y huyó disparando para el monte, siguiéndolo Fernández, quien lo alcanzó, infiriéndole de atrás cuatro heridas. Fué entonces que Avellaneda volviéndose, le tiró un golpe con su machete y le causó la herida en la cabeza que ocasionó la muerte. Tales eran los hechos resultantes, no solo de la confesión, sino también de la declaración de Gómez y Maciel, exceptuando la última parte que ellos no vieron por ser ya de noche, y corroboradas por el hecho de tener efectivamente Avellaneda las cuatro heridas indicadas. La sentencia apelada, consideró que Avellaneda había obrado en legítima defensa de su vida amenazada y lo absolvió de pena, aplicando el inc. 8º del art. 81 del Cód. Pen. El Fiscal sostuvo que la agresión de Fernández fué legítima, por cuanto según el art. 3º del Cód. de Proc., cualquiera persona puede detener al delincuente en caso de infraganti delito y considera el caso comprendido en el inc. 2º del art. 96, y punible con ocho años de presidio. ¿Es procedente la aplicación del inc. 8º del art. 81? Parece que no; pero no porque deba considerarse que en el caso presente era legítima la



con que el particular perseguía al reo atentando á su per-

gresión de Fernández y en la forma en que la efectúa, sino porque falta la tercera condición prevista por el citado art. 81, inc. 8º, como necesaria para eximir de pena, que es la provocación por parte del que se defiende. Avellaneda disparando su pistola contra Gómez durante la discusión ó la disputa, provocó la agresión de Fernández, y desde luego, no puede invocarse en su favor el mencionado inc. 8º. Por consiguiente, puede y debe ser considerado como reo de homicidio, punible, según el art. 96 del Cód. Pen. Para determinar la pena era necesario tomar en cuenta las circunstancias atenuantes que resultaban del proceso. La ebriedad estaba justificada por la declaración de Silvio Gómez, una de las víctimas, y la propia defensa en las condiciones previstas por el inciso 1º del art. 83, al huir Avellaneda y ser perseguido por Fernández, estaba autorizado para pensar que éste no pretendía solamente detenerlo ó aprehenderlo, sino también matarlo; con Fernández y Maciel había empezado la disputa, Fernández corría tras él y al alcanzarlo, le infirió por detrás cuatro heridas con su machete, una en la cabeza sobre la oreja derecha, otra en la cintura, otra en la parte posterior del muslo derecho y la cuarta bajo la cadera del lado izquierdo, heridas poco penetrantes pero de tres ó cuatro pulgadas de extensión. Se vé, pues, que Fernández lo iba hachando por detrás á Avellaneda, que si no lo hería más gravemente ó mataba, era porque no podía acercarse más á él en su vertiginosa carrera, y que tuvo razón bastante el procesado para temer por su vida y defenderse. De manera que aunque falte el requisito antes mencionado para eximirlo de pena, no puede dudarse de que el caso estaría comprendido en el inc. 1º del art. 83, propia defensa, sin concurrir todos los requisitos necesarios para eximirlo de responsabilidad. Reconstituyendo la escena delictuosa tal como resultaba del proceso, se veía que existía también la circunstancia atenuante prevista por el inc. 3º del art. 83. No tuvo evidentemente el procesado la intención de matar á Fernández, él huía para refugiarse en el monte y si hirió á su perseguidor, fué para salvarse de la persecución y de la muerte que le amenazaba. Su propósito, tal como resultaba del proceso, no podía ser otro que inutilizar al perseguidor. Estas consideraciones al considerar el caso comprendido en el inc. 4º del art. 96 del Cód. Pen., si no se considerase que las circunstancias en que se encontró el procesado y que han sido relatadas, importan una provocación del acto homicida, por lo que es de aplicarse el art. 97 del Código Penal, que impone la pena de tres años de prisión. Por otra parte, como el procesado había cometido el delito previsto en el art. 99 del Cód.

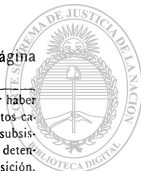


sona, debe suponerse que existe derecho en él para re-

go Pen., y en su consecuencia, debía condenarse al procesado á tres años de prisión por los delitos cometidos. Esta fué la opinión de la mayoría de la Cámara: la mayoría resolvió el punto en el sentido del sumario, sirviendo de fundamento el voto del Dr. Saavedra quien se expresó así: «Considero que en el presente caso concurren los tres elementos que la ley exige para eximir de pena por razón de legítima defensa: 1º ¿Tenía derecho Fernández para causar al procesado en la forma en que lo hizo, las heridas que describe el certificado, y era por consecuencia, legítima su agresión? La acusación responde que sí, porque el uso de la fuerza por parte de aquél, respondía al propósito de aprehender á un delincuente, lo cual constituye un derecho con arreglo al art. 3º del Cód de Proc. Vamos, pues, á examinar estas conclusiones para decidir si ellas concuerdan con las constancias de la causa y las doctrinas legales aplicables al caso. En primer lugar, ¿se proponía únicamente Fernández aprehender á Avellaneda, y las heridas fueron inferidas con ese solo objeto? La solución de este punto es de una importancia capital, porque si no hubiese sido ese el objeto de Fernández, es indudable que por su parte no habría ni asomo de derecho en la agresión llevada á cabo. Pues bien, á pesar de que, de la solución afirmativa de esta cuestión, depende la legitimidad de la agresión, el proceso no arroja prueba alguna en ese sentido. Los testigos presenciales, y el mismo compañero de Fernández en la persecución, no afirman que éste respondiese al propósito indicado, ni exponen antecedente ó hecho alguno que autorice semejante creencia. ¿Por qué hemos de admitir entonces, lo que nadie ni nada pone de manifiesto? Si no hay hechos probados que sirvan de base para una deducción cualquiera ¿por qué hemos de inclinarnos en un sentido más bien que en otro? Tan verosímil es suponer, en ausencia de todo dato seguro, que la persecución tenía por fin la aprehensión del delincuente, como la satisfacción de una venganza personal. Y en esta incertidumbre, ¿qué es lo que debe decidirse de acuerdo con la justicia y la ley? El art. 3º del Código de Procedimientos nos contesta: «En caso de duda, deberá estarse siempre á lo que sea más favorable al procesado.» Por consecuencia, en el caso actual estamos obligados á resolver, por mandato expreso de la ley, que la aprehensión del delincuente no era el propósito de Fernández, y por lo mismo que la agresión que llevó á cabo era injusta é ilegítima. ¿Cómo comprobar, se me dirá, que el verdadero fin de la conducta de Fernández era la detención de Avellaneda? Indudablemente tal prueba es imposible desde que no hizo



peler la agresión y en consecuencia, procede la excepción de falta de fundamento. Pero es que tampoco puede acreditarse por la misma razón, que su objetivo fuese satisfacer una venganza, y ante esta doble imposibilidad de hecho, las dos suposiciones quedan legalmente improbadas, pero el juez está en la obligación de creer la última por ser la más favorable al reo. Sin embargo, no es solo por lo que dispone el art. 13 del Cód. de Proc. que debemos admitir la suposición de que Fernández se proponía castigar a Avellaneda, yo me esplico que un particular que no tiene el deber de detener a un delincuente, procure hacerlo, siempre que para conseguirlo no necesite el empleo de medios violentos. Me esplico todavía que la oficiosidad llegue al extremo de tratar de intimidar aún con las armas en la mano. Pero lo que no me esplico, lo que creo no esplicarme jamás, es que, sin otro propósito que el de ayudar a la justicia, se cometa la iniquidad de dar muerte ó de causar gravísimas y numerosas heridas como las que ha recibido Avellaneda del oficioso Fernández. Si á estas circunstancias se agrega que ningún testigo ha espresado haber oído, siquiera una vez, intimación de arresto, se llega al convencimiento de que no era la justicia lo que inspiraba á Fernández sino un sentimiento bastante menos noble, el del odio ó la venganza. Supongamos, sin embargo, que el propósito verdadero de Fernández fuese la detención de Avellaneda, ¿hasta dónde llega el derecho que reconoce el art. 3º del Cód. de Proc.? Es para mí evidente que no puede alcanzar hasta dar muerte ó herir al criminal, porque no es posible que la ley quiera, para evitar el mal de la fuga de un delincuente, que se cause un daño mucho mayor. Hubiera estado, pues, Fernández, dentro de su derecho, si se hubiese limitado á intimar el arresto y á procurarlos sin necesidad de violencias, pero entregado á éstas, procedió ya sin derecho, y su agresión es por consecuencia injusta. Esta doctrina es de aplicación aun para los representantes de la autoridad pública que tienen el deber no ya el derecho, de proceder á la detención de un delincuente. De otro modo, si el supuesto criminal que fuga, pudiese ser muerto, podrían resultar injusticias tan grandes que la ley no puede jamás sancionar. Supóngase que el delito cometido fuese de aquellos que tienen una pena insignificante: supóngase más todavía, que aquel que ha cometido un crimen cualquiera, tenga á su favor una causa justificativa. Pues bien, si en aquel caso el delincuente fugase, en vez de ser castigado con un mes de arresto por el delito, podría ser privado de un miembro importante de su cuerpo, ó muerto, por el original crimen de haber fugado; en el segundo caso, el que no tiene pena, el que se ha



ción de la legítima defensa.—Jur. Crim., tom. 10, página 151, Ser. 4^a.

limitado á usar de su derecho, podría también ser muerto, por haber tratado de burlar una larga prisión preventiva, por ejemplo. Estos casos que no tienen nada de improbables, están demostrando la insubsistencia de la teoría que autoriza á herir ó matar para procurar la detención de un delincuente. Concluyo, pues, esta parte de mi esposición, dejando bien establecido, á mi juicio, que no hay constancia de que la agresión fuese con el objeto de aprehender; y que aun cuando así fuese, Fernández se estralimitó en su derecho al inferir á Avellaneda las heridas que éste presenta. 2º La clase de arma empleada por Fernández; la violencia de su agresión; la repetición de sus golpes, y el número y gravedad de las heridas inferidas á Avellaneda, demuestran la necesidad racional del medio usado por éste para repeler el ataque de que era víctima, y convencen de la existencia del segundo requisito legal. La tercera condición exigida por la ley para que exista defensa legítima, es la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Ha habido provocación por parte de Avellaneda? Las constancias de autos no lo demuestran; y al contrario, la presunción vehementemente que de ellas resulta, es que no ha habido semejante provocación. De la confesión del procesado se desprende, que si provocó á alguno no fué seguramente á Fernández, pues que según lo manifiesta, la disputa ó el enojo fué con su patrón Maciel y con el otro herido Gómez. Esta confesión se halla corroborada por la declaración del último en términos que no dejan duda. Dice el testigo «que quien lo hirió fué Avellaneda y que la causa fué porque estaba Avellaneda discutiendo con su patrón Maciel, á lo que se presentó el declarante y le dijo á Avellaneda que no fuese así, etc.» Es verdad que Maciel afirma que Avellaneda se enojó con Fernández y sacó una pistola con la que quiso tirarle, pero tal hecho no puede aceptarse como provado, desde que está en oposición con lo declarado por el otro testigo presencial, y lo asegurado por el reo. Admitamos sinembargo, que hubiese existido la provocación en la forma revelada por Maciel, pero admitamos también, y como es natural, la exactitud de los demás hechos que éste espresa. Pues bien, aceptando como verídica toda su esposición, tenemos que el incidente habido entre Fernández y Avellaneda fué seguido por otro con Maciel, de un tercero con Gómez y de la fuga después. ¿Puede en estas condiciones y después de tantas peripecias considerarse que la provocación á Fernández fué suficiente para justificar su agresión? Es para mí evidente que no. Al exigir las leyes que

A la orden—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núms. 1 y 20—*Excepción de caducidad*, núm. 3—Con-

no haya provocación semejante dan á entender claramente que será legítima la defensa cuando la provocación del que se defiende reviste tales caracteres con relación al modo, tiempo y lugar, que hacen, si no legítima, por lo menos explicada la agresión del procesado. Si la provocación ha consistido en injurias gravísimas, de esas que exaltan las pasiones de cualquier hombre honesto, la agresión es explicable. También lo es, aun cuando se trate de ofensas menos graves; siempre que ellas sean dirigidas en circunstancias tales que el sentimiento del honor no permita dejarlas sin su correspondiente correctivo. ¿Pero es explicable la agresión cuando la provocación ha terminado largo rato ha, cuando el provocador se ha dado á la fuga y cuando es preciso una larga y fatigosa persecución para darle alcance? No, señor; esto, ante la conciencia, no constituye una agresión determinada por la provocación, sino el deseo fanático, la voluntad decidida de vengarse. La doctrina espuesta, cuenta en su favor con la autoridad indiscutible de Haus, quien es todavía más exigente en la determinación de los caracteres que debe tener la provocación, para que el autor no pueda invocar la causa justificativa de defensa legítima. En los números 632 y 633 del primer tomo de su obra «Droit Penal Belge» se espresa así dicho autor: «Hay legítima defensa contra un ataque que la misma persona que lo sufre ha provocado, siempre que la provocación no tenga carácter de una verdadera agresión que coloque al procesado en la necesidad de defenderse. La provocación constituye sin duda un delito, pero si ella no ha sido de naturaleza tal que legitime el ataque dirigido contra el provocador, este ataque es injusto, y el provocador, á pesar de su falta, está en el derecho de proceder, aun por la fuerza, si la necesidad lo obliga.» Como se ve, por el párrafo transcrito, según el autor nombrado, la provocación debe consistir en una verdadera agresión que obligue al provocado á defenderse. Ahora bien, sea que se dé este alcance, ó el que acabo de establecer, á lo que debe entenderse por provocación, de todos modos es evidente que en el presente caso no puede considerarse tal, á los efectos de destruir la legítima defensa, el acto ejecutado por Avellaneda en el supuesto en que me he colocado, de hallarse probado. Demostrando las precedentes consideraciones, la existencia de todos los elementos que exige el inc. 8º del art. 81 del Cód. Pen., por lo que respecta á la muerte dada por el encausado á Fernández, mi voto es que se le declare exento de pena por ese hecho, confirmandose en consecuencia, en esta parte la sentencia apelada. Por lo que hace al disparo





signación en pago, núm. 5—*Excepciones personales*, número 1.

1^a. **Alcahuetes**—La declaración de los rufianes ó alcahuetes, forman pruebas cuando son testigos necesarios por haberse cometido el delito entre gente de mal vivir.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 353, Ser. 4^a.

1^b. **Alegato**—No corre el término para alegar el demandado sino desde la fecha en que conste haber devuelto los autos el demandante.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 206, Ser. 3^a.

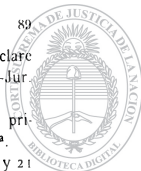
2. **Alegato**—No siendo fatal el término para alegar,

intencional del arma de fuego hecho por el mismo reo contra Gómez, pienso que debe responsabilizársele por ese delito, conforme al art. 99 del Cód. Pen., imponiéndole el término medio de la pena en él designada, en tener en cuenta la lesión leve causada al mismo Gómez, circunstancia que con arreglo á dicho art. 99 y jurisprudencia de esta Cámara en casos análogos, no constituye agravación.

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst., tom. 2^a, verb. *Declaraciones*, núm. 2 y su nota. Se trataba en el caso que nos ocupa de un robo cometido en una casa de tolerancia.

1^b—El término para alegar no empieza á correr para ninguna de las partes sino desde el día en que los autos puedan ser sacados de la oficina por el que debe alegar, mientras esto no suceda el término no corre. Si el actor saca el espediente y no lo devuelve en el término del artículo 213 del Cód. de Proc., el término para el contrario no puede empezar á correr porque no tiene el espediente á su disposición, pues el art. 27, inc. 1^o, acuerda al litigante la facultad de sacar los autos de la oficina para alegar.

2—El art. 213 dice, que la parte que dejase trascurrir el término de seis días sin devolver los autos á la oficina, perderá el derecho de alegar sobre la prueba. De manera que el único caso en que la parte pierde el derecho, es cuando no devuelve los autos; pero si los devuelve y no presente su alegato en ese acto, puede presentarlo aun después de vencido, siempre que no se le hubiese acusado rebeldía, por cuanto el término *para alegar* no ha sido declarado perentorio por la ley—art. 46 del Cód. de Proc.—y es sabido que todo término que no tenga este carácter no se considera transcurrido, aunque esté vencido,



el escrito puede ser presentado mientras no se declare decaído ese derecho en virtud de rebeldía acusada. —Jur. Com., tom. 8, pág. 165, Ser. 4^a.

3. **Alegato**—Al tercerista corresponde alegar en primer término.—Jur. Com., tom. 10, pág. 196, Ser. 4^a.

Alegato—Véase: *Diligencias de prueba*, núms. 3 y 21.—*Prescripción interrumpida*, núm. 1.—*Defraudación*, número 23.

1. **Alevosía**—Su existencia solo puede declararse, si mientras no se acuse la correspondiente rebeldía. Alo que la ley ha dado el carácter de perentorio ó fatal es á la *devolución del espediente*. El término para presentar el alegato, no es fatal, no hay ley alguna que así lo declare, pues no hay tribunal que deniegue una prórroga del término de seis días cuando la parte lo pide. Esto es práctica constante en nuestros Tribunales. Si el término fuese fatal, no podría prorrogarse, pues solo pueden prorrogarse los términos que no estén espresamente declarados perentorios ó fatales—art. 42, Cód. de Proc.—En presencia de estos antecedentes, ¿cómo pueden conciliarse estos estrechos? á saber: 1° Que el término para presentar el alegato no es perentorio; 2° Que el término para devolver el espediente lo es. Es fácil resolver este conflicto aparente. Cumplidos los seis días que acuerda la ley se devuelve el espediente, y se solicita antes de vencerse dicho término la prórroga que se necesite. Aquí la parte no incurre en rebeldía, por cuanto cumple con la ley devolviendo el espediente, si el contrario quiere que su contendiente pierda el derecho de alegar, debe acusar la rebeldía una vez vencido el término legal y su prórroga.

3—Porque el tercerista es el actor en los juicios de tercería y es á éste á quien corresponde alegar en primer término—art. 213 del Código de Proc.—El secretario entregará los autos á los letrados por su orden, dice este artículo.

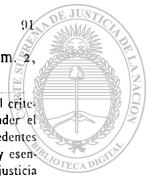
1—Las constancias del proceso no permitían declarar que el delincuente procediera con alevosía, sino con premeditación y sin circunstancia alguna que atenuase su responsabilidad penal, por cuya razón el delito cae bajo la prescripción del art. 96, inc. 1°, Cód. Pen. Hay alevosía, según el art. 84, inc. 2° del Cód. citado, cuando se obra á traición ó sin peligro para el agresor. Es indudable que lo primero no sucedió; obrar á traición es sorprender la buena fe de la víctima, ocultando el propósito criminal por una fingida amistad ó en otras maniobras hipócritas ó do-



resulta plenamente justificado que la falta de peligro para las, como decía el codificador, en la nota del art. 209, Cód. de 1878. Lo mismo establecían las partidas. Traición según éstas, «tanto quiere decir, como traer un ome á otro en semejanza de bien á mal.» Lo que caracteriza y hace más abominable la traición es el engaño, la hipocrecía, la perfidia con que el criminal disimula y oculta su designio para dar un golpe sobre seguro, haciendo caer en sus redes á la víctima, ó infundiendo confianza con la idea de algún beneficio, evitando por lo menos todo motivo que autorice á sospechar el mal que le espera. El delincuente no procedió así, y sí premeditó sin duda alguna su crimen, como resultaba de los antecedentes, no se valió de ardid alguno para consumarlo. No hubo, pues, alevosía por traición. Tampoco la circunstancia de haber atacado súbitamente y sin prevenirlo á la víctima, era suficiente para declarar que procediera sin peligro para sí. Si así fuera, todo acto primo é irreflexivo por lo tanto, caería bajo la calificación de alevosía, contra la idea que espresa esa palabra según su significado gramatical y jurídico. El agresor estaba resentido con la víctima porque éste había vendido dos anillos que le había dado en prenda y había declarado el propósito de vengarse matándolo; la noche del suceso entró al almacén, donde se encontró con la víctima, ésta lo invitó á jugar á los naipes, pero aquél no aceptó, y anunciando al almacenero que «esa noche tenía que hacer una cosa como lo iba á ver», salió y se puso á pasear por la vereda contigua al almacén, «al parecer con una espresión de excitación y tocándose un cuchillo ó puñal que tenía en el cinto», según uno de los testigos, y con el fin de esperar la salida de la víctima para herirla como la hirió. Así resultaba de las declaraciones prestadas por los testigos. No es posible desconocer que la redacción del inc. 2°, art. 84 permite estender hoy el concepto de la alevosía á casos que no habrían podido ser considerados tales, bajo la definición del Cód. de 1878, y que aun puede autorizar la aplicación á delitos cometidos sin premeditación, como si se diera muerte á una persona física ó moralmente imposibilitada de defenderse; pero tampoco puede aceptarse, que en todos los casos en que se procede sin peligro para el agresor, debe considerarse alevoso el delito, y además cuando de las constancias de la causa aparezca que la existencia ó no existencia de tal peligro haya sido una circunstancia de tal manera indiferente para el agresor, que no haya influido en su determinación esa falta de peligro, solo puede autorizar la aplicación del inciso, si resultase manifiesta, incontestable, demostrada á la evidencia y no por deducciones que pueden dar lugar á duda. No sería dado aplicar el inc. 2° según

el reo, era debido á su agresión.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 34, Ser. 4ª.

la inflexibilidad de sus términos sin chocar evidentemente con el criterio que tenemos formado de la gravedad de los delitos y estender el concepto de la alevosía á límites que no armonizan con los precedentes legislativos y con el lenguaje, y lo que es peor, con la naturaleza y esencia de la alevosía. Y si bien no es dado á los jueces juzgar de la justicia ó equidad de la ley, ni separarse de su texto bajo el pretexto de investigar su espíritu, tampoco están obligados ellos á explicarla servilmente según su tenor literal, pues como el mismo legislador lo ha consignado siguiendo las sentencias de los juriconsultos Romanos, el saber de las leyes no es solamente el aprender y decorar las letras de ellas, más el verdadero entendimiento de ellas.» Hay que evitar igualmente, dice Mr. Dupin, tanto el servilismo que nos convierte en esclavos de la letra que mata, como el espíritu de indisciplina que nos rebela contra la ley misma. Y así cuando la aplicación de la ley según la estrictez y rigor de sus términos conduce á lo inícuo, debemos separarnos de sus palabras y atenernos á su razón y á su mente. Si *ex verbis legis simpliciter intellectus prefector iniquum aquo recedimus á verbis et stamus menti rationique legis*. La interpretación de la ley por vía de doctrina, decía Treilhard en el discurso preliminar del proyecto de Cód. Pen. Francés, consiste en asignar á las leyes su verdadero sentido, en aplicarlas con discernimiento y en suplirlas en los casos no reglados por ellas; y sin ellas sería imposible concebir el desempeño de la judicatura. Todo juez tiene el derecho y el deber de interpretar la ley para la designación de la causa llevada á su tribunal, ha dicho otro autor, y esos mismos principios han sido consignados en nuestro Código, los jueces deben interpretar la ley según su ciencia y conciencia, y no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de oscuridad ó insuficiencia de ella. Es pues, en ejercicio de esa facultad y en cumplimiento de ese deber que no puede darse al inc. 2º, art. 84, un alcance tal, que pugne con la esencia de la idea que encierra la palabra en él explicada, aunque ostensiblemente armonice con sus términos y no obstante la generalidad de éstos, creo que las consideraciones y principios recordados, habilitan para declararlo inaplicable en este caso. Las constancias de autos, no permitan en efecto afirmar que entre las previsiones del culpable entrara la de evitar todo peligro para sí, y si la víctima hubiera procedido con prudencia pudo aquél haber pagado bien caro su delito. Esas circunstancias, unidas á los malos antecedentes del procesado, que la víctima y personas que con ella estaban, habían conocido, eran sufi-





2. Alevosía.—Solo existe cuando se obra á traición ó sin peligro para el agresor.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 28, Ser. 4^a.

3. Alevosía.—Solo puede declararse la existencia de

cientes para haberse prevenido de un ataque como el que llevó el agresor y haberlo evitado ó resistido con peligro para la vida de éste si se hubiese procedido con prudencia, porque el procesado no se ocultó sino que permaneció en la veredá en actitud sospechosa.

2.—Bailando el reo con una mujer lo llevó por delante otra pareja; éste le dijo al reo que tuviera más cuidado, pero éste en vez de disculparse, le contestó de mala manera, por cuyo motivo «le dió un empujón.» Hubo pues, una disputa entre ellos, la víctima que poco después vió venir al reo armado; temiendo ser agredido se paró, pero que á pesar de esto no le dió tiempo á evitar el golpe y lo hirió. Explicados así los pormenores del delito por la misma víctima, no procede la calificación de alevosía que establecía la sentencia apelada, por cuanto la alevosía solo existe cuando se obra á traición ó sin peligro para el agresor—inc. 2º, art. 84, Cód. Pen.—lo que no podía decirse del caso presente, en atención á las circunstancias que precedieron al delito y á la manera en que se efectuó

3.—El procesado había vivido en concubinato con la víctima durante dos años, separándose 15 días antes del hecho que motivó el proceso, colocándose la víctima de cocinera en una casa. El día 18 del mes de Junio de 1892 á las 7 p. m. se presentó el procesado en la casa donde hacía 2 ó 3 días se había conchavado la víctima y pide se le permita ver á su ex-concubina. Llegado á la pieza donde ésta se encontraba, desenvainó un cuchillo con el que iba armado y le infirió dos heridas, á consecuencia de las cuales falleció el día 19 de Junio. El Juez de 1ª Inst. dijo que: «Existen circunstancias agravantes, y lo son la premeditación y el abuso de superioridad de fuerza y sexo. En el caso del inc. 1º del recordado art. 96 y debe aplicarse la mayor duración de la pena en él establecida por la perversidad que el hecho en sí mismo entraña». La Cámara reformó la sentencia fundándose uno de los camaristas en que: «Solo es necesario ocuparse de lo espuesto en el 6º considerando de esa sentencia sobre las circunstancias agravantes de *alevosía* y *premeditación*. Pienso con el S.º Fiscal que no ha habido alevosía. No aparece que el culpable haya empleado artificios ó astucias para engañar á la víctima é inspirarle confianza. Según declaró la víctima, inmediatamente que entró el culpable al cuarto, la agredió,

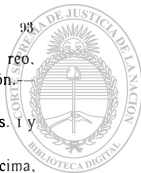
alevosía si la falta de peligro era preparada por el reo, aún cuando se encuentre justificada la premeditación. Jur. Crim, tom. 6º, pag. 423, Ser. 4ª.

Alevosía—Véase: *Homicidio con alevosía*, núms. 1 y siguientes.

1. Alhajas del deudor—Que el deudor lleva encima,

infiéndole las heridas que le causaron la muerte. En cuanto á la premeditación esta circunstancia agravante (inc. 18, art. 84) aparece debidamente comprobada, tanto porque la manera con que el hecho tuvo lugar demuestra que el procesado fué á la casa con ánimo decididamente hostil contra su víctima cuanto por las declaraciones constantes en autos, respecto de las amenazas de muerte que algunos días ántes ha preferido el procesado contra la víctima. Es también de tomarse en cuenta la circunstancia agravante del inc. 10 del art. 84 del Cód. Penal.» Otro Camarista dijo: «La existencia ó no existencia de la alevosía como circunstancia calificativa ó simplemente agravante, es punto que debe decidirse apreciando los hechos que resulten de la causa, á la luz, no de la definición científica ó doctrinaria de esa circunstancia, sino de la definición legal, y por lo mismo, que la que ha sido dada en el art. 84, inc. 2º del Cód. vigente, más amplia y genérica que la que consignaba el art. correlativo del Cód. de 1878, es la que debe tenerse en cuenta para los hechos cometidos con posterioridad á la vigencia del actual Cód. Que en el caso presente no había elementos suficientes para declarar que el reo ejecutase el hecho con alevosía porque si bien resultaba que procedió sin peligro para sí, no aparecen en la causa constancia que autorizase á juzgar que esa falta de peligro entró en su previsión, circunstancia que debe mediar para evitar las consecuencias inicuas á que podría conducirnos la aplicación de la 2ª parte del inc. 2º según el rigorismo de sus términos, como se ha demostrado en el caso del nº 1. Por ello y demás fundamentos del voto precedente, y aun cuando no se encuentra estrictamente motivo para modificar la pena impuesta en la sentencia apelada, me inclino á la benignidad usada por los Sres. vocales que me han precedido y voto en el mismo sentido que ellos.»

1—La parte á quien se había embargado las alhajas presentó un decreto diciendo: «El 22 del corriente, el oficial de Justicia de este Juzgado, acompañado del procurador del ejecutante, se ha presentado en mi domicilio y procedió á trabar embargo sobre los muebles en él existentes, ordenándome después y á pedido del mencionado procurador, de





no deben embargarse si el mandamiento ordena solo las que se encuentran en el domicilio. — Jur. Com., tom. 9, pág. 258, Ser. 4ª.

Alhajas—Véase: *Prenda*, núm. 1.

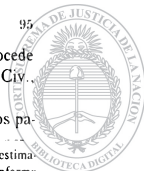
1. **Alimentos provisorios**—Justificado el título en virtud del cual se piden alimentos, y el caudal del demandado, la sentencia que fija la suma debe ser confirmada si es proporcionada.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 357, Ser. 3ª.

2. **Alimentos provisorios**—Justificado el derecho de

entregarle los brillantes que yo en ese momento llevaba en mis orejas. Oponiéndome yo á ese embargo arbitrario, pues el mandamiento librado por V. S. solo dice de embargar muebles y alhajas que se encuentren en mi domicilio, me amenazaron de pedir la intervención de la fuerza pública, y yo á fin de evitar un escándalo, saqué de las orejas los brillantes y se los entregué al Sr. Tomás Obligado, como depositario nombrado para la custodia de lo que me ha sido embargado, declarando que había protestado ante quien corresponde por el abuso de que he sido víctima. Por tanto, siendo arbitrario el embargo de los mencionados brillantes, pido á V. S. se sirva ordenar se me devuelvan en el término más corto posible, pues ellos son un recuerdo de mi finado esposo.» El juez decretó: Como se pide, notificándose en el día y sin más trámite al depositario y oficial de justicia.

1—Teniendo en cuenta la condición social de la alimentada y el caudal del demandado, se fijó en 130 nacionales la cuota mensual para una hija

2—Pendiente el juicio de divorcio la esposa se presentó pidiendo se condenara á su esposo á pasarle una pensión para alimentos en proporción al caudal que aquel administraba y que avalúa en la suma de 250,000 pesos moneda nacional, dándole una renta mensual de dos mil pesos, sustanciado el juicio en la forma prescrita por el Cód. de Proc., el juez procedió á resolverlo, declarando procedente la demanda y señalando la cantidad de 300 pesos, que creyó justa y equitativa, atendido á las justificaciones producidas sobre el caudal del demandado. La ley prescribe, que todos aquellos que tengan derecho á pedir alimentos, deberán acreditar el título en cuya virtud lo pidan, aproximadamente, por lo menos, el caudal del que debe darlos, declarando que estas justificaciones pueden hacerse por medio de documentos, por información sumaria de testigos, sin citación ni otra solemnidad, ó bien por medio de



percibir alimentos y el caudal del que debe darlos, procede fijarse equitativamente la pensión alimenticia.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 162, Ser. 3ª.

1. Alimentos definitivos—Debiendo pesar sobre los pa-

posiciones, librando en seguida al arbitrio prudente del Juez la estimación de la pensión, según lo considere justo y equitativo, conforme al caudal que se hubiere acreditado. Esta justificación se hizo por la demandante con el testimonio de testigos que firmaron el escrito presentado y ratificándose en sus firmas para acreditar que el demandado poseía bienes por el valor próximamente que espresaba en la demanda. La Cámara fijó la cuota en 200 pesos teniendo en cuenta la naturaleza sumaria del juicio, que esos alimentos tienen un carácter provisorio y teniendo presente, por otra parte, el resultado de las posiciones absue-

tas por el demandado.

1—Fijada en 150 nacionales la cuota alimenticia para dos hijos, por la vía sumaria, se presentó la madre deduciendo acción ordinaria para que se aumentara la pensión de sus hijos naturales, fundándose en que habían encarecido las necesidades de la vida desde la época en que fué fijada, hacían como cuatro años, y subido de tal manera los alquileres y el valor de las tierras que con relación al valor que tenía entonces el padre natural de dichos menores, era poseedor y propietario demás del triple en la época de la fijación de los alimentos. Conferido traslado al padre, éste fundándose en el art. 330 del Cód. Civ., lo evacuó estableciendo cuáles eran las necesidades que debía llenar con la pensión fijada para los dos hijos que una sentencia declaró suyos y desconociendo que hubiesen aumentado en proporción notable las necesidades de la vida y también sus rentas en la proporción que aseveraba, por cuanto los que como él no habían vendido sus propiedades, el aumento había sido en modesta escala, pero que también había tenido mayores gastos de todo género: alegaba que no alcanzaban sus rentas á cubrir sus necesidades y las de su familia legítima por las deudas que enumeró y que tenía que solventar con las únicas entradas que constituían sus propiedades y que á cualquier suma que se elevase la pensión tendría que privar á sus hijos legítimos de lo que necesitaban, para dárselo á la madre soltera de sus hijos naturales; y concluye por decir, que hasta ahora había vivido echando mano de los capitales de su esposa y de su cuñado, y de la consideración de algunos acreedores, en tanto que si cualquiera de éstos reclamase su capital, tendría que vender la casa donde vivía, por estar embargado el único campo que tenía, mientras que la madre



dres los alimentos de los hijos naturales, no procede el aumento de la cuota fijada, si se justifica que ella permite á la madre hacer economía.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 402, Ser. 3^a.

1. **Alquiler**—El lindero solo tiene derecho á cobrar los desperfectos que haya sufrido su propiedad por la reconstrucción de la pared medianera, pero no los perjuicios por alquileres dejados de percibir.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 223, Ser. 3^a.

2. **Alquiler**—El condómino que reconstruye la pared medianera, solo está obligado á volver las cosas al mismo estado en que se encontraban, pero no al pago de alquileres.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 176, Ser. 4^a.

que reclamaba aumento de pensión porque sus rentas habían aumentado, tendría que contentarse con una menor de la que disfrutaba. Se comprobó en autos que la renta del padre solo alcanzaba á 400 pesos nacionales, no podía por consiguiente aumentarse en más la cuota alimenticia á que había sido condenado, cuando tenía que atender al servicio de las deudas que demandaban los créditos; las atenciones de su familia legítima, compuesta de su esposa y dos hijos y á una edad avanzada que no le permitía trabajar sino en la inteligencia de disponer del capital, lo que convertiría la situación del padre en un estado desesperante, cuando las cuotas deben fijarse, no tan solo procurando que lo que sea un beneficio para el uno, no constituya un perjuicio enormísimo al otro, sino que también han de ser tomadas de las rentas y no de lo principal en cuanto las necesidades no lo requieran sin dilación alguna. Se comprobó además, que la madre á pesar de invocar que las necesidades de la vida se habían vuelto precarias, cosa que á todos nos alcanzaba y no puede hacerse pasible al padre, había adquirido después de un año de fijada la cuota alimenticia una propiedad y disponía de un trabajo manual y oneroso, circunstancia que á las claras revelaba que su situación no era tan aflictiva como lo insinuaba, cuando mediante los ahorros y con la pensión que disfrutaban sus hijos le habían permitido capitalizar. En presencia de estos antecedentes y de lo dispuesto en el art. 303 citado, no podía aumentarse la pensión, pues la obligación de alimentar á los hijos pesa sobre ambos padres.

1—Art. 2733 del Cód. Civ.

2—Véase nota precedente.



3. Alquiler—El conocimiento y resolución del incidente pidiendo que los alquileres del bien hipotecado se imputen al crédito, debe correr por cuerda separada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 343, Ser. 4ª.

4. Alquiler—El pago del alquiler de la casa en que existen los muebles embargados, es una presunción de propiedad.—Jur. Com., tom. 10, pág. 72, Ser. 4ª.

5. Alquiler—Los acreedores con privilegio general—honorarios del abogado y síndico,—solo tienen prelación sobre los de privilegio especial—alquileres,—en la parte necesaria para la venta de los bienes afectados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 214, Ser. 4ª.

Alquiler—Véase: *Depositorio judicial*, núm. 5—*Terceoría de dominio*, núm. 22.

Alteración—Véase: *Cuenta acompañada*, núm. 2.

Allegados—Véase: *Amistad íntima*, núm. 1—*Circunstancias atenuantes*, núm. 2.

1. Amenazas — Para la imputabilidad de este delito,

3—Entablado un juicio ejecutivo contra una finca gravada con hipoteca, el ejecutante pidió contra el demandado ó su concurso, pues éste se hallaba en estado de quiebra, que los alquileres á percibir de dicha finca y los ya percibidos fueran especialmente afectados al pago del crédito que se ejecutaba. Como esta cuestión tiene inmediata relación con el objeto principal del juicio en que ella se promueve debe considerarse, según el art. 403 del Cód. de Proc., un incidente del mismo; como la resolución de este incidente limitado á declarar si los alquileres ya percibidos, deben pertenecer al ejecutante ó al concurso, no impide la prosecución del juicio ejecutivo abierto sobre la propiedad ejecutada, debe ser él, sustanciado en pieza separada de acuerdo con el art. 406 del Código citado.

5—Véase: verb. *Acreedor privilegiado*, núm. 4.

1—Resultaba de autos que las amenazas dirigidas por el acusado al querellante lo fueron en circunstancias que ambos discutían acaloradamente con motivo de un negocio fracasado, cuyo cumplimiento se exigía por una de las partes. No es difícil que en un momento de excitación se escapen frases que envuelvan una amenaza, pero para que



debe existir plenamente comprobada la intención criminal; la simple espresión y aún el principio de ataque en medio de una discusión, no bastan para declarar su existencia.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 172, Ser. 4^a.

Amenazas—Véase: *Confesión retractada*, núm. 1.

Amigables componedores—Véase: *Arbitros arbitradores*, núm. 8.

1^a. **Amistad íntima**—Para que sea causal de escusación, debe ser personal con el acusado y no con sus parientes y allegados.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 145, Ser. 4^a.

1. **Amortizaciones parciales**—La forma de extinción de una deuda por medio de amortizaciones parciales en efectivo y en letras, no importa novación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 344, Ser. 3^a.

Ampliación—Véase: *Informe ampliado*, núm. 1 — *Declaración de testigos*, núm. 7.

Animales—Véase: *Marca*, núm. 1 — *Daños y perjuicios*, núm. 3 — *Empresa de ferrocarril*, núm. 2.

1. **Animales lanares**—La señal en los animales lana-

se verifique el delito, es condición esencial una manifestación deliberada de la voluntad, que indique una intención seria y formal de ejecutar el hecho con que se amenaza. Siguiendo el precepto de filosofía penal de que la voluntad es la base de la imputabilidad criminal, no era posible admitir la existencia del delito de que se acusaba al reo por cuanto no aparecía en el hecho una manifestación deliberada de la voluntad, que indicase una intención seria y formal de ejecutar el hecho imputado, según resultaba de las constancias de autos.

1^a—El juez se escusó fundándose en la amistad íntima que lo ligaba con el hermano de un acusado. La Cámara declaró improcedente la escusación porque el art. 75, inc. 12 del Cód. de Proc. Crim. solo se refiere á la que existe entre el juez y una de las partes, siendo así que el hermano del procesado no es la parte á que hace referencia la ley.

1—Con arreglo al art. 17 del Cód. Rural de la Provincia de Buenos Aires, «la marca indica y prueba acabadamente y en todas partes, la propiedad del animal ú objeto que la lleva.» No hay necesidad de



res es prueba de la propiedad.—Jur. Com., tom. 6, página 335, Ser. 4^a.

Antecedentes—Véase: *Incapacidad*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 4—*Agresión*, núm. 1—*Herida*, núm. 4—*Homicidio sin circunstancias*, núm. 10.

1^a. **Antecedentes de la causa**—En las causas correccionales, el Agente Fiscal debe hacer constar la relación de los antecedentes en que funda la acusación y el Juez citar determinadamente los artículos de la ley en que funda su sentencia condenatoria.—Jur. Crim., tom. 4, página 249, Ser. 4^a.

1^b. **Antecedentes del procesado**—No obstante los malos antecedentes del procesado, debe ser absuelto en tanto no existe prueba de que cometió el delito.—Jur. Crim., tomo 4, pág. 341, Ser. 4^a.

Antecedentes del reo—Véase: *Excepción de legítima defensa*, núm. 2.

1^c. **Apelable**—El auto que revoca el de prisión preventiva, es apelable al solo efecto devolutivo.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 371, Ser. 4^a.

1^d. **Apelación**—Es improcedente el recurso de apelación interpuesto por el que ha obtenido la sentencia á su favor.—Jur. Crim., tom. 12, pág. 378, Ser. 4^a.

2. **Apelación**—El auto de prueba no es apelable en materia de ponerles marca á fuego á los animales laneros, sino solamente una señal, según el art. 66 del mismo Código.

1^a—Esta omisión importa una falta de cumplimiento de las prescripciones del art. 495 del Cód. de Proc. Crim. y de las reglas generales de acusación.

1^b—Art. 358 del Cód. de Proc. Crim.

1^c—Art. 507 del Cód. de Proc. Crim.

1^d—El recurso de apelación es acordado por la ley á favor del que es vencido en un juicio, aunque sea en parte.

2—No está comprendido en los casos previstos en el art. 501 de Cód. de Proc.



teria criminal.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 137, Ser. 4^a.

3. **Apelación**—La adhesión al recurso, por el Ministerio Fiscal, equivale y tiene los mismos efectos legales que la apelación interpuesta ante el Inferior.—Jur. Crim., tomo 3, pág. 425, Ser. 4^a.

4. **Apelación**—En el juicio ejecutivo, solo son apelables aquellos autos espresamente declarados tales por la ley.—Jur. Com., tom. 4, pág. 148, Ser. 4^a.

3—Art. 522 del Cód. de Proc. Crim.

4—El actor quiso preparar la vía ejecutiva á cuyo efecto solicitó el reconocimiento de firma, y como el domicilio del deudor no era conocido, se le citó por edictos. No habiendo comparecido se le dió por reconocida la firma en rebeldía. El Juez ordenó que esta providencia se hiciera saber en la misma forma en que se hizo la citación para el reconocimiento, por edictos; la parte interpuso los recursos de reposición y apelación. No se hizo lugar al primero y se concedió el segundo. Elevados los autos, la Cámara declaró mal concedido el recurso por ser inapelable el auto, fundándose en el art. 226 del Cód. de Proc. Es indudable que aquí no puede aplicarse la disposición del art. 505 del Cód. de Proc. por cuanto no se trata de un *juicio ejecutivo*, sino simplemente de su *preparación*. Pero teniendo en cuenta ese mismo art. 226, debe resolverse en el sentido de la apelabilidad del auto, por cuanto dicha providencia no puede repararse al dictar sentencia; y cuando esto no es posible las providencias son apelables. Cuando se da por reconocida una firma en rebeldía del demandado en la preparación del juicio ejecutivo, esa rebeldía no es total sino parcial. Es sabido que las providencias que deben hacerse saber al rebelde por edictos son aquellas espresamente determinadas por la ley—arts. 433 y 436 del Código de Proc.—Y si esto sucede con la rebeldía total, ¿cómo puede exigirse en la rebeldía parcial? Es por esto que dice el art. 468, que si el citado no compareciere se procederá como si el documento hubiese sido *reconocido por el deudor*. Nadie puede sostener que el reconocimiento hecho por el deudor deba hacérsele saber al mismo, sería un absurdo. Por otra parte, la providencia del juez ordenando que la notificación de un auto se haga por cédula, implica recargar al litigante con gastos que la ley no impone, y además implica pérdida de tiempo, lo que es contrario al espíritu que preside el procedimiento; siendo su deseo que la justicia sea pronta y barata. Por consiguiente, aun en el caso de duda, de-



5. **Apelación**—La falta de apelación por el Agente Fiscal ó la no adhesión del Ministerio en segunda instancia, impiden agravar la pena impuesta.—Jur. Crim., tom 5, pág. 35, Ser. 4^a.

6. **Apelación**—La evasión del procesado exime al Tribunal de entender en la apelación interpuesta, en la parte de la sentencia que se refiere al prófugo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 356, Ser. 4^a.

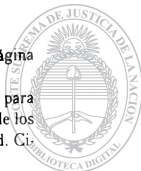
7. **Apelación**—Es improcedente el recurso de apelación del auto de sobreseimiento, deducido después del término

be en todo caso resolverse consultando esos dos objetos primordiales de nuestras leyes. La resolución de la Cámara tiene de bueno para ese Tribunal que le ahorra estudio y trabajo aunque ese ahorro sea en perjuicio de la cosa pública. La resolución del Inferior no solo era apelable sino que era injusta y arbitraria, como que no se puede citar un artículo en su favor, ni tampoco la práctica.

5—Art. 693 del Cód. de Proc. Crim.

6—Los arts. 148 y 151 del Cód. de Proc. Crim. establecen que en estos casos los delincuentes deben ser declarados rebeldes, y suspenderse la causa hasta que se presenten ó sean aprehendidos.

7—Esta cuestión fué resuelta por mayoría en la Cámara, confirmando el auto del Inferior, y votando en el sentido del sumario cuatro de ellos y fundándose en que por el auto apelado se sobresee definitivamente en la causa respecto de la querella. Que según lo dispuesto por el artículo 441 del Cód. de Proc. Crim., el término para apelar de todo auto de sobreseimiento es de tres días perentorios. El Dr. Esteves votó en contra, en estos términos: «Resultando que elevada esta causa á plenario por auto consentido, el Juez de sentencia mandó que el querellante formulase acusación quedando notificado éste en 8 de Junio de 1892. Que habiendo dado cuenta el actuario que el término fijado en el artículo 457, Cód. de Proc., había vencido sin haberse formulado acusación, el juez resolvió sin más trámite en 17 del mismo mes, que por tal circunstancia debía presumirse que el querellante desistía de su acusación y sobreseyó definitivamente, siendo ese el auto apelado. Y considerando: Que según el art. 174 del Cód. de Proc. Crim., si la querella fué por delito, que no pueda ser perseguido de oficio sino á instancia de parte —como en este caso, art. 125, Cód. Pen.—se entenderá haberla abandonado el que la hubiese interpuesto, cuando dejase



de tres días que la ley fija —Jur. Crim., tom. 7, página 114, Ser. 4^a.

8. **Apelación**—No procede recurso de apelación, para ante la Suprema Corte Federal, de resoluciones de los Tribunales de la Capital sobre aplicabilidad del Cód. Civil—Jur. Com., tom. 7, pág. 108, Ser. 4^a.

de instar el procedimiento *dentro de los cinco días siguientes á la notificación del auto en que el Juez así lo hubiese acordado*, á cuyo efecto, á los cinco días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante ó de estar paralizada la causa por falta de instancia del mismo, *mandará de oficio el que conociese de los autos que aquél pida lo que convenga á su derecho en el término fijado en el párrafo anterior*. Que en el presente caso, no se ha dejado transcurrir los cinco días de término que deben mediar entre la ejecución de las últimas diligencias pedidas por el querellante ó la paralización de la causa por culpa suya, el auto que le manda instar el procedimiento dentro de los otros cinco días que le acuerda la ley, ni se ha dictado tal auto, sino que al día siguiente vencido el término fijado en el art. 457, se le ha dado por desistido de la acusación y decretado el sobreseimiento definitivo. Que el simple vencimiento del término del art. 457, sin formular acusación, no autoriza á declarar abandonada la querella, y tampoco procede hacer esa declaración invocando el art. 174, por cuanto no se han observado las formalidades previas que ese artículo establece. Que el sobreseimiento definitivo es igualmente improcedente cuando no concurren algunas de las circunstancias fijadas en el art. 434, únicas que lo autorizan y que dan razón de ser á la prescripción del art. 437, prescripción que jamás podía aplicarse á la esposa que declara haber cometido adulterio como ocurre en esta causa con la querellada. Por ello, y no pudiendo considerarse al auto apelado, entre los de sobreseimiento que puede dictar el Juez de sentencia, según el art. 460, desde que no concurre la opinión del querellante, que ese artículo exige, se revoca el auto apelado.»

8—Disponiendo el art. 15 de la ley 14 de Sep. de 1863, que la interpretación ó aplicación que los Tribunales de la Provincia—á los cuales están equiparados los ordinarios de esta Capital—hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, no dará acción al recurso que autoriza el art. 14 por el hecho de ser leyes del Congreso en virtud de lo dispuesto en el inc. 11, art. 67 de la Constitución.



9. **Apelación**—La falta de apelación de una sentencia dictada en país extranjero, no puede fundar la nulidad de la ejecutoria si está probado que el demandado interviniera personalmente ó por medio de apoderado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 4^a.

10. **Apelación**—El termino para apelar de la recepción de la causa á prueba es perentorio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 299, Ser. 4^a.

11. **Apelación**—El denunciante tiene derecho para apelar de todos los autos dictados, en la fecha en que asuma el carácter de acusador, pues para él no hacen cosa juzgada.—Jur. Com., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

12. **Apelación**—Si el Agente Fiscal no ha interpuesto recurso de apelación, la Cámara no puede agravar la pena impuesta.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 311, Ser. 4^a.

13. **Apelación**—Si el reo al serle notificada la sentencia manifiesta su conformidad, el recurso de apelación interpuesto por el defensor no basta para agravar la pena.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 256, Ser. 4^a.

Apelación—Véase: *Nulidad del procedimiento*, núm. 2—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 10—*Nulidad de providencias*, núm. 1—*Pena*, núm. 7.

9—Porque esa falta de apelación no está comprendida entre los requisitos establecidos en el art. 559 del Cód. de Proc.

10—Art. 106 del Cód. de Proc.

11—Porque los autos no se notifican sino á los que son parte, y solo los que son notificados de las providencias las consienten. El denunciante que no asume el rol de querellante no es parte legítima en el juicio, y no siendo parte no tiene facultad para consentir ó recurrir de las resoluciones dictadas antes de asumir el papel de querellante, pero si tiene facultad para ello desde el momento en que asume ese carácter.

12—Véase el núm. 5.

13—Porque siempre que el Ministerio Fiscal no apele, la sentencia de 1^a Inst. no puede ser agravada en 2^a—art. 693 del Cód. de Proc. Crim.



1^a. **Apercibimiento**—Procede el apercibimiento y la multa disciplinaria si el escrito contiene frases inconvenientes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 329, Ser. 4^a.

Apercibimiento—Véase: *Síndico*, núm. 2 — *Juicio verbal*, núm. 1.

1^b. **Apoderado único**—Es obligatorio para las partes que defienden iguales derechos, el nombramiento de un solo apoderado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 138, Ser. 3^a.

1^c. **Apoderado**—No puede exigirse afianse el juicio el que se ausenta si ha nombrado apoderado para que intervenga.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 383, Ser. 3^a.

1^a—Cuando se atente contra el decoro de los magistrados ó no se observe el orden debido en los juicios, los jueces pueden imponer penas disciplinarias á los litigantes, abogados y funcionarios que intervienen en ellos—art. 52 del Cód. de Proc.—Y el art. 53 establece las clases de correcciones disciplinarias, debiendo entenderse su aplicabilidad en el orden en que están enumeradas, sin que puedan aplicarse dos de ellas al mismo tiempo, sino que se aplicará cada una de ellas de acuerdo con la gravedad de la infracción, todo sin perjuicio de testar ó inutilizar toda frase ó escrito concebido en términos irrespetuosos, indecorosos, ú ofensivos. En el caso que nos ocupa se había impuesto la pena de apercibimiento mandando testar palabras del escrito. La Cámara revocó el auto en la parte que mandaba testar las palabras contenidas en el escrito, pero confirmó en la parte que apercibía al litigante, por cuanto si bien los párrafos del escrito no podían calificarse de indecorosos ú ofensivos como lo requiere el art. 56, estaban sin embargo concebidos en estilo inconveniente á los respetos debidos á la autoridad de los magistrados.

1^b—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia. Véase: Inst., tomo 5^o, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la nota del núm. 2 consignamos los fundamentos del sumario que nos ocupa.

1^c—Un litigante presentó escrito diciendo que la parte contraria estaba para salir del país, y que por consiguiente pedía que se decretara contra él la prohibición de salir siempre que no presentara en el plico fianza de juzgado y sentenciado. El juez dijo simplemente, que no siendo procedente lo que se pedía, no hacía lugar á ello. Apelado el auto, la Cámara lo confirmó diciendo, que resultando del certificado que la parte tenía apoderado constituido en el juicio, no procedía la medida solicitada.



2. **Apoderado**—La presentación de nuevo apoderado, importa la revocación de los poderes anteriores, y en consecuencia, son nulas las actuaciones posteriores que se hayan tramitado con el primitivo apoderado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 116, Ser. 3ª.

3. **Apoderado**—El representante ó apoderado debe continuar sus gestiones hasta que espire el término acordado al apoderado.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 246, Ser. 3ª.

4. **Apoderado**—El fallecimiento del ejecutado hace cesar la personería del apoderado; la acción debe continuar ante el juez de la testamentaria.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 385, Ser. 3ª.

5. **Apoderado**—El acusado por estafa, no puede hacerse representar por apoderado.—Jur. Crim., tom. 4, página 215, Ser. 4ª.

6. **Apoderado**—El apoderado ó representante judicial

2—Art. 1971 del Cód. Civ.

3—Art. 20 del Cód. de Proc.

4—Arts. 3284, inc. 4º; 1963, inc. 3º, y 494 del Cód. Civ. El ejecutado al fallecer dejó menores interesados.

5—Los procesados tienen la facultad que les acuerda el art. 9 del Cód. de Proc. para defenderse personalmente ó nombrar defensor letrado, pero la intervención que en cualquiera de estos casos tienen en el juicio es únicamente el que acuerda el art. 180 del mismo Código; y esta defensa, es siempre después de estar privado de su libertad, ó por lo menos después de haber prestado la declaración indagatoria que espresa el art. 236 del Cód. citado. El presunto autor del delito de estafa, se encuentra comprendido dentro de la disposición del art. 129 del referido y con arreglo á esta prescripción de la ley, debe ser el procedimiento Código; en lo ulterior. Si á un procesado cuyo paradero se ignora le fuera permitido acudir á juicio por intermedio de apoderado, no tendría aplicación práctica la ley y sus disposiciones serían violadas. En tal situación no puede existir un defensor, ni un apoderado que represente en juicio al acusado porque ello pugna con lo dispuesto en los arts. 148 á 151, Cód. de Proc. Crim.

6—Para que las posiciones sean absueltas por el apoderado, se re



no puede ser compelido á absolver posiciones si carece de esa facultad en el poder.—Jur. Com., tom. 6, pág. 263, Ser. 4^a.

7. **Apoderado**—Aun cuando en el poder no tenga la facultad de pedir que el contrario absuelva posiciones, puede pedir que la contraparte las absuelva.—Jur. Com., tom. 6, pág. 279, Ser. 4^a.

8. **Apoderado**—Al ejecutante corresponde indicar la oficina en que existe el poder del que firmó como apoderado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 136, Ser. 4^a.

9. **Apoderado**—La falta de apelación de una sentencia dictada en país extranjero, no puede fundar la nulidad de la ejecutoria si está probado que el demandado intervenía personalmente ó por medio de apoderado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 154, Ser. 4^a.

10. **Apoderado**—Procede la escepción de falta de per-

quieren tres condiciones: 1^a que el poderdante se encuentre ausente; 2^a que el apoderado esté facultado para absolver posiciones, y 3^a que la parte contraria lo consienta—art. 136 del Cód. de Proc.

7—Porque la ley no exige poder especial para que el apoderado de uno de los litigantes pida confesión judicial á su contrario, debiendo en este caso estarse á la regla general establecida en el art. 17 del Cód. de Proc.

8—Se trataba de preparar la acción ejecutiva fundándose en un documento firmado por autorización. En este caso es terminante la disposición del art. 470 del Cód. de Proc.

9—El art. 559 del Cód. de Proc. solo exige en uno de sus incisos, que la sentencia no haya sido dictada en rebeldía de la parte condenada, siempre que haya tenido su domicilio en nuestro país. La falta de apelación de una sentencia no implica que ella haya sido dictada en rebeldía del vencido: ella solo demuestra la poca ó ninguna fe que la parte pudo tener en el recurso.

10—Debemos detenernos un momento en este caso. Un señor Smith aseguró en la Sociedad «The Queen» en 1875, con la que contrató en la ciudad de Buenos Aires, lugar también del cumplimiento de las obligaciones. Posteriormente la Compañía de seguros retiró su agencia de



sonería como dilatoria, si el demandante no justifica que el apoderado representa los derechos del demandado. Jur. Com., tom. 9, pág. 332, Ser. 4ª.

esta ciudad comunicando á sus asegurados que para entenderse con la Compañía se dirigieran á Liverpool. El Sr. Smith no quiso consentir esta alteración del contrato, y dedujo la demanda de rescisión y devolución de las primas pagadas. Cuando se trató de notificar esta demanda al representante de la Compañía Sr. Crispin, éste se había ausentado ya para Europa. En ese estado el actor tuvo noticia de que la Compañía de seguros «The Queen» se había refundido en la Compañía «The Royal» con asiento en esta ciudad, y pidió que la demanda interpuesta contra la sociedad «The Queen» se entendiera con la sociedad «The Royal» á la que la hacía extensiva. Siendo así demandada la sociedad «The Royal», se emplazó al Señor Paton, gerente de esta sociedad, quien manifestó que era el representante de «The Royal» pero que no asumía la representación de «The Queen», y se negó á intervenir en el juicio. Declarado que se trataba de una escepción dilatoria y sustanciado el incidente como tal, el Juzgado resolvió admitir la escepción dilatoria fundándose en que el actor no había probado que D. Roberto Paton fuera representante de «The Queen.» La Cámara confirmó esta resolución fundándose en que no se había comprobado por el demandante que el Sr. Paton fuese mandatario de «The Queen» ni que esta sociedad hubiese transferido sus derechos á «The Royal.» El error de estas resoluciones, en lo que se refiere á considerar si el Sr. Paton es mandatario de «The Queen» es uno de esos errores manifiestos que demuestran la ligereza con que son resueltos asuntos de importancia. Como resulta de las referencias del fallo mismo que tenemos á la vista, desde el momento en que la demanda contra «The Queen» se cambió en demanda contra «The Royal», no había que citar á un mandatario de la primera, sino de la segunda, y el señor Paton se declaraba representante de la segunda. Resolver la escepción como ha sido resuelta es demostrar que ni el Juez ni la Cámara han puesto la atención suficiente para informarse quién era el demandado. Éste es un error de hecho de esos que los jueces cometen con frecuencia pero no reparan nunca. El otro error que resulta de la resolución de la Cámara es más grave porque importaría volver contra una jurisprudencia observada en todos los casos precedentes. Si se demanda á la sociedad «The Royal» afirmando que ella tiene responsabilidad directa por las obligaciones de «The Queen», cualquiera que sea la causa de esa responsabilidad que se imputa, no puede nunca



11. **Apoderado**—La representación del apoderado continúa aun después de la renuncia, hasta el vencimiento del término fijado al poderdante para su presentación.—Jur. Com., tom. 10, pág. 216, Ser. 4ª.

12. **Apoderado**—En las causas por calumnia, el acusado puede nombrarlo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 233, Ser. 4ª.

Apoderado—Véase: *Documentos habilitantes*, núm. 1—*Inscripción en la matrícula de comercio*, núm. 1—*Excepción de falta de personería*, núm. 15—*Posiciones*, núm. 26.

1. **Apoderado general**—Del demandado, no puede ser fundarse en ella una excepción de falta de personería, porque afecta al fondo mismo del derecho que se ejercita contra el demandado. La excepción de falta de personería solo es procedente cuando se refiere á la capacidad de hecho, como la llama Freitas, del actor ó del demandado para estar en juicio cuando se presenta por sí y á nombre propio, ó por la insuficiencia de los poderes cuando se presenta á nombre ajeno objetando el título habilitante. Las otras defensas hacen al fondo de la cuestión y no pueden ser materia de resoluciones previas. Véase: *Instituta*, verb. *Excepción de falta de personería*, en los tomos 1º, 2º, 4º y 5º.

11—Art. 20 del Cód. de Proc.

12—Esta ha sido una cuestión muy debatida en nuestros Tribunales, habiendo sido materia de resoluciones contradictorias. Véase: *Inst.*, tom. 1º, verb. *Apoderado*, núm. 2; tom. 3º, verb. *Calumnia*, núm. 3, y verb. *Acusador*, núm. 1. En la nota á este verbo se estudia detenidamente la cuestión. En el caso del sumario la Cámara dijo, que el Cód. de Proc. no contiene disposición alguna que limite en las causas por calumnia la facultad que las leyes generales acuerdan á las partes para hacerse representar en juicio por medio de procurador y que en consecuencia de esto y estudiando el alcance de lo dispuesto por la ley 6ª, tit. 1º, Part. 7ª, y la 12, tit. 5º, Part. 3ª, esta Cámara declaró en la causa de Pizarro contra del Campo y Riveros, que éste último podía estar representado en el juicio por medio de procurador, lo que ha venido á ser confirmado por una reciente resolución de la Suprema Corte Nac. que ha declarado que los procesados pueden en general nombrar apoderado.

1—El mandato es un contrato que no puede oponerse ni invocarse por terceros, como lo es todo actor con relación al mandatario del contrario—art. 1199 del Cód. Civ.



compelido á tomar intervención en un litigio contra su voluntad.—Jur. Com., tom. 6, pág. 271, Ser. 4^a.

Apoderamiento—Véase: *Defraudación*, núm. 18—*Cheque*, núm. 2.

1^a. **Aprehensión**—El derecho de aprehensión que la ley concede al particular en los casos de infraganti delito, no puede estenderse á las vías de hecho para impedir la fuga.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

Aprobación—Véase: *Remate judicial*, núms. 7 y 11.

Apropiación—Véase: *Defraudación*, núm. 23.

1. **Aproximación sexual**—Corresponde la pena de diez años de presidio si existen circunstancias agravantes por la simple aproximación sexual; aun cuando no exista estupro, el delito se conceptúa violación.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 376, Ser. 4^a.

Aproximación sexual—Véase: *Tentativa de violación*, núm. 1.

Arancel—Véase: *Escribano*, núm. 1.

Arbitraje—Véase: *Contrato de seguro*, núm. 1.

1^b. **Arbitraje forzoso**—El otorgamiento del compromiso y la constitución del tribunal arbitral, deben llevarse á cabo con las formalidades de ley, siempre que se trate de caso de arbitraje forzoso y aun cuando en el contrato

1^a—Puede verse el fundamento de este sumario en la nota del verbo *Agresión legítima*, núm. 1.

1^b—El Juez de 1^a Inst. al resolver el caso dijo, que el compromiso arbitral debe ser constituido ante el mismo Juez y Secretario, si hubiese algún juicio pendiente—art. 776, Cód. de Proc.—Que además debe contener precisamente una multa que deberá pagar la parte que deje de cumplir con los actos indispensables para la realización del compromiso—art. 771 del mismo Cód.—Que la sustanciación del juicio arbitral debe hacerse ante Escribano público. Que ninguno de estos requisitos se había cumplido en el compromiso materia de la presente cuestión. Por esto: comparezcan las partes al Juzgado el día 29 del corriente á las 3 p. m. á objeto de establecer las bases del compromiso y nombrar los



social se haya convenido hacerlo estrajudicialmente. Jur. Com., tom. 4, pág. 224, Ser. 4.^a

1. **Arbitros**—Si entre las cuestiones sometidas al arbitraje no se comprendió la clase de moneda en que debía verificarse el pago, se entiende que debe hacerse en la especial estipulada en el contrato, aun cuando el ár-

bitros en la forma de ley. La Cámara confirmó esta resolución fundándose en que: «según el art. 448 del Cód. de Com., todas las cuestiones sociales que se susciten entre los socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación y partición, serán decididas por jueces arbitradores, á no ser que se haya estipulado lo contrario en el contrato de sociedad. Que el art. 14 del convenio, dispone asimismo que cualquiera dificultad que se suscite con motivo de la liquidación será resuelta por árbitros-arbitradores, estrajudicialmente. Que los árbitros nombrados en el mismo artículo citado han renunciado el cargo, como resulta del acta y por consiguiente la providencia apelada en que se convoca á las partes para proceder á nuevo nombramiento es arreglada á lo dispuesto en el art. 774, Cód. de Proc. Que la circunstancia de que se haya estipulado en el mencionado convenio que debía procederse estrajudicialmente, y de que hizo mérito el apelante para impugnar el auto, no tiene importancia alguna, porque sean cuales fueren los términos del convenio y la voluntad de las partes al respecto, tratándose de un caso de arbitraje forzoso, según el art. 448, desde que no se ha estipulado lo contrario, el otorgamiento del compromiso y la constitución del Tribunal, debe sujetarse á las prescripciones contenidas en el tít. 28 Cód. de Proc. Por ello, y atento lo dispuesto en el art. 274 se confirma con costas el auto apelado.»

1—El Juez de 1.^a Inst. dijo que «la principal cuestión que el Juzgado debe resolver es la relativa á la clase de moneda con que los señores Clark y C.^a debieron satisfacer el saldo que en su contra resultó del laudo arbitral que el Sr. Brian pronunció el 6 de Setiembre de 1884. Los demandantes señores Hume Hnos., sostienen que ese saldo les era debido en pesos nacionales oro sellado, y los demandados pretenden á su vez que en el laudo se espresó simplemente que el saldo de que eran deudores debía ser satisfecho en pesos de moneda nacional, el que solventaron en billetes de curso legal, de acuerdo con lo que dispone la ley núm. 1734 de 15 de Octubre de 1885. Los demandantes para fundar su exigencia recuerdan que en el contrato celebrado con los demandados en 28 de Setiembre de 1882 para la construcción de la sección



bitro la convierta en moneda nacional.—Jur. Civ., tomo 12, pág. 347, Ser. 3^a.

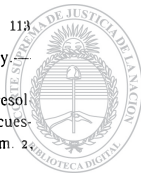
comprendida entre Mercedes y Junin del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se estipularon los precios á libras esterlinas; que con motivo de la ejecución de esas obras surgieron dificultades entre los contratantes, las que fueron sometidas al fallo del árbitro único, señor Brian, á quien se le facultó para liquidar las cuentas entre los comprometidos hasta el 30 de Junio de 1884; y que habiendo éste hecho esa liquidación en pesos moneda nacional, reduciendo á esa clase de moneda los valores estipulados en libras esterlinas, resultaba que esa liquidación era en pesos nacionales oro, aunque el laudo ni la liquidación no lo expresasen, lo que no se hizo porque en la fecha en que se dictaron las resoluciones del árbitro no existía el curso forzoso legal, siendo convertibles los billetes bancarios; que por consiguiente, debe aplicarse la última parte del art. 3^o de la recordada ley núm. 1734. Los demandados arguyen que aunque es verdad que en el contrato de construcción se convinieron en libras esterlinas los precios, habiendo sido facultado el árbitro para liquidar las cuentas que tenían pendientes con los demandantes, y habiéndose practicado esa liquidación á pesos moneda nacional, y habiendo éstos aceptado la liquidación, cobrando ejecutivamente su importe, han cumplido su obligación pagando el saldo declarado por el árbitro en la moneda que éste estableció. La verdad es que entre las diversas cuestiones sometidas á la decisión del árbitro señor Brian, como se ve por el laudo impreso agregado, no se encuentra ninguna relativa á la clase de moneda en que los deudores debían efectuar el pago. El precio convenido para las obras contratadas fué en libras esterlinas; el pago debió entonces hacerse en esa moneda ó en su equivalente en la moneda nacional oro sellado, ó en billetes de curso legal por su valor corriente en plaza el día de su vencimiento, como lo dispone el art. 3^o de la citada núm. 1734. Si el árbitro en cumplimiento de su mandato de liquidar las cuentas entre Hume Hnos. y Clark y C.^a, estableció el saldo en pesos moneda nacional, ello no puede en manera alguna alterar las obligaciones resultantes del contrato de construcción ya mencionado. Esa liquidación debía hacerse reduciendo los valores en libras esterlinas á la moneda nacional, forzosamente, y si en la liquidación no se expresó que el saldo era de pesos nacionales oro sellado, nada importa, no solo porque en esa operación solo se trataba de reducir cierta clase de moneda de oro á la moneda nacional del mismo metal y por consiguiente resultaría siempre moneda metálica en la reducción, sino también porque debe tenerse en cuenta

2. **Arbitros**—Los árbitros después de aceptado el cargo, están obligados á laudar sin que puedan alegar la nulidad

que en la fecha en que la liquidación se efectuó, no existía la moneda nacional de curso legal, el billete inconvertible creado por la ley. Esta se dictó en 15 de Octubre de 1885 y la liquidación se efectuó en 6 de Setiembre de 1884. No había, pues, necesidad de que ésta espresase que el saldo era en pesos nacionales oro sellado, puesto que no habiendo otra moneda nacional que el oro sellado, no era posible hacer diferencia de moneda nacional.

2—El art. 778 del Cód. de Proc., da derecho á las partes para compeler á los árbitros que han aceptado el cargo, á que cumplan con su cometido, bajo pena de responder por los daños y perjuicios; el art. 781, inc. 2, decide que el compromiso cesa en sus efectos por el trascurso del término señalado en él ó del legal en su defecto, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros por daños é intereses si por su culpa hubiesen transcurrido inutilmente dichos términos; el art. 799 dispone que rija para los amigables componedores lo prescrito para los árbitros sobre la aceptación del cargo y responsabilidad de los arbitradorez después de haberlo aceptado. Compeler significa en el sentido gramatical «obligar á uno con fuerza ó por autoridad á que haga lo que no quiere», y no puede ser otro el sentido en que el Cód. de Proc. ha empleado aquel término, pues la fuente del art. 778, es la ley 29, tít. 4º, Part. 3ª que dice: «E bien assi como es en poder dellos—los jueces de auencia—quando los escojen de non tomar este oficio, si non quisieren; otrosi despues que lo ouieren recibido, son tenudos de librarlos, maguer non quieran. E por ende dezimos que quando alguna de las partes viniere delante del Juez ordinario e dixere que los auenidores le aluengan el pleyto e non lo quieren librar, pudiéndole fazer, que entonce deue el ordinario embiar por ellos á ponerles plazo á que lo libren. E si ellos fuessen tan porfiados, que non lo quisiessen fazer, deuenlos despues apremiar, teniéndolos encerrados en una casa fasta que deliberen aquel pleyto.» Ahora bien, establecida la aceptación del cargo hecho por los árbitros y que se negaban á cumplirlo, es evidente el derecho con que las partes pueden pedir que se les haga la intimación correspondiente y consiguientemente la justicia con que se puede ordenar. El árbitro decia que hay leyes terminantes que prohíben bajo pena de nulidad absoluta, someter al juicio arbitral las cuestiones en que la Municipalidad sea parte y que él no podía prestarse á autorizar actos que son nulos é inexistentes. El árbitro no tiene la misión de juzgar la validez del compromiso, ni pueden los jueces pronunciarse so-





del laudo, fundada en prohibición expresa de la ley.—Jur. Com., tom. 1, pág. 145, Ser. 4^a.

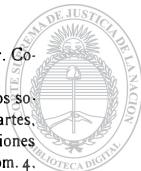
3. Arbitros.—La duración de la sociedad debe resolverse los árbitros nombrados para entender en las cuestiones referentes á su liquidación.—Jur. Com., tom. 2, pág. 108, Ser. 4^a.

4. Arbitros.—Pueden, para el lleno de su cometido, nombrar peritos que por sus conocimientos los ilustren sobre determinados puntos, sin que pueda fundarse la nulidad del laudo en el hecho de haber llevado á cabo personal-

bre ella porque puede ser objeto de otro juicio, pero no puede ser materia de resolución del mismo árbitro. El compromiso era perfectamente válido, pero aun cuando fuera nulo, el Juez no puede dejar de dictar la intimación del caso para que el árbitro laude. No habría juicio arbitral posible si fuera lícito á alguna de las partes dejarlo sin efecto con solo alegar la nulidad del compromiso; celebrado éste, los árbitros que han aceptado el cargo tienen que ajustar á él sus procedimientos y dictar su fallo, cualquiera que sea la opinión de una de las partes sobre la validez de aquel acto. La obligación de los árbitros es la de cumplir con su encargo, y no pueden eximirse de ello, aunque la parte que los nombró les induzca á que no la cumplan. Los árbitros son jueces y no instrumentos de las partes, y por consiguiente no pueden parapetarse tras de los que los nombran para negar el derecho que tienen las partes á compelerlos á que cumplan con su encargo, como tampoco para negar al juez el derecho de hacerles la intimación de cumplirlo.

3—El art. 448 del Cód. de Com. declara espresamente que todas las cuestiones que se suscitaren entre los socios durante la existencia de la sociedad, su liquidación ó partición, serán decididas por jueces arbitradores. Esta prescripción muestra claramente que todas las cuestiones que puedan originarse con motivo de rendición de cuentas etc., son de la competencia del tribunal arbitral.

4—Se nombró un contador para practicar operaciones de contabilidad que requerían conocimientos especiales. Los peritos arbitradores pueden asesorarse de peritos simples porque éstos son los prácticos ó versados en alguna ciencia, arte ú oficio, y se emplean cuando la decisión de un asunto requiere conocimientos especiales, y aquéllos son jueces nombrados por voluntad de las partes, y proceden correctamente cuando se hacen asesorar por personas de conocimientos técnicos, pues



mente la operación, salvo prohibición expresa.—Jur. Comercial, tom. 4, pág. 5, Ser. 4ª.

5. **Arbitros**—Deben fallar sobre todos los puntos sometidos á su decisión, según los escritos de las partes, siempre que no existan en el compromiso cuestiones determinadas ó prohibición expresa.—Jur. Com., tom. 4, pág. 5, Ser. 4ª.

6. **Arbitros**—Es hábil para laudar el último día del término fijado á los árbitros, aun cuando no se haya usado la palabra inclusive.—Jur. Com., tom. 4, pág. 5, Ser. 4ª.

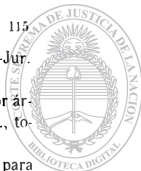
7. **Arbitros**—Los impedimentos legales que se opongan al nombramiento del árbitro, deben juzgarse por el juez de la causa; las disposiciones referentes á la recu-

la ley no les prohíbe ocurrir á esos medios, dejando que procedan de la manera más conveniente. Esas circunstancias no pueden constituir ninguna de las causas de nulidad, pues que ellas están espresamente previstas por el art. 792.

5—Los árbitros fueron nombrados para resolver las cuestiones que resultaban de la demanda y su contestación, según espresamente se estipuló en una de las bases, y nada resolvieron en su laudo que no estuviere espresamente alegado en los escritos mencionados.

6—Se dijo que: habiéndose usado la frase «de prorrogar hasta el 15», en todo el día 14 vencía el término. Semejante pretensión es contraria al buen sentido gramatical de la frase, á la interpretación que usual y generalmente se da á frases semejantes, y á lo dispuesto en los artículos 25 y 27 del Cód. Civ.

7—El Dr. Viale dijo que la recusación del árbitro debe ser resuelta con sujeción al art. 780 del Cód. de Proc. Y habiéndose celebrado compromiso para el sometimiento y decisión á árbitros de las cuestiones entre los socios, el conocimiento de la recusación no competía al Juzgado. Este auto fué revocado por la Cámara diciéndose: Que no se trataba de la recusación del árbitro nombrado, sino de la oposición al nombramiento mismo por no reunir las condiciones personales exigidas por la ley. Este incidente, diferente de la recusación, como lo es, tanto en sus causas como en sus efectos, no puede estar sujeto á las reglas establecidas para ella por el art. 780 del Cód. de Proc., y en consecuencia, si no hay disposición legal que obligue á deducir dicha



sación, solo son apreciables después de nombrado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 271, Ser. 4^a.

1. **Árbitros arbitradores**—Procede la liquidación, por árbitros arbitradores, de una sociedad civil.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 249, Ser. 3^a.

2. **Árbitros arbitradores**—El representante especial para un juicio determinado, cuya solución se somete á árbitros arbitradores por voluntad de las partes, carece de

oposición ante los árbitros, es claro que con arreglo á derecho deberá hacerlo ante el Juez *a quo* cuya competencia es general en la materia de que se trata. Por otra parte, debe tenerse presente que la causa alegada era de aquellas que impedían constituir legalmente el Tribunal, lo que no sucede cuando se trata de una causa de recusación y que por lo tanto, la oportunidad legal para hacerla valer, es precisamente antes de que se entre al desempeño de un cargo cuyo ejercicio está prohibido por mandato espreso de la ley.

1—El art. 1777 del Cód. Civ. prescribe que en la liquidación de sociedad, se observará lo dispuesto en el Cód. de Com. sobre la liquidación de las sociedades comerciales y que en éstas la liquidación se hace por el socio administrador ó por la persona que los socios designen: y en todo caso, las cuestiones sociales que se suscitaren entre los socios durante la sociedad, su liquidación ó partición, deben ser resueltas por árbitros arbitradores, háyase ó nó estipulado así en el contrato de sociedad—arst. 497 y 511 del Cód. de Com.

2—El procurador solo tenía poder especial para representar al actor en el juicio que promovió ante un juez ordinario contra los demandados por cobro de pesos, sin que hubiera acreditado en manera alguna su personería como mandatario del actor para entablar la demanda sobre nulidad del laudo de los árbitros mencionados. Uno y otro juicio son diferentes, como que el primero tiene por objeto cobrar cantidad de pesos, mientras que este último se dirige á alcanzar la nulidad del laudo arbitral, no obstante su correlación, y que la consecuencia indirecta y remota de la nulidad pueda ser obtener el pago del crédito reclamado en aquel primer juicio. Es de advertir que si declaró en una anulación previa que el procurador carecía de facultades en el juicio por cobro de pesos, para comprometer su resolución en árbitros, habiendo sido necesaria la comparecencia del poderdante para la celebración del compromiso, y entonces menos podía considerársele con personería suficiente



personería para deducir acción de nulidad del laudo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 3ª.

3. **Árbitros arbitradores**—El término fijado para laudar desde el nombramiento del tercero, no es obligatorio para los árbitros que pueden hacerlo en el que fija la ley si no lo tienen especialmente determinado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 3ª.

4. **Árbitros arbitradores**—La omisión de los árbitros, en resolver algunas de las cuestiones propuestas, no puede

para demandar la nulidad del laudo dictado en consecuencia del compromiso celebrado directamente por su poderdante.

3—El compromiso en una de sus cláusulas acordaba el término de treinta días á contar desde la fecha de la aceptación del tercero para que dentro de él pronunciasen la sentencia los árbitros. ¿Qué término tenían los árbitros nombrados por las partes para fallar de acuerdo, y en su defecto para hacer constar su discordia y llamar al tercero para dirimirla? No lo decía el compromiso: y en su defecto debía aplicarse el art. 804 que dispone que si las partes no hubiesen prefijado término, los amigables componedores deberán fallar dentro de tres meses. No puede decirse que el término de treinta días enunciado en el compromiso fuera para los árbitros nombrados por las partes solos ó acompañados por el tercero, porque entonces no se habría convenido en que principiase á correr recién desde la aceptación del tercero, siendo conocida la práctica general de que el árbitro tercero solo acepta el cargo cuando es llamado por haberse producido la discordia que debe dirimirse. Además debe razonablemente suponerse que se acuerde al tercero, un término prudencial una vez llamado á desempeñar su cargo para estudiar el asunto y preparar su fallo tratándose sobre todo, de asuntos en que era necesario trasladarse á la Plata, tomar medidas de un gran edificio y hacer cálculos morosos. No habiendo aceptado el cargo el árbitro tercero, no es el término convenido de treinta días el que los árbitros tenían para sentenciar, sino el legal de tres meses.

4—No es lo mismo ni puede traer las mismas consecuencias el no fallar sobre puntos comprometidos, que el resolver sobre puntos no sometidos á la decisión de los árbitros, siendo ésta y no aquélla la segunda causa que la ley autoriza para fundar la acción de nulidad contra la sentencia de los árbitros arbitradores. En caso de duda debe estarse por la subsistencia del acto, teniendo en cuenta no solo la especial

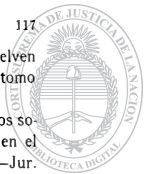
fundar la nulidad que la ley permite cuando resuelven cuestiones que no les fueron sometidas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 100, Ser. 3ª.

5. **Arbitros arbitradores**—El silencio de los árbitros sobre la cuestión costas, importa que deben pagarse en el orden causado, y no produce la nulidad del laudo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 100, Ser. 3ª.

6. **Arbitros arbitradores**—Las pérdidas é intereses por falta de cumplimiento á una obligación de hacer, deben

consideración que la ley acuerda al juicio de arbitradores amigables componedores, contra cuyas sentencias deniega todo recurso, acordando solo la acción de nulidad con marcadísima limitación, sino también la presunta voluntad de las partes en el acto de celebrar el compromiso, des someterse á la decisión de los jueces arbitradores á quienes no se les exige proceder con arreglo á derecho guardando sus formas, sino únicamente inspirándose en la equidad y la buena fe, según su leal saber y entender. Por la naturaleza del asunto debe interpretarse restrictivamente la disposición del art. 808 del Cód. de Proc. ya citado, y también porque los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos jurídicos que las especialmente previstas por la ley.—Argumento del art. 1037 del Cód. Civ., aplicable por analogía.

6—Obligado el demandado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada á otorgar escritura de venta de cinco leguas de campo, por un precio convenido y en su defecto á indemnizar al actor los daños y perjuicios que se le irrogaran; la demanda se dirigió á obtener la diferencia entre el precio actual de esas tierras y el que tenían en la época de la promesa de venta como elemento primordial de esos perjuicios. Se determinó en la demanda el *quantum* de esos perjuicios y se produjo extensa prueba en demostración de la realidad de los precios, en apoyo de las respectivas afirmaciones del demandante y demandado. Con esos elementos y otros más, es indudable que de acuerdo con lo prescripto en el art. 216 del Cód. de Proc., debió fallarse dando decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo á las acciones deducidas. El Inferior no lo hizo así, y aplicando por analogía el art. 557 del Cód. de Proc., sometió á árbitros arbitradores la fijación del valor que correspondía á los campos que el demandado debía escriturar. El Dr. Mendez Paz decía en su sentencia que fué revocada por la Cámara: «Se declara en virtud de lo que dispone el art. 557 del Cód. de Proc. aplicable





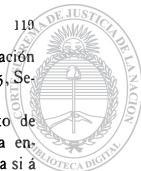
ser fijadas por el juez del litigio y no sometidas á arbitraje.

—Jur. Civ., tom. 9, pág. 325, Ser 3ª.

7. **Árbitros arbitradores**—Estipulado en el contrato social que las diferencias entre los socios deben ser dirimi-

por analogía y de práctica constante en los Tribunales en estos casos, que debe resolverse por árbitros arbitradores amigables componedores el importe ó valor que corresponda á los campos que el demandado debió escriturar á favor del demandante, debiendo las partes, si esta sentencia fuese consentida ó confirmada por el Superior, comparecer al Juzgado á efecto de labrarse el acta de compromiso correspondiente.» La Cámara no confirmó la sentencia según suponía el Dr. Méndez Paz, como que por el contrario la revocó diciendo que: La inaplicabilidad del art. 557 invocado, es manifiesta, no puede verse analogía entre el caso presente y aquel á que la sentencia se refiere. No son necesarias liquidaciones ni cuentas difíciles, para que en virtud de lo alegado y probado el Juez declare cuál es el valor de los campos en cuestión. ¿Tiene razón el actor en el precio que les asigna? ¿La tiene el demandado? Sobre estos puntos deberá recaer la sentencia teniendo á la mano el juez, muchos medios para condenar ó absolver con conciencia, reconociendo el derecho de uno ú otro litigante en todo ó en parte, sin dejar para otro juicio lo que constituye la materia del actual, como con razón lo sostiene el apelante en su expresión de agravios. Más de uno podría citarse en que tanto los jueces inferiores como esta misma Cámara se ha pronunciado sobre valor de campos ú otras propiedades, sin tropezar con las dificultades que el Juez *a quo* apunta en su fallo.

7—Celebrado un contrato de sociedad con el propósito de negociar en la compraventa y arrendamiento de sepulcros en los cementerios de esta ciudad, se estableció en el art. 9º que «cualquier duda ó diferencia que se suscite entre ambos asociados, será dirimida por medio de árbitros arbitradores, amigables componedores, nombrados uno por cada parte y un tercero en discordia que éstos elegirán, por cuya resolución habrán de pasar sin ulterior recurso para ante la justicia ordinaria.» Habiéndose suscitado entre los socios ciertas dificultades, se solicitó la formación del Tribunal arbitral mencionado en la cláusula transcrita. La parte demandada se opuso al nombramiento del Tribunal arbitral, sosteniendo que no era el caso, pues existía entre ella y el actor un convenio de disolución de la referida sociedad; tratándose ahora de su liquidación, estando ya disuelta de mutuo acuerdo, y no de simples



das por árbitros arbitradores, es obligatoria la formación del Tribunal arbitral.—Jur. Civ, tom. 10, pág. 295, Serie 3ª.

8. Árbitros arbitradores—Procede el nombramiento de árbitros arbitradores, amigables compondores, para entender en la rescisión de un contrato de compraventa si á ellos debían someterse las diferencias sobre su cumplimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 290, Ser. 4ª.

9. Árbitros arbitradores—En el incidente sobre recusación de un árbitro, debe entender el tribunal arbitral.—Jur. Com., tom. 10, pág. 170, Ser. 4ª.

10. Árbitros arbitradores—Aun cuando el asunto se encuentre sometido á árbitros, el Juzgado puede dictar embargo preventivo, en tanto aquel tribunal no se encuentra constituido.—Jur. Com., tom. 10, pág. 170, Ser. 4ª.

11. Árbitros arbitradores.—Las cuestiones entre comprador y vendedor sobre calidad de mercaderías, de cuestiones de administración. Estando estipulado en el instrumento de sociedad que las dudas ó diferencias que se susciten entre ambos asociados serían dirimidas por árbitros arbitrares, amigables compondores, de ningún otro modo que así podrían ser resueltas las dificultades que motivara la demanda, á no ser que se hubiese justificado por la parte demandada que tal cláusula del contrato había quedado sin efecto por arreglo posterior, porque el contrato es la ley á la cual deben someterse las partes.

8—Porque según el art. 1197 del Cód. Civ. el contrato importa una regla á la cual deben someterse como á la ley misma.

9—Art. 780 del Cód. de Proc.

10—El carácter de urgente que reviste toda petición de embargo preventivo, ha hecho que la ley faculte á los jueces para resolver sobre dicha petición, aun después de desprendido de su jurisdicción—art. 222, inc. 3º del Cód. de Proc.

11—El Juez Dr. Peyret dijo, que atento lo dispuesto en el art. 476 del Cód. de Com., los defectos debían ser determinados por peritos arbitradores, y en su consecuencia citó á las partes á juicio verbal á efecto de nombrar arbitradores y otorgar el compromiso. La Cámara

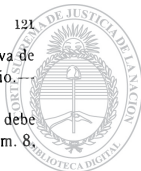


be ser resuelta por peritos en la estación de prueba: no procede el nombramiento de árbitros antes del término.—Jur. Com., tom. 10, pág. 202, Ser. 4^a.

1. **Arma de fuego**—El hecho de apuntar á una persona con un arma de fuego, sin que se produzca el dis-

revocó el auto diciendo, que la prescripción del art. 476 del Cód. de Com., no tiene el alcance de deferir al juicio de jueces árbitros arbitradores la resolución de las cuestiones que se susciten entre comprador y vendedor con motivo de vicios, defectos ó diferencias de la calidad de las cosas vendidas, sino que se fija el medio de prueba, que salvo estipulación en contrario, ha de admitirse *para determinar* esos vicios, defectos ó diferencias de calidad, disponiendo que lo sea por peritos arbitradores cuyas funciones, como lo observa el Dr. Segovia, son periciales y no judiciales—notas 1714 y 638, Esp. y Crit. del Cód. de Com.

1—La calificación legal del hecho es la de tentativa del delito, legislado por el art. 99 del Cód. Pen. que castiga con uno á tres años de prisión al que dispara intencionalmente un arma de fuego contra persona determinada. La sentencia apelada estableció que el hecho debía calificarse como tentativa de homicidio. Hay en esto un error, pues ningún antecedente del proceso autorizaba para afirmar tal intención homicida en el reo. Una cosa es que un acto externo, dice Carrara, lleve en sí la virtualidad necesaria para producir un efecto dado, y otra muy distinta, que el autor de ese acto *preveyese ó quisiese* realizar tal efecto. Del hecho se puede deducir una presunción de voluntad; de la posibilidad del hecho solo puede derivarse una voluntad probable. De aquí se desprende que el elemento *moral* del conato requiere una prueba específica, sin que valga decir que el acto *podía* causar tal efecto; luego, su autor tenía la intención de producirlo.—Carrara. Teoría de la tentativa y de la complicidad, § 28.—Esta doctrina que también es la de Haus, ha recibido reciente aplicación en una sentencia de la Cámara de fecha 12 de Sbre. de 1892 en la causa de Lorenzo Oliveros, y es la que corresponde aplicar á este caso, en lo que respecta á la intención homicida del reo, intención que no puede deducirse simplemente de los disparos de revólver hechos contra la víctima, por más que el acto reconociera como antecedente un desaire sufrido por el procesado, desde que este mismo antecedente no demuestra que su intención fuese más bien de darle muerte que de inferirle simples lesiones, cosas ambas que pueden ocurrir con un tiro de revólver. Mientras tanto, el hecho de apuntar un arma cargada contra una persona y de martillarla en tal situa-



paro contra la voluntad del agente, importa tentativa de disparo de arma de fuego y no tentativa de homicidio. — Jur. Crim., tom. 6, pág. 316, Ser. 4ª.

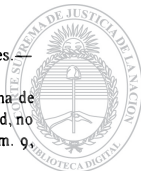
2. Arma de fuego —El disparo de arma de fuego, debe ser penado con dos años de prisión —Jur. Crim., tom. 8, pág. 401, Ser. 4ª.

3. Arma de fuego —El disparo intencional de arma de fuego, contra una persona, debe ser penado con un año de prisión si existen las circunstancias atenuantes de ebre-

ción, revela indefectiblemente la intención directa y perfecta de disparar dicha arma contra esa misma persona, es decir, demuestra el propósito determinado de consumar el acto definido por el art. 99 del Código Penal, y en consecuencia constituye una tentativa punible de ese delito. El procesado fué castigado con 18 meses de prisión, de acuerdo con lo preceptuado en los arts. 99 y 12, inc. 2º del Cód. Pen.

2—Art. 99 del Cód. Pen.

3—El procesado á consecuencia de una discusión con un cuñado suyo, disparó sobre él un tiro de revólver, produciéndole una herida en el brazo derecho, que según el informe médico, tardaría menos de 20 días en curar. La Cámara dijo: «Y considerando: 1º Que se encuentra comprobado el hecho que motiva el proceso, así como la persona de su autor, por las declaraciones de testigos, certificado médico, confesión del procesado y demás antecedentes del sumario. 2º Que el procesado manifestó que tenía cuestiones por cobro de dinero con su cuñado y sabiendo que el día del hecho, éste había percibido algunos fondos se le acercó á cobrarle: negándosele la deuda, la víctima le ordenó que se retirara de la casa; se fué á su habitación, á donde le siguió ésta, que pretendía hacerlo salir de la casa; como él se negara, fué tomado por su agresor á golpes de puño que cesaron con la intervención de su hermana. Aturdido por los golpes que su cuñado le había dado en la cara y en la cabeza, se refugió en su habitación y tomando maquinalmente de encima de una cómoda un revólver, con el que hizo fuego hacia la puerta, pero sin intención de herir á nadie. No obstante esta declaración del procesado, de haber procedido sin intención determinada y solo por imprudencia, el hecho debe calificarse con arreglo al art. 99 del Cód. Penal, por no existir en el proceso antecedentes para una calificación más grave. 4º En favor del procesado existían las circunstancias atenuantes de la ebriedad comprobada por la declaración del damnificado y testigos, y la



dad y provocación, aunque haya producido lesiones.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 73, Ser. 4^a.

4. **Arma de fuego**—La repetición de disparos de arma de fuego, como acto conjunto sin solución de continuidad, no puede calificarse como reiteración.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

5. **Arma de fuego**—El disparo intencional de arma de fuego contra una persona, debe ser penado con un año y ocho meses de prisión, si no está probada la tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

6. **Arma de fuego**—Si los disparos de arma de fuego de la provocación por parte de la presunta víctima, la que fué condenada á la pena espesada en el sumario.

4—El procesado había descerrajado dos tiros de revólver contra el agraviado que al cobrarle una deuda de juego, éste se la negó. Tal delito se halla previsto y penado por el art. 99, Cód. Pen. y la única controversia que al respecto se suscitó en la causa fué relativa al *quantum* de la pena á imponerse. El Agente Fiscal pidió el máximum en razón de la reiteración de los disparos y ausencia de atenuantes. El defensor sostuvo la improcedencia del mismo, invocando las atenuantes de los incs. 1º, 4º, 6º y 7º, art. 83; el juez aplicó el término medio compensando la agravante de la reiteración con la atenuante del inc. 6º, única que admitió, y el Fiscal pidió la confirmación de la sentencia, por no existir, á su juicio, circunstancias atenuantes ni agravantes. Se estableció por la Cámara que no habían concurrido circunstancias agravantes. En cuanto á las atenuantes invocadas por la defensa, las de los incisos 1º y 7º se confunden en este caso con la del 6º, art. 83, que fué admitida. La del inc. 4º no se probó. Atento lo dispuesto en los arts. 99 y 52 del Cód. Pen. se aplicó la pena de un año y ocho meses de prisión.

5—De acuerdo con la nota precedente.

6—El procesado sostuvo primeramente una violenta disputa con el dueño de un café situado en la calle de Australia y Universidad. Con este motivo el reo salió del negocio á la calle desde la cual desafiaba á pelear al almacenero. Habiendo la esposa de éste cerrado la puerta exterior del café, el agresor derribó de un puñetazo una chapa de zinc que cubría un cuadro de la puerta vidriera, y entrando por esta abertura la mano armada de un revólver disparó un tiro contra el almace-

fuera dirigidos contra distintas personas, existe reiteración.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 381, Ser. 4ª.

nero que se hallaba parado en la puerta de comunicación del negocio con la sala de billar en la que jugaban tres individuos. El agredido pudo evitar el ser herido, desviando el cuerpo en momentos de producirse el disparo, yendo así la bala á pegar en el tabique cerca de donde él se hallaba y á la misma altura de su cabeza. Al ruido de esta detonación ocurrió un vigilante, quien persiguió al agresor, que después de haber hecho el tiro se puso en fuga, y que en momentos en que ya iba á alcanzársele, como á tres ó cuatro metros de distancia, el mismo agresor le hizo un tiro con el revólver que llevaba, y luego otro. El encausado en su declaratoria sostuvo haberse hallado en completo estado de embriaguez, y refirió lo que decía recordar «como en un sueño» sosteniendo que el primer disparo fué meramente casual, habiéndosele escapado el tiro en momentos en que levantaba del suelo el revólver que se le había caído al entrar al café por segunda vez, y trataba de colocarlo en la cintura, y que asustado por este hecho se puso en fuga, haciendo durante ella dos disparos más al aire, para descargar el arma que luego arrojó en un lago de la plaza Herrera, en Barracas, y que al vigilante lo vió recién después de hechos estos disparos. La sentencia puso de manifiesto la inverosimilitud de esta declaración del encausado, atentas las constancias procesales. Para determinar la calificación y penalidad correspondientes á los diversos actos delictuosos cometidos por el imputado, debe tenerse presente que no se causó lesión corporal alguna con los tres disparos referidos ni el proceso arrojaba datos que pudiesen hacer presumir una tentativa de homicidio ú otro delito más grave que el penado por el art. 99 del Cód. Pen. En consecuencia, la calificación correspondiente es la de disparo intencional de arma de fuego contra una persona, y conforme al art. 99 citado, la pena señalada es la de prisión de uno á tres años. Para graduar esta pena debe tenerse presente, que por una parte concurrió la atenuante de ebriedad constatada en autos—art. 81, inc. 1º y 83, inc. 1º—y por la otra las agravantes consignadas en los arts. 84, inc. 15 y 85, Cód. Penal, pues se probó que los tiros los hizo el encausado en dos actos distintos, en diversos pasajes y contra dos personas también distintas, resultando así circunstancias de tiempo, lugar y personas víctimas del delito, que individualizan y determinan dos delitos diferentes de disparo intencional de arma de fuego, perfectamente concluidos é independientes el uno del otro.





Arma de fuego—Véase: *Disparo de arma de fuego*, números 1 y siguientes—*Agresión*, núm. 1—*Lesiones*, número 13—*Reiteración*, núms. 3, 4 y 5.

Armas—Véase: *Prisión preventiva*, núm. 1.

1. **Artículos para consumo**—El comprador de artículos de consumo demandado, no puede alegar la incompetencia de la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 8, página 173, Ser. 4^a.

1—Esta es la jurisprudencia consagrada de una manera uniforme después de dictado el nuevo Cód. de Com. En el caso del sumario, el doctor Marengo, como Fiscal de las Cámaras, se espidió asimismo en el sentido indicado diciendo que el art. 7º del Cód. de Com., al establecer que si un acto es comercial para una sola de las partes, todos los constituyentes quedan por razón de él sujetos á la ley mercantil, ha puesto fin á la diversidad de jurisdicción á que un mismo acto podía estar sujeto, según fuera la calidad de los contrayentes y su propósito evidente. Según la fuente en que ha sido tomada esta doctrina, su intención es someter invariablemente á la jurisdicción comercial los actos jurídicos que envuelven comercialidad para una sola de las partes. Si se lee el proyecto del Dr. Segovia del que ha sido tomada esta innovación y las concordancias y comentarios con que especifica su alcance, no puede abrigarse duda al respecto; y si se consulta á Vidari, comentador del Cód. Italiano, que concuerda con el artículo aludido, se confirma uno más en que no cabe otra interpretación. Este autor dice lo siguiente, en el núm. 5299: «Toda esa multitud de pequeños contratos que los no comerciantes concluyen todos los días por suministro de despacho ó cualquier género son de la competencia de la autoridad judicial de comercio»; y más adelante agrega: «no pertenecen á la jurisdicción comercial las acciones derivadas de la compra de objetos destinados al consumo del adquirente ó de su familia, siempre que el contrato no tenga carácter comercial para el vendedor.» Si por el contrario lo tuviera, aunque el contrato permaneciera civil para el comprador, la jurisdicción comercial no obstante sería ineludible para él. El Cód. dice indudablemente en el art. 452 que no se consideran mercantiles las compras de objetos destinados al consumo del comprador, como no lo son las ventas que hacen los hacendados y labradores de los frutos de sus cosechas y ganados, pero estas enunciations son para otros efectos jurídicos, y nó para eximirlos de la ley y jurisdicción comercial cuando esos actos son comerciales para la otra



1. Arraigo—Procede si el demandante tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Com., tomo 3, pág. 231, Ser. 4^a.

2. Arraigo—Presentado y aceptado por el Juzgado el fiador de arraigo, debe contestarse la demanda.—Jur. Comercial, tom 6, pág. 238, Ser. 4^a.

3. Arraigo—Debe justificarse en autos la responsabi-

parte, pues de lo contrario, la disposición del art. 7° carecería de objeto, porque no solo se escluiría de su prescripción los actos enunciados, sino todos los demás no enumerados, y que por su índole no son comerciales para alguna de las partes que los celebran. A estas ideas se ha ajustado constantemente la jurisprudencia de los tribunales.

1—Art. 85 del Cód. de Proc.

2—No se impugnó por el demandado la responsabilidad y abono del fiador propuesto por el actor para arraigar el juicio.

3—La fianza propuesta fué la de un abogado de la matrícula. El Juez de Instrucción había aceptado la fianza, pero la Cámara la revocó fundándose en que no constaba de autos la responsabilidad y arraigo del fiador propuesto, circunstancias requeridas por el art. 381 del Cód. de Proc. Crim. Este fundamento no tiene base, ni en la letra ni en el espíritu de la ley, ni está de acuerdo con la jurisprudencia. No está de acuerdo con la ley, porque el art. 381 en que se funda la Cámara, dice que puede ser fiador toda persona que teniendo capacidad legal para contratar sea de responsabilidad y arraigo. Como se vé este artículo no exige que se compruebe en autos esa responsabilidad y arraigo: en el silencio de la ley debe aplicarse los principios generales que rigen el caso ó las leyes análogas vigentes. La ley análoga es la civil, la que dice en su art. 454, Cód. de Proc. Civ., que el Juez la calificará por sí solo y encontrándola bastante mandará que se estienda la escritura correspondiente. Como se ve aquí no se exige que conste en autos la responsabilidad del fiador, basta que el juez la considere suficiente. Además el art. 444 de este mismo Cód. dice, que si la parte fuere reconocidamente abonada podrá la fianza consistir en la sola responsabilidad personal de ella. Resulta, pues, que las leyes análogas no exigen que conste en autos la responsabilidad y arraigo del fiador. El sumario está en contra de la letra de la ley, y está asimismo contra su espíritu. Está contra la jurisprudencia, hemos dicho, y esto se demuestra con solo comparar esta resolución con el núm. 2, en el cual se aceptó el fiador propuesto teniendo tan solo en cuenta que no se había im-



lidad y arraigo del fiador propuesto para la escarcelación bajo fianza.—Jur. Com., tom. 10, pág. 186, Ser. 4^a.

Arraigo—Véase: *Excepción de arraigo*, núms. 1 y siguientes.

1. **Arrendamiento**— Si el precio del arrendamiento consiste en una parte alícuota del producido del inmueble, el contrato se conceptúa de sociedad, y las cuestiones que se susciten corresponden á la jurisdicción mercantil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 3^a.

2. **Arrendamiento**—Los frutos civiles de la cosa comprada—arrendamiento—solo corresponden al comprador desde la fecha de que se hizo la tradición; el vendedor tiene el derecho al cobro de los vencidos, aun cuando el

pugnado—la solvencia y arraigo del fiador presentado. El núm. 2 está por otra parte conforme con otro caso resuelto en el juicio seguido por Alvez de Araujo con el Banco de Lóndres y Rio de la Plata, donde se aceptó la fianza de un abogado sin exigir la comprobación de su solvencia y responsabilidad, estableciendo la Cámara que el hecho de ser abogado de la matrícula el fiador propuesto, era bastante para que se le aceptara como fiador.

1—Aunque el Derecho Romano admitía que la merced en el contrato de arrendamiento podía consistir en una cantidad determinada, ó en una parte alícuota de los frutos que produjera la misma cosa que se arrendaba, como puede verse en la ley—Olci 21, C. de Locatione é Conductione, y en Vinnio, Comen. á las Inst., lib. 3^o, tit. 15, § 2^o, núm. 2—esto no subsiste según el Derecho Civil Argentino, pues en el Código nada se encuentra al respecto, y lejos de esto el Dr. Velez, en la nota al art. 1493 se expresa así: «Si el precio de un contrato de arrendamiento consistiera en una cantidad de frutos de la cosa, no sería locación, sino un contrato innominado. Si la cantidad de frutos fuera una cuota proporcional, respecto al todo que produzca la cosa, será un contrato de sociedad, aunque las partes lo llamasen arrendamiento.» La Cámara dijo: Siendo comercial por una de las partes el contrato, de acuerdo con lo prescripto en el art. 7^o del Cód. de Com. los contratantes quedaban sometidos á la ley mercantil.

2—No constaba que los arrendamientos atrasados correspondientes á los campos comprados fueron comprendidos en el precio de venta, y si

comprador reuna el carácter del arrendatario.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 62, Ser 3ª.

Arrendatario—Véase: *Daños y perjuicios*, núms. 19 y 23.

Arresto—Véase: *Acumulación de penas*, núm. 1—*De fraudación*, núm. 5.

1ª. **Asamblea**—Las decisiones de una asamblea formada con violación en lo dispuesto de los estatutos, son de ningún valor.—Jur. Com., tom. 1, pág. 41, Ser. 4ª.

1ª. **Asegurado**—Si el asegurado no cobra el valor total del seguro, se supone que la diferencia entre lo que cobra bien es verdad que el Cód. Civ. tratando de las obligaciones de dar cosas ciertas, prescribe en su art. 583, que pertenecen al acreedor todos los frutos naturales ó civiles pendientes el día de la tradición de la cosa; si bien también es cierto que el mismo Cód. en oposición con otros, como el Dr. Goyena, por ejemplo, consagra el principio de que los frutos civiles deben considerarse percibidos desde que fuesen cobrados y recibidos y no día por día, es sin embargo, de tenerse presente las relaciones de derecho creadas por el contrato de arrendamiento entre el vendedor y el demandado, que éste no podía alegar ni aun el derecho de posesión con respecto á los campos que compró con anterioridad al día de de la tradición y que por consiguiente, esos arrendamientos correspondían al propietario, aun considerados como frutos pendientes, como lo dispone el art. 2426 del mismo Código.

1ª.—De acuerdo con los principios sentados en la nota al verb. *Accionista*, núm. 1, en cuya última parte se encuentra el fundamento del sumario.

1ª.—El demandante reclamaba de una compañía de seguros la indemnización del daño sufrido á consecuencia de un incendio y que ésta se obligó á satisfacer en virtud del correspondiente contrato de seguro. La compañía demandada reconoció espresamente la existencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones que ésta imponía al asegurado, y el consiguiente derecho á ser indemnizado. Objetó sin embargo, el monto de los perjuicios, sosteniendo que el demandante incluía en éstos, mercaderías que fueron salvadas y artículos que en realidad no existían en su negocio. De la prueba producida, resultó que efectivamente se salvaron del incendio una cantidad de artículos asegurados. Pero esta prueba no podía justificar en manera alguna que el importe





y lo perdido, corresponde á los objetos salvados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 121, Ser. 4^a.

Asegurado—Véase: *Contrato de seguro*, núm. 3.

1. **Asegurador**—Al asegurador corresponde justificar las causas en que funde su resistencia al pago del seguro, en tanto que el asegurado haya cumplido las condiciones que le impuso la póliza.—Jur. Com., tom. 6, pág. 13, Ser. 4^a.

2. **Asegurador**—El valor reconocido en la póliza del seguro, forma prueba plena de su existencia en el día del siniestro, salvo prueba en contra, la que es á cargo del asegurador.—Jur. Com., tom. 10, pág. 121, Ser. 4^a.

3. **Asegurador**—Al asegurador corresponde la prueba de la existencia del capital; al asegurado le bastan las enunciaciones de la póliza para justificarlo.—Jur. Com., tomo 10, pág. 5, Ser. 4^a.

de los perjuicios no hubiera sido realmente el que se espresaba en la lista que se presentó, puesto que nada impediría que se salvara una cantidad determinada de objeto y que se perdieran otros que se hallaban en dicha lista. Para disminuir del importe de lo que se reclamaba, el valor asignado á los objetos salvados, sería preciso que éstos figurasen en la relación de los objetos perdidos, y esto no resultaba de la prueba rendida. El hecho de figurar presentada una cantidad de objetos, no autorizaría semejante suposición cuando constase que en el negocio existía mayor cantidad de ellos, lo que quería decir que pudo salvarse este número y perderse otro igual.

1—La inexactitud que se atribuye á los objetos destruidos por el incendio debe comprobarse por las compañías, como claramente se desprende de la disposición del art. 661 del Cód. de Com., disposición que establece una presunción á favor del asegurado. El valor de los objetos debe determinarse con arreglo á la póliza del seguro, salvo la prueba en contrario, la que no fué producida por la compañía. La póliza del seguro forma plena prueba, con respecto á la compañía, del capital existente en el acto del siniestro, y solo á ella corresponde justificar la existencia de dolo ó fraude.

2—Véase: verb. *Asegurado*, núm. 1.

3—Véase el núm. 1.



4. **Asegurador**—El dictamen pericial es esencial para la apreciación de la reticencia alegada por el asegurador como fundamento de la nulidad del contrato de seguro.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

Asegurador—Véase: *Seguro*, núm. 1—*Agente de seguro*, núm. 4.

1. **Asesinato**—Si el homicidio fué resuelto como medio de practicar el robo, debe castigarse al reo como autor de

4—Art. 498 del Cód. de Com. Véase la nota al verb. *Agente de seguros*, núm. 1.

1—Esta resolución fué dictada por mayoría de votos. La minoría dijo: «El Agente Fiscal y el Juez del Crimen consideraron el delito como regido por el art. 187, inc. 1º del Cód. Pen. pero el Fiscal opinó que el homicidio, había sido perpetrado con alevosía, y consideró que siendo este delito más grave, debió regirse por el art. 95 del mismo Cód. El Cód. Pen. ha previsto en general el caso en que se cometa robo con violencia é intimidación en las personas, y en especial aquel en que con motivo ú ocasión del robo se cometa homicidio y se infiera herida mortal, y ha señalado á ese hecho las penas del art. 187, inc. 1º, que es la de presidio por tiempo indeterminado ó por diez á quince años: quiere esto decir, que el homicidio cometido con motivo ú ocasión del robo, forma un delito complejo y absorbido por tanto, en la penalidad fijada para él. Sobre el particular es de todo punto aplicable la opinión del expositor y crítico del Cód. Pen. que estudiando el citado art. se espresa así: «Una de las más importantes consecuencias de la disposición del art. 187, inc. 1º, es que al hacer del robo con homicidio un delito complejo, establece por este mismo hecho la unidad de la infracción, unidad que es indivisible aún cuando entre los diferentes autores de un mismo robo con homicidio fueran los unos ejecutores materiales del homicidio y los otros ejecutores del robo. La ley declara la existencia de un solo delito cuando reuniendo en una sola disposición hechos que separados podrían tener penas distintas, aplica una sola. El Juez no podrá descomponer esta calificación, considerando respecto de cada uno de sus elementos el hecho material ejecutado por cada uno de sus elementos el hecho material ejecutado por cada uno de los responsables en calidad de autores principales, sin violar con tal aplicación los propósitos de la ley, y en la jurisprudencia que he invocado sobre esta materia se ha entendido invariablemente la unidad indivisible del robo y del homicidio en la disposición legal de que me ocupo.»—Rivarola, *Exposición y Crítica*,



asesinato, y penársele con presidio por tiempo indeterminado, si la pena de muerte fuese inaplicable por existir

núm. 762.—De lo espuesto surgen además, entre otras, las siguientes consecuencias: 1° Que las penas fijadas para el homicidio son inaplicables en este caso; y 2° que la alevosía que es agravante especial ó calificativa tratándose del delito de homicidio—arts. 84 y 95, inc. 1°—conserva simplemente su calidad genérica de circunstancia agravante si concurre en la perpetración del robo, aunque con motivo ú ocasión de este delito se cometa el de homicidio. No autorizando las constancias de la causa á deducir que el homicidio perpetrado haya sido el delito premeditado como el objetivo principal de los delinquentes, debe juzgarse que ha sido cometido *con motivo* ú ocasión del robo, y por lo mismo quedar involucrado en este último. En consecuencia corresponde la imposición de la pena de presidio por tiempo indeterminado, con arreglo al art. 187 del Cód. Pen. y en razón de la agravante de premeditación. De conformidad con la opinión del fiscal no puede aplicarse al presente caso el inc. 1° del art. 187 del Cód. Pen., sino el 1° del art. 95. Aquella disposición no puede referirse, según se deduce de sus términos espresos, sino en los casos en que el homicidio es un accidente del robo, es decir, que siendo éste el objeto único que persiguen los criminales, el homicidio se produce por circunstancias imprevistas y del momento. Las palabras de la ley «si con motivo ú ocasión del robo resultase homicidio», indican claramente que aquel debe ser el objeto directo del crimen y éste el resultado de una resolución tomada de pronto y que no constituía el objeto principal y directo del proyecto criminal. Si se diera, por otra parte, distinto alcance al texto legal en cuestión, se subvertirían completamente las reglas que sirven de base para la graduación de las penas. ¿Sería justo aún dentro de la misma penalidad de nuestro Cód., aplicar la pena de muerte al que comete un asesinato alevoso, cuando solo se propone dar muerte, y castigar únicamente con doce años de presidio al que se propone lo mismo y además robar? Es evidente que no, y como no es posible suponer en la ley semejante incongruencia y tamaño injusticia, será forzoso dar al inc. 1° del art. 187 la interpretación correcta y castigar de acuerdo con la regla del art. 85 los casos en que tanto el robo como el homicidio han sido provistos y resueltos por los criminales. Esta interpretación que surge del texto y del espíritu de la ley, es, por lo demás, la misma que han dado los tribunales españoles al art. respectivo del Cód. Penal de España, el que es literalmente igual al nuestro.—Véase Viada, suplemento 2°, pág. 352, y suplemento 3°, pág. 362.—Finalmente, esta misma doc-



una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 94, Ser. 4^a.

Asesor de menores—Véase: *Ausente*, núm. 3.

Asientos—Véase: *Libros de comercio*, núm. 8—*Comerciante*, núm. 11.

1^a. **Asuntos comerciales**—Siendo el mandato un acto civil, no es indispensable para la tramitación de asuntos comerciales, que el poder sea conferido ante un registro de esta jurisdicción.—Jur. Com., tom. 8, pág. 118, Ser. 4^a.

Ataque—Véase: *Amenazas*, núm. 1—*Excepción de legítima defensa*, núm. 3—*Agresión*, núm. 1.

1^b. **Atentado con armas**—No siendo posible la acumulación de las penas de arresto y prisión, el hurto solo debe tenerse en cuenta como circunstancia agravante

trina sostiene el Dr. Rivarola, en el siguiente párrafo de su obra. «En el caso de la ley se trata de un delito determinado y resuelto de antemano, el del robo, y de otro delito *incidental* en que quizás ni hayan pensado ó que no hayan resuelto ejecutar los ladrones, el de homicidio. Si el homicidio es resuelto de antemano, como *medio* de ejecutar el robo, habrá que atenerse para la imposición de la pena á la gravedad del mayor que puede ser el de homicidio con pena de muerte.» Las observaciones que hace la minoría de la Cámara sobre la naturaleza compleja del delito previsto por el inc. 1º del art. 187. concordantes con los que contiene el párrafo del Dr. Rivarola, que ha transcrito, las considero perfectamente pertinentes, limitadas como lo hace éste, al caso del artículo, esto es, al homicidio cometido con motivo ú ocasión del robo, pero no á los casos en que se ha resuelto de antemano la ejecución de los dos delitos, ó en que el homicidio es el medio de consumar el robo. En virtud de estas consideraciones, de los hechos probados y de lo que disponen los arts. 85 y 95, inc. 1º del Cód. Pen., mi voto es en el sentido de que se han cometido los delitos de homicidio con alevosía y robo, y que sus autores deben ser condenados á la pena de presidio por tiempo indeterminado, en atención á existir la circunstancia prevista por el inc. 8º del art. 83 del Cód. citado.»

1^a—Véase: verb. *Acto civil*, núm. 2.

1^b—Véase: *Acumulación de penas*, núm. 1.



del atentado con armas á la autoridad.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 295, Ser. 4.

2. **Atentado con armas**—A la autoridad, debe ser penado con dos años de prisión, si el reo era reincidente.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 70, Ser. 4.

3. **Atentado con armas**—A la autoridad, debe ser penado con año y medio de prisión, si existen circunstancias agravantes y atenuantes.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 75, Ser. 4^a.

4. **Atentado con armas**—A la autoridad, con circunstancias atenuantes, debe ser penado con un año de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 258, Ser. 4^a.

5. **Atentado con armas**—Y desacato á la autoridad, debe ser penado con dos años de prisión si el reo era reincidente.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 412, Ser. 4^a.

6. **Atentado con armas**—El atentado contra la autoridad, debe ser castigado con año y medio de prisión, si existen circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 44, Ser. 4^a.

2—De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 235, inc. 1º; 84, inc. 2º; y 88 del Cód. Pen.

3—Se comprobó que el procesado agredió á los gendarmes de policía que trataron de aprehenderlo; el atentado había sido cometido con armas y la pena está establecida por el párrafo 1º del art. 235 del Cód. Pen. Concurría además la circunstancia agravante de la reincidencia—inc. 2º del art. 84;—pero tenía en su favor la atenuante de la ebriedad—art. 83, inc. 1º—y de conformidad con la autorización conferida al magistrado por el art. 52, la pena que correspondía aplicar era la de un año y seis meses de prisión.

4. Se aplicó el minimum de la pena establecida para este delito por el art. 235, inc. 1º del Cód. Pen., porque concurría la circunstancia atenuante de ebriedad.

5—Arts. 234, 235 y 84, inc. 1º del Cód. Pen.

6—Véase el núm. 4.



7. **Atentado con armas**—A la autoridad, agravado con lesiones, debe ser castigado con dos años de prisión si el reo era reincidente.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 64, Serie 4^a.

8. **Atentado con armas**—El atentado con armas á la autoridad, aun cuando resulten lesiones, no puede ser calificado como tentativa de homicidio, en tanto no resulte plenamente justificada la intención de matar.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 352, Ser. 4^a.

9. **Atentado con armas**—A la autoridad, agravado por un desacato anterior, debe ser penado con un año y ocho

7—La calificación legal del hecho, era el de atentado á mano armada contra la autoridad, agravada por las lesiones leves causadas á un vigilante pues por las declaraciones, se demostraba que á consecuencia de un desorden producido en un prostibulo, el encausado que se hallaba en él se puso en fuga montado en un caballo, siendo perseguido por un vigilante, que trataba de prenderlo; y habiendo ocurrido otro agente de policia, al detenerlo éste, consiguió el procesado sacarle el machete con el cual le agredió á golpes, produciéndole heridas contusas que según el informe médico, se curarian en ocho dias. Tales hechos son los que los arts. 235, inc. 1º, y 120, inc. 2º del Cód. Pen., califican respectivamente como atentado con armas contra la autoridad y lesiones corporales. Se alegó la legitima defensa por el reo, la que no se hallaba justificada, ni existian antecedentes que demostrasen la supuesta agresión del vigilante al encausado. En cambio, aparte de la agravante de reiteración, existia también constatado en autos por el informe correspondiente y la propia confesión del reo, la agravante del inc. 19, art. 84, Cód. Pen., debiendo en consecuencia aplicarse la pena establecida en el sumario.

8—El delito caía bajo la sanción de los arts. 234 y 235 del Cód. Penal. Concurrió la circunstancia agravante de alevosia—art. 84, inc. 2º, pues el reo habia obrado á traición.

9—De las constancias del proceso resultaba que el procesado habia cometido dos actos delictuosos: el uno resistiendo á los agentes de policia que lo conducian preso, y ocasionando un tumulto á favor del cual consiguió huir; y el otro haber sacado un cuchillo con el que intentó herir al vigilante que procuraba contenerle en un desórden que causaba en un tramway, 9 meses después de haber huido. El segundo d



meses de prisión, si existen atenuantes.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 49, Ser. 4^a.

1^a. **Atentado sin armas**— Contra la autoridad, debe ser castigado con seis meses de arresto.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 79, Ser. 4^a.

Atentado á la autoridad—Véase: *Disparo de arma de fuego*, núm. 18.

1^b. **Atenuación**—Para que la ofensa ó injuria grave con

estos delitos está previsto y penado por el art. 235 del Cód. Pen.; debiendo tenerse presente la circunstancia de la ebriedad, y que la acción del procesado no produjo lesión alguna.

1^a—Art. 235, inc. 2º del Cód. Pen.

1^b—El art. 97 del Cód. Pen. determina para el homicidio una pena especial y menos grave cuando la víctima misma provocó el acto homicida con ofensas ó injurias ilícitas y graves. Se trata en tal caso de ofensas inmediatas que provoquen el acto, y todo el valor de una escusa semejante consiste en que á la gravedad de la injuria ó la ofensa, concurre la rapidez de la acción sobre la voluntad del agente, en condiciones que no le deje tiempo para que funcione la razón, que por su naturaleza es lenta y fría—Carrara, Parte general, § 326.—Así resulta del texto espreso de aquel artículo, comparándolo con el inc. 4º del artículo 83. Si al acto delictuoso ha precedido provocación ú ofensa de parte del ofendido, será ésta una circunstancia atenuante, pero si tales ofensas son inmediatas y capaces de provocar sin demora el acto homicida, será de aplicarse la pena menos grave prevenida en el art. 97. Ahora bien, en el caso del sumario, la ofensa grave inferida consistió en el adulterio, pero éste no fué la causa que inmediatamente provocó el acto homicida, pues el procesado sabía desde tres ó cuatro semanas antes, que su esposa, de quien estaba separado desde hacía 2 años, vivía en adulterio con la víctima, y la indignación que este hecho le produjo no lo inducía á herir ó matar á su ofensor, y así lo declaró el procesado. Desde luego, la ofensa, por grave que haya sido, no fué la que provocó el acto homicida. El reo cometió el delito porque la víctima lo empujó violentamente, é hizo ademán de sacar armas de la cintura; y no fué otra la causa determinante de su voluntad; esta, pues, no es la ofensa prevenida por el art. 97; y es por esto que no es de aplicarse este artículo y que el delito cometido queda comprendido en el art. 96 del Cód. Pen. Existe la circunstancia consistente en el adul-



que la víctima ha provocado al reo, se puede considerar

terio de la víctima con la esposa del delincuente que debe considerarse como la atenuante prevista en el inc. 4° del art. 83; y que si bien no puede alegarse la legítima defensa, ha habido por lo menos un justo motivo de temor al verle echar mano á la cintura, dadas las condiciones en que ambos se encontraban, y que ésta es una circunstancia que puede considerarse comprendida en el inc. 7° del art. 83. Por estos motivos, el delito debe considerarse comprendido en el inc. 4° del artículo 96, y el procesado debe ser condenado á la pena de tres años de penitenciaría. La ofensa ó injuria grave que autoriza la aplicación del art. 97, Cód. Pen., debe preceder al delito sin dar tiempo al delincuente á reflexionar el acto. El origen del artículo, tomado del Cód. Tejedor, y la explicación que de él se hacía en la nota puesta al pié del mismo, corroboran esta opinión. La pena será de tres años de prisión, decía el art. 197 de ese Cód., si el muerto mismo provocó el acto homicida con ofensas ó injurias ilícitas y graves, ó si, en el momento del hecho el homicida se hallaba en estado de furor sin culpa suya; y sin que hubiese al mismo tiempo, exclusión completa de imputabilidad. El artículo comprendía dos partes, que, en el Cód. actual, han sido separadas: la primera, relativa á las ofensas é injurias ilícitas y graves, ha sido conservada como causa atenuante del homicidio, la segunda, el estado de furor sin culpa del delincuente, proveniente de cualquier otro motivo, ha sido incluida entre las causas generales de la atenuación, dejando de ser especial para el homicidio; pero en ambas partes se requería que las circunstancias mencionadas fuesen concomitantes con el delito, pues es precisamente esa concomitancia la que quita al hecho el carácter de reflexivo y lo coloca entre los producidos por acto primo ó impulso repentino. Si así no fuera, si hubiese transcurrido tiempo bastante para que se enfriase la cólera y la razón recobre su imperio, dice Goyena, y á pesar de esto, el injuriado mata al ofensor, no obra ya por arrebato, sino por venganza, y el homicidio será premeditado—Cód. Pen. Español, núm. 1070.—En el caso que nos ocupa, la declaración del procesado dejaba plena convicción en el ánimo de que no fué la ofensa atroz la que lo impulsó á cometer el hecho; supo la complicidad de la víctima en el adulterio de su esposa, y declaró que pensó pedirle cuenta de su conducta *cuando lo encontrase*, sin que este propósito encerrase el de herirlo ó matarlo. Decía que, viniendo de Zárate, bajó en San Martín para pasar luego á Villa Catalina a fin de cerciorarse de si su mujer continuaba viviendo en compañía de su cómplice, lo que hacía *por simple curiosidad* y por el interés que naturalmente es-



causa de atenuación, debe proceder inmediatamente al delito sin dar tiempo al delincuente para reflexionar el acto.

—Jur. Crim., tom. 7, pág. 249, Ser. 4ª.

Atenuación—Véase: *Injurias*, núm. 4—*Confesión del reo*, núm. 7.

Atestación—Véase: *Escribano secretario*, núm. 3.

Audiencia—Véase: *Tercería*, núm. 1—*Declaración de testigos*, núm. 6.

1. **Ausencia**—No procede la prohibición de ausentarse

perimentaba de conocer la conducta de su esposa y de asegurarse de quién era el que vivía con ella, y fué casualmente que se encontró con el amante. Todo esto demuestra que la magnitud de la ofensa de que era víctima, no fué sin embargo bastante para arrastrarlo á la reparación de la misma. Fué al pedirle explicación de su conducta, que la víctima lo empujó é hizo ademán de sacar armas de la cintura, por lo que el procesado sacó repentinamente un revólver que llevaba en el bolsillo del saco y le descerrajó tres tiros. Así lo había declarado, siendo esa circunstancia el móvil del delito.

1—El auto de la Cámara decía: «Que juntamente con la demanda por cobro de pesos interpuesta, el actor, fundándose en que éste figuraba en la nómina de pasajeros que en el vapor «Magdalena» partían para Europa, solicitó se le impidiera el viaje hasta tanto constituyera opoderado debidamente espensado para representarlo en juicio. Que el Inferior bajo la responsabilidad del postulante, proveyó de conformidad á esta petición, ordenando en consecuencia se librase el correspondiente oficio á la Prefectura marítima á los efectos indicados. Que esta prohibición es estraña á nuestro procedimiento vigente y á la práctica de nuestros tribunales, pues cuando el demandado no compareciere dentro del término del emplazamiento ó abandonase el juicio después de haber comparecido, el art. 433 del Cód. de Proc. previene que será declarado en rebeldía, autorizando en su caso la adopción de determinadas medidas tendentes á asegurar el derecho del actor, entre las cuales no se halla comprendida la decretada por el auto recurrido. Que tampoco está autorizada como medida de precaución y seguridad para garantizar el resultado del juicio, pues para estos fines el Cód. permite el embargo preventivo de los bienes, en las casos enunciados en el art. 443 y sus concordantes.» La Corte ha resuelto en pe-



del país en asunto civil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 68, Ser. 3^a.

2. **Ausencia**—Procede la citación del demandado por edictos, aun cuando la ausencia sea accidental.—Jur. Civil., tom. 12, pág. 424, Ser. 3^a.

Ausencia—Véase: *Testigo*, núm. 1.

1. **Ausente**—Carece de personería para intervenir en la testamentaria el curador especial de un heredero au-

tesiones análogas que cuando el demandado deja apoderado, se procede la prohibición de salir.

2.—El Inferior dijo que: «A pesar de lo que resulta del precedente certificado del secretario, apareciendo del escrito presentado que el demandado tiene domicilio conocido, y no siendo procedente la citación por edictos sino en caso contrario, según lo dispuesto en el art. 80 del Cód. de Proc. y ley 1^a, tít. 7^o, Part. 3^a, no ha lugar á lo pedido.» El Fiscal de las Cámaras sostuvo que debía revocarse esa providencia fundándose en que: «No constaba que el emplazamiento al demandado haya sido hecho en la forma que determina el art. 77, Cód. de Proc., pues en la diligencia respectiva no aparece que requerida la primera vez, se le haya dejado aviso para que espere al día siguiente al actuarlo. Esta omisión me parece que podría dar lugar á que se inutilizara el emplazamiento. Después de esto, resultaba que el demandado no se encontraba en el país, y no se sabe si tiene domicilio fijo en Europa, pues la enunciación de que reside en París en el Gran Hotel, no puede tomarse, como lo observa la parte actora, como una residencia permanente, tratándose de viajes de placer ó por ocupaciones transitorias. Debe, pues, considerarse que no ha habido emplazamiento personal y que se ignora el domicilio actual del demandado, siendo, por consecuencia, procedente la citación por edictos.» La Cámara resolvió la cuestión declarando que el demandado no había sido emplazado personalmente, y que su domicilio actual era ignorado, siendo, por consiguiente, procedente y válida la citación por edictos.

1.—El tribunal de Génova declaró la ausencia de un heredero y le nombró defensor para intervenir en un juicio sucesorio que se tramitaba en esta ciudad de Buenos Aires. No se hizo lugar á que el defensor nombrado en Italia interviniera aquí, porque el art. 569 del Código de Proc. señala, en defecto de tratados que estatuyan sobre casos particulares, las constancias que deben contener las ejecutorias de



sente nombrado por un tribunal extranjero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 127, Ser. 3^a.

2. **Ausente**—La notificación en el domicilio del firmante es válida y produce efectos legales, aún cuando acciden-
paises extranjeros para que tengan fuerza en esta Capital; y la resolución del tribunal extranjero no estaba comprendida en los términos del citado artículo. Por otra parte, se comprende que el tribunal citado accediera á lo solicitado por la esposa del ausente y le nombrara un representante para que interviniera en la testamentaria, dada la esposición que esta hizo á dicho tribunal de que los herederos del ausente residentes en Buenos Aires no podían intervenir en la liquidación y división de la herencia en vista de ignorarse el paradero de un coheredero, por lo cual se dirigieron á ella invitándola á proveer de algún modo á la representación de su esposo para que no sufriera perjuicios en sus intereses. Estas inexactitudes demuestran que la mencionada esposa fué mal informada de lo que disponen nuestras leyes de procedimientos en materia de sucesiones.

2—El actor tenedor de un pagaré no protestado se presentó pidiendo que se citara á los firmantes de dicho pagaré para el reconocimiento de sus firmas á lo que se proveyó de conformidad designando la respectiva audiencia y bajo el apercibimiento de ley. Este auto fué notificado en el domicilio de uno de los demandados. La esposa de éste se presentó diciendo que se había dejado dicha cédula allí y como su esposo se encontraba en el campo lo hacía presente para que se evitase un procedimiento nulo y se hiciese la citación en la forma del art. 78 del Cód. de Proc. Esto no obstante, no habiendo comparecido el citado, se hizo efectivo el apercibimiento dándose por reconocida la firma. Citado de remate, su apoderado opuso en primer lugar la escepción de nulidad de la ejecución, por no haberse hecho la citación para el reconocimiento de la firma por medio de exhorto al juez del lugar donde se encontraba en el momento de la citación, como lo prescribe el art. 78 del Cód. de Proc. La Cámara rechazó la escepción diciendo, que el esecionante no había negado, ni siquiera insinuado, que su domicilio real no fuese el denunciado y donde se le dejaron las cédulas; y por otra parte, la residencia accidental que aseguraba haber tenido en el momento de la citación, no lo había acreditado, pues la única prueba intentada al respecto lo eran las posiciones que fueron absueltas negativamente por el ejecutante. Siendo esto así, es inútil ocuparse de si procedía ó nó el emplazamiento en la forma prescrita por el art. 78 citado, ó en la que se hizo. A estas consideraciones se



talmente se encuentre ausente, y la nulidad de la ejecución por defecto de forma de la notificación debe ser desechada.

—Jur. Com., tomo 1, pág. 114, Ser. 4ª.

3. **Ausentes**—El Ministerio de Menores no tiene personería para intervenir en juicios contra ausentes no declarados incapaces.—Jur. Com., tom. 1, pág. 18, Ser. 4ª.

4. **Ausentes**—No procede la intervención del asesor de menores en los juicios contra ausentes no declarados incapaces.—Jur. Com., tom. 1, pág. 155, Ser. 4ª.

agrega que el ejecutado mientras por una parte decía de nulidad del reconocimiento ficto decretado, lejos de desconocer la autenticidad de su firma, manifiestamente la reconocía en las posiciones que le fueron puestas. Resulta de lo espuesto, que el sumario no espresa con acierto lo que el tribunal resolvió, pues una vez abierta á prueba la excepción de nulidad, no comprobó el ejecutado su ausencia accidental, y es debido á esta falta de prueba que se rechazó la excepción. Si por el contrario el ejecutado hubiese comprobado su ausencia accidental quizá se hubiese decretado la nulidad; pero aun esto es dudoso, pues que el auto dando por reconocida la firma no pudo causar agravio al ejecutado, teniendo en cuenta que la firma fué reconocida espresamente en autos. La notificación de cuya nulidad se reclamaba, tuvo la única consecuencia de dar por reconocida la firma, luego ese efecto cierto producido por la notificación que se arguye de nulidad, no le causa agravio. Otro sería el caso si reconocida la firma y preparada la vía ejecutiva se le citase al ejecutado de remate en su domicilio hallándose accidentalmente ausente.

3. Esta cuestión ha sido resuelta antes de ahora, en un sentido contrario al del sumario, por ambas Cámaras. Hemos sostenido siempre que aquella jurisprudencia no consultaba correctamente los principios que rigen en el caso. Y es con verdadera satisfacción que vemos después de años de lucha la consagración de nuestra doctrina. En contra del sumario puede verse: Inst., tom. 1º, verb. *Ausente*, núm. 213. En el tom. 2º, verb. *Ausente*, núm. 2, impugnamos la antigua jurisprudencia de acuerdo con lo establecido ahora en el sumario. Hoy podemos decir que la jur. aceptada es la que sienta el sumario pues ella ya ha sido establecida en el caso del Banco Italiano y Meiniers hermanos y Massiré, resuelto en 28 de Noviembre de 1892.

4. Véase nota precedente.



5. Ausentes—La nulidad del procedimiento fundada

5—Ignorándose el domicilio del deudor, á pedido del ejecutante fué aquel citado por edictos para el reconocimiento de la firma en la forma prescripta por el art. 468 del Cód. de Proc., y no habiendo comparecido dentro del término del emplazamiento se le dió por reconocido el documento de la obligación. Decretada la efectividad del embargo preventivo trabado, se le hizo saber al deudor por edictos, bajo apercibimiento de nombrársele defensor, conforme á lo establecido en el art. 471, *in fine*; y citado de remate, el señor defensor de ausentes opuso la escepción de nulidad de todo lo actuado, porque según su criterio jurídico la citación para el reconocimiento de la firma debió ser hecha con arreglo á lo que en el art. 80 del precitado Cód. se establece para el juicio ordinario, y sin el apercibimiento espresamente contenido en el art. 468 del mismo, correspondiente á la reglamentación del juicio ejecutivo. La citación para el reconocimiento de la firma del documento fué hecha con arreglo á lo prescripto en los arts. 468 y 77 y siguientes del Cód. de Proc. y bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer se tendría por reconocido el documento. Es cierto que el art. 80 del Cód. citado establece, que si vencido el término de los edictos no compareciese el citado se le nombrará defensor que lo represente en el juicio, pero esta disposición no es aplicable al caso presente por cuanto ella se refiere únicamente al juicio ordinario y no al juicio ejecutivo, cuyas disposiciones son especiales y se detallan en el título correspondiente. El art. 468 aplicable al caso, establece claramente la escepción á la regla del juicio ordinario, estatuyendo que el apercibimiento en el caso de no comparecer el citado es de darle por reconocida la firma, pero de ninguna manera de nombrársele defensor. La razón es obvia. Las disposiciones del juicio ejecutivo son especiales. El procedimiento es sumario, porque como dice Caravantes, por él se trata de llevar á efecto por embargo y venta de bienes el cobro de créditos que constan por algún título que tiene fuerza suficiente para constituir por sí mismo plena probanza. No se dirige á declarar derechos dudosos ó controvertidos sino á llevar á efecto los que se hallan reconocidos por actos ó títulos de tal fuerza, que constituyan una vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para que sea desde luego atendido. Ahora bien, la oportunidad de nombrarle defensor al ejecutado está espresamente establecida por una disposición de la ley de procedimientos el art. 471: es decir, cuando verificado el embargo sin la presencia del ejecutado se ignorase su domicilio. El inc. del art. recordado dice testualmente. El embargo se practicará



en la falta de nombramiento de defensor de ausentes

aun cuando el deudor no se halle presente. En este caso se le hará saber dentro de los tres días siguientes al de la traba; y en caso de ignorarse su domicilio se le nombrará defensor previa citación y por edictos durante tres días. ¿Qué objeto tendría el nombramiento del defensor en la oportunidad pretendida por el defensor de ausentes? Ninguno absolutamente, porque el reconocimiento de la firma, es un acto personal; porque el defensor no podría reconocerla por la razón sencilla de que no la conoce. Su manifestación no podría ser otra sino ésta «ignoro si es la firma del ejecutado» vendríamos entónces á desnaturalizar por completo el procedimiento de este juicio porque el ejecutante no tendría otra vía que ordinarizar el juicio ejecutivo probando por medio del cotejo que aquella es la firma del ejecutado. Pero eso también sería absurdo porque no conociendo el defensor la firma del ausente no le sería posible ponerse de acuerdo para hallar otra firma que sirviera de base al cotejo. Quiere decir entonces, que aún en la hipótesis de que el juicio se siguiera por la vía ordinaria, el actor tendría que ser vencido por insuficiencia de la prueba, pues tratándose de un ausente, el medio probatorio que le proporciona el art. 125 del Cód. de Proc. es ilusorio, porque la citación es personal—art. 127—y el defensor tiene también que ignorar si son ó no ciertas las posiciones que se le pongan. Estas son las consecuencias á que lógicamente llegaríamos si se admitiera como procedente la defensa hecha. También debe tenerse presente que en el juicio ejecutivo la citación de remate es equivalente al emplazamiento en el ordinario. Llenado este requisito recién llega la oportunidad para que el ejecutado pueda defenderse oponiendo las escepciones autorizadas por la ley. Antes de ese momento no tiene intervención en el juicio, sino al solo objeto del reconocimiento de la firma del documento que sirve de base para preparar la acción ejecutiva, ó dar bienes á embargo—arts. 466 y 71 del Cód. de Proc.—Ninguno de estos objetos puede llenarse con la intervención de un defensor, no puede reconocer la firma, no puede dar bienes á embargo. Su intervención en la oportunidad que se pretendía era contraria á la ley misma, cuyo objeto es evitar á los acreedores que se hallen en este caso, los dispendios y dilaciones de la vía ordinaria y las molestias que le ocasionarían los deudores morosos y el tener que distraerse innecesariamente del desempeño de sus respectivos deberes y obligaciones.—Ley 1ª, tit. 28, lib. 2º de la N. R. citada por Caravantes, pág. 267, tom. 3º.—¿El hecho de haberse dado por reconocida la firma del ejecutado, citado por edictos, por ignorarse su domicilio, sin nombrarle préviamente defensor, vicia de



para el reconocimiento de la firma, debe ser rechazada.

—Jur. Com., tom. 8, págs. 109 y 371, Ser. 4^a.

nulidad el procedimiento ejecutivo? El art. 466, Cód. de Proc., autoriza á preparar la acción ejecutiva pidiendo que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traen aparejada ejecución, y el art. 468 dispone que la citación del demandado para efectuar el reconocimiento, se hará en la forma prescrita en los arts. 77 y siguientes y *bajo apercibimiento de que en caso de no comparecer se tendrá por reconocido* el documento, agregando, que no compareciendo, ni mostrando justo motivo, para ello, *se hará efectivo inescusablemente* el apercibimiento, y se procederá como si el documento hubiera sido reconocido por el deudor en persona. Como se ve el art. 468 manda observar en la citación para el reconocimiento de la firma, las formas que en los arts. 77 y siguientes se establecen para la citación y emplazamiento del demandado en juicio ordinario, pero cuida de fijar una sanción especial para el caso de la no comparecencia, sanción que debe enunciarse en la citación, con la calidad de apercibimiento al citado. Ahora bien, como la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico—art. 973, Cód. Civ.—la forma de la citación á que se refiere el art. 468 y los de su referencia, no pueden ser otras sino las solemnidades y medios de practicarlas, independientemente de las consecuencias ó efectos que ella debe producir, porque esto no atañe ya á la forma, y como los arts. 77 y siguientes sólo establecen tres modos de verificar la citación, á saber: por cédula, si el citado tiene su domicilio en el lugar en que se le demanda, por orden ó exhorto, si se encuentra fuera de él, y por edictos si se ignora su domicilio ó se trata de personas inciertas; de ahí que la forma á que el art. 468 se refiere, no puede ser sino á la cédula, orden, exhorto ó edicto mencionado, y que en caso de no comparecer, el artículo debe cumplirse, haciéndose efectivo el apercibimiento, inescusablemente como dice la ley, sin que pueda argüirse que la citación puede no haber llegado á conocimiento del citado, porque cuando la ley manda que una citación, emplazamiento ó notificación se haga por edictos, presume por lo mismo, que una vez hecha ha llegado á conocimiento de la persona ó personas á quienes se dirige, y le atribuye, en consecuencia, los efectos que considera justos. En el caso especial del art. 468, esa presunción fluye claramente de la redacción, desde que prevé que el citado—por edictos, cédula ó exhorto,—muestre justo motivo para no comparecer, lo cual no podría suceder si no se presumiese que los edictos han llegado á su conocimiento.



6. Ausente—En las ejecuciones contra ausentes, el defensor de oficio solo debe intervenir desde la citación de remate.—Jur. Com., tom. 8, págs. 371 y 270, Ser. 4^a.

Ausente—Véase: *Excepción de nulidad*, núm. 1—*Notificación personal*, núm. 2—*Testigo*, núm. 4.

1. Ausente con presunción de fallecimiento—La declaración de ausente con presunción de fallecimiento, es de

Otra razón más hay para aplicar en ese caso la sanción del art. 468, y es que ella esluye la del art. 80, y entre dos disposiciones, una especial para el juicio ejecutivo, y otra general para la citación y emplazamiento de todos los juicios, debe estarse á la especial cuando de preparar la acción ejecutiva se trate; y decimos que una y otra disposición se excluyen, porque desde que la citación debe hacerse, según el art. 468, bajo apercibimiento de darse por reconocida la firma del citado, y el apercibimiento hacerse inescusablemente efectivo, si éste no comparece, ó no muestra justo motivo para no comparecer, no se cumplirá este mandato imperativo de la ley si en vez de dar por reconocido el documento, se nombrara defensor para entenderse con él la misma diligencia. Finalmente milita otra razón en pró de la aplicación de la ley, según su letra en este caso. La citación y emplazamiento á que se refiere el art. 80, tiene por objeto llamar al citado para que comparezca á estar en juicio, y esto puede hacerse por sí ó por otro, mientras que la citación del art. 468 se dirige á la realización de un acto personal, que no puede cumplirse sino por el mismo citado ó por su representante especialmente autorizado al efecto, porque el reconocimiento de la firma, importa confesión de la deuda—art. 1881, inc. 17, Cód. Civ. 136 de Proc.—y tal autorización no la puede tener el defensor nombrado de oficio.

6—Véase nota precedente.

1—El ausente habia sido tomado como cautivo por los indios siendo menor de edad. Estas circunstancias hicieron que el juez dictase la siguiente providencia que fué confirmada por sus fundamentos. El decía: «Y considerando: Que al verificar el estudio de estos autos para acordar providencia, se apercibe el Juzgado que no desconociéndose en el escrito, como se ha afirmado del espediente agregado, que el heredero ausente don Isidro Ramirez fuera tomado cautivo por los indios durante su minoridad, de ahí se sigue que al tiempo de la desaparición, su domicilio no puede ser otro que el de la familia, si se atiende á que los hijos que están bajo la patria potestad no pueden abando-



competencia del juez del último domicilio del ausente.—
Jur. Civ., tom. 10, pág. 80, Ser. 3^a.

1. **Autenticación**—Los que no son partes en el juicio solo pueden ser representados como testigos aún para la

narlo, sin el consentimiento de los padres, y tienen el de sus representantes—art. 90, Cód. Civ.—Que si bien no existe la partida de defunción del padre del ausente, con la que se evidenciaría donde estaba domiciliado cuando ocurrió su fallecimiento, de las diligencias del inventario y del testamento corriente en el expediente agregado, se desprende que el hecho tuvo lugar en el partido de San Isidro. Que confesada por la madre y los demás hermanos, la minoridad del ausente, y no teniendo otro domicilio que la casa paterna como se ha establecido, ni pudiendo ser objeto de alteración por la residencia involuntaria, la ausencia con presunción de fallecimiento, sobre que versa este juicio, no es de la competencia del proveyente, por cuanto con arreglo al precepto consignado por el art. 113 del Cód. Civ., debe justificarse ante el juez del ausente. Que además, según la jurisdicción conferida a los tribunales por las leyes de procedimiento y orgánica en el caso *sub-judice* es improrrogable. Por esto, el infrascripto se declara sin jurisdicción para continuar en el conocimiento de estos autos, que se archivarán, previo desglose del título y del poder que se presentaron; y devuélvase al archivo el expediente agregado.»

1.—Se pidió que el cajero de un banco compareciera á reconocer su firma en un juicio seguido por el Banco del que era empleado. Solo pudo ser presentado en la estación de prueba como testigo por no ser parte en el juicio. Pero nosotros preguntamos ¿cuáles son los documentos auténticos? Podemos contestar con Reus, que tales son las escrituras públicas y solemnes—tom. 2^o, pág. 97, Comentario al art. 608 de la ley española igual al art. 147 de nuestro Cód.—Este autor comentando dicho art. dice: «Hay que tener en cuenta que no comprende más documento público que las escrituras matrices si la firma que hay que cotejar es la del otorgante sin que por esta extensión pueda esa regla aplicarse á otras firmas que constan en otros documentos públicos respecto á los cuales había de resolverse la cuestión, viendo si hay ó no hay conformidad de partes, porque el art. tiene un carácter taxativo que no admite extensión de ninguna clase. Ahora bien, ¿las firmas de los documentos deben considerarse como si estuviesen consignadas en la matriz de una escritura pública? Es evidente que no. El art. 979 del Cód. Civ. dice, que son instrumentos públicos las actas judiciales



autenticación de una firma.—Jur. Com., tom. 6, página 278, Ser. 4^a.

1. **Autenticidad**—El cesionario de un crédito por instrumento privado, carece de personería para gestionar cobros, en tanto no autentique las respectivas firmas de los cesionarios.—Jur. Civ., tom 9, pág. 439, Ser. 3^a.

2. **Autenticidad**—Las firmas de un expediente judicial hechas en los expedientes por los respectivos escribanos y firmadas por las partes. Pero hay que ver que esos *instrumentos* públicos no son *escrituras* públicas, y que el espíritu de la ley sienta el principio de que la determinación del art. 147 es taxativa. Dado el caso de que se admitiese, como medio de comparación, las firmas de los expedientes, sería necesario que solo se permitiera ese medio probatorio cuando la firma está puesta al pié de una acta judicial, estendida por el mismo secretario.

1.—El actor se presentó diciendo, que era cesionario de varios acreedores de una sucesión, que era la demandada por él, y acompañó los instrumentos privados de cesión pidiendo que los créditos cedidos fuesen declarados de legítimo abono. La sucesión dijo que «los créditos de que se dice cesionario el actor, aunque no consta su autenticidad, se presentan para justificar la cesión.» Esto bastó para que el Juez declarase en su sentencia que «aunque la señora viuda no ha hecho capítulo especial de su defensa, de la falta de personería del actor, al contestar la demanda ha manifestado no revestir forma auténtica la cesión invocada por el demandante; insistiendo sobre el particular, el Juzgado se ve obligado á pronunciarse también sobre este punto, no solo por haber menores interesados, en cuyo nombre también se contesta la demanda, sino asimismo porque no existiendo fórmula alguna sacramental para alegar las escepciones que se oponen á la demanda, basta su enunciación para que el juez las considere y resuelva. Los documentos no son efectivamente más que instrumentos privados, que han debido ser autenticados por el actor durante el término de prueba, sin que lo hayan sido. Carecen por consiguiente de fuerza probatoria para justificar la cesión que en ellos se enuncia, desde que no se ha comprobado que las firmas que los suscriben sean auténticas.» Véase: verb. *Cesionario de un crédito*.

2.—Del estudio de esta resolución resulta que las firmas puestas en los expedientes son auténticas porque sí. El fallo no da el porqué de esa aseveración, no trae ningún fundamento legal. Se limitó á confirmar, por sus fundamentos, el auto de 1^a Inst., que decía: «Que la parte



se conceptúan auténticas y pueden servir de base para el cotejo pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

3. **Autenticidad**—Los documentos privados cuya autenticidad es discutida, no puede servir para el cotejo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

4. **Autenticidad**—De la firma de un documento privado, debe justificarse por información sumaria para que proceda el embargo preventivo, si el crédito es de mayor cuantía.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 397, Ser. 3ª.

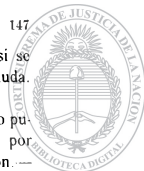
5. **Autenticidad**—La escepción de falsedad fundada en

demandada al impugnar la compulsa de las firmas puestas en los expedientes consignados en la tercera parte del acta del juicio verbal, ha interpretado mal la disposición del art. 147 del Cód. de Proc., que solo se limita á decir que si los interesados no pudieran ponerse de acuerdo sobre los documentos que deban cotejarse, deberán tenerse como indubitables las firmas consignadas en documentos auténticos, etc., entre los que, á no dudarlo, se encuentran los expedientes que tramiten ó hayan tramitado ante un funcionario público, como lo son los en que la demandante pide el cotejo de firmas.»

3—Véase nota precedente.

4—La parte hizo que los testigos que abonaban las firmas suscribiesen con él un escrito presentado, y pidió que con la ratificación se tuviese por bastante justificada la autenticidad á los efectos de un embargo preventivo. No se hizo lugar por cuanto el inc. 2º del art. 443 del Cód. de Proc. establece: que para que proceda el embargo preventivo, la existencia del crédito reclamado debe encontrarse acreditada por instrumento público ó privado atribuido al deudor, debiendo en este último caso justificarse la autenticidad de la firma por información sumaria de dos testigos á lo menos, cuando se trate de una suma mayor de docientos pesos; la simple información producida en la forma especial, no era entonces bastante, pues que el documento consagraba una obligación muy superior á la que determina el inciso citado.

5—La escepción deducida en la ejecución fué la de nulidad por falsedad de protesto, sin que se desconociera la verdad del documento á la orden, con el que se ejecutaba. El protesto solo tiene por objeto conservar las acciones cambiarias de la letra, no su autenticidad, y resultando



ser falsa la diligencia de protesto es improcedente si se opone á un pagaré cuya autenticidad no se pone en duda.

—Jur. Com., tom. 4, pág. 387, Ser. 4^a.

6. **Autenticidad**—Los decretos del Poder Ejecutivo publicados en el «Boletín Oficial», deben ser tenidos por auténticos y forman prueba después de su publicación. —

Jur. Com., tom. 7, pág. 84, Ser. 4^a.

7. **Autenticidad**—Roconocida la de la firma del pagaré, debe rechazarse la nulidad del procedimiento que se funda en defecto de la notificación para el reconocimiento. —Jur. Com., tom. 8, pág. 96, Ser. 4^a.

8. **Autenticidad**—La nulidad del procedimiento fundada en vicios de la notificación para el reconocimiento, debe ser desechada, si no se desconoce la autenticidad de la firma.—Jur. Com., tom. 8, pág. 60, Ser. 4^a.

que no se desconoció ésta en el escrito de oposición debta hacerse lugar á la ejecución entablada, pues la fuerza ejecutiva del documento resulta del reconocimiento mismo que de él se hace, aun cuando el protesto fuese nulo, pues ese documento se encuentra en el caso del inciso 2º del art. 465, Cód. de Proc. Y por otra parte, se trataba de un pagaré á la orden, á los que le son aplicables las disposiciones sobre letras de cambio, entre ellas la que se encuentra en el art. 676 del Cód. de Com., la excepción opuesta no estaba comprendida en ese artículo.

6—Así lo establece el art. 4º del Acuerdo del Gob. Nac. de 2 de Marzo de 1892.

7—Porque esa notificación tiene por único objeto obtener el reconocimiento de la firma del documento que motiva la ejecución, y citado de remate el ejecutado en persona no negó la autenticidad de su firma, ni opuso á este respecto excepción alguna cuando el asunto llegó al estado de sentenciarse de remate.

8—Porque aun cuando dicha notificación fuera nula, ello nada importaría, desde que el efecto de esa nulidad sería la falta de reconocimiento de los documentos, y esa firma se encontraba implícitamente reconocida por el deudor al no oponer todas las excepciones legales, una de las cuales es la de falsedad.



9. **Autenticidad**—Los documentos privados emanados de terceros carecen de valor legal, si no se justifica la autenticidad.—Jur. Com., tom. 9, pág. 357, Ser. 4^a.

Autenticidad—Véase: *Boleto de compraventa*, núms. 8, 14 y 16—*Embargo preventivo*, núms. 4 y 7—*Defraudación*, núm. 36—*Cuenta pasada*, núm. 1—*Inhibición*, número 2—*Escepción de falsedad*, núm. 6—*Firma*, núms. 2 y 5—*Firma reconocida*, núm. 2—*Instrumento firmado a ruego*, núm. 1—*Acción de falsedad*, núm. 2.

1. **Auto**—El denunciante tiene derecho para apelar de todos los autos dictados en la fecha en que asuma el carácter de acusador, pues para él no hacen cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

Auto—Véase: *Detención*, núm. 1—*Recurso de apelación*, núm. 1—*Cédula equivocada*, núm. 1—*Demanda ordinaria*, núm. 1—*Cosa juzgada*, núm. 3—*Bienes del concurso*, núm. 1.

Auto apelable—Véase: *Apelación*, núm. 4—*Apelable*, núm. 1—*Prisión preventiva*, núm. 5—*Prueba*, núm. 8.

Auto aprobatorio—Véase: *Información supletoria*, número 4.

Auto consentido—Véase: *Documentos agregados*, número 1.

9—Estos documentos no pueden ser prueba suficiente porque aun en el supuesto de que sirvieran como medio probatorio, nada comprobarían, desde que para ello sería necesario que el firmante de un documento se ratificase ante el Juzgado, pues de lo contrario sería muy fácil producir prueba trayendo a los juicios documentos firmados por una tercera persona que tal vez no haya existido; el reconocimiento por sus otorgantes es indispensable para que sirvan de prueba los documentos privados cuya autenticidad se desconoce por aquel contra quien se quiere hacer valer—art. 1026 del Cód. Civ.

1—Véase: verb. *Acusador*, núm. 1.



1^a. **Auto inapelable**—Lo es el que corre traslado por su orden, de la prueba de la excepción.—Jur. Com., tom. 9, pág. 342, Ser. 4^a.

2. **Auto inapelable**—Que de conformidad con lo solicitado por los acreedores levanta la quiebra, no causa agravio si el opositor firmó la petición.—Jur. Com., tom. 9, pág. 347, Ser. 4^a.

Auto inapelable—Véase: *Excepciones*, núm. 10—*Inapelable*, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7—*Prueba*, núm. 8—*Término prorrogado*, núm. 1—*Espediente*, núm. 5.

Auto judicial—Véase: *Excepción de inhabilidad*, número 10.

Auto de prisión preventiva—Véase: *Escusación*, núm. 3—*Delito*, núm. 21—*Hechos denunciados*, núm. 1.

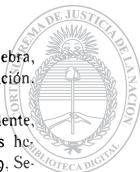
Auto de prueba—Véase: *Apelación*, núm. 2—*Prueba*, núm. 8.

1^b. **Auto de quiebra**—La presentación de un escrito del

1^a—Se trataba de un juicio ejecutivo. Después de producida y agregada la prueba mandóse correr un nuevo traslado por su orden—artículos 495 y 496 del Cód. de Proc.—Esta providencia no es apelable—art. 505 del Cód. de Proc.

2—Siendo el auto dictado de conformidad con la petición del mismo que después se opone, es indudable que no puede causarle agravio, y por consiguiente no hay base legal para el recurso, como lo tiene establecido la Cámara en otro caso. Véase: tom. 1^o, pág. 242, Ser. 1^a, Jur. Com.

1^b—El escrito presentado pidiendo la revocación del auto de quiebra y diciendo de nulidad del emplazamiento por no haber sido hecho en el domicilio legal ni natural del peticionante, fué presentado dentro del término del art. 1389 del Cód. de Com., y fué desestimado por motivo de que el fallido que lo presentaba no se había constituido en arresto y que por esto no podía ser oído. Aun en la hipótesis de que los declarados fallidos no debiesen ser oídos hasta que no se constituyan en arresto, tal situación no influía para el caso presente, porque la cuestión á resolver previamente era la de si el término para reclamar del auto de quiebra quedó ó no interrumpido por tal presentación. Por



fallido pidiendo el levantamiento del auto de quiebra, interrumpe el término que la ley fija para la revocación.

—Jur. Com., tom. 5, pág. 128, Ser. 4ª.

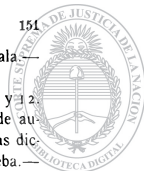
2. **Auto de quiebra**—Su revocación es improcedente, en tanto no se alegue y justifique la falsedad de los hechos en que se funda.—Jur. Com., tom. 6, pág. 249, Serie 4ª.

3. **Auto de quiebra**—El auto de quiebra solo puede ser levantado, cumplidas que sean las formalidades que de termi-

analogía de lo dispuesto en el art. 3986 del Cód. Civ., debe decirse que quedo interrumpido; pero como el efecto de toda interrupción de la prescripción, es inutilizar el tiempo corrido y volver á contarse el subsiguiente, debe averiguarse si el tiempo empleado en las diligencias de fianza carcelaria, suspendió el término para pedir la revocatoria de quiebra. Sobre este punto está establecido por el art. 3980, Cód. Civ., que cuando por razón de dificultades ó imposibilidad de hecho, se hubiese impedido temporalmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados á librar al acreedor ó al depositario de las consecuencias de la prescripción cumplida durante el procedimiento. Esta disposición es aplicable al caso porque el obstáculo al ejercicio de la acción resultó de los términos mismos del auto en que el precitado escrito se rechazaba, desde que él establecía, que mientras no fuese puesto en prisión ó fuese *escarcelado bajo fianza*, no podía ser oído el quebrado. Desde luego, el tiempo empleado en gestionar la fianza para poder ser oído, paralizaba la prescripción de la acción para pedir la revocación del auto de quiebra. Después de resuelta la aceptación del fiador, se presentó el fallido inmediatamente solicitando otra vez la revocación del auto de quiebra, y por tanto debe resolverse sobre el fondo del escrito cuyos pedimentos se reproducían.

2 —Art. 1398 del Cód. de Com.

3—La cesación de pagos es el hecho generador de la quiebra—artículo 1379, Cód. de Com.—Producido ese hecho, todo comerciante está obligado á manifestarlo, dentro de tres días, á la autoridad judicial —art. 1389—cumpliendo esa disposición, el fallido presentó el escrito haciendo la exposición de las causas de la quiebra, acompañando el balance general de su negocio, como lo establece el art. 1390. El Juzgado proveyó declarando el estado de quiebra; desde ese momento el fallido está incapacitado porque ha quedado separado é inhibido, por



na el Código y en la oportunidad que el mismo señala.—
Jur. Com., tom. 10, pág. 238, Ser. 4^a.

Auto de quiebra—Véase: *Quiebra*, núms. 2, 3, 5 y 12.

1. **Autos**—Dictada y consentida la providencia de autos, no puede agregarse testimonio de las sentencias dictadas después del vencimiento del término de prueba.—
Jur. Com., tom. 4, pág. 193, Ser. 4^a.

Autos—Véase: *Recusación con causa*, núm. 2—*Destimimiento del acusador*, núm. 1—*Sobreseimiento definitivo*, núm. 9—*Delito*, núm. 22—*Carta misiva*, núm. 1—*De oficio*, núm. 7—*Alegato*, núm. 1—*Costas*, núm. 49.

Autos principales—Véase: *Concurso*, núm. 5.

Autos testamentarios—Véase: *Propiedad embargada*, núm. 1.

Autor—Véase: *Publicación acusada*, núm. 2—*Defraudación*, núm. 33—*Herida*, núms. 4 y 5—*Asesinato*, número 1—*Acto ilícito*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, número 35.

Autor de un robo—Véase: *Víctima*, núm. 1—*Encubridor*, núms. 2, 3, 5, 7 y 8.

expresa disposición de la ley, de la administración de sus bienes. La declaración de la quiebra crea la presunción de la insolvencia de la masa, la liquidación del activo y pasivo de la quiebra, debe ejecutarse con estricta sujeción á los preceptos que contiene el Lib. 4º del Cód. de Com. Después de declarada la quiebra se presentó el fallido diciendo que había hecho un arreglo con sus acreedores, invocando esta razón como único fundamento para solicitar el levantamiento del auto de quiebra. Ese arreglo no pudo celebrarse sino de conformidad á las reglas de procedimiento que rigen la materia, y carece totalmente de eficacia jurídica.

1—Porque sería contrario al espíritu del art. 118 del Cód. de Proc. Los arts. 214 y 215 del Cód. de Proc. establecen que desde que se llame «autos» más prueba, salvo la que el juez creyese oportuna para mejor proveer.



Autoridad—Véase: *Atentado con armas*, núms. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8—*Atentado sin armas*, núm. 1—*Desacato á la autoridad*, núms. 1 y siguientes—*Disparo con arma de fuego*, núms. 14 y 18—*Abuso de autoridad*, núm. 4—*Juez*, núm. 2—*Conforme*, núm. 1.

Autorización—Véase: *Defraudación*, núm. 12.

1^a. **Aval**—No puede considerarse así el documento de garantía de fecha anterior á la letra, y en consecuencia no puede fundar un juicio ejecutivo.—Jur. Com., tom. 2. pág. 169, Ser. 4^a.

Aval—Véase: *Letra de cambio*, núm. 2—*Escepción de caducidad*, núm. 4—*Pagaré á la orden*, núm. 2—*Protesto*, núm. 5.

1^b. **Avalista**—La falta de protesto del pagaré y consiguiente aviso al avalista, hace procedente la escepción la caducidad.—Jur. Com., tom. 10, pág. 127, Ser. 4^a.

Aviso—Véase: *Pagaré á la orden*, núm. 2—*Escepción de caducidad*, núms. 4 y 5—*Confesión del reo*, núm. 7—*Avalista*, núm. 1.

1^c. **Avisos**—Justificada su publicación en dos diarios

1^a—Porque teniendo por objeto, esta clase de documentos, garantir á su vencimiento el pago de una letra de cambio—art. 679, Cód. de Comercio—su otorgamiento presupone la existencia de ésta. Dicho documento por sí solo, considerado como una obligación completamente independiente, tampoco autoriza la acción ejecutiva.

1^b—Con arreglo al art. 683 del Cod. de Com., este efecto se produce toda vez que el tenedor omite dar aviso al avalista del protesto por falta de pago, lo que supone que si se ha omitido el protesto mismo, la pérdida de las acciones deberá producirse con mayor razón. Esta consecuencia implícita de la disposición citada está corroborada por el inc. 2^o del art. 666, según el cual el tenedor solo conserva acción contra el aceptante cuando no protesta la letra por falta de pago.

1^c—Se dijo que los avisos debieron publicarse por quince días y que habiéndose publicado tan solo por diez, el remate era nulo, como una

por diez veces, debe aprobarse el remate judicial.—Jur. Com., tom. 6, pág. 273, Ser. 4^a.

.....
consecuencia de la falta de publicación por el término legal. El art. 313 del Cód. de Proc., solo exige la publicación por diez días en los diarios. El término de quince días que señala es tan solo para la publicación que debe hacerse por edictos que se fijan en las puertas de las escribanías y sitios públicos de costumbre.





1. **Balance**—La verificación del balance presentado para fundar el pedido de moratorias, debe ser hecha por los comerciantes nombrados y no por un contador judicial.—Jur. Com., tom. 2, pág. 122, Ser. 4^a.

2. **Balance**—Los dependientes de comercio que ade-

1—Los interventores nombrados al pedir la designación de un contador para verificar el balance, no manifestaron que tropezaran con dificultades para desempeñar su cometido. El Juez de 1^a Inst. nombró un contador á petición de los interventores: la Cámara revocó la providencia fundándose en que, el art. 1587 del Cód. de Com. dispone que cuando se soliciten moratorias, el Juzgado nombre dos acreedores para que verifiquen la exactitud del balance presentado, en vista de los libros y papeles que el deudor deberá exhibirles, y que á esta operación de verificación se limita la misión de los acreedores. Ese trabajo debe practicarse por los mismos acreedores nombrados y bajo su responsabilidad, y no por un contador de nombramiento judicial que acepte el cargo en forma legal.

2—Los señores Alejandro y Victor Delaye y D. Miguel Costa, constituyeron por contrato público una sociedad colectiva que bajo la razón social de A. Delaye y C.^a, empezó á girar en esta plaza el 1^o de Febrero de 1885 en el ramo de importación de mercaderías. Dos días antes de empezar el giro social, ofrecen á sus dependientes Luis Clerc y Pedro Sansat, además del sueldo convenido, un interés ó recompensa en la forma consignada en el dorso de unas tarjetas presentadas, cuya traducción dice así: «A partir del 1^o de Febrero de 1885 el señor Clerc tiene 10 % de interés sobre los beneficios de la nueva sociedad A. Delaye y C.^a» D. José María Mesa entró también como depen-



más del sueldo son retribuidos con una parte de las uti-

diente á sueldo solamente en Enero de 1887, y cinco meses después se le acordó el 2 % de interés. Dichos dependientes salieron de la casa después de vencido el contrato social y año y medio después demandaron á sus patrones A. Delaye y C.^a, para que éstos incluyan en las cuentas correspondientes á cada uno de ellos la parte de utilidades que debían corresponderles, en virtud de la promesa antes referida en los beneficios, que según afirmaban obtuvieron los demandados en los negocios de varias casas de las cuales habían sido indebidamente escludos. Los demandados A. Delaye y C.^a, reconocían ser cierto que ofrecieron á los demandantes el interés á que se referían las tarjetas y que sostuvieron haber cumplido esa obligación que espontáneamente se impusieron, dando á sus referidos dependientes la porción de utilidades que por tal título les correspondía, y que se les acreditó en el respectivo haber de sus cuentas: que solo á esas utilidades tenían derecho los actores, pues nunca fué su mente ofrecerles un interés sobre operaciones ó negocios extraños al ramo de comercio estipulado en el contrato social, y mucho menos hacer á sus dependientes socios *totorum bonorum* como lo pretendían, por cuya razón carecen éstos de todo derecho para reclamar participación alguna en las utilidades de los negocios llevados á cabo con las demás casas ya formadas mediante capitales suministrados por aquellos, y cuyas utilidades se habían, por lo mismo, anotado á cuenta de capital; y que las utilidades obtenidas de una de las casas provenían de un interés dado por esta casa al socio D. Alejandro Delaye por la gerencia que de ella ejerció durante algún tiempo, por cuya razón dichas utilidades se acreditaron exclusivamente en el haber de dicho socio. Se ve pues, que mientras los demandantes sostienen que el interés que se les ofreció fué sobre todos los negocios de la sociedad A. Delaye y C.^a, de cualquier género que fuesen y en cualquier parte que se realizaran, los demandados afirman que solamente ofrecieron interés sobre las ventas de mercaderías de importación que formaban el giro ó ramo de comercio de la casa, según el contrato, y que, por lo tanto, á esto solo debe limitarse dicho interés. Y así la cuestión queda reducida á determinar cuál es el alcance que corresponde dar á la promesa según los términos de la misma y la intención de las partes al hacerla y aceptarla. Desde luego, de los términos empleados por los demandados en las tarjetas, no resulta que el interés ofrecido fuese sobre todos los negocios de la sociedad cualquiera que fuese la clase y lugar en que se realizasen como pretenden los actores, sino simplemente sobre los beneficios que la sociedad obtuviera, ¿en qué clase de negocios? en los únicos que po-



lidades, solo tienen derecho á las que según balance re-

dian ser objeto de la misma, según el contrato social, es decir, sobre la importación de mercaderías á esta ciudad, lugar designado en el mismo contrato para las operaciones sociales. Si de los términos en que está concebida la oferta, no puede deducirse legalmente la pretensión de los actores, que no han presentado aceptación escrita de ella, concebidos en términos distintos y que abonen el derecho que invocan, menos puede serles favorable una interpretación fundada en la intención presunta de las partes en el acto de hacerse y aceptarse tal ofrecimiento de interés. Por lo que hace á los demandados, ellos sostienen que no tuvieron otra intención que la de ofrecer á sus dependientes interés sobre las utilidades y beneficios que la casa reportase de los negocios que formaban su giro convenido: la introducción y venta de mercaderías. Y es lógico que así fuese, pues si acababa de convenirse que solo á eso se dedicaría la casa y que era prohibido emplear la firma social en todo otro negocio extraño á dicho giro, ¿cómo suponer que principiaron por ofrecer interés sobre negocios que no se pensaba realizar? Y si esa debió ser racionalmente la intención y el alcance de dicha oferta, ¿cómo creer que los actores tuvieran intención de aceptar más de lo que se les daba y más aun de lo que legalmente podía dárseles, ya que el contrato social, por ellos conocido limitaba el giro de la sociedad como se ha visto? Clerc uno de los actores que hacía causa común con los otros dos, absolviendo una pregunta del interrogatorio, contestó categóricamente que era cierto que al aceptar la retribución á ellos ofrecida de un interés en la casa A. Delaye y C.^a, solo tuvieron en vista los negocios en el ramo de importación de mercaderías, «porque cuando la casa se estableció, no se ocupaba más que de dichos negocios, si bien agrega, que después cuando la casa ensanchó sus negocios, creyó que también le aprovechaban las ganancias que esos negocios produjeran.» Se ve pues, que el principal dependiente interesado en la casa de Delaye y en este pleito, pues sería al que le correspondería mayor parte de las utilidades reclamadas por los demandantes, reconoce que entendió aceptar solamente la retribución sobre los negocios de importación y venta de mercaderías, sin que valga el que diga que después creyó que podrían corresponderle en otros negocios, pues no era eso lo convenido, y no podía por sí modificar ni ampliar la oferta por él aceptada. Aunque los otros demandantes, pretenden que creyerón aceptar interés sobre negocios de cualquier género, confiesan sin embargo que el ramo de negocio de la casa A. Delaye y C.^a, era la importación de mercaderías, lo que lógicamente contraría el que ellos entendieran aceptar interés



sulten en la casa que prestan sus servicios.—Jur. Com., tom. 6, pág. 61, Ser. 4^a.

sobre negocios que no correspondieran á ese giro. Resulta, pues, que ni por los términos de la oferta, ni por la intención común de las partes, que es la regla de las reglas de interpretación de las obligaciones comerciales—art. 218, inc. 1^o, Cód. de Com.—se puede racionalmente deducir que en el interés ofrecido por los demandados deban hallarse comprendidas otras operaciones que las de importación de mercaderías, lo perteneciente al ramo único y exclusivamente convenido para «la nueva sociedad», ó sea la importación de mercaderías, es lógico deducir que los actores ningún derecho tienen á ellas. Esto mismo lo confirma la conducta de los propios actores, que nunca manifestaron pretensión alguna sobre esos beneficios, no obstante de que uno de ellos, Clerc, era el jefe del escritorio, según lo reconocen los otros; llevaba los libros de la casa y acreditó en ellos en la cuenta particular del socio D. Alejandro Delaye el importe de los pagarés de una de las casas, confirmando lo que al respecto dicen los demandados: de que el importe de esos pagarés fué la retribución de servicios personales que dicho señor prestó á otra casa, Bordot, estando al frente de ella durante algún tiempo como gerente. Si Clerc hubiese creído sinceramente que esos pagarés eran una utilidad social y que en ella tenían parte él y sus coactores, es claro que como tenedor de libros de la casa no habría asentado esa partida en la cuenta particular de D. Alejandro, sino que la habría llevado á la cuenta de ganancias y pérdidas á fin de que en oportunidad al liquidarse sus cuentas de utilidades, se les hubiese adjudicado la que en ella le correspondía. A parte de esto, en las mismas cuentas particulares presentadas por los actores con la demanda, no se incluye parte alguna de utilidades en los negocios de las otras casas, siendo estas cuentas hechas de puño y letra del tenedor de libros Clerc, un año antes de instaurarse la demanda, ¿como suponer que el principal interesado omitiese incluir esos negocios, perjudicándose considerablemente él y sus compartes, si creían que tenían derecho á parte de esos beneficios?, porque hay que notar que las cuentas que pasaron los demandados á los actores y que éstos objetaron son precisamente las mismas hechas de su puño y letra por el tenedor de libros Clerc. A lo que precede se agrega, que según aparecía de la compulsa de libros de la casa, practicada en tiempo, se anotaron todas las ventas de mercaderías hechas á una de las casas como á cualquier otro cliente, y no se ha destruido lo que afirman los demandados de que las utilidades que dichas ventas dejaron á la casa «A. Delaye y C.^a» fueron incluidas en el ba-

Banco Hipotecario—Véase: *Bonos*, núm. 1.

Banco Nacional—Véase: *Defraudación*, núm. 3.

1. **Banco de la Provincia**—El Banco de la Provincia de

lance respectivo y que de ellos se hizo partícipe á los actores como en otra venta cualquiera. Por último, es práctica común en nuestro comercio, cuando dá á sus dependientes interés en las utilidades, hacerlo solo en las operaciones en que interviene. Tenemos así estos dos nuevos elementos legales de interpretación: los hechos posteriores de las partes y la costumbre ó práctica general del comercio—art. 218, citado, inc. 4º y 6º;—y estos como los anteriores concurren á demostrar que los actores carecían de derecho para pretender participación en las utilidades procedentes de los negocios llevados á cabo con otras casas en las cuales no se trataba de la introducción y venta de mercaderías en esta plaza, y por consiguiente son estraños al ramo de negocios sociales sobre los cuales solamente se les acordó el interés que reclamaban.

1.—Esta resolución fué dictada contra la opinión del Fiscal de las Cámaras Dr. Cortés, quién en una vista luminosa sostuvo la doctrina contraria. El Dr. Molina Arrotea fundó su voto, al que se adhirieron los otros Camaristas. Los antecedentes de la cuestión son los siguientes: El 21 de Agosto de 1875 se presentó á uno de los Juzgados civiles, D. R. Machaly, manifestando las dificultades de su situación y haciendo cesión de bienes á favor de sus acreedores, entre los cuales mencionaba al Banco de la Provincia, por la cantidad de 368.800 pesos moneda corriente, y á D. Bernabé Font por 425.000, garantidos estos últimos con hipoteca sobre la casa calle Tacuarí núms. 153 y 155, por escritura pública otorgada con fecha 28 de Febrero de 1873, de la que se tomó razón en oportunidad. El crédito del Banco, constaba por varias letras, que según aparece de la prueba producida, eran renovaciones de otras ya vencidas, á las cuales habían sustituido; y provenía, al menos en su mayor parte, de préstamos anteriores á la mencionada fecha de la hipoteca de Font, pues aunque ella había existido desde el 2 de Diciembre de 1870, para comprender los intereses vencidos acumulándolos al capital, por la citada escritura de 28 de Febrero de 1873, el acreedor lejos de reservársela, la había dado por cancelada, y en esta escritura se constituyó otra nueva sobre la misma finca. En esa consideración, partiendo el síndico del supuesto de que la simple renovación de las letras vencidas, sin cambiarse la causa de la obligación, no importa novación; y procediendo sobre la base de que el Banco en razón de los privilegios fiscales que disfruta, y que consisten en hipoteca tácita y general sobre los bienes del deudor, cuyas preferencias sobre las espe-





Buenos Aires, tiene hipoteca tácita sobre los bienes de sus

ciales y espesas se determina por las fechas, debía ser preferido para el pago, en el estado de graduación que presentó, se acordó efectivamente prelación á su crédito sobre el de Font. Este, sin embargo, disconformándose con esa clasificación la impugnó por varios motivos: 1° Porque aun en la hipótesis de que realmente el Banco tenga hipoteca tácita en garantía de su crédito, no es exacto que deba considerarse anterior á la suya que, según se ha referido empezó en 1870, no obstante que se le otorgase de nuevo en 1873, á consecuencia del arreglo verificado entónces. 2° Porque importando un verdadero pago cada renovación de una letra, de las muchas realizadas por el Banco en sus arreglos con Machaly, la primera obligación se extingue en casos tales y empieza otra nueva, cuya fecha sería, por tanto la que determinase la antigüedad que realmente correspondiese al privilegio. 3° Porque habiéndose restringido, primero el alcance de la hipoteca legal, comprendida en los privilegios fiscales—Cód. de Com., art. 1609, inc. 1°—y suprimiéndose ésta enteramente, por último—Cód. Civ., art. 3115—como institución dañosa á los intereses públicos y opuesta al desarrollo del crédito, no es cierto que á pesar de todo el espesado Banco continúe disfrutándola cuando en la actualidad no la tiene el Nacional, ni el mismo Estado provincial que se la comunicó, ni en fin, el Fisco de la Nación. Aquí solo nos ocuparemos de este último argumento por cuanto los otros dos serán materia de estudio en otros sumarios. El Camarista Dr. Molina Arrotea cuyo voto sirvió de fundamento á la resolución por haberse adherido á él los demás miembros de la Cámara, dijo: «He sostenido ántes de ahora, como Juez de 1ª Inst. que los privilegios acordados por nuestro derecho patrio al Banco de la Provincia no podrían considerarse implícitamente derogados por las disposiciones del Cód. Civ., y que subsistían, de consiguiente, aun después de su promulgación. Los antecedentes legales que fundaban aquella opinión, no han sido modificados hasta el presente por reformas de trascendencia, ni la jurisprudencia misma de los Tribunales ha logrado fijar conclusiones definitivas y uniformes. La tendencia de nuestro foro, ha sido, no obstante remarcablemente favorable al sostenimiento de los privilegios fiscales declarados en diversos fallos por los Tribs. Sup. de la Nación y por los de la Prov., en la época en que tuvieron su asiento en esta Cap. La historia de estos privilegios puede esponerse en breves términos. Su origen arranca incuestionablemente de la ley de Junio de 1822, que creó el Banco de descuentos por iniciativa de una asociación de particulares, y al cual, entre otros beneficios, se le acordó el

deudores, año 1890.—Jur.Civ., tom. 10, pág. 344, Serie, 3ª.

goce de la acción hipotecaria ó pignoraticia sobre los bienes de los deudores, mientras la ley no proveyese remedio más eficaz—art. 5º.—La institución, no obstante la amplitud de derechos y exenciones de que fué rodeada, tuvo una existencia breve y penosa, siendo refundida antes de los cuatro años de la fecha de su creación en el Banco Nacional, establecido por la ley de 28 de Enero de 1826, bajo la denominación de «Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata.» Este nuevo Banco, cuyos privilegios y estatutos debían durar diez años, no tuvo una marcha más próspera que el anterior, entre otras causas complejas, por el abuso de sus emisiones, y así, apenas espirado el término de duración, fué disuelto por la autoridad gubernativa de la Prov., creándose en su reemplazo la Casa de Moneda, cuyo art. 7º, declaraba al establecimiento el privilegio fiscal para el cobro de las deudas á su favor. Vino por fin la ley de 23 de Octubre de 1854, que organizó definitivamente la administración del Banco de la Provincia, su directorio, facultades, capital, etc. Por el art. 11 de dicha ley, el Banco gozaría en sus negociaciones de los privilegios fiscales. La ley de 27 de Setiembre del año subsiguiente, autorizando el descuento de pagarés con una sola firma y bajo la garantía de mercaderías depositadas en la aduana ó de fondos públicos, acordó también á éstos papeles la protección y privilegios de los demás créditos; por último, la ley de 5 de Junio de 1856, que autorizó igualmente el descuento de pagarés hipotecarios á la orden del Banco, consagra declaraciones análogas relativamente á sus privilegios. Estos antecedentes, y las prerrogativas que ellos traen aparejados, no han sido desconocidos en juicio por el Sr. Font, como así resulta de su propia exposición. No hay entonces para qué insistir en demostraciones sobre el particular, como tampoco porque no se hace cuestión sobre ello en lo que conviene á la índole y extensión en que nuestro derecho antiguo tenían aquellos privilegios, y me basta referirme á las leyes 23, 25 y 33, tit. 13, part. 5ª y ley 8, tit. 18, lib. 9 de la Recopilación Castellana, invocada por la misma parte en el parage citado. Sin que se hubiesen entre tanto incorporado alteraciones de ningún orden en la constitución orgánica del Banco, y hallándose éste en el ejercicio completo de todas sus prerrogativas, se produjo el pacto histórico de 11 de Noviembre de 1859, en virtud del cual, Buenos Aires se declaró parte integrante de la confederación—art. 1º.—Este pacto fué celebrado bajo determinadas condiciones, siendo una de las más salientes en orden al mantenimiento del régimen





1. Banda—Aun cuando sean varios los autores que ha-

institucional de la Prov., la estipulada en la cláusula 7ª, en cuanto declaraba que todas las propiedades del Estado que le daban sus leyes particulares como sus establecimientos públicos, de cualquiera clase y género que fuesen, seguirían correspondiendo á ella y serían gobernadas y legisladas por las autoridades de la Prov. Reconocida por ley fundamental la Const. sancionada en Mayo del 53, se convino, no obstante, que sería examinada por una convención provincial elegida libremente por el pueblo y con sujeción á las leyes que regían en Buenos Aires. La convención *ad hoc*; introdujo en la carta del congreso constituyente, enmiendas de más ó menos trascendencia, las cuales fueron incorporadas á la carta definitiva después de correr los trámites de antemano acordados. Entre esas enmiendas figura la del art. 101, que decía: «las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Const. al Gob. Federal», y que fué adicionado con éstas palabras..... y «el que espresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.» Es el art. 104 de la Const. nac. vigente. En las negociaciones preliminares al pacto, y al fijarse la inteligencia del art. 7º, se mencionó espresamente al Banco como uno de los establecimientos que sería de la exclusiva competencia de la Prov., y legislado por su legislatura.—Véase: «Diario de Sesiones de la Convención», pág. 161.—Por este art. espresaba uno de los convencionales, «han venido á introducirse modificaciones muy importantes en la Const., modificaciones que no podían ser materia de discusión, pero en el modo que se hacían no era posible hacer más. Hay necesidad pues, de hacer efectivo el principio consignado en este art., y de aquí la necesidad que hay de enmendar algunos otros de la Const. para evitar todo género de dudas, es decir, vamos á ejercitar para Buenos Aires, no solo el pacto, vamos á convertir esas garantías en artículos constitucionales, de manera que no se puede desconocer nuestro derecho.» Se arguye que el pacto de Nov. fué un convenio de circunstancias que terminó junto con estas, y cuyo carácter transitorio surge de los mismos hechos que la motivaron. Una decisión judicial no puede dejenerar en campo de discusiones históricas, y solo se hace por ello mérito de aquellas consideraciones que hagan directamente al punto pertinente del debate. La gravedad de las cuestiones que fueron solucionadas por el convenio, tanto en el orden económico como en el orden político, y el alcance de las reformas que provocó en el seno de la asamblea provincial, parecerían imprimirle una trascendencia mayor que la que se le atribuye. Su punto de partida fué poner término á la deplorable división en que había per-



yan cometido diversos delitos, no puede declararse la

manecido la República, no seguramente por acomodamientos del momento, sino «bajo la sola inspiración de la paz y del decoro de cada una de las partes», determinadas en bases definitivas y duraderas que robustecieron el vínculo federal, y aumentaron la unión nacional sin mengua de ninguno de los derechos de la soberanía local, reconocidas como inherentes á las provincias confederadas. El pacto fué considerado así en la convención como la ley suprema á la que debían subordinarse las enmiendas ó modificaciones de la Const., la que debía á su vez armonizarse con sus cláusulas. Más aun, suponiendo justas las observaciones de forma en cuanto al carácter mismo del convenio de incorporación, de ninguna manera podrían hacerse extensivas á las reservas contenidas en la cláusula 7ª de la referencia, cuyo carácter de permanencia quedó sancionado en el hecho y en el derecho al incorporarlo solemnemente al texto mismo de la Const. federal, que es la ley primera que deben observar y aplicar los jueces. La adición del art. 101, decía en su informe la comisión examinadora de la Const., con tendencias á salvar el poder que cada Prov. se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación, además del que no hayan delegado por la misma constitución, es otra consecuencia lógica del pacto. Esta adición, agrega el informe concebido en términos genéricos, tiene por objeto salvar inmensas dificultades y resolver multitud de cuestiones prácticas de la actualidad, poniendo el pacto de 11 de Nov. bajo la salvaguardia de la Const. Habiéndose reservado Buenos Aires, por ese pacto poderes que la Const. atribuía en algunos casos al Gob. Nac., habiendo éste por su parte consentido en ello, siendo ese pacto la base sobre la cual nos confederamos con la conf. argen., constituyendo así ambas partes reunidas la Nación Argentina, tal reserva es perfectamente arreglada al orden de una nación de pueblos confederados, y conforme al derecho público argentino, por lo que respecta á la teoría de los pactos preexistentes que la misma Const. reconoce en su preámbulo. No hallándose representado Buenos Aires en el Congreso de Santa Fe, en que trece provincias declararon confederarse en virtud del pacto preexistente; habiendo sido necesario celebrar más tarde el tratado de 11 de Nov. en virtud del cual recién declaró Buenos Aires que era su voluntad incorporarse ó confederarse previa revisión de la Const., ese y no otro es el pacto preexistente que se refiere á B. Aires, y por lo tanto, debe quedar garantido en la Const. misma, fijando á la vez una regla general para todos los casos, por no ser propio que en la ley común se establezcan arts. especiales en fa-



existencia de banda ó complot, en tanto no resulte evi-

vor de una provincia respecto de otra, no obstante que se saben virtualmente aquellos poderes reservados por cada una de ellas, que sin perjudicar á la comunidad hubiesen sido espresamente garantidos, como sucede en el presente caso. Pero se decía, que temiendo B. Aires que su Banco fuese nacionalizado, la estipulación del art. tuvo por objeto conjurar ese peligro. Cuando se trató de fijar la inteligencia de esta base, tales temores si efectivamente existían, no aparecían ni se dejaron siquiera sospechar en el curso del debate, y aun suponiéndolos posibles y fundados, no fué el motivo único ni tampoco el más saliente que determinó la redacción de la cláusula que correspondía sobre toda otra consideración de menor valía, ó garantizar la integridad de las propiedades y establecimientos de la Prov., salvando por ese lado las graves dificultades que podían surgir en el futuro. Mas si en realidad, se quiso poner un dique á las tendencias absorventes del triunfador, queda fuera de toda duda que la amplitud de los conceptos en que fué convenida y la mayor que se le dió en el seno de la convención, poniéndola bajo la salvaguardia de la Const., imprimió á esa base caracteres más definidos y propósitos más levantados que los que se le quiere atribuir. Las partes contratantes unificaron su voluntad en el sentido de que el Banco continuaría bajo el dominio de la Prov. administrado soberanamente por sus autoridades, y legislado privativamente por sus leyes. Este acuerdo de voluntades fué incondicional, sin coartaciones que hiciesen presumir intenciones encubiertas de algunas de las partes, sin referencias que importaran un menoscabo á las prerrogativas que le habían sido conferidas. ¿Ignoraba acaso el Gob. conf. la existencia y extensión de esos privilegios? ¿Ignoraban sus representantes, que ellos eran parte integrante de la carta del Banco? No es posible deducir ni lo uno ni lo otro, y cuando se salvaba la integridad y la jurisdicción del Estado, respecto del establecimiento en cuestión por cláusula espresa, es por demás evidente que quedaban también salvados los privilegios preexistentes á la convención y á cubierto de toda otra injerencia que no fuese la de la misma Prov. Se observa sinembargo, que si la presente cuestión hubiera de resolverse por los principios y disposiciones adoptadas por el Cód. Civ., no podría vacilarse ni un momento siquiera, para decidirse por la negativa, porque aquellas son espresas y terminantes en sentido contrario á las pretensiones del Banco. Nuestro Cód. ha borrado, es cierto, del texto de sus disposiciones, las hipotecas tácita: ó legales, dejando solo subsistente la convencional única de consiguiente sobre que legisla. Sus preceptos sobre el par-



dentemente justificado el acuerdo previo.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 258, Ser. 4^a.

ticular, son reaccionarios contra el antiguo derecho, teniendo idéntico carácter los que gobiernan el régimen de la propiedad, á la que ha desligado de las vinculaciones que la hacían odiosa, perpetuándola en determinadas personas é instituciones. El mismo sistema de igualdad predomina en cuanto á privilegios limitados en sus causas y sus efectos ó términos propios y compatibles con el espíritu de las sociabilidades modernas. Pero el Cód., ley del Cong., no ha podido derogar las leyes constitutivas del Banco, ni privarle del ejercicio de sus prerrogativas, porque es propiedad de la Prov., gobernado y legislado con la autoridad de la misma á virtud de facultades que espresamente le han sido reconocidas y que se hallan amparadas por la Const. Fed. No podría derogarlas como no habría podido á su vez el Banco por actos posteriores al 11 de Nov., ensanchar el campo de los privilegios que le tenían acordado las leyes del Estado, sino solo hacerlos valer dentro de los límites determinados por las mismas. Si el orden de cosas creado á la institución por el pacto, hubiera obedecido á otros propósitos menos duraderos y solemnes que los ya enunciados, habríase seguramente estrechado la forma del acuerdo sin llevarlo más allá que al solo gobierno y administración del establecimiento, con el ejercicio limitado de poderes que estos conceptos determinan. No ha sido así, empero, y la fórmula aparece tan amplia como lo demandaba la misma evolución histórica en que se producía y de ahí la potestad más alta dada al estado de someter su Banco al imperio exclusivo de sus leyes. Con posterioridad á la vigencia del Cód., la S. C. Nac. ha reconocido la existencia de esos privilegios. En la causa CXVI, Ser. 2^a de sus fallos, este alto Trib. aceptando los fundamentos de una resolución del Inferior, declaraba, que aun cuando pretendiera que el Banco de la Prov. perseguiría su crédito en virtud de la hipoteca espresa con que estaba garantido, ésto no tenía mayor importancia por cuanto dicho Banco, gozando de privilegios fiscales como los que tiene, podía haber seguido gestionando su crédito en uso de la hipoteca tácita que sus privilegios le acuerdan sobre todos los privilegios de sus deudores, sin necesidad de la convencional. La S. C. P. en la causa LV estableció explícitamente, que los privilegios del Banco no han podido ser derogados por el Cód. Civil. Se ha dicho, en mi concepto con exacto criterio, que el mismo Cód., ha reconocido implícitamente la subsistencia de los privilegios negados por Font, al espresar en la ley de creación del Banco Nac., que éste no gozará del privilegio en la república, pero que sus créditos

Beneficio—Véase: *Corredor*, núm. 5.

no podrán ser inferiores en prelación á los de cualquier otro establecimiento de Bancos autorizados por leyes provinciales. Raciocinando sobre esta declaración, se ha dicho que lejos de importar reconocerse en ella la legalidad de las enunciadas prerrogativas, implica al contrario por inducción su absoluto desconocimiento. Pero si se considera que en el país no existía ninguna institución que gozase de privilegios autorizados por leyes particulares de los estados, la sanción del art. no habría tenido razón que lo justificase, á menos de convenir que fué incorporado á la ley sin un propósito deliberado y con el convencimiento de su completa inutilidad, lo que en manera alguna es de admitirse. La misma S. C. Nac. citada, no lo ha entendido entre tanto así, como se desprende de la inteligencia de sus resoluciones, en las cuales ha consagrado como doctrina, que el Banco Nac. concurriendo con otro establecimiento bancario privilegiado, goza del mismo privilegio de éste, aun cuando su crédito esté garantido con hipoteca, pues que si se admitiera que por el hecho de tener el Banco de la Proc. una hipoteca convencional á su favor, el Nac. carecería de los privilegios que la ley acuerda al primero, concurriendo juntos, sería ponerlo en peores condiciones que aquél. Se argumenta con el silencio de la Const. de la Prov., la cual se observa, no ha establecido los privilegios fiscales, ni ha creado preferencias odiosas en favor del Fisco, ni de su Banco. Pero la Const. es una ley política extraña á la materia de privilegios entre acreedores, que pertenece al derecho privado, ni ha podido restablecerlos desde que al sancionarse aquella ley fundamental, la Prov. y su Banco tenían el ejercicio de su privilegio. Se aduce además como fundamento, que las renovaciones hechas por el Banco, estinguen la obligación anterior, siendo el pago el modo legal con que ella se opera, y que la fecha del crédito hipotecario es la de Oct. de 1870, época en que se constituyó el gravamen, y no la de Feb. de 1873, que es la fijada por el síndico del concurso; sobre el primer fundamento nada tengo que agregar á la sólida argumentación del representante del Banco, desarrollada en el capítulo respectivo de su escrito, y las consideraciones complementarias del dictamen fiscal, y que hacen evidente la insubsistencia de la doctrina sostenida por el apelante. ¿Cuál es la fecha verdadera del gravamen hipotecario constituido á favor de Font? En Dic. del año ya indicado de 1870, éste dió en préstamo á los esposos Machaly, la cantidad de 16.000 fuertes, que aseguró con hipoteca sobre la finca de su propiedad ubicada en la calle de Tacuarí. Mas tarde, en 28 de Feb. del año 73, se otorgó entre las mismas personas, la escri



Benignidad—Véase: *Delito*, núm. 25.

tura en la cual Font, declara, que habiéndole entregado los Machaly la suma espresada y sus intereses hasta ese día, de que se recibió á su satisfacción, les otorga á su favor el más eficaz recibo y carta de pago en forma; que por tanto, da por nula y chancelada la escritura de su referencia—2 Dic., 1870—debiéndose poner en la matriz y oficina de hipotecas las respectivas notas que la inutilicen é invaliden. Hace presente Font, que esta manifestación no fué exacta, pues en realidad no recibió de sus deudores un solo peso en pago de su préstamo anterior, pues solo se realizó una simple operación de capitalización, de donde resulta que el acto escriturado de 1873, no ha novado, ni destruido, ni renunciado el anterior, que lo ha dejado intacto sin más novedad que incorporar los intereses al capital. No pienso, que estas declaraciones producidas en juicio contradictorio, y cuando precisamente se discute el alcance jurídico de los actos á que ellas se refieren, puedan tener la fuerza bastante para desvirtuar sus enunciaciones, mayormente cuando el acto mismo aparece revestido de los requisitos exigidos para su validez, y cuando el efecto inmediato de aquellas declaraciones sería inferir un perjuicio al derecho del tercero. No valdría decir que la intención de las partes no es la que se desprende del acto mismo, ni que los términos empleados por el oficial público, fueron como se enuncian incorrectos, ni finalmente, que los antecedentes de la negociación puedan estimarse como demostrativos de la insubsistencia ó ineficacia del acto jurídico, porque éste en cuanto no se arguya su falsedad, hace plena fe en cuanto á la ejecución del mismo y á las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., en él contenidas. Si, pues, el acreedor declara haber recibido el importe de su crédito dando por chancelado el gravamen que lo garantiza, no puede establecerse como fecha del mismo, la que en él fué constituida para determinar por ese medio su anterioridad al crédito del Banco. La obligación escriturada en 1870, desapareció legalmente por el acto ulterior, en razón de que el pago es uno de los modos comunes, el primero enumerado en el Código, de extinción de los mismos. No habría para que hacer mérito por ser materia familiar en derecho, que la hipoteca pueda desaparecer sin que desaparezca la obligación que asegura, aunque no sobreviva á ella por su carácter accesorio, pero es pertinente recordar que el derecho hipotecario se extingue por la renuncia expresa y constante en escritura pública que el acreedor hiciere, consintiendo la chancelación de la hipoteca—art. 3:93, Cód. Civ.—Se invoca por Font, la circunstancia de no haberse anotado la chancelación en el Registro, pero esta forma-





1ª. Bienes—Solo procede la inhibición cuando no se conocen bienes para el embargo.—Jur. Civ., tom. 10, página 86, Ser. 3ª.

Bienes—Véase: *Fuga de un comerciante*, núm. 1.

1ª. Bienes adjudicados—La hijuela es título suficiente para justificar la propiedad—Jur. Com., tom. 2, pág. 279, Ser. 4ª.

Bienes ajenos—Véase: *Delito correccional*, núm. 1.

1. Bienes del concurso—Al síndico definitivo corres-

lidad, no es indispensable, ni su omisión es bastante á conservar una hipoteca legalmente estinguida. La anotación no tiene otro fin que acreditar la desaparición del gravamen hipotecario, y facil es de verse entonces que su incumplimiento no influye de manera alguna en la existencia del derecho á que ella se refiere, y el cual se forma y perece por otros medios legales independientes á aquella formalidad; la cancelación es establecida además en favor del deudor á quien exclusivamente interesa. La prelación gestionada por el Banco de la Prov. con respecto á su crédito, debe autorizarse teniendo presente la época á que se remonta ese crédito, y que su fecha es anterior á la de la hipoteca de que hace mérito la parte de Font, como asimismo, que se trata de un concurso de acreedores provocado por la cesión de bienes hecha por el mismo deudor: por consiguiente, que procede en tal caso la preferencia sostenida por el Banco, lo que es conforme á lo declarado por la S. C. N. en la causa XCV que se registra en la pág. 379, tom. 13, Serie 2ª de sus fallos. El Dr. Cortés dictaminó en contra de esta doctrina sosteniendo que los derechos del Banco de la Prov. han desaparecido. Esta resolución aparentemente está en contra de lo resuelto por la Excma. Cam. de lo Com., pero no sucede así por cuanto es necesario establecer que cuando ese caso fué resuelto por esa Cám., el Banco ya se había acogido á la ley de Bancos garantidos, perdiendo por este hecho sus privilegios, mientras que en el caso del sumario no se había acogido aún á esa ley. Puede verve la opinión del Dr. Cortés en el verb. *Bienes de deudores*, núm. 1.

1ª—Art. 461 del Cód. de Proc.

1ª—Arts. 979, incs. 1ª y 2ª, y 994 del Cód. Civ.

1—El Juez de 1ª Inst. dijo, que habiéndose solicitado por el síndico la venta en público remate decretada en virtud de la disposición del art. 1436 del Cód. de Com., el que establece de una manera categórica



ponde proponer el rematador de los bienes del concurso;

é intergiversable que el juez debe nombrar el martillero, y teniendo además presente la inteligencia que la Excm. Cámara de Apelaciones en lo Com. ha dado á ese precepto en el concurso de la sociedad «Buenos Aires Dairy Company Modelo», en la resolución que se transcribe: «Buenos Aires, Octubre 25 de 1892: Autos y Vistos: Siendo facultad del Juzgado de Com. el nombramiento de rematador—art. 1436 del Cód. de Com.—y de acuerdo con la interpretación dada por esta Cámara en otros casos, en el concurso de de Spinetto é hijos, fechado en 9 de Junio de 1892, no ha lugar al recurso interpuesto, y devuélvanse, debiendo el Juez tener presente lo que han manifestado los rematadores nombrados sobre la comisión que han de cobrar.—Repóngase el sello.—Jofre—García.» Y considerando además que es deber de todo Juez defender la jurisdicción de que está investido en toda la extensión y amplitud que la ley le confiere, no se hace lugar á la revocatoria solicitada ni al recurso de apelación interpuesto.» La Cámara revocó el auto del Dr. Viale fundándose en que la disposición del art. 1436 del Cód. de Com., que acuerda al juez la facultad de nombrar martillero, en los casos á que se refiere, constituye una escepción á la regla general de procedimientos, de que los jueces no proceden de oficio, sino á petición de partes. Que esta escepción se justifica plenamente, si se tiene en cuenta que en el estado del juicio en que ella se autoriza, no existen todavía interesados reconocidos, de modo que en esa situación el mejor medio para garantizar los derechos de los que más adelante resulten tales en el nombramiento de oficio. Que en los demás casos en que no exista esa circunstancia, que es la única razón de ser de dicha escepción, el principio general antes recordado debe recuperar todo su vigor, como que tratándose de intereses propios, nadie puede proveer á su seguridad con mayor eficacia que los mismos interesados. Que es sin duda obedeciendo á estos propósitos que el art. 1520 del Cód. de Com., al ocuparse de la venta de los bienes de un concurso, después de efectuada la verificación de créditos y nombrado el síndico por los acreedores no ha consignado la misma escepción que establece el artículo 1436, escepción que tiene por fundamento el principio dominante de este estado de la quiebra, de que el juez no procede de oficio sino á instancia de partes, que en el caso de autos lo es el síndico, representante común de los acreedores—Segovia, Com. al Cód. de Com., nota 4852.—Que no conteniendo, pues, el art. 1520, precepto alguno expreso sobre el nombramiento de martilleros, y teniendo en cuenta, como se ha visto, que la disposición del art. 1436 es escepcional y no



el juez puede oponerse al nombramiento fundando el auto.
—Jur. Com., tom. 9, pág. 312, Ser. 4ª.

2. **Bienes del concurso**—El término para que la acción de nulidad de un acto jurídico se prescriba para los acreedores, corre desde que formado concurso civil, el inmueble no aparece entre los bienes del concursado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 3ª.

Bienes denunciados—Véase: *Embargo*, núm. 15.

Bienes del deudor—Véase: *Fiador solidario*, núm. 1 —
Embargo preventivo, núm. 11.

1. **Bienes de deudores**—El Banco de la Provincia de

puede, por lo tanto, aplicarse á situaciones enteramente diferentes, nos encontramos en el caso de recurrir á los principios jurídicos de la legislación vigente ó á los principios generales de derecho—art. 62 del Cód. de Proc.—Que siguiendo este precepto de la ley, vemos, por una parte, el principio general antes recordado, y por otra, los arts. 736 y 512 del Cód. de Proc., que confieren á las partes el derecho de nombrar martillero cuando se trate de la venta de bienes en remate público, facultad que solo compete al juez en los casos en que no hay conformidad entre los interesados. Que aplicando, pues, por analogía, estas disposiciones, es evidente que en caso *sub-judice* el nombramiento de martilleros corresponde al síndico, representante directo de los únicos interesados en el juicio y que el Juzgado solo puede negarse á confirmar el que aquel indique cuando á su juicio no reuna las condiciones necesarias para el buen desempeño del cargo, debiendo en este caso expresar los fundamentos de su negativa.»

2—Véase: verb. *Acción de nulidad*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Banco de la Provincia*, núm. 1. El Dr. Cortés sostiene lo contrario: al fundar su opinión, se preguntaba ante todo: «¿Es cierto que el Banco Prov. disfrute todavía de los antiguos privilegios fiscales comprensivos de la hipoteca tácita, sobre todos los bienes de sus deudores y cualquiera que sea la causa de la deuda?» Esta es sin duda la más difícil y trascendental de todas las cuestiones, que viene debatiéndose desde hace tiempo por los más ilustrados abogados, y respecto de la cual, la jurisprudencia está por formarse todavía, porque los Trib. pocas veces la han planteado directamente, y porque sus resoluciones, además, no han sido uniformes al respecto. Tiempo es ya de que ter-



Buenos Aires tiene hipoteca tácita sobre los bienes de

mine toda incertidumbre sobre un punto de tanta gravedad; el gran principio de igualdad ante la ley, el vigor de la Legislación nacional, la unidad de la juris. en las Prov., las bases principales de reforma del sistema hipotecario, la libertad de la industria bancaria, el desarrollo del crédito privado que tan estrechamente se liga con el progreso material del país y con la riqueza pública, todo, en fin, está comprometido y reclama la resolución de esa cuestión que alguna vez debe concluir para siempre. Es indudable que el Banco Prov., por la ley de su creación de 10 de Oct. de 1854, sancionada en época en que la Prov. conservaba la facultad de legislar sobre las materias correspondientes á los Cód. generales, obtuvo el privilegio fiscal, el cual con arreglo á la legislación esp., entonces vigente, comprendía ciertamente la hipoteca tácita en todos los bienes de sus deudores, preferente á las de igual clase aunque fuesen anteriores—leyes 23, 25 y 33, tít. 13, Part. 5.^a—Los antiguos Cód., promulgados en tiempos remotos, en que no había nacido todavía la ciencia económica, y bajo el imperio de instituciones monárquicas, en que no se consultaba la igualdad de derechos, multiplicaban las hipotecas tácitas y prodigaban exorbitantes privilegios personales. Así es, que al tratarse de la reorganización, el doctor Alberdi, ocupándose del sistema económico y rentístico, había reclamado contra ese desorden, que haciendo inseguro é incierto el estado de la propiedad, mientras subsistiese sería un serio obstáculo al desarrollo del crédito, y después de demostrar que para fomentar la industria se debía propender á la introducción de capitales extranjeros, hacía ver también que sería imposible obtenerse este resultado sin cambiarse el vicioso sistema que criticaba, pues ningún capitalista extranjero se resolvería á venir aquí, á luchar con un ejército de competidores armados de privilegios—Org. de la Conf. Arg., pág. 431.—Esta observación era exacta, y el autor del Cód. Civ. siendo al mismo tiempo un distinguido jurisconsulto y eminente estadista, no podía desconocer los principios económicos en que se fundaba, vino, pues, la reforma con la sanción de aquel Cód., en el cual se prestó, como era consiguiente, la mayor atención al arreglo de la propiedad, cuidándose especialmente de conservar espedita y libre la circulación, con allanar todo obstáculo legal y desembarazar aquella de ciertas instituciones complicadas, que al desmenbrarla inconvenientemente hacían inciertos los derechos, y dificultaban las transacciones. Se impidió, desde luego, amortizar la propiedad raíz por la prohibición completa de enagenar; se eliminaron de entre los derechos reales, el censo consignativo y el reservativo, la



sus *deudores*.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 344, Ser. 3ª.

enfiteusis, la superficie, toda renta perpetua, las vinculaciones y sustituciones por fideicomisos. Se hizo tabla raza de los privilegios personales, y no de causa. En fin, la hipoteca tácita ó legal fué suprimida en absoluto.—Véanse los arts 2513, 2612, 2613, 2614, 3115 y 3732, y el tit. 1º, sec 2ª, lib. 4º del Cód.—Si pues, la presente cuestión sobre si el Banco Prov. disfruta ó no de hipoteca tácita en los bienes de un deudor cuyo concurso es posterior á la vigencia del Cód. Civ., se hubiera de resolver por los principios y disposiciones en él adoptados, no podría trepidarse ni un momento siquiera para decidirse por la negativa, porque aquellos son los más espesos y terminantes, en sentido contrario á las pretensiones del Banco. En efecto, no solo los particulares que disfrutaban igual privilegio lo han perdido, sino que tampoco lo conservan el Erario nacional, ni el Estado mismo que se lo concedió al Banco, sino muy diverso y solo cuando se trate de impuestos—art. 3879, inc. 2º, y 3880, inc. 5º,—y lo que es más, nadie hace cuestión de que el Cód. al reglar e a materia pudiese quitárselo, ni duda tampoco de que en esto haya procedido acertadamente. No solo fué suprimida para en adelante la hipoteca legal, por razones de orden público, contra el cual no pueden haber derechos adquiridos que impidan la reforma que él reclame—Cód. Civ. art. 5º,—sino que quedaron suprimidas también aun las hipotecas tácitas ya constituidas, negándose el que pudieran considerarse derechos perfectos, á menos que á la publicación del Cód. la acción hubiese sido ya deducida en juicio.—Cód. Civ., art. 4048 y su nota.—Perdieron, pues, el privilegio de hipoteca tácita, el Estado nacional y provincial, el refaccionario, la mujer casada ó viuda por su dote, el hijo de familia por los bienes adventicios y reservables, el pupilo huérfano bajo tutela, el legatario, la iglesia, los establecimientos públicos de caridad y beneficencia, hospitales, colegios y demás. ¿Lo conservará única y exclusivamente el Banco Prov.? La resolución depende solo de averiguarse, si respecto de privilegios é hipotecas, como en cualquier otra materia, el Banco se encuentra sujeto al Cód. Civ., ó si por el contrario, vive fuera de la ley común á todo argentino ó extranjero habitante del país. Apenas se concibe que un país democrático, regido por instituciones libres y que consagran como su primer dogma, la igualdad de derecho ante la ley, haciéndola extensiva en cuanto á los civiles, hasta á los extranjeros, pueda plantearse semejante cuestión, y que haya quien pretenda formalmente *que la ley se hizo para todos, pero no para él*, cuando el primer art. del Cód. declara en términos absolutos, que *las leyes son*



1. Bienes embargados— Su demasía no puede fundar

obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos ó extranjeros, domiciliados ó transeúntes», después de lo cual todo se reducirá á averiguar si el Banco existe ó no en territorio argentino. Se dice sin embargo, que una disposición especial, como la ley constitutiva del Banco, no siendo civil, no ha podido ser derogada por el Cód. Civ., cuyas disposiciones son generales; pero este argumento es una pura sutileza, pues por una parte, cualquiera que sea el carácter que quiera atribuirse á una ley, es fuera de duda, que en cuanto produzca efectos civiles, debe considerársela civil; en cuanto se refiera á materias de comercio, es mercantil; y por último, en cuanto establezca penas, será también penal; y por otra, el Cód. Civ., declara espresamente, que por él se derogan todas las disposiciones existentes que no resulten acordes con las suyas, sean *generales ó especiales*—art. 22.—Las leyes que establecían los mayorazgos eran por cierto, más bien políticas que civiles, pues se relacionaban estrechamente con la organización de la monarquía, y sin embargo, sin duda de ningún género, esas leyes si no se hubiesen encontrado ya derogadas, lo hubieran sido á la publicación del Cód. Civ., por las disposiciones en que para desamortizar la propiedad raíz, se prohíben las vinculaciones, fideicomisos, sustituciones y cláusulas de no enajenar á perpetuidad. Cuando la indicada ley de creación del Banco Prov., fuese administrativa, tampoco se concibe ni es admisible en las provincias, un derecho administrativo opuesto á las leyes nacionales ó contrario á los Cód. generales, á los cuales deben éstas conformarse en todo caso; como no serían procedentes ni regulares, ordenanzas municipales contrarias á las disposiciones legislativas de las provincias. Administrativo era en los antiguos cabildos, dar dinero á censo ó conceder terrenos en enfiteusis; pero hoy día, las municipalidades no podrían hacerlo, por haber suprimido el Cód. Civ., aquellos derechos reales. Administrativos eran asimismo, ciertos impuestos de peaje y de herencias transversales, que sin embargo, han sido declarados inconstitucionales como opuestos al Cód. En fin, administrativa es también la enajenación de tierras pú-

(Continúa en la pág. 173)

1.—Se dijo de nulidad de la ejecución por violación de las formas del procedimiento. La demasía del embargo no puede oponerse como vicio del procedimiento tratándose de una letra de cambio, pues la ley limita en el art. 676 del Cód. de Com. las escepciones á los casos allí enumerados de una manera taxativa, entre los cuales no está comprendida dicha escepción.



una escepción al carácter ejecutivo de la letra de cambio.

—Jur. Com., tom. 4, pág. 411, Ser. 4^a.

blicas; pero hoy las provincias no podrían verificarla con imposición de rentas perpetuas ó con prohibición de vender. Por donde se ve claramente, que los Cód. nac., no pueden dejar de influir sobre las disposiciones administrativas de las provincias, en cuanto tales actos se rocen con ellos, ya impidiendo el que se dicten en lo sucesivo válidamente, ya derogando las que antes se hubiesen adoptado y que resultan ahora contrarias á los principios y prescripciones sancionados en aquellos. Pero se alega también, que la mencionada ley org. del Banco que le acordaba en sus transacciones el privilegio fiscal, el cual comprendía hipoteca tácita en todos los bienes del deudor, no ha podido ser derogada por el Cód. Civ., dado por la Nación, por cuanto ésta en el art. 7º, del pacto de 11 de Nov. de 1859 con la Prov. de B. Aires, ratificado más tarde en la Const —art. 104— se obligó á respetarla, reconociendo á dicho Establecimiento como propiedad de aquélla, y estipulando que sería gobernado y legislado por la Prov., lo mismo que los demás establecimientos que le pertenecían. Lo que hizo la Prov. al crear el Banco que era un establecimiento puramente fiscal, no fué otra cosa que participarle, comunicándosele, el mismo privilegio de que disfrutaba su fisco; pero esta concesión sin tiempo fijo y sin contrato, pues la Prov. no podía contratar consigo misma, era en precario y estaba sujeta por tanto, á ser revocada ó modificada-cualquier día. Lo único que ella importaba, era que el Banco disfrutase el privilegio del fisco, tal como entonces existía y mientras existiese, ó como se reglamentase después; sin garantizarse de modo alguno que esto no sucedería, y que dicho privilegio se conservaría siempre inalterable, sin que de consiguiente, hablándose con propiedad, puede decirse derogada esta ley por la reforma ó supresión del privilegio fiscal, á que ella no se oponía en manera alguna. Si el Banco se encuentra exactamente en el mismo caso que el fisco y demás establecimientos fiscales de la Prov. de B. Aires, como acontece realmente; y si se reconoce sin dificultad que todos éstos, por virtud de la sanción del Cód. Civ., han perdido legalmente el privilegio, ¿porqué no sucedería lo mismo con aquél? ¿Porqué el pacto, solo se consideraría violado cuando las disposiciones del Cód. se aplicasen al Banco, mas nó, cuando recaigan sobre los demás establecimientos provinciales? Suprimido legalmente, según se confiesa haberlo sido en el fisco, el indicado privilegio, y no siendo el del Banco sino emanación ó comunicación del que aquél tenía, ¿cómo puede éste pretender que lo conserve? *Resoluto jure dantis, resolvitur jus et accipientes.*



2. Bienes embargados—La presentación de bienes su-

Más en fin, ¿qué fué lo que se estipuló entre la Nación y la Prov. en el referido pacto del 11 de Nov. del 59, que pueda dar margen á sostener que el privilegio del Banco se hacía inalterable por leyes de la Nación, y que por tanto debe considerarse subsistente la hipoteca tácita que disfrutaba, á pesar de que el Cód. Civ. haya suprimido en absoluto tan perversa institución? Ese pacto ha sido explicado diversamente. El general Mitre como miembro de la Cám. de Dip. en sesión de 31 de Set. de 1878, lo esponía negando que él llevase el espíritu de crear verdaderos privilegios en favor de la Prov. de B. Aires, y afirmaba que, por el contrario, era puramente defensivo de sus intereses que consideraba amenazados, tendiendo por tanto á mantener el derecho común; y el doctor Funes, en otra sesión agregaba: que siendo inalienable la soberanía de la Nación, el atribuir á ese pacto tal alcance que pudiera comprometerla, sería no solo poner en duda su legitimidad, sino también demostrar su insubsistencia. La explicación del general Mitre era exacta, y en lo que concierne á las estipulaciones referentes al Banco, ella se demuestra con solo recordar antecedentes históricos innegables. B. Aires al reincorporarse á la Conf. temía que su Banco fuese nacionalizado, pues en alguna época, allá por el año 26, había sido efectivamente un establecimiento nacional. Ese temor era tanto más fundado cuando el estado de las finanzas de la Conf. era desastroso, y cuanto que estableciéndose en la Cons.,—art. 108,—que ninguna Prov. podría emitir billetes de crédito, sin permiso del Cong. con solo negársele ese permiso á la de B. Aires, se le pondría en la necesidad de suprimir su Banco de emisión inconvertible, ó de consentir en que la Nación lo conservase de su cuenta. A conjurar ese peligro respondía la estipulación del pacto, en que se aseguraba la conservación del Banco, reconociéndosele propiedad de la Prov. de B. Aires, que lo gobernaría y legislaría, como á sus demás establecimientos y propiedades; pero sin que esto modificase ni restringiese en nada la facultad de la Nación para sancionar los Cód. generales consignada ya en la Const. y conservada aun después de la reforma. La renuncia de derechos no se presume. ¿Qué significan, pues, en sentido jurídico las indicadas cláusulas del pacto concernientes al Banco, y cuál es su verdadero alcance? Necesitamos fijar con precisión este punto, porque de la confusión de ideas que á cerca de él se ha introducido, provienen únicamente las dificultades de que hoy se encuentra rodeada la cuestión. Desde lue-

(Continúa en la pág. 175).



ficientes á embargo, hace procedente el levantamiento de

go, el reconocimiento del Banco como propiedad suya, hecho en favor de la Prov., le acordaba el derecho de conservarlo en calidad de Banco de emisión, sin necesidad de un permiso especial del Cong. que en otro caso habría precisado indispensablemente, y la facultad de disponer con entera libertad de su capital, no menos que de las utilidades. La facultad de legislarlo comprendía ciertamente, la de organizarlo bajo las bases que tuviese por convenientes, crear el directorio, determinar sus facultades como la naturaleza de las operaciones que le sería permitido hacer, fijar el capital y la emisión, darle estatutos, reglamentos y proveer sobre las materias concernientes. En fin, gobernarlo no puede significar otra cosa que nombrar las personas que lo administrasen, é imprimirle la dirección más acertada, inspeccionando su marcha, vigilando sus operaciones, y por último, fiscalizándolo en todo sentido. Según se ve, pues, la Legislación del Banco que se reservaba á la Prov., era la que hubiese de recaer exclusivamente sobre el establecimiento; no la que pudiera afectar también los derechos y las obligaciones de todas las personas que trataran con él, y mucho menos los de terceros que ni siquiera hubiesen contratado con el Banco, pero que por accidente viniesen á concurrir con los suyos, emanando las obligaciones de un deudor común. Es cierto que los estatutos del Banco podrán influir muchas veces en la validez ó nulidad de un acto, en cuanto determinan la personería de los directores y autorizan ó no la operación de que se trate, lo mismo que en los casos en que el Cód. se refiere á ellos, pues siendo públicos, los que contratan con el Banco deben conocerlos. Pero la Legislación del Banco, no puede entrar á crear derechos reales, definir los actos jurídicos, establecer la forma ni determinar sus efectos por más que á la vez lo afecten; estas cosas pertenecen á los Cód. generales de los que de ningún modo se halla exento dicho establecimiento. De consiguiente, al tratarse de las leyes á que se encuentra sujeto el Banco, es necesario distinguir entre las materias concernientes á los Cód., cuya sanción es reservada exclusivamente á la Nación, y lo puramente orgánico y administrativo del establecimiento que conservaba la Provincia. Supongamos que se trata de un contrato de compraventa de una finca hecho por el Banco; el acto podría ser nulo, ya por falta de facultades en los directores para celebrarlo, como porque los estatutos prohibiesen la adquisición de bienes raíces, puntos sobre los que correspondería exclusivamente á la Provincia legislar; pero si la cuestión versase sobre la forma de la escritura ó sobre la evicción y saneamiento, siendo estas



la inhibición general.—Jur. Com., tom. 5, pág. 140, Serie 4^a.

materias del Cód. Civ., es claro que se hallaría regida únicamente por sus disposiciones. Un mismo objeto bajo diversos aspectos puede ser legislado por la Prov. ó por la Nación: así sobre las tierras públicas comprendidas en los límites de aquella, será ciertamente su legislatura, la que determine si se han de conservar, colonizar ó vender, como también sobre el destino que se haya de dar á su valor. Pero las cuestiones sobre propiedad ó posesión, validez ó nulidad del contrato, y en fin, sus efectos jurídicos, son legisladas por la Nación que ha sancionado el Cód. Civ., al cual se hallan sujetas las Provincias, sin que les sea permitido siquiera alterar ó modificar sus disposiciones. Cuando, pues, éste ha sometido el Estado á la misma prescripción que los particulares, la Prov. legislando sobre tierras públicas no podría, por ejemplo declararlas imprescriptibles ni exigir más tiempo que el ordinario, razón por la cual se considera caduca la ley provincial que requería cuarenta años. Ahora nos encontramos, en aptitud de resolver, qué se quiso decir en el art. 7º del pacto 11 de Nov. del 59, al declarar que el Banco sería legislado por la Provincia, á saber: en lo administrativo, como podría legislar también sobre cualquier otra propiedad pública, pero sin que esa facultad escluya en manera alguna, ni restrinja siquiera la de la Nación, á la cual se reservó por la Const., dictar los Códos. generales, legislando sobre las materias que les conciernen, aun que sus disposiciones puedan afectar con mucha frecuencia los derechos de la Prov. ó los intereses del Banco. Por otra parte, el que el establecimiento y graduación de los privilegios, lo mismo que la reglamentación de la hipoteca y demás derechos reales, sean materias correspondientes á los Códos. generales, es cosa que no puede ponerse en duda y que se deduce claramente, no solo de haberlo resuelto el Honorable Congreso, comprendiéndolos en los Códigos que ha sancionado, sino que así lo establecen también los demás que quieran consultarse. Si, pues, la Prov. de B. Aires pudo conceder válidamente al Banco que creaba el privilegio fiscal comprensivo de hipoteca tácita en los bienes de sus deudores, fué porque en esa época, encontrándose separada de la Confederación, se gobernaba por sí; y porque aun las provincias que habían aceptado la Const., conservaron la facultad de sancionar *pro tempore*, disposiciones de carácter civil, hasta que se dió el Cód. Nac., á cuya publicación éstas han caducado en cuanto resultan opuestas á sus prescripciones—art. 108.—Entender de otro modo la facultad de legislar su Banco, y demás establecimientos y propiedades



3. Bienes embargados—Para la citación de remate y

públicas, reservada á la Prov. de B. Aires, por el art. 7º del pacto de 11 de Nov. del 59, de suerte que no solamente le fuese permitido proveer á su organización y gobierno, mas también determinar sobre las relaciones jurídicas que de algún modo lo afectasen y derechos reales que pudiera pretender contra cualquiera, vendría á importar reconocerle el poder de dictar ó modificar como le conviniese gran parte al menos de los Códos. Si pudo darle, y puede conservarle privilegios é hipotecas tácitas que no reconoce el Cód. Civ., podría autorizarlo también para omitir el registro de las espresas y para admitirlas en documento privado, ó bien para adquirir cualquiera de los derechos reales que el Cód. ha suprimido. También en lo mercantil podría otorgarle los privilegios que sus letras no necesitaran protesto para conservar su eficacia, de que no se prescriban por cuatro años: en fin, de que cuando habiéndolas endosado él, no fuesen pagadas, su responsabilidad se limite únicamente á la devolución de lo recibido, sin estenderse á daños y perjuicios. Por último, aun en lo penal, pudiendo muy bien el Banco llegar á ser víctima de un delito, siendo estafado, defraudado, robado ó falsificándose sus billetes, si en la facultad reservada á la Prov. por el pacto mencionado, de legislar el Banco, se hubiese de considerar comprendida la de reglar los contratos, los derechos y en general cualquiera relación jurídica en que pudiera encontrarse éste, ¿por qué se le negaría el legislar los delitos espresados, definiéndolos y estableciendo las penas en que incurrirían sus autores? Y luego, siendo la facultad de legislar el Banco, reservada á la Prov. idéntica en su alcance á la de legislar sus demás instituciones, el Fisco, por ejemplo, y sus otras propiedades, como las tierras públicas, fuera preciso reconocer que éstas no se prescriben por diez años, según lo dispone el Cód., sino por cuarenta como lo establecía la ley provincial de 29 de Julio de 1867; y además que el Fisco mismo de la Prov. conserva su antiguo privilegio con hipoteca tácita, no siéndole aplicable en ningún sentido, la Legislación Nac. ni los Códigos generales. Si por el contrario, se admite, cual sucede en efecto, que no obstante que por el art. 7º del pacto precitado, en que se decía que la Prov. se reservaba la facultad de legislar el Banco como sus demás establecimientos, la Nación al sancionar el Código Civil, bien ha podido derogando la ley provincial del 67, que requería cuarenta años, establecer que las tierras públicas se prescriban por diez, y que el Fisco provincial no conserve

(Continúa en la pág. 178).

3—De acuerdo con la jurisprudencia uniformemente sentada. Véase el núm. 7.



consiguiente sentencia, no es requisito indispensable la

el antiguo privilegio de hipoteca tácita que suprimía, no hay manera de negar, sin manifiesta inconsecuencia, que lo mismo ha podido hacer con el Banco, el cual igualmente que los otros establecimientos y propiedades de la Prov., debía ser legislado por ella, según el mencionado pacto. El Fisco provincial y los demás establecimientos públicos que siendo equiparados con el Banco, debían por virtud del pacto tantas veces aludido, ser legislados por la Prov., no solo según las leyes generales, sino también conforme al art. 1699 del Cód. de Com., sancionado en 8 de Oct. de 1850, gozaban asimismo hipoteca tácita en los casos y sobre los bienes que se determinaban. Ahora bien, ¿subsisten en la actualidad tales hipotecas tácitas a favor del Fisco y establecimientos públicos en general? Todos están convencidos de que no subsisten; ninguno de ellos ha reclamado jamás ni le sería dado reclamar semejante garantía. ¿Qué ley provincial la ha abolido, pues? Ninguna: es solamente el Cód. Civ., el que la ha suprimido, sin que persona alguna ponga en duda la perfecta legalidad y el acierto con que en esto se ha procedido. Luego, si la facultad de legislar sus propios establecimientos públicos reservada á la Prov. por el pacto, no ha sido obstáculo legal para que el Cód. Nac., al suprimir en absoluto la hipoteca tácita, se la haya quitado á dichos establecimientos, tampoco ha podido serlo, para que también haya privado de ella al Banco que se encontraría exactamente en el mismo caso, desde que el Cód. no lo exceptuase, como no lo ha exceptuado efectivamente, declarando, por el contrario, que sobre materias civiles, lo que en él no se contiene, es como si nunca hubiese existido—art. 22.—O el Banco Prov. ha de ser considerado como persona jurídica, ó simplemente una propiedad del Estado igual á las otras; si lo primero, el Cód. declara espresamente que legisla sobre los Bancos como personas jurídicas, y que á éstas, lo mismo que á las demás incapaces, solo las protege al efecto de evitar las consecuencias de su incapacidad, pero sin acordarles privilegio alguno—art. 33, inc. 3º y art. 58.—Si lo segundo, el Banco sería un establecimiento puramente fiscal ó una oficina del Gobierno prov., cual lo denomina el Dr. Alberdi—Org. de la Conf., pág. 416—y puesto que según se reconoce, éste por virtud de las disposiciones del Cód., que ha reglamentado de nuevo sus derechos civiles, no goza ya el privilegio de hipoteca tácita mal puede continuar comunicándosele á aquél, porque nadie da lo que no tiene, y porque caducado el derecho del concedente, forzoso es que caduque también el de aquel á quien se había concedido en precario

(Continúa en la pág. 179).

existencia de bienes embargados.—Jur. Com., tom. 5, página 96, Ser. 4^a.

—arts. 3270 y 3278.—Se ha dicho, que el Cód. Civ., al suprimir en absoluto la hipoteca tácita, declarando en los términos más espesos que no existe otra que la convencional, no exceptuaba en manera alguna la que había disfrutado el Banco, que no era otra que la misma que correspondía al Fisco, la cual se confiesa que no subsiste; debe agregarse que en el nuevo sistema que adoptaba sobre la graduación de créditos, tampoco habría podido conservarle, sin deformarlo enteramente. El indicado privilegio, por exorbitante que fuese en realidad, era admisible en un sistema de Legislación que multiplicaba las hipotecas tácitas y concedía numerosos privilegios, los cuales, en concurrencia con aquél, muchas veces le harían competencia al mismo Fisco, y no pocas se le sobrepondrían; pero suprimidas las demás hipotecas tácitas y abolidos también todos los privilegios personales, si únicamente subsistiera el del Banco, resultaría tan exajerado y enorme que vendría á constituir una verdadera anomalía, cual nunca existió, ni es posible exista en Legislación alguna. Al lado de la hipoteca privilegiada del Fisco, existían la de la mujer ó viuda por su dote y la del refaccionario que no eran inferiores, gozando también hipoteca tácita el hijo de familia, el pupilo en tutela, los legatarios, la iglesia, conventos, hospitales, colegios, universidades y demás establecimientos públicos, religiosos, científicos, de caridad ó de beneficencia; y fuera del beneficio de restitución *in integrum*, concedido á los incapaces, tanto los menores como la mujer casada, podían por privilegio, reivindicar como suyas las fincas en que se hubiesen invertido sus dineros—Véanse las leyes del tit. 13, part. 5^a y 21, tit. 16, part. 6^a; y 25, tit. 20, part. 1^a; y 10, tit. 19, part. 6^a; y 49, tit. 5^o, part. 5^a.—Hoy por de contado, no se conservan tales hipotecas, ni se mantienen esos privilegios; de suerte que si por escepción especialísima y única, supusiéramos que el Banco provincial retuviese su privilegio de hipoteca tácita, él no existiría en las condiciones en que le fué concedido, sugeto á la concurrencia de otros muchos privilegiados también, de diversas maneras, sino aumentado y recrecido sobremanera, pues se hallaría absolutamente libre de competidores. Esta hipótesis de la subsistencia parcial del régimen con relación á una persona solamente, suscitaria gravísimas dudas, produciendo gran confusión en los principios, puesto que para graduar la prelación del Banco, sería forzoso recurrir á la antigua Legislación, en cuyo sistema se admitían también con el del Fisco, los indicados

(Continúa en la pág. 180).





4. Bienes embargados—El Juez de instrucción es com-

privilegios, hoy derogados; siendo inaplicables las reglas del nuevo Cód., que ningún lugar asigna á la hipoteca tácita por haber sido suprimida en él. El Banco Prov. ha aprovechado grandemente de los saludables efectos de la reforma introducida por el nuevo Cód. sobre hipotecas, al desechar las tácitas y las generales sobre todos los bienes, pues según su historiador, Dr. Garrigós, solo después de la anhelada y benéfica reforma le ha sido posible establecer un Departamento hipotecario que permita el desarrollo del crédito real—«Banco de la Provincia», pág. 220.—Mas, por lo que concierne á los demás Bancos y á los particulares, se empeña, sin embargo, en mantener, en cuanto puede favorecerle, ese mismo sistema caduco y pernicioso de hipotecas tácitas y generales que tanto tiempo le sirviera de obstáculo; y lo que es más, procura perpetuarlo, amparándolo por cláusulas constitucionales que no hacen al caso, sin tener en consideración lo que exigen la igualdad, la justicia y la conveniencia general. El Banco, invoca en su favor el Cod. Civ., y al parecer se reconoce sujeto á sus disposiciones, menos en lo referente á privilegios é hipotecas tácitas; aun en estas materias admite también, que correspondiendo á dicho Cód. bien ha podido este suprimir la hipoteca tácita de la mujer, de los menores é incapaces, de

(Continúa en la pág. 181).

4—Al consignar el art. 424 del Cód. de Instrucción Crim. que las tercerías que se deduzcan serán sentenciadas en la forma que establece el Cód. de Proc. Cív., ha indicado espresamente la forma del procedimiento en tales juicios é implícitamente, que ellos deben sustanciarse ante el juez que ordenó el embargo de los bienes en que la tercería se deduce. Esta es la interpretación lógica que debe darse á la prescripción citada y no otra que conduciría á convertir en letra muerta é inútil el texto de tal disposición. Si el Juez de Instrucción que manda trabar embargo en los bienes de un procesado, no fuese competente para conocer en las tercerías que se deduzcan en tales embargos, no se concebiría que el legislador determinase espresamente la forma en que ellos deben sustanciarse porque en verdad, resultaría una disposición ilógica y pueril. Ni siquiera es admisible dudar en este caso, porque es obvio que si se tratan los detalles, si se reglamentan las formas en que un acto ó una cosa debe efectuarse, es porque esa cosa es la base y existe y precede á la forma y á los detalles. Si no existe la cosa principal, es inútil la accesoria y sabido es aquel principio general de perecho, que lo accesorio no puede existir, donde no existe lo principal.



petente para entender en las tercerías deducidas sobre bie-

las iglesias, hospitales, colegios y demás competidores; pero no así la suya, porque ese establecimiento, según el pacto, solo podía ser legislado por la P.rov. Mas, entonces, ¿cómo se reconoce obligado por ciertas disposiciones? ¿cuáles serán las disposiciones del Cód. que le obliguen? Si solo la Prov. pudiese dar leyes que lo obliguen—legislarlo—¿cómo se concibe que lo obliguen también algunas disposiciones nacionales? ó ¿qué otra regla tendremos para conocerlas, que distinguir las materias que correspondan á la Nación, y las que competen á las provincias, dentro de la órbita trazada por la Constitución? La Prov. podrá legislar cuanto quiera su Banco, y gobernarlo exclusivamente en concepto de propiedad suya, pero sin entrometerse en materias como las de privilegios é hipotecas correspondientes al Cód. Civ., cuya sanción, lo mismo que la de los demás Códigos generales, excepto el de Procedimientos, ha sido reservada por la Const. también de un modo esclusivo y sin limitación alguna, á la Nación; no pudiendo las Provs. reformarlo ó modificarlo siquiera—art. 67, inc. 11, y 103.—Se observa en contrario, que el honorable Congreso ha reconocido, si no en términos espresos, al menos de una manera implícita, pero bastante clara, que las provincias tienen facultad para autorizar Bancos, concediéndoles además privilegios que puedan dar á sus créditos prelación sobre los otros en los bienes del deudor común. Para demostrarlo se aduce el texto de la ley de creación del Banco Nacional, fecha 5 de Nov. de 1872, en cuyo art. 30 se declara: que dicho Banco no gozará de privilegios fiscales en la República, pero que sus créditos no podrán ser inferiores en prelación, á los de cualquier otro establecimiento de Banco autorizado por leyes provinciales. Tan inexacto es el que por esta ley, se declarase la legalidad de los privilegios fiscales concedidos á los Bancos por las provincias reconociéndose en ellas la facultad de acordárselos, que por poco que se mediten sus términos y se profundise su espíritu, no podrá menos de comprenderse que por el contrario, al adoptarse una redacción calculadamente ambigua, lo que se propuso en realidad el Honorable Congreso, fué precisamente abstenerse de resolver la cuestión. Es evidente que de hecho, han existido en la República varios Bancos provinciales con privilegios fiscales, no solo en Buenos Aires sino también en Córdoba, Santa Fe y algunas otras provincias quizás; lo cual como era consiguiente, produjo la cuestión sobre la ilegalidad del enunciado privilegio; cuestión cuya resolución, el Congreso considerándola sin duda, más propia de los tribunales que del

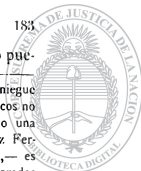
(Continúa en la pag. 182).



nes embargados por su orden en juicios criminales.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 107, Ser. 4^a.

Poder Legislativo, no quiso pronunciar por medio de una ley; habiéndose más tarde decidido efectivamente en Córdoba, por los Tribunales, en sentido negativo de todo privilegio no contenido en el Cód. Civ.—Véanse las sentencias recaídas en los pleitos de Don Julián Amenabar con Don José Echenique, y del Banco Prov. con los acreedores al concurso de Isidoro González.—El Honorable Congreso, al constituir el Banco Nacional, creyendo injusto y dañoso á los intereses públicos otorgarle el exorbitante privilegio fiscal, se abstuvo de concedérselo; pero debiendo no obstante, proteger y amparar los del establecimiento que trataba de crear, resguardándolo contra los privilegios que se atribuían otros Bancos autorizados por las provincias, al efecto se limitó á declarar: que aunque el Banco Nacional no disfrutaria privilegio, sus créditos, sin embargo, no serían de inferior condición á los de aquéllos. Esto último, si se reflexiona, podría verificarse de dos maneras: ó porque en caso de ser legítimo el privilegio que invocaban los Bancos Provinciales, el Nacional cuando se encontrase en concurrencia con ellos, lo adquiriese también; ó porque no siendo constitucional, ni válido por consiguiente el indicado privilegio, no pudiese en realidad conferir á dichos Bancos legalmente, prelación alguna, ni sobre los créditos del Banco Nacional, ni sobre los demás comunes y llanos. Viéndolo bien, la espresada declaración, muy lejos de importar reconocerse en ella la legalidad de los enunciados privilegios fiscales con hipoteca tácita, acordados á sus respectivos Bancos por las provincias, implicaba al contrario, por inducción, su absoluto desconocimiento; pues el prescribir que los créditos del Banco Nacional, que según se establecía, debían ser considerados llanos y sin privilegio alguno, concurrirían sin embargo, con los de los espresados Bancos Provinciales, equivalía á declarar positivamente, aunque de un modo implícito, que en realidad tampoco éstos lo tenían. De otra suerte, fuera un error demasiado grosero equiparar tales créditos de los Bancos provinciales, á los de otro Banco no privilegiado, y de consiguiente comunes; pues que no puede suceder que un crédito con privilegio haya de concurrir en idénticas condiciones, con otro que no lo tenga, porque sería implicate. Privilegio, dice el art. 3875 del Cód., es el derecho dado al acreedor para ser pagado con preferencia á otro; luego si los Bancos Prov. por la mencionada ley, no tienen derecho á ser pagados con preferencia al Banco Nacional, que según ella misma, no sería más que un acreedor

(Continúa en la pág. 183)



5. Bienes embargados—Solo la tercería de dominio pue-

común, al cual en ningún caso se acuerda prelación, aunque se niegue á todos respecto de él, en realidad por esta ley, dichos Bancos no tienen el pretendido privilegio. Si todo privilegio importando una escepción al derecho común, debe ser obra de la ley—Gutiérrez Fernández, «Estudios Fundamentales», tomo 1º, págs. 75 y 127,— es claro que su sanción corresponderá á los mismos poderes encargados por la Constitución de establecer y definir el derecho común, y puesto que se trata de un privilegio de materia civil, es á la misma autoridad á quien compete dictar el Cód. Civ., es decir, á la Nación; de quien no debe presumirse haber renunciado al respecto sus altas prerrogativas, en todo ni en parte, á mérito solamente de una cláusula en extremo vaga y mal interpretada, del pacto de Nov. Si pudiera tolerarse en las provincias, el que so pretexto, de administración, aun después de sancionados los Códos. nacionales, continuasen legislando en las materias que les conciernen, con total prescindencia de sus disposiciones; ó que conservaran instituciones manifiestamente opuestas á sus principios, fuera por cierto imposible, alcanzar la unidad de jurisprudencia en la República, que procuraba la Const., al reservar á la Nación la sanción de los Códigos generales, aunque le fuera preciso separarse en esto, de lo que parecía prescribir el sistema federal que adoptaba. En particular, reconocer en aquéllas la facultad omnimoda de constituir Bancos armados de privilegios fiscales, en el sentido de la antigua Legislación, con hipoteca tácita ú otras exenciones equivalentes, sería admitir la perspectiva de catorce á quince bancos de esta clase, cuyas numerosas é importantes negociaciones, multiplicando tales gravámenes ocultos á la propiedad, harían inseguras é inciertas las trasacciones, é imposible el desarrollo del crédito privado. Desde luego, la sabia y progresista reforma del sistema hipotecario introducido por el Cód. Civ., calcada principalmente en la especialidad y publicidad de las hipotecas, é incompatible por tanto, con la conservación de las tácitas ó puramente legales que en consecuencia suprimía en absoluto, cual lo reclaman los principios de la ciencia económica y los adelantos de la jurisprudencia moderna, habría fracasado por completo, conservándonos en esta parte, al nivel de los países más atrasados. Al declararse por el art. 3115 del Cód. Civ., en términos absolutos, que no existe otra hipoteca que la convencional, han sido suprimidas por el mismo hecho, todas las tácitas ó legales, sin escepción de una sola, que no debe admitirse, desde que la ley no introduce escepción alguna ni distingue.

5--Art. 530 del Cód. de Proc.



de suspender el remate judicial de los bienes embargados.

—Jur. Com., tom. 6, pág. 282, Ser. 4ª.

6. **Bienes embargados**—Procede la condenación en costas al ejecutante, si conocía que los bienes embargados no eran de propiedad del ejecutado.—Jur. Com., tomo 8, pág. 301, Ser. 4ª.

7. **Bienes embargados**—Para la citación de remate, no

6—Porque es evidente la temeridad y malicia del vencido.

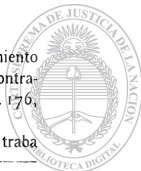
7—Para que la citación de remate no pudiera decretarse ni el juicio ejecutivo proseguirse sin mediar embargo de bienes, sería menester que este fuera un trámite esencial del mismo: pero no lo es, porque lo esencial en los juicios, como en todos los casos, es aquello sin lo cual, ni el juicio ni la cosa puede existir. No puede haber juicio sin demanda, ni puede haberlo sin emplazamiento ó sin contestación expresa ó ficta, ni puede haber sentencia sin juicio previo ni puede haber embargo de bienes sin bienes; todos esos son trámites ó hechos esenciales unos de otros, porque es imposible que los primeros existan sin los segundos. Pero el juicio ejecutivo puede seguirse hasta sus últimos trámites y hasta el cumplimiento definitivo de su objeto sin necesidad de tal medida. Puede, en efecto concluirse y realizarse el pago del crédito sin previo embargo de bienes: lo que no podría concebirse es el pago sin bienes con que verificarlo. El embargo, sea preventivo ó definitivo, en el juicio ejecutivo como en cualquier otro, es siempre y exclusivamente una medida de seguridad, establecida en favor del acreedor para garantizar el cumplimiento de la obligación correlativa á su derecho cuando se tema que este sea burlado por un deudor de mala fe; y este juicio, esa medida, como la brevedad de los procedimientos, ha sido establecida única y exclusivamente en beneficio del acreedor que comprueba su crédito con alguno de los títulos revestidos de tal autenticidad que el legislador los ha considerado suficientes para legitimar su procedimiento, mucho más expedito y eficaz que el del juicio ordinario. De ahí se deduce que no habiéndose establecido el juicio en miras de orden público, ni en interés de la moral y de la ley, pueda ser renunciado por el acreedor, que no está obligado á deducir acción ejecutiva por el hecho de tener como comprobante de su crédito un título que traiga aparejada ejecución, sino que puede elegir el juicio ordinario por cobro de pesos, si así lo prefiere, apoyado en la regla *invito beneficium non datur*, incorporada en nuestras leyes—art. 19



es indispensable la existencia de bienes embargados.—
Jur. Civ., tom. 8, pág. 141, Ser 4ª.

Const. Nal. y 5, 19, 21 y 53, Cód. Civil.—De ahí se sigue igualmente que el embargo que la ley autoriza á trabar, en caso que el deudor no pague en el acto de diligenciarse el mandamiento sea también renunciable por el ejecutante, desde que esa medida no ha sido establecida por razones de orden público, ni para garantizar la eficacia de una sentencia á dictarse y que en un último término puede ser desfavorable al ejecutante, sino única y exclusivamente en beneficio de éste y en garantía de su derecho. Si el embargo en este juicio fuera un trámite esencial del mismo, la sentencia de remate no podría existir sin él, y esto, no obstante, siendo posible que en esa sentencia se mande llevar adelante la ejecución ó no se haga lugar á ella, resultaría que si se decidiera lo segundo, no habría tenido razón de ser, y habría sido trabado solo por la posibilidad, de que hubiera llegado á suceder lo contrario. Basta pues, que una de las dos decisiones que debe contener la sentencia—art. 498 Cód. de Proc.,—haga innecesario ó inútil el embargo, para que no pueda ser considerado como esencial para el pronunciamiento de aquella, ni como establecido para garantizar el cumplimiento de la misma. Por otra parte, el hecho de que el embargo se decreta solo en vista del título presentado por el ejecutante, corrobora que lo que se trata de garantizar con él, es el derecho del mismo; y como ese derecho es renunciable, con más razón debe serlo el embargo que es un accesorio suyo, sin que para ello sea necesario que se renuncie al procedimiento ejecutivo, porque puede desaparecer lo accesorio sin que desaparezca ó deje de existir lo principal. La acción ejecutiva nace de la forma en que consta el crédito, y esa forma subsiste con embargo ó sin él, porque ni éste lo modifica, ni puede modificarla, ni es susceptible de enervar la acción desde que por su naturaleza es un simple accesorio del crédito cuyo cobro ejecutivo se persigue. Además, la citación de remate estatuida por el art. 485 del Cód. de Proc., no tiene otro alcance ni produce otros efectos legales, sino determinar la época fijada para que el ejecutado pueda oponer las excepciones previstas en los arts. 488 y 489, dentro del término y con las limitaciones de los arts. 486 y 487, para lo cual no es necesario que se haya trabado embargo de bienes. Tampoco se sigue como efecto necesario de la citación de remate, en el caso de existir bienes embargados, que en caso de no oponerse excepciones ó de rechazarse las que se opongan haya de procederse fatalmente á la venta de dichos

(Continúa en la pág. 186.)



8. **Bienes embargados**—Solo procede el levantamiento del embargo, sin tercería si los bienes no se encontraban en poder del deudor.—Jur. Com., tom. 10, pág. 176, Ser. 4ª.

9. **Bienes embargados**—Si el embargo de bienes se traba

bienes, y verificarse el pago del crédito con el producto de ellos; pues en poder del deudor está el evitar ese extremo, pagando la suma que se le cobra y las costas del juicio. Por último, de la circunstancia de que nuestra ley—art. 485,—conservando impropriamente las mismas palabras de la de Enjuiciamiento española, haya establecido el embargo de bienes como trámite previo de la citación de remate, no debe deducirse, ni que ese trámite sea esencial en el juicio, ni que sea irrenunciable, porque además de las consideraciones precedentes que bastarían para demostrar la ilegitimidad de una conclusión que pondría el precepto en pugna injustificada con el propósito de la ley y con los principios generales recordados, la disposición del art. 474, propio de nuestra ley revela que, para ello, la inhibición general de bienes suple al embargo en los casos que éste no puede trabarse; y siendo la inhibición una medida de idéntica naturaleza, y con igual fin que el embargo, aunque más amplia y enérgica que este, puesto que este se circunscribe á bienes determinados, mientras que aquella es extensiva á todos los que el inhibido pueda tener antes ó adquirir después de serlo, no sería lógico concluir que las palabras: «Hecho el embargo» con que empieza el art. 485 citado, deban tomarse restrictivamente á su tenor literal, y que el juicio deba proseguirse cuando concurra esa medida de seguridad y suspenderse á pesar de mediar otra más amplia y gravosa, para el deudor, cual es la inhibición.

8—Dadas las disposiciones de los arts. 66 y 529 y siguientes del Cód. de Proc., no puede declararse la improcedencia de un embargo, fuera del juicio ordinario, sino en el caso que los bienes embargados no hayan estado en posesión del deudor, porque solo en ese caso el embargo es improcedente por mandato mismo de la ley—art. 478 del Cód. citado.—Desconociéndose el carácter de poseedor que pueda invocar la parte que solicita el levantamiento del embargo, la simple oposición á éste es bastante para decretarlo, debiendo en consecuencia sustanciarse su petición por los trámites del juicio ordinario correspondiente.

9—El juez de 1ª Inst. dijo, que no procedía el embargo de los bienes por cuanto antes de trabarse aquel debía requerirse previamente el pa-



en virtud de exhorto, no procede mandamiento ni expresión de cantidad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 3ª.

Bienes embargados—Véase: *Disposición judicial*, números 1 y 2—*Tercería de dominio*, núms. 2, 3 y 4—*Tasación*, núm. 1—*Deudor solidario*, núm. 1.

1. **Bienes de la esposa**—Los bienes aportados por la esposa al matrimonio provenientes de herencia, se consideran propios, y en consecuencia las acciones reivindicatorias que sobre ellos se deduzcan, deben ser personal de la cantidad por la que se libra mandamiento. Pero la Cámara dijo, que de acuerdo con lo prescrito en el art. 471, inc. 3º del Cód. de Proc., debía trabarse el embargo por cuanto en el exhorto se solicitaba embargo de bienes del deudor. Esta es la verdadera doctrina que hemos sostenido siempre. Cuando se pide el embargo en una cosa que se va á reivindicar, debe trabarse el embargo en la cosa sin que se requiera cantidad líquida para librarse el mandamiento de ejecución.

1—Esta es la interpretación constante que se ha dado en la práctica á este punto del derecho. Según la legislación española son bienes propios de cada uno de los cónyuges lo que éstos llevan al matrimonio. Lo propio tiene establecido la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia Nacional. Se alegó no estar en vigencia la ley 49, tit. 5º, Part. 5ª. No es necesario examinar la legislación española desde la dominación de los Romanos y el primer Cód. de leyes godas, que se llamó el Fuero Juzgo y se publicó el siglo XII, hasta la Recop. de Indias y reales cédulas que se publicaron después, las que solo tuvieron fuerza de ley cuanto se comunicaron á las respectivas Audiencias; basta saber que las leyes de Partida quedaron en toda fuerza y vigor, aun después de la vigencia de las Leyes de la Rec., que no fueron refundidas en este Cód. Prueba así la ley 3ª, tit. 1º, lib. 2º, R. 1ª de Toro y 3ª, tit. 2 ab. 2 de la Nov.; por la que se establece los fueros que han de observarse para la discusión de los pleitos, que la ley y recopilada no alteró el régimen establecido en cuanto á los bienes dotales que la mujer llevaba al matrimonio ó adquiría después como herencia: régimen que subsiste hasta nuestros días incorporado en la legislación actual. Habrá error en deducir de los términos de la ley recopilada que pertenecen á la sociedad conyugal y se hacen comunes los bienes aportados por la mujer ó el marido al matrimonio, así como los heredados después, ó los comprados con los dineros propios, pues nunca se había puesto en duda la vigen-



nales contra ella y no contra la sociedad conyugal.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 426, Ser. 3ª.

1. **Bienes hereditarios**—El impuesto de sello debe recaer sobre los bienes transmitidos por herencia; los que corresponden al cónyuge supérstite por su parte de gananciales, no pueden ser gravados por el impuesto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 119, Ser. 3ª.

2. **Bienes hereditarios**—El conocimiento del juicio entre terceros sobre nulidad de un contrato de compraventa,

cia de la ley de Partida en cuanto prescribe al respecto, teniendo á su favor la doctrina de los autores y la jurisprudencia. F. S. C. N., Causa CXXV, que se registra en la pág. 397, tom. 1º, Ser. 2ª.

1—No es posible confundir en manera alguna los bienes hereditarios con los gananciales, que no adquiere el cónyuge sobreviviente á título de sucesión, sino como socio; razón por la que á la división de la herencia debe preceder indispensablemente, la liquidación de la sociedad conyugal y la determinación de las ganancias habidas en ella, lo cual se verifica no solo en caso de muerte de alguno de los consortes, sino aun estando vivos ambos, en los casos de separación de bienes y toda vez que termine la sociedad conyugal, aun cuando por otra parte, según expresa resolución del Cód., no puede haber sucesión de persona viva. En caso de condominio de la sucesión con cualquiera persona con ocasión de la división, sería necesario comprender en la herencia todo el valor de los bienes mancomunados, lo que ciertamente es insostenible. Asimismo, cuando el marido hubiese tenido sociedad con otras personas por razón de la liquidación de esa sociedad y regulación de sus utilidades, que necesariamente han de ser operaciones previas á la división de la herencia, fuera preciso para regular el impuesto del sello por la declaración de herederos, comprender entre los bienes de la sucesión todo el capital y las utilidades de dicha sociedad, lo que á primera vista es erróneo é inaceptable.

2—Vendido un inmueble perteneciente á una sucesión, se dijo de nulidad de la venta, declarándose: que su conocimiento correspondía al juez de turno y no al de la sucesión, porque aunque se trataba de una demanda sobre nulidad de un contrato de compraventa hecha á una testamentaria, la cuestión entre partes contratantes en nada la afecta. Nos parece abiertamente equivocada esta resolución, porque la cuestión sobre validez ó nulidad de la venta de un bien testamen-



corresponde al juez en turno, aun cuando tenga por origen un bien testamentario.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 400, Ser. 3^a.

1^a. **Bienes hipotecados**—El conocimiento y resolución del incidente pidiendo que los alquileres del bien hipotecado se imputen al crédito, debe correr por cuenta separada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 343, Ser. 4^a.

2^a. **Bienes hipotecados**—Los acreedores con privilegio general—honorarios de abogado y síndico—solo tienen prelación sobre los de privilegio especial—alquileres—en la parte necesaria para la venta de los bienes afectados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 214, Ser. 4^a.

Bienes hipotecados—Véase: *Acreedor hipotecario*, número 1—*Rematador*, núm. 1.

1^b. **Bienes de menores**—La dispensa de vender estrajudicialmente los bienes de menores, es facultativa de los tribunales.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 123, Ser. 3^a.

2^b. **Bienes de menores**—La tasación administrativa para

rio es un incidente de la testamentaria y como tal debe sustanciarse ante el Juez de lo principal. Esta es la práctica constantemente observada en los Tribunales.

1^a—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 3.

2^a—Véase: verb. *Abogado*, núm. 6.

1^b—El Inferior fundándose en el art. 442 del Cód. Civ. y no encontrando suficientes las esplicaciones dadas, consideró que no podía hacer uso de la facultad que le acuerda el citado art., pero la Cámara revocó el auto fundándose en que existía conveniencia para los mismos en la venta privada, dadas las propias esplicaciones que no fueron ampliadas por el Inferior, pero que este Tribunal aceptó.

2^b—El inmueble perteneciente al menor por muerte de su madre fué vendido privadamente, con autorización del Juez de la testamentaria y por la cantidad de cuarenta mil pesos de la antigua moneda corriente. El contrato de venta fué concertado en vida del padre del menor, otorgándose la escritura respectiva después de ocurrido el fallecimiento del primero, y hallándose el menor bajo tutela. Se tomó como base



el pago de la contribución directa, no llena las condiciones

la avaluación practicada para el pago de la contribución directa, como así lo afirmó el demandante y no lo negó el comprador. La ley civil protege, no solo la persona, sino también los intereses de los menores, siendo consecuencia de esta protección las garantías y formalidades que prescribe para la enajenación de sus bienes. Así, sean estos muebles ó inmuebles, deben ser vendidos en público remate, excepto cuando los primeros sean de poco valor, pudiendo únicamente dispensarse aquella formalidad si á juicio del Juez la venta estrajudicial es más ventajosa por alguna circunstancia extraordinaria, ó porque en la plaza no se pueda alcanzar mayor precio, y con tal que el que se ofrezca sea mayor que el de la tasación—arts. 441 y 442 del Cód. Civ.—Siendo la venta estrajudicial una escepción al principio establecido, parece deducirse que el requisito final del segundo artículo es insalvable, si por otra parte su espíritu no es otro que evitar con la formalidad preceptuada, que sean defraudados los intereses del incapaz. La misma razón filosófica que ha provocado en nuestro derecho contemporáneo la supresión de los privilegios acordados por las antiguas leyes á los menores, demostraría que las precauciones y garantías con que al presente los rodea, en su persona y sus bienes, se hace de indefectible y riguroso cumplimiento. Es más conveniente para los menores—dice el mismo Doctor Velez en la nota de remisión del primer libro del Cód.,—legislar con todo cuidado la gestión de la tutela, prever los perjuicios que á sus bienes ó á sus rentas les podría traer la negligencia de los padres ó la mala administración de los tutores, evitar el mal, y no satisfacerse con garantías de indemnizaciones, difíciles siempre de hacer efectivas, ó con remedios rescisorios de los actos de sus guardadores, que las más de las veces no les traen sino pleitos costosos y de resultados muy dudosos. No debe olvidarse, además, que al presente se trataba de un bien hereditario, en cuyo caso la tasación impuesta por la ley no podría tenerse como eficiente, sino en tanto se hubiese verificado con los requisitos y en la forma determinada por la misma, esto es, por peritos nombrados por las partes—art. 3466 del Cód. citado.—No podría ser de otra manera porque tales valuaciones son actos puramente administrativos, extraños á toda intervención y á todo control de parte del propietario, y las cuales por lo común no se acomodan á un procedimiento severo, ni menos dicen el justo valor de las cosas. La tasación administrativa no es, pues la tasación que quiere la ley civil, sometida á diversos trámites y formalidades. Y aun cuando no sea indispensable en la práctica de nuestro foro, que la operación de justiprecio sea ve-



que la ley civil exige para la venta de los bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 237, Ser. 3ª.

3. **Bienes de menores**—Es nula la venta de bienes en que tengan interés los menores, si no llenan los requisitos que la ley exige, ya se encuentren éstos bajo la patria potestad ó al cargo de tutor.—Jur. Civ., tom. 8, página 237, Ser. 3ª.

1. **Bienes muebles**—Su posesión es presunción de la

rificada por peritos titulados, pues basta en determinados casos que lo sean por vecinos idóneos que hubieren aceptado el cargo bajo juramento y propuestos por los interesados, cierto es que esa práctica no ha aceptado jamás las valuaciones fiscales, como base legal para las ventas públicas ó privadas en que aparecieren menores ó incapaces directamente interesados. No puede sostenerse que los padres para vender los bienes de los hijos que se encuentran bajo su patria potestad, solo necesitan tener autorización judicial—art. 297 del Cód. Civ., —sin que sea preciso para que ella se conceda que concurren las circunstancias que determina el artículo 442; porque el artículo prohíbe á los padres la venta de los bienes de sus hijos en términos que no difieren sustancialmente de las prohibiciones declaradas para los tutores, respecto de los bienes de sus pupilos, debiendo en uno y otro caso concurrir la respectiva autorización judicial. Las medidas de precaución y de seguridad son acordadas indistintamente á los incapaces, estén bajo el gobierno paterno ó bajo la autoridad de la tutela, y en este orden de ideas, no sería posible prescindir de las formalidades que tienden á garantizar la eficacia de esas medidas, sin esponerse á hacerlas ilusorias en la práctica de los negocios, en que van interesados esos mismos incapaces y sin contrariar fundamentalmente el espíritu de las disposiciones tuitivas de su derecho.

;—Véase la nota precedente.

1.—El tercerista fundó su acción en que el ejecutado le había vendido los objetos y muebles embargados, dejándolos depositados en la casa de dicho señor. El tercerista no comprobó que se hubiese hecho la tradición de ellos para establecer su dominio, resultando por el contrario, que en posesión de ellos se encontraba el ejecutado cuando se efectuó el embargo, por lo que legalmente debe presumirse que á él le pertenecían, siguiendo la disposición de que tratándose de muebles, la



propiedad del poseedor.—Jur. Com., tom. 4, pág. 133, Ser. 4^a.

2. **Bienes muebles**—Debe ser rechazada con costas la acción del tercerista que no justifica su dominio á los bienes muebles embargados cuya posesión tenía el deudor.—Jur. Com., tom. 4, pág. 300, Ser. 4^a.

3. **Bienes muebles**—Solo procede el embargo de bienes muebles si el deudor tiene la posesión.—Jur. Com., tomo 5, pág. 93, Ser. 4^a.

4. **Bienes muebles**—El embargo de bienes muebles, solo puede hacerse efectivo si el deudor tiene la posesión de ellos.—Jur. Com., tom. 8, pág. 178, Ser. 4^a.

posesión vale por título—art. 2412, Cód. Civ.—Se agregaron algunos documentos, pero ellos no podían comprobar el derecho del tercerista, porque su fecha cierta era la de su presentación en juicio—art. 1033—y es desde esa fecha que pueden oponerse contra terceros; y como el embargo fué trabado con anterioridad á la demanda, no pudieron destruir la presunción *juris* de que los bienes muebles pertenecían á quien los poseía, ni se acreditó que éste hubiese cambiado la causa de su posesión.

2—La posesión en los bienes muebles vale título—art. 2412 del Cód. Civ.—El que alega un hecho contra la presunción legal, debe destruir dicha presunción. Además el tercerista como actor debe comprobar los extremos de su demanda—Ley 1^a, tít. 14, Part. 3^a.—Si no los comprueba, debe abonar las costas—art. 221 del Cód. de Proc.

3—Véase el núm. 4.

4—Se alegó por el acreedor que el deudor vivía en la casa, donde debía trabarse el embargo; pero constituido allí el oficial de Justicia, se le informó que no vivía el ejecutado. El actor pidió que no obstante lo informado, debía trabarse el embargo porque allí vivía efectivamente el deudor. No se le hizo lugar, porque para trabarse el embargo es indispensable, decía la Cámara, «que el deudor esté en posesión de los bienes denunciados, según lo dispuesto en el art. 378 del Cód. de Proc.», y no consideró bastante para justificar el hecho de la posesión, la circunstancia alegada de vivir el deudor en la casa, desde que en ella vivían también otras personas.



5. **Bienes muebles**—La posesión tratándose de bienes muebles, es una presunción de propiedad que debe ser destruida por el tercerista.—Jur. Com., tom. 9, pág. 357, Ser. 4^a.

Bienes muebles—Véase: *Embargo*, núm. 9—*Testigos*, núm. 2.

1^a. **Bienes ocultados**—Habiéndose verificado la enajenación públicamente, no existe el delito de ocultación. Jur. Crim., tom. 2, pág. 215, Ser. 4^a.

1^b. **Bienes particulares**—Solo pueden embargarse si no existen de la sociedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 134, Serie 4^a.

Bienes particulares—Véase: *Embargo preventivo*, número 8.

1^c. **Bienes poseídos**—Debe rechazarse la tercería si el que la deduce no justifica que adquirió la posesión de

5—Art. 2412 del Cód. Civ., y Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^a—El art. 200 del Cód. Pen. establece en su inc. 2^o que el deudor que se alce con sus bienes, los oculte, enajene maliciosamente ó simule crédito en fraude de sus acreedores, debe ser penado con uno á tres años de prisión. En la enajenación pública no puede haber intención de defraudar, porque no existe la ocultación que requiere el precepto legal citado.

1^b—El art. 443 del Cód. de Com., ocupándose de la disolución y liquidación de las sociedades, dispone que los bienes particulares de los socios que no se incluyeron en la formación de la sociedad, no pueden ser ejecutados para el pago de la deuda social, sino después de ejecutados todos los bienes de la sociedad.

1^c—El contrato de compraventa no basta por sí solo para transferir el dominio, pues según nuestra ley, antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real—arts. 577 y 2609, Cód. Civ.—El contrato de compraventa no confiere al comprador el dominio de la cosa, sino un derecho personal para exigir del vendedor la entrega de ésta en propiedad—arts. 1323, 1409 y 1416.—Si antes de efectuarse la tradición sobrevienen obstáculos legales, un embargo por ejemplo, que impidan su cumplimiento, la existencia del contrato no podrá oponerse á terceros para exigir su consumación—art. 1199.



los bienes por medio de la tradición.—Jur. Com., tomo 10, pág. 250, Ser. 4^a.

1^a. **Bienes del procesado**—El fallecimiento del procesado hace procedente el fenecimiento del juicio criminal: las indemnizaciones deben exigirse ante la jurisdicción civil a la cual deben transferirse los bienes.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 229, Ser. 4^a.

1^b. **Bienes propios**—El tercero que para evitar el embar-

1^a—Las cuestiones referentes á la responsabilidad civil de los procesados, solo pueden ser resueltas por el juez al dictar sentencia—art. 496, Cód. de Proc. Crim.—Estinguida la acción criminal por la muerte del procesado, es obvio que las civiles deben correr la misma suerte respecto de la jurisdicción, porque lo contrario importaría dictar sentencia en lo principal sin base de juicio. Si en general la condenación en juicio civil por indemnización de daños causados por los delitos, no procede sin previa condenación del acusado en juicio criminal, que se encuentra pendiente, ésto no tiene lugar si el acusado muere antes, en cuyo caso subsiste exclusivamente la acción civil, la que siendo desde ese momento no solamente principal sino única y sin subordinación á otra alguna, debe ejercitarse ante los tribunales civiles. El art. 1096 del Cód. Civ. dispone que la indemnización del daño causado por delito, solo puede ser demandada por acción civil independiente e la acción criminal, y los Cód. de Proc. al establecer las jurisdicciones no han atribuido al Juzgado del crimen competencia escepcional para conocer tales acciones civiles, debiendo por consiguiente procederse respecto de ellas en la misma forma que con las otras acciones de la misma naturaleza.

1^b—En una ejecución seguida, se decretó el embargo de los bienes que adornaban una casa, y al procederse á su traba, el ocupante manifestó ser el único dueño de dichos bienes y depositó en el Banco una suma de pesos para impedir que el embargo se llevara á cabo. Luego se presentó pidiendo el levantamiento del embargo decretado en bienes de su propiedad y la devolución del dinero depositado. El juez, después de sustanciar en forma la causa, la resolvió rechazando la tercería con costas y disponiendo la entrega del dinero, siendo esta última parte de la sentencia la que motivó el recurso llevado ante la Cámara. ¿Con qué derecho puede pretender el acreedor cobrarse su crédito de un dinero que no pertenece á su deudor? La respuesta no es dudosa cuan-



go de bienes propios denunciados como del ejecutado, deposita una suma á nombre propio, tiene derecho á exigir su devolución y debe serle acordada, pero si deduce tercería, debe ser rechazada con costas.—Jur. Com., tom. 8, página 69, Ser. 4^a.

Bienes propios—Véase: *Depositante*, núm. 1.

1. **Bienes raíces**—La tasación de éstos fuera de la jurisdicción del Juzgado, es válida aun cuando los peritos carezcan de título científico.—Jur. Com., tom. 5, pág. 140, Ser. 4^a

2. **Bienes raíces**—Los tribunales de la República son

do como sucedía en el presente caso, el dueño del dinero no tiene vínculo jurídico alguno con el acreedor. El derecho de éste está espresamente reconocido en la ley, y se reduce á hacerse pago con los bienes de propiedad de su deudor—arts. 471, 474 y 529, Cód. de Proc.—En cuanto al rechazo de la tercería no fué materia de resolución por que esa parte de la sentencia quedó consentida en 1^a Inst. De manera que á este respecto no hay jurisprudencia establecida. En cuanto al sumario es exacto lo allí resuelto, porque los muebles no se embargaron á causa de la oposición deducida por su dueño.

1—Se dictaron las providencias necesarias para que un Juez de Paz asociado á dos vecinos, informase sobre el valor de una finca, que se ofreció á embargo, como un medio legal para determinarlo. Esta providencia fué consentida por las partes dándosele cumplimiento. A esa evaluación no se hizo observación por los interesados y solo el juez las hizo de oficio, lo que no procede desde que la evaluación fué hecha en la forma que fué ordenada por el Juzgado y consentida por las partes, siendo además la manera usual de la tasación en la Provincia de Buenos Aires, donde estaba ubicado el bien que se trataba de tasar por mandato judicial.

2—El Juez en lo Civ se declaró incompetente para conocer en la demanda interpuesta sobre escrituración de varias fincas situadas en esta Capital. Fundándose exclusivamente en la disposición del inc. 4º del art. 4º de la ley de Proc., el que declara que cuando se ejerciten acciones personales, para que la demanda pueda llevarse al juez del lugar del contrato, es indispensable que el demandado se encuentre allí al menos accidentalmente. Pero esta disposición, que nunca alcan-



competentes para conocer en el cumplimiento de con-

zaria derogar las prescripciones del Cód. Civ., para conciliarse con éstas debe restringirse al caso en que se dude entre los jueces de diversas provincias ó territorios de la República á cuál de ellos corresponde el conocimiento del asunto y de ninguna suerte es admisible para escluir la jurisdicción nacional confiriéndola á tribunales extranjeros. El art. 1215 del Cód. Civ. declara en términos espresos, que en todos los contratos que deben tener su cumplimiento en la República, aunque el deudor no fuere domiciliado ó no residiere en ella, puede sin embargo ser demandado ante los jueces del Estado. Esto supuesto, poco importaría, para establecer en el caso que nos ocupa la incompetencia del Juez en lo Civ. de esta Cap., el que el demandado tenga su domicilio fuera del asiento del Juzgado y no se encontrase aquí ni aun accidentalmente al tiempo de la demanda, desde que por otra parte se demuestra que esta ciudad debe considerarse como lugar del contrato. La razón es que el contrato versaba sobre cosas ciertas y de situación determinada, en cuyo caso, así como es evidente que su entrega se ha de verificar donde existen, es indudable también que el precio no siendo la venta á plazo se ha de satisfacer allí mismo, es decir que el contrato se ha de ejecutar donde se celebró. Se dijo que por entonces no se trataba de la ejecución del contrato de compra y venta, que no podía todavía considerarse perfecto, sino solamente de la escrituración, pues á su vez ésta se refiere á cosas ciertas y de situación determinada dentro de la capital, como son las fincas, no pudiendo entenderse razonablemente que la obligación de hacer se cumpliría en otra parte que donde se contrata. El Cód. establece en general el principio de que los contratos deben ser juzgados, en cuanto á su validez ó nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan, por las leyes del lugar en que hubieren sido celebrados, en lo cual parece indicarse también que, generalmente hablando, deben de intervenir en las cuestiones, que sobre estos puntos se susciten, los jueces del lugar en que el contrato se celebró. El art. 1213 al declarar como Juez competente para entender sobre un contrato celebrado fuera del domicilio del deudor, el del domicilio de éste, requiere que las circunstancias indiquen que aquél no debía cumplirse en el mismo lugar en que se celebró. Ahora bien, este requisito faltaba manifestamente en el caso que examinamos, porque aunque el demandado se encontraba fuera de su domicilio, hallándose en esta capital y refiriéndose el contrato á fincas situadas en ella, nada indicaba seguramente, que la escrituración se haría fuera de este lugar ni los compradores podían jamás suponer tal cosa. Lejos de esto, en el contrato mismo se indi-



tos sobre bienes situados en su jurisdicción, aun cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero.—Jur. Civ. tom., 8, pág. 360, S. er. 3^a

1^a. Bien reivindicado—Para que proceda un embargo preventivo sobre el bien *reivindicado*, deben acompañarse justificativos que hagan verosímil la acción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 71, Ser. 3^a.

Bienes del socio— Véase: *Sociedad disuelta*, núm. 1.—*Embargo preventivo*, núm. 8.

1^b. Bienes suficientes—Es facultativo de los Tribunales de comercio la concesión de moratorias, siempre que no

caba claramente que aquí se verificaría la escrituración; porque debiendo satisfacerse aquí el precio, por serlo de cosa cierta y de venta al contado y debiendo, de verificarse el pago simultáneamente con la escrituración. Esto no podría realizarse sino en la suposición de que aquí también se había de otorgar la escritura. Tenemos entonces, que en vez de indicar las circunstancias, que el contrato no se había de cumplir donde se celebraba, por el contrario, denotan claramente, que era en esta ciudad donde se debía ejecutar. Tenemos también, que si el contrato debía cumplirse en esta República el demandado bien ha podido serrequerido ante sus Tribunales aunque no se hallase domiciliado, ni se encontrase aquí cuando fué demandado, al menos accidentalmente. Estos fueron los fundamentos aducidos por el Dr. Cortés como fiscal de las Cámaras, los que á su vez fueron reproducidos por ésta para revocar la sentencia del Inferior en la que se declaró incompetente. La S. C. N. resolvió asimismo un caso en el sentido del sumario. Se trataba de la escrituración de un inmueble situado en Corrientes: el contrato se celebró allí, y el actor pidió que el demandado que residía en Buenos Aires, fuera emplazado para que ocurriese al Juez de Corrientes para estar á derecho. El Dr. Tedin declaró que el Juez competente lo era el del domicilio del demandado; el Juez de Corrientes á su vez dijo, que él era el competente y se resolvió la cuestión en el sentido del sumario Véase el caso de Guastavino con Denegri. El sumario está en contra de otros casos resueltos y puede verse Inst., tom. 5^a, verb. *Juez competente* núm. 2, donde se estudia detenidamente la cuestión, pero los casos no son análogos.

1^a—Véase: verb. *Acción reivindicatoria*, núm. 5.

1^b—Art. 1591 del Cód. de Com.

exista prueba plena de que hay bienes para el pago íntegro de todos los acreedores.—Jur. Com., tom. 4, página 150, Ser. 4^a.

Bienes suficientes—Véase: *Embargo*, núms. 5 y 10—*Inhibición*, núm. 4.

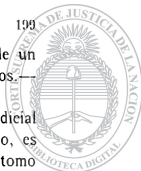
1^a. **Bienes de terceros**—No procede embargo preventivo de bienes que se encuentran en poder de tercero, que alega ser propietario.—Jur. Com., tom. 9, pág. 341, Serie 4^a.

1^b. **Bienes vendidos**—El mandato general amplio, es bastante para llevar á efecto el contrato de compraventa sin

1^a—Art. 478 del Cód. de Proc.

1^b—Considerando objetivamente el mandato, los autores y los Códos. establecen su división en general y especial, clasificación admitida por el art. 1879 de nuestro Cód. Civ., teniendo sin embargo cuidado de expresar en la nota explicativa, que esa división es meramente doctrinaria, y que las disposiciones consignadas en los artículos siguientes salvan las dificultades prácticas que puedan ocurrir. El mandato general, según nuestro art. 1879, comprende todos los negocios del mandante, y el especial uno ó ciertos negocios determinados. El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración, dice el art. 1880, aunque el mandante declare que no se reserva ningún poder y que el mandatario puede hacer todo lo que juzgase conveniente, ó aunque el mandato contenga la cláusula de general y libre administración. Se deduce claramente de la comparación de estos artículos y de los que les siguen inmediatamente, que un poder general concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración, pero que cuando contiene cláusulas espresas especiales, comprende todos los negocios del mandante que hayan sido especialmente determinados; así pues, un mandato general es á la vez con frecuencia especial con relación á los actos para cuya celebración está espresamente autorizado el mandatario. El mandato especial dice Laurent, se fija por el negocio que forma su objeto. Toullier supone lo que en efecto sucede ordinariamente, que especializando el negocio, el mandato especializa por el mismo hecho los actos que el mandatario tiene el poder de realizar; así, si yo doy poder para vender mi casa ó para vender todos mis bienes, el mandato es especial y al mismo tiempo



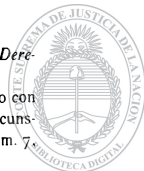


que sea necesario poder especial para la venta de un bien ni determinación expresa de su ubicación y linderos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 419, Ser. 3ª.

2. Bienes vendidos—El comprador en remate judicial de un bien testamentario que no cumple el contrato, es responsable de la diferencia de precio.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 64, Ser. 3ª.

indica los actos que el mandatario tiene facultad de hacer, es decir, actos de propiedad—tom. 27, parágrafo 409.—El art. 1881, no dice absolutamente que se requiera «mandato especial» para que el mandatario pueda celebrar legalmente en nombre de su mandante los actos que enumera, sino que son necesarios poderes especiales, esto es, facultades especiales que bien pueden encontrarse espresamente consignadas en un mandato general. Poderes especiales, según nuestro Cód. es lo que los comentaristas del Cód. francés, que el codificador ha seguido de cerca en esta materia inspirándose en sus opiniones, llaman mandato espreso. Así dice Pont, no es solamente el mandato para vender tal inmueble, de conferir hipoteca á tal acreedor, de constituir hipoteca sobre tal inmueble ó cualquier otro mandato, cuyo objeto esté así particularizado, lo que constituye el mandato especial. El poder de enajenar todos los inmuebles del mandante, es también un mandato espreso lo mismo que el constituir hipoteca sobre todos los inmuebles, aunque los inmuebles para vender ó gravar con hipoteca no estén en manera alguna individual ó nominalmente designados, porque la naturaleza de los actos á realizarse por el mandatario, enajenación, constitución de hipoteca, está especificada de la manera más neta,—§ 900, tom. 1º.—Aubry y Rau son quizás más terminantes. El poder para transmitir, dicen, ó para hacer actos de disposición, no puede resultar más que de un mandato espreso, es decir, de un mandato que autorice al mandatario en términos formales á transmitir ó á hacer tales ó cuales actos que entren en esa categoría. Pero no es necesario, agregan, que un mandato semejante indique de una manera particular y determinada el negocio ó los negocios que deben formar su objeto. Así, el mandato para vender los inmuebles del mandante, constituir hipotecas ó para contraer préstamos, es suficiente para autorizar al mandatario para realizar los actos de esa naturaleza, aunque no indique nominalmente los inmuebles á venderse ó á hipotecarse, y aunque no determine la importancia de la suma del préstamo—§ 412, tom. 4º.

2. Según prescripción terminante del art. 519 del Cod. de Proc.



Bienes vendidos—Véase: *Honorarios*, núm. 19—*Derechos y acciones*, núm. 1.

1^a. **Bigamia**—El delito de bigamia, debe ser penado con cuatro años y medio de prisión, si no existen circunstancias atenuantes ni agravantes.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 72, Ser. 4^a.

2. **Bigamia**—La bigamia agravada con amenazas como medio de ocultar el delito, debe ser penada con cinco años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 325, Serie 4^a.

3. **Bigamia**—Sin circunstancia agravante, debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 397, Ser. 4^a.

Boletín oficial—Véase: *Autenticidad*, núm. 6.

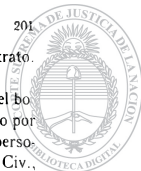
1^b. **Boleto de compraventa**—De mercaderías, carece de

1^a—La pena establecida por el art. 143 del Cód. Pen. es de tres á seis años. No concurriendo ninguna clase de circunstancias, debe tomarse el término medio que son cuatro años y medio.

2—El delito de bigamia está previsto y penado por el art. 143 del Cód. Pen. En cuanto á las amenazas, su penalidad está determinada en este caso por el inc. 2^o del art. 168.

3—Véase el caso precedente.

1^b—Los actores se presentaron esponiendo que el demandado les compró una partida de carbón según boleto que inhibieron, cuyo detalle y demás condiciones se relacionaban en una cuenta corriente que adjuntaron; que esa cuenta demostraba que se les estaba adeudando un saldo, que en consecuencia venían á demandar al deudor á fin de que en oportunidad se le condenase al pago de dicho saldo con más los intereses y costas del juicio. La única prueba producida consistió en un documento cuya firma del demandado fué autenticada. Si bien por el documento citado se comprobó la existencia del contrato de compraventa de carbón al precio que en él se indicaba, no era menos cierto que de la prueba rendida en autos no se había demostrado la entrega de dicho carbón, prueba que le incumbía al actor. En ausencia de la prueba no se puede apreciar el silencio del demandado como reconocimiento de la verdad de los hechos á que se refiere la demanda.



fuerza legal para justificar el cumplimiento del contrato. —Jur. Com., tom. 10, pág. 378, Ser. 4^a.

2. **Boleto de compraventa.**—El martillero que en el boleto no hace constar que el remate se ha verificado por cuenta y orden de un tercero, puede ser obligado personalmente al cumplimiento de la obligación. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 82, Ser. 3^a.

2.—El actor entabla demanda contra el demandado, para que éste otorgue la escritura de venta, á su favor, del terreno á que se refiere el boleto espedido. El demandado se opone á lo solicitado por el actor, sosteniendo que éste carece de acción directa contra él, desde que al otorgar el boleto mencionado ha procedido como mandatario del propietario del terreno vendido, según lo comprobó el documento que acompañó. Con estos antecedentes y previa la sustanciación del juicio en la forma que corresponde, se dictó el fallo recurrido condenando al demandado á otorgar á favor del demandante la escritura del terreno que menciona el documento de la referencia. El demandado se alzó de esta resolución. El martillero al suscribir el boleto procedió en nombre propio, contrayendo por consiguiente para el comprador una obligación directa y personal. Es verdad que el demandado pretendió haber procedido en ese acto como mandatario del propietario firmante del documento en que se autorizaba la venta. Pero es el caso que en el boleto no figuraba el nombre del propietario ni se probó que fuese éste realmente el propietario del terreno á que el boleto citado se refiere. Admitiendo, sin embargo, por vía de hipótesis, que el martillero hubiese procedido como mandatario del propietario habría siempre estado obligado para con el actor, porque no acomodándose el contrato de compraventa á los términos del poder conferido, habría debido probar el demandado que el propietario había ratificado el contrato ó que el comprado reconocía el poder con que procedía el martillero,—arts. 1931 y 1933, Cód. Civ.—Pero ninguna prueba se produjo á este respecto por el demandado. Si el contrato lo celebró el martillero en su nombre y no en el de su mandante, es indudable que el comprador tenía acción para pedir el cumplimiento de las obligaciones que de ese contrato emanaban contra el martillero, con quien contrató, y no contra el comprador con quien no le liga ningún vínculo de derecho.



3. **Boleto de compraventa**.—La falta de cumplimiento de la obligación de hacer, hace procedente la pérdida de la seña si en el boleto de compraventa existía espresamente determinado el pacto comisorio.—Jur. Civ., tom. 9, página 126, Ser. 3ª.

4. **Boleto de compraventa**.—No procede el cumplimiento del contrato de compraventa por instrumento privado, si se justifica la existencia de la causa resolutoria prevista en el boleto.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 187, Ser. 3ª.

5. **Boleto de compraventa**.—Cumplido el hecho previsto en el boleto de compraventa para rescindir el contrato, no

3—Los arts. 652 y siguientes del Cód. Civ., según los cuales la cláusula penal es aquella en que una persona para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta á una pena ó multa en caso de retardar ó de no ejecutar la obligación, incurriendo en la pena estipulada, dice el art. 654. El deudor no cumple con la obligación en el tiempo convenido, aunque por justas causas no hubiese podido verificarlo.

4—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase el núm. 3.

5—El actor había vendido á los compradores, un terreno, estipulándose en el boleto respectivo lo siguiente: «en caso que tuviera obstáculo por parte de los títulos no encontrándolos en perfecto estado, quedará por parte de los compradores rescindido el contrato.» Poco antes se había pactado también que los compradores se obligaban á escriturar á los veinte días después de haber revisado los títulos, que el vendedor entregaría al escribano elegido por ellos. La entrega de los títulos al escribano tuvo lugar en tiempo, y de su examen resultaban deficiencias que obstaculizaron la escrituración. En esto hubo conformidad de partes: cinco meses después del otorgamiento del boleto, se presentaron los compradores pidiendo escrituración, á la que se negó el vendedor oponiendo la caducidad de su obligación. La promesa de venta, según la cláusula transcrita, estaba subordinada al cumplimiento de una condición suspensiva, la de que los títulos resultaran perfectos para los compradores. Y así se evidencia ante el art. 553 del Cód. Civ., que declara formada bajo condición suspensiva la obligación que debe existir ó no, según que un acontecimiento futuro ó incierto suceda ó no. En el caso presente existiría ó no la obligación de escriturar, según que los compradores encontraran ó no perfectos los títulos; luego la escrituración dependía de un hecho futuro é incierto;



procede su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 204, Ser. 3ª.

6. **Boleto de compraventa**—El término para la escrituración fijado en el boleto de compraventa, no importa un pacto resolutorio, y su vencimiento solo faculta á las partes á exigir judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom 9, pág. 255, Ser. 3ª.

7. **Boleto de compraventa**—Privado, debe reducirse á escritura pública, aun después de vencido el término que él fija para la escrituración, si no existe pacto comisorio espreso.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 265, Ser. 3ª.

8. **Boleto de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, el firmante está obligado al cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública en el plazo que determine el Juzgado—Jur. Civ., tom. 9, pág. 299, Ser. 3ª.

9. **Boleto de compraventa**—Privado, solo importa una obligación de hacer escritura pública y no procede en consecuencia el cumplimiento del contrato definitivo en él estipulado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 316, Ser. 3ª.

10. **Boleto de compraventa**—Vencido el término fijado

y por consiguiente pues, nos encontramos en presencia de una condición suspensiva. Si resultaron deficientes los títulos para escriturar, como lo reconocieron los mismos demandantes, se hace de rigurosa aplicación al caso el art. 548 del Cód. Civ., que resuelve el pleito en favor del demandado.

6—De acuerdo con la sana doctrina sentada por la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Condición resolutoria*, núm. 1.

7—De conformidad con lo establecido en el núm. 6 y su nota.

8—Si el boleto no esp. esa término para la obligación, se entiende—arts. 1187 y 1197 del Cód. Civ.

9—Así lo tiene resuelto casi constantemente la jurisprudencia. Véase Inst., tom. 5º, verb. *Boleto de compraventa*, núms. 10, 12 y 14; y *Escritura pública*, núm. 7.

10—El boleto decía en una de sus cláusulas así: (Queda asimismo



como pacto comisorio, queda sin efecto el boleto de compraventa; las prórrogas deben justificarse por escrito, no basta la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 3ª.

11. Boleto de compraventa—Aun cuando exista pacto

estipulado que si por cualquier circunstancia los compradores no escriturasen dentro del plazo fijado de 90 días, la venta quedará igualmente nula y sin efecto.» La demanda fué deducida por los compradores, quienes alegaron la existencia de una prórroga establecida de común acuerdo. La prueba les incumbía y no podía comprobarse sino por medio de prueba escrita, siendo inadmisibles las testimonial—arts. 1184, inc. 1º; 1191 y 1193 del Cód. Civ.—En cuanto á la primera parte del sumario, su fundamento está en el art. 1204 del Cód. Civ.

11—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de tres votos contra dos, la minoría dijo, que el boleto establecía entre otras cláusulas que los demandantes Capella y Villafañe, compradores de los terrenos, entregarían al vendedor Solari el 12 de Octubre del mismo año, la cantidad de 5 000 pesos moneda nacional, como parte del precio y garantía del fiel cumplimiento del contrato, siempre que los títulos resultaran sin deficiencia alguna previniendo que la escritura respectiva se otorgaría á los tres meses siguientes contados desde la fecha indicada; que esta venta quedaría sin efecto en caso de no otorgarse la escritura, con pérdida de los 5.000 pesos que debía recibir el vendedor como seña y garantía de la obligación, como asimismo que en caso de no hacerse la entrega de esos 5.000 pesos el 12 de Octubre, quedaría por este hecho sin valor ni efecto el compromiso contraído, estableciéndose al final testualmente: «Este compromiso de compraventa se reducirá á escritura pública en el acto que los señores Capella y Villafañe entreguen los 5.000 pesos moneda nacional referidos». Se trataba de un contrato de compraventa de bienes raíces que no había quedado cumplido como tal por la falta de la escritura pública requerida por derecho, debiendo en tal caso ser considerada como una obligación de hacer, según lo prescribe el artículo 1187 del Cód. Civ. Pero es de notar que esa obligación contenía un pacto expreso, por el cual el vendedor se reservó la facultad de no cumplir el contrato por su parte en el caso de que los compradores no hubieran verificado la entrega de los 5.000 pesos en el plazo estipulado, lo que se había alegado como excepción al contestar la demanda, no habiéndose encontrado justificado en autos que la falta de cumplimiento de esa obligación, procediese de un hecho



comisorio, si la condición no se cumplió por culpa del vendedor, el boleto de compraventa debe ser reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom 10, pág. 284, Ser. 3^a.

imputable al vendedor. Aceptando que la estipulación contenida en el boleto, de quedar sin efecto en el caso de que no se otorgase la escritura de promesa de venta en la época fijada, debe entenderse, si esto fuera por culpa de los compradores, resultaba que esa falta de cumplimiento les era imputable desde que no habían verificado la entrega de la suma estipulada como garantía del contrato, ni aparecía la prueba de que hubieran ofrecido hacerlo en tiempo oportuno, tanto más, si se tiene presente que tratándose de un contrato que establece obligaciones recíprocas, una de las partes no puede demandar su cumplimiento á la otra si no probase ella haberlo cumplido ú ofreciese cumplirlo por su parte. La mayoría sostuvo que el boleto comprendía, entre otras cláusulas, la que obligaba á los compradores á entregar al vendedor el día 12 de Octubre, la cantidad de 5.000 pesos moneda nacional, como seña y parte de precio y para el caso que esta entrega no se verificase en el día señalado, declaraba nulo y sin ningún valor el compromiso de venta en él concertado. Es de advertirse que se establecía asimismo en el boleto, que el compromiso debería reducirse á escritura pública en el acto que los compradores hiciesen entrega de la suma espresada. Se trataba como se ve de dos operaciones que han debido hacerse en un mismo acto, la entrega de la seña y la escritura de promesa de venta. Ahora bien, demandada por los compradores la escrituración, en uso del derecho que acuerdan los arts. 1185 y 1187 del Cód. Civ., el vendedor la resistió alegando que no habiéndose cumplido en tiempo, la condición, esto es, la entrega de los 5.000 pesos por culpa de los compradores, el compromiso había quedado por ello sin efecto. Existían elementos decisivos que demostraba la voluntad de los demandantes de formalizar la convención en los términos estipulados en el boleto, y que si ella no se redujo á escritura pública en el día designado, requisito indispensable para exigir la entrega de la seña, fué debido á causas que en manera alguna les eran imputables, las cuales motivaron entre vendedor y compradores un convenio para el cumplimiento de las obligaciones respectivamente contraídas, en una fecha posterior á la fijada en el boleto. Habiéndose, pues, comprobado la conformidad de las partes para prorrogar los términos fijados en el boleto, en virtud de causales que alejan toda idea de culpa de parte de los compradores, no es justo ni equitativo invocarlos ahor para resistir una demanda que se apoya en disposiciones tan espresas como las que antes se han recordado.



12. **Boleto de compraventa**—Debe convertirse en escritura pública el boleto privado de compraventa, sin resolver sobre aquellas cláusulas ó condiciones que importen el cumplimiento del contrato en él estipulado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 403, Ser. 3ª.

13. **Boleto de compraventa**—El boleto privado de compraventa de un inmueble, debe reducirse á escritura pública antes de que puedan resolverse judicialmente las cuestiones que se susciten sobre el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 187, Ser. 3ª.

14. **Boleto de compraventa**—No procede la rescisión del boleto de compraventa, en tanto no se justifique la autenticidad de la firma que lo suscribe.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 408, Ser. 3ª.

15. **Boleto de compraventa**—La condición debe justificarse por el que alega su existencia si ella no consta del boleto privado de compraventa.—Jur. Civ., tom. 11, página 379, Ser. 3ª.

12—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cámara. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Boleto de compraventa*, núms. 10, 17 y 32; *Escritura pública*, núm. 7.

13—De conformidad con el principio sentado en el número precedente.

15—Demandado el comprador de un inmueble para el otorgamiento de la escritura se escepionó manifestando que no obstante ser exactos los hechos fundamentales de la demanda, no podía escriturar por causas ajenas á su voluntad que el vendedor conocía perfectamente desde que hizo la compra, y eran que los terrenos en cuestión debían ser escriturados á su vez al demandado, y no lo habían sido por depender de gestiones judiciales. No constando en el boleto, condición alguna, ni habiéndose intentado siquiera la prueba de que con aquiescencia del comprador, la promesa de venta hubiera sido modificada, debía condenarse al demandado como se le condenó á escriturar dentro de un plazo determinado, bajo apercibimiento del pago de daños y perjuicios, apercibimiento que es de ley estricta—Cód. Civ., art. 1187.



16. Boleto de compraventa—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe ordenarse su inmediata reducción á escritura pública; las objeciones al título solo deben ser juzgadas al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 329, Ser. 3ª.

Boleto de compraventa—Véase: *Contrato de seguros*, número 3—*Comprador judicial*, núm. 3—*Obligación de hacer*, núm. 12.

1ª. Boleto de pasaje—La expedición de boletos de pasaje por una empresa de transportes por ferrocarril, para recorrer las vías de otra, importa el cumplimiento de un mandato, y en consecuencia la responsabilidad por los accidentes recae siempre sobre la propietaria de la vía, aun cuando no lo fuera del vehículo.—Jur. Civ., tom. 8, página 148, Ser. 3ª.

1ª. Bolsa de Comercio—La comisión de venta en remate de títulos en la Bolsa, debe fijarse en el medio por ciento, si lo efectúa un corredor—Jur. Com., tom. 8, pág. 119, Ser. 4ª.

Bolsa de comercio—Véase: *Informe de la Cámara Sindical*, núm. 1—*Edictos*, núm. 4—*Acciones embargadas*, número 1—*Moneda de oro*, núm. 2.

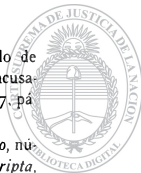
1ª. Bonos—Siendo los bonos emitidos por el Banco Hi-

16—Véanse los núms. 12 y 13

1ª—Véase: verb. *Accidentes*, núm. 1.

1ª—De la resolución contenida en el caso indicado no resulta cuál fué la comisión cobrada. Solo dijo la Cámara que: «Siendo arreglada á derecho la comisión asignada al corredor por cuanto la venta de títulos á que se hace referencia tuvo lugar en remate, se confirma el auto apelado.»

1ª—Los bonos hipotecarios tienen por origen la ley de la Prov. de Bs. As. de 14 de Julio de 1891, que creó esos títulos para el pago del saldo «del cupón de cada trimestre y semestre» de las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco respectivo, lo cual se expresa con perfecta



potecario de la Provincia de Buenos Aires un título de deuda pública, su falsificación importa un delito acusable por el Ministerio Público.—Jur. Crim., tom. 7.ª página 362, Ser. 4.ª.

Buena fe—Véase: *Comprador*, núm. 4—*Concurso*, número 1—*Posesión*, núms. 3 y 9—*Obligación prescripta*, núm. 1.

Buenas costumbres—Véase: *Contrato ilícito*, núm. 1.

1. **Bultos**—Su recepción y remisión no importa por claridad en el art. 4.º de la citada ley, transcripto al dorso de cada bono y en el que se mencionan los fondos que quedan afectados para su amortización. Ahora bien, como por la ley de la Prov. de 7 de Enero de 1882—art. 1.º—«la Prov. es responsable de las operaciones que el Banco Hip. haga de acuerdo con las leyes que lo rigen» y como dicho Estado en vez de cumplir con las responsabilidades contraídas por la ley antedicha, ha lanzado los nuevos títulos contrayendo nuevos compromisos, en vez de pagar su deuda en efectivo como debió hacerlo, es evidente entonces que se trata de *títulos de deuda pública*, no solo por el carácter del establecimiento por el cual han sido emitidos sino también por razón de su origen. Por otra parte, según lo dispuesto por el art. 52 de la Ley org. del Banco Hip., los que falsicasen cédulas hip., están equiparados á los falsificadores de fondos públicos de la Prov., disposición que se halla perfectamente de acuerdo con las responsabilidades asumidas por la misma. Es evidente pues, que se trata de una falsificación de *títulos de deuda pública* prevista por el art. 283 del Cód. Pen., cuya sanción no se altera en nada porque esos documentos sean al portador ó no, por cuanto las condiciones de los mismos no afectan ni pueden afectar ni su carácter, ni su origen que es la razón de su fuerza.

1.—Fueron los hechos fundamenteles de la demanda deducida los siguientes: 1.º el no haberse entregado en su destino un cajón de cuyo transporte se encargó una sociedad demandada, mediante la guía que se presentó, sino después de once meses contados desde su expedición en esta ciudad; y 2.º en la falta de diversos objetos de los contenidos en dicho cajón. Era un hecho que no fué puesto en duda por las partes el de que los demandantes entregaron en esta ciudad á la compañía «Espresso Villalonga para ser transportado á Rio Janciro á la consignación de un comerciante de dicha plaza, el cajón con mercaderías de



parte de la empresa de transportes, un reconocimiento de la existencia de las mercaderías detalladas por el cargador.—Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 4^a.

2. Bultos—La demora de su entrega obliga á las empresas de transporte á la devolución del flete cobrado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 4^a.

Bultos—Véase: *Término para el transporte*, núm. 1.

1. Buque—El constructor de un buque, aun cuando lo retenga indebidamente en su poder, solo puede exigir el

bazar y mercería que motivó la demanda. Ese cajón fué recibido por la empresa portadora en 17 de Enero de 1891, para ser enviado por el vapor «Washington» y no llegó á su destino sino el 7 de Diciembre del mismo año. Esta considerable é injustificable demora en la entrega de las mercaderías, privó á la compañía del derecho al flete total, conforme á lo dispuesto en la primera parte del art. 188, Cód. de Com. Esta misma disposición, y por el hecho espresado, impone también al portador la obligación de indemnizar el mayor daño directo é inmediatamente causado por el retardo; pero en el caso presente, si bien el actor había alegado haber sufrido perjuicios que estimaba en 2.000 pesos oro, no los justificó en manera alguna como le correspondía hacerlo, razón por la cual la indemnización debía limitarse á la ya espresada de la pérdida ó devolución de la cantidad recibida por la empresa como precio del transporte. En cuanto á la falta de mercaderías debía tenerse presente ante todo que la prueba de los hechos en que se fundaba la demanda correspondía al actor, de acuerdo con la ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a. A su respecto se produjo una prueba insuficiente pues ésta solo consistió en un informe de la aduana de Río Janeiro. El no pudo considerarse como la prueba evidente de que al cajón asegurado le faltaban las mercaderías que se mencionaban, porque la factura con la cual fueron cotejadas las mercaderías emanaba del actor, sin que los demandados hubiesen aceptado su exactitud, pues en el seguro no se determinaba cuál era el contenido de ese cajón. No habiéndose producido otra prueba que justificase que las mercaderías á que se refería ese informe fueron las que formaron parte de su contenido, no puede decirse que ese hecho hubiese quedado comprobado.

2—Véase la nota precedente.

1—La venta del buque que pertenecía á un concurso se encontraba detenida por la falta de entrega del buque y de las piezas ó enseres que le

embargo del precio de venta en tanto no se haya verificado su crédito.-- Jur. Com., tom. 2, pág. 104, Ser. 4^a.

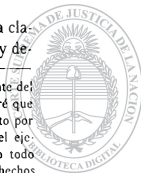
Buque—Véase: *Consignatario de un buque*, núm. 1.

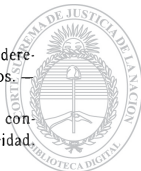
eran anexos y que según se afirmaba se hallaba en poder del dueño del local donde se encontraba el buque por no habérsele satisfecho su importe ni el arrendamiento por el local que ocupaba dicho buque. Cualquiera que sea la legitimidad del crédito, su monto y privilegio, no era la oportunidad en que el Juzgado podía pronunciarse atento el estado en que se hallaba el juicio y teniendo en cuenta que el síndico se había opuesto á su verificación y privilegio reclamado. En tal caso dados los grandes perjuicios que recibía el concurso con la demora de la entrega y teniendo en consideración que puede quedar afectado al crédito reclamado el precio del buque vendido con lo que se concilian los intereses de ambas partes y lo que es también arreglado á derecho, se ordenó se entregase al síndico, en el término de cuarenta y ocho horas de notificado, el buque con sus piezas y anexos.



1. Caducidad—Aun cuando el ejecutado no defina claramente el derecho que le asista, el tribunal puede y debe.

1.—Citado de remate el ejecutado, opuso la excepción resultante del art. 683 del Cód. de Com., esponiendo que el tenedor del pagaré que motivaba la ejecución, por no haberlo protestado á su vencimiento por falta de pago y por no haber dado al firmante del aval que era el ejecutado, el aviso prevenido en el citado art. 683, había perdido todo derecho contra él. Al oponer esta excepción manifestando los hechos que la constituían, el ejecutado la calificó de falsedad é inhabilidad de título. Esta calificación es errónea y tales excepciones debían ser rechazadas: la de inhabilidad de título por no ser procedente—art. 676—y la de falsedad, aunque es procedente, ni se había probado, ni se había intentado probar, ni concordaba con los hechos ú omisiones á que se refería. La calificación correcta que correspondía teniendo en cuenta lo alegado es la de *caducidad*, la cual es admisible, según el art. 676 del Cód. de Com. Ahora bien, se sostuvo y no se negó, que el pagaré no fué protestado á su vencimiento, y que no se dió al firmante del aval el aviso preceptuado por el art. 683 del Cód. de Com., dentro de los términos del art. 663. Desde luego es de aplicarse lo establecido por el citado artículo 683 declarando, que el tenedor del pagaré había perdido su acción contra la persona que le dió el aval. Esta es una de las causas de caducidad que el derecho establece, y los tribunales pueden y deben tomarla en cuenta, aunque no se la haya dado esa calificación. Los jueces deben atender, á la verdad de los hechos que se aleguen, y prescindiendo del error que exista en la definición de un hecho ó de una excepción legal, teniendo presente lo dispuesto en la regla 26, tít. 34, Part. 7ª, y en la Ley 10, tít. 17, Lib. 4º, R. C.





be tomar en cuenta y declarar la caducidad que el derecho establece siempre que resulte justificada en autos.—Jur. Com., tom. 3, pág 300, Ser. 4^a.

2^a. Caducidad—La falta de protesto del pagaré y consiguiente aviso al avalista, hace procedente la caducidad.—Jur. Com., tom. 10, pág. 127, Ser. 4^a.

Caducidad—Véase: *Excepción de caducidad*, núms. 1 y siguientes — *Protesto*, núm. 5.

Caja social—Véase: *Accionista*, núm. 1.

Calificación—Véase: *Créditos verificados*, núm. 1 — *Defraudación*, núms. 23, 24 y 26.

Calígrafo—Véase: *Falsedad de firmas*, núm. 1.

1. Calumnia—El sobreseimiento de la acusación, hace improcedente la excepción de litispendencia en el juicio por calumnia.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 235, Ser. 4^a.

2^b. Calumnia—El acusado por este delito, puede reconvenir en el mismo juicio.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 235, Ser. 4^a.

3. Calumnia—El poder general del acusado, con facul-

2^a—Véase la nota precedente.

1—El sobreseimiento se dictó de conformidad á lo dispuesto en el art. 434, inc. 1^o, Cód. de Proc. Crim. En tal caso, el sobreseimiento así dictado, es irrevocable y cierra absoluta y definitivamente el juicio, según la expresa disposición del art. 436 del citado Cód., y no puede en consecuencia sostenerse que existe pendencia de causa.

2^b—La ley 4^a, tit. 1^o, Part. 7^a, permite al acusado recriminar á su acusador por delito cometido contra el mismo ó los suyos. En la ausencia de disposición, en el Cód. de Proc. Crim., que limite esta facultad que las antiguas leyes concedían al acusado, debe estarse á lo en ellas dispuesto, sobre todo si se tiene en cuenta que hay positiva conveniencia pública en que ambas acciones se acumulen y sean materia de un solo juicio, disminuyendo con ella, la multiplicidad de los procesos.

3—El Cód. de Proc. Crim., no contiene disposición alguna que limite en causas por calumnias la facultad que las leyes generales acuer-



tades especiales, es bastante para entender en el juicio por calumnia, sin que se requiera mandato especial.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 233, Ser. 4ª.

4. Calumnia—En estas causas el acusado puede nombrar apoderado. —Jur. Crim., tom. 2, pág. 233, Ser. 4ª.

5. Calumnia—Siendo el objetivo único del juicio político, la destitución del funcionario público á quien

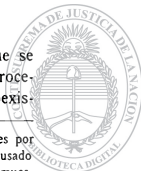
dan á las partes para hacerse representar en juicio por medio de procurador. La circunstancia de ser general el poder, no podía perjudicar la personería invocada por el representante por ser de fecha posterior á la iniciación del juicio y expresar que lo faculta para representarlo en todos los asuntos judiciales de cualquiera clase y naturaleza *que al presente tenga* y puedan ocurrirse en lo sucesivo. Así resultaba manifiesta, la voluntad del acusado, de que su apoderado lo representase en el juicio ya pendiente, y del que tenía ya conocimiento por haber sido citado y haber comparecido á un juicio de conciliación que tuvo lugar. Esto mismo declaró la Cámara en la causa de Pizarro con Del Campo y Riveros. Véase: tom. 2º, pág. 591, Ser. 2ª, Jur. Civ., é Inst., verb. *Poder general*, núm. 1, tom. 3º.

4—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 12, de este tomo; y verb. *Calumnia*, núm. 3, tom. 3º, Inst.

5—Con arreglo al art. 509 del Cód. de Proc. Crim., el recurso de nulidad solo tiene lugar contra las resoluciones pronunciadas con violación de las formas sustanciales prescriptas por el mismo Cód., ó por omisión de formas esenciales del procedimiento, ó por contener éste defectos de los que por expresa disposición del derecho anulen las actuaciones. Se dedujo el recurso de nulidad, pero no se indicó por los recurrentes cuáles eran las formas esenciales violadas ú omitidas, ni cuáles los defectos capaces de anular actuaciones. Se alegó diciendo que pendiente un juicio político ante el Hon. Cong. Nac. con motivo de las acusaciones hechas contra el Juez acusador por el acusado, no podía resolverse el juicio de calumnia sin que previamente aquel asunto tuviese una solución definitiva. Y, mucho tiempo después de notificada y consentida la providencia de autos, que cierra toda discusión, se reiteró igual petición manifestándose que un procedimiento contrario sería causa de nulidad. Tales aserciones están destituidas de fundamento legal. El juicio político que se siga contra un juez ante el Sen. Nac., tiene por único objeto su remoción del puesto que de-

se forma, y no el castigo de los delitos comunes que se le hayan imputado, es improcedente la nulidad del procedimiento en el juicio de calumnia, fundada en la coexis-

sempaña y puede fundarse no solo en delitos calificados de tales por la ley, sino en hechos que sin tener ese carácter, inhabiliten al acusado para el desempeño de las funciones de la magistratura. Esto demuestra por sí solo que tal juicio no podría ejercer influencia, cualquiera que fuese su resultado, en la resolución de una causa por calumnia. Por otra parte, la iniciación de semejante juicio no puede entregar á ese mismo juez, privado de todas las armas legales que el derecho consagra, á los ataques de la calumnia ó de la injuria. El juicio político es un privilegio acordado en favor de los magistrados, y no es posible concebir que tal privilegio los coloque en la imposibilidad de defender su honor ó su persona. Además, cualquiera que sea la doctrina de la influencia del juicio político con respecto al funcionario sometido á él, relativamente al juicio común ordinario, ella no puede tener aplicación en el caso que nos ocupa. La teoría constitucional sobre el juicio político americano incorporada á nuestra carta fundamental por su art. 52, es la de que solo alcanza á la remoción del funcionario é incapacidad para el desempeño de sus funciones públicas, pero en manera alguna á los simples particulares, quienes por sus actos delictuosos solo están sometidos á sus jueces naturales y á los procedimientos comunes de las leyes penales. En el caso que motivó esta cuestión no era el juez el acusado, sino el acusador del juez en el juicio político, simple particular sometido á juicio por querrela de calumnia entablada á su vez por el juez; no se trataba en el proceso de condenar ó absolver al funcionario acusador sino de absolver ó condenar al particular ofensor, y aun cuando en la hipótesis de que el acusado probase la verdad de los hechos imputados, pudiera darse lugar á un procedimiento criminal contra el juez, y desde luego á su previa remoción por juicio político; la prerrogativa de este juicio no puede ser invocada por el acusado de calumnia para sustraerse á la responsabilidad del delito de que es acusado, porque tal prerrogativa solo es propiedad del juez, funcionario investido de ella, y no del acusado simple particular que no se encuentra bajo su amparo. Por otra parte, la iniciación y tramitación del juicio político contra un funcionario, no le inhabilita para la defensa de su honra y de sus derechos personales, porque no lo despoja de su capacidad natural de hombre, que es el fundamento de los derechos individuales garantizados por la Const. Nac. La teoría contraria im-





tencia de ambos juicios.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 55, Ser. 4^a.

6. Calumnia—El acusado debe contestar espresamente la acción, no es bastante pedir su rechazo.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 246, Ser. 4^a.

7. Calumnia—No puede fundar una acusación por calumnia, la imputación de un hecho que la ley no califica como delito, aun cuando importe una injuria.—Jur. Criminal, tom. 4, pág. 264, Ser. 4^a.

portaría un atavismo, incorporado á los procedimientos judiciales de nuestro país en la época de civilización que alcanzamos, la bárbara *capitis diminutio máxima* del imperio romano.

6—Se dijo por el Juez de 1^a Inst. que «el escrito se limitaba á pedir el rechazo de la demanda sin entrar al fondo de la cuestión.» La Cámara confirmó el auto *por sus fundamentos*. ¿Cuándo se pide el rechazo de una demanda, no se niegan implícitamente los hechos invocados y la insubsistencia del derecho alegado? ¿Qué ley establece una forma sacramental para contestar la demanda? ¿Cómo puede pedirse el rechazo de una demanda sin entrar al fondo de la acción? La Cámara está en error cuando sostiene que la demanda tiene una forma especial de redacción para ser presentada. Basta que se pida el rechazo para que ella esté contestada en forma.

7—En un artículo publicado en un diario de esta capital, se dijo que un funcionario público al entrar á un Club, había destrozado el retrato del General San Martín, lo que implicaba una injuria hecha á la memoria de uno de los más esclarecidos próceres de la independencia. El querellante al acusar esa imputación, decía: «La calumnia no puede ser más páfida: se pretende levantar contra mí, la ira de todo el pueblo que se siente ofendido en la persona del más grande de sus próceres, y se acusa de haber cometido este acto indigno á un coronel del Ejército Nacional, institución que más le venera y respeta. La injuria que semejante aserción envuelve, pesa sobre mí con fuerza... etc.» Siendo el delito de calumnia la falsa imputación de un delito que tenga obligación de acusar el Ministerio Fiscal ó de delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones, y como en el caso citado se trataba de la falsa imputación de una injuria que si fuera acusable, solo lo sería por el ofendido y no por el Ministerio Fiscal, no era procedente la acción de calumnia.



8. Calumnia—Los tribunales ordinarios de la capital son competentes para entender en los juicios por calumnias cometidas por la prensa.—Jur. Crim., tom. 5, página 102, Ser. 4ª.

9. Calumnia—El rechazo, de oficio y sin sustanciarla, de la acusación por injuria no hace cosa juzgada; el que-

8—Si bien el artículo 32 de la Const. prohíbe al Cong. Nac. dictar leyes que restrinjan la libertad de la prensa ó establezcan sobre ella la jurisdicción federal, las disposiciones del Cód. de Proc. Crim., dictado por dicho honorable Cong., en virtud de la soberanía legislativa que le acuerda el art. 67, inc. 27 de la Const., y que establecen y reglamentan el ejercicio de la jurisdicción común en la Cap. de la Rep., en nada contrarian la precitada disposición constitucional. En efecto, el Cód. ha establecido que la jurisdicción *ordinaria ó del fuero común* en la capital es ejercida por Jueces Correccionales del Crim. y Cám. de Apel., y que ella se extiende al conocimiento de todos los delitos comunes cometidos en el territorio de la capital y salvo los casos especialmente exceptuados por el derecho público interno—arts. 24 y 25, incs. 1º y 3º Código citado.—El delito de calumnia, ya se cometa por medio de la prensa ó por cualquier otro medio, es un simple delito común cuya clasificación y penalidad se hallan exclusivamente regidas por los arts. 177 y siguientes del Cód. Pen., y corresponde en tal caso su juzgamiento á los jueces del mismo fuero común que lo es el del Crim., pues la jurisdicción no se altera por el origen del nombramiento del magistrado que la ejerce, sino que nace de la ley misma. La jurisprudencia constante y uniforme seguida hasta el presente, tiene establecida la competencia de los Trib. ordinarios de la Cap. para conocer en los delitos de calumnia é injuria, cuando el instrumento empleado para su comisión fuese la prensa, y esta jurisprudencia ha sido confirmada por la Sup. Corte Nac., el más alto intérprete de la Const., de una manera que no deja lugar á dudas, como puede verse en sus fallos, y especialmente en el que se registra en el tomo 21 de la série 2ª, página 540.

9—El Juez Dr. García, hijo, opinó de distinto modo, diciendo que la acusación formulada ya había sido resuelta definitivamente ordenándose el archivo de las actuaciones, y aunque la parte acusadora inicie nueva acusación, fundándose en otra clasificación que haga del delito que se diga cometido, ella no es procedente por que los hechos en que se fundaban ambas acusaciones eran los mismos y sobre ellos existe cosa juzgada. El Código de Procedimientos, en su art. 7º, dice expresa-



rellante puede iniciar acción por calumnia fundada en los mismos hechos.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 143, Ser. 4^a.

10. Calumnia.—El mayor ó menor valor en que el denunciante fije la defraudación, no basta para calificar de dolosa la acusación y probada la existencia del delito,

mente que nadie puede ser procesado ni castigado sino una sola vez por la misma infracción. La Cámara revocó esta resolución fundándose en que el auto de sobreseimiento dictado en el primer expediente seguido sobre injurias, no podía equipararse en sus efectos á una sentencia definitiva, por cuanto no había sido siquiera pronunciado pendiente juicio, sino antes de entrar á él, y precisamente para evitarlo, por reputarse que la acción por injuria interpuesta por el querellado no era la procedente con arreglo á derecho. En consecuencia, la nueva acción por calumnia en sustitución de la anterior repelida de oficio, á raíz de su interposición, no solo no es atentatoria de la cosa juzgada sino que se ejercita en virtud de la salvedad implícitamente contenida en la resolución que se dictó. En presencia de estos antecedentes, no cabe invocar el art. 7º del Cód. de Proc. en materia penal, desde que el acusado no fué anteriormente sometido á juicio, ó procesado por los hechos que se le imputaban. De que nadie pueda ser procesado dos veces por un mismo delito no se sigue que no deba serlo jamás, cuando por error, inadvertencia ó diversidad de criterio se ha intentado una acción que los llamados á juzgarla desecharon por improcedente resistiendo la formación de causa.

10.—La sentencia ejecutoriada, declaró que constaba la existencia de los delitos y que el procesado estaba convicto y confeso de haberlos perpetrado, aunque no existían las mismas pruebas y confesión del procesado respecto de otras denuncias por mayor cantidad. El acusado fué condenado á tres meses de arresto, daños y perjuicios y pago de costas. Esta simple relación manifiesta que en manera alguna puede considerarse el acusador como reo de calumnia, por que no se hallaban probados los delitos por él mencionados. El acusado había cometido el delito de defraudación y con reiteración, así lo declaró la sentencia ejecutoriada; y desde luego, el perjudicado por tales delitos tenía justa causa para sospechar que él también fuera autor de las otras sustracciones de objetos que se le habían hecho. Al denunciar los nuevos delitos no puede suponerse que procedía con voluntad criminal, ni dolo ni intención de perjudicar contra derecho al acusado, sino en el ejercicio de la acción conveniente para recuperar lo que se le había sustraído.



es improcedente la acusación por calumnia que el reo inicie fundado en la diferencia del valor.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 317, Ser. 4^a.

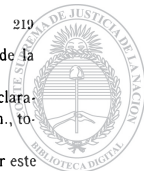
11. Calumnia—La persona á quien se imputa la publicación acusada, no es parte en el juicio de calumnia iniciado contra el editor, en tanto no se haya justificado la imputación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 363, Ser. 4^a.

12. Calumnia—El instrumento que la contiene puede

Si el reo hubiera resultado inocente, se comprendería la procedencia de la acción, pero declarado culpable, no es procedente la acción que solo tiene por base las circunstancias de que solo se ha probado en juicio una parte de los delitos acusados.

11.—Promovida originariamente la querrela contra un diario, éste manifestó por intermedio de su editor, que el autor del delito acusado era el señor X. Emplazado dicho señor, compareció á estar á derecho un mandatario investido de poder general, cuya personería se declaró insuficiente para intervenir en un procedimiento de esta naturaleza. Citado una vez más el Señor X. resultó que se hallaba en Europa. Cuando el periódico acusado pretendió declinar en el Señor X. sus responsabilidades legales, el querellante salvó espresamente su derecho contra el diario acusado, para el caso probable de que el presunto autor de la publicación negara lo aseverado á su respecto, ó eludiera en cualquiera otra forma las responsabilidades del juicio, siendo esta protesta espresamente aceptada por el Juzgado, y declarándose después que las ulteriores del proceso debían entenderse directamente con el editor del diario. De aquí resulta claramente que, no siendo el señor X. parte legítima en el juicio, nada tenía que ver con él, mientras no se comprobara que éste era el autor de la publicación mencionada. Si el señor X. era el autor del suelto calumnioso que dió nacimiento á la acción instaurada, nada más justo que presentar los originales ó en su defecto cualesquiera otra de las numerosas pruebas admitidas en derecho. Pero mientras tal no suceda, solo el diario es el acusado en la querrela, y por lo tanto solo él debe intervenir en las diferentes diligencias del juicio. Por un auto había quedado resuelto que la causa debía entenderse con el editor del diario sin perjuicio de que énte comprobase que el autor del artículo acusado era X. Tal comprobación no se hizo por el querellado, ni siquiera se intentó hacer con posterioridad á esa resolución.

12.—El art. 594 del Cód. de Proc. se limita á declarar improcedente la



ser acompañado con posterioridad á la deducción de la querella.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 393, Ser. 4^a.

13. Calumnia—Su acusación debe determinar claramente el delito imputado al querellante.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 394, Ser. 4^a.

14. Calumnia—Procede la prueba del acusado por este delito sobre falta de malicia al denunciar los delitos en que se funda la acción.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 411, Ser. 4^a.

15. Calumnia—El acusador por calumnia está obligado á absolver posiciones si las preguntas no se refieren al delito imputado por el acusador.—Jur. Crim., tom. 5, página 412, Ser. 4^a.

16. Calumnia—Para que exista calumnia, debe impu-

querella por calumnia, cuando no se acompaña el instrumento que la contenga, sin hacer perder por esa omisión subsanable, el derecho de ejercitar la acción de calumnia; la demora del querellante para presentar el mencionado instrumento no importa la falta de instancia á que refiere el art. 174.

13—Según el art. 177 del Cód. Pen., se requiere que el querellante establezca con claridad el delito imputado al acusador. Así lo enseña también Pacheco, tom. 2^o, pág. 169, núm. 4.

14—La prueba debía versar tan solo en cuanto ella tendiese á demostrar la falta de malicia en la denuncia hecha anteriormente por el acusado de calumnia, y sin que esto importase abrir á prueba los hechos establecidos en la sentencia en que se había sobreseído definitivamente y que siempre tiene todos los caracteres de la cosa juzgada.

15—Según lo dispuesto en el art. 470 del Cód. de Proc. Crim., el acusado puede poner posiciones á su acusador desde que la causa se reciba á prueba hasta la citación para sentencia. Si bien la jurisprudencia ha reconocido como excepción á esta regla las acusaciones por calumnia, en razón de que el querellante no podía ser obligado á confesarse autor del delito que constituye la calumnia, tal excepción no puede aplicarse al en que las preguntas contenidas en el pliego que presente la defensa no importe la imputación de un delito de que el acusador pueda ó deba confesarse autor.

16—La imputación se hizo en esta forma: el señor X. ha autorizado á mi letrado para que pueda hacer pública manifestación de que



tarse al acusador la consumación de un delito acusable por el Ministerio Fiscal; la explotación, si bien importa una falta de moralidad, no puede conceptuarse defraudación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

17. Calumnia—La imputación de actos que importen falta de delicadeza, no pueden ser acusados como calumnia, pero importan una injuria grave.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 192, Ser. 4^a.

18. Calumnia—Para que exista, debe imputarse la comisión de un delito acusable por el Ministerio Público.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 389, Ser. 4^a.

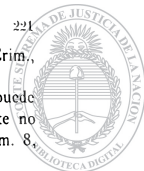
19. Calumnia—En tanto no se impute un delito, la

el Dr. Don Florentino Vocos lo ha explotado en la cantidad de cuatro mil y pico de pesos nacionales, etc.» Como se ve, no se dijo que el Dr. Vocos hubiese defraudado al señor X. sino que lo había explotado, lo cual es diferente. La defraudación es un delito previsto y penado por el Cód., la explotación puede tener el carácter de falta de delicadeza, pero no asume los caracteres de delito. Desde luego, en estas aseveraciones no puede haber calumnia, porque ellas no importan la imputación de delito que deba acusar el Ministerio Público—art. 177 del Cód. Pen.,—y no es necesario averiguar si son falsos ó no los hechos aseverados.

17—En el caso del número precedente se dijo, que á pesar de que no existía calumnia en las frases vertidas, ellas constituían injuria porque aunque las frases no constituyan una calumnia, es indudable que ellas deben considerarse como injuriosas y comprendidas en el art. 181, Cód. Pen., porque no concurren los requisitos del art. 180. Resulta de aquí que dados los antecedentes de autos, no es admisible la excepción opuesta por el querellado de que esas frases injuriosas las haya escrito como letrado y en defensa de los derechos de su cliente á quien correspondía la responsabilidad que de ellas pudiera resultar. La libertad de la defensa, por más amplia que sea, no autoriza á emplear la injuria ó la calumnia como medio de obtener fines lícitos, y esta doctrina la ha sostenido esta Cám. entre otros casos en la causa Pizarro con del Campo—sentencia de 7 de Junio de 1893.

18— Art. 177 del Cód. Pen.

19 - La querrela fué presentada fundándose en un documento que



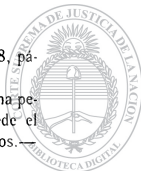
acusación por calumnia es improcedente.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 125, Ser. 4ª.

20. Calumnia.—La detención por la Policía, no puede fundar una acción por calumnia, si el denunciante no imputó al detenido delito alguno.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 392, Ser. 4ª.

21. Calumnia.—Un mismo hecho no puede fundar la decia así: «Certificamos que D. N. N. ha sido empleado en nuestra casa tres meses, habiendo tenido que despedirlo por falta de capacidad; haciendo notar en beneficio de quien deba ocuparlo en el futuro, que salió debiendo á la caja, y espresándose hacia los firmantes de la presente de modo bastante informal á las observaciones que se le hacían al respecto.» Se ordenó que el querellante ocurriera donde correspondiera por cuanto el caso no estaba comprendido en el art. 177 del Código Penal.

20.—La Cámara fundó esta resolución diciendo que: La detención no es la que puede dar motivo á la querella de calumnia, porque no está librada al arbitrio ó voluntad del particular que la pide sino de la autoridad que la decreta, siendo ésta la responsable del abuso que pueda cometer al respecto: la responsabilidad del particular nace del hecho imputado que sirve de base á aquélla para proceder, y en el caso que nos ocupa el hecho imputado ni fué falso ni lo fué como delito cometido por el querellante.

21.—Un telegrama que originó el juicio, decia así: «Posadas 22.—Señor Director de «El Correo Español»: Hoy á las once he sido agredido en la calle por el Juez Federal. Tengo señalada la mano izquierda y ensangrentada con la presión de las uñas. Telegrafio al Presidente de la Suprema Corte Federal poniendo en su conocimiento el hecho para que ponga remedio antes de llegar á consecuencias fatales.» El Juez Nacional del Territorio de Misiones, acusó al autor del telegrama por los delitos de calumnia é injuria, pidiendo la aplicación del máximo de la pena, invocando en su favor los arts. 177 y 179, Cód. Pen. El Juez del Crimen absolvió al acusado, y al pronunciar la sentencia absolutoria, que fué apelada por ambas partes, uno por lo principal y otro por las costas, demostró concluyentemente la improcedencia de la acumulación ó coexistencia de las acciones de calumnia é injuria por un mismo hecho, y que el imputado en el telegrama no podía constituir á la vez ambos delitos. Demostró igualmente que solo en caso de constituir calumnia, podría ser acusado ante su jurisdicción, pues si



acusación de calumnia é injuria.—Jur. Crim., tom. 8, página 251, Ser. 4^a.

22. **Calumnia**.—Si el acusado por calumnia no ha pedido en oportunidad prueba testimonial, no procede el reconocimiento de documentos emanados de terceros.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 117, Ser. 4^a.

23. **Calumnia**.—La imputación de un hecho que no puede ser calificado como delito, no puede fundar una acusación por calumnia.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 251, Ser. 4^a.

24. **Calumnia**.—El acusador por calumnia, no está obligado á absolver posiciones.—Jur. Crim., tom. 8, páginas 147 y 313, Ser. 4^a.

fuera simplemente injurioso, caería bajo la del Juez Correccional, con arreglo á los arts. 182, Cód. Pen.; 28, inc. 2º y 29, Cód. de Proc. Crim.

22—Véase: verb. *Acusado*, núm. 2.

23—En el caso citado en el núm. 21 se declaró que no había lugar á calumnia, porque lo que constituye calumnia, según el art. 177 del Cód. Pen. es: 1º la falsa imputación de delitos que tenga obligación de acusar el Ministerio Público; y 2º la imputación de delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones. Que el hecho imputado no daría lugar á la acción fiscal, el Inferior lo demostró y el querellado lo reconoció al espresar agravios. Tampoco podía considerarse calumnioso con arreglo á la 2ª parte del art. 177, porque los delitos á que esa parte del art. se refiere, son los que el mismo Cód. enumera y castiga en la Sección segunda y especialmente en el título segundo que trata de los delitos peculiares á los empleados públicos. No es la imputación de cualquier vicio ó falta de moralidad que redunde en mengua del empleado ó funcionario la que habilita á éstos para deducir acción de calumnia, sino la imputación de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, y basta la lectura del telegrama inserto en el núm. 21, para convencerse de que el hecho imputado, ni por su naturaleza, ni por el lugar en que se dice haber ocurrido, puede considerarse comprendido en la última parte del art. 177.

24—Véase: verb. *Acusador por calumnia*, núm. 1.



25. Calumnia—La calificación indeterminada de ladrón, importa una injuria; en tanto no se impute un hecho concreto, no puede fundar una acusación por calumnia.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 321, Ser. 4^a.

26. Calumnia—Si el acusado por calumnia da explicaciones que importen una retractación, debe archivar el expediente.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 203, Ser. 4^a.

27. Calumnia—No puede calificarse de calumnia la acusación, si por la clase de los hechos y constancias de autos han existido decisiones judiciales que han conceptualizado la imputación verosímil.—Jur. Crim., tom. 10, página 278, Ser. 4^a.

Calumnia—Véase: *Posiciones*, núms. 10 y 18.

Calumnia encubierta—Véase: *Calumnia equívoca*, número 1.

1. Calumnia equívoca—O encubierta, lo es la imputación de acciones desdorosas, aunque en sí mismas no importan un delito, si fuesen el medio para la comisión de delitos previstos y penados por la ley.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 55, Ser. 4^a.

1^a. Calumnia manifiesta—Siendo el prevaricato del juez

25—La querella se fundaba en que en un día determinado en un almacén que el acusado tenía en una finca alquilada, había dicho en presencia de testigos que en su casa había habido ladrones, y que tales ladrones lo era el querellante; que esto lo ha seguido diciendo el acusado á cuantas personas se le ocurre, y ya en el barrio era público que dice que hay un ladrón y que tal día había ido el acusador á robar á su casa. La Cámara dijo, que no determinándose en el escrito de acusación que se le haya imputado al querellante un delito concreto, debía ocurrir donde correspondía.

26—Véase: verb. *Acusado*, núm. 3.

27—Véase: verb. *Acusación*, núm. 8.

1^a—Un abogado y un procurador imputaron á un juez el delito de prevaricato previsto por el art. 245 del Cód. Pen., delito que decían había perpetrado al dictar sentencia en una causa. Hacían consistir el



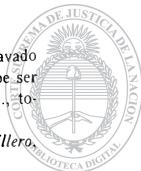
un delito acusable por el Ministerio público, el acusador

prevaricato en el hecho de haber dejado el referido juez de aplicar el texto espreso del art. 1202 del Cód. Civ. en el juicio de la referencia, haciendo una aplicación antojadiza no obstante de regir incuestionablemente esa disposición el punto en litigio y de haber sido ella invocada en autos según podía verse en varios pasajes de un escrito presentado en aquel juicio. Tal imputación fué ratificada por ambos querrellados, espresando el abogado «que si bien leyó á su protacinado ese escrito, las apreciaciones que en él se contenían le pertenecían exclusivamente, y que por lo tanto, solo á él le corresponden las responsabilidades que pudieran caberle». Contestando la querella los acusados de calumnia insistieron en su ratificación y ofrecieron la justificación ó prueba de los hechos pertinentes. La imputación no la halló la Cám. constatada en autos y para ello se fundó en que «El art. 245, inc. 1º del Cód. Pen., dice: que comete prevaricato el juez que espide sentencia definitiva ó interlocutoria que tenga fuerza de tal, si fuese contraria á la ley espresa invocada en los autos, salvo prueba de que ha procedido por error. Se decía que bastaba leer la sentencia que en testimonio corría en autos para adquirir el convencimiento de que el señor juez, acusado de prevaricato no había fallado contra la ley espresa. El art. 1202, Cód. Civ., dice así: «Si se hubiese dado una señal para asegurar el contrato ó su cumplimiento, quien la dió, puede arrepentirse del contrato ó puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede también arrepentirse el que la recibió, y en tal caso debe devolver la señal con otro tanto de su valor....» Ahora bien: el caso resuelto por la sentencia fué el siguiente: Don Julián Balaguer compró en remate judicial una casa á la testamentaria de Doña Josefa González de Saubidet y entregó en el acto de celebrarse el remate la cantidad de cinco mil pesos como señal. Aprobado el remate y en la oportunidad de depositar el precio, Balaguer y el señor López Gomara presentaron escrito diciendo que el primero había comprado para el segundo; que éste era el verdadero comprador y que con él debían entenderse todas las diligencias ulteriores. No pudiendo López Gomara cumplir con la obligación de depositar el precio del inmueble, celebró un convenio con los herederos de la sucesión, por el cual se le acordó un plazo para el pago de dicho precio, obligándose el comprador á abonar veinte y cinco mil pesos más como compensación de los perjuicios que la demora ocasionaba á los herederos. Para garantizar el cumplimiento de la obligación de pagar el precio y los veinticinco mil pesos más, López Gomara se conformó en quedar inhibido de disponer de su casa calle de Piedad, y en que si al vencimiento de



que no lo justifica en oportunidad, es reo de calumnia manifiesta.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 55, Ser. 4^a.

los sesenta días del plazo, no hubiese satisfecho esas sumas, los herederos pudieran hacer efectivas las responsabilidades que contrae, mediante la acción ejecutiva correspondiente sobre la casa indicada de la calle Piedad. Vencido el plazo sin que López Gomara pagase, se inició el juicio ejecutivo y se llevó adelante hasta venderse en remate público la casa de la calle Piedad en cuya oportunidad López Gomara entabló demanda de desistimiento de la compraventa, pretendiendo dejar sin valor ni efecto los referidos convenios é invocando el derecho que acuerda al comprador el art. 1202 del Cód. Civ. antes citado. El juez de 1^a Inst. sostuvo con insistencia en su resolución que el convenio que queda relacionado operó una novación de obligaciones, y que por consecuencia, si bien el contrato primitivo daba á López Gomara el derecho que acuerda el art. 1202 al comprador que ha entregado una seña, tal derecho había caducado en razón de la novación. El señor Juez sostuvo pues que el art. 1202 no es aplicable al punto á causa de que López Gomara había hecho renuncia implícita, pero no por eso menos incuestionable del derecho de desistir de la compraventa, perdiendo la seña al realizar la novación de la referencia. Entonces, el juez no había fallado contra ley expresa como lo pretendían los procesados, sino que prescindió de la aplicación testual del art. 1202, porque según su criterio de magistrado, no era aplicable á la cuestión que se debatía. El texto mismo de la sentencia desvirtúa por completo la imputación de prevaricato, y de la prueba que se acumuló en autos tampoco resultaba en modo alguno comprobada aquélla. Así tenemos que los procesados imputaron al señor juez el delito de prevaricato, sin que en la estación oportuna hubiesen probado semejante imputación. La consecuencia de todo esto, es que los procesados cometieron el delito previsto y penado por los arts. 177 y 178 del Cód. Pen. En efecto, el primero de los arts. citados estatuye: «que la falsa imputación de un delito que tenga obligación de acusar el Ministerio Fiscal, ó delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones, constituye el delito de calumnia. Como se ve, constituye el delito de calumnia la falsa imputación de delitos cometidos por un empleado público en el ejercicio de sus funciones, que es precisamente lo que habían hecho los querellados al afirmar que el juez había prevaricado con motivo de dictar una sentencia. La aplicación del art. 178 del Cód. Pen. se impone, puesto que los procesados no comprobaron la imputación, pues solo quedan libres de pena cuando rinden la prueba necesaria.



2. **Calumnia manifiesta**—El reo de este delito, agravado con la circunstancia de equívoca ó encubierta, debe ser penado con dos años y medio de prisión—Jur. Crim., tomo 3, pág. 55, Ser. 4^a.

Cámara de apelaciones—Véase: *Comisión del martillero*, núm. 1—*Apelación*, núm. 12—*Acusador*, núm. 4.

Cámara sindical—Véase: *Informe de la Cámara sindical*, núm. 1.

Cantidad—Véase: *Inscripción*, núm. 2—*Jurisdicción por cantidad*, núm. 1—*Quiebra*, núm. 3—*Compraventa*, núm. 19—*Chancelación*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núms. 24 y 25.

1^a. **Cantidad defraudada**—La defraudación por actos sucesivos, solo puede ser penada con arreglo á la mayor suma distraída en un solo acto, cualquiera que haya sido el monto de la cantidad defraudada.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 77, Ser. 4^a.

Cantidad determinada—Véase: *Daños y perjuicios*, número 9.

Cantidad líquida—Véase: *Bienes embargados*, núm. 9—*Embargo preventivo*, núms. 37 y 38.

Capital—Véase: *Inscripción*, núm. 2—*Prenda*, núm. 3—*Socio comanditario*, núm. 1—*Consignación en pago*, núm. 2.

Carácter legal—Véase: *Defraudación*, núm. 13.

Carácter previo—Véase: *Excepción de prescripción*, número 1.

Carga—Véase: *Empresa de ferrocarril*, núm. 1.

1^b. **Cargador**—Tiene derecho de retención sobre las

2—Arts. 178, 183, 86 y 52 del Cód. Pen.

1^a—Véase: *Cantidad defraudada*, núm. 1.

1^b—El actor confesó que había dejado de entregar algunos efectos



mercaderías porteadas, en tanto no le sea satisfecho el valor de los fletes ó se deposite judicialmente la diferencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Ser. 4^a.

Cargador—Véase: *Carta de porte*, núm. 1—*Bultos*, números 1 y 2—*Empresa de ferrocarril*, núm. 2—*Contrato de transporte*, núm. 2—*Fletes*, núm. 3.

Cargo—Véase: *Transacción*, núm. 3.

1. **Carta de crédito**—El dador de una carta de crédito, con depósito en garantía, debe aplicarlo á su chancela-

portados y que los tenía en su poder. Pero de ese hecho no puede concluirse que haya falta de cumplimiento del contrato, ni falta de acción para reclamar su comisión, porte ó flete, porque los arts. 196 y 200, Cód. de Com., le acuerdan privilegio y derecho de retención sobre los objetos porteados, para el pago de los gastos y derechos causados en la conducción, y solo le obligan á entregar dichos objetos, pagando el flete que el destinatario cree deber, y depositada la diferencia entre él y el que reclama el porteador, que es lo que deberá observarse en este caso.

1.—Según el art. 630 del Cód. de Com. ant., que es el que debe aplicarse, por ser el que regía cuando se verificó la operación materia del juicio, «el portador de una carta de crédito debe reembolsar *sin demora* al dador la cantidad que hubiese percibido en virtud de ella, así como los intereses que se hubiesen pagado, *si antes no la dejó en su poder.*»—En el caso que nos ocupa, esta última condición fué cumplida por el tomador de la carta, pues al recibir la carta de crédito, dejó en poder del Banco una suma suficiente para cumplir con la obligación del reembolso que dicho art. prescribe, si hacía uso del crédito acordado. Siendo esto así correspondía al dador, recibido aviso de su corresponsal de la cantidad entregada á su acreditado, practicar la liquidación respectiva del capital, intereses, comisión y gastos, invirtiendo la suma total para compensar hasta donde se pudiera con la suma que el tomador le había entregado para responder á las resultas del crédito. Así se cumplía con el precepto de la ley, en lo que era favorable al dador y al mismo tomador, de liquidar y reembolsar *sin demora* lo percibido por razón de la carta de crédito, y se conformaba también la conducta de aquél con el precepto primordial del derecho mercantil, de que las convenciones deben ejecutarse de buena fe en todas las consecuencias que la equidad, el uso ó la ley le atribuyen—art. 209 del Cód. citado.



ción en la fecha que el portador haya hecho uso de ella.—Jur. Com., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

1^a. **Carta de garantía**—La garantía de la obligación principal aun en forma de carta está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 130, Ser. 4^a.

1^b. **Carta misiva**—La declaración por carta es válida si citados los testigos en forma comparecen á prestar declaración y con las formalidades de ley reconocen el contenido y firma de las existentes en autos.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 428, Ser. 3^a.

Carta misiva—Véase: *Orden de pago*, núm. 1.—*Papel sellado*, núms. 3 y 12.—*Contrato perfecto*, núm. 1.

1^c. **Carta de porte**—Las condiciones impresas en la guía

1^a—No se trataba de una carta ó de correspondencia privada, sino de un documento en forma, que se relacionaban con los negocios mercantiles de los individuos que intervenían en él y que constataba la existencia de un contrato ó de obligaciones exigibles en juicio. Si para desvirtuar cualquier documento de obligación ó contrato bastara escribir al frente «muy señor nuestro», no habría pagaré, letra de cambio ni contrato alguno que no se librara de observar la ley de sellos, poniéndose detrás de aquella careta. Esto decía el Agente Fiscal Dr. Barrenechea, siendo su dictamen el que sirvió de base á la resolución contenida en el sumario.

1^b—La Cám. tiene resuelto que las declaraciones por carta no tienen ningún valor en el pleito aun cuando se ratifiquen en juicio sus autores: pero esta jurisprudencia no es aplicable cuando los testigos han sido citados todos ellos es en la forma determinada en los arts. 181 y 182 del Cód. de Proc. habiéndose llenado el requisito que exige el art. 191, y pudiendo las partes haber hecho uso de la facultad acordada por el art. 131 del mismo Cód.

1^c El art. 204 del citado Cód. declara nulos los reglamentos ó estipulaciones de las empresas que hubiesen ofrecido sus servicios al público en cuanto escluyan ó limiten las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Cód. Esta disposición destruye cuanto pueda alegar una Empresa respecto al contrato que implica una carta de porte.—Véase el informe de la Comisión Reformadora del Cód. de Com. vig., pág. 17 y art. 187 y 188 del mismo Cód.



ó carta de porte que las empresas impongan á los cargadores, carecen de fuerza legal en cuanto se opongan á las disposiciones del Código de Comercio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

1^a. Carta de pobreza—La acción para la cual se otorga carta de pobreza, debe deducirse ante el juez en turno.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 402, Ser. 3^a.

Casa alquilada—Véase: *Depositorio judicial*, núm. 5—*Alquiler*, núms. 4 y 5—*Muebles*, núms. 4 y 5.

Casa de comercio -- Véase: *Utilidades*, núms. 1 y 2—*Abandono de una casa*, núm. 1.

Casa de confianza—Véase: *Adulterio*, núm. 6.

Casa de inquilinato—Véase: *Violación de domicilio*, número 2.

1^b. Casa de negocio—No puede existir violación de domicilio, tratándose de una casa de comercio, en horas hábiles.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 359, Ser. 4^a.

1^c. Caso fortuito—Los vicios ó defectos del material ó tren rodante, no es un hecho imposible de prever, y en consecuencia no puede alegarse como caso fortuito ó fuerza mayor.—Jur. Civ., tom 8, pág. 148, Ser. 3^a.

Castigo de un delito—Véase: *Calumnia*, núm. 5—*Abuso de autoridad*, núm. 2.

Casual—Véase: *Delito*, núms. 1 y 3—*Amistad íntima*, núm. 1—*Absolución de posiciones*, núm. 3.

1^d. Caución ofrecida—Es facultativo del Juzgado la apre-

1^a—La acción para obtener el otorgamiento de una carta de pobreza tiene su tramitación especial; terminada esta tramitación concluye la jurisdicción del juez sobre la información, y la demanda que se inicie con esa carta corresponde al juez que esté de turno.

1^b—Arts. 165 y 167 del Cód. de Pen.

1^c—Véase: verb. *Accidentes*, núm. 1, cuya nota estudia el punto.

1^d—El juez de 1^a Inst. no hizo lugar al embargo preventivo fue-



ciación de la caución ofrecida para el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 239, Ser. 4ª.

1ª. **Caución prestada**—Si la rebeldía del demandado hace procedente el embargo, el acreedor tiene derecho para retirar la caución prestada para conseguir el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 211, Ser. 4ª.

Caudal—Véase: *Alimentos provisorios*, núm. 2.

Causa—Véase: *Honorarios*, núm. 12—*Injuria*, núm. 11—*Prueba*, núm. 6.

1ª. **Causa eficiente**—Para que una lesión ó herida se

dándose en que: «No hallándose comprendido el embargo preventivo solicitado en ninguno de los cuatro casos á que se refiere el art. 449 del Cód. de Proc., y creyendo el Juzgado insuficiente la caución juratoria que se ofrece.» La Cám. confirmó el auto diciendo: «Estableciéndose el art. 444 del Cód. de Proc. que el embargo preventivo solo puede decretarse bajo la responsabilidad de la parte que lo solisicare, quien deberá dar caución por todas las costas, daños y perjuicios que pudiese ocasionar en caso de haberlo pedido sin derecho, y teniendo presente, que según el art. 454 de dicho Cód., el juez esciusivamente es quien debe calificar la caución, se confirma el auto.» Puede verse la jur. estudiada en la nota del verb. *Fianza*, núm. 6.

1ª—El embargo preventivo que la ley autoriza en caso de rebeldía de uno de los litigantes, no está sujeto á las condiciones exigidas por el art. 444 del Cód. de Proc. según así se desprende de lo que dispone el art. 437 del mismo Cód. Habiendo declarádose rebelde al demandado, el actor puede obtener en consecuencia embargo preventivo, sin necesidad de la caución que se requiere en los demás casos, teniendo por lo tanto el derecho de exigir la extinción de la que otorgó con motivo del embargo decretado antes de la declaración de rebeldía.

1ª—En la noche del 24 de Enero de 1892, Luis Pedretti infirió á Felix Pigue y Enrique Grinta las heridas que se hallaron descriptas en el informe médico espedido. La herida de Pigue estaba completamente curada en 13 de Febrero, y Grinta falleció en 16 del mismo. La controversia estriba en la responsabilidad que corresponde al procesado si debe declararse reo de homicidio, ó si solo es responsable de lesiones graves. Para resolver lo primero es indispensable que las constancias autoricen á afirmar que entre la herida y la muerte de Grinta, media



repute mortal, basta que la lesión sea la causa eficiente

la relación de causa á efecto porque esa relación de causalidad es la que tiene en cuenta la ley para responsabilizar al autor de un hecho voluntario por los efectos del mismo. El que después de formar la resolución de cometer un delito, emprenda una acción susceptible de producir uno mayor ó uno menor, será castigado como autor del delito realmente cometido, dice el art. 4º, Cód. Pen., y no se le admitirá la excusa de que su intención fué solo cometer el menos grave. Según ese principio, el dolo indeterminado, se determina por el resultado del acto que lo impulsó. Ese art. ha sido literalmente reproducido del art. 10, Cód. de Tejedor, cuyo fundamento y alcance explicaba el codificador con el siguiente párrafo del comentario oficial del Cód. de Baviera: «la excusa ordinaria de los acusados consiste en sostener que no han tenido intención de cometer sino un crimen menos grave que el cometido» realmente. Si ejecutan un homicidio, dicen que solo han querido causar una herida. El presente art. tiene por objeto no hacer lugar á este medio común de defensa. El que cometa un crimen, responde de todas las consecuencias que de él puedan resultar y que la experiencia usual permita prever.» Examinando las constancias del proceso, con el propósito indicado se hallaba que según el primer reconocimiento médico practicado el 28 de Enero, Enrique Grinta presentaba en la región glútea derecha á dos centímetros por debajo de la cresta iliaca y á cuatro por fuera de la columna vertebral, una herida producida por instrumento cortante y punzante á la vez, de tres centímetros de extensión; que el arma, seccionando las partes blandas de la región, *había interesado la parte superior del tubo intestinal* y tal vez la vejiga; que la herida era de carácter grave y en caso de curar no sucedería esto antes de 15 días. Poco después en 13 de Febrero, se practicó un nuevo reconocimiento del herido, del que resultó que por la herida descrita en iguales términos que en el informe anterior, se efectuaba un derrame abundante de materia fecal, signo evidente de que se encuentra herido el intestino; que el estado general del enfermo era bastante grave, y en caso que desapareciesen los síntomas alarmantes que presentaba, se pondría en condiciones de que se le practicara una operación con el objeto de suturar el intestino, operación que no siempre da resultados satisfactorios y que está espuesta á complicaciones. Concluía que la herida era grave, que solo en caso que se practicase una operación no quedaría defecto físico ó desorden funcional, y que por más favorable que fuese la marcha de la enfermedad no podría entregarse á sus ocupaciones habituales antes de treinta días. Tres días después fallece Grinta y practicada

de la muerte. — Jur. Crim., tom. 8, pág. 73, Ser. 4^a.

la autopsia por los mismos facultativos juntamente con el médico de los tribunales quedaron corroborados los precedentes informes. «Teniendo en cuenta la situación de la herida, decían los médicos, y pensando lógicamente que en la cavidad abdominal encontraríamos la causa que había determinado la muerte de Enrique Grianta, procedimos á su abertura y notamos una perforación de tres centímetros de largo en el colón ascendente que correspondía perfectamente en su dirección con la herida esterna; hecho que pudo comprobarse con el sondaje, encontrando también un derrame abundante de materia fecal en la parte inferior derecha de la cavidad abdominal, etc.», y arribaron á las siguientes conclusiones: 1^o, que Grianta falleció á consecuencia de una infección fecal; 2^o, que la herida era de carácter muy grave, pero no necesariamente mortal, y 3^o, que no había existido predisposición orgánica que haya influido en el desenlace fatal, y que según la relación minuciosa que les hizo el cirujano que lo asistió, piensan que el tratamiento prodigado á Grianta había estado de acuerdo con los últimos adelantos de la ciencia. Como se ve, la autopsia corroboró la proposición terminantemente asertiva de que la herida interesó el intestino, y esto basta para establecer la relación de causalidad entre ella y la muerte. La muerte de Grianta, es consecuencia de la herida, porque ésta produjo la infección que concluyó con la vida de aquél, y la ley no exige que la muerte sea la consecuencia inmediata, directa y necesaria del hecho cometido, sino que ésta sea susceptible de producirla y que ella ocurra con motivo de la perpetración del mismo, y que la experiencia usual permita prever el resultado, esto parece indudable porque como decían las antiguas leyes de Partida, «la herida es carrera de muerte é non la debe nadie dar porque no sabe el que la da á cuanto puede llegar.» El principio consignado en el art. 4^o excluye como incompatible la doctrina del antiguo derecho que requería existencia del *animus occidendi* para el delito de homicidio, y excluye asimismo la doctrina y jurisprudencia también antiguas sobre la letalidad de las heridas, que fué prescripta por el art. 205, Cód. de Tejedor, y sin embargo del respeto que merecen las opiniones del ilustre jurisconsulto Dr. Cortés y de la Cám. en el tom. 1^o, pág. 441, Ser. 2^a, no puede considerarse de nuevo establecida, por el hecho de no haberse conservado ese art. en el Cód. vig.; ya por que el art. 205 citado, no era sino aplicación especial del principio general consignado en el art. 11, que es hoy el 4^o del Cód. actual; ya porque dados los términos en que se sancionó este Cód., debe considerarse virtualmente aceptada la doctrina del Cód. de Tejedor, en cuanto no se opon-





1. Causa ilícita.—La falsa causa ó causa ilícita alegada

ga á las reformas introducidas. Para que una lesión ó herida se reputa mortal, en el sentido legal, decía el art. 205, basta que la lesión sea la causa eficiente de la muerte. En consecuencia, la apreciación judicial del carácter mortal de una lesión ó herida, no dependerá de saber si en otros casos esta lesión ó herida habría podido ser curada con los auxilios del arte, ó si el resultado mortal de la lesión ó herida se habría podido evitar con los cuidados prestados en tiempo, ó si la herida ha causado la muerte directamente ó indirectamente, por efecto de otras causas mediatas desarrolladas por ella, ó si, en fin, la lesión ó herida ha sido mortal de una manera absoluta, ó en razón únicamente de la organización particular del herido ó de las circunstancias en que ha sido herido». Y explicando el Dr. Tejedor con el comentario especial del Cód. de Baviera la doctrina consignada en dicho art., dice: Los verdaderos principios de la materia se reducen á lo siguiente: «Para determinar la relación de una herida con la muerte de una persona debe atenderse á dos cosas: 1°. Comprobación del cuerpo del delito de homicidio, 2°, naturaleza de la conexión causal que existe entre la herida y la muerte, buscar cuáles pueden ser las causas más directas, y después calcular hasta qué punto el resultado de la lesión puede considerarse la causa del resultado mortal. Hay homicidio desde que se establezca que la perturbación letífera introducida en el organismo es la consecuencia necesaria del acto vulnerante. *Poco importa que esta perturbación del organismo se determine solo por causas secundarias, mediatas ó inmediatas.*» Comparando la citada disposición del art. 205, clara y decisiva, decisiva de suyo pero más clara aun por su nota explicativa con disposición del art. 11—hoy 4° del vig.—se ve sin dificultad que en ella la ley no hizo otra cosa que aplicar especialmente respecto del homicidio, lo que ya en general había estatuido para todos los delitos: y desde que la disposición general ha sido conservada en el nuevo Cód., no hay razón para aseverar que la supresión de la especial, importa establecer la antigua doctrina y jurisprudencia recordada. La lógica no autoriza tal conclusión, por el contrario, á lo que sus reglas inflexibles conducen, es á decir que el art. 205 era superfluo, puesto que en él se preceptuaba lo que ya estaba preceptuado en el art. 11, y esta misma Cám. así lo entendió al resolver la causa que se registra en el tom. 1°, pág. 427, Ser. 4°, Jur. Crim.

1—No hay obligación sin causa, dice la ley, es decir, sin que sea derivada de uno de los actos lícitos ó ilícitos, y agrega, que la que está fundada en una cosa ilícita es de ningún efecto, enseñando á la vez

como fundamento de la repetición de lo pagado, debe ser plenamente justificada.—Jur. Com., tom. 11, pág. 254, Ser. 3ª.

Causa resolutoria.—Véase: *Boleto de compraventa*, números 3, 4, 5, 6 y 7—*Instrumento privado*, núm. 6.

1ª. Causas correccionales.—En las correccionales el Agente Fiscal debe hacer constar la relación de los antecedentes en que funda la acusación y el juez citar determinadamente los artículos de la ley en que funda su sentencia condenatoria.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 249, Ser. 4ª.

1ª. Causas criminales.—El interrogatorio en causas criminales, debe ser presentado al pedir la prueba de testigos.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 237, Ser. 4ª.

Causas criminales.—Véase: *Informe médico*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 13—*Daños y perjuicios*, núm. 34.

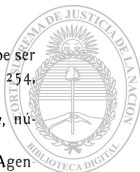
1ª. Causales.—El nombramiento del tutor es potesta-

que la causa es ilícita cuando es contraria á las leyes ó al orden público y que aunque la causa espresada en la obligación sea falsa, será válida aquella, sin embargo, si se funda en otra causa verdadera. Las leyes antiguas, y entre éstas la ley 7ª, título 13, Partida 3ª, de acuerdo con los principios sentados por el derecho Romano, tenían establecido, que para ser eficaz una obligación, necesitaba espresarse la causa de deber, que las leyes recopiladas guardaron silencio al respecto, y que la escuela que parecía la encargada de fijar la doctrina, ha mantenido la más completa incertidumbre como lo dice el mismo autor, llegando á establecerse la validez de una convención aunque la causa no sea espresada, según lo declara el art. 1132 del Cód. francés, ó bien se presume que ella existe mientras el deudor no pruebe lo contrario, según lo establece nuestro Cód. Civ. en el art. 500, concordante con el art. 1000 del Cód. Civ. esp. del Dr. García Goyena. La falta de espresión de causa no es esencial para la validez de una obligación, y ella se presume mientras el deudor no pruebe lo contrario.

1ª.—Véase: *Antecedentes de la causa*, núm. 1.

1ª.—Art. 483 del Cód. de Proc. Crim.

1ª.—La Cámara al resolver esta cuestión revocando una resolución





tivo del Juzgado, pero debe fundar las causales porque no nombra el propuesto por las partes—Jur. Civ., tomo 10, pág. 74, Ser. 3ª.

Causante—Véase: *Deudas del causante*, núm. 1.

1. Cédula—Resuelto el incidente que suspendió el término de prueba, la providencia que lo hace correr nuevamente, debe notificarse por cédula.—Jur. Com., tomo 9, pág. 282, Ser. 4ª.

2. Cédula—El auto que ordena el levantamiento de la

del juez Mendez Paz, decía: «Que tratándose de proveer de tutor á los menores que no lo tengan nombrado por sus padres, ó cuando no existan los parientes llamados á ejercer la tutela legítima, debe consultarse, ante todo, los intereses de las personas á quienes la ley ampara con aquella representación. Que no obstante la honorabilidad notoria del abogado designado por el juez para desempeñar ese cargo, en el caso concurrente, teniendo presente los antecedentes de que se ha hecho mérito en los escritos, han debido practicarse las investigaciones necesarias para verificar si hay ó no mayor conveniencia para los menores, nombrando como tutor á la persona propuesta por el albacea. Por esto y teniendo presente lo resuelto por esta Cámara en el caso que se registra al tom. 1º, Sér. 1ª, pág. 503 de sus Fallos y resoluciones; y las consideraciones del voto de la minoría en la causa CCLXXXV., tom. 8º, pág. 331, 3ª Sér., se revoca el auto en la parte apelada, y devuélvanse para que el Inferior previas las informaciones necesarias resuelva lo que corresponda sobre el nombramiento propuesto.»

1—Esta resolución fué dictada revocando una providencia del Juez de 1ª Inst. Dr. Peyret. El principio sentado en el sumario se funda en que según lo dispuesto por el art. 33 del Cód. de Proc., el auto de prueba debe ser notificado en el domicilio de los litigantes. El auto reabriendo el término de prueba surte los mismos efectos que el auto de prueba espresamente mencionado en el art. 33, y por consiguiente debe serle igualmente aplicable la misma forma de notificación en él establecida. Esta es la jurisprudencia sentada por ambas Cámaras.

2—Aunque esta providencia no está incluida entre las que deben ser notificadas personalmente ó por cédula—art. 33 del Cód. de Proc.—como se trata del levantamiento de una inhibición, debe sin embargo notificarse en la forma que establece el sumario, por cuanto á este trá-



inhibición debe notificarse personalmente ó por cédula —Jur. Civ., tom. 1 2, pág. 419, Ser. 3^a.

Cédula—Notificación por cédula — Notificación personal, núms. 2 y 3.

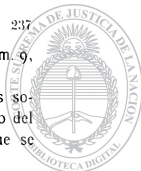
1^a. **Cédula equivocada** —No siendo esencial á la validez del juicio ejecutivo que se notifique al firmante, el auto que da por reconocida la firma en rebeldía, el error en el domicilio en que se ha dejado la cédula, no puede fundar escepción de nulidad de la ejecución. —Jur. Crim., tomo 7, pág. 20, Ser. 4^a.

1^b. **Cerco vivo** — La zanja exterior de un cerco vivo importa la fijación de un límite en la posesión, aun cuando

mite le es aplicable la disposición de los arts. 452 y 461 del citado Cód. para hacerse saber la inhibición decretada.

1^a—El decreto por el cual se citaba al demandado á practicar el reconocimiento de las firmas de los documentos que motivaron la ejecución le fué notificado en su domicilio. En ese mismo domicilio se diligenció el mandamiento de embargo en presencia del ejecutado, quien firmó la diligencia, sin alegar que no fuesen suyas las firmas de los documentos. En el mismo domicilio se hizo la citación de remate. Son éstas últimas las únicas providencias esenciales en un juicio ejecutivo, y tienen importancia legal que un decreto, que por su naturaleza no requiere indefectiblemente que se notifique al ejecutado, se haya ido á notificar á un domicilio inexacto. En su consecuencia, no es causa de nulidad ese defecto por cuanto no afecta ninguna forma esencial del procedimiento. Por otra parte, el auto que da por reconocida una firma no es sino una providencia preparatoria de juicio ejecutivo—art. 446 del Cód. de Proc.—mientras que el art. 489, autoriza á decir de nulidad de la ejecución por violación de las formas establecidas.

1^b—El terreno estaba cercado con un cerco vivo y con una zanja que corría al costado del cerco. Si bien parece irregular, que el cerco de un terreno sea á la vez un cerco vivo y una zanja al costado, ello se explica si se tiene en cuenta que esa es la forma del cercado antiguo en los suburbios de esta Capital, presentándose la sola dificultad de saber cuál era la verdadera línea divisoria de las propiedades, si la del cerco vivo ó la de la zanja. Esa dificultad sería grave si se tratase de determinar la línea divisoria de dos terrenos igualmente cercados;



no baste para justificar la propiedad.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 281, Ser. 3ª.

1ª. **Certificados**—Pueden expedirse los certificados sobre hechos ó actuaciones que convengan al derecho del solicitante, aun cuando no manifieste el objeto que se propone.—Jur. Com., tom. 1, pág. 15, Ser. 4ª.

2. **Certificados**—No puede negarse, como medida probatoria antes de iniciar el juicio, el certificado sobre las constancias de otro expediente.—Jur. Com., tom. 5, página 352, Ser. 4ª.

Certificados—Véase: *Accionista*, núm. 1.

1ª. **Cesación de pagos**—Justificada la cesación de pagos por ejecución iniciada, procede la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 1, pág. 151, Ser. 4ª.

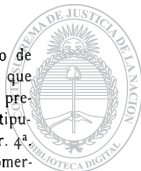
2ª. **Cesación de pagos**—La cesación de pagos del com-

pero desaparece toda duda desde que solo uno de los terrenos es el cercado y por consiguiente debe reputarse que la línea exterior es la que determina el limite de la propiedad encerrada dentro del cerco. La zanja que corre al costado del cerco vivo, es entonces el limite del terreno poseído.

1ª—El juez ordenó que se espidiese el certificado sin oposición del contrario y éste sin haberse opuesto pidió revocatoria, espresando que lo hacía para evitar dificultades en la tramitación de su pedido y no porque la diligencia ordenada importase nada en sí. No había pues, interés legítimo en oponerse tardamente á que se espidiese el certificado pedido.

1ª—Art. 1379 del Cód. de Com.

2ª—Los demandados habían vendido á los demandantes, 600 tercerolas de alcohol. El contrato se hizo en Mayo de 1889 y debían entregarse cincuenta tercerolas mensuales, pagándose su precio en pagarés á seis meses del día de la entrega. En Junio del mismo año se hizo otra venta de doscientas damajuanas de alcohol, sin estipular plazo para la entrega y en las mismas condiciones de pago. De la cuenta presentada resultaba que hasta el 13 de Nov. del mismo año 1889, los demandantes recibieron en varias entregas 177 tercerolas y 100 damajuanas de alcohol, firmando los correspondientes pagarés, apareciendo



prador permite al vendedor la rescisión del contrato de venta de mercaderías á plazo, sin exigir la fianza que debe ser presentada en tiempo por el comprador, si pretende el cumplimiento del contrato dentro del plazo estipulado para la entrega.—Jur. Com., tom. 1, pág. 76, Ser. 4^a.

1. Cesión de bienes—Justificado el carácter de comerciante que revestía el que hizo cesión de bienes, deben remitirse al Juez de Comercio que entiende en el concurso, los autos obrados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 142, Ser. 3^a.

de la misma cuenta que hasta la fecha de la demanda solo habían pagado un pagaré adeudando los tres restantes, que sumaban por capital la cantidad de siete mil ciento ochenta y cuatro pesos con setenta centavos. En la demanda se espresaba que los demandados se encontraron por algún tiempo en la imposibilidad de poder pagar con puntualidad sus vencimientos y en la necesidad de «tomar» arreglos con sus acreedores. Con fecha 10 de Enero de 1890 los actores escribieron al demandado diciéndole que la suspensión de pagos de otra casa del Rosario, había venido á agravar la mala situación en que se encontraban por causas que esplicaron y concluyeron por invitar al vendedor á la reunión de acreedores que tendria lugar. Resulta de esto, que cuando más tarde, á principios de Enero de 1890 los compradores se encontraban en la imposibilidad de atender puntualmente á sus compromisos, y en la necesidad de hacer arreglos con sus acreedores, arreglos que se verificaron, ya se habían vencido dos pagarés firmados por los demandantes á favor del demandado sin haberlos pagado. Según el contrato en virtud del que se estableció la demanda, el vendedor debía entregar cincuenta tercerolas de alcohol cada mes y por su importe el comprador debía firmar un pagaré á seis meses de la fecha. Colocados éstos en la imposibilidad de pagar con puntualidad sus compromisos, en la necesidad de hacer arreglos con sus acreedores, no podían pretender que el vendedor siguiese entregándoles alcohol y recibiendo pagarés á seis meses de plazo. Semejante situación privaba al comprador del derecho de poder exigir el cumplimiento del contrato á menos que afianzase el pago, —art. 526, Cód. de Com. ant.—Igual disposición existe en el nuevo Cód. Si los compradores, querían que el contrato se llevase adelante, debían usar del derecho de pedir la entrega en la forma convenida, afianzando el pago.



1^a. Cesión de un crédito—Para que la cesión de un crédito por instrumento privado tenga valor legal, debe contener determinadamente lo que es objeto de la cesión.—Jur. Com., tom. 7, pág. 369, Ser. 4^a.

2. Cesión de un crédito—La compra del activo y pasivo de un concurso, no importa una cesión de crédito, en consecuencia el fallido no está obligado á absolver posiciones en los juicios que se sigan contra los deudores.—Jur. Com., tom. 8, pág. 321, Ser. 4^a.

1^b. Cesión de derechos—Posesorios, es un contrato in-

1^a—Se cedió el derecho á una fractura; la cesión se hizo por escrito —art. 1454 del Cód. de Com.—pero no se individualizó la fractura cedida; de manera que no podía determinarse cuál era con precisión aquella sobre que versaba el acto jurídico.

2—Solo los que son parte en un juicio pueden ser compelidos á absolver posiciones—art. 125 del Cód. de Proc.—El fallido en el caso que nos ocupa no puede ser considerado parte por cuanto él intervino en la cesión. Véase: *Fallido*, núm. 2.

1^b—El actor se presentó diciendo que el demandado le había vendido, seis leguas de campo fiscal, que el Gobierno de la Prov. de Bs. Aires le había concedido en posesión por el precio de diez mil pesos de la antigua moneda corriente la acción á cada legua, el que debía pagarse cuando dicho Gob. aceptase la transferencia; que á pesar del tiempo transcurrido, el vendedor no había presentado el escrito de transferencia convenido, ni había otorgado escritura pública del contrato, no obstante haber estado siempre dispuesto el comprador, como lo estaba en ese momento, á pagar el precio inmediatamente de aceptarse la transferencia por el Gob.; que para ejercitar las acciones que le corresponden, necesita que el instrumento privado que present ó fuese reducido á escritura pública, á cuyo efecto entabló demanda pidiendo que en oportunidad se condenase al demandado á otorgar dicha escritura y á pagar las costas del juicio. El demandado contestó diciendo: que era cierta la promesa de venta de acciones posesorias de que instruye el documento que lleva su firma, pero que también es cierto que el actor desde el día en que se comprometió á la compra, desapareció sin dar los nombres de las personas á quienes debía hacerse la transferencia, ni hacerle exigencia de ninguna clase; que ha sostenido su derecho de posesión hasta que la ley de 17 de Junio de 1878, anuló todas las posesiones que no estaban



nominado que no requiere para su validez la forma de ins-

fundadas en ley, como eran las que se concedieron por el Gob., para aquellas ventas: que la falta del comprador de no dar los nombres de las personas á quienes debían transferirse los derechos de posesión, lo ha perjudicado, por haber caducado esos derechos. La acción deducida por el actor en este caso, es la de hacer escritura pública, fundándose en el art. 1185 del Cód. Civ., el que dispone que los contratos que debiendo ser hechos en escritura pública fuesen hechos por instrumento privado firmado por las partes, ó que fuesen hechos por instrumento particular en que las partes se obligasen á reducirlos á escritura pública, no quedan concluidos como tales mientras la escritura pública no se halle firmada, pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han obligado á hacer escritura pública. La subsistencia ó caducidad de los derechos posesorios, materia del contrato de cesión, la responsabilidad que á los contratantes quepa sobre el particular, la ejecución ó inexecución del contrato, son cuestiones completamente ajenas á este juicio, en que no se demanda el cumplimiento del contrato de cesión de derechos posesorios, sino única y exclusivamente que el instrumento privado sea reducido á escritura pública. El contrato contenido en el instrumento privado que servía de base no era de compraventa, como equivocadamente se afirmaba en la demanda, pues aunque esa *designación* era la empleada en dicho instrumento para determinar la naturaleza de la convención celebrada por los contratantes, de su simple lectura se desprende que solo es un contrato de cesión de créditos ó de derechos. Por el contrato, el enajenante no vendía las seis leguas de campo que en él se enunciaban, puesto que no se obligaba á transmitirle la propiedad de dichos campos—art. 1323 del Cód. Civ.—sino únicamente los derechos de cesión de créditos—arts. 496 y 1434 del Cód. citado.—Si el contrato no es de compraventa sino de cesión de créditos, no requiere que revista la forma de escritura pública para producir desde luego los efectos que le son propios, puesto que no solo está comprendido en la enumeración del art. 1184, sino que el 1454, solo exige como forma ineludible de la cesión, que sea hecha por escrito, cualquiera que sea el valor del derecho cedido, con las solas escepciones consignadas en el art. 1455. El contrato de cesión de derechos ó de créditos que motivó el juicio no es entonces de los que deben ser hechos en escritura pública, ni las partes se han obligado á reducirlo á escritura pública, y por consiguiente, el actor carecía de derecho para exigir del demandado el otorgamiento de la escritura pública que pidió,



trumento público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 386, Ser. 3^a.

1^a. Cesión de un pagaré—No puede hacerse ejecutivo el pagaré por un tercero, en tanto la cesión no haya sido notificada y consentida por el deudor.—Jur. Com., tom. 7, pág. 80, Ser. 4^a.

1^b. Cesionario de un crédito—Por instrumento privado, carece de personería para gestionar el cobro, en tanto no autentique las respectivas firmas de los cesionarios. -- Jur. Civ., tom. 9, pág. 439, Ser. 3^a.

Circunstancias—Véase: *Bigamia*, núm. 1—*Declaración*

fundado en dicho contrato y en la disposición consignada en el art. 1185 del Cód. Civ.

1^a—El documento de cesión decía así: «Conste que el señor Juan Etchegaray entregó al Banco Inglés de Río Janeiro, hoy Banco Británico de la América del Sud, el pagaré adjunto por valor de 3732 pesos moneda nacional, firmado por Eduardo J. White á la orden de Eduardo Boutteaux y endosado por éste en blanco, al solo efecto de perseguir su cobro ó protestarlo en su defecto. Que no habiendo conseguido lo primero y estando llenado lo segundo, según consta del testimonio que se acompaña, el señor Juan Etchegaray ha ordenado que este pagaré se transfiera como se hace en este acto, el señor Manuel San Martín, á quien le hace cesión de dicho crédito en pago de igual suma que le adeuda y á cuyo efecto firman conmigo, en prueba de su conformidad y aceptación, los señores Juan Etchegaray y Manuel San Martín. Esta cesión la hace el Banco Británico de la América del Sud sin ninguna responsabilidad anterior ó ulterior de su parte.» El Juez de 1^a Inst. dijo, que «no apareciendo el documento de cesión, hecho por ningún interesado ó propietario del documento, y no estando justificada por consiguiente la personería del solicitante señor San Martín, no ha lugar á lo solicitado.» La Cám. confirmó la resolución fundándose en que: No se habían llenado respecto del documento las prescripciones de los arts. 1459 y siguientes del Cód. Civ.

1^b—La Cámara dijo que la autenticación era tanto más indispensable cuanto que la viuda del causanté al contestar la demanda hacía notar «que no consta la autenticidad de los documentos que se presentan para justificar la cesión.» Siendo la cesión un hecho en que se fundaba la demanda, correspondía al actor su comprobación.



de la víctima, núm. 1—*Disparo de arma de fuego*, números 19 y 30—*Declaración de testigos*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 7—*Homicidio*, núm. 1—*Homicidio sin circunstancias*, núm. 4—*Hurto*, núm. 1—*Pena*, núm. 5—*Homicidio simple*, núm. 6—*Robo de mayor valor*, número 1—*Prueba*, núm. 6.

1. **Circunstancias agravantes**—Calificativas del delito, deben resultar plenamente justificadas para ser tomadas en consideración.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 401, Serie 4^a.

Circunstancias agravantes—Véase: *Bigamia*, núm. 2—*Homicidio sin circunstancias atenuantes*, núm. 1—*Aproximación sexual*, núm. 1—*Lesiones*, núm. 1—*Robo con escalamiento*, núm. 2—*Robo con intimidación*, núm. 1—*Robo*, núms. 2 y 7—*Robo de menor valor*, núm. 7—*Acumulación de penas*, núm. 1—*Atentado con armas*, números 1 y 3—*Homicidio*, núms. 1 y 2—*Hurto*, núms. 16, 7, 3 y 4—*Pena*, núm. 4—*Disparo de arma de fuego*, números 2, 18, 7, 25, 11 y 15—*Desacato á la autoridad*, núms. 2, 5 y 7—*Disparo*, núm. 7—*Falsificación*, núm. 1—*Aproximación sexual*, núm. 1—*Estupro*, núm. 1—*Violación*, núm. 1.

1^a. **Circunstancias atenuantes**—Que justifiquen ó aminoren el hecho, no pueden ser tomadas en consideración

1^a—Se trataba de lesiones corporales inferidas con arma de fuego. El juez de Instrucción dijo, que no estaba probado que el disparo hubiese sido hecho con intención dolosa, ordenando el sobreseimiento de la causa fundado en el art. 435 del Cód. de Proc. Crim. La Cámara revocó esta resolución diciendo, que no concurrían las circunstancias prevenidas en el art. 435 citado, y que las consideraciones aducidas para establecer la inculpabilidad del acusado solo pueden ser tomadas en consideración por el juez de sentencia, pero no son de la competencia del juez de Instrucción.



por el Juez de Instrucción, sino por el de sentencia.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 97, Ser. 4ª.

2. **Circunstancias atenuantes**—Pueden considerarse así las distintas discusiones ó reyertas que antes del hecho se hayan sucedido entre el reo y la víctima ó sus allegados.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 78, Ser. 4ª.

Circunstancias atenuantes—Véase: *Asesinato*, núm. 1—*Disparo de arma de fuego*, núms. 1, 11, 15, 17, 22, 23, 24, 25 y 32—*Arma de fuego*, núm. 3—*Homicidio*, números 2 y 4—*Homicidio sin circunstancias atenuantes*, número 4—*Homicidio con una circunstancia*, núm. 1—*Homicidio con premeditación*, núm. 2—*Atentado con armas*, núms. 3, 4 y 6—*Atentado á la autoridad*, núm. 9—*Ebriedad consuetudinaria*, núm. 2—*Provocación del reo*, núm. 1—*Derecho de acusar*, núm. 2—*Robo*, núms. 1 y 2—*Hurto*, núms. 7 y 16—*Injurias*, núm. 4—*Prueba*, núm. 6—*Exorcidio*, núms. 1 y 2.

1. **Citación al deudor**—Para el reconocimiento de la

2—Y por consiguiente al calificar un hecho cometido mediando estos antecedentes, puede estimarse que se procede por acaloramiento y sin intención de causar todo el daño causado—art. 96, inc. 4º, Cód. Penal.

1—Si bien es cierto que la citación para el reconocimiento del documento debe hacerse en la forma prescripta por los arts. 77 y siguientes del Cód. de Proc., no es menos cierto que el mismo art. 468 que esto dispone se refiere solo á la forma de la citación y no al apercibimiento para el caso de no comparecer, puesto que establece uno especial y completamente distinto del que se dispone por el art. 80. Este apercibimiento especial está demostrando que el art. 468, modifica expresamente en esa parte el art. 80, lo que por otra parte tenía forzosamente que suceder dado el distinto objeto de la citación. En el caso de este último art., aquélla tenía por objeto comparecer á un juicio, y es evidente entonces que el apercibimiento tenía que ser el de nombramiento de defensor, porque no habría juicio si el demandado no fuese oído.



obligación, se rige por la disposición especial del art. 468, y no por la general que prescribe la forma de las notificaciones.—Jur. Com., tom. 8, pág. 235, Ser. 4^a.

1. **Citación por edictos**—En el juicio por desalojo no procede la citación por edictos.—Jur. Civ., tom. 12, página 429, Ser. 3^a.

2. **Citación por edictos**—Procede la citación del demandado, por edictos, aun cuando la ausencia sea accidental.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 424, Ser. 3^a.

En el caso del art. 468, la citación no es sino para reconocer un documento, para instaurar el juicio, que siendo por consecuencia necesario el nombramiento de defensor, solo procederá cuando aquél haya sido iniciado en forma. De aquí resulta, pues, que cuando el art. 468, dice que la citación se hará en la forma de los arts. 77 y siguientes, quiere decir que se hará por cédula, por exhorto ó por edictos, según los casos, que es lo que propiamente constituye la *forma*, el medio material de hacer una citación. Pero no dice ni puede decir que si se hace por edictos se hará bajo apercibimiento de nombrarse defensor, por que espresamente dispone que el apercibimiento será dar por reconocido el documento. De otro modo resultaría que la citación se haría bajo dos apercibimientos, de los cuales uno siempre sería completamente inútil, porque es claro, que si se da por reconocido el documento, el nombramiento de defensor no tiene objeto en el momento, y si al contrario, se nombra defensor, el reconocimiento no se hará efectivo.

1—El Juez de 1^a Inst. dijo: Teniendo presente que en este acto informa el actuario, que de las averiguaciones que ha practicado, resulta que no se conoce el domicilio de demandado, con el objeto de proveer oportunamente al juicio verbal solicitado, citese por edictos durante quince veces en los diarios al demandado, á efecto de que comparezca á tomar la intervención que le compete en estos autos, bajo apercibimiento de nombrarle defensor de oficio si así no lo hiriere, como lo prescribe el art. 80 del Cód. de Proc. La Cám. revocó el auto diciendo que: Tratándose de un contrato de locación justificado por instrumento público, en cuyo caso se encuentra comprendido en lo dispuesto por el inc. 1º del art. 465 del Cód. de Proc., y sin perjuicio de que el ejecutado haga valer, en la estación oportuna, las escepciones que viere convenirle.

2—Véase: verb. *Ausencia*, núm. 2.



1^a. Citación de evicción—Si el citado de evicción comparece y acepta el juicio, cesa la intervención del demandado por reivindicación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 3^a.

1^b. Citación de remate—No procede la citación de remate, si el ejecutado no se encuentra debidamente representado en el juicio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 222, Serie 4^a.

2. Citación de remate—Para la citación de remate y consiguiente sentencia, no es requisito indispensable la existencia de bienes embargados.—Jur. Com., tom. 5, página 96, Ser. 4^a.

3. Citación de remate—La notificación de la citación de

^a1—Así conviene para la secuela de todo juicio, pues de lo contrario una de las partes tendría una doble representación.

^b—El Juez de 1^a Inst. dijo que no existiendo bienes embargados como lo requiere el art. 485 del Cód. de Proc., en cuyo caso no procede la citación de remate solicitada como también lo ha declarado la Cám. de Apelaciones en lo Com. en diversos casos, según puede verse entre otros el espediente seguido por el Banco de Italia y Río de la Plata contra De Misolz, que tramita por la Secretaría á cargo del escribano Carlos N. González. No ha lugar. La Cám. constituida en tribunal de interlocutorios confirmó el auto, pero fundándose en diversas razones. La minoría opinó que debía confirmarse por sus fundamentos y la mayoría se fundó en que si bien no es indispensable que haya bienes embargados para que se cite de remate, según lo ha declarado esta Cám. en 7 de Junio de 1893, en la causa de Perotti con Rossi, en el presente caso no ha sido notificado el deudor en el domicilio indicado en el pagaré, ni en aquel en que se realizó el protesto, ni tampoco se ha justificado su ausencia, ni se le ha citado por edictos, ni se le ha nombrado defensor á quien se le haga saber el embargo decretado, y como lo dispone el art. 471, al fin, del Cód. de Proc., que por lo tanto no ha llegado la oportunidad legal de que pueda decretarse la citación de remate ni hay á quien notificarla en autos.

2—Véase la nota precedente y *Bienes embargados*, núm. 3.

3—El marido es el representante legal de su mujer y ella no puede estar en juicio por sí ni por procurador sin licencia especial del marido



remate al esposo, en un domicilio accidental, invalida la que con anterioridad se hubiese hecho á la ejecutada, como asimismo la ampliación que del término se le hubiese concedido.—Jur. Com., tom. 4, pág. 236, Ser. 4^a.

4. *Citación de remate*—El defensor de ausentes solo debe intervenir cuando llenadas las diligencias preparatorias del juicio ejecutivo, se cita de remate al deudor.—Jur. Com., tom. 8, págs. 109, 235 y 270, Ser. 4^a.

5. *Citación de remate*—Para la citación de remate, no es indispensable la existencia de bienes embargados.—Jur. Com., tom. 8, pág. 141, Ser. 4^a.

6. *Citación de remate*—Procede esta diligencia aunque no hayan bienes embargados.—Jur. Com., tom. 4, página 222, Ser. 4^a.

Citación de remate—Véase: *Nulidad de la ejecución*, núm. 2—*Defensor de ausentes*, núm. 2—*Ausentes*, número 6.

Ciudadano argentino—Véase: *Excepción de incompetencia*, núms. 7 y 8—*Jurisdicción federal*, núm. 4.

Glandestinidad—Véase: *Hurto*, núm. 6.

1. *Cláusula para vender*—El mandato general amplio, con cláusula especial para vender, es bastante para llevar

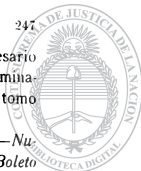
ó del juez—art. 57, Cód. Civ. y Ley de Matrimonio Civ.—En ejercicio de esa representación el marido confirió poder y por consiguiente sea cual fuese el término fijado á la esposa de aquél en razón de la distancia para la citación de remate desde que ésta fué legalmente hecha al esposo, deben surtir todos los efectos legales. Partiendo de esa base, el término empieza á correr desde que el esposo es notificado, pues la notificación á la esposa no puede surtir efectos legales desde que ésta no puede estar en juicio por sí misma.

4—Véase: verb. *Ausente*, núms. 5 y 6.

5—Véase: verb. *Bienes embargados*, núm. 7.

6—Véase la nota del núm. 1.

1—Véase: *Bienes vendidos*, núm. 1.



á efecto el contrato de compraventa sin que sea necesario poder especial para la venta de un bien ni determinación espresa de su ubicación y linderos.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 419, Ser. 4^a.

Cláusulas—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 1—*Nulidad de cláusulas*, núm. 2—*Contrato*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 12.

1^a. **Cláusulas prohibidas**—La póliza de seguros es ley para las partes que intervienen en el contrato de seguros en tanto no se opongan á las leyes en cláusulas espresamente prohibidas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 53, Ser. 4^a.

Coacción—Véase: *Confesión retractada*.

1. **Coautores**—Las declaraciones de los coautores no bastan para justificar la culpabilidad de los que niegan en absoluto tener conocimiento ó participación en el delito; si no existe otra prueba procede la absolución.—Jur. Com., tom. 9, pág. 94, Ser. 4^a.

Cobro—Véase: *Defraudación*, núm. 36—*Garantías*, número 5—*Cuenta acompañada*, núm. 2—*Pago por error*, núm. 1.

Cobro de cuentas—Véase: *Demanda defectuosa*, núm. 2—*Poder general*, núm. 3.

Código—Véase: *Libros de comercio*, núm. 23—*Auto de quiebra*, núm. 3.

1^b. **Coherederos**—Los coherederos que han tenido intervención en el juicio y por consecuencia en la transacción, no pueden ampararse del acto para interrumpir la prescripción.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 80, Ser. 3^a.

--

1^a—De acuerdo con la nota al verb. *Asegurador*, núm. 1.

1^b—La transacción, dice el art. 851 del Cód. Civ., hecha por uno de los interesados, ni perjudica ni aprovecha á tercero, ni á los demás interesados, aun cuando las obligaciones sean indivisibles.



Coherederos—Véase: *Acción personal*, núm. 1.

1. Colegatarios—El fallecimiento del legatario de usufructo, que ha entrado en posesión del legado, no da de-

1—Doña María Josefa Ezcurra, dispuso en su testamento otorgado el 11 de Febrero de 1851, un legado á favor de sus hermanas Margarita, Juana, Petrona y María de la O. Ezcurra cuya cláusula decía así: «Item declaro que lego y dono en propiedad la casa calle de la Piedad núm. 100 á mis hermanas D.^a Margarita, D.^a Juana, D.^a Petrona y D.^a María de la O. Ezcurra, por iguales partes, advirtiéndole que no se ha de vender hasta que muera la última de mis dichas hermanas, y que irán mis sobrinos hijos de aquéllas heredando á madres para repartirse de los alquileres ó dividir, según les haga cuenta». Ocurrido el fallecimiento de la testadora en 1856, sus legatarias, las cuatro hermanas nombradas, recibieron en posesión del legado, percibiendo sus frutos. Algunos años después falleció la legataria D.^a Margarita, declarando en su testamento, otorgado en 17 de Agosto de 1871, que le pertenecía entre otros bienes suyos, la cuarta parte de la casa calle de la Piedad núm. 98 y 102, y que eran dueñas de las otras tres cuartas partes sus citadas hermanas, D.^a Juana, D.^a Petrona y D.^a María Ezcurra, legando dicha cuarta parte á su sobrino Sotero Costa y Argibel «á condición, de que cada tres meses entregará tres onzas de oro á quien corresponda para ser remitidas á Don Juan Manuel de Rosas, mientras subsista ó no mejore de fortuna, contribuyendo así á su manutención.» D.^a Margarita Ezcurra falleció el 24 de Set. de 1874 y por su muerte, su sobrino y legatario se consideró con derecho á gozar del legado dejado á su favor, de la casa calle de la Piedad, en unión con sus tías, vendiendo más tarde la parte que decía corresponderle en dicha finca por aquél legado á Don Bernabé Cos, según escritura pública otorgada ante escribano en 20 de Oct. de 1879. De estos antecedentes surgió la cuestión resuelta en el sumario, promovida por la legataria D.^a Petrona Ezcurra de Urquiola, pretendiendo que su hermana D.^a Margarita, era tan solo una legataria de usufructo en la finca calle de la Piedad ya mencionada, y que por su muerte ese legado había acrecido á las demás colegatarias, pidiendo que en consecuencia se condenase á Cos á entregar el importe de los arrendamientos que indebidamente había percibido como supuesto cesionario, del legado de D.^a Margarita á contar desde la fecha de su fallecimiento. Se observó desde luego, que la demanda tenía por base el derecho de acrecer que la demandante consideraba corresponderle como legataria, y siendo esta la cuestión propuesta, es incuestionable que



recho á los colegatarios para acrecer su parte en el capital, del que pueden disponer los sucesores del fallido, á los que corresponderá la nueva propiedad por muerte de los demás usufructuarios.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 86, Ser. 4^a.

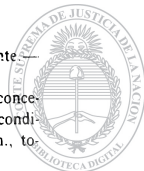
Colindante—Véase: *Propietario colindante*, núm. 1.

1^a. **Comercial**—Para que un acto se reputé comercial, basta que lo sea para una de las partes.—Jur. Civ., tomo. 8, pág. 116, Ser. 3^a.

1^b. **Comerciante**—Se conceptúa comerciante el que ejerce con arreglo á la legislación vigente entonces, aquélla no tiene tal derecho como no lo tienen tampoco los legatarios en el mismo caso actualmente, dadas las prescripciones del art. 3818 del Cód. Civ., que ha consagrado al respecto la doctrina más aceptada, partiendo de la base de que el acrecimiento no es otra cosa en realidad, sino un no decrecimiento, no para que el legatario tenga más de lo que le ha sido dado, sino para que no tenga menos, como dice la nota del art. 3812 con Marcadé. La Ley 33, tit. 9^o, Part. 6^a, disponía, tratando del legado ó manda hecho á muchos, que si alguno de ellos muriese antes que el testador, ó viviendo renunciase su parte, ó en fin, ocurriese alguna otra razón porque no lo hubiese, que en tal caso acrece á los demás, de lo que se sigue, que ese derecho solo tenía lugar cuando el colegatario falleciera con anterioridad al testador, mas no en el caso de que ocurriera con posterioridad.

1^a—Véase: *Acto comercial*, núm. 1.

1^b—Según los arts. 1^o y 2^o del Cód. de Com., son comerciantes los que teniendo capacidad legal para contratar ejercen por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Tanto por estos arts., cuanto por los arts. 1^o del Cód. francés y 1^o del Cód. de Com. español, anterior al último de 1885, que han sido la fuente del nuestro, el ejercicio habitual del comercio es lo que determina la calidad de comerciante. La Dirección de Rentas espidió un certificado por el que se comprobó el hecho de que la parte tenía un negocio de almacén, lo que demuestra su calidad de comerciante. La falta de patente de un negocio, si bien es una infracción á las leyes fiscales, no puede quitar al que ejerce el comercio su calidad de comerciante, porque las leyes de impuestos fiscales en nada alteran las prescripciones citadas del Cód. de Com.



ce actos de comercio, haya ó no pagado la patente.—Jur. Com., tom. 1, pág. 296, Ser. 4^a.

2. **Comerciante**—Las moratorias solo pueden concederse al comerciante que justifica plenamente las condiciones requeridas por el Cód. de Com.—Jur. Com., tomo 2, pág. 225, Ser. 4^a.

3. **Comerciante**—Corresponde á la jurisdicción civil los actos de éstos que por su forma no resulten comerciales.—Jur. Com., tom. 2, pág. 389, Ser. 4^a.

4. **Comerciante**—Justificada la fuga de éste y el abandono de su casa, procede la declaración de quiebra.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 139, Ser. 4^a.

5. **Comerciante**—A los efectos de la competencia del Juzgado de Comercio, basta que el actor sea comerciante.—Jur. Com., tom. 5, pág. 117, Ser. 4^a.

6. **Comerciante**—La locación de servicios como obliga-

2—El art 1584 del Cód. de Com. dispone que las moratorias se conceden exclusivamente á los comerciantes que prueban que la imposibilidad de pagar de pronto á sus acreedores, proviene de accidentes extraordinarios imprevistos ó de fuerza mayor y que justifican al mismo tiempo por medio de balance exacto y documentado, que tienen fondos bastantes para pagar íntegramente á sus acreedores, mediante cierto plazo ó espera. Si los acreedores no se oponen en la proporción indicada en el art. 1591 del Cód., á la convención de la moratoria, queda ésta librada al prudente arbitrio judicial. Es necesario además justificar, que con la moratoria puede obtener fondos bastantes para pagar íntegramente á sus acreedores.

3—De acuerdo con la ley y con la jurisprudencia sentada. Véase: verb. *Acto civil*, núm. 4 y *Acto comercial*, núm. 4.

4—Véase: *Abandono de una casa*, núm. 1.

5—Pero es necesario que el acto sea mercantil por su naturaleza. Por lo demás basta que para una de las partes sea mercantil el acto para que su conocimiento corresponda al fuero mercantil. Véase: verb. *Acto civil*, núms. 3 y 4; *Acto comercial*, núms. 1, 2 y 4.

6—Según los antecedentes, resultaba que los demandantes se obligaron á retirar una solicitud que tenían en tramitación ante el gobierno



ción de hacer, es un acto de carácter civil, aun cuando lo ejerzan comerciantes.—Jur. Com., tom. 6, pág. 219, Ser. 4ª.

7. **Comerciante**—Para la rehabilitación del comerciante concursado, deben acompañarse los comprobantes del pago hecho á los acreedores; la sentencia absolutoria en lo criminal no es bastante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 131, Serie 4ª.

8. **Comerciante**—El préstamo ó mutuo entre comerciantes, aun cuando accesoriamente se encuentre garantido con hipoteca, es un acto de comercio cuya nulidad ó validez deben juzgar los tribunales de lo Comercial.—Jur. Com., tom. 8, pág. 120, Ser. 4ª.

9. **Comerciante**—La jurisdicción mercantil es compe-

sobre la concesión de un Banco Agrícola, para que los demandados presentasen otra solicitud de concesión de otro Banco, debiendo los primeros procurar que esta última tuviese éxito favorable. Desde luego se trataba de un contrato innominado comprendido en las disposiciones de los arts. 625 y siguientes, Cód. Civ., sin que en manera alguna pueda considerarse como acto de comercio el hecho de retirar una solicitud de concesión administrativa para procurar el éxito de otra, que no está comprendido en ninguno de los incs. del art. 8º del Cód. de Com., ni puede equipararse á los que allí se enumeran. Tales obligaciones de hacer, legisladas espresamente por el Cód. Civ., no pueden llevarse á la jurisdicción comercial, que es especial y privativa y que debe interpretarse restrictivamente y no ampliarse á actos cuando menos dudosos, porque en la duda debe imperar la jurisdicción común y ordinaria de los jueces civiles.

7—Véase: *Acreedores pagados*, núm. 1.

8—Véase: *Acto comercial*, núm. 3.

9—No se puso en duda el carácter de comerciante del actor, ni menos se discutió que el acto ejecutado por éste fuese comercial: luego, la jurisdicción mercantil era competente en el caso, aunque el demandado no fuese comerciante, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 7º del Cód. de Com., tanto más, cuanto que el demandado no estaba comprendido en las escepciones consignadas en el mismo art. Por otra

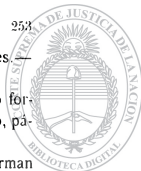
tente para conocer en la demanda, si el actor es comerciante.—Jur. Com., tom. 9, pág. 224, Ser. 4^a.

10. **Comerciante**—Procede la anotación del contrato de sociedad en el Registro Público de Comercio, aun cuando

parte, de los antecedentes espuestos en el escrito en que se dedujo la escepción de incompetencia, resultaba que las compras hechas por el demandado no estaban destinadas á su uso personal, de manera que no podía defenderse ni aun con las disposiciones consignadas en el art. 452 del Cód. citado. Esta es la jurisprudencia sentada en la Cám. Véase el núm. 5.

10—Todo comerciante, ya sea un individuo ó una sociedad, para gozar de la protección que el Cód. acuerda á los que se dedican al comercio, debe matricularse en el tribunal de su domicilio. Cuando es una sociedad la que se dedica al comercio, á más de la matrícula debe inscribirse en el Registro Público de Com. el contrato social—arts. 25 y 27, inc. 1^a, y 36, inc. 3^a, Cód. de Com.—Se trata, pues, de dos actos distintos á que las sociedades están sometidas, y se discute cuál debe verificarse primero. Para la matrícula, la ley no fija término preciso: puede hacerse al empezar el giro ó después, con tal que no sea en circunstancias en que se tenga que invocar los privilegios consagrados por el art. 26. Para la inscripción del contrato social se fija el término de quince días contados desde su otorgamiento; pero después de este plazo puede hacerse también la inscripción siempre que no medie oposición de parte interesada, y sus efectos solo se cuentan desde la fecha del registro. En razón de épocas para uno y otro requisito, no puede decirse que uno deba primar sobre el otro, por más que los efectos de la omisión de su cumplimiento sean diversos. Pero la comercialidad de la entidad social arranca del registro de su título constitutivo, porque es entonces la oportunidad más adecuada para examinarla en su esencia y determinar si realmente corresponde al tipo de las sociedades comerciales reconocidas por el Cód. Parece más arreglado al orden natural de las cosas, que se diga primero, tal sociedad es comercial y por tanto debe inscribirse en el Registro Público, que ordenar la matrícula dejando para después el requisito de la inscripción. La sociedad no registrada, aunque respecto de terceros tenga eficacia, no es una verdadera sociedad entre los otorgantes, en el concepto del art. 282, sino una simple comunidad de intereses. La omisión de la matrícula no la privaría del carácter de sociedad comercial y sí solo de las ventajas que el art. 26 acuerda á los comerciantes matriculados.





los socios no se hayan matriculado como comerciantes.—Jur. Com., tom. 10, pág. 218, Ser. 4^a.

11. **Comerciante**—Los asientos de los libros solo forman prueba entre comerciantes.—Jur. Com., tom. 10, página 378, Ser. 4^a.

12. **Comerciante**—Los libros de comercio solo forman prueba entre comerciantes.—Jur. Com., tom. 10, página 382, Ser. 4^a.

13. **Comerciante**—Los libros de comercio forman prueba plena entre comerciantes, si llevados en debida forma, el contrario no presenta por su parte los que la ley exige como indispensables.—Jur. Com., tom. 10, pág. 415, Ser. 4^a.

14. **Comerciante**—La venta de materiales para una obra, se reputa comercial si el vendedor es comerciante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 116, Ser. 4^a.

15. **Comerciante**—Justificado el carácter de comerciante que revestía el que hizo cesión de bienes, deben remitirse al juez de Comercio que entiende en el concurso, los

11—Y en hecho de su comercio—art. 63 del Cód. de Com.

12—De acuerdo con el núm. precedente.

13—Art. 63 del Cód. de Com.

14—Esta resolución fué dictada revocando otra del Dr. Méndez Paz, quien sostenía la tesis contraria á la del sumario. El sumario se funda en que si bien con arreglo al Cód. de Com., que regía cuando se interpuso la demanda, considerada la condición de la parte demandada, aquélla correspondía indudablemente al Juez de lo Civ., habiéndose puesto en vigencia después de esa época, otro Cód. en cuyo art. 7° se declara que para que un asunto deba reputarse mercantil, basta el que lo sea respecto de una de las partes, como sucede en el caso de que se trata, en lo que concierne al demandante y siendo doctrina establecida que las leyes que determinan la jurisdicción de los Tribs., deben aplicarse con efecto retroactivo á los asuntos pendientes, corresponde en consecuencia el conocimiento de la causa á la jurisdicción mercantil.

15—Véase: verb. *Cesión de bienes*, núm. 1.



autos obrados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 142, Ser. 3ª.

16. Comerciante—Reconocido que ni mandante ni mandatario reúnen el carácter de comerciantes, el mandato debe calificarse y juzgarse como contrato civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 3ª.

17. Comerciante—La prueba resultante de los libros de comercio, solo importa una presunción, pero no puede ser dividida, y el no comerciante que ha pedido la compulsa, está obligado á aceptar lo que resulta del conjunto.—Jur. Com., tom. 9, pág. 272, Ser. 3ª.

Comerciante—Véase: *Comisiones*, núm. 1—*Libros de comercio*, núms. 3, 10, 12 y 31—*Acto comercial*, núm. 2—*Balance*, núm. 1—*Fianza civil*, núm. 1—*Moratorias*, número 3—*Quiebra*, núm. 4—*Fuga de un comerciante*, número 1—*Acto civil*, núm. 4—*Compulsa*, núm. 6—*Competencia comercial*, núm. 2.

Comercio—Véase: *Libros de comercio*—*Quiebra*, números 2 y 4—*Utilidades*, núms. 1 y 2—*Mercaderías*, número 3.

Comisario—Véase: *Abuso de autoridad*, núm. 2.

Comisión—Véase: *Confesión indivisible*, núm. 2—*Depositario*, núm. 4—*Depósito judicial*, núm. 1—*Martillero*, núms. 2 y 3—*Prescripción de comisión*, núm. 1—*Remate judicial*, núms. 2 y 3.

1. Comisión del martillero—La Cámara solo puede fijarla si ha sido regulada por el Inferior.—Jur. Com., tomo 2, pág. 281, Ser. 4ª.

2. Comisión del martillero—Si el remate se suspendió

1—Porque el tribunal solo tiene jurisdicción para conocer en última instancia de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los respectivos jueces de 1ª Inst.—art. 81, Ley Org. de 1º de Nov. de 1886 y art. 267, Cód. de Proc.

2—Según lo manifestó el mismo rematador, se suspendió el remate



por imposibilidad de verificarlo, el rematador no tiene derecho al cobro de la comisión.—Jur. Com., tom. 2, página 403, Ser. 4^a.

3. **Comisión del martillero**—Si el remate no se verificó por falta de licitadores, el martillero carece de derecho para cobrar comisión.—Jur. Com., tom. 4, pág. 214, Serie 4^a.

4. **Comisión del martillero**—Por el remate suspendido, debe fijarse con arreglo á los trabajos practicados.—Jur. Com., tom. 5, pág. 383, Ser. 4^a.

5. **Comisión del martillero**— La suspensión del remate

de algunos objetos por haber pleito respecto de ellos y ser por consiguiente cosa litigiosa; desde luego, ésta era una circunstancia que no solo autorizaba sino que obligaba á suspender el remate por disposición judicial. Por otra parte, constaba de un espediente traído *ad effectum videndi*, que desde antes de ser nombrado el rematador ya existía reclamación de tercero sobre los objetos que en el terreno existían, pues se trataba de un inmueble y sus accesorios, lo que demuestra que hubo causa justificada para la suspensión del remate. De lo espuesto resulta que el rematador, debió darse cuenta de las existencias que debía rematar, teniendo presente las constancias de los autos, y que hubo negligencia de su parte al incluir en los avisos como los incluyó los objetos litigiosos y no haber especificado las existencias á que se refería el auto de su nombramiento.

3—Solo tiene derecho á cobrar los gastos hechos en la preparación del acto. Esta es la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Remate*, núm. 2, cuya nota consagra el principio del sumario.

4—El remate se mandó suspender por haberse transigido el asunto pagando el ejecutado. Desde luego, es indudable el derecho del martillero para exigir el pago de los gastos hechos para el desempeño del encargo que se le confirió y una compensación razonable por los trabajos que ejecutó, pues ninguna disposición legal establece que la comisión ó compensación que deba pagarse al martillero se calcule sobre el importe del crédito reclamado. Esta resolución está de acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Comisión*, núm. 7; tom. 2^o, verb. *Remate*, núms. 1 y 2.

5—El remate ordenado fué mandado suspender pocos días después



hace procedente el pago de compensación al martillero, pero carece de derecho para el cobro de media comisión.—Jur. Com., tom. 5, pág. 398, Ser. 4^a.

6. **Comisión del martillero**—De venta de títulos hecha en remate y en la Bolsa, debe fijarse en el medio por ciento si lo efectúa un corredor.—Jur. Com., tom. 8, pág. 119, Ser. 4^a.

1^a. **Comisión del síndico**—La renuncia es irrevocable, aun cuando no exista aceptación expresa del deudor ó acreedores—Jur. Com., tom. 5, pág. 380, Ser. 4^a.

1. **Comisiones**—Corresponde á la jurisdicción civil el

por haberse deducido tercera. La cuestión á resolverse era la relacionada con el cobro de *media comisión* sobre la tasación de la finca que iba á venderse. Ninguna prescripción legal autoriza á los martilleros á cobrar en todos los casos media comisión por una venta que no han verificado. El art. 121 del Cód. de Com. aunque los equipara á los comisionistas ó consignatarios, es solamente para determinar la extensión de sus facultades y de sus obligaciones cuando no estuviese presente el dueño de los efectos que hubieren de venderse, pero esto no autoriza á aplicar á los martilleros lo dispuesto en el art. 275 del Cód. de Com. para los comisionistas, cuando se trata de ventas ordenadas y suspendidas por orden judicial, sin perjuicio de que les sea pagada una compensación estimada según derecho, por los trabajos que hubiese realizado. Véase el núm. precedente que consagra la misma doctrina.

1.—La renuncia hecha por el síndico de la comisión que le correspondía por sus trabajos no fué sujeta á condición ni término, sino pura y simple, según resultaba del escrito de renuncia; siendo el síndico el representante de los acreedores, la renuncia de la comisión, hecha por él como acto personal suyo, debe considerarse aceptada por él mismo como representantes de aquéllos, desde que ninguna incompatibilidad existía en el ejercicio simultáneo de una y otra personería, y por consiguiente, la disposición del art. 875, Cód. Civ., no es aplicable en este caso.

1.—El actor se presentó demandando al Banco Constructor por cobro de comisión que debía adeudarse por su intervención en el contrato que aquel establecimiento celebró con el Gob. Nac., sobre construcción de casas para bomberos: el demandado declinó de jurisdicción



cobro de comisiones no regidas por la ley comercial, aun

sosteniendo que el cobro de esa comisión correspondía al fuero civil. El Juez de lo Com. se declaró competente: apelada la resolución el Fiscal Dr. Cortés se espidió así: «Decir que las sociedades anónimas son comerciales, es lo mismo que decir que son comerciantes todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual. Pero ni uno ni otro concepto importa declarar que los actos de aquella entidad jurídica ó de esta clase de personas sean ineludiblemente comerciales. La ley establece una presunción en pro de la comercialidad de tales actos, pero admite la prueba en contrario—art. 5º del Cód. de Com.—Así cuando se trate de actos de un carácter no bien definido, los actos de los comerciantes se reputan mercantiles, pero no sucede lo mismo cuando manifiestamente no tienen ese carácter como ocurre en el caso presente. El actor ha sido intermediario del negocio que la sociedad denominada «Banco Constructor de la Plata» realizó con el Gobierno Nacional sobre edificio para bomberos. Ha desempeñado ese papel de intermediario en un contrato sobre construcción de comisarías, según se expresa en el escrito en que se dice además lo siguiente: «Pero en este asunto ha intervenido una *entidad especial*, que figura en los antecedentes suministrados por los libros del Banco con el nombre de intermediario y *cuyas funciones no están bien determinadas*, y creo que serán muy difíciles de determinar. ¿Porqué han de considerarse comerciales las relaciones creadas por esa intervención? En primer lugar, la construcción de edificios no es acto de comercio. En segundo lugar, las entidades especiales, cuyas funciones no están bien determinadas y son difíciles de determinar, no alcanzo por qué razón hayan de considerarse comerciales. Los intermediarios comerciales están bien definidos y sus funciones claramente especificadas. Finalmente, toda la legislación que se invoca como aplicable al caso, pertenece al Cód. Civ. y según el art. 62 de la Ley de Org. de los Trib. de la Cap., se dispone que la competencia de los jueces de comercio surge cuando se trata de asuntos regidos por el Cód. y leyes de Comercio.» La Cám. revocó la resolución diciendo: «Por los fundamentos de la presente vista del señor Fiscal y teniendo por otra parte en consideración que se trata de actos pasados bajo el imperio del art. 5º, Cód. de Com., según el que los actos mismos de comercio para los efectos del fuero, podrían ser comerciales respecto de una de las partes y no serlo respecto de la otra, cuando alguna de ellas no era comerciante. Que según la opinión de los tratadistas, fundados en el principio *actor forum rei sequi debet*, en tales



cuando el acto haya pasado entre comerciantes.—Jur. Comercial, tom. 1, pág. 166, Ser. 4^a.

1. **Comisionista**—El despachante de aduana en su carácter de comisionista, solo tiene acción contra el que contrató sus servicios, sin que pueda responsabilizar al propietario de las mercaderías despachadas.—Jur. Com., tom. 4, pág. 20, Ser 4^a.

2. **Comisionista**—Para la inscripción de un comisio-

casos, cuando el demandado no es comerciante debe acudirse á la jurisdicción civil—Obarrio, comentarios al Cód. de Com., tom. 1º, núm. 23 —en cuya situación se hallaba el demandado.» Estos fundamentos de la Cám. ya hoy no tienen razón de ser ni tenían cuando se dictó la resolución del espresado sumario—año 1893—pues el Cód. de Com. había establecido que bastaba que un acto fuese comercial para uno de los contratantes para que ambos quedaran sujetos al fuero mercantil. La regla anacrónica invocada por la Cám., de que el actor debe seguir el fuero del reo, ha sido eliminada de nuestras leyes. El Dr. Cortés estaba en lo cierto al aducir sus fundamentos. El conocimiento del asunto correspondía al fuero civil. La jurisdicción mercantil nace de los actos de comercio, pues el Cód. de la materia no ha hecho de ella fuero personal, sino que ha dejado bajo la jurisdicción común los actos civiles, aun cuando éstos sean ejecutados por comerciantes; y bajo la jurisdicción mercantil los contratos comerciales, aun cuando los ejecute una persona que no es comerciante. Desde luego, es la naturaleza del acto la que determina la competencia sin que obste á esta conclusión lo prescripto por el art. 5º, que establece que los actos de los comerciantes se presumen *prima facie*, actos de comercio, salvo la prueba en contrario, porque este artículo se refiere á aquellos actos que puedan ser civiles ó comerciales, según la intención del que los ejecute; y entonces es natural que si quien los realiza es comerciante, la ley establezca la presunción *juris tantum* de su comercialidad, pero que en definitiva es la naturaleza del acto jurídico la que determina la competencia y la jurisdicción á que debe ocurrirse.

2.—Una sociedad se presentó solicitando ser inscripta como comisionista, no se hizo lugar porque no se comprobó la existencia de la sociedad, y porque no se justificó la calidad de comerciantes invocada por los postulantes, condición requerida por el art. 89, inc. 3º del Cód. de Comercio.



nista en el Registro Público de Comercio, debe justificar previamente su calidad de comerciante.—Jur. Com., tomo 4, pág. 247, Ser. 4^a.

3. **Comisionista**—O consignatario, puede ser inscripto como comerciante.—Jur. Com., tom. 5, pág. 141, Ser. 4^a.

4. **Comisionista**—Procede la reivindicación de muebles ó su valor, si se justifica que los concursados eran tenedores para su venta á títulos de comisionistas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 421, Ser. 4^a.

5. **Comisionista**—El comitente está obligado á pagar al comisionista los gastos que origine el cumplimiento del mandato.—Jur. Com., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

6. **Comisionista**—El comisionista ó mandatario carece de derecho para exigir á una sola de las partes el importe total de la comisión, aun cuando sea la única culpable de no haberse efectuado la operación, puesto que conseguido el acuerdo de voluntades puede verificar el cobro á cada uno de los contratantes.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 377, Ser. 3^a.

7. **Comisionista**—El intermediario en un contrato, ya

3—Se resolvió en 1^a Inst. que el comisionista no podía inscribirse en la matrícula porque el Cód de Com. no lo exige á las personas que se dedican á comisiones ó consignaciones. Pero la Cám. resolvió lo contrario fundándose en que el art. 1^o del Cód. de Com. declara comerciantes á todos los individuos que teniendo capacidad legal para contratar *ejercen de cuenta propia* actos de comercio haciendo de ellos su profesión habitual. El art. 8^o, inc. 5^o, declara actos de comercio, las comisiones, mandatos, etc., de modo que el que hace profesión habitual de comisionista es comerciante. Las comisiones ó consignaciones están especialmente legisladas en el libro 2^o, tit. 2^a, cap. 2^o del Cód. de Com.; por consiguiente la legislación comercial domina las relaciones creadas por este género de operaciones. El art. 93 es aplicable á los comisionistas ó consignatarios, sin duda alguna.

5—Art. 276 del Cód. de Com.

7—De acuerdo con lo que disponen los arts. 118, y 93, inc. 3^o del

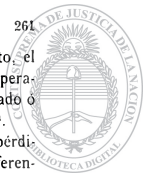


sea comisionista ó martillero, está obligado á la exhibición de sus libros de comercio, y al reconocimiento de los documentos que llevan su firma.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 120, Ser. 3^a.

1. Comitente—Rigiéndose las relaciones entre comi-

Cód. de Com. En el caso presente el comisionista no era parte en el juicio.

1.—La acción deducida por el demandado fué por la suma de 47.276 pesos moneda nacional, proveniente de haber comprado en su carácter de corredor de Bolsa por cuenta y orden del demandado, 1300 acciones de una sociedad anónima. El demandado al contestar la demanda, reconoció que había dado orden de comprar solo 1000 acciones, mas al absolver posiciones confesó que entre las operaciones autorizadas había una partida de 100 acciones compradas á un tercero, y otra de 100 más compradas á otro, por cuyo motivo fundadamente la sentencia declaró comprobada la compra de 1200 acciones por cuenta y orden del demandado. Habiéndose conformado con la sentencia el demandante, resultaba que la Cám. no estaba habilitada para declarar si se hallaba ó no comprobada la compra de las 100 acciones restantes para completar las 1300 que se mencionaron en la demanda, porque sobre la declaración de falta de prueba respecto de estas acciones no se había deducido apelación. La Cám. ha declarado en repetidos fallos, muy especialmente en el de la causa Baron contra Moine de fecha 10 de Oct. de 1888, que las relaciones de derecho entre un corredor de Bolsa que ha operado en las condiciones del actor, son las del mandatario y del mandante, y que en nada obsta á esta doctrina el que dichos corredores contraten en su propio nombre, porque tanto el mandato civil como el comercial puede cumplirlo el mandatario en nombre propio ó en el ajeno, desde que el rasgo característico del mandato es la función representativa, el negocio por cuenta ajena, y esto tiene lugar sea que se dé el nombre del dueño del negocio, sea que se omita. La falta de orden para liquidar ó vender las acciones compradas, como el hecho de que ellas no fuesen puestas á disposición del comitente, en el día del vencimiento del plazo, por su mismo mandatario, carece de importancia legal porque la orden de liquidar no es necesaria tratándose de estas operaciones á día fijo entre corredores y socios de la Bolsa, pues el art. 309 del Cód. de Com. anterior, bajo cuyo imperio pasaron los actos jurídicos materia de este juicio, disponía que el que encarga un negocio, se entiende que faculta para todos los actos que son indispensables para ejecutarlo,



tente y corredor por las disposiciones del mandato, el mandante debe al mandatario los saldos que las operaciones de Bolsa hayan producido y que haya pagado o garantido éste.—Jur. Com., tom. 4, pág. 61, Ser. 4^a.

2. Comitente.—El comitente responde de las pérdidas que su corredor haya debido abonar como diferencias por las operaciones que sobre títulos de comercio le haya encomendado.—Jur. Com., tom. 4, pág. 98, Ser. 4^a.

aun cuando no se espresen al conferir el mandato. Reconocido y establecido que el demandado no dió orden alguna, ni proveyó á su mandatario de los fondos necesarios para retirar las acciones compradas para él, puede éste usar de las facultades implícitas á que en tales casos lo autorizaba dicho artículo. La única duda que podría suscitarse, era el carácter de necesidad de los actos; mas este carácter estaba patentizado por el hecho de la falta de provisión de fondos y por las disposiciones del Rcg. de la Bolsa que determina la forma y medios de liquidación de tales operaciones, disposiciones á que estaba sometido el mandatario como corredor de Bolsa, y que conocía el mandante como socio de esa institución. La acción *ex-mandato* es una acción de *repetición y reintegración*, en virtud de la cual el mandante está obligado, en tre otros actos, á solventar todas las obligaciones que el mandatario ha contraído en cumplimiento del mandato. Así es que, aun cuando el actor no hubiera hecho entrega material de la totalidad de los saldos dichos á sus acreedores, su mandante estaba obligado á proveerle de las sumas que esos saldos arrojasen para que él pudiese hacer efectivas las consecuencias de su mandato—arts. 308, 310 y 381, Cód. de Com. citado.—En el caso de Pereyra y Nevares, la Cám. declaró que las resoluciones de la Cám. Sindical de la Bolsa y de su comisión liquidadora obligaban á sus corredores que las aceptaban de hecho, porque las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla á la que deben someterse como á la ley misma—art. 202 del Cód. de Com. citado y 1197 del Civ.—Por aplicación de esta doctrina esos saldos que pueden resultar en contra del mandatario, son verdaderas obligaciones jurídicas, originadas por el cumplimiento del mandato, lo que no es dado á un mandante desconocer.

2.—De acuerdo con el caso precedente.



Comitente—Véase: *Nulidad de un contrato*, núm. 1.—*Defraudación*, núm. 28.

1. *Compañía de seguros*—Que formulan en la República sus contratos y cobran en la misma sus primas, están obligados á aceptar la jurisdicción nacional, no obstante las estipulaciones que en contrario hayan insertado en sus pólizas.—Jur. Com., tom. 4, pág. 235, Ser. 4^a.

1—El inc. 4º del art. 218 del Cód. de Com. vig., igual al inc. 4º del art. 296 del anterior, dispone que los hechos de los contrayentes subsiguientes al contrato, que tengan relación con lo que se discute, serán la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato. El art. 918 del Cód. Civ. estatuye, que la expresión tácita de la voluntad resulta de aquellos actos por los cuales se puede conocer con certidumbre la existencia de la voluntad. Las compañías que tienen varios establecimientos, tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas, según lo dispone el inc. 4º del art. 90 del Cód. Civ. Las compañías de seguros no obstante lo escrito ó impreso en sus pólizas y en sus recibos no contratan con los asegurados en sus domicilios fuera de nuestro país, sino en esta ciudad y aquí también se hace el pago de las primas del seguro. La compañía demandada tenía establecido en esta ciudad un directorio con facultad de otorgar pólizas y de pagar los siniestros que ocurriesen en la Rep. Arg. y que así lo había hecho saber al público en los impresos que repartió, según se comprobó en autos. Por resolución de 2 de Mayo de 1891 el Gob. de la Nación había autorizado á la compañía demandada á continuar sus operaciones en la Rep. á condición de que acreditase que había radicado en el país, por lo menos un 50 por ciento de de su capital realizado, y que había nombrado un directorio con residencia en la Rep., cuya resolución fué plenamente aceptada y cumplida por el directorio, según se estableció en el expediente, importa que la compañía estaba y está obligada á tener domicilio legal en este país, y á poseer en él bienes suficientes para responder á los siniestros que pueden ocurrir. En presencia de estos antecedentes no pueden prevalecer las fórmulas impresas consignadas en las pólizas constituyendo domicilio especial fuera del país á la vez que contenían, tanto ellas como los recibos que se agregaron, aseveraciones inexactas respecto del lugar en que se celebraban los contratos y se efectuaban los pagos.

1^b. Compañía de seguros—Los terceros que contratan el seguro con sociedades no inscriptas en el Registro

1^b—El 1º de Junio de 1887, D. R. López, aseguró sobre su vida la suma de 4.000 pesos moneda nacional, en favor de su esposa é hijos. Muerto aquél en esta ciudad, se presentó su viuda por sí y por sus hijos, demandando á la sociedad aseguradora por el importe de la póliza la que acompañó juntamente con las partidas de matrimonio, nacimiento y defunción respectivas. El presidente de la sociedad, contestó la demanda alegando que la póliza era nula por haber sido expedida antes de que se inscribieran los estatutos de la Compañía en el Reg. Púb. de Com., y con infracción del art. 64 de los mismos, cuyos originales acompañó, y además que la causa que produjo la muerte del asegurado, excluía la responsabilidad de la Compañía, según el art. 44 de aquéllos, por cuyos dos fundamentos, é invocando el art. 408, Cód. de Com., negó el derecho de la actora al pago del seguro. El art. 64 disponía, que «la sociedad se instalará inmediatamente que haya doscientos cincuenta asegurados, correspondientes á una misma serie de seguros, cualesquiera que sea su valor», y el art. 44: que «el suicidio y el duelo anulan la póliza quedando sin efecto el seguro». La sociedad probó oportunamente que los estatutos fueron inscriptos el 22 de Junio de 1889, y que hasta el mes de Diciembre de ese año, no se habían emitido sino tres pólizas; 64 de 4000 pesos y 39 de mil. La parte demandante no desconoció esos hechos, pero sostuvo que después de inscriptos los estatutos, el nuevo Directorio aprobó las pólizas emitidas antes de la inscripción respecto de aquellos asegurados que, como el actor, hubiesen cumplido con las obligaciones del contrato, según resultaba de la memoria presentada por el presidente, del hecho de haber seguido cobrando á los asegurados las mensualidades respectivas, como constaba del recibo firmado por el tesorero de la compañía, correspondiente al mes de Junio de 1890 del seguro del actor. Dados los términos de los estatutos y las prescripciones de nuestras leyes, y en presencia de los hechos probados y reconocidos por las partes, es evidente que la sociedad no estaba obligada al pago del seguro que legalmente no puede reputarse contratado por ella. En efecto, el art. 36, Cód. Civ., prescribe que se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales *siempre que no excedan los límites de su ministerio*. En lo que excedieran solo producirán efecto respecto de los mandatarios. Es el mismo principio que rije en el mandato: el mandatario no puede obligar al mandante fuera de los límites del mandato y en lo que excediere se obliga á sí mismo pero no á aquél. Análoga disposición





Público de Comercio, no pueden reclamar de ésta, sino de los directores, personalmente, los seguros verificados contraviniendo disposiciones de los estatutos de la compañía.—Jur. Com., tom. 10, pág. 425, Ser. 4ª.

2. **Compañía de seguros**—Justificado que un agente de la compañía aseguradora recibió aviso del siniestro, la ley considera llenado este requisito del contrato como si fuera la gerencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

Compañía de seguros—Véase: *Seguros*.

1. **Compensación**—La injuria no debe ser castigada si

rije para las sociedades anónimas, según el art. 408, Cód. de Com. vigente, cuando se celebró el contrato. Los administradores ó directores de una compañía anónima, dice ese art., responden personal y solidariamente á los terceros que contratasen con la sociedad, *hasta el momento en que se verifique la inscripción del instrumento ó título de su institución*. Verificado el registro, responden solo á la compañía del buen desempeño de las funciones, que según los reglamentos ó estatutos estén á su cargo. Sin embargo, en caso de infracción de los estatutos ó reglamentos, responderán personalmente, á los terceros con quienes hayan contratado, del perjuicio que éstos hayan sufrido con motivo de aquella infracción. Según esas disposiciones, las pólizas emitidas antes de haber el número requerido para cada serie de seguros, por el art. 64 de los estatutos, no pueden obligar á la compañía, y ni el directorio que los emitió, ni el que le sucedió, pudo revalidar el acto sin concurrir esa circunstancia, no modificada por los arts. adicionales de aquéllos, aprobados con posterioridad á los mismos. El asegurado no puede alegar ignorancia al respecto, porque para evitarla está la inscripción en el Reg. Púb. de Com., y si ésta no se ha verificado, el tercero que se decide á contratar, á pesar de ello, debe cargar con las consecuencias de su imprevisión—art. 904, Cód. Civ.

2—Véase: *Agente de seguros*, núm. 1.

1—Las acciones por injurias son de una naturaleza especial, y el Cód. Pen. ha establecido que el culpable de injuria quede exento de pena si media provocación en las injurias verbales y en las escritos leves—art. 186, inc. 2º.—Esta disposición es la aplicación de la máxima del derecho antiguo *injuria mutua compensatione tolluntur*, y es procedente siempre que se trate de delitos cuya represión no interesa al orden



se justifica la provocación; procede la compensación aun con injurias posteriores.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

2^a. **Compensación**—No es procedente si existen moratorias.—Jur. Com., tom. 8, pág. 315, Ser. 4^a.

Compensación—Véase: *Defraudación*, núm. 39—*Mandato*, núm. 15.

1. **Competencia**—La declaración de ausente con presunción de fallecimiento, es de competencia del juez del último domicilio del ausente.—Jur. Civ., tom. 10, página 80, Ser. 3^a.

2^b. **Competencia**—La acción de nulidad de una sentencia debe deducirse ante el juez en turno; el que la dicte solo es competente para su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 94, Ser. 3^a.

3. **Competencia**—Es competente el juez de la Capital

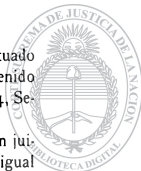
público. El que se querella por injurias debe ser moderado en sus escritos y no injuriar á su vez al querellado para que éste no pueda convertirse en acusador. El Dr. Rivarola comentando el inciso citado del art. 186 dice: «Por el inc. 2º del mismo art. se reconoce admisible la compensación en materia de injurias verbales y de escritas leves, en el mismo caso de un particular si medió provocación. El contestar una injuria con otra es un acto de defensa propia, empleando los mismos medios que el ofensor. La provocación en este caso cambia su carácter general de circunstancia *atenuante*, por el de causa *eximente*.»

2º—El art. 819 del Cód. Civ., establece los requisitos que deben concurrir para que la compensación pueda aplicarse, entre ellas se requiere que ambas deudas sean exigibles. El art. 1599 del Cód. de Com. preceptúa que el efecto de la moratoria es suspender la obligación de pagar las deudas puramente personales del que ha obtenido las moratorias. No siendo exigible la obligación de una de las partes, no puede ser materia de compensación.

1—Véase: *Ausente con presunción de fallecimiento*, núm. 1.

2^b—Véase: *Acción de nulidad*, núm. 3.

3—El Dr. Posse como juez de 1^a Inst. mandó que el ejecutante ocurriese donde correspondía, porque se trataba de una acción perso-



para la ejecución hipotecaria si el inmueble está situado en su jurisdicción, aun cuando el contrato haya tenido origen fuera de ella.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 124, Serie 3ª.

4. Competencia —Del Juzgado para entender en un juicio, no puede depender de la existencia de otros de igual naturaleza, aun cuando en ellos puedan fundarse otra excepción.—Jur. Civ., tom. 10., pág. 153, Ser. 3ª.

5. Competencia—La competencia del juez por la resi-

nal. El Dr. Cortés, como fiscal de la Cám., dijo que la resolución debía revocarse porque tratándose de una acción real, como debe ser considerada la hipotecaria, y pudiendo esta clase de acciones deducirse ante el juez del lugar donde se encuentra situada la casa, la ejecución correspondía al que tiene su imperio inmediato sobre el inmueble. La Cám. revocó el auto aduciendo como único argumento el dictamen fiscal sin agregar una palabra. Los Dres. Giménez, Molina Arrotea y Bustos resolvieron esta cuestión en el sentido del sumario, sin preocuparse de destruir los sólidos fundamentos de la sentencia anotada en el tom. 4º, de la Inst., verb. *Préstamo hipotecario*, núm. 1, donde se resolvió otro caso igual, en un sentido contrario, estableciéndose allí que el préstamo hipotecario era una obligación personal, porque la hipoteca es un accesorio de la obligación contraída. Para convencerse de la lijereza con que procede la Cám. puede compararse lo resuelto en el sumario con el caso citado. Si así procede este Trib.; si tan poco respeto le merece su propia jurisprudencia, ¿á qué publicar esos fallos, que si para algo sirven es para resolver mañana en contra de lo que resuelve hoy? Los pleitos así fallados son un verdadero azar. ¿Cuándo terminará esta verdadera lotería judicial en la suerte de los juicios?

5—Según lo enseñan los tratadistas de procedimientos judiciales, la facultad acordada á un litigante para ocurrir al juez del lugar donde se ha celebrado un contrato, con tal que el demandado se halle en él, aunque sea accidentalmente, se basa en dos consideraciones: 1ª Presunción de sometimiento á la jurisdicción del juez del lugar donde se ha contratado. 2ª. Eliminación de las molestias, pérdida de tiempo y gastos que pudiera alegar el demandado para trasladarse desde su domicilio á ese lugar. Entre la presentación de la demanda y el emplazamiento puede transcurrir un tiempo más ó menos largo, ¿á qué

dencia accidental del demandado, debe resolverse por la fecha del emplazamiento.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 240, Ser. 3ª.

1. Competencia por cantidad.—El hecho de ser oro la moneda estipulada en la obligación, no puede alterar lo

época debe atenderse para decidir si el demandado está obligado á someterse al juez del lugar del contrato? Si es exacto, como lo es, el fundamento aducido por los tratadistas, debe atenderse á la época del emplazamiento; pues recién entonces conoce de una manera auténtica la interpelación judicial y puede, sin molestias ni gastos de traslación, preparar sus medios de defensa. La circunstancia de hallarse el demandado en el lugar del contrato debe constar de un modo incontrovertible, lo que solo se consigue por el emplazamiento hecho en su persona. A no ser así, la facilidad que la ley ha querido dar en tales casos, se convertiría en trabas, en cuestiones de difícil resolución, en verdaderos pleitos con probanzas y apelaciones.

1.—El tipo monetario de la Rep., es el oro, y cuando se estipulan obligaciones en otra moneda, que no es de curso legal en el país, se entiende que ellas deben cumplirse en la moneda nacional, previa la reducción correspondiente. Para determinar la competencia de los jueces por razón de la cantidad, se ha tenido en cuenta la importancia de ésta en oro y no en papel sellado: de esta manera es que los jueces de Paz conocen en demandas cuyo valor no pasa de 500 pesos oro. Las leyes de papel sellado vigentes hasta el año 91, han considerado el pesos oro como base para todas las disposiciones en ellas establecidas, y solo desde el año próximo pasado—1893—se ha dispuesto que para determinar el sello correspondiente á una obligación estipulada en oro, debía reducirse á moneda nacional de curso legal, según el tipo fijado cada día en la Aduana. Esta medida que ha podido dictarse por el Cong., no ha alterado en manera alguna el tipo monetario de la Rep., y siempre debe entenderse que el oro y no el papel, es la moneda nacional que tenemos, á la cual deben referirse todas las estipulaciones que se hiciesen para cumplirse en el país. Si no puede tenerse en cuenta para hacer surgir la competencia del Juzgado la depreciación del papel moneda, desde que por la ley el tipo de la moneda de la Rep. es el oro, y también porque la jurisdicción del Juzgado no puede estar sujeta á las fluctuaciones que dicho metal tenga en plaza con relación al papel moneda. Esta es la jurisprudencia ya establecida de una manera uniforme en





dispuesto en la ley sobre competencia.—Jur. Com., tomo 8, pág. 138, Ser. 4^a.

1^a. **Competencia civil**—Las responsabilidades civiles por el precio de mercaderías sustraídas en cuanto se refieran al comprador de buena fe, es de competencia del juez civil.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 113, Ser. 4^a.

1^b. **Competencia civil**—Si los actos no revisten carácter mercantil, las cuestiones que se susciten son de competencia de la jurisdicción civil.—Jur. Com., tom. 9, página 283, Ser. 4^a.

1^c. **Competencia comercial**—A los efectos de la competencia del Juzgado de Comercio, basta que el actor sea

todos los casos resueltos. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Competencia*, núm. 4; tom. 4^o, verb. *Jurisdicción*, núms. 1 y 8; tom. 3^o, mismo verb. núm. 7.

1^a—Si bien los jueces del Crimen pueden decretar el secuestro de los bienes sustraídos, como medida de investigación para el esclarecimiento de la verdad y descubrimiento de la responsabilidad que pueda pesar sobre el tenedor de ellos, esa facultad no puede llegar hasta obligar á depositar el precio de ellos, en caso que hubieran sido vendidos, por que la acción por el precio de la cosa ó indemnización de perjuicios respecto de terceras personas estrañas á la ejecución del delito, es puramente civil y sujeta á las relaciones de derecho que el Cód. Civ. establece entre el dueño de la cosa hurtada y el tenedor ó enajenante de la misma.

1^b—Al resolverse esta cuestión se dijo que «no revistiendo el carácter de mercantiles los actos constitutivos de la cuenta que es materia de la demanda, pues no figuran entre los enumerados por el art. 8^o del Cód. de Com., siendo por el contrario dichos actos de naturaleza esencialmente civil, no resultando tampoco de la demanda ni de la contestación que las partes tengan la calidad de comerciantes, y teniendo en cuenta también que en el precedente escrito se rectificaba la parte de la demanda en que se afirmaba que el actor había procedido en aquellos actos como corredor, se declara incompetente este Juzgado para el conocimiento del presente juicio, de acuerdo con lo establecido en la segunda parte del art. 87 del Cód. de Proc.»

1^c—Véase: verb. *Comerciante*, núm. 5.



comerciante. — Jur. Com., tom. 5, pág. 117, Ser. 4^a.

2^a. Competencia comercial — A los efectos de fijar la competencia de la jurisdicción comercial, basta que el demandante sea comerciante. — Jur. Com., tom. 7, pág. 387, Ser. 4^a.

Competencia comercial. — Véase: *Comerciante*, núm. 9.

Competencia criminal. — Véase: *Bienes embargados*, número 4 — *Calumnia*, núm. 8.

1^a. Competencia federal — Corresponde á la Suprema Corte de Justicia Nacional resolver las contiendas de competencia suscitadas entre jueces de distintas provincias. — Jur. Crim., tom. 7, pág. 106, Ser. 4^a.

2^b. Competencia federal — La defraudación por medio de la falsificación de marca de fábrica, es de competencia de la justicia federal. — Jur. Crim., tom. 7, pág. 428, Ser. 4^a.

3. Competencia federal — Cuando hay concurrencia de delitos, de los cuales el conocimiento de unos corresponde al fuero federal y otros al común, la jurisdicción federal debe conocer antes que la ordinaria. — Jur. Crim., tom. 7, pág. 428, Ser. 4^a.

1. Competencia entre jueces — En la contienda de competencia entre jueces de distintas provincias, no puede

2^a — Véase el núm. precedente.

1^a — De acuerdo con la jurisprudencia sentada por la S. C. N. en el fallo que corre publicado en el tom. 17, pág. 109, Ser. 2^a.

2^b — Este delito está previsto y penado por el inc. 1^o del art. 28 de la Ley Nacional de Marcas, cuya aplicación corresponde á la jurisdicción federal, según lo dispuesto por el inc. 13, art. 111 de la Ley Orgánica de los Tribunales.

3 — Art. 38 del Cód. de Proc. Crim. Este sumario no está consignado en el índice de los fallos, por omisión cometida, indudablemente.

1 — Declarado el concurso de una sociedad en la ciudad del Rosario, el síndico nombrado en esa ciudad quiso intervenir en un juicio



admitirse personería á los funcionarios nombrados de oficio por los mismos jueces.—Jur. Com., tom. 7, página 367, Ser. 4^a.

Competente—Véase: *Compulsa*, núm. 3—*honorarios*, núm. 12—*Bienes raíces*, núm. 2—*Domicilio del ejecutado*, núms. 3 y 4.

1^a. Cómplice—Para que el juicio civil por adulterio obste á la tramitación del juicio criminal, debe fundarse en el mismo hecho; si los cómplices son distintos, pueden coexistir ambos juicios.—Jur. Crim., tom. 6, página 281, Ser. 4^a.

2^a. Cómplice—La fianza del cómplice de adulterio debe ser de poca importancia.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 303, Ser. 4^a.

Cómplice—Véase: *Acusación*, núm. 1—*Adulterio*, números 3 y 8—*Absolución del reo*, núm. 1.

1^b. Complot—Siempre que preceda á la ejecución del crimen, confabulación, conspiración ó cooperación, existirá complot.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Ser. 4^a.

2^b. Complot—La existencia de un pacto recíproco y previo al robo, es lo que caracteriza el complot.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Ser. 4^a.

que se le seguía aquí en Buenos á la razón social. No se le hizo lugar porque mientras el incidente de competencia que se había suscitado no fuese resuelto no podía admitírsele la personería del síndico nombrado en la Prov. de Santa Fe al declararse allí la quiebra. Pero ¿porqué no podía admitírsele la personería? La Cámara no lo dice.

1^a—Véase: verb. *Adulterio*, núm. 10.

2^a—Véase: verb. *Adulterio*, núm. 12.

1^b—Art. 25 del Cód. Pen.

2^b—Véase el núm. precedente. Siempre que preceda á la ejecución del crimen lo que en otros Cód. se llama confabulación, conspiración, cooperación, existirá lo que nuestro Cód. designa con el nombre de complot.



3ª. Complot—El robo debe ser penado con nueve años de presidio si existió complot para la perpetración del hecho.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Ser. 4ª.

4. Complot—Aun cuando sean varios los autores que hayan cometido diversos delitos, no puede declararse la existencia de banda ó complot, en tanto no resulte evidentemente justificado el acuerdo previo.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 258, Ser. 4ª.

Compra—Véase: *Tercería de dominio*, núms. 2 y 6—*Locación de servicios*, núm. 1.

1. Comprador—Si el comprador sabía que el inmueble pertenecía en condominio al vendedor y sus menores hijos, no puede exigir judicialmente el cumplimiento del contrato, en tanto no exista la autorización que la ley requiere, ni aun por la parte indivisa que corresponda al condómino.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 5, Ser. 3ª.

2. Comprador—Los frutos civiles de la cosa comprada—arrendamientos—solo corresponden al comprador desde la fecha en que se hizo la tradición; el vendedor tiene derecho al cobro de los vencidos, aun cuando el comprador reúna el carácter de arrendatario.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 62, Ser. 3ª.

3. Comprador—No pueden exigir del vendedor otros títulos que los que resulten del contrato de compraventa.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 152, Ser. 3ª.

3ª—El inc. 2º del art. 188 del Cód. Pen., se refiere al robo cometido en lugares poblados en banda ó *complot*. La pena que corresponde á sus autores debe fijarse teniendo en cuenta que si no hubiera circunstancias agravantes ni atenuantes, les correspondería ocho años de presidio—art. 52, Cód. Pen.—y en consecuencia, la pena debe ser superior, existiendo la agravante del art. 86.

4—Véase: verb. *Banda*, núm. 1.

1—Arts. 442 y 1331 del Cód. Civ.

2—Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 2.



4. Comprador—No puede alegar buena fe el comprador que conocía la existencia del condominio entre el padre y sus menores hijos.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 96, Ser. 3ª.

Comprador—Véase: *Mensura*, núm. 1—*Cesación de pagos*, núm. 2—*Competencia civil*, núm. 1—*Delito correccional*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núms. 13, 31 y 32—*Remate judicial*, núms. 26, 27, 28 y 30—*Condiciones*, núm. 1.

1. Comprador judicial—No procede la declaración de nulidad del remate sin audiencia de los compradores.—Jur. Com., tom. 8, pág. 140, Ser. 4ª.

2. Comprador judicial — En remate judicial no puede

4—Se trataba de la reivindicación intentada por herederos hijos legítimos, cuyo padre vendió como propia y exclusiva una propiedad que siendo ganancial por muerte de su esposa vino á corresponder en condominio á aquéllos y á éste. El art. 1331 del Cód. Civ., es de aplicación rigurosa, y mucho más cuando no cabía duda de que el comprador sabía que la finca comprada pertenecía efectivamente al vendedor en condominio con sus hijos. La Cám. ha aplicado ya en el mismo sentido el art. citado con referencia á causas análogas á la presente. Se puede citar entre otras las que constan en los toms. 5º, pág. 396; y 8º, pág. 149 de la 1ª Ser. Véase: Inst., tom. 2º, verb. *Condominio*, núm. 1, y tom. 1º, verb. *Venta*, núm. 2701.

1—La compra verificada en un remate judicial, importa un contrato bilateral entre el vendedor y el comprador, contrato que crea derechos é impone obligaciones á cada una de las partes, aun antes de su reducción á escritura pública y de la tradición de la cosa vendida. En tal caso, no se puede, á la sola instancia y con la exclusiva audiencia de uno solo de los contrayentes, declarar nula dicha enajenación sin oír ni citar á los compradores interesados en sostener la validez del acto de que emergen sus derechos á la compra. En consecuencia, esta omisión de una forma sustancial del procedimiento, causa la nulidad del mismo.

2—Decretada la venta en público remate de un bien testamentario, los martilleros dieron cuenta de haber sido comprado por don F. Consenza, quien hizo entrega de la cantidad de 10,000 pesos moneda na-



transferir á un tercero sus derechos sin anuencia de los interesados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 350, Ser. 3ª.

3. Comprador judicial—Si en el boleto de remate judicial se hizo constar la existencia de un contrato de locación, el comprador no puede fundar su desistimiento en ese hecho.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 374, Ser. 3ª.

4. Comprador judicial—La imposibilidad del vendedor de presentar títulos ó perfeccionar los existentes, faculta

cional, que según estaba establecido, debía abonar el comprador. En este estado se presentó el referido comprador espresando que había transferido sus derechos y acciones de comprador á don P. C. Falcón, á cuyo nombre ó al que designase, pedía se extendiera oportunamente la escritura, eliminándolo á él por completo de la venta. Resistida esta cesión por los herederos y exhibido el boleto de compraventa á petición del Ministerio de Menores, el Inferior resolvió el incidente, declarando que Constenla efectuó la compra por cuenta y orden de Falcón, con quien deberían en consecuencia entenderse las ulteriores del juicio. Además, según lo instruía el boleto, Constenla contrató en nombre propio y no á nombre de Falcón, á quien no se mencionó en aquel acto, no obstante que era el único medio legal para caracterizar el rol de mandatario que se invocaba y definir las responsabilidades jurídicas creadas por la convención—arts. 1929 y 1930 del Cód. Civ.—Constenla había puesto como aditamento «en representación de un sindicato», pues eso no cabía en la naturaleza del acto ni desviaba sus responsabilidades, porque para ello habría sido necesario exhibir el instrumento del poder, designando la persona del mandante, exigencias que seguramente no se salvan con la denominación genérica de la referencia. Por otra parte, si Constenla obró como mandatario, no se explica su actitud ulterior al remate haciendo cesión á uno de sus pretendidos mandantes, siendo así que el mandatario debe cuenta á su instituyente de los actos ejecutados en calidad de tal, pero no puede cederle derechos que solo al último corresponderían, de acuerdo con al art. 1946 del Cód. citado. Está resuelto por la Cám. que no procede sustitución de comprador sin anuencia del vendedor. Véase el caso de Milani con Garay.

3—Porque esto hace suponer que la existencia del contrato fué conocida por el comprador, desde que lo aceptó sin objeción ni salvedad.

4—Art. 322 del Cód. de Proc.



al comprador á optar por el desistimiento sin ulterior responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 50, Ser. 3^a.

5. **Comprador judicial**—El comprador, en remate judicial, de un bien testamentario, que no cumple el contrato, es responsable de la diferencia de precio.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 64, Ser. 3^a.

6. **Comprador judicial**—El desistimiento del comprador en remate judicial, procede si los defectos de los títulos no son subsanables en breve tiempo.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 126, Ser. 3^a.

7. **Comprador judicial**—El desistimiento del comprador en remate judicial solo es permitido con la responsabilidad sobre diferencia de precio y gastos; la pérdida de la seña no procede.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 3^a.

8. **Comprador judicial**—Aceptado el desistimiento del

5—Art. 519 del Cód. de Proc.

6—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia establecida. Véase el núm. 4.

7—Véanse los núms. 4 y 6.

8—Aprobado el remate verificado en un juicio testamentario é intimado el comprador, para que oblace el precio de compra bajo apercibimiento, éste se presentó desistiendo de la operación por defectos en los títulos y pidiendo la devolución de la suma entregada al rematador en el acto de la venta como parte del precio. Corrido traslado, el vendedor manifestó su conformidad con el desistimiento que se hacía de la compra, pero bajo la inteligencia de que el Juzgado la aceptase con declaración de la pérdida de la suma entregada como *seña* al rematador. Se resolvió declarando sin efecto la compra y mandando devolver la suma dada en seña. La procedencia de esta resolución no admite duda. Con efecto, los antecedentes relacionados demuestran que el comprador hizo uso oportunamente del derecho que le acuerda el art. 520 del Código de Proc., y desde entonces, si los vicios que el comprador atribuía á los títulos no eran ciertos, ó siéndolo podían subsanarse en breve tiempo, la testamentaria debió oponerse á lo solicitado y exigir el cumplimiento del contrato. Pero se ha visto, el vendedor no se opuso al desistimiento de la compra verificada, antes al contrario, estuvo confor-



comprador en remate judicial fundado en defectos de los títulos, debe devolverse la suma entregada á cuenta del precio.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 159, Ser. 3ª.

9. Comprador judicial.—Deben rechazarse las objeciones del comprador en remate judicial, si de autos resultan infundadas —Jur. Civ., tom. 12, pág. 406, Ser. 3ª.

10. Comprador judicial.—No debe hacerse lugar al desistimiento del comprador en remate judicial fundado en la imposibilidad de cumplir el contrato. —Jur. Civ., tomo 12, pág. 411, Ser. 3ª.

11. Comprador judicial.—No procede el desistimiento del comprador en remate judicial después de la oportuni-

me con ella, si bien pretendiendo que aquél debía perder la suma dada en seña al martillero. Es de observarse desde luego, que la suma cuya devolución se reclamaba, había sido entregada como parte del precio, y que habiéndose dado por desistido al comprador sin oponerle responsabilidad alguna al respecto, sería á todas luces injusto no devolverle la seña, no encontrándose éste, como no se encontraba, comprendido absolutamente en lo dispuesto en el art. 519 del Cód. de Proc. Aun admitiendo como se pretendía, que la suma reclamada hubiera sido dada en seña y como parte de precio, según rezaba en el recibo, aun así la oposición que hacía la testamentaria vendedora, no habría sido tampoco atendible, por cuanto el comprador al desistir de la compra no entendió ampararse á la prescripción que contiene el art. 1200 del Cód. Civ., inaplicable por otra parte, á las ventas verificadas por orden judicial, como lo tiene declarado la Cám.

10.—El comprador al oponerse al cumplimiento del contrato alegaba razones particulares que en nada podían afectar el derecho del comprador.

11.—El comprador, lejos de desistir de la compra que efectuó á una testamentaria, dentro del término que para examinar los títulos le acordaba el art. 521 del Cód. de Proc., la aceptó espresamente manifestando que antes de hacer la oblación del precio debía dictarse una declaratoria de herederos por encontrar nulo el testamento aprobado. Desde luego, el desistimiento que se formuló después era improcedente, porque dejó pasar la oportunidad en que tuvo derecho á verificarlo, pues el art. 521 citado, solo le acuerda tres días perentorios.



dad que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 433, Serie 3^a.

1^a. Comprador de mercaderías—De artículos para el consumo, si es demandado, no puede alegar la incompetencia de la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 8, página 173, Ser. 4^a.

2. Comprador de mercaderías—El vendedor puede obligar al comprador á la revisación de las mercaderías antes de verificar la entrega; y su negativa sin esa formalidad previa, no puede fundar una acción por daños y perjuicios.—Jur. Com., tom. 9, pág. 362, Ser. 4^a.

3. Comprador de mercaderías—Las cuestiones entre comprador y vendedor sobre calidad de las mercaderías, deben ser resueltas por peritos en la estación de prueba: no procede el nombramiento de árbitros antes del término.—Jur. Com., tom. 10, pág. 202, Ser. 4^a.

1. Compraventa—La confesión del demandado es in-

1^a—Véase: *Artículos para consumo*, núm. 1.

2—Art. 472 del Cód. de Com.

3—Véase: *Árbitros-arbitradores*, núm. 11.

1— El actor se presentó demandando una suma de dinero procedente de la venta de las diversas partidas de vino, que le fué comprado por los demandados, según convenio celebrado en la ciudad de Mendoza. Contestando la demanda, niegan los demandados adeudar cantidad alguna al actor, ni haberle comprado el vino de la referencia, el que alegan les fué remitido solamente en calidad de comisionistas para venderse por cuenta del demandante como se hizo, remitiendo á éstos el importe de la venta, descontada la comisión y flete por ellos abonados; que en consecuencia pidieron fuese rechazada la demanda. Se pretendió por el actor, que la confesión del demandado debía dividirse, aceptándola en cuanto confesaba haber recibido el vino, y rechazándola en cuanto decía que lo recibió en comisión, lo que constituye una escepción que el demandado no había acreditado. Semejante pretensión era inadmisibible, la doctrina y la jurisprudencia tienen establecida la divisibilidad de la confesión calificada en materia civil, de acuerdo con la regla de derecho procesal *confessio dividi non debet*. Así lo enseña Bonnier, *Tratado*



divisible: al demandante corresponde la prueba del contrato de compraventa, si el demandado reconociendo la recepción de las mercaderías alega que lo fueron á comisión. —Jur. Com., tom. 1, pág. 401, Ser. 4^a.

2. **Compraventa**—Para que el contrato de compraventa de acciones ó títulos al portador surta efectos legales, la consignación judicial de los que fueron materia del contrato, debe verificarse en la fecha estipulada para la entrega. —Jur. Com., tom. 9, pág. 10, Ser. 4^a.

3. **Compraventa**—No puede calificarse cómo delito un acto de compraventa perfectamente definido. —Jur. Com., tom. 9, pág. 319, Ser. 4^a.

4. **Compraventa**—El boletó de compraventa de mercaderías, carece de fuerza legal para justificar el cumplimiento del contrato. —Jur. Com., tom. 10, pág. 378, Ser. 4^a.

5. **Compraventa**—No procede el desistimiento de la compra en remate judicial por el retardo con que el vendedor entregue la cosa vendida. —Jur. Civ., tom. 8, página 139, Ser. 3^a.

de las pruebas, núm. 356, y Escriche verb. *Confesión judicial*.—Véanse los fallos de la S. C. que se registran en el tom. 3^o, pág. 202, Ser. 1^o; tomo 1^o, pág. 164, y tom. 8^o, pág. 340, Ser. 2^o. —Esto lo dijo la mayoría de la Cám. La minoría manifestó que lo relativo á la indivisibilidad de la confesión, está en oposición con los términos de la Ley 4^a, tit. 13, Part. 3^a, ibid, la que dice: «e que la faga contra sí, etc.» A este respecto hay fallos que se contradicen. De acuerdo con el sumario. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Confesión*, núm. 3 y su nota. En contra véase: Inst., tomo 4^o, verb. *Confesión indivisible*, núm. 1, y tom. 3^o, verb. *Confesión*, núm. 3. Nuestra opinión está en contra del sumario como puede verse en el tomo 3^o de la Inst., verb. *Confesión*, núm. 3. La sana doctrina está allí consagrada.

2—Véase: verb. *Acciones ó títulos*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 2.

4—Véase: *Boletó de compraventa*, núm. 1.

5—No es aplicable el art. 1413 del Cód. Civ.



6. **Compraventa**—Si la compra en remate judicial se hizo por un precio determinado, no procede el desistimiento por la disminución en más del vigésimo, sin perjuicio de la rebaja proporcional.—Jur. Civ., tom. 8, página 140, Ser. 3ª.

7. **Compraventa**—No procede el desistimiento con pérdida de la seña en las compras en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 134, Ser. 3ª.

8. **Compraventa**—Declarada judicialmente la inexistencia de las observaciones que el comprador ha formulado contra los títulos, debe ordenarse la oblación del precio.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 339, Ser. 3ª.

9. **Compraventa**—No procede el cumplimiento del contrato de compraventa por instrumento privado, si se justifica la existencia de la causa resolutoria prevista en el boleto.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 187, Ser. 3ª.

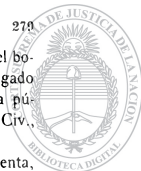
10. **Compraventa**—Cumplido el hecho previsto en el boleto de compraventa para rescindir el contrato, no procede su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 204, Ser. 3ª.

6—Con arreglo al art. 1346 del Cód. Civ., no puede solicitarse sino la disminución del precio y no autoriza el desistimiento á que se refiere el art. 1345, pues esto tiene relación con la venta de un inmueble que se haya hecho con indicación de la superficie que contiene fijándose el precio por la medida, mientras que en el caso del sumario, si bien la venta se efectuó con indicación del área, lo fué por un precio único y no á tanto la medida.

7—El Juez Méndez Paz dió por rescindido el contrato declarando perdida la seña. La Cámara revocó la resolución fundándose en que no es aplicable este art. á las ventas judiciales, «como lo tiene declarado este Tribunal en casos análogos.» La jurisprudencia sentada en casos análogos, no es uniforme. Véase: Inst., tom. 5°, verb. *Remate judicial*, núms. 1 y 5; en este último caso se estudia detenidamente la cuestión.

9—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

10—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5.



11. **Compraventa** --Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, el firmante está obligado al cumplimiento de la obligación de hacer escritura pública en el plazo que determine el Juzgado.--Jur. Civ., tom. 9, pág. 299, Ser. 3ª.

12. **Compraventa**—El boleto privado de compraventa, solo importa una obligación de hacer escritura pública y no procede en consecuencia el cumplimiento del contrato definitivo en él estipulado.—Jur. Civ., tom. 9, página 316, Ser. 3ª.

13. **Compraventa** —El mandamiento general amplio, con cláusula especial para vender, es bastante para llevar á efecto el contrato de compraventa, sin que sea necesario poder especial para la venta de un bien, ni determinación expresa de su ubicación y linderos.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 419, Ser. 3ª.

14. **Compraventa**—Vencido el término fijado como pacto comisorio, queda sin efecto el boleto de compraventa; las prórrogas deben justificarse por escrito, no basta la prueba testimonial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 5, Ser. 4ª.

15. **Compraventa**—Debe convertirse en escritura pública el boleto privado de compraventa sin resolver sobre aquellas cláusulas ó condiciones que importen el cumplimiento del contrato en él estipulado.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 403, Ser. 3ª.

16. **Compraventa**—Aun cuando exista pacto comisorio, si la condición no se cumplió por culpa del vendedor, el

11—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 8.

12—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

13—Véase: *Cláusula para vender*, núm. 1.

14—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 10.

15—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 9.

16—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 11.



boleto de compraventa debe ser reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 284, Ser. 3ª.

17. **Compraventa**—El boleto privado de compraventa de un inmueble, debe reducirse á escritura pública antes de que puedan resolverse judicialmente las cuestiones que se susciten sobre cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 187, Ser. 3ª.

18. **Compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe ordenarse su inmediata reducción á escritura pública; las objeciones al título solo deben ser juzgadas al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 329, Ser. 3ª.

19. **Compraventa**—Deducida acción de pago por las operaciones de compraventa de mercaderías durante un periodo determinado, deben imputarse á uno todas las entregas del demandado durante igual periodo, aun cuando resulte que en la fecha del pago no se adeudaba la cantidad entregada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 195, Serie 4ª.

Compraventa — Véase: *Contrato de compraventa*, números 6, 7, 8, 9, 16, 19, 21 y 30—*Nulidad de la escritura*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 1—*Prueba de compra*, núm. 1—*Contrato entre corredores*, núm. 1—*Contrato verbal*, núms. 1, 2 y 3—*Boleto de compraventa*, núms. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 y 15—*Comprador*, núm. 3—*Obligación de hacer*, núm. 12—*Titulos*, núm. 11.

Comprobación—Véase: *Fractura*, núm. 1.

Compromiso—Véase: *Escepción de compromiso*, núm. 1—*Escepción de defecto legal*, núm. 7—*Arbitros*, núm. 5—*Arbitraje forzoso*, núm. 1—*Perito*, núm. 7.

17—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 13.

18—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 16.



1. **Compulsa**—Una compulsa imperfecta no basta para justificar el carácter de acreedor para pedir la quiebra del deudor.—Jur. Civ., tom. 4, pág. 248, Ser. 4ª.

2. **Compulsa**—Procede el embargo preventivo si la compulsa de la cuenta corriente justifica un saldo deudor.—Jur. Com., tom. 5, pág. 90, Ser. 4ª.

3. **Compulsa**—Para informar sobre puntos de contabilidad debe nombrarse contador; el escribano solo es competente para la compulsa ó confrontación.—Jur. Com., tom. 8, pág. 92, Ser. 4ª.

4. **Compulsa**—Incompleta, no puede fundar una inhibición.—Jur. Com., tom. 5, pág. 111, Ser. 4ª.

5. **Compulsa**—Para que la compulsa de libros forme prueba, debe llenar los requisitos del Código, detallando las operaciones; el simple informe del perito nombrado no basta para declarar auténtica la copia de la cuenta presentada.—Jur. Com., tom. 6, pág. 101, Ser. 4ª.

6. **Compulsa**—La prueba resultante de una compulsa de los libros de comercio, si es única, solo forma prueba entre comerciantes.—Jur. Com., tom. 6, pág. 178. Serie 4ª.

— — —

1—Porque para que el embargo preventivo proceda, se requiere que se hayan llenado todos los requisitos legales.

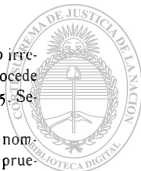
2—Arts. 443 y 444 del Cód. de Proc.

3—Porque el Escribano Público no tiene competencia legal para practicar operaciones de contabilidad.

4—De acuerdo con lo resuelto en el núm. 1. Véase el art. 443, inciso 4º, Cód. de Proc.

5—En el caso del sumario no se trataba de cuestiones entre comerciantes, en cuyo caso los libros de Comercio no sirven sino como principio de prueba por escrito—art. 63 del Cód. de Com.—Si la compulsa no se hace con las formalidades requeridas, carece de mérito legal.

6—Arts. 63 y 64 del Cód. de Com.



7. **Compulsa**—Si la compulsa pone de manifiesto irregularidades en la forma de llevar los libros, no procede el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 7, pág. 345. Serie 4ª.

8. **Compulsa**—Las apreciaciones del contador nombrado para practicar una compulsa, no forman prueba: su informe debe limitarse á la veracidad de la cuenta presentada y forma de llevar los libros de comercio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 195, Ser. 4ª.

9. **Compulsa**—Para la de libros de comercio no procede el nombramiento de peritos por las partes, debe practicarla el Secretario ó el perito que nombre el Juzgado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 177, Ser. 4ª.

Compulsa—Véase: *Embargo preventivo*, núms. 3, 6 y 7—*Libros de comercio*, núms. 3, 4, 7, 8 y 30—*Comerciante*, núm. 17.

Comuneros—Véase: *Socios*, núm. 3.

1. **Comunidad de derechos**—La unificación de represen-

7—El art. 443 del Cód. de Proc. en su inc. 4º, acuerda el embargo preventivo cuando los libros están llevados *en debida forma*, por el actor.

8—La diligencia pericial se pidió como una compulsa y así se decretó, pero el perito nombrado no hizo la operación de compulsa y confrontación de la cuenta con los libros pertinentes del actor, sino un informe sobre su contabilidad, cuyos datos pueden tomarse en cuenta aun que prescindiendo de apreciaciones que el contador no está autorizado á formular.

9—Y por consiguiente no es aplicable la disposición del art. 162 del Cód. de Proc.

1—La demanda se inició contra la razón social Florit y C.ª, habiendo reconocido la firma del papel de obligación D. Antonio Florit, según aparecía de la inspección de la firma social. Enseguida el actor en vez de continuar dirigiendo su acción contra la sociedad Florit y C.ª, se presentó en los mismos autos contra D. Antonio Florit, D. A. Miranda y D. M. Seguí á quienes consideraba solidariamente obligados al pago de



tación cuando existen varios demandantes ó demandados, solo es procedente si existe comunidad de derechos ó identidad de pretensiones.—Jur. Com., tom. 5, página 344, Ser. 4ª.

1. Comunidad de intereses—Aun cuando se justifique la

lo que cobraba, porque eran los socios de la razón social Florit y C.ª, desistiendo enseguida de la demanda contra Seguí. Al evacuar Florit el traslado de la demanda no negó que hubiese sido socio de Florit y C.ª, mientras que Miranda sostuvo que jamás formó parte de dicha sociedad ni tuvo siquiera noticia de su existencia. Como se ve, las excepciones alegadas por Florit y por Miranda son diferentes y son también diversos los hechos en que la fundan y confirman entre sí, pues mientras Florit alegaba que las obligaciones sociales las tomaron á su cargo los socios Miranda y Seguí, Miranda alegaba que no formó nunca parte de esa sociedad; por lo tanto, no era el caso de obligar á Florit y á Miranda á tener una representación común y única, desde que no existía comunidad de derechos é identidad de pretensiones, como sucede en los casos previstos por los arts. 633, 722 y 741 del Cód. de Proc. Tanto Florit como Miranda se habían espedido en el traslado conferido de la demanda de la manera que habían juzgado conveniente á su derecho y no se habían constituido en rebeldía. Por otra parte, tanto la L. 6ª, tit. 1º, L. 2ª, F. R., como la 18, tit. 5º, Part. 3ª, se refieren á los casos en que sean muchos los demandantes ó demandados, ó muchos los apoderados constituidos por el actor ó por el reo, lo que no sucedía en el presente, desde que la demanda interpuesta contra tres había quedado limitada contra dos, en virtud del desistimiento formulado con relación á Seguí. Aun suponiendo que el número de las peronas primeramente demandadas hiciera procedente la aplicación de la Ley del Fuero Real, el desistimiento posterior cambiaba la situación de los dos restantes, obstando á que se les pudiese oponer su consentimiento á la providencia que nombraba un solo apoderado. Esto fué resuelto así por la mayoría, habiendo opinado la minoría que el auto en que se obligaba á á constitución de un solo apoderado estaba consentida y ejecutoriada.

1.—El actor se presentó diciendo, que en Abril del año 84 convino con su hermano político en común los oficios que ejercían de maestros albañiles y de obras, á fin de repartirse fraternalmente los beneficios, acordando igualmente hacer una comunidad absoluta de negocios, viviendo en familia y considerando como gastos generales de la



existencia de un contrato de sociedad, no puede decla-

sociedad los de cada uno de ellos. No se aportó capital efectivo ni el contrato fué celebrado por escrito, sino de palabra, trabajando unas veces juntos y otras separados, pero llevando siempre su producto á la caja común. Después de enumerar el postulante las operaciones y los bienes adquiridos durante la sociedad, manifestó que habiendo surgido diferencias, motivadas por el proceder del demandado, se veía obligado á demandar judicialmente la liquidación de la sociedad por negarse éste á practicarla privadamente. El demandado negó los hechos asegurados por el demandante: no había tenido como él decía, ninguna clase de sociedad, y el único bien que poseía en condominio con el actor, era un terreno en que edificaron una casa, la que le pertenecía exclusivamente. Había protegido al actor, á quien alojó en su casa ocupándolo como dependiente para que visitase las obras que construía y le noticiase de los materiales que en ellas pudieran necesitarse, protección que tomó formas más acentuadas por haber contraído el demandante matrimonio con una hermana que vivía con él. No era exacto que careciese de bienes en la fecha de la pretendida sociedad, pues antes de ella era propietario de varios terrenos y casasen esta ciudad, como lo probaría en la ocasión oportuna del juicio. Desde luego, las disposiciones que dominan esta materia, en orden al contrato de sociedad, á su eficacia y á su prueba legal, son las contenidas en los arts. 1662, 1191 y 1192 del Cód. Civ. Según lo previene el primero, el contrato de sociedad puede ser hecho verbalmente ó por escrito, por instrumento público ó por instrumento privado ó por correspondencia, estando sujeta su prueba á lo dispuesto respecto á los actos jurídicos. Establecen á su vez los segundos, que los contratos que tengan una forma determinada por las leyes no se juzgarán probados, si no estuvieren en la forma prescrita, á no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, ó que hubiera habido un principio de prueba por escrito en los contratos que puedan hacerse por instrumento privado, considerándose como principio de prueba por escrito, cualquier documento público ó privado que emane del adversario, de su causante ó de parte interesada en el asunto, ó que tendría interés si viviera, y que haga verosímil el hecho litigioso. La forma en que se había celebrado la sociedad que se fundó la demanda, se hallaba, como se ve, prevista y autorizada por la ley, pero negada su existencia por el demandado, es evidente que ha debido comprobarse de acuerdo con los principios que quedan espuestos. La existencia de la sociedad fué comprobada, pero de aquí no puede resultar la existencia de una comu-

rarse la comunidad de intereses, en tanto no resulte plenamente probada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 248, Ser. 3^a.

1. Concordatos—El fallido y los acreedores solo pue-

nidad de intereses, pues no debe perderse de vista que entre la sociedad y la comunidad hay diferencias sustanciales magistralmente enumeradas, entre otros comentadores, por Troplong, tom. 1^o, pág. 6 y siguientes, *Société*. En principio, toda sociedad supone una comunidad, pero toda comunidad no supone sociedad; la comunidad es el género, la sociedad es una especie de ese género; la primera es un estado pasivo, mientras que la segunda se sirve de aquélla como medio para obtener un beneficio y dividirlo. Finalmente, la comunidad, concluye diciendo el autor citado, no enjendra la acción *pro-socio*, siendo un estado que la ley mira con disfavor.

1.—El hecho generador del estado de quiebra lo constituye la cesación de pagos, ya se trate de una ó varias obligaciones comerciales y cualquiera que sea la causa determinante—art. 1379, Cód. Civ.—Una vez constituido el estado de quiebra, el fallido está obligado á manifestarlo dentro del término ante la autoridad y con las formalidades establecidas en los arts. 1389 y 1390, pues el estado de quiebra lo incapacita para la administración de sus bienes—arts. 1402 y 1396, inc. 7^o—hace presumir la insolvencia de la masa—art. 1386—y le impone el deber de someterse á la liquidación del activo y pasivo de la quiebra, con sujeción á las reglas establecidas en el libro 4^o, Cód. de Com. De estas disposiciones resulta que ninguna convención puede celebrarse entre el fallido y sus acreedores sino sujetándose al procedimiento que la ley ha establecido en el mencionado libro. Y si bien el auto declarativo del estado de quiebra es susceptible de revocación á solicitud del fallido, este recurso solo le es acordado por el art. 1398, cuando la declaración de quiebra hubiese procedido á instancia de los acreedores, pero aun suponiendo que también lo fuera cuando tal declaración se hubiera dictado por razón de alguno de los otros medios de obtenerla, que fija el art. 1388, esto es, á solicitud del mismo fallido ó del Ministerio Público, siempre tendría que fundarse en la falsedad de los hechos en cuyo mérito se dictó, porque solo en esa falsedad puede fundarse el recurso acordado por el art. 1398. En el caso que nos ocupa no se alegó la falsedad de los protestos relativos de la cesación de pagos que denunciaron en el escrito en que pidieron ellos mismos la declaración de quiebra y solo invocaron para fundarla arreglos ó convenios con sus acreedores, que no han podido celebrar según queda demostrado.





den hacer convenios ó concordatos en la oportunidad que el Código determina.—Jur. Com., tom. 7, pág. 399, Ser. 4^a.

1^a. **Concursado**—Para la rehabilitación de comerciante concursado, deben acompañarse los comprobantes del pago hecho á los acreedores: la sentencia absolutoria en lo criminal no es bastante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 131, Serie 4^a.

1^b. **Concurso**—El acreedor que recibió de buena fe objetos en pago de su crédito, no debe ser condenado en las costas del juicio iniciado por el concurso para su devolución.—Jur. Com., tom. 6, pág. 155, Ser. 4^a.

2. **Concurso**—El juicio de concurso es general, y al juez

1^a—Véase: *Acreedores pagados*, núm. 1.

1—El auto fijando la efectiva cesación de pagos, la cuestión principal, fué dictada en una época en que no solo estaba contestada la demanda, sino que había vencido el término de prueba; se habían producido los alegatos y se había llamado autos para sentencia definitiva: desde luego, no procede la condenación en costas al demandado y por el contrario, es éste uno de los casos en que con arreglo á la segunda parte del art. 221 del Cód. de Proc. debe eximirse de esa responsabilidad.

2—De acuerdo con el art. 720 del Cód. de Proc., el concurso civil de acreedores es un juicio universal. Es de la esencia misma de esta clase de juicios que se acumulen á los mismos, todas las demandas que existieran contra el demandado, de manera que sea un solo juez el que conozca de todas ellas. El mismo art. 720 del Cód. de Proc., establece que declarado el concurso se notificará al deudor y se oficiará á los jueces que conozcan de los demás pleitos, á fin de que los remitan para su acumulación al juicio universal. Es un principio inconcuso, que no puede proseguirse, una causa sin parte ó sin que ésta pueda estar á derecho: y el concursado por el hecho de ser declarado tal, pierde la administración de sus bienes. La representación que el concursado tiene en los juicios, cesa de acuerdo con lo dispuesto por el inc. 4º del art. 1963 del Cód. Civ., y 5º del art. 18 del Cód. de Proc., y le está prohibido á éste tomar personalmente intervención en ningún juicio. La cuestión constitucional que verosimilmente puede deducirse, desapa-



que de él conozca deben remitirse los expedientes, aun de oficio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 286, Ser. 4^a.

3. Concurso—La compra de un activo y pasivo de un concurso, no importa una cesión de créditos, y en consecuencia el fallido no está obligado á absolver posiciones en los juicios que se sigan contra los deudores.—Jur. Com., tom. 8, pág. 321, Ser. 4^a.

4. Concurso —El acreedor no está obligado al pago de la multa, si el concurso es el que presenta el documento en que se ha infringido la ley de papel sellado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 330, Ser. 4^a.

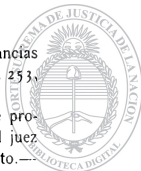
5. Concurso—El síndico no está obligado á constituir domicilio y justificar su personería en cada uno de los

rece ante los términos del art. 2º de la ley nacional de 3 de Set. de 1878, sobre jurisdicción y competencia, en la que espresamente se establece: que el conocimiento de los juicios *universales de concurso* de acreedores, corresponderá en el territorio de la Rep., á los jueces respectivos de aquella Prov. en que el fallido tuviera su principal establecimiento. La ley espresamente se refiere á los juicios *universales de concurso*, y estos pueden ser de naturaleza civil ó comercial. La doctrina contraria importaría desconocer precisamente el carácter de *universal* que la ley reconoce á esta clase de juicios, y tendería á establecer privilegios en favor de unos acreedores con perjuicio del resto, pues éstos harían efectivos sus créditos sobre bienes que han entrado á formar parte de la masa. La incompetencia—como que es cuestión de orden público—puede ser declarada hasta de oficio por el Juzgado. En el caso que nos ocupá ella fué opuesta por el representante del fallido, el cual si bien había terminado en su mandato por el hecho de haber sido declarado concursado su mandante, bien pudo hacer esta gestión de acuerdo con lo dispuesto por el art. 1969 del Cód. Civil.

3—Véase: *Cesión de bienes*, núm. 2.

4—De acuerdo con lo preceptuado en el art. 47 de la Ley de Papel sellado de 1894.

5.—Tratándose de un incidente del concurso, es incuestionable que hallándose constituido el domicilio del síndico en los autos principales, la prescripción de la ley que exige aquel requisito, se encuentra cumplida.



incidentes del concurso; le basta con las constancias de los autos principales.—Jur. Com., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

6. **Concurso**—Al síndico definitivo corresponde proponer el rematador de los bienes del concurso; el juez puede oponerse al nombramiento fundando el auto.—Jur. Com., tom. 9, pág. 312, Ser. 4^a.

7. **Concurso**—Procede la reivindicación de muebles ó su valor, si se justifica que los concursados eran tenedores para su venta á título de comisionistas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 421, Ser. 4^a.

8. **Concurso**—El conocimiento de las ejecuciones seguidas contra una sociedad corresponde al juez del concurso civil formado á la testamentaria del socio que hubiese fallecido —Jur. Com., tom. 9, pág. 301, Serie 4^a.

9. **Concurso** — Justificado el carácter de comerciante que revestía el que hizo cesión de bienes, deben remitirse al Juez de Comercio que entiende en el concurso los

6—Véase: *Bienes del concurso*, núm. 1.

8—Siendo universal el juicio de concurso civil, deben acumularse á él los demás pleitos que se sigan contra el concursado, de acuerdo con lo que dispone el art. 720 del Cód. de Proc. El juez del concurso es entonces el único competente para conocer en esos pleitos y, no podría ser de otro modo desde que teniendo por objeto el concurso, la distribución de los bienes entre todos los acreedores á prorrata ó proporcionalmente, con excepción del derecho de los privilegiados, es ante él que deben hacerse valer dichos privilegios, con audiencia de todos los interesados, esto es, de todos los acreedores. Lo contrario imposibilitaría la aplicación de las leyes relativas á los privilegios y motivos de preferencia entre los acreedores, haciendo que los que carecen de privilegio alguno, fuesen íntegramente pagados de sus créditos con perjuicio de los quirografarios y aun de los que tuviesen privilegios. Véase el núm. 2.

9—Véase: *Cesión de bienes*, núm. 1.



autos obrados. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 142, Ser. 3^a.

10. Concurso—Civil, el término para que la acción de nulidad de un acto jurídico se prescriba para los acreedores, corre desde que formado concurso civil, el inmueble no aparece entre los bienes del concursado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 25, Ser. 3^a.

Concurso—Véase: *Rematador*, núm. 1—*Costas*, núm. 16—*Depositorio judicial*, núm. 7—*Quiebra*, núm. 6.

Concurrencia de delitos — Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 13.

1^a. Condición—Llenada la condición, es ineludible el cumplimiento de la obligación. —Jur. Civ., tom. 11, pág. 132, Ser. 3^a.

2. Condición—Debe justificarse por el que alega su existencia, si ella no consta del boleto privado de compraventa. —Jur. Civ., tom. 11, pág. 379, Ser. 3^a.

3. Condición—Se entiende que el término fijado para el cumplimiento de ésta, solo obliga después de su vencimiento—Jur. Com., tom. 4, página 126, Ser. 4^a.

1^b. Condiciones—La perfección de un contrato de compraventa de mercaderías, resulta de la factura del vendedor y del pago del precio hecho por el comprador, sin que la prueba testimonial pueda modificar las condiciones que de la prueba escrita resulten.—Jur. Com., tom. 9, pág. 16, Ser. 4^a.

10—Véase: *Acción de nulidad*, núm. 1.

1^a—Arts. 528, 543, 545 y 548 del Cód. Civil.

2—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 15.

1^b—Con arreglo a lo dispuesto en los arts. 209 Cód. de Com., y 187, Cód. de Proc., es doctrina corriente en materia de prueba de contratos, que las modificaciones ó alteraciones que éstos sufran verbalmente, solo pueden probarse por testigos, cuando han sido establecidas con posterioridad á la escritura, y en tanto que no modifiquen profundamente lo convenido.—Segovia, nota 109 al art. 1194, Cód. Civ.



2. **Condiciones**—La falta de cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato de locación, hace procedente la rescisión.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 394, Ser. 3^a.

3. **Condiciones**—Aun cuando se fije término para el cumplimiento de un hecho, si éste puede ó no suceder, la obligación se conceptúa condicional y no á plazo.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 189, Ser. 3^a.

4. **Condiciones**—Justificado por el acreedor haberse llenado las condiciones, el deudor debe ser compelido al cumplimiento de la obligación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 189, Ser. 3^a.

Condiciones—Véase: *Cuenta pasada*, núm. 1 — *Convenciones*, núm. 2 — *Boleto de compraventa*, núms. 11 y 12 — *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 17.

1. **Condición cumplida**—La condición se considera cumplida desde que el hecho ha tenido lugar de la manera que lógicamente debía suceder.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 3^a.

1^a. **Condición no cumplida**—Aun cuando exista pacto comisorio si la condición no se cumplió por culpa del vendedor, el boleto de compraventa debe ser reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 284, Serie 3^a.

1^b. **Condición esencial**—Siendo condición esencial del voto del accionista, el depósito, en la caja de la Sociedad, de las acciones en que funda su carácter de tal, la omisión de esa formalidad, no puede ser supli-

3.—Arts. 528, 529 y 569 del Cód. Civ.

4.—Véase: verb. *Condición*, núm. 1.

1^a—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 11.

1^b—Véase: verb. *Accionista*, núm. 1.



da por un certificado de su existencia en poder de terceros.—Jur. Com., tom. 1, pág. 41, Ser. 4^a.

1^a. **Condiciones impresas**—Las condiciones impresas en la guía ó carta de porte que la empresa imponga á los cargadores, carecen de fuerza legal en cuanto se opongan á las disposiciones del Cód. de Com.—Jur. Com., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

1^b. **Condiciones lícitas**—Las condiciones lícitas estipuladas en los contratos son para las partes obligatorias como la ley misma.—Jur. Com., tom. 4, pág. 126, Serie 4^a.

1^c. **Condición resolutoria**—El vendedor no puede invocar la condición resolutoria si la no escrituración le es exclusivamente imputable; aun después de vencido el término debe otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 243, Ser. 3^a.

1^d. **Condómino**—Que reconstruye la pared medianera, solo está obligado á volver las cosas en igual estado, pero no al pago de alquileres.—Jur. Com., tom. 5, pág. 176, Ser. 4^a.

2. **Condómino**—No procede la nulidad de la tasación del

1^a—Véase: *Carta de porte*, núm. 1.

1^b—Art. 1197 del Cód. Civ.

1^c—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 11.

1^d—Véase: verb. *Alquileres*, núm. 2.

2—La tasación se verificó ante un juez que no era el del concurso. La nulidad de la tasación fundada en que no intervino en ella el síndico del concurso, sería contraria á la equidad y al espíritu del art. 1412 Cód. de Com.: lo primero, porque los procedimientos regulares de dicho juicio seguidos *bona fide* por las partes, cuando ni el juez ni el ejecutante tuvieron conocimiento de la existencia de dicho concurso, deben ser mantenidos, pues es regla, tanto de las obligaciones como de los procedimientos comerciales, que todas deben ejecutarse de buena fe y obligan á lo que la equidad exige según su naturaleza y



bien hipotecado fundada en la falta de intervención del síndico del concurso de uno de los condominios, si en el juicio no existía noticia de la declaración de quiebra. — Jur. Com., tom. 5, pág. 340, Ser. 4^a.

3. Condómino. — Si bien el condómino tiene derecho para reconstruir la pared medianera, sin indemnización, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios causados por la omisión de medidas tendientes á evitar un accidente en la propiedad lindera. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 428, Ser. 3^a.

hasta el requerimiento del juez exhortado, éste ejercía jurisdicción para el nombramiento de tasadores y la aprobación de la tasación por ellos practicada, y porque el art. éste establece, que las acciones contra el fallido continúan contra el síndico, lo que importa decir que los síndicos y el juez del concurso deben tomar la causa que motiva el proceso en el estado en que se encuentre á la remisión del juez requerido; si bien es cierto que los actos verificados por el fallido son con relación á la masa, de nulidad absoluta ó relativa — art. 1408 — los actos del procedimiento del juicio ejecutivo que motivaron este incidente, no tienen ni el uno, ni el otro carácter, por no estar comprendidos entre los enumerados en el art. 1409, ni encontrarse en los casos del art. 1410, aplicable por analogía, desde que este art. exige que de parte de los que han tratado con el fallido hayan tenido noticia de la cesación de pagos, y como se ha dicho, ni el ejecutante ni el juez tenían conocimiento del estado de quiebra en que se encontraba el concursado hasta una fecha posterior á la tasación. Por otra parte, y juzgando la naturaleza jurídica de la hipoteca que motivaba la tasación, se ve que ella es indivisible, pues por el art. 3112 del Cód. Civ., la hipoteca es indivisible y cada una de las cosas hipotecada: á una deuda y cada parte de ella está obligada al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Tratándose de una obligación, indivisible, el acreedor puede exigir su cumplimiento íntegramente de cada uno de los codeudores, según el art. 686 del Cód. Civ., y desde luego, debiendo ejecutarse indivisiblemente esta obligación y no estando inhabilitado para el juicio de su codeudor, quien como demandado, fué parte en todos esos trámites, no puede ser anulada por el estado de quiebra en que cayó el otro deudor.

3.— Véase: Art. 2733, Cód. Civ., y *Alquiler*, núm. 2.



1ª. **Condominio**—Si el comprador sabía que el inmueble pertenecía en condominio al vendedor y sus menores hijos, no puede exigir judicialmente el cumplimiento del contrato en tanto no exista la autorización que la ley requiere, ni aun por la parte indivisa que corresponda al condómino.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 5, Ser. 3ª.

Condominio—Véase: *Comprador*, núm. 4.

Conducción—Véase: *Consignatario de un buque*, núm. 2.

1ª. **Confabulación**—Siempre que preceda á la ejecución del crimen confabulación, conspiración ó cooperación, existirá complot.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Ser. 4ª.

Confesión—Véase: *Notificación por cédula*, núm. 1—*Prueba escrita*, núm. 1—*Infanticidio*, núm. 2—*Adulterio*, núm. 8—*Embargo preventivo*, núm. 9—*Homicidio*, número 1—*Contrato*, núms. 1 y 8.

1. **Confesión del acreedor**—La confesión de haber contratado por intermedio de tercero, exime al demandado de justificar la escepción de haber verificado el pago al intermediario.—Jur. Com., tom. 6, pág. 188, Ser. 4ª.

1ª. **Confesión calificada**—Del hecho, no importa para el acusado una escepción, cuya prueba esté obligado á presentar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 330, Ser. 4ª.

1ª. **Confesión ficta**—El silencio del demandado, no obs-

1ª—Véase: verb. *Comprador*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Complot*, núm. 1.

1ª—En materia criminal la confesión calificada es indivisible. Véase: Inst. tom. 4º, verb. *Confesión del reo*, núms. 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13 y 14. Esta indivisibilidad procede cuando la confesión no está desvirtuada por otros medios de prueba, y cuando ella es verosímil. Puede verse asimismo el verb. *Confesión indivisible* del tom. 4º, Inst.; y verb. *Confesión*, del tom. 3º, de la Inst., donde se estudia la fuerza probatoria de la confesión.

1ª—Arts. 100 y 103 del Cód. de Proc.—Según el primero, el demandado debe confesar ó negar categóricamente los hechos establecidos



tante su conocimiento é intervención en el juicio, hace procedente la condenación fundada en la confesión ficta que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 57, Ser. 4ª.

2. **Confesión ficta**—Que resulta de las posiciones absueltas en rebeldía, no forma prueba si no existen otros justificativos que hagan verosímil los hechos alegados.—Jur. Com., tom. 9, pág. 439, Ser. 3ª.

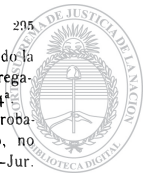
1. **Confesión indivisible**—El informe terminantemente asertivo de los médicos sobre la viabilidad de la criatura, no permite aplicar el principio sobre la confesión de la madre que reconociendo el hecho, asegura que el niño nació muerto.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 315, Ser. 4ª.

2ª. **Confesión indivisible**—La confesión del demandado es indivisible; al demandante corresponde la prueba del

en la demanda, *pudiendo su silencio ó respuestas evasivas, estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos á que se refieren.* Según el segundo, cuando el citado no comparece á declarar, el juez al sentenciar lo *tendrá por confeso* si el interesado lo pidiese. El primero es facultativo, el segundo imperativo, y en consecuencia debe juzgarse que el pliego de posiciones tiene el mismo valor y fuerza probatoria que si hubiese sido absuelto espresamente por la persona á quien se dirigía. La confesión ficta suple en este caso á la espresa, por disposición terminante de la ley, y debe conducirnos á idéntica conclusión.

1.—La fuerza probatoria del dictamen pericial en lo criminal no tiene el alcance que se le da en materia civil. El art. 346 del Cód. de Proc. Crim. confiere al juez la facultad de apreciar la prueba pericial cuando dice: «la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia de los peritos, la uniformidad ó disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se fundan, la concordancia de su aplicación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y elementos de convicción que el proceso ofrezca. Pero el art. 178 del Cód. de Proc. Civ. da al dictamen pericial la fuerza de prueba legal siempre que los peritos tuviesen títulos y sus conclusiones fuesen terminantemente asertivas.

2ª—Véase: *Compraventa*, núm. 1.



contrato de compraventa, si el demandado reconociendo la recepción de las mercaderías alega que le fueron entregadas á comisión.—Jur. Com., tom. 1, pág. 401, Ser. 4^a.

3 Confesión indivisible—Si el delito puede ser probado independientemente de la declaración del reo, no puede aplicarse la indivisibilidad de la confesión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 213, Ser. 4^a.

4. Confesión indivisible—Del asusado, es indivisible si es la única prueba de la existencia del hecho.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 17, Ser. 4^a.

1. Confesión del reo — La confesión solo es indivisible cuando no existen indicios vehementes de la falsedad de sus afirmaciones.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 174, Ser. 4^a.

2. Confesión del reo—La del acusado no basta para

3—De acuerdo con la doctrina sostenida por los prácticos, y de conformidad con la jurisprudencia constante de los tribunales. Véase: Inst., tom. 4^o, verb. *Confesión del reo*, núms. 2, 3, 4, 10, 13 y 14—art. 318 del Cód. de Proc. Crim.

4—Art. 318 del Cód. de Proc. Crim. La confesión no puede dividirse en perjuicio del confesante, dice sete artículo.

1—De este sumario parece resultar que en materia criminal la divisibilidad de la confesión es la regla y su indivisibilidad la escepción, pero sucede todo lo contrario, el art. el art. 318 del Cód. de Proc. Criminales establece que la confesión del procesado no puede dividirse, y que los distintos hechos ó circunstancias que ella contenga no importan escepciones cuya prueba incumba al acusado, salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes ú otras circunstancias del hecho resulten presunciones graves en contra del confesante. Este es el principio que la Cám. aplicó y que está mal expresado en el sumario.

2—El presidente de una sociedad anónima, se presentó ante el comisario de la sección 1^a de policía, denunciando: Que en los libros de esa sociedad había notado la ausencia de algunas ventas, cuyo importe en unas, y parte de él en otras, tampoco habían entrado en caja; que con ese motivo interpelló al tenedor de libros, quién le confesó haber defraudado esos valores, el importe de las cuales figuraba en una planilla



declarar la existencia del delito, si no resulta de otras pruebas procede su absolución.—Jur. Crim., tomo 2, pág. 285, Ser. 4^a.

3. Confesión del reo—La del procesado solo es indi-

que presentó el denunciante. Llamado á declarar el procesado, reconoció la exactitud de la planilla, y confesó ser él, el autor del hecho que se le imputaba. Sin más antecedentes que la denuncia y la indagatoria, se declaró cerrado el sumario y se elevó la causa á plenario ante el juez de sentencia que condenó al procesado á sufrir un año de arresto como autor del delito previsto y penado en los arts. 202, inc. 3^o, y 203, inc. 6^o, Cód. Pen. El camarista que *estudió* la cuestión á cuyo voto se adhirieron los demás, dijo: «Pienso sin embargo, que no obstante la confesión categórica del procesado, falta en esta causa la base indispensable para que ella pueda servir de fundamento á una condena. En efecto, el art. 316 del Cód. de Proc. Crim., declara que toda manifestación del procesado, por la cual se reconozca como autor, cómplice ó encubridor de un delito ó de una tentativa punible, surtirá los efectos legales de la confesión, siempre que reuna conjuntamente las condiciones siguientes. . . . 7^o: *que la existencia del delito esté legalmente comprobada*, y no puede ciertamente considerarse como tal, la simple denuncia del presidente de la sociedad que se dice defraudada, ni la planilla acompañada por él, en la cual se consignan según encabezamiento, los «cargos contra el acusado comprobados y confesados por él mismo ante el gerente de la sociedad, uno de ellos, y director de la misma el otro. Para que esa planilla pudiera ser tomada como prueba del delito, ha debido autenticarse sus firmas; ha debido tomarse declaración á las personas ante quienes confesó el delito el acusado; han debido compulsarse los libros de la sociedad, y comprobarse las ventas, cuyos precios no se anotaron en ellos, pero nada de esto se ha practicado y la confesión del procesado no puede suplirlo. Verdad es que la confesión prueba acabadamente el delito, según los términos del art. 321; pero ese mismo art. se refiere á la confesión que revista las circunstancias espresadas en el art. 316, en el cual como se ha visto, la 7^a exige que la existencia del delito esté *legalmente comprobada*; conservando así el mismo principio que consignaban nuestras antiguas leyes y la doctrina y jurisprudencia recibida en nuestros tribunales—arg. de la ley 5^o al fin, tit. 13, part. 3; Tejedor, Curso de Derecho Crim., tomo 2^o, núm. 282, y la Curia Filipica y Mittermaier, allí citados.»

3—El art. 318 del Cód. de Proc. Crim., dice así: «La confesión



visible cuando es la única prueba de la existencia del delito.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 277, Ser. 4ª.

4. Confesión del reo—La confesión del reo es indivisible si es la única prueba del delito que existe en autos. —Jur. Crim., tom. 6, página 80, Ser. 4ª.

5. Confesión del reo—Es indivisible si es la única prueba de la manera como se verificó el delito. — Jur. Crim., tom. 6, pág. 416, Ser. 4ª.

6. Confesión del reo—Si las conclusiones del informe

no puede dividirse en perjuicio del confesante. Los distintos hechos y circunstancias que ella contenga, no importan escepciones cuya prueba incumba al acusado, salvo cuando por la calidad de las personas, sus antecedentes ú otras circunstancias del hecho resulten presunciones graves en contra del confesante.»

4—Véase nota precedente.

5—Véase el núm. 3.

6—Debido á la escavación hecha por un perrito ratonero, se descubrió en una habitación interior, el cadáver de un pàrvulo que un mes más ó menos de ello, una indígena, sirvienta de la familia, á la sazón servía en dicha casa, había parido y enterrado á su hijo en el lugar donde fué encontrado el cadáver. La procesada confesó el hecho, asegurando que procedió así, porque la criatura había nacido muerta. Practicada la necropsia del cadáver por los médicos de policía, consignaron en su informe, que despojado el cadáver de los trapos que lo envolvían, encontraron que éstos se hallaban unidos á una cinta de hilera la cual daba dos vueltas alrededor del cuello, produciendo una fuerte contracción; que á pesar del estado de putrefacción, pudieron constatar que pertenecía al sexo masculino, que era perfectamente conformado y correspondía á un niño nacido á término, que la boca estaba entreabierta y la lengua pegada al paladar, lo que indicaba esfuerzos inspiratorios; y que abierta la cavidad toráxica, encontraron el corazón y sus envolturas perfectamente intactas, pero no así los pulmones que estaban completamente destruidos por lo cual no se pudo recurrir á la dosimasia hidrostática. De todo lo cual deducian los facultativos: 1º que el niño había nacido á término; 2º *que había respirado*; 3º que la asfixia por estrangulación había sido la causa de la muerte, y 4º que esto databa de tres meses poco más ó menos. Sin otros elementos que ese informe para dar por cierto que el niño nació vivo y fué muerto



médico que da por comprobado el delito, son contra-

violentamente, la indígena fué acusada como autora de infanticidio y condenada á tres años de penitenciaría. Pero no considerauo la Cám. que según las leyes de la sana lógica pudieran los antecedentes consignados en dicho informe, legitimar las deducciones á que arribaron sus firmantes, y por consiguiente que debiera atribuírsele fuerza probatoria, tan decisiva en punto tan grave y de tan trascendentales consecuencias, decretó para mejor proveer, que los otros dos médicos de los Tribunales informaran si los antecedentes invocados en el informe mencionado autorizan científicamente las conclusiones 2ª y 3ª del mismo; y éstos se espidieron en sentidos diametralmente opuesto. Estos últimos recuerdan como principios científicos, que para comprobar sobre el cadáver de un recién nacido si la respiración ha existido ó no, la ciencia dispone de dos medios, que son: dosimasia hidrostática, y la comprobación por el microscopio ó dosimasia pulmonar óptica; que únicamente por esos dos medios puede saberse, no solamente si la respiración se ha efectuado, sino también si se ha producido un grado de dilatación bastante de los pulmones para que la vida se haya necesariamente establecido como consecuencia, ó si la respiración se había limitado á las partes superficiales de esos órganos haciendo imposible la vida extra-uterina por carencia del elemento primordial, el aire atmosférico. Aseveraron que el hecho de haberse encontrado una cinta que comprimía el cuello del cadáver, no constituye estrangulación, porque no se demuestra la existencia de las alteraciones de la piel y tejidos llamados subyacentes, como los huesos y cartílagos, que son consecuencia lógica de la fuerte compresión que es indispensable para producirla; que no solamente no estaba científicamente comprobada la estrangulación, sino que faltaban los signos de la asfixia, que en este caso sería su consecuencia, signos que tienen su sitio de predilección en los pulmones que no han podido ser examinados, y no se consignaba que en otros órganos se hayan encontrado alteraciones que permitieran fundar esa afirmación; que la circunstancia de encontrarse «el cadáver con la boca entreabierta y la lengua pegada al paladar», constituye cuando más una presunción de esfuerzos inspiratorios que aunque estuvieran científicamente probados, no constituirían prueba de que la asfixia fuera producida por una mano estraña; y terminaban declarando que no habiéndose practicado la dosimasia hidrostática y óptica, ni demostrándose científicamente que existió estrangulación, ni asfixia, los antecedentes consignados en el informe, no autorizaban las conclusiones 2ª y 3ª del mismo. Este informe de los médicos merecía entero crédito, porque satisfacen las



dictorias con los antecedentes legales que en el mismo se invocan, no bastan para quebrantar el principio de la individualidad de la confesión del reo.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 313, Ser. 4ª.

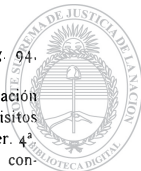
7. **Confesión del reo**—La indivisibilidad de la confesión del reo, solo permite aceptar las circunstancias que atenuen la pena, la legítima defensa se convierte en excepción, no puede admitirse como presunción si omitió el aviso a la autoridad.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 28, Ser. 4ª.

1. **Confesión retractada**—Para que la retractación de la confesión pueda surtir efectos legales no basta que el reo alegue dádiva, engaño, amenazas ó coacciones, debe

exigencias de la razón, condensa los principios científicos de que dimana la autoridad de la opinión pericial, y concuerda en sus conclusiones con las leyes de la sana lógica, como lo exige el art. 346, Cód. de Proc. El robustece además la ingénua declaración de la procesada, cuya baja condición intelectual se desprendía de la misma, y no pudo menos de influir en el ánimo de los representantes del Ministerio Público y del juez para atenuar la pena impuesta; y finalmente destruye la consideración aducida por el fiscal para resistir la indivisibilidad de la confesión que había sido alegada por el defensor ante la Cámara en su escrito de espresión de agravios al amparo del art. 318 Cód. de Procedimientos Crim., cuya regla general era de aplicación ineludible, después de diligencias practicadas para mejor proveer. La disposición del art. 13, Cód. de Proc. y las leyes 26, tit. 1º, Part. 7ª, y 12, tit. 14, Part. 3ª, autorizan la absolución de la procesada, como efectivamente fué absuelta.

7—Si el reo no cumple con la obligación que impone el art. 82 del Cód. Pen. á todo aquel que hiere ó mata en legítima defensa, tiene en su contra la presunción que el mismo art. establece, debiendo considerarse según los casos, que ha habido exceso en la defensa.

1—Para que la retractación sea admisible, es indispensable, según el art. 319 del Cód. de Proc. Crim., que el inculpado ofrezca pruebas sobre hechos decisivos que justifiquen haberse producido la confesión, oprimido por medios violentos, por amenazas, dádivas ó promesas, que tienen por causa un error evidente, ó que el delito es físicamente imposible.



justificarlas plenamente.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 94. Ser. 4^a.

2. **Confesión retractada**—Solo procede la retractación de la confesión, probando la existencia de los requisitos que la ley exige.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 288, Ser. 4^a.

1^a. **Confirmación**—La confirmación con costas y consiguiente regulación, solo pueden referirse al vencedor, aun cuando por error se consignen en la sentencia los nombres del abogado y procurador del vencido.—Jur. Com., tom. 1, pág. 268, Ser. 4^a.

Confirmación—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 2.

1^b. **Conforme**—Pedido el reconocimiento de la firma de un conforme ante autoridad delegada, no procede que la misma intime el pago de la obligación.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 337, Ser. 4^a.

1^c. **Conformidad**—Exigida manifestación, el silencio des-

2—Véase la nota precedente.

1^a—Véase la nota del verb. *Abogado*, núm. 4. Confirmándose con costas la sentencia de 1^a Inst., no podían ni debían regularse otros honorarios sino los del abogado y procurador de la parte vencedora los que eran á cargo de la parte vencida en juicio. Solo hubo error de nombre al poner los del abogado y apoderado de la parte vencida en vez de los de la parte vencedora.

1^b—A una cuenta corriente se le había puesto al pié el conforme. Se pidió el reconocimiento de la firma para preparar la vía ejecutiva, y á este efecto la parte presentó escrito solicitando se librara exhorto al juez del domicilio del firmante para que allí se verificase el reconocimiento, y en caso de ser recocida la firma se librara mandamiento de ejecución y embargo por el mismo juez exhortado. No se hizo lugar á esta última parte de la petición porque el art. 787 del Cód. de Com., solo autoriza á proceder ejecutivamente cuando el que resulte acreedor en la cuenta corriente hubiese girado contra el deudor y éste no hubiese aceptado el giro.

1^c—Regulados los honorarios de un abogado en un juicio testamentario, solicitó la estracción de su importe del banco donde la testamentaria tenía fondos depositados: el juez ordenó la entrega con la conformidad de los herederos. Algunos manifestáronse espresamente conformes con



pués de notificada importa conformidad.—Jur. Civ., tomo 12, pág. 413, Ser. 3ª.

Conformidad—Véase: *Inscripción tardía*, núm. 1.—*Término de prueba*, núm. 4.

1. Confusión de límites—Si ha existido durante largo término confusión de límites, ninguno de los linderos puede alegar á su favor posesión continuada y tranquila capaz de hacer procedente la prescripción adquisitiva.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 225, Ser. 3ª.

lo solicitado y otros callaron: el juez Méndez Paz no hizo lugar á la extracción fundándose en que uno de ellos no había hecho la manifestación expresa. La Cám. revocó el auto diciendo que: «Habiendo sido notificado personalmente el interesado y no habiendo deducido oposición alguna á lo solicitado» procedía la entrega de los fondos. Véase el art. 919 del Cód. Civ.

1—La prescripción en este caso no existe en los términos requeridos por la ley para justificar la adquisición del dominio y poder oponerla al que trata de reivindicar un inmueble, fundado en un título que acredita sus derechos de dominio sobre la misma propiedad. Es indudable, que la prescripción es un medio de adquirir la propiedad de un inmueble por la posesión continua del mismo; pero aunque no se requiera título ni buena fe de parte del poseedor, ni haya que hacer distinción entre presentes y ausentes, en cuanto á la prescripción de 30 años consagrada en el art. 4015 del Cód. Civ., y aunque en tal caso, como dice el art. 4016, no puede oponerse ni la falta, ni la nulidad del título, ni en fin, la mala fe en la posesión, no es menos cierto que para que esa prescripción se opere, es necesario que durante aquel tiempo sea continua y no interrumpida. Pero cuando hay confusión de límites existe condominio—art. 2746 del Cód. Civ.—Y cuando el condominio existe, el derecho de propiedad corresponde á cada condómino por una parte indivisa, pero sobre la totalidad—art. 2763.—Y cada condómino goza respecto de su parte indivisa de los derechos inherentes á la propiedad—art. 2766.—Si todos los condóminos tienen sobre la cosa común el derecho de propiedad mal puede prescribir contra el otro condómino, porque esa prescripción presupone una posesión exclusiva y á título de propietario—art. 4006.—En el condominio la posesión de uno de los condóminos no excluye la del otro y por consiguiente la prescripción no puede oponerse.



Confrontación—Véase: *Compulsa*, núm. 3.

Congreso Nacional—Véase: *Dieta*, núm. 1.

Conocimiento—Véase: *Coautores*, núm. 1.

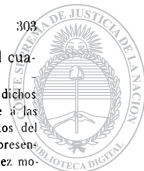
Conocimientos especiales—Véase: *Arbitros*, núm. 4.

Consecuencias—Véase: *Excepción improcedente*, núm. 2.

Consentimiento—Véase: *De oficio*, núm. 2—*Inscripción tardía*, núm. 1—*Término de prueba*, núm. 4—*Cesión de un pagaré*, núm. 1—*Contrato*, núm. 6.

1. Consentimiento tácito — El consentimiento á las mo-

1—El actor titulándose dueño de dos caballos y unos arreos embargados en un juicio, se presentó iniciando la correspondiente tercería de dominio. Corrido traslado de la acción al ejecutado y ejecutante, fué evacuado por ambos, reconociendo el primero la exactitud de los hechos alegados por el tercerista, y manifestando el segundo que en vista del certificado de propiedad presentado no tenía inconveniente en que se levantara el embargo de los caballos; no así el de los arreos, que pertenecían al ejecutado. Trabada en esta forma la litiscontestación, no era ya posible, ni al actor alterar la demanda, ni al demandado la contestación—leyes 40, tít. 2º, y 2ª, tít. 10, Part. 3ª; y 1ª del Estilo; Malaver, 787.—Pero posteriormente se presentó el ejecutante esponiendo: que si bien era cierto que en su escrito había accedido al levantamiento del embargo trabado sobre los caballos, como dicho escrito lo presentó en la creencia de que el certificado presentado por el tercerista no pudiese ser impugnado; habiéndolo examinado después, halló en él tales indicios que corroboraban su presunción de que tal documento no reunía las condiciones de legalidad para que pudiesen surtir sus efectos; decía que no hay más que echar una mirada, tanto en la redacción de las dos primeras líneas que lo encabezan, las cuales á más de no tener sintaxis ni coordinación en las frases para quede evindecido que el primer reglón de dicho documento había sido hecho después con el objeto evidente de dar viso de verdad probablemente á una confabulación entre el tercerista y el ejecutado, en menoscabo de sus intereses, pues no tenía cabida en buen sentido, que un alcalde en documento público escriba: «Certifico que conste»: que además el núm. 136,325 que llevaba el certificado, había salido con fecha anterior á Enero 30, según cree, de las oficinas de papel sellado; que todos estos datos venían á robustecer la presunción que tenía de que dicho documento había sido fraguado y por lo tanto venía á retirar el escrito evacuando el



dificaciones que una parte pretenda introducir en el cua-

traslado, pidiendo que se mantuviese el embargo trabado sobre dichos caballos, y arguyendo de falso dicho documento, se convocase a las partes á juicio verbal en el término del art. 153 y á los efectos del art. 154 del Cód. de Proc. Este escrito debía tenerse por no presentado aunque es verdad que la voluntad de las partes puede tal vez modificar el rigor de los preceptos legales de la litiscontestación, pero no puede considerarse que en el presente caso existiese consentimiento por parte del tercerista, desde que no habiendo sido oído sobre el citado escrito, él se había opuesto á que se cambiaran los términos de la contestación á la demanda en la primera oportunidad legal que se le presentó, cuando alegó de bien probado. Debe tenerse presente, por otra parte, que la falta de protesta inmediata del ejecutante contra el nuevo escrito del tercerista, no es acto que induzca consentimiento tácito, no solo por la razón antes espresada, sino también porque siendo prohibido modificar la contestación á la demanda, el actor ha podido entender que no obstante la presentación de ese escrito, el juez no lo tomaría en cuenta; y desde luego es evidente que en tales condiciones su actitud no pudo tomarse como indicio seguro de consentimiento, en los términos de los arts. 1145 y 1146 del Cód. Civ. El silencio del actor en el momento de presentarse el escrito en cuestión, no puede tener efecto alguno en este caso con arreglo á lo que dispone el art. 919 del Cód. Civ. No puede, pues, decirse que ha habido consentimiento tácito, porque la razón del silencio del actor se explica por dos causas: primera, porque pudo entender que la protesta solo debía hacerse en el alegato; y segunda, porque pudo también creer que aun sin protesta el juez no admitiría la modificación, de conformidad á lo que disponen las leyes citadas. Por consiguiente, como el acto en cuestión tiene esplicaciones perfectamente racionales, sin necesidad de tenerse por consentimiento, será forzoso concluir que no consta la existencia de éste, desde que él solo puede resultar de actos que conduzcan necesariamente á suponerle carácter que no reviste el que aquí se ha producido. Para que un acto cualquiera sea considerado como manifestación tácita de voluntad en un sentido dado, es necesario que no sea susceptible de interpretaciones diversas; y que no pueda entenderse ni aplicarse de otro modo que como tal manifestación de voluntad. Esta doctrina legal que surge claramente de los arts. 1145 y 1146 citados, del Cód. Civ., impide declarar que ha habido consentimiento tácito por parte del tercerista, puesto que como lo hemos visto, su conducta puede explicarse por motivos que distan mucho de ser una aceptación



si-contrato de la litiscontestación, debe ser espreso; la falta de protesta en oportunidad no basta para suponer el consentimiento tácito.—Jur. Com., tom. 9, pág. 367, Ser. 4^a.

Consentimiento tácito — Véase: *Seducción de menores*, número 1.

1^a. **Consignación judicial**—Para que el contrato de compraventa de acciones ó títulos al portador surta efectos legales, la consignación judicial de los que fueron materia del contrato, debe verificarse en la fecha estipulada para la entrega.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 10, Ser. 4^a.

1^b. **Consignación en pago**—Las costas del incidente sobre consignación son de cargo del ejecutado si son rechazadas las escepciones.—Jur. Com., tom. 2, pág. 111, Ser. 4^a.

2. **Consignación en pago** —Consignado el capital en pa-

del cambio introducido por el ejecutante. Finalmente, suponiendo que el ejecutante hubiese incurrido en un error de hecho al reconocer la propiedad del tercerista, aun así, no podría impedir los efectos de tal reconocimiento, puesto que proviene de una negligencia suya, la ignorancia del verdadero estado de las cosas, y en ese caso, el error de hecho no puede ser alegado por aquel que incurrió en él—art. 929 del Cód. Civ.—Demostrado pues, que el segundo escrito no puede ser tomado en consideración, y que el reconocimiento hecho en el primer escrito es irrevocable, quedaba por lo mismo demostrada la propiedad del tercerista sobre los caballos embargados, desde que ese reconocimiento importa un verdadera confesión judicial, que releva de toda otra prueba—leyes 1^a y 2^a, tit. 13, Part. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Acciones ó títulos*, núm. 1.

1^b—La sentencia de trance y remate se dictó con imposición de costas. Después se agregó el incidente sobre consignación y se declaró que las costas del incidente eran á cargo del ejecutado, fundándose en que la sentencia de trance y remate había condenado en costas al ejecutado lo cual implicaba que la cuestión estaba fuera de discusión. Véase el núm. siguiente.

2—Este es un caso que parece igual al anterior. Pero en realidad



go, las costas posteriores no son de cargo del ejecutado si la consignación se declara procedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 376, Ser. 4^a.

3. **Consignación en pago**—Surtiendo la consignación los efectos del pago desde su aceptación, los gastos y honorarios son de cuenta del ejecutante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 163, Ser. 4^a.

4. **Consignación en pago**—Hecha antes del requerimiento judicial, exime al deudor del pago de las costas, pero no de los intereses y gastos del protesto.—Jur. Com., tom. 8, pág. 133, Ser. 4^a.

5. **Consignación en pago**—Para que surta los efectos del pago debe ser judicial; el depósito a la orden del acreedor carece de valor jurídico.—Jur. Com., tom. 9, página 361, Ser. 4^a.

son distintos. En el núm. 1, la parte que consignó en pago fué vencida, mientras que en el sumario presente se declaró que la consignación era legal y con fuerza de pago. No debe olvidarse que la imposición de las costas es de precepto legal, y que ella debe ser á cargo del vencido, como lo preceptúa el art. 760 del Cód. Civ.

3—La consignación aunque fué objetada por el ejecutante al principio, se aceptó al fin por el mismo, quedando por ello sin efecto su oposición. La consignación no objetada surte todos los efectos del pago, desde el día en que fué hecha—art. 760 del Cód. Civ.—y puede entonces considerarse como hecho el pago, de la cantidad demandada, por el ejecutado, el día que hizo la consignación, estando desde ese día extinguida la obligación, no hay razón para hacer cargar al ejecutado con gastos de ejecución de fecha posterior, desde que esa ejecución no tiene razón ya para seguir adelante.

4—El pago de lo adeudado se verificó antes del requerimiento judicial, por lo que no deben ser de cargo del deudor las costas del juicio. Por otra parte, tratándose de un pagaré que no es pagado á su vencimiento, deben ser á cargo del deudor los intereses desde el vencimiento, y también los gastos de protesto, art. 726, inc. 1º del Cód. de Com.

5—El art. 756 del Cód. Civ. habla de depósito judicial. Pueden verse asimismo los arts. 757 y 758.



6. **Consignación en pago**—Consignada en pago la suma ordenada por la sentencia, las costas posteriores no son de cuenta del ejecutado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 249, Ser. 4^a.

1^a. **Consignatario de un buque**—La ley supone al consignatario del buque, mandatario del dueño de las mercaderías.—Jur. Com., tom. 3, pág. 368, Ser. 4^a.

2. **Consignatario de un buque**—La persona que ordena la descarga y conducción de las mercaderías á los depósitos de aduana, es el responsable del precio del porte sin que pueda declinar su responsabilidad contra el consignatario de la mercadería.—Jur. Com., tomo 3, pág. 368, Ser. 4^a.

Consulta—Véase: *Sentencia modificada*, núm. 3.

Consumo—Véase: *Mercaderías*, núm. 3.

1^b. **Conspiración**—Siempre que preceda á la ejecución del crimen, confabulación, conspiración ó cooperación, existirá complot.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Serie 4^a.

Construcción—Véase: *Edificación*, núm. 1—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1.

1^c. **Construcción**—Los edificios construidos en terreno

6—El art. 483 del Cód. de Proc., establece que las costas serán á cargo del ejecutado cuando no paga antes de ser requerido. Si el deudor deposita judicialmente la suma adeudada antes de ser requerido, no puede ser condenado en las costas, pero es necesario que se le haga saber al acreedor el pago hecho por consignación, antes de que el deudor sea requerido, pues el pago por consignación solo se considera hecho cuando se le hace saber al acreedor, puesto que el art. 759, exige para que surta los efectos del pago, que no sea impugnado por el acreedor.

1^a—Arts. 1924 y 1927 del Cód. Civ., y 335 del Cód. Com. ant.

1^b—Véase: verb. *Complot*, núm. 1.

1—El crédito procedente de construcciones es privilegiado, según



ajeno con conocimiento y aquiescencia del propietario,

lo establecen los arts. 3933 y 3935 del Cód. Civ., que son rigurosamente aplicables, aun cuando los propietarios personalmente no hayan tratado con el constructor, puesto que en el caso que nos ocupa, trató bajo planos aprobados por ellos y su representante legal, que era el locatario debidamente facultado por una de las cláusulas del contrato de locación. El privilegio sobre bienes inmuebles tiene el carácter de la antigua acción *in rem scriptam*, es una especie de carga que los grava y sigue con ellos cualquiera que sea el poseedor, lo que se recuerda para demostrar que es indiferente el que el inmueble se encuentre en poder del inquilino mismo ó en el del propietario y que á este respecto, en nada puede modificar la situación del crédito del constructor, la rescisión del contrato entre los propietarios y el inquilino. Si el constructor tenía este crédito privilegiado contra el inquilino, el hecho de recibir en pago un pagaré no importa la extinción de su crédito ni de sus privilegios, porque se trata de una orden escrita d^a que reconoce por causa la misma deuda; y el hecho de que el acreedor haya aceptado dicha orden, no extingue los privilegios que le garantían su crédito, porque no importa una novación, según los términos espresos del art. 813 del Cód. Civ. La consideración de que el tenedor de la letra no tiene contra el inquilino, librador originario, los derechos del constructor, porque el endoso solo trasmite la propiedad de la letra hecha, no hace á la cuestión ni modifica las conclusiones anteriores. Por el art. 669 del Cód. de Com., el portador tiene acción solidaria para el pago de la letra contra el librador, aceptantes y endosantes. Así, el endosado puede dirigir su acción contra el constructor, endosante y á la vez contra el inquilino, solidariamente obligados; y como los privilegios que tiene un deudor en su beneficio, hacen parte de su patrimonio, el que á su vez responde de sus obligaciones, su acreedor que es el tenedor de la letra, puede invocar en favor de su crédito los privilegios que tenía en él, y que no se habían extinguido por el hecho de recibir el pagaré dado en pago y que él transmitió. Bravard, tom. 3º, § 2º, pág. 145, sostiene que el endoso es á la vez *cesión, venta y fianza*. Es una cesión, dice, porque trasmite con la propiedad de la letra las garantías que le están afectas, los recursos y acciones que de ellas se derivan. Una de esas garantías es el privilegio de hacersela pagar con la propiedad construída, puesto que se ha demostrado que el pagaré otorgado en pago dejaba subsistente el privilegio, porque no producía novación: luego, los endosatarios que no son sinó los mandatarios del librador originario y del primer tomador, tienen en garantía del pagaré ese privilegio. El



responden siempre por el precio de construcción cualquiera que fuese el motivo en que se funde la rescisión del contrato.—Jur. Com., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

Constructor—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 31—*Interdicto de despojo*, núm. 1.

Contabilidad—Véase: *Compulsa*, núm. 3.

1. **Contadores**—Inscripciones en la matrícula durante el mes de Agosto de 1890.—Jur. Civ., tom. 8, página 400, Ser. 3^a.

1^a. **Contador**—Para informar sobre puntos de contabilidad debe nombrarse contador: el escribano solo es competente para la compulsión ó confrontación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 92, Ser. 4^a.

2. **Contador**—Las apreciaciones del contador nombrado para practicar una compulsión, no forman prueba; su informe debe limitarse á la veracidad de la cuenta presentada y forma de llevar los libros de comercio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 195, Ser. 4^a.

3. **Contador**—Los jueces pueden verificar por sí mismos la forma de llevar los libros de comercio, no obstante el informe favorable del contador nombrado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 345, Ser. 4^a.

Contador—Véase: *Balance*, núm. 1.

tenedor de la letra en virtud de su derecho de reversión, se considera como si hubiese tratado directamente con el librador, teniendo contra él como contra cada uno de los obligados, una acción *sui generis*, según la expresión de Nougier. Por otra parte, es un principio de equidad natural, el de que *nemo cum alterius damno lucupletior*, y es una regla de derecho que las convenciones comerciales obligan á lo que la equidad natural impone, y sería contrario á esta doctrina el que el propietario se hiciera dueño de un edificio cuya construcción y material se deben al constructor.

1^a—Véase verb. *Compulsa*, núm. 3.

2—Véase: verb. *Compulsa*, núm. 8.



Contestación de la demanda—Véase: *Copia*, núm. 1.

Contrademanda—Véase: *Prueba*, núm. 2 — *Excepción de incompetencia*, núm. 12.

Contradicción—Véase: *Testigos presenciales*, núm. 1.

Contraparte—Véase: *Contrato*, núm. 6.

Contratantes—Véase: *Escritura pública*, núm. 6.

1. *Contrato*—Los actos de los contratantes posteriores al contrato, son la única regla de interpretación á que deben sujetarse sus cláusulas equívocas—Jur. Com., tom. 4, pág. 235, Ser. 4^a.

2. *Contrato*—La fecha de la escritura anterior á la fecha en que se contrajo la obligación ejecutada, es presunción de la realidad del contrato.—Jur. Com., tom. 4, página 309, Ser. 4^a.

3. *Contrato*—No existiendo lugar designado para el pago, no puede exigirse en el lugar del contrato sino en el domicilio del deudor.—Jur. Com., tom. 5, pág. 87, Serie 4^a.

4. *Contrato*—El deudor no puede oponerse á la venta sin juicio previo, siempre que en el contrato el acree-

1—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 3º, verbo *Hechos*, núm. 4; y tom. 1º, verb. *Contratos*, núm. 589.

3—Aun cuando la obligación cuyo cumplimiento se demande haya sido contraída en esta ciudad, esa circunstancia no autoriza á demandar en ella al deudor que reside en la provincia de Buenos Aires, por que la facultad que el art. 4º del Cód. de Proc. acuerda al acreedor para iniciar su acción en el lugar del contrato cuando no se ha convenido otro para cumplimiento de la obligación, está sujeto á las condiciones de que en él se halle el demandado aunque sea accidentalmente, lo cual no se había alegado por el actor al iniciarse su demanda. No concurriendo esa circunstancia, ni mediando designación de lugar para el pago, debe requerirse en el domicilio del deudor, según el art. citado, y los arts. 747 y 749, Cód. Civ.

4—Por un contrato de prenda se autorizó espresamente al acreedor, para que en caso que el deudor no pagase el crédito el día del ven-



dor tenga esa facultad —Jur. Com., tom. 5, pág. 155, Serie 4^a.

5. **Contrato**—El mandato es un contrato que no puede ser invocado por terceros.—Jur. Com., tom. 6, pág. 271, Ser. 4^a.

6. **Contrato**—Trabado el litigio por demanda y contestación, las partes no pueden alterar el cuasi-contrato que de ellos resulte, ni el Juzgado tomar en cuenta las modificaciones, aun cuando aparezcan consentidas por la contraparte.—Jur. Com., tom. 9, pág. 367, Ser. 4^a.

7. **Contrato**—Los tribunales ordinarios tienen jurisdicción para conocer y resolver en juicio ordinario las acciones deducidas contra la Municipalidad por falta de cumplimiento á un contrato.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 112, Ser. 3^a.

8. **Contrato**—El reconocimiento de la existencia de un

cimiento de la obligación, hiciese vender en el acto, por un corredor de de bolsa y por cuenta del deudor, sin ninguna intervención judicial, los títulos en prenda, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera resultar en contra del firmante por la diferencia entre el importe del crédito y el precio que se obtuviese. Tal cláusula es la misma que rige como regla general en tales casos, según el art. 585 del Cód. de Com.; pero sea cual fuese el alcance que se dé á éste, los términos del documento constituyen ley primordial para las partes—arts. 209, Cód. de Com., y 1197, Cód. Civ.

5—Art. 1199 del Cód. Civ. Y es por esto que el apoderado general no puede ser obligado á intervenir en un juicio en nombre de su mandante en contra su voluntad.

6—Véase la nota del verb. *Consentimiento tácito*, núm. 1.

7—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5º, verbo *Contrato*, núms. 1 y 19 y sus notas; tom. 2º, verbo *Contratos*, núm. 1; *Obligaciones*, núm. 2; *Contencioso-administrativo*, núm. 2.

8—El demandante afirmó que el demandado le había comprado dos manzanas de terreno por 9.500 pesos moneda nacional, pagaderos al contado al firmarse la escritura, y que el comprador había recibido 500 pesos á cuenta del precio y en ejecución del contrato. El demandado



contrato no obliga al demandado á la prueba de sus ba-

á su vez dijo, que se había obligado á vender al actor dos manzanas de terreno en Saavedra por 20.000 pesos moneda nacional, más ó menos, obligándose el actor á comprar y pagar el precio dentro de los 45 días del convenio, entregando 500 pesos en señal y no á cuenta del precio. Como se ve, no hubo conformidad de partes respecto del precio. El actor no probó que el convenio fué de 9.500 pesos como lo afirmó, y el demandado tampoco acreditó que fuese de 20.000 más ó menos. No habiéndose comprobado cuál fué el precio de la compraventa, no se comprobó la existencia de ese contrato, puesto que aquél es esencial para que exista éste. Es verdad que el demandado confesó la existencia de un contrato de compraventa que había celebrado con el actor, respecto á las dos manzanas de terreno; pero ese contrato es diverso del que invocó el demandante, no sólo en parte sustancial, como es el precio, sino también respecto á las modalidades del tiempo en que debió efectuarse y de la cantidad entregada por el comprador á cuenta según éste, en señal según el vendedor. El demandante pretendió tomar la parte que le convenía del contrato que confesó el demandado, y que éste debía probar cuál fué el precio y las demás cláusulas de ese contrato, olvidando que el hecho reconocido por el demandado, el contrato, no es el mismo que el que el actor afirmó como fundamento de su demanda. «La confesión no puede dividirse contra el que la hizo, dice Bonnier, cuando me refiero á la declaración de mi adversario, debo tomarla tal cual es, no puedo dividirla á mi arbitrio para tomar de ella solamente lo que me es favorable. De otro modo le prestó un lenguaje que no ha tenido ni querido tener, porque es sabida la facilidad con que aislando ciertas expresiones puede darse un sentido manifestamente contrario á la intención del que las pronunció. La confesión puede aceptarse ó rechazarse, pero no es permitido desnaturalizarla».—Tratado de la Prueba, tom. 1º, § 336.—Caravantes adicionando á Bonnier en el paraje citado, es más explícito y se pronuncia en estos términos: «Si la circunstancia ó calificación que se añade en la confesión calificada, puede separarse del hecho sobre que recae la pregunta, se llama la confesión divisible.... mas, cuando la modificación ó circunstancia añadida es inseparable del hecho preguntado, la confesión se llama indivisible y no se puede aceptar en una parte y desecharse en otra por el adversario, quien si quiere aprovecharse de ella, tiene que probar ser falsa la circunstancia ó modificación.» En el caso ocurreniente, el precio es inseparable de la compraventa, como que sin él ésta no existe, de manera que la confesión del demandado sobre el particular es indivisible. Resulta entonces, que el

ses; su confesión es indivisible.—Jur. Civ., tom. 8, página 278, Ser. 3ª.

9. **Contrato**—Presentado el contrato en que se funda la acción, es improcedente la escepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 113, Ser. 3ª.

10. **Contrato**—El intermediario de un contrato, ya sea comisionista ó martillero, está obligado á la exhibición de sus libros de comercio y al reconocimiento de los documentos que llevan su firma.—Jur. Civ., tom. 10, página 120, Ser. 3ª.

11. **Contrato**—Si entre las cuestiones sometidas al arbitraje, no se comprendió la clase de moneda en que debía

contrato de compraventa en cuestión, el que por defecto de forma no producía los efectos que le son propios, pero que hubiese quedado concluido como un contrato de hacer escritura pública, no ha existido realmente, ó al menos el actor no lo comprobó. En cuanto á la indivisibilidad de la confesión, véase: verb. *Confesión calificada*.

9.—Se opuso la escepción basándose en que no se había acompañado el contrato que servía de fundamento á la acción. Conferido traslado el actor lo presentó, y el juez dijo, que la escepción no tenía porque sustanciarse por cuanto el fundamento había desaparecido, mandando que se contestara derechamente la demanda. Nos parece equivocada esta doctrina, por cuanto para las escepciones deben regir los mismos principios que para lo principal. Así el actor que no instaura en forma su demanda no puede modificarla una vez contestada: del propio modo, cuando el demandado formula una escepción y el actor después llena los requisitos, debe resolverse si la escepción era ó no procedente para obligar á las partes á deducir sus demandas en forma siendo más cuidadosos en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley ó para que el demandado no oponga escepciones inútiles si no tuviese razón. La resolución del sumario tiende á favorecer la desidia de los litigantes, obligando á las partes y á los jueces á producir actuaciones inútiles y que deben evitarse. Cuando se opone una escepción y el actor cumple con lo pedido por el demandado debe resolverse sin más trámite si ella es ó no procedente si fuere de puro derecho.

10.—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 10.

11.—Véase: verb. *Arbitros*, núm. 1.





verificarse el pago, se entiende que debe hacerse en la especie estipulada en el contrato, aun cuando el árbitro la convierta á moneda nacional.—Jur. Civ., tom. 12, página 347, Ser. 3ª.

Contrato—Véase: *Papeles de comercio*, núm. 1—*Compañía de seguros*, núm. 1—*Condiciones lícitas*, núm. 1—*Intereses*, núm. 4—*Escepción de estinción*, núm. 1—*Pago*, núm. 3—*Acreeedor prendario*, núm. 1—*Comprador*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 33—*Escritura pública*, núm. 5—*Obligación de hacer*, núm. 12—*Papel sellado*, núm. 12.

1. Contrato de arrendamiento—La falta de cumplimiento á las condiciones estipuladas en el contrato de locación, hace procedente su rescisión.—Jur. Civ., tom. 9, página 394, Ser. 3ª.

2. Contrato de arrendamiento—Si el precio del arrendamiento consiste en una parte alícuota del producido del inmueble, el contrato se conceptúa de sociedad, y las cuestiones que se susciten corresponden á la jurisdicción mercantil.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 114, Ser. 3ª.

3. Contrato de arrendamiento—El sublocatario que sin avisar al locatario, ni intervención judicial, contrata con un tercero nueva locación, carece de derecho para reclamar daños y perjuicios fundados en la resolución del contrato cuyo cumplimiento no ha exigido judicialmente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 291, Ser. 3ª.

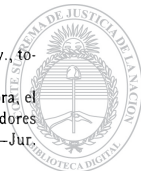
4. Contrato de arrendamiento—El de locación no ins-

1—Véase: verb. *Condiciones*, núm. 2.

2—Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 1.

3—Arts. 226, inc. 5º; 239 de la Ley Org. de los Trib. de la Capital de 1886.

4—Art. 226, inc. 5º, de la Ley Org. de los Trib. de la Capital de 1886.



cripto, no puede ser opuesto á terceros.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 106, Ser. 3ª.

1ª. **Contrato con los acreedores**—Declarada la quiebra, el fallido solo puede hacer convenio con sus acreedores en la oportunidad y forma que determine el Cód.—Jur. Com., tom. 8, pág. 317, Ser. 4ª.

1^b. **Contrato bilateral**—De compraventa de efectos ó papeles de comercio á plazo, el que exija su cumplimiento debe justificar haberlo cumplido en la fecha de su vencimiento.—Jur. Com., tom. 4, pág. 320, Ser. 4ª.

2. **Contrato bilateral**—Procede el embargo preventivo fundado en un contrato bilateral, si se justifica el cumplimiento por parte del que lo pide ú ofrece cumplirlo.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 265, Ser. 4ª.

1^c. **Contrato de cesión**—La cesión de derechos posesorios es un contrato innominado que no requiere para su validez forma de instrumento público.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 386, Ser. 3ª.

1^d. **Contrato civil**—La jurisdicción comercial es la única

1ª—La cesación de pagos es el hecho generador de la quiebra—artículo 1379 del Cód. de Com.—Producido ese hecho todo comerciante está obligado á manifestarlo dentro de tres días á la autoridad judicial—art. 1389.—La declaración de la quiebra crea la presunción de la insolvencia de la masa, y la liquidación del activo y pasivo de la quiebra, debe ajustarse con estricta sujeción á los preceptos que contiene el libro 4º del Cód. de Com.—art. 1386.—En virtud de esto, el arreglo que hace el fallido con sus acreedores, no puede nunca celebrarse sino de conformidad á las reglas de procedimientos que rijen la materia, y carece totalmente de eficacia jurídica.

1^b—Arts. 209, 210, 535 y 536 del Cód. de Com. ant. Véase: verbo *Acciones ó títulos*, núm. 1.

2—Art. 443, inc. 3º del Cód. de Proc.

1^c—Véase: *Cesión de derechos*, núm. 1.

1^d—Se trataba de un pagaré á la orden de persona determinada, el que por lo tanto está legislado por el art. 740 del Cód. de Com., y aun-



competente para entender en la ejecución de un pagaré á la orden, aun cuando su origen sea un contrato civil entre personas que no ejerzan el comercio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 83, Ser. 4^a.

2. **Contrato civil**—La locación de obra es un contrato civil, aun cuando el locatario juntamente con su trabajo venda los materiales y aparatos á colocar.—Jur. Civ., tom. 6, págs. 246 y 258, Ser. 4^a.

3. **Contrato civil**—Reconocido que ni mandante ni man-

que el contrato que dió origen á ese pagaré comercial sea civil por su naturaleza, esta circunstancia no altera ni modifica el carácter de tal documento que es comercial, de conformidad con lo prescripto en el inc. 4^o del art. 8^o del Cód. de Com.

2—El examen de la cuenta que el mismo actor presentó, demostraba que solamente tenía establecido un taller de gas y aguas corrientes y que ofrecía sus servicios para «colocar cañerías de gas y aguas corrientes, y campanillas eléctricas, colocar y broncear aparatos, etc.,» sin que nada indicase que hiciese el comercio de esos ú otros artículos. Examinando las partidas de dicha cuenta, se veía que tenían por causa la colocación de cañerías de gas y agua y el precio de las mismas cañerías colocadas, y la compostura ó colocación de aparatos que el actor no había vendido. Todo esto convence de que el actor era un industrial obrero ó empresario de obras, que contrataba la colocación de sus servicios y proveía al mismo tiempo los materiales que empleaba, lo cual está previsto por el art. 1629 del Cód. Civ. y no desnaturaliza el contrato de locación de servicios. En su consecuencia no siendo el actor comerciante en el sentido legal de la palabra, no es de aplicarse lo dispuesto en el art. 7^o del Cód. de Com.: y tampoco los hechos que dieron motivo á la demanda constituían un acto de comercio—art. 8^o, Cód. de Com.—sino una locación de servicios que debe ser juzgada con arreglo al Cód. Civ. Por otra parte, el demandante reconoció espresamente en su escrito de demanda que se trataba de un contrato de locación de obras, regido por los arts. 1623 y 1629 del Cód. Civ., en que él se obligó á poner juntamente con su trabajo ó industria los materiales necesarios para la ejecución de la obra, y que era el importe de esta obra cuyo pago se exigía.

3—Véase: verb. *Comerciante*, núm. 16.



tario reunían el carácter de comerciantes, el mandato debe calificarse y juzgarse como contrato civil.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 5, Ser. 3^a.

Contrato comercial.—Véase: *Inscripción*, núm. 2 —*Jurisdicción mercantil*, núm. 1.

1^a. **Contrato de comisión.**—El comisionista ó mandatario carece de derecho para exigir á una sola de las partes el importe total de la comisión, aun cuando sea la única culpable de no haberse efectuado la operación, puesto que conseguido el acuerdo de voluntades puede verificar el cobro á cada uno de los contratantes.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 377, Ser. 3^a.

1^b. **Contrato de compraventa.**—Es competente para su cumplimiento, el juez del lugar donde debía verificarse la tradición y el pago.—Jur. Com., tom. 3, pág. 18, Serie 4^a.

2. **Contrato de compraventa.**—El contrato en que se transfiere la propiedad de una cosa mueble por un precio determinado, es de compraventa y no de locación de servicios.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 4^a.

3. **Contrato de compraventa.**—Subsiste aun después de la muerte de los contratantes.—Jur. Com., tom. 4, página 336, Ser. 4^a.

4. **Contrato de compraventa.**—La falta de cumplimiento hace pasible á la parte culpable de los daños y perjuicios que el no cumplimiento cause.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 4^a.

5. **Contrato de compraventa.**—Los daños y perjuicios por falta de cumplimiento á un contrato de compraventa

1^a.—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 6.

1^b.—Arts. 4º del Cód. de Proc., y 749 del Cód. Civ.

2.—Arts. 513 del Cód. de Com. ant., y 1323 del Cód. Civ.



consisten en el lucro que cesa para la parte que tenía obligación de dar la cosa ó materia del contrato.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 4^a.

6. **Contrato de compraventa**—Justificada la existencia del contrato de compraventa de mercaderías, para responsabilizar al comprador, el actor debe justificar la entrega por cuenta del contrato y el importe de las adeudadas.—Jur. Com., tom. 7, pág. 292, Ser. 4^a.

7. **Contrato de compraventa**—Procede el nombramiento de árbitros amigables componedores para entender en la rescisión del contrato de compraventa si á ellos debían someterse las diferencias sobre cumplimiento.—Jur. Comercial, tom. 8, pág. 290, Ser. 4^a.

8. **Contrato de compraventa**—Para que el contrato de compraventa de acciones al portador surta efectos legales, la consignación judicial de los que fueron materia del contrato debe verificarse en la fecha estipulada para la entrega.—Jur. Com., tom. 9, pág. 10, Ser. 4^a.

9. **Contrato de compraventa**—La perfección de un contrato de compraventa de mercaderías, resulta de la factura del vendedor y del pago del precio por el comprador, sin que la prueba testimonial pueda modificar las condiciones que de la prueba escrita resulten.—Jur. Com., tom. 9, pág. 16, Ser. 4^a.

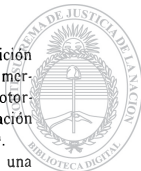
10. **Contrato de compraventa**—El boleto de compraventa de mercaderías, carece de fuerza legal para justificar el cumplimiento del contrato.—Jur. Com., tom. 10, pág. 378, Ser. 4^a.

7—Véase: *Árbitros-arbitradores*, núm. 8.

8—Véase: *Acciones ó títulos*, núm. 1.

9—Véase: verb: *Condiciones*, núm. 1.

10—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 1.



11. **Contrato de compraventa**—Bastando la tradición para justificar el contrato de compra, tratándose de mercaderías, la falta de certificados de inhibición para el otorgamiento de la escritura, no hace presumir la simulación de la venta.—Jur. Com., tom. 10, pág. 339, Ser. 4ª.

12. **Contrato de compraventa**—El cumplimiento de una

11.—Todo instrumento público hace plena fe no solo entre las partes, sino también contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, pagos, etc., como de toda enunciaci3n de hechos directamente relacionados con el acto jur3dico que forma el objeto principal del mismo—arts. 994 y 995, C3d. Civ.—La ley, no obstante, admite—art. 1191—la prueba de la simulaci3n de un acto, revestido de las formas legales, por todos los diversos medios designados en el art. 1190 del C3d. Civ., entre los cuales se cuentan las presunciones legales y judiciales, prueba 3 que la antigua legislaci3n y la jurisprudencia han dado uniformemente el car3cter de privilegiada, exigiendo simplemente que las presunciones sean graves, precisas y concordantes—L. 13, t3t. 16, lib. 5º, R. C.; Fallos de S. C. N. Ser. 2º, tom. 15, p3g. 473; S. C. P. de Buenos Aires, causa CVIII de la 1ª Ser.; y Fallos de esta C3m., Ser. 1ª, tom. 3º, p3g. 295; y tom. 5º, p3g. 130.—Sin desconocer que la falta de entrega del precio ante el escribano en el acto de otorgarse la venta, es un indicio grave de que no hubo tal venta; no basta, empero, esa sola circunstancia, para declarar la simulaci3n, sobre todo si se tiene en cuenta que nada de inveros3mil tiene si la entrega del precio se hizo al firmarse el boleto de venta, tres d3as antes de la escritura. La falta del certificado del Registro de Inhibiciones es una circunstancia en que no es posible fundar presunci3n alguna respecto de la simulaci3n. El art. 240 de la Ley de Org. de los Trib. de la Cap., se refiere 3nicamente 3 la venta de bienes inmuebles y no 3 la de muebles, porque para 3stas la formalidad de la escritura no es necesaria, y porque actos de esta naturaleza deben regirse por el C3d. de Com. cuyas disposiciones son en extremo amplias, llegando hasta declarar v3lidas las ventas de cosas ajenas—art. 433—aun cuando el escribano hubiera faltado al precepto de la ley org3nica citada, la escritura no adolecera del vicio de nulidad, porque la ley no fulmina esa sanci3n sino en los casos que espresamente se determinan en el art. 1004 del C3d. Civ.

12 —De acuerdo con el caso resuelto en el tom. 5º, verb. *Juez compe-*



obligación de hacer debe exigirse en el domicilio del deudor, aun cuando el bien esté situado en otra jurisdicción y aunque en ella se haya firmado el contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 132, Ser. 3ª.

13. Contrato de compraventa—La disposición del art.

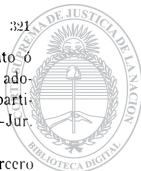
tente, núm. 2 de la Inst., cuya nota estudia el punto. Parece que el caso resuelto en el verb. *Bienes raíces*, núm. 2, del tom. 6º, estuviere en contra del sumario, pero no es así por cuanto en el caso de éste se trataba de un inmueble situado en la Rep. y el demandado se encontraba en el país, mientras que en el otro el demandado se hallaba fuera de él.

13.—La venta se hizo en remate público pero no judicial. Esta cuestión se planteó así: ¿tiene derecho el comprador para exigir que los vendedores lo subsanen, manteniéndose entre tanto subsistente el vínculo jurídico que resulta del boleto de compraventa, ó bien se limita ese derecho á optar entre la escrituración con el título tal como existe ó el desistimiento de la compra, conforme al art. 522 del Cód. de Proc.? La aplicabilidad del art. 522 del Cód. de Proc. procede en cuanto esta disposición impone al comprador la alternativa entre el desistimiento de la compra, sin responsabilidad alguna, ó la realización de ella con los defectos de que adolezcan los títulos, cuando estos defectos no pueden subsanarse en breve tiempo. Se sostiene que ese artículo carece de aplicación en el caso actual, porque no se trataba de una venta hecha judicialmente, y además, porque ni por analogía podrían invocarse los preceptos que establecen la forma del procedimiento en un asunto que solo puede ser regido por las leyes de fondo. La jurisprudencia de esta Cám. en repetidos casos ha tendido á generalizar el precepto recordado, aplicándolo, no solo á las ventas realizadas en los juicios ejecutivos, sino á toda otra venta judicial y aun á las verificadas particularmente, cuando concurren las mismas circunstancias que han determinado la necesidad de aquel precepto legal. Las deficiencias en los títulos pueden existir, tanto en las ventas judiciales como en las estrajudiciales. Los inconvenientes que de ellas procedan en las relaciones de vendedor y comprador, son exactamente las mismas en uno y otro caso, desde que en las ventas estrajudiciales no se haya estipulado de una manera expresa para el vendedor el compromiso de subsanar los defectos de los títulos, concretándose casi siempre los interesados á consignar la cláusula general de que «es entendido que los títulos serán libres de gravamen y defectos», cuya cláusula, que era la consignada en el boleto en el caso que nos ocupa, no importaba ciertamente otra cosa que exone-



522 del Cód. de Proc., que en las ventas en remate judi-

rar al comprador de la obligación de comprar con títulos defectuosos. Decir que los interesados entienden al obligarse que los títulos no han de adolecer de deficiencia, no implica establecer que el vendedor se comprometa á cambiar las condiciones del título con que verifica la enajenación en parte sustancial, que requiera diligencias largas y dispendiosas, porque el que vende al contado lo hace con el propósito de recibir inmediatamente el precio, y no puede presumirse que haya querido postergar de una manera indefinida la obligación del comprador hasta que queden salvadas las deficiencias que existan en los títulos, algunas de las cuales pueden ser de difícil y tal vez de imposible subsanación. Esto es tanto más evidente si se tiene en cuenta que con el transcurso del tiempo pueden cambiar las condiciones de solvencia del comprador; y resulta entonces que el vendedor habría verificado gastos inútiles y perdido un tiempo en que tal vez pudo vender la propiedad á otro comprador menos exigente. Y si se tiene presente además, en lo que concierne al caso sometido á la decisión del tribunal, que en el boleto se señaló un término de quince días para escriturar, término que debe entenderse establecido en beneficio de ambas partes, desde que ni por el objeto de la obligación ni por otras circunstancias resulta haberse puesto á favor de una de ellas exclusivamente—art. 570 del Cód. Civ.—Las resoluciones de la Cám. á que se ha hecho referencia, que extienden la disposición del art. 522 del Cód. de Proc. á todas las ventas judiciales, reconocen sin duda por fundamento la circunstancia de no existir en nuestra legislación de fondo, disposiciones especiales que prevean el caso de surgir dificultades sobre deficiencias de los títulos y que reglen los derechos de las partes en ese caso. El art. 1432 del Cód. Civ., determina los derechos del vendedor *cuando el comprador no pagase el precio*. No se necesita mucho esfuerzo para comprender que este precepto nada tiene que ver con el caso presente. El art. 1204, no tiene mayor relación que el anterior, con el que se halla en cuestión. El art. 1204, si bien establece que *cuando una de las partes no cumple el contrato*, la otra solo podrá pedir el cumplimiento, no prevé el caso en que por inconvenientes de los títulos, los interesados no se ponen de acuerdo en la realización del contrato, á pesar de que ambos se manifiestan dispuestos á cumplirlo. Y sin embargo, es este el caso que se ventilaba en el sumario. Lo que se discutía era que, si de acuerdo como estaban los interesados en que debía cumplirse el contrato, han de estar ó no los vendedores obligados á subsanar el defecto del título, que se invocaba por el comprador, ó si por el contrario, este



cial permite al comprador optar por el desistimiento o el cumplimiento de contrato, con los defectos que adolezcan los títulos, es aplicable á las ventas entre particulares, si los defectos son de difícil subsanación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 226, Ser. 3^a.

14. **Contrato de compraventa**—Corresponde al tercero la prueba de que el mandatario carecía de facultad para llevar á cabo el contrato; la falta de cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas que le ordenan la entrega del instrumento en que conste el mandato, no basta para justificar su inexistencia.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 316, Ser. 3^a.

15. **Contrato de compraventa**—Los Tribunales de la República son competentes para conocer en el cumplimiento de contratos sobre bienes situados en su jurisdicción, aun cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 360, Ser. 3^a.

16. **Contrato de compraventa**—Deducida acción sobre

último debe aceptar ó nó el título tal como está, ó desistir de la compra. No hay, como se vé, paridad entre el caso que se discute y el previsto en el art. 1204 citado. No existe, por consiguiente, contradicción entre el precepto del art. 522 del Cód. de Proc., y nada obsta á que los jueces en ausencia de prescripciones espresas del Cód. Civ., acudan á las del Cód. de Proc., tanto más, cuanto que estas disposiciones encarnan los principios generales del derecho sobre el particular, y que tratándose de la Cap. de la Rep., el Cód. de Proc. reconoce el mismo origen que el Cód. Civ., esto es, la sanción del Cong. Nac.

14—La inexecución de esas sentencias por parte de los presuntos mandatarios podría dar lugar á un juicio sobre cumplimiento de sentencia, resolviéndose quizá la obligación por ellas impuesta en la de indemnizar las pérdidas é intereses, pero la falta de cumplimiento de dichas sentencias no puede fundar ni dar por cierto un hecho que no ha estado en tela de juicio.

15—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2. Art. 1215 del Cód. Civ.

16—Porque el instrumento privado en esta clase de contratos no



cumplimiento del contrato de compraventa por instrumento privado, el Juzgado debe limitarse al rechazo de la acción, sin que deba pronunciarse ni hacer declaraciones que no se hayan solicitado en la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 269, Ser. 3ª.

17. **Contrato de compraventa**—No procede el cumplimiento del contrato de compraventa por instrumento privado, si se justifica la existencia de la causa resolutoria prevista en el boleto.—Jur. Civ., tom. 9, página 187, Ser. 3ª.

18. **Contrato de compraventa**—Cumplido el hecho previsto en el boleto de compraventa para rescindir el contrato, no procede su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 204, Ser. 3ª.

19. **Contrato de compraventa**—El término para la escrituración fijado en el boleto de compraventa, no importa un pacto resolutorio, y su vencimiento solo faculta á las partes á exigir judicialmente el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 255, Serie 3ª.

20. **Contrato de compraventa**—Es improcedente la acción de daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento de una obligación de hacer en tanto judicialmente no se haya exigido el otorgamiento de la escritura pública, si

da acción al cumplimiento del mismo sino á pedir que sea reducido á escritura pública; y mientras no se cumpla con este requisito, el contrato de compraventa se conceptúa inexistente—arts. 976, 977, 1038, 1044, 1047, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1323, 1412, 1427 y 1428, Cód. Civ. Y no puede el juez resolver sino sobre los puntos materia del cuasi-contrato de litiscontestación—arts. 217 y 218 del Cód. de Proc.—Véase además: Jur. Civ., tom. 1º, pág. 424, Ser. 2ª.

17—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 4.

18—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 5,

19—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 6.



para la validez del contrato era ineludible.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 404, Ser. 3ª.

21. **Contrato de compraventa**—El mandato general amplio, con cláusula especial para vender, es bastante para llevar á efecto el contrato de compraventa, sin que sea necesario poder especial para la venta de un bien, ni determinación espresa de su ubicación y linderos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 419, Ser. 3ª.

22. **Contrato de compraventa**—El comprador en remate judicial de un bien testamentario que no cumple el contrato, es responsable de la diferencia de precio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 64, Ser. 3ª.

23. **Contrato de compraventa**—Si el condenado á una obligación de hacer no cumple la sentencia dentro del término fijado, debe declararse resuelto el contrato.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 108, Ser. 3ª.

24. **Contrato de compraventa**—No debe declararse la rescisión del contrato con la pérdida de la seña, si tiene su origen en un remate judicial aprobado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 112, Ser. 3ª.

25. **Contrato de compraventa**—Debe convertirse en escritura pública el boleto privado de compraventa, sin resolver sobre aquellas cláusulas ó condiciones que importen el cumplimiento del contrato en él estipulado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 403, Ser. 3ª.

21—Véase: *Cláusula para vender*, núm. 1.

22—Véase: *Comprador judicial*, núm. 5.

23—La sentencia acordó al vencido diez días para el cumplimiento de la obligación; no cumplió con lo ordenado y se dió por rescindido—arts. 535 y 554 del Cód. de Proc.

24—En este caso se trataba de un contrato terminado conforme al art. 1184 del Cód. Civ., y no de una obligación de hacer.

25—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 12.



26. **Contrato de compraventa**—La existencia de pacto comisorio obliga al vendedor á ampararse de él en la fecha del vencimiento; si se justifica que después de esa fecha se conformaba con cumplir el contrato, se conceptúa que existió renuncia tácita.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 403, Ser. 3^a.

27. **Contrato de compraventa**—La frase «ó lo más que resulte entre muros» carece de valor legal si se justifica que la venta se hizo por extensión conocida de ambos contratantes.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 106, Ser. 3^a.

28. **Contrato de compraventa**—Es obligatoria la reducción á escritura pública del contrato de compraventa por instrumento privado, bajo apercibimiento de ser resuelta la obligación con pérdidas é intereses.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 379, Ser. 3^a.

29. **Contrato de compraventa**—Si el comprador sabía que el inmueble pertenecía en condominio al vendedor y sus menores hijos, no puede exigir judicialmente el cumplimiento del contrato en tanto no exista la autorización que la ley requiere, ni aun por la parte indivisa que corresponda al condómino.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 5, Serie 3^a.

30. **Contrato de compraventa**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe ordenarse su inmediata reducción á escritura pública; las objeciones al título solo deben ser juzgadas al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 12, página 329, Ser. 3^a.

31. **Contrato de compraventa**—La resolución judicial

26—Art. 1145 del Cód. Civ.

29—Véase: verb. *Comprador*, núm. 1.

30—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 16.



que rechazando las objeciones hechas por el comprador á los títulos, ordena el cumplimiento del contrato, no causa agravio al vendedor que pedía la rescisión fundado en la no existencia de las mismas.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 362, Ser. 3^a.

32. **Contrato de compraventa**—No debe hacerse lugar al desistimiento del comprador en remate judicial si se funda en la imposibilidad de cumplir el contrato.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 411, Ser. 3^a.

33. **Contrato de compraventa**—El conocimiento del juicio entre terceros sobre nulidad de un contrato de compraventa corresponde al juez en turno, aun cuando tenga por origen un bien testamentario.—Jur. Civ., tom. 12, página 400, Ser. 3^a.

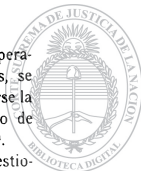
34. **Contrato de compraventa**—El cumplimiento de un contrato de compraventa de mercaderías á una persona jurídica, no puede ser exigible á los terceros que han intervenido como sus representantes, aun cuando sean los mismos que forman la entidad contratante.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 5, Ser. 4^a.

Contrato de compraventa— Véase: *Cesación de pagos*, núm. 2—*Compraventa*, núms. 1, 3 y 9—*Inscripción*, número 2—*Acciones ó títulos*, núm. 1—*Boleto de compraventa*—*Comprador*, núm. 3—*Títulos de propiedad*, número 11—*Contrato entre corredores*, núm. 1.

32—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase el núm. 24.

33—La Cám. aceptando los fundamentos del dictamen del Fiscal, así lo resolvió, pues se trataba de una demanda sobre nulidad de un contrato, que aunque tenía por origen la compra de un inmueble hecha á una testamentaria, la cuestión entre las partes contratantes en nada puede afectarla.

34—Porque las personas jurídicas contratan por medio de sus representantes legales y son completamente independientes de sus miembros—arts. 36 y 39 del Cód. Civ.



1^a. **Contrato entre corredores**—Reconocido que la operación verificada entre corredores, con ó sin comitentes, se resolvía con el pago de las diferencias, debe rechazarse la acción sin que se exija el cumplimiento como contrato de compraventa.—Jur. Com., tom. 8, pág. 202, Ser. 4^a.

1^b. **Contrato de disolución**—De una sociedad, las cuestiones sobre validez ó nulidad del contrato de disolución de una sociedad, deben ser resueltas por la jurisdicción comercial.—Jur. Com., tom. 5, pág. 362, Ser. 4^a.

1. **Contrato escrito**—El tercero puede justificar la existencia del mandato verbal por medio de testigos, cualquiera que sea el monto del contrato; las disposiciones de la ley sobre prueba escrita solo son aplicables entre mandante y mandatario.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 157, Serie 3^a.

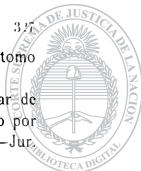
1. **Contrato de fianza**—En tanto el acreedor no cumpla las condiciones que impuso al deudor en el contrato de fianza, no puede exigir las obligaciones que corresponden al fiador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 371, Ser. 3^a.

1^c. **Contrato hipotecario**—Es competente el juez de la capital para la ejecución hipotecaria, si el inmueble está situado en su jurisdicción, aun cuando el contra-

1^a—De acuerdo con la jur. sentada. Véase: Inst., tom. 3^o, verb. *Operaciones de Bolsa*, núms. 2 y 3; y la nota al verb. *Especulación*, núm. 1.

1^b—Según los términos espresos del art. 448 del Cód. de Com., las cuestiones sociales que forzosamente deben ser decididas por jueces arbitradores son las que se suscitan entre los socios *durante* la existencia de la sociedad ó mientras ella estuviese en liquidación y partición; en el caso presente no se trataba de resolver una cuestión *entre socios* y *durante* la existencia de la sociedad ó su liquidación, sino la validez ó nulidad del contrato de disolución ya celebrado; en consecuencia no tiene aplicación lo dispuesto en el art. 448 citado, y el conocimiento del asunto corresponde á la jurisdicción ordinaria de comercio.

1^c—Véase: verb. *Competencia*, núm. 3.



to haya tenido origen fuera de ella.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 124, Ser. 3^a.

1^a. **Contrato ilícito**—Los tribunales deben rechazar de oficio toda acción que se funde en un contrato ilícito por ser contrario á la moral y á las buenas costumbres.—Jur. Com., tom. 4, pág. 178, Ser. 4^a.

Contrato ilícito—Véase: *Contrato entre corredores*, número 1.

1^b. **Contrato de locación**—De servicios, justificada su existencia procede se condene al demandado al pago de los prestados, según el valor que determinen peritos, en caso de no haberse estipulado precio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 385, Ser. 4^a.

Contrato de locación—Véase: *Comprador judicial*, número 3—*Locación*, núm. 5.

1^c. **Contrato modificado**—El consentimiento á las modificaciones que una parte pretenda introducir en el cuasi-contrato de la litiscontestación, debe ser expreso; la falta de protesta en oportunidad no basta para suponer un consentimiento tácito.—Jur. Com., tom. 9, pág. 367, Serie 4^a.

Contrato modificado—Véase: *Contrato reconocido*, número 2.

Contrato de mutuo—Véase: *Defraudación*, núm. 10.

1^d. **Contrato nuevo**—Las modificaciones á una propuesta, aun aceptándola en principio, importan la proposición de un nuevo contrato que para que se conceptúe terminado por correspondencia, su aceptación debe resultar en

1^a—Art. 954 y su nota, Cód. Civ.

1^b—Art. 1627 del Cód. Civ.

1^c—Véase: *Consentimiento tácito*, núm. 1.

1^d—Arts. 1148 y 1152 del Cód. Civ.



términos explícitos.—Jur. Com., tom. 3, pág. 321, Serie 4^a.

1^a. **Contrato original**—El Juzgado puede de oficio ordenar la presentación del original del contrato cuya copia se ha acompañado al iniciar la acción.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 263, Ser. 4^a.

1^b. **Contrato perfecto**—La aceptación por carta, de una propuesta en la misma forma, importa la perfección del contrato, si es de los que como el de locación pueden hacerse por correspondencia epistolar.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 3^a.

1. **Contrato de prenda**—La tercera fundada en un contrato de prenda sobre los muebles embargados, debe juzgarse como de mejor derecho y no de dominio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 173, Ser. 4^a.

1^c. **Contrato privado**—El Ministerio Fiscal no puede exigir la paralización del juicio por falta de presentación

1^a—Se ordenó se acompañase el contrato original, cuya copia se adjuntó, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar; por tanto este auto solo importaba prevenir á la parte de las consecuencias legales que puede traer la no presentación del contrato original.

1^b— Art. 1154 del Cód. Civ.

1—La sanción del art. 72, Cód. de Proc., que ordena al actor acompañar las escrituras y documentos en que funda su derecho, consiste, según el art. 73, en que después de interpuesta aquélla no le serán admitidos sino documentos de fecha posterior ó anterior, bajo juramento de no haber tenido conocimiento de ellos. La no presentación de tales documentos no autoriza á paralizar el juicio ó á no dar curso á la demanda—Arg. del art. 296, segunda parte, Cód. de Com.—Si el documento de que el actor pretende valerse en el caso, es copia privada y fiel del original, sobre cuyo punto hay conformidad de partes, y está llamada á producir los mismos efectos del original, podrá el Ministerio Fiscal oponerse á su admisión ó agregación sin que conste el pago del impuesto de sello que corresponda, pero no que no se dé curso á la acción mientras no se presente el original que se dice extraviado.



del contrato por instrumento privado, hasta que se acompañe el original que se dice extraviado. —Jur. Com., tomo 2, pág. 142, Ser. 4ª.

2. **Contrato privado**—En que se estipula la conversión á escritura pública, no está sujeto al impuesto de papel sellado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 260, Ser. 4ª.

2ª. **Contrato reconocido**—La prueba de las modificaciones á un contrato reconocido es á cargo del que afirma su existencia.—Jur. Com., tom. 5, pág. 209, Serie 4ª.

1ª. **Contrato de renta vitalicia**—No se encuentra comprendido entre las pensiones que la ley declara no embargables.—Jur. Com., tom. 8, pág. 316, Ser. 4ª.

1. **Contrato rescindido**—La rescisión del contrato como objeto de la acción, solo procede si espresamente se estipuló.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 362, Ser. 3ª.

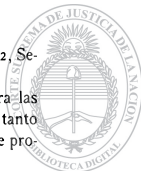
Contrato rescindido—Véase: *Construcción*, núm. 1.

1ª. **Contrato de seguro**—Estipulado el arbitraje, deben serles sometidas todas las cuestiones que espresamente

2ª—De acuerdo con la jur. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Prueba de un contrato*, núm. 1.

1ª—La prescripción del art. 2076 del Cód. Civil, se refiere á las pensiones que se acuerdan por alimentos—art. 604 del Cód. de Proc.—ó á las que vota el cuerpo legislativo, entre las cuales no puede confundirse el contrato de renta vitalicia á que se refiere el art. 2070, citado. Aun aquellas pensiones son embargables con las limitaciones prescriptas por el art. 481 del Cód. de Proc., cuyo Cód. es de fecha posterior al Civ. y es ley de la Nación con arreglo á lo dispuesto por art. 318 de la Ley Org. de los Tribs. Si se sustentara la teoría afirmada de contrario sería amparar el fraude y la simulación, pues á los deudores les bastaría celebrar un contrato de renta vitalicia, por el cual harían desaparecer sus bienes burlando á sus acreedores.

1ª—De acuerdo con el principio general sentado en el art. 1197 del Cód. Civ.



no estén esceptuadas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 252, Serie 4^a.

2. **Contrato de seguro**—La póliza de es ley para las partes que intervienen en el contrato de seguros, en tanto no se opongan á las leyes en cláusulas espresamente prohibidas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 53, Ser. 4^a.

3. **Contrato de seguro**—La declaración de ser propietario del terreno, careciendo de título, y aun cuando el acto sea revocable, no importa la falsedad ó reticencia que la ley requiere para declarar la nulidad del contrato de seguro, si el asegurado tenía boleto privado de fecha anterior.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

4. **Contrato de seguro**—El dictamen pericial es esencial para la apreciación de la reticencia alegada por el asegurador, como fundamento de la nulidad del contrato de seguro.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

5. **Contrato de seguro**—El recibo de las cuotas de un contrato de seguro, que por los estatutos adolece de nulidad, no importa reconocerle validez.—Jur. Com., tom. 10, pág. 425, Ser. 4^a.

6. **Contrato de seguro**—Justificado que un agente de la compañía aseguradora recibió aviso del siniestro, la ley considera llenado este requisito del contrato, como si fuera la gerencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Serie 4^a.

1. **Contrato de sociedad**—La validez ó nulidad de las

2—Véase: verb. *Cláusulas*, núm. 1.

3—Véase la nota del verb. *Agente de seguros*, núm. 1.

4—Véase: *Contrato de seguro*, núm. 4.

5—Véase la nota del verb. *Compañía de seguros*, núm. 1.

6—Véase: *Agente de seguros*, núm. 1.

1—Cualquiera que sea la validez ó nulidad de las estipulaciones contenidas en un contrato con relación á las disposiciones legales, la



cláusulas que contenga el contrato de sociedad, no impiden su inscripción en el Registro Público de Comercio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 128, Ser. 4ª.

2. **Contrato de sociedad**—La inscripción de una razón social en el Registro Público de Comercio, solo puede hacerse en vista del respectivo contrato en que consta su existencia.—Jur. Com., tom. 4, pág. 247, Ser. 4ª.

3. **Contrato de sociedad**—Para que proceda la acción entre socios por operaciones verificadas, no es necesaria la presentación del contrato de sociedad.—Jur. Com., tom. 4, pág. 220, Ser. 4ª.

4. **Contrato de sociedad**—El otorgamiento del compromiso y la constitución del tribunal arbitral, deben llevarse á cabo con las formalidades de ley, siempre que se trate de caso de arbitraje forzoso y aun cuando en el contrato

inscripción en el Reg. de Com., no teniendo otro objeto que el prescripto en los arts. 41 y 296 del Cód. de Com., ninguna influencia puede tener para dar ó quitar dicha validez á cualquier cláusula impugnada; en tal caso, la inscripción del contrato no presenta en ese momento la oportunidad de discutir y decidir sobre la eficacia legal de tal estipulación; y ella solo llegará cuando se haga cuestión entre partes interesadas que funden sus respectivas pretensiones en dicha causa.

3—Esta resolución fué confirmatoria de otra del Dr. Peyret, quien sostuvo que, según lo dispuesto en el art. 296 del Cód. de Com., los socios se deben dar respectivamente cuenta, según las reglas del derecho común, de las operaciones que hayan hecho y las ganancias á pérdidas que hayan resultado, aun cuando la sociedad no constare por escrito. Tratándose de la liquidación de una sociedad, su existencia puede ser probada por todos los medios de prueba admitidos en materia comercial, según asimismo se expresa en la última parte del art. citado. Siendo así, no es de necesidad la presentación del contrato y su registro para que pueda progresar la acción entre socios, puesto que se trata del pasado en cuyo caso los socios se deben recíprocamente cuenta de las operaciones que hayan realizado.

4—Véase: *Arbitraje forzoso*, núm. 1.



social se haya convenido hacerlo estrajudicialmente.— Jur. Com., tom. 4, pág. 224, Ser. 4^a.

5. **Contrato de sociedad**—Para deducir acción á nombre de una sociedad, no es indispensable la presentación del contrato social.— Jur. Com., tom. 5, pág. 136, Serie 4^a.

6. **Contrato de sociedad**—El que reconoció la existencia de la sociedad contratando con ella, no puede excepcionar de falta de personería por no acompañarse el contrato social al exigirsele el cumplimiento de sus obligaciones.— Jur. Com., tomo 9, pág. 297, Ser. 4^a.

7. **Contrato de sociedad**—La sociedad es responsable por las obligaciones suscritas con la firma social, siempre que por el contrato el socio tuviera poder de usarla y la operación hubiese sido facultada por el contrato.— Jur. Com., tom. 10, pág. 138, Ser. 4^a.

8. **Contrato de sociedad**—La existencia de sociedad puede ser probada por los terceros por hechos que la hagan verosímil, aun cuando no puedan presentar el contrato y los presuntos socios desconozcan su existencia.— Jur. Civ., tom. 8, pág. 203, Ser. 3^a.

9. **Contrato de sociedad**—La existencia de principio de prueba escrita, hace admisible la testimonial para justificar la existencia de un contrato de sociedad convenido verbalmente.— Jur. Civ., tom. 8, pág. 248, Serie 3^a.

5—Se opuso la excepción de defecto legal fundado en el hecho de no acompañarse el contrato, resolviéndose el caso de acuerdo con lo establecido en el núm. 10.

6—Véanse los núms. 4 y 10.

8—Arts. 400, Cód. de Com., y 1664 y 1665 del Cód. Civ.

9—Art. 1662, Cód. Civ. Este caso puede verse en el verb. *Comunidad de intereses*, núm. 1.



10. **Contrato de sociedad**—Aun cuando se justifique la existencia de un contrato de sociedad, no puede declararse la comunidad de intereses, en tanto no resulte espresamente probada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 248, Serie 3ª.

11. **Contrato de sociedad**—Estipulado en el contrato social que las diferencias entre los socios deben ser dirimidas por árbitros-arbitradores, es obligatoria la formación del Tribunal.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 295, Serie 3ª.

12. **Contrato de sociedad**—Justificada la existencia de un contrato de sociedad, el socio administrador debe rendir cuenta de su administración, en tanto no justifique que judicialmente ó por mutuo consentimiento quedó sin efecto el convenio.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 333, Serie 3ª.

13ª. **Contrato de sociedad**—Procede la anotación del contrato de sociedad en el Registro Público de Comercio, aun cuando no se hayan matriculado como comerciantes sus miembros.—Jur. Com., tom. 10, pág. 218, Ser. 4ª.

13^b. **Contrato de sociedad**—El Ministerio Fiscal es parte obligada en los expedientes sobre inscripción de con-

10—Véase: verb. *Comunidad de intereses*, núm. 1.

11—Véase: *Árbitros-arbitradores*, núm. 7.

13ª—Véase: verb. *Comerciante*, núm. 10.

13^b—La intervención fiscal en la inscripción en el Reg. de Com., de un contrato social, procede en todos los casos, desde que la inscripción es un acto jurídico destinado á dar existencia pública y personalidad legal á la sociedad objeto del contrato; acto jurídico que puede tener en general ó en particular cláusulas que afecten al interés público, y que por consiguiente adolezcan de una nulidad absoluta, como ser un contrato cuyo objeto fuera prohibido por las leyes. En esos casos es de ley la intervención fiscal—arts. 1047 del Cód. Civ., y 117 de la Ley Orgánica de los Tribunales.



tratos de sociedad.—Jur. Com., tom. 7, pág. 349, Serie 4^a.

14. Contrato de sociedad—El hecho de no acompañarlo con la demanda, no constituye un defecto legal.—Jur. Com., tom. 4, pág. 220, Ser. 4.^a

Contrato de sociedad—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 12.

1. Contrato á título oneroso—La confesión del mandatario reconociendo haber aceptado el mandato sin intención de lucro, hace innecesaria la resolución de si el contrato era á título oneroso ó gratuito.—Jur. Civ., tom. 9, página 5, Ser. 3.

1^a. Contrato de transporte—La falta de entrega en la debida oportunidad y en el lugar del destino, de los objetos que fundaron el contrato de transporte obliga á la empresa á la devolución del precio cobrado por flete.—Jur. Com., tom. 3, pág. 150, Ser. 4^a.

2. Contrato de transporte—Reconocida la existencia del contrato de transporte, el cargador debe ser condenado al pago de los fletes—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Ser. 4^a.

14—Esta excepción solo procede cuando se han violado las reglas que el art. 71 del Cód. de Proc. prescribe para la demanda, como lo enseña la común doctrina de los autores—Malaver, curso de Proc., Jud., núm. 629; y Manresa y Reus, Ley de Enj. Civ., tom. 2^o, pág. 115.—La falta de cumplimiento á lo dispuesto en el art. 72 relativa á los documentos que el actor debe acompañar con la demanda, no constituye excepción dilatoria ni puede dar lugar á otra cosa que á su no admisión cuando se pretenda presentarlos con posterioridad—art. 73—pues tanto valdría formar artículo previo sobre la no presentación de cualquier otro medio de prueba, lo que es inadmisibile, como lo tiene establecido la jurisprudencia de la S. C. N.—Fallos, Ser. 2^a, tom. 16, pág. 169, y tomo 21, pág. 268 y 44.

1^a—Arts. 162, 165, 167, y 171 del Cód. de Com.

2—Art. 200 del Cód. de Com.



3. **Contrato de transporte**—La empresa que contrata el transporte es la única responsable de la entrega en el punto convenido, sin perjuicio de las responsabilidades en que con respecto á ella incurran otras empresas cuyas vías tenga necesidad de usar para el cumplimiento del contrato de transporte.—Jur. Com., tom. 9, pág. 37, Ser. 4^a.

Contrato de transporte—Véase: *Daños y perjuicios*, número 4.—*Contrato de transporte*, núm. 3.

1. **Contrato verbal**—Para que la existencia del contrato verbal de compraventa se declare comprobada, debe justificarse que existió acuerdo de voluntad sobre el fondo y la forma.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 278, Ser. 3^a.

2. **Contrato verbal**—Justificada la existencia del contrato verbal de compraventa de un inmueble, existe la obligación de hacer escritura pública.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 294, Ser. 3^a.

3. **Contrato verbal**—Justificada la existencia del contrato verbal de compraventa, el demandado debe ser condenado á otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 343, Ser. 3^a.

Contrato verbal—*Contrato de sociedad*, núm. 9.

1^a. **Contribución directa**—La tasación administrativa para el pago de la contribución directa, no llena las condiciones que la ley civil exige para la venta de los bienes de menores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 237, Ser. 3^a.

Contribución directa—Véase: *Acto posesorio*, núm. 1.

1^b. **Convenciones**—Por las cuales las empresas se liber-

3^a—Art. 171 del Cód. de Com.

2—Véase el núm. siguiente.

3^b—Véase: *Contrato de compraventa*, núms. 16 y 17.

1^a—Véase: *Bienes de menores*, núm. 3.

1^b—Véase la nota del verb. *Accidentes*, núm. 1.



tan de toda responsabilidad por el material destinado al servicio recíproco, no pueden ser opuestas á terceros que no han tomado parte en esas convenciones.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3ª.

1^b. **Convenciones**—Reconocida la existencia de un saldo, las convenciones que puedan modificarlo, ó las condiciones del pago, deben ser justificadas por el obligado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 209, Ser. 4ª.

1. **Convenio**—Las escepciones no justificadas espresamente, no pueden considerarse virtualmente comprendidas en el convenio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Serie 3ª.

Convenio—Véase: *Martillero*, núm. 2—*Concordato*, número 1—*Letra de cambio*, núm. 17—*Contrato de sociedad*, núm. 12.

1^c. **Convenios**—Declarada la quiebra, el fallido solo puede hacer convenios con sus acreedores en la oportunidad y forma en que determina el Código.—Jur. Com., tom. 8, pág. 317, Ser. 4ª.

1^d. **Cónyuge supérstite**—El impuesto de sello debe recaer sobre los bienes transmitidos por herencia; los que corresponden al cónyuge supérstite por su parte de gananciales, no pueden ser gravados con el impuesto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 119, Ser. 4ª.

2. **Cónyuge supérstite**—Al cónyuge superstite que pre-

1^c—Véase: *Contrato entre acreedores*, núm. 2.

1^d—Véase: *Bienes hereditarios*, núm. 1.

2—El cónyuge sobreviviente pidió que los padres de la esposa muerta, fuesen citados por edictos, no habiendo comparecido solicitó se diese intervención al Defensor de Ausentes, hecho lo cual pretendió se hiciese la declaratoria correspondiente á su favor, á lo que no se hizo lugar porque el hecho de haber pedido el esposo su citación por edictos y de haber solicitado que por dichas personas se dé intervención al Defensor de ausentes, hace presumir que esas personas viven, pues



tende la herencia, corresponde la prueba de la inexistencia de herederos forzosos.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 395, Ser. 3^a.

1^a. Cooperación—Siempre que preceda á la ejecución del crimen, confabulación, conspiración ó cooperación, existirá complot.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 89, Ser. 4^a.

1^b. Copias—Deben ser desglosados y devueltos los documentos acompañados á la contestación á la demanda, si no se presenta copia.—Jur. Com., tom. 2, pág. 177, Ser. 4^a.

2. Copias—El término para evacuar el traslado, solo si así no fuese, no correspondería la citación y nombramiento de defensor. Para que un cónyuge sea declarado único y universal heredero del otro, es necesario que se pruebe que el fallecido no ha dejado ninguno de los parientes á quienes la ley llama á concurrir á la herencia con el cónyuge supérstite. ¿Quién ha de producir esa prueba? Indudablemente el cónyuge sobreviviente, que es á quien intereza el hecho. Si no tiene medios para probarlo, por mayor que sea su perjuicio, debe soportarlo, como soportaría los mayores aun que podrían resultarle si no pudiera probar que era tal cónyuge. No ha de torcerse el orden natural de las cosas exigiéndose como en este caso se exigía, que se nombrase un defensor á los presuntos padres para que probase el parentesco, y que en caso de no hacerlo se declare único heredero al cónyuge, pues la falta de prueba, lo único que induciría es que acaso no sean padres los indicados como tales, pero en manera alguna que la esposa fallecida no los tuviera ó que éstos hubieran muerto.

1^a—Véase: verb. *Complot*, núm. 1.

1^b—Este caso es muy especial, pues se trata de una jurisprud. establecida por la Cám. de lo Com., pero resuelta en 1^a Inst. por un juez de lo Civil, habiendo pasado el expediente á aquel Trib. por recusación de la Cám. Civ. La Cám. Com. tiene establecida constantemente la jur. sentada en el sumario, mientras que la de lo civil observa una práctica contraria á la ley, pero de acuerdo con su falta absoluta de criterio cuando la aplica á los casos prácticos. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Copia*, núm. 1; *Rebeldía*, núm. 1; *Escrito*, núms. 3, 4 y 5; tom. 4^o, verb. *Copias*, núm. 1.

2—De acuerdo con la jur. Véase: verb. *Rebeldía*, núm. 1, Inst., tomo 5^o.



corre desde la entrega de las copias, aun cuando la parte se haya notificado con fecha anterior.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 107, Ser. 3ª.

Copias—Véase: *Contrato original*, núm. 1—*Demanda*, núm. 7—*Documento privado*, núm. 2.

1. **Copias entregadas**—No procede la rebeldía, si las copias entregadas corresponden á otro espediente.—Jur. Com., tom. 7, pág. 83, Ser. 4ª.

Copias equivocadas—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 3.

Correccional—Véase: *Jurisdicción correccional*, núm. 1.

1ª. **Corredor**—La prohibición que el Código de Comercio impone al corredor, de tomar sobre sí la responsabilidad de las operaciones que le han sido encomendadas, no le inhibe de repetir las sumas pagadas; el perdimiento del oficio es la única penalidad aplicable.—Jur. Com., tom. 4, pág. 98, Ser. 4ª.

2. **Corredor**—No es obligatoria la venta en remate de los títulos ó acciones dadas en prenda; puede verificarse por intermedio de un corredor en la Bolsa de Comercio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 132, Ser. 4ª.

3. **Corredor**—La comisión de venta en remate, de títulos en la Bolsa, debe fijarse en el medio por ciento si lo efectúa un corredor.—Jur. Com., tom. 8, pág. 119, Serie 4ª.

4. **Corredor**—Reconocido que la operación verificada entre corredores, con ó sin comitentes, se resolvía con el pago de las diferencias, debe rechazarse la acción en

1ª—Véase la nota al verb. *Comitente*, núm. 2.

2—Véase: *Acciones embargadas*, núm. 2.

3—Véase: *Comisión del martillero*, núm. 6.

4—Véase: *Contrato entre corredores*, núm. 1.



que se exija el cumplimiento como contrato de compra-venta.—Jur. Com., tom. 8, pág. 202, Ser. 4^a.

5. Corredor—De Bolsa, la falta de entrega por el corredor de Bolsa, de las diferencias que el juego produzca en beneficio de su mandante, no puede fundar una acusación por defraudación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 158, Ser. 4^a.

Corredor—Véase: *Comitente*, núms. 1 y 2.

Correo—Véase: *Escepción de caducidad*, núm. 5.

Correspondencia—Véase: *Contrato nuevo*, núm. 1 —*Contrato perfecto*, núm. 1.

Cosa ajena—Véase: *Hurto*, núm. 5.

1^a. Cosa comprada—Los frutos civiles de la cosa comprada—arrendamientos—solo corresponden al comprador desde la fecha en que se hizo la tradición; el vendedor tiene derecho al cobro de los vencidos, aun cuando el comprador reuna el carácter de arrendatario.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 62, Ser. 3^a.

1^b. Cosa juzgada—El rechazo de oficio y sin sustanciación de la acusación por injuria, no hace cosa juzgada: el querellante puede iniciar acción por calumnia fundada en los mismos hechos.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 143, Ser. 4^a.

2. Cosa juzgada—Consentida ó confirmada la sentencia que no resuelve sobre el pago de intereses, debe ser desechada la acción que por medio de otro juicio pretenda modificar la cosa juzgada.—Jur. Com., tom. 5, página 269, Ser. 4^a.

3. Cosa juzgada—El auto que concede ó deniega la es-

5—Art. 80 del Cód. de Com.

1^a—Véase: verb. *Arrendamiento*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 9.

3—El art. 395 del Cód. de Proc. Crim., dispone que el auto que decreta ó deniegue la escarcelación puede ser reformado de oficio ó á petición de parte, durante todo el curso de la causa.



carcelación bajo fianza, no hace cosa juzgada.-- Jur. Criminal, tom. 7, pág. 356, Ser. 4^a.

4. Cosa juzgada—Revocado el embargo preventivo, importa atentar á la cosa juzgada, si el Inferior lo dicta sin nuevos antecedentes.--Jur. Crim., tom. 8, pág. 148, Ser. 4^a.

5. Cosa juzgada—El denunciante tiene derecho para apelar de todos los autos dictados, en la fecha que asuma el carácter de acusador, pues para él no hacen cosa juzgada. -- Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

4—El Dr. Peyret había decretado un embargo preventivo, siendo revocado el auto por la Cám. Devuelto el expediente volvió á decretarlo con los mismos antecedentes, siendo revocado nuevamente en estos términos: «Todas las constancias de estos autos y de los acompañados, fueron tomadas en consideración por este Tribunal, cuando dictó el auto anterior del expediente agregado, por el cual revocó el de 1^a Inst. en que, á solicitud del ejecutante se había decretado un embargo preventivo contra el deudor. Que devueltos los autos al Juzgado de su procedencia, el Juez *a quo*, decretó nuevamente embargo preventivo, de cuyo auto se ha reclamado. Que para que fuera procedente este nuevo embargo así decretado, era indispensable que se hubiesen aducido nuevos documentos ó antecedentes no conocidos por esta Cám. al dictar su auto por el cual mandaba levantar el embargo, revocando el auto que lo había ordenado anteriormente. Que examinando el escrito, en el cual nuevamente se pidió el embargo, resulta que se ha invocado: primero el testimonio de protesto, como justificativo de la existencia de un pagaré, y el reconocimiento de la autenticidad de ese pagaré hecho por el deudor al contestar la demanda, por lo que se pretende que es de aplicarse el inc. 2^o del art. 443 del Cód. de Proc., y en segundo lugar, la presunción favorable á la demanda que se supone existir, lo que justificaría la aplicación del art. 448 del mismo Cód. Que según resulta del auto apelado, el Juzgado solo ha tenido en consideración el primer punto. Que tanto el testimonio del protesto, como la contestación á la demanda estaban agregados á los autos cuando fueron traídos á este Tribunal, quien tomó conocimiento de ellos, y en seguida dictó el auto; por lo cual no ha podido decretarse nuevamente el embargo, contradiciendo la cosa juzgada por esta Cámara.»

5—Véase: verb. *Acusador*, núm. 1.



6. Cosa juzgada—El rechazo por falta de prueba de

6—No hay cosa juzgada, cuando la Cámara resuelve una escepción dilatoria, jamás tiene otro efecto que el de suspender la entrada al juicio, mientras no se llenen los requisitos que la ley exige en el art. 84 del Cód. de Prrc., ó cuando alguna de las calidades invocadas no estuviesen claramente definidas. Esta es la opinión uniforme de los prácticos, consagrada por la jurisprudencia de nuestros tribunales, como puede verse entre otros casos, el que corre publicado en el tomo 7º, pág. 454, Ser. 2ª. Caravantes, en el tom. 2º, pág. 85, núm. 603, dice: «Las escepciones dilatorias son como indica el verbo *difere*, las que dilatan ó diferien el ingreso de la acción en el juicio, pero no la extinguen ni la escluyen del todo, por lo que se llaman también temporales.» Reus, en el tom. 1º, pág. 406, dice, que las escepciones «dilatorias son las que tienen por objeto dilatar ó impedir temporalmente la entrada en el pleito.» Y más adelante agrega: «Las escepciones dilatorias no se refieren al fondo del asunto, y las perentorias sí. La alegación de las primeras suscita una cuestión que si por su carácter y naturaleza suspende la tramitación del pleito, no por eso deja de ser incidental, y la alegación y prueba de las segundas lleva consigo y envuelve la resolución del negocio en el fondo, la destrucción, en suma, del derecho del demandante.» De acuerdo con la opinión de los autores está la ley 9ª, tit. 3, Part. 3ª, que dice así: «Defiéndense los demandados á las vegadas de las demandas que les fazen, poniendo defensiones ante sí, que son de tal natura que aluengan el pleito é non lo rematan. E llamanlas en latin dilatorias, que quiere tanto decir como alongadoras.» Resulta de lo espuesto, que la escepción dilatoria, no puede jamás tener por resultado cerrar las puertas á toda petición que tenga por objeto finalizar el juicio, pues dicha escepción, como dilatoria que es, ni puede tener más alcance que el de diferir la entrada en el juicio. Ahora bien, ¿puede oponerse la escepción de cosa juzgada en un caso semejante? Evidentemente que no. La Cám. de lo Civil, en el tom. 7º, pág. 454, Ser. 2ª, ha dicho: «La sentencia que declara procedente la escepción de falta de personería en el juicio informativo no hace cosa juzgada, aun cuando haya sido opuesta y resulte como perentoria, ni aun habiendo consentido la providencia que fijaba un término para justificarla. El Juez de 1ª Inst. al fundar su resolución, decía lo siguiente: «3º Que si bien al dictarse la sentencia referida, era exacto que los demandantes no habian justificado el parentesco que invocaban respecto á la causante, esa omisión ha sido subsanada con los documentos exhibidos al instaurar la demanda que motivó este ju-



la escepción de falta de personería fundada en el fallecimiento del mandante, no hace cosa juzgada si con posterioridad se justifica el hecho.—Jur. Com., tom. 10, página 197, Ser. 4^a.

7. *Cosa juzgada*—En juicios de jurisdicción voluntaria, las resoluciones sobre peticiones potestativas, no hacen cosa juzgada.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 73, Ser. 3^a.

Cosa juzgada—Véase: *Juez exhortado*, núm. 1.

Cosa vendida—Véase: *Comp^{ra}*, núm. 5.

1. *Costas*—El ejecutante debe ser condenado en costas

cio.» En la recordada sentencia y en la pág. 462 del tom. citado, decía el Dr. Cortés, al evacuar la vista que le fué conferida en su carácter de Fiscal de las Cámaras: «En el nuevo juicio, que han entablado los Pérez, niegan sinembargo la procedencia de la escepción deducida de cosa juzgada; sosteniendo que el desconocimiento de su personería por el juez en el juicio anterior solo importaba la resolución sobre una escepción dilatoria, y cuyo efecto no podía ser otro que postergar la secuela de aquél hasta tanto que ese defecto se subsanara, como ha sucedido ahora por los documentos nuevamente producidos.» Para complementar esta argumentación se puede citar un párrafo de la vista fiscal del Dr. Cortés, e-pedida en la misma causa, donde dice en la pág. 462 del fallo citado: «Aunque los Pérez dedujeron efectivamente acción de nulidad contra el testamento de la finada Ramos de Garmendia, en la cual la acción bien puede considerarse como demanda de falsedad; y no obstante que aquélla fué rechazada, habiéndolo sido solamente por falta de personería en los demandantes, esa resolución no producía cosa juzgada en cuanto al fondo de la cuestión; importaba solo un aplazamiento, y consideraba íntegro el derecho de los reclamantes para deducirla de nuevo, una vez acreditada la personería.» La ley 19, tit. 32, Part. 3^a, establece que hay cosa juzgada cuando: «No gran fuerza el *afinado* juyzio que da el juez por entre las partes derechamente, de que non se alce ninguna dellas; que dende adelante son tenudos sus contendores de actor por el.» La frase «*afinado juyzio*» que se da «*derechamente*», quiere decir que solo en las sentencias definitivas hay cosa juzgada, mas no así en las interlocutorias que jamás constentan derechamente la demanda cuando se oponen escepciones dilatorias.

1.-Las costas causadas por el ejecutado, son hechas á causa de la ejecución iniciada, y por lo tanto por culpa del actor.



siempre que resulte improcedente su acción, cualquiera que sea el estado del juicio.—Jur. Com., tom. 1, página 250, Ser. 4^a.

2. **Costas**—La confirmación con costas y consiguiente regulación, solo puede referirse al vencedor, aun cuando por error se consignen en la sentencia los nombres del abogado y procurador del vencido.—Jur. Com., tom. 1, página 268, Ser. 4^a.

3. **Costas**—Procede la absolución del demandado con especial condenación en costas al demandante si se declara improbadamente la acción.—Jur. Com., tomo 1, pág. 341, Serie 4^a.

4. **Costas**—No son de cargo del deudor los honorarios y costas siempre que se verifica el pago antes de librarse mandamiento.—Jur. Com., tom. 1, pág. 412, Serie 4^a.

5. **Costas**—Son á cargo del demandante que denunció el domicilio del demandado, siempre que se justifique ser falso.—Jur. Com., tom. 2, pág. 110, Ser. 4^a.

6. **Costas**—Del incidente sobre consignación, son de cargo del ejecutado si son rechazadas las excepciones.—Jur. Com., tom. 2, pág. 111, Ser. 4^a.

7. **Costas**—La procedencia de la excepción de incompetencia, hace ineludible la condenación en costas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 145, Ser. 4^a.

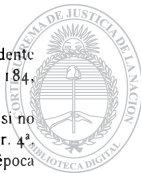
2—Véase: verb. *Confirmación*, núm. 1.

3—Art. 221 del Cód. de Proc.

4—Arts. 471 y 483 del Cód. de Proc.

5—Art. 77, inc. 3^o del Cód. de Proc.

6—Por la sentencia de trance y remate se declararon las costas á cargo de la parte que impugnó la consignación, por cuya causa no hay duda al respecto, pues las costas de la consignación estaban comprendidas en la sentencia. Además el principio sentado en el sumario está de acuerdo con lo preceptuado en el art. 760 del Cód. Civ.



8. **Costas**—La rebeldía del demandado hace procedente su condenación en costas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 184, Ser. 4^a.

9. **Costas**—Puede exonerarse de ellas al vencido, si no existe temeridad.—Jur. Com., tom. 2, pág. 200, Ser. 4^a.

10. **Costas**—De la verificación, después de la época fijada, son á cargo del acreedor, aun cuando el crédito sea privilegiado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 230, Ser. 4^a.

11. **Costas**—Siendo la posesión de muebles presunción de propiedad, el ejecutante que pidió el embargo no debe ser condenado en las costas de la tercería.—Jur. Com., tom. 2, pág. 384, Ser. 4^a.

12. **Costas**—El sobreseimiento de la acusación hace ineludible la condenación en costas al acusador.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 209, Ser. 4^a.

13. **Costas**—Debe ser condenado en ellas el acusador

8—Cuando el demandado no contesta la demanda ni produce prueba alguna, demuestra con esta actitud que no ha tenido razón probable para litigar, debiendo en consecuencia aplicársele la disposición general del art. 221 del Cód. de Proc.

9—Art. 221, inc. 2º del Cód. de Proc.

10—El acreedor fué moroso en la presentación de su crédito; siendo de estricta aplicación el art. 1458 del Cód. de Com. Cuando el crédito es posterior al acto de la verificación como si se tratase de alquileres devengados durante la tramitación del concurso, el acreedor no debe pagar las costas, porque no hay doctrina que le sea aplicable.

11—La naturaleza de estos bienes y la circunstancia de estar ellos en poder del ejecutado, constituyen suficiente mérito para exonerar al ejecutante del pago de las costas en el juicio de tercería, desde que ha podido legalmente presumir que los bienes embargados son del que los posee, por cuanto la posesión de bienes muebles hace presumir la propiedad de los mismos en favor del poseedor.

12—Las costas serán á cargo de la parte vencida en el juicio ó en el incidente, dice el art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

13—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim. Se presume que el que desiste ha procedido con temeridad por carecer de acción. A este res-



que desiste de la querella.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 226. Ser 4^a.

14. **Costas**—El desistimiento del juicio trae aparejada la obligación de abonarlas.—Jur. Com., tom. 3, página 269, Ser. 4^a.

15. **Costas**—Las costas son á cargo del ejecutante si reconoce la procedencia de la tercera.—Jur. Com., tomo 4, pág. 225, Ser. 4^a.

16. **Costas**—No procede la condenación en costas al concurso, aun cuando se verifique el crédito objetado.—Jur. Com., tom. 4, pág. 231, Ser. 4^a.

17. **Costas**—El nombramiento de oficio excluye toda temeridad y hace procedente la exoneración de las costas.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 107, Ser. 4^a.

18. **Costas**—El escribano del tribunal no está obligado á la devolución del expediente, en tanto no se hayan repuesto los sellos y pagado las costas.—Jur. Com., tom. 5, pág. 119, Ser. 4^a.

19. **Costas**—El desistimiento de la acción hace procedente su imposición.—Jur. Com., tom. 5, pág. 125, Serie 4^a.

...
pecto hay jurisprudencia contradictoria. Véase Inst., tom. 5^o, verb. *Costas*, núm. 37.

14—Véase el núm. precedente.

15—El embargo se trabó en algunos muebles, por denuncia del ejecutante. Tanto éste como el ejecutado reconocieron que los muebles eran de propiedad del tercerista y pidieron se levantara el embargo. Fué condenado en costas el ejecutante, teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 221 del Cód. de Proc., y 903 del Cód. Civ. Sin embargo, si los bienes embargados, estaban en posesión del ejecutado, no procede la condenación en costas, porque el art. 478 del Cód. Civ. faculta al acreedor á embargarlos.

16—No es procedente su imposición desde que todo acreedor debe justificar la existencia de su crédito.

19—Véase el núm. 13.



20. **Costas**—El que ha sostenido la validez de las actuaciones nulas, carece de personería para pedir la condena en costas al juez y la multa al secretario.—Jur. Com., tom. 5, pág. 166, Ser. 4ª.

21. **Costas**—En las cuestiones de derecho procede la exoneración de las costas á la parte vencida.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 170, Ser. 4ª.

22. **Costas**—El dinero encontrado en poder del reo y depositado como de su pertenencia responde á las costas del juicio, aun cuando no haya sido embargado en la debida oportunidad.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 419, Serie. 4ª.

23. **Costas**—El ejecutante no debe ser condenado en las costas de las tercerías si no estaba obligado á conocer los hechos que le dieron origen.—Jur. Com., tom. 5, pág. 421, Ser. 4ª.

24. **Costas**—El acreedor que recibió de buena fe objetos en pago de su crédito, no debe ser condenado en las costas del juicio iniciado por el concurso para su devolución.—Jur. Com., tom. 6, pág. 155, Ser. 4ª.

25. **Costas**—Es facultativo del Juzgado exonerar de las costas al vencido si no existe evidente temeridad.—Jur. Com., tom. 6, pág. 209, Ser. 4ª.

26. **Costas**—Las costas del juicio ejecutivo son á carga del vencido.—Jur. Com., tom. 6, pág. 228, Ser. 4ª.

20—Véase: *Actuaciones nulas*, núm. 2.

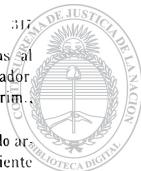
21—De acuerdo con la jurisprudencia y en contra de la ley y de la lógica. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Costas*, núm. 3.

22—El dinero fué depositado á las resultas del juicio y pago de costas procesales á que fué condenado el reo.

24—Véase: verb. *Concurso*, núm. 1.

25—Art. 221 del Cód. de Proc.

26—Art. 307 del Cód. de Proc.



27. **Costas**—Procede el sobreseimiento con costas al querellante si la defraudación imputada al procurador y depositario judicial no resulta justificada.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 268, Ser. 4^a.

28. **Costas**—El escribano secretario de un laudo arbitral, no tiene derecho de retención sobre el expediente hasta tanto se le paguen las costas.—Jur. Crim., tomo 6, pág. 274, Ser. 4^a.

29. **Costas**—El vencido debe ser condenado al pago de las costas si no tuvo razón derecha para litigar.—Jur. Com., tom. 7, pág. 157, Ser. 4^a.

30. **Costas**—Retractada la injuria, procede se archive la querella con costas al acusado.—Jur. Crim. tom. 7, página 360, Ser. 4^a.

31. **Costas**—En materia criminal las costas son en todos los casos de cargo del vencido. —Jur. Crim., tom. 8, pág. 148, Ser. 4^a.

32. **Costas**—El tercero que para evitar el embargo de bienes propios, denunciados como del ejecutado, deposita una suma a nombre propio, tiene derecho a exigir su devolución y debe serle acordada, pero si deduce tercera debe ser rechazada con costas. —Jur. Com., tom. 8, pág. 69, Ser. 4^a.

33. **Costas**—Procede la condenación en costas al ejecutante si conocía que los bienes embargados no eran

27—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

28—La Cámara ordenó la entrega del expediente sin perjuicio de que el Juzgado ordenase en seguida la reposición de sellos y quedando a salvo las acciones del Escribano.

29—Art. 221 del Cód. de Proc.

30—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

31—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

32—Véase: *Bienes propios*, núm. 1.



de propiedad del ejecutado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 301, Ser. 4^a.

34. **Costas**—La consignación hecha antes del requerimiento judicial, exime al deudor del pago de las costas, pero no de los intereses y gastos del protesto.—Jur. Com., tom. 8, pág. 133, Ser. 4^a.

35. **Costas**—No es procedente la condenación en costas si el pago se verifica antes de diligenciarse el mandamiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 298, Ser. 4^a.

36. **Costas**—La falta de prueba del demandante, hace procedente el rechazo de la acción con especial condenación en costas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 22, Serie 4^a.

37. **Costas**—Justificado el derecho de tercerista corresponde la condenación en costas al ejecutante.—Jur. Com., tom. 9, pág. 199, Ser. 4^a.

37^b. **Costas**—Procede su imposición cuando la demanda es totalmente rechazada.—Jur. Com., tom. 9, pág. 361, Ser. 4^a.

38. **Costas**—Consignada en pago la suma ordenada por la sentencia, las costas posteriores no son de cuenta del ejecutado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 249, Ser. 4^a.

39. **Costas**—Las demandas del síndico, fundadas en los libros del concurso no pueden calificarse de teme-

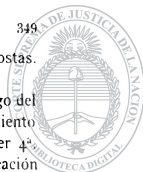
34—Véase: verb. *Consignación*, núm. 4.

35—Art. 483 del Cód. de Proc.

36—Art. 221 del Cód. de Proc.

37^b—La Cámara dijo, que ésta era razón bastante para su imposición.

38—No es aplicable en este caso la disposición del art. 483 del Código de Proc. Civ., desde que el depósito de la suma cuyo pago ordenó la sentencia fué hecha por el vencido, sin mediar requerimiento de pago.



rarias, por lo que no procede la condenación en costas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 250, Ser. 4ª.

40. **Costas**—Del embargo preventivo, son á cargo del deudor, aun cuando pague antes de librarse mandamiento en la ejecución.—Jur. Com., tom. 10, pág. 209, Ser. 4ª.

41. **Costas**—Comprobado el crédito cuya justificación se pide, pero no su monto, procede el juramento estimatorio, más las costas son de cuenta del acreedor.—Jur. Com., tom. 10, pág. 217, Ser. 4ª.

42. **Costas**—No procede la condenación en costas al litigante que tuvo razón evidente para seguir el juicio.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 48, Ser. 3ª.

43. **Costas**—Procede la condenación en costas si se rechaza la escepción deducida por ser temeraria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 125, Ser. 3ª.

44. **Costas**—La discusión de un punto de derecho permite á los tribunales exonerar de las costas al vencido.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 34, Ser. 3ª.

45. **Costas**—El silencio de los árbitros sobre la cuestión costas, importa que deben pagarse en el orden causado, y no produce la nulidad del laudo.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 100, Ser. 3ª.

46. **Costas**—Si no existe temeridad, procede la exoneración de las costas al vencido.—Jur. Civ., tom. 9, página 199, Ser. 3ª.

40—Si bien es cierto que no pesa sobre el deudor la obligación de pagar las costas, cuando verifica el pago antes de que se haga el requerimiento prevenido por el art. 471 del Cód. de Proc., pero también lo es que las costas causadas para solicitar y obtener un embargo preventivo antes de entablar ejecución, entran en la categoría de las diligencias conservatorias del derecho del acreedor, motivadas por no haberse pagado la obligación á su vencimiento y haberla dejado protestar.

44—De acuerdo con el núm. 21.

45 —Véase: verb. *Árbitros*, núm. 5.



47. **Costas**—El pariente denunciante de irregularidades del tutor, no debe ser responsabilizado por las costas, en tanto no resulte que procedió con evidente temeridad y mala fe.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 416, Ser. 3ª.

48. **Costas**—Debe eximirse de las costas al vencido si resulta que se movió sin temeridad ni mala fe.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 29, Ser. 3ª.

49. **Costas**—No procede la condenación en costas si de autos resulta que el demandado fué inducido en error en virtud de hechos en los cuales no tuvo intervención.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 305, Ser. 3ª.

50. **Costas**—La omisión del Juzgado sobre el punto relativo á las costas del juicio, produce la nulidad de la sentencia si las partes habían propuesto la cuestión.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 337, Ser. 3ª.

51. **Costas**—Es improcedente la ejecución por honorarios contra el mandatario, aun cuando resulte que él los percibió de la parte condenada en costas.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 384, Ser. 3ª.

50—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc.

51—El auto ejecutoriado de una regulación de honorarios, si bien tiene por la ley aparejada ejecución, esto es así y debe entenderse únicamente contra la persona en cuya representación ó defensa se han devengado los honorarios, pero de ninguna manera contra terceras personas á quienes el acreedor pretenda responsabilizar por el pago de su crédito. El hecho de que el mandatario en su carácter de tal, haya percibido en la ejecución el importe de esos honorarios, no lo hace pasible de la acción ejecutiva; si el ejecutante cree tener derecho á reclamar esos honorarios directa y personalmente, ese apoderado podrá hacerlo en juicio ordinario, pero sin derecho, en caso de tenerlo, no puede ejercitarlo ejecutivamente. Aquí se trataba de cobrar honorarios devengados por un apoderado que renunció y á quien se le regularon dichos honorarios, siendo éstos cobrados por el apoderado que le sucedió en la representación. Este último percibió como apoderado y á nombre de su mandante: no puede ser perseguido personalmente por otro que no sea su representado.



Costas—Véase: *Incompetencia*, núm. 1—*Excepción de pago*, núms. 4 y 7—*Bienes muebles*, núm. 2—*Consignación en pago*, núm. 2—*Deudor solidario*, núm. 1—*Escriturario*, núms. 1 y 3—*Excepción de incompetencia*, número 10—*Mandatario*, núm. 4—*Liquidación*, núm. 1.

1ª. Cotejo—Pericial, las firmas de un expediente pericial se conceptúan auténticas y pueden servir de base para el cotejo pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

2. Cotejo—Los documentos privados cuya autenticidad es discutida, no pueden servir para el cotejo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

Cotejo—Véase: *Documento privado*, núm. 1.

1ª. Crédito—El pago del crédito en que se fundó la declaración de quiebra, no basta para dejarla sin efecto.—Jur. Com., tom. 9, pág. 286, Ser. 4ª.

Crédito—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 2—*Buque*, núm. 1—*Embargo*, núm. 5—*Graduación de créditos*, núm. 1—*Honorarios*, núm. 6—*Deudor solidario*, número 1—*Concurso*, núm. 1—*Cesión de créditos*, núm. 1—*Inhibición*, núms. 8 y 9—*Autenticidad*, núm. 1.

1ª. Crédito bancario—La prenda, para garantizar un crédito bancario, puede y debe ser entregada al acreedor prendario desde que se haga uso del crédito, sin que el término fijado al deudor para la devolución del préstamo, pueda influir en el derecho á garantirse.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 347, Ser. 4ª.

Crédito objetado—Véase: *Costas*, núm. 16.

1ª—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 2.

2—Art. 147 del Cód. de Proc.

1ª—De acuerdo con los principios sentados en la nota del verb. *Concordato*, núm. 1.

1ª—Véase: *Acreedor prendario*, núm. 2.



Crédito privilegiado—Véase: *Costas*, núm. 10.

1^a. **Créditos verificados**—En junta de calificación no pueden ser desconocidos con posterioridad por los acreedores—Jur. Com., tom. 1, pág. 190, Ser. 4^a.

2^a. **Créditos verificados**—Justificado el crédito cuya verificación se pide, pero no su monto, procede el juramento estimatorio, más las costas son de cuenta del acreedor.—Jur. Com., tom. 10, pág. 217, Ser. 4^a.

Criminalidad del acto—Véase: *Prisión preventiva*, número 3.

1^b. **Cuasi-contrato**—Trabado por la contestación á la demanda, el desistimiento del actor, de la acción deducida y la petición de otros pronunciamientos, importa el término del litigio y obliga al Juzgado á la sustanciación de la nueva demanda.—Jur. Civ., tom 8, pág. 339, Serie 3^a.

Cuasi-contrato—Véase: *Contrato*, núm. 6.

Cuasi-delito—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 17.

Cuenta—Véase: *Compulsa*, núms. 5 y 8—*Demanda*, número 2—*Poder general*, núm. 3—*Honorarios*, núm. 16—*Chancelación*, núm. 3.

1^c. **Cuenta acompañada**—La forma de la cuenta acompañada no puede alterar ó modificar lo espuesto en el escrito de demanda.—Jur. Com., tom. 5, pág. 85, Ser. 4^a.

2^b. **Cuentas acompañadas**—Presentada á los jueces para su cobro cualquiera que sea su origen, están sujetas al im-

1^a—Art. 1450 del Cód. de Com.

2^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 41.

1^b—Véase: *Acción desistida*, núm. 1.

1^c—Debe estarse siempre á los términos espresos y categóricos de la acción deducida.

2^b—«Las cuentas, tengan ó no el conforme del deudor estarán sujetas al impuesto de sellos, según los casos, en el acto de su presentaci-



puesto de papel sellado. —Jur. Com., tom. 5, pág. 396, Serie 4^a.

1. **Cuenta corriente**—El saldo de una cuenta corriente puede ser notificado judicialmente al deudor á fin de fijar el término que la ley establece para su impugnación. —Jur. Com., tom. 9, pág. 339, Ser. 4^a.

2. **Cuenta corriente** -Las cuentas corrientes no observadas dentro del término que la ley fija, se tienen por reconocidas. —Jur. Com., tom. 10, pág. 275, Serie 4^a.

Cuenta corriente—Véase: *Excepción de prescripción*, número 2 —*Compulsa*, núm. 2

ción ó cobro ante los jueces ó autoridades correspondientes.» Esto dispone el art. 8º de la Ley de sellos vigente en 1893, artículo general y estensivo á toda clase de cuentas que se presenten á cobrar. La ley no distingue las cuentas según su origen ó procedencia, ni según su naturaleza, porque tal distinción no solo sería imposible sino atentatoria á todo derecho.

1—La persona que se halla en cuenta corriente con un Banco, está obligada á manifestar por escrito, dentro de cinco días, su conformidad ó disconformidad con la que le pase el Banco, bajo apercibimiento de tenerse por reconocida la cuenta en la forma presentada y de ser sus saldos deudores ó acreedores definitivos en la fecha de la cuenta —art. 793 del Cód. de Com.—Los saldos definitivos de las cuentas corrientes confieren acción ejecutiva contra sus deudores, y por consiguiente la medida indicada respecto á la conformidad, se halla implícitamente autorizada, ya por el citado art. 793 del Cód. de Com., ya por el 466 del Cód. de Proc., que permite preparar la vía ejecutiva, pidiendo previamente que sean reconocidos *los documentos* que por sí solos no traen aparejada ejecución, ya en fin, por el principio general contenido en los arts. 496 y 497 del Cód. Civ., desde que la manifestación de voluntad por escrito y en un término dado es una obligación que nace de la ley contra la persona que se halle en cuenta corriente con un Banco, y obligación cuya inejecución por parte del deudor lo sujeta á las responsabilidades y consecuencias que el art. 793 citado determina, en concordancia con el principio genérico del art. 919 del Cód. Civ.

2—Véase nota precedente.



1^a. **Cuenta detallada**—La cuenta que no detalla las mercaderías, hace procedente la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda.—Jur. Com., tomo 9, pág. 247, Ser. 4^a.

Cuenta particionaria—Véase: *Juicio verbal*, núm. 1.

1. **Cuenta pasada**—Reconocida la autenticidad de una cuenta pasada, así como el hecho de haberla firmado un dependiente de comercio, sus constancias forman prueba plena de las condiciones de la operación.—Jur. Com., tom. 4, pág. 28, Ser. 4^a.

Cuerda separada—Véase: *Alquiler*, núm. 3.

Cuerpo del delito—Véase: *Falsificación de un documento*, núm. 1.

Cuestión propuesta—Véase: *Costas*, núm. 50.

1^b. **Cuestión deducida**—Debe ser declarada la nulidad de la sentencia que no contiene decisión positiva y precisa sobre la cuestión deducida en la demanda, aun cuando con ulterioridad no haya sido materia de discusión.—Jur. Com., tom. 8, pág. 405, Ser. 4^a.

1^c. **Cuestiones**—Si entre las cuestiones sometidas al arbitraje no se comprendió la clase de moneda en que debía verificarse el pago, se entiende que debe hacerse en la moneda especial estipulada en el contrato, aun cuando el árbitro la convierta á moneda nacional.—Jur. Civ., tomo 12, pág. 347, Ser. 3^a.

Cuestiones—Véase: *Contrato de seguro*, núm. 1—*Tribunal arbitral*, núm. 5—*Acto civil*, núm. 3—*Delito*, número 23—*Arbitros*, núm. 11—*Arrendamiento*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 13.

1^d. De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5^a, verb. *Escepción de defecto legal*, núms. 21 y 22; *Detalle*, núm. 1.

1^b—Arts. 216 y 217 del Cód. de Proc.

1^c—Véase: verb. *Arbitros*, núm. 1.



Cuestiones de derecho—Véase: *Costas*, núm. 21.

Cuestiones determinadas—Véase: *Arbitros*, núm. 5.

1^a. Cuestiones prejudiciales—Solo son prejudiciales las cuestiones espresamente determinadas en el Cód. Civ.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 296, Ser. 4^a.

2. Cuestiones prejudiciales—La acusación de defraudación del mandante al mandatario, debe sustanciarse sin que por el Juzgado Civil se resuelva el litigio sobre rendición de cuentas, que no puede calificarse de cuestión prejudicial.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 173, Serie 4^a.

3. Cuestiones prejudiciales—La acusación sobre falsedad de un documento, no debe ser suspendida por la ejecución iniciada en juicio civil, pues no está comprendida en las cuestiones que la ley enumera.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

1^b. Cuestiones propuestas—La omisión de los árbitros en resolver alguna de las cuestiones propuestas, no puede fundar la nulidad que la ley permite cuando resuelvan cuestiones que no les fueron sometidas.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 100, Ser. 3^a.

1. Cuestiones entre socios—Las cuestiones entre socios no pueden ser resueltas ante la jurisdicción criminal.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

Culpa—Véase: *Lesiones*, núm. 7—*Coautores*, núm. 1—*Acto ilícito*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 35.

1^a—Art. 104 del Cód. Civ.

2—Art. 1104 del Cód. Civ., y 31, inc. 10, Cód. de Proc. Crim. Es regla sancionada por la doctrina, que la jurisdicción criminal es competente para juzgar de la ejecución de un contrato, cuando ha servido para la comisión de un delito—Chaveau Adolphe, tom. 5^o, núm. 2305.

3—Véase: *Acusación sobre falsedad*, núm. 1.

1^b—Véase: *Arbitros arbitradores*, núm. 4.



Culpabilidad—Véase: *Absolución del reo*, núm. 1—*Presunciones*, núm. 2—*Daños y perjuicios*, núm. 18.

Culpable—Véase: *Delito*, núm. 1.

Cultos—Véase: *Disparidad de cultos*, núm. 1.

Cuota amortizante—Véase: *Excepción de incompetencia*, núm. 14.

1^a. **Cuotas**—El recibo de las cuotas de un contrato de seguro, que por los estatutos adolece de nulidad, no importa reconocerle validez.—Jur. Com., tom. 10, página 425, Ser. 4^a.

Cuotas—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, número 18.

1. **Cupones al portador**—Es improcedente la reivindicación de títulos ó cupones al portador, si el desposeído delictuosamente no ha llenado los requisitos que exige el Cód. de Com.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 376, Ser. 4^a.

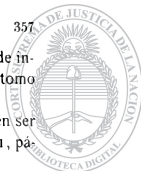
1^b. **Curador**—Carece de personería para intervenir en la testamentaria el curador especial de un heredero ausente nombrado por un tribunal extranjero.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 3^a.

2. **Curador**—Los honorarios del curador provisorio son á cargo del denunciado como insano, aun cuando se

1^a—Véase: la nota del verb. *Compañía de seguros*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Ausente*, núm. 1.

2—Interpuesta la solicitud de demencia, dice el art. 147, Cód. Civ., debe nombrarse para el demandado como demente, un curador provisorio que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. Los jueces proceden en estos casos soberanamente, como que ejercitan una alta facultad que les confiere en términos absolutos la ley. Uno de nuestros comentadores, Llerena, sobre el artículo citado observa, que cuando la denuncia viene de los parientes, no es conveniente que se nombre el curador de entre ellos, pues hay el peligro de una explotación en tal caso conviene más nombrar un extraño; por lo menos el Juez deberá tomar muchas precauciones sobre esto.



haya resuelto la improcedencia de la declaratoria de incapacidad, por ser una mujer casada.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 413, Ser. 3ª.

3. Curador—Los tutores ó curadores solo pueden ser suspendidos en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 11, página 250, Ser. 3ª.

1. Custodia—La distracción de objetos que el procesado tenía bajo su custodia, aun sin ánimo de apropiárselos, importa una defraudación.—Jur. Crim., tom. 4, página 187, Ser. 4ª.

La representación y defensa del incapaz es tanto más respetable cuanto le viene de la ley, sin que pueda menoscabarla la consideración de que no haya prosperado la denuncia, ó se haya declarado importuna ó improcedente la petición de insania. Sería una incoherencia, según Freitas—de quien ha tomado el codificador el precepto—admitir al demandado como alienado, á defenderse á sí mismo, y *como puede suceder que la denuncia no proceda*, se le da la representación de un curador provisorio—nota al art. 86 de su proyecto de Código.—La naturaleza de las funciones que desempeña el curador y los motivos determinantes de la curatela, hacen evidente la procedencia de sus gestiones. Su intervención es por otra parte necesaria á la propia sustanciación del mismo juicio de insania y á la validez de sus procedimientos. Fuera de que es á virtud de un mandato judicial que se ejercita la defensa del insano y de la que no podría prescindirse sin violación manifiesta de las reglas que el derecho establece en garantía y protección de los incapaces, en cuyo interés y beneficio ha sido principalmente instituida la curaduría provisorio.

3.—La separación ó suspensión de los tutores ó curadores es una medida que por la índole de los derechos que lesiona y por su mismo carácter extraordinario, no debe ser decretada sin juicio contradictorio, sino en casos constatados de gravedad, ó cuando pudiera sobrevenir con la continuación de su ejercicio un daño positivo é inmediato á la persona ó á los bienes de los incapaces.



1^a. **Chancelación**—El dador de una carta de crédito con depósito en garantía, debe aplicarlo á su chancelación en la fecha que el portador haya hecho uso de ella.—Jur. Com., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

2. **Chancelación**—Si de los recibos del demandante resulta una suma mayor de la que cobra, se conceptúa chancelada la deuda, aun cuando del informe pericial resulte que las fechas han sido escritas en distinta época que el cuerpo del documento.—Jur. Civ., tom. 9, página 272, Ser. 3^a.

3. **Chancelación**—El recibo por saldo, importa la chancelación de la cuenta hasta esa fecha.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 272, Ser. 3^a.

4. **Chancelación**—De una hipoteca importa, la del préstamo con que estaba garantida, y en consecuencia la nueva hipoteca importa una novación.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 344, Ser. 3^a.

1^b. **Cheque**—Por giro de dinero, debe llevar estampilla aun cuando no se reciba el importe.—Jur. Com., tom. 5, pág. 409, Ser. 4^a.

1^a—Véase: *Carta de crédito*, núm. 1.

4—Este caso está comprendido en la nota á los verb. *Banco de la Prov.*, núm. 1, y *Bienes de deudores*, núm. 1.

1^b—Art. 16 de la Ley de Pap. Sellado de 1893.

2. **Cheque**—El apoderamiento del cheque aun cuando no se consigan los fondos, importa la consumación de la estafa: el acto no puede calificarse como tentativa.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 196, Ser. 4ª.

2—Aunque el procesado no haya conseguido el fin último que se propuso, que era la defraudación del dinero, obtuvo sin embargo la entrega del cheque, es decir, de un documento al portador, representativo del dinero y cuyo cobro podía realizarse en el acto por cualquier persona—arts. 798 y siguientes del Cód. de Com.—Por lo tanto, no puede decirse que en este caso se trate de una simple tentativa, es decir, de la manifestación de la resolución de cometer un delito—art. 8º, Cód. Pen.—que es para lo que el Cód. disminuye las penas—art. 12—ó exime de ellas—arts. 9 y 10.—El delito queda consumado por el apoderamiento del cheque, y aunque se frustrase la intención del agente, de recibir el dinero, sería siempre de aplicación el art. 13 del Cód. Si no se ha defraudado dinero se ha operado la defraudación de un cheque, y cuánto vale un cheque? la misma suma que él representa cuando el que lo emite tiene fondos en el Banco sobre el cual lo gira, como sucedía en el caso que nos ocupa. Cuando el engaño ha producido su efecto inmediato con la obediencia prestada por parte de la persona engañada, no debe esperarse el lucro efectivo del culpable para considerar consumado el delito—Carrara, tom. IV, § 2339; véase también a Morin, Repertoire du Droit Criminal, verb. Excroquerie, núm. 20.





1^a. Dación en pago—Procede la nulidad de la dación en pago si perjudica los intereses de otros acreedores aun cuando no exista dolo ni fraude.—Jur. Com., tom. 6, página 155, Ser. 4^a.

1^b. Dador de una carta de crédito—Con depósito en garantía, debe aplicarlo a su cancelación en la fecha que el portador haya hecho uso de ella.—Jur. Com., tomo 9, pág. 415, Ser. 4^a.

Dádivas— Véase: *Confesión retractada*, núm. 1.

1. Damnificado—Para que pueda declararse la existencia de robo, debe justificarse la preexistencia de los objetos que se dicen apropiados por el reo; el juramento del damnificado no es prueba bastante si existen motivos fundados para dudar de su imparcialidad.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 25, Ser. 4^a.

2. Damnificado—No procede la indemnización de daños y perjuicios, si el accidente solo puede ser el resul-

1^a—El acto había tenido lugar en una época anterior a la efectiva cesación de pagos, en cuyo caso la dación en pago no tiene ningún valor—arts. 1408 y 1409, inc. 3^o del Cód. de Com.

1^a—Véase: *Carta de crédito*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Accidentes*, núm. 3.



tado de la imprudencia del damnificado.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 174, Ser. 3ª.

Damnificado — Véase: *Abuso de confianza*, núm. 1—*Defraudación*, núms. 8 y 33—*Fractura*, núm. 1—*Objetos robados*, núm. 4—*Daños y perjuicios*, núm. 17.

1ª. **Daños y perjuicios** —Las empresas de ferrocarriles son responsables de los sobrevenidos á los pasajeros por accidentes acaecidos durante el transporte, en tanto no justifiquen su inculpabilidad.—Jur. Com., tom. 2, página 374, Ser. 4ª.

2. **Daños y perjuicios**—Al demandante corresponde la prueba de que efectivamente existió el hecho en que funda su acción.—Jur. Com., tom. 3, pág. 288, Ser. 4ª.

3. **Daños y perjuicios** --La falta de justificación del valor del animal estraviado y de los daños y perjuicios ocasionados, hace procedente su justiprecio por peritos dentro del que particularmente le hubiera reconocido el actor antes de iniciar la acción.—Jur. Com., tom. 3, pág. 359, Ser. 4ª.

4. **Daños y perjuicios**—El término de la prescripción de las acciones por daños y perjuicios provenientes de un delito, no es aplicable cuando la misma acción se funda en la falta de cumplimiento de un contrato de transporte —Jur. Com., tom. 3, pág. 359, Ser. 4ª.

5. **Daños y perjuicios** --La falta de cumplimiento del con-

1ª—En cuanto á que son responsables por los accidentes, puede verse el verb. *Accidentes*. La prueba de inculpabilidad corresponde á la empresa de acuerdo con lo dispuesto en el art. 184 del Cód. de Com.

2—Siendo el hecho fundamental de la demanda, su prueba corresponde al que se base en él.—Ley 1ª, tít. 14, Part. 3ª.

3—Arts. 162 del Cód. de Com., y 220 del Cód. de Proc.

4—Por consiguiente no puede aplicarse el art. 4037 del Cód. Civ.

5—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 4.



trato de compraventa hace pasible á la parte culpable de los daños y perjuicios que su incumplimiento cause.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 4^a.

6. **Daños y perjuicios**—Por la falta de cumplimiento de un contrato de compraventa, consisten en el lucro que cesa para la parte que tenia obligación de dar la cosa ó prestación materia del contrato.—Jur. Com., tom. 4, pág. 366, Ser. 4^a.

7. **Daños y perjuicios**—Correponde al reclamante, por la demora en la entrega de las mercaderías transportadas, justificarlos plenamente.—Jur. Com., tom. 5, página 230, Ser. 4^a.

8. **Daños y perjuicios**—La falta de cumplimiento á una obligación de no hacer, hace pasible al autor, de los daños y perjuicios que cause.—Jur. Com., tom. 6, página 400, Ser. 4^a.

9. **Daños y perjuicios**—Demandados por cantidad determinada, la falta de prueba sobre ese punto hace improcedente la acción, aun cuando se justifique el derecho á exigirlos.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 400, Ser. 4^a.

10. **Daños y perjuicios**—Los arreglos sobre daños causados por un delito, importan la renuncia de las acciones criminales.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 75, Ser. 4^a.

11. **Daños y perjuicios**—La responsabilidad que la ley

6—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 5.

7—Véase la nota al verb. *Bultos*, núm. 1.

8—Art. 309 del Cód. Civ.

9—La acción de daños y perjuicios mencionada, formada por parte de la demanda deducida: el actor debe producir la prueba que le corresponda para acreditar sus asertos, si no lo hace, no debe aplicarse lo dispuesto en el art. 219 del Cód. Proc.

10—Véase: *Acción criminal*, núm. 2.

11—Arts. 273 y 1114 del Cód. Civ. No es de aplicarse el art. 425 del Cód. de Proc. Crim.



impone á los padres por los daños causados por sus hijos menores, solo puede hacerse efectiva cuando habiten con ellos y estén bajo su poder. —Jur. Crim., tom. 7, página 351, Ser. 4^a.

12. Daños y perjuicios —El vendedor puede obligar al comprador á la revisación de las mercaderías antes de verificar la entrega, y su negativa sin esa formalidad previa, no puede fundar una acción por daños y perjuicios. —Jur. Com., tom. 9, pág. 361, Ser. 4^a.

13. Daños y perjuicios —Justificada la existencia del mandato verbal, si el acto para el cual se confirió re-

12—Véase: *Comprador de mercaderías*, núm. 2.

13—El mandato es uno de los contratos consensuales que se perfecciona por el solo consentimiento, es decir, que subsiste y tiene todo vigor por el mutuo acuerdo, produciendo en su consecuencia todos sus efectos sin necesidad del instrumento público ó privado que lo acredite: y de aquí nace, sin duda, el que pueda darse por carta y también verbalmente, como está consagrado espresamente por el Cód. Civ. en su art. 1873. Por consiguiente, establecido que el mandato puede darse verbalmente y surtir todos sus efectos legales, hay que averiguar si él fué dado efectivamente. Pero se observa que tratándose de un mandato que tiene por objeto un acto redactado ó que deba redactarse en escritura pública, debe ser hecho en esa forma bajo pena de nulidad: y si bien esto es de espreso derecho, dada la prescripción del art. 1184, inc. 7^a, del mismo Cód. Civ., no lo es menos que debe considerarse subsistente, y juzgado el contrato como una obligación de hacer en el sentido de que una de las partes podrá ser demandada por la otra para que otorgue la escritura pública respectiva, bajo pena de resolverse la obligación en el pago de pérdidas é intereses, como lo dispone especialmente el art. 1188-Troplong, tratando del contrato de compraventa, en la pág. 25, tom. 1^a, después de establecer que puede ser hecho por un acto auténtico ó privadamente, y que la redacción por escrito no es sino una facultad dejada á las partes, dice: que la escritura no es requerida sino para la prueba, y que cuando la venta es confesada, ninguna de ellas puede negarse á ejecutarla. No hay escepción, agrega, á esto, sino cuando se ha convenido como condición suspensiva del consentimiento, que el acto sería redactado por escrito y la escritura no le ha dado aun



quería bajo pena de nulidad la escritura pública, el mandante debe ser condenado á reducir dicho mandato á instrumento público, bajo pena de ser responsable de los daños y perjuicios que cause su falta de cumplimiento á esta obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Ser. 3^a.

14. **Daños y perjuicios**—Justificada la responsabilidad de la empresa, debe ser condenada al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 58, Ser. 3^a.

su perfección. Toullier, tratando del mismo punto, establece, que es un principio incontestable el que el solo consentimiento basta para la perfección de los contratos consensuales, y que no es necesario redactarlos por escrito, á menos que las partes, contratan una venta por ejemplo, ó una convención, no se hayan espresamente convenido en redactar un acto ante un notario con intención de que el contrato no sería perfecto y concluido, sino cuando hubiere recibido su forma entera y legal, porque entonces, aunque conformes desde un principio sobre todos los puntos, cada parte puede desdecirse hasta la perfección del acto. La razón de esto, que es conforme á la dicisión de una ley romana, ley 17, repetida en las Institutas en el tit. de *emptio et vendita*, la razón de esto, dice, es que las partes contratantes lo han querido así y que les está permitido hacer depender la obligación de la condición que quieran. Más adelante, de acuerdo con la doctrina de Pothier, continúa diciendo: pero la convención de que será pasado esto ante notario, no hace depender de este acto la perfección del contrato; es preciso que aparezca claramente que la intención de las partes, al hacer esta convención, ha sido hacer depender su obligación de la perfección del acto—Toullier, tom. 4^o, pág. 135—Esta doctrina de los autores, citada por el doctor Vélez y que pueden decirse el comentario del art. 1186, justifica que el contrato ó mandato de que se trata, si bien tiene por ley indicada una forma determinada, debe, sinembargo, considerarse concluido á los efectos indicados por los autores, con arreglo á las prescripciones del art. 1188.

14—Y aunque el damnificado no justifique la culpa de la empresa, porque esta responsabilidad se presume siempre que exista el daño. Véase el núm. 1.



15. **Daños y perjuicios**—Las empresas de ferrocarriles son responsables de los daños y perjuicios causados a los pasajeros por accidentes debidos a su negligencia, aun cuando no puedan ser calificados como delitos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3ª.

16. **Daños y perjuicios**—No procede indemnización de daños y perjuicios si el accidente solo fuese el resultado de la imprudencia del damnificado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 174, Ser. 3ª.

17. **Daños y perjuicios**—La prescripción de la acción de daños y perjuicios provenientes de un cuasi-delito, se opera por el transcurso de un año, para los que pueden libremente accionar, pero el término no corre para los menores damnificados por el accidente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 214, Ser. 3ª.

18. **Daños y perjuicios**—Justificada la culpabilidad de los empleados de la empresa, debe ésta ser condenada al pago de los daños y perjuicios causados por el accidente.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 214, Ser. 3ª.

19. **Daños y perjuicios**—El sublocatario que sin avisar al locatario, y sin intervención judicial, contrata con un tercero nueva locación, carece de derecho para reclamar daños y perjuicios fundados en la resolución de un contrato cuyo cumplimiento no ha exigido judicialmente.—Jur. Civil, tom. 8, pág. 291, Ser. 3ª.

15—Véase: verb. *Accidentes*, núm. 2.

16—Véase: *Accidentes*, núm. 3.

17—Arts. 4038 y 3966 del Cód. Civ.

18—Arts. 1078, 1083, 1109, 1113 y 1122 del Cód. Civ. Ley Nac. de 18 de Set. de 1872, art. 53. Reg. de Ferrocarriles de la Prov. del B. Aires de 1880, art. 94. Y aunque no se comprueba la culpabilidad de la empresa, pues de acuerdo con lo dispuesto en el art. 184 de Cód. de Com., es ésta la que debe comprobar su inculpabilidad.

19—Véase *Contrato de arrendamiento*, núm. 3.



20. **Daños y perjuicios**—Declarada por sentencias ejecutoriadas la existencia del mandato, cualquiera que sea su forma, ellas bastan para probar la irresponsabilidad del mandatario por los daños y perjuicios irrogados á terceros.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 316, Ser. 3^a.

21. **Daños y perjuicios**—La acción de daños y perjuicios fundada en un acto ilícito se prescribe por el transcurso de un año.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 421, Ser. 3^a.

22. **Daños y perjuicios**—Si el inhibido al llevar á cabo el acto en que funda la acción de daños y perjuicios, tenía conocimiento de la inhibición, debe ser desechada la demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 421, Ser. 3^a.

23. **Daños y perjuicios**—El derecho del locatario se circunscribe á retirar las mejoras si así se hubiese estipulado, pero no puede obligar al propietario á su pago, ni tampoco al pago de daños y perjuicios por los deterioros que cause el uso del nuevo arrendatario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 413, Ser. 3^a.

24. **Daños y perjuicios**—Justificada la existencia de daños y perjuicios y el derecho á la indemnización, corresponde el juramento estimatorio.—Jur. Civ., tom. 9, página 233, Ser. 3^a.

20—De acuerdo con la doctrina contenida en los arts. 1929 y siguientes del Cód. Civ.

21—Art. 4037 del Cód. Civ.

22—El inhibido contrajo la obligación de otorgar escritura pública de enajenación de derechos y acciones, sabiendo de que no podía cumplirla mientras no se levantase la inhibición. Los daños y perjuicios que ese hecho le irroguen no puede imputarlos al que pidió y obtuvo la inhibición sino á sí mismo, puesto que solo él sería el culpable de haber contraído una obligación que tenía imposibilidad de cumplir—arts. 903 y 904 del Cód. Civ.

23—Arts. 1620 y 1621 del Cód. Civ.

24—Art. 220 del Cód. de Proc.



25. **Daños y perjuicios**—Justificada la existencia de daños y perjuicios, pero no su monto, corresponde el juramento estimatorio dentro de la cantidad que fijen los tribunales.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 287, Ser. 3ª.

26. **Daños y perjuicios**—Declarada la improcedencia del embargo preventivo, el que careciendo de derecho lo obtuvo, es responsable de los daños y perjuicios causados.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 287, Ser. 3ª.

27. **Daños y perjuicios**—Es improcedente la acción de daños y perjuicios fundada en la falta de cumplimiento de una obligación de hacer, en tanto judicialmente no se haya exigido el otorgamiento de la escritura pública, si para la validez del contrato era ineludible.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 404, Ser. 3ª.

28. **Daños y perjuicios**—Si bien el condómino tiene derecho para reconstruir la pared medianera, sin indemnización, debe ser condenado al pago de los daños y perjuicios causados por la omisión de medidas tendentes á evitar un accidente en la propiedad lindera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 428, Ser. 3ª.

29. **Daños y perjuicios**—El lindero que por temor al derrumbe se ve obligado al desalojo de la propiedad, solo puede reclamar como daños y perjuicios el valor de la locación durante el tiempo que dure la reconstrucción de la pared medianera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 428, Ser. 3ª.

30. **Daños y perjuicios**—Para que un acto ilícito que no puede calificarse como delito aporte responsabilidad

25—Véase el número precedente.

26—Véase: Inst., tom. 5ª, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 4.

27—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 20.

28—Véase: *Condómino*, núm. 3.

29—Arts. 2626 y 2733 del Cód. Civ.

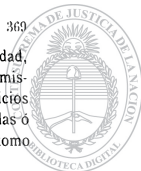
30—Véase: *Acto ilícito*, núm. 1.

por daños y perjuicios, debe justificarse que el autor tiene la culpa ó por lo menos procedió con negligencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 304, Ser. 3ª.

31. Daños y perjuicios—El propietario colindante pue-

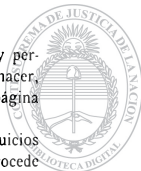
31.—La obligación de reconstruir la pared á costa del que la demolió y de indemnizar al vecino los daños y gastos que se le irrogaren con ese motivo, es incontestable. No se trataba de simples molestias causadas al propietario, ni de la privación del goce de la cosa, que por graves que sean y á menos de comprobarse la existencia de la culpa, no son reparables, según la doctrina de los arts. 2626 y 2733 del Cód. Civ. Pero el espíritu de las disposiciones contenidas en los dos artículos citados no alcanza á los perjuicios materiales que haya sufrido el vecino, si bien la reparación debe limitarse á los daños que sean consecuencia inmediata de la ejecución de las obras. Segovia, sobre el art. 2733, dice lacónicamente. . . . «pero puede reclamar los perjuicios efectivos. . . .» y á su vez Llerena, con la doctrina de los comentadores franceses que espone minuciosamente, llega á la misma conclusión, observando que el que construye una pared «debe hacer á su costa los gastos necesarios para dejar la parte que dá á su vecino en el mismo estado en que estaba antes, ó indemnizar lo que tenga que gastar el vecino para dejarla en ese estado.» Los embarazos momentáneos procedentes de la reconstrucción no son reparables por cuanto el propietario que alza el muro ejercita un derecho propio acordado por la ley sin restricciones y en términos amplios—art. 2626—fuera de que tales embarazos deben considerarse, según doctrina, como una carga ordinaria de la comunidad. Pero la misma razón que excluye responsabilidades positivas en los casos enunciados, la impone cuando se constata la presencia de un daño material efectivo, que lesiona directamente el patrimonio de la persona, porque este daño no es ya una consecuencia del ejercicio de aquel derecho, que tiene su límite legal donde comienza el derecho del vecino ó comunero y cuyo resarcimiento obedece á principios de otro orden. La oscuridad de nuestra legislación, no autoriza sin embargo la impunidad del perjuicio, si su reparación en el silencio de la ley vigente lo sancionaran otras leyes análogas, y en defecto de éstas los principios generales del derecho—art. 16, Cód. citado.—Nuestro Cód. se ha inspirado en esta materia en la letra del Cód. de Napoleón y en la doctrina de sus espositores. Pero aquel Cód. adolece sobre el particular de deficiencias más sensibles que el Cód. Argentino, aunque su glosa sea abundante. Y aunque ciertamente discrepen los





de reconstruir los muros medianeros sin responsabilidad, pero no solo está obligado á dejar la pared en el mismo estado, sino que debe abonar los daños y perjuicios que resulten innecesarios, ya sea por obras indebidas ó por negligencia de los constructores.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 330, Ser. 3ª.

autores, es de notarse que la divergencia recae principalmente sobre puntos que solo se rozan con el del sumario y sobre pasajes del antiguo derecho francés. Así, mientras Pothier con la opinión de Desgoutets rechaza toda especie de indemnización que tenga su fundamento en ganancias que haya dejado de percibir el vecino, por cuanto la ley, dice, solo obliga á pagar los gastos de reconstrucción—Société, § 215.—D'Arlicourt con la opinión de Goupis y más conformemente con los principios del derecho romano, juzga procedente aquella indemnización, exceptuando únicamente el caso en que las obras hubieren privado al propietario, no de un lucro, sino de simples entretenimientos ó comodidades—tom. 1º, pág. 560.—Estas formas de interpretación no han sido ajenas á los divulgadores del Cód., los cuales en su mayoría se muestran accesibles á la doctrina espuesta por la escuela de Pothier. Sobre la materia en discusión, aquí las opiniones se manifiestan más acordes y sin duda más en armonía con las reglas de justicia y equidad. Domolombe, enseña que el propietario que reconstruye el muro en su interés esclusivo, aunque no haya cometido falta, y haciendo por el contrario uso del derecho que la ley le confiere, es responsable para con su copropietario del daño que la reconstrucción puede ocasionarle—tom. 2º, pág. 461.—Durantón, tom. 5º, pág. 361, agrega: que el vecino tiene el derecho de exigir el restablecimiento de los enrejados, pabellones, chimeneas y demás objetos que se hallen arrimados al muro y que fué necesario destruir ó deteriorar para reconstruirlo, por cuanto no se hallaba obligado á soportar una operación practicada únicamente en interés de un copropietario. Estas opiniones la sostienen, entre otros autores que se han tenido á la vista, Toullier, tom. 2º, § 208; Aubry y Rau, tom. 2º, § 222; Mourlón, tom. 1º, pág. 875; y finalmente Dalloz, que piensa que si es permitido dudar mientras solo se trató del perjuicio que puede resultar del hecho de que el muro haya sido alzado, no sucedería lo mismo respecto de los deterioros que el alzamiento pueda ocasionar á las propiedades vecinas, pues en ese caso la duda no es posible, siendo evidente la obligación de reparar el perjuicio—1865, 2ª parte, nota 1ª.



32. **Daños y perjuicios**—El juicio sobre daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación de hacer, corresponde al juez en turno.—Jur. Civ., tom. 9, página 225, Ser. 3ª.

33. **Daños y perjuicios**—La acción de daños y perjuicios por falta de cumplimiento de un contrato, solo procede si el condenado no cumple la obligación de otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 343, Ser. 3ª.

34. **Daños y perjuicios**—Para la resolución de la ac-

33—Art. 1187 del Cód. Civ.

34—Se trataba de una acción de daños y perjuicios procedentes de un accidente producido por un coche de tranway que produjo la muerte de una criatura. Habiendo reconocido la empresa el hecho principal que motivaba la demanda, el debate giró exclusivamente sobre estos dos puntos, únicos controvertidos en el juicio: la culpabilidad del conductor del tranway, y el monto de la reparación pecuniaria que reclamaba el padre de la víctima. La sentencia de 1ª Inst. no hizo lugar, aunque con la calidad de «por ahora», á la demanda, y hasta tanto, decía, no se justificase la terminación definitiva del juicio criminal pendiente: el mismo pronunciamiento dejaba á salvo al demandante sus acciones para que bajo la base del fallo de los tribunales del crimen entablase en oportunidad las acciones que viere convenirle. La causa á que se refería el Inferior era la proseguida contra el cochero condenado ya en la primera instancia, y cuya causa iniciada de oficio la consideraba como sentencia prejudicial á la indemnización civil del perjuicio. El art. 1101 en que se apoyaba el pronunciamiento recurrido decía: Si la acción criminal hubiere precedido á la acción civil, ó fuese intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil antes de la condenación del acusado en el juicio criminal. . . . No puede aplicarse la letra de este artículo á este caso sin incurrir en un grave error. El demandado no era, con efecto, el autor del hecho acusado en el juicio criminal; lo era la Empresa á cuyo servicio se hallaba aquél como claramente lo dijo el actor. La culpabilidad de ésta, á los efectos previstos en el art. 1109 del Cód. citado, es independiente de la culpabilidad ó inculpabilidad del conductor; y de consiguiente el fallo que termine el proceso del último, ya lo condene, ya lo absuelva, en manera alguna puede influir en la demanda civil contra la Empresa, entre otras razones, porque no habiendo identidad de partes no la hay



ción civil de daños y perjuicios provenientes de un delito, no es necesario la resolución de la causa criminal á que el mismo hecho haya dado origen, si se acciona contra el tercero civilmente responsable.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 360, Ser. 3ª.

35. Daños y perjuicios —Para que la acción de daños

de responsabilidades. Tratándose del daño causado por una empresa de transportes y de fijar en juicio las consecuencias legales del mismo, una cosa es la responsabilidad directa del agente como sujeto de la acción pública, y otra la responsabilidad de aquélla como sujeto de la acción privada ó civil. Son dos responsabilidades que no es posible confundir, porque son fundamentalmente distintas en su esencia y en sus caracteres jurídicos. Y debe tenerse en cuenta que la ley no generaliza, limitando por el contrario la escepción á la persona misma del acusado; individualizándola hasta el punto de convenir— nota á los arts. 1102 y 1103—con aparente quebrantamiento de los requisitos que constituyen la cosa juzgada, que ésta existe, aunque la segunda acción no tenga el mismo fin que la primera, aunque el reclamante no sea el mismo, y aunque no haya ni identidad de objeto ni identidad de partes. No podría hacerse un argumento de la circunstancia, de que fuera de la pena corporal se impusiere al agente el pago de daños y perjuicios porque esta sanción no había sido reclamada por el demandante, el cual sería siempre extraño á ella y á la causa misma en que hubiera de serle infringida aquella pena. Ninguna vinculación jurídica, próxima ni remota tiene la empresa con las responsabilidades penales de su subordinado, y no sería por cierto arreglado á equidad que mientras estas no se solucionen en definitiva, quedase aquélla descartada y á cubierto de las consecuencias civiles en que por la comisión del hecho pudo haber incurrido. No hay principio de justicia que pueda sancionar esta conclusión, que entre otros resultados irritantes, nos daría este: que cuanto más grave fuera el hecho que dió origen al daño y cuanto mayor fuere la culpabilidad de su autor, mayores serían las dificultades legales para obtener su reparación en el juicio civil. La Cám. Civ. ha establecido antes de ahora idéntica doctrina —tom. 2º, Ser. 2º, pág. 99—y en la causa seguida por Dª. Manuela Rodríguez contra la empresa Lacroze—Boletín Judicial, núm. 1068.

35—El coche de un tranway se llevó por delante á un carruaje lastimando con el balancín á uno de los caballos. La Cám. al resolver lo



y perjuicios fundada en un accidente sea procedente, debe justificarse la culpa del actor.—Jur. Civ., tom. 9, página 370, Ser. 3^a.

Decisión—Véase: *Nulidad de Sentencia*, núms. 1, 5 y

9—*Sentencia definitiva*, núm. 1.

Decisión judicial—Véase: *Defraudación*, núm. 40.

Declaración—Véase: *Testigos*, núm. 1—*Absolución del reo*, núm. 1—*Adulteración de un documento*, núm. 2—*Acto ilícito*, núm. 3—*Aborto provocado*, núm. 2—*Simulación de un contrato*, núm. 4.

1^a. Declaración por carta—Es válida, si citados los testigos en forma comparecen á prestar declaración y con las formalidades de la ley reconocen el contenido y firma de las existentes en autos.—Jur. Civ., tom. 9, página 428, Ser. 3^a.

1^b. Declaración de coautores—No basta para justificar la culpabilidad de los que niegan en absoluto tener conocimiento ó participación en el delito; si no existe otra prueba, procede la absolución.—Jur. Crim., tom. 9, página 94, Ser. 4^a.

Declaración judicial—Véase: *Filiación natural*, núm. 2.

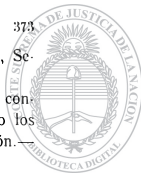
1^c. Declaración personal—El prefecto marítimo está obligado á prestar personalmente su declaración; no procede

que consigna el sumario dijo: «En esta situación, la demanda debió hacer uso de otros medios probatorios para acreditar que el hecho fué producido por culpa ó negligencia de la empresa, pues no teniendo el informe en cuestión más fundamento que el dicho del agente y el de Rivero, su fuerza probatoria no puede ser mayor que la que tendrían los testimonios de las mismas personas.» Este caso no cae bajo la sanción del artículo del Cód. de Com. que la Cámara ha aplicado en el núm. 1.

1^a—Véase: *Carta misiva*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Coautores*, núm. 1.

1^c—No le es aplicable el art. 290 del Cód. de Proc.



la excepción de la ley.—Jur. Com., tom 8, pág. 304, Serie 4^a.

1. **Declaración del reo**—Si el reo y la víctima están con-
testes, las declaraciones de los testigos en cuanto los
contradigan, no deben ser tenidos en consideración.—
Jur. Crim., tom. 2, pág. 299, Ser. 4^a.

2. **Declaración del reo**—Tendente á calificar el delito
por la intención que tuvo al cometerlo, deben ser estu-
diados en conjunto y no tomando frases aisladas al solo ob-
jeto de aumentar la intención criminal.—Jur. Crim., tomo
5, pág. 214, Ser. 4^a.

1^a. **Declaración de rufianes**—La del rufian ó alcahuete
forma prueba cuando son testigos necesarios, por haberse
cometido el delito entre gente de mal vivir.—Jur. Crim.,
tom. 5, pág. 353, Ser. 4^a.

1. **Declaraciones del testamento**—La esposa es parte en
en la testamentaria del marido, no obstante las declara-
ciones del testamento, en tanto no se declare en juicio
contradictorio su desheredación.—Jur. Civ., tom. 10, pá-
gina 95, Ser. 3^a.

1^b. **Declaración de testigos**—De dos testigos intachables
sobre las circunstancias de tiempo, hecho y lugar forman
prueba plena, aun cuando no hayan visto ambos iguales
detalles.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

2^a. **Declaración de testigos**—Si la de los testigos no
han tenido lugar dentro del término de prueba por cau-
sas no imputables á la parte, deben recibirse aun des-
pués de vencido.—Jur. Com., tom. 2, pág. 384, Ser. 4^a.

1^a—Véase: Inst., tom. 2^o, verb. *Declaraciones*, núm. 2, cuya nota estu-
dia el valor probatorio de los testigos con tacha.

1^b—Arts. 305 á 307 del Cód. de Proc. Crim. Ley 32, tit. 16, Par-
tida 3^a.

2^a—Art. 118 del Cód. de Proc. Civ.



3. **Declaración de testigos**—La declaración de testigos del plenario cuya existencia no consta en el sumario, no forman prueba bastante para invalidar las constancias de éste.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 274, Ser. 4ª.

4. **Declaración de testigos**—Siendo la tacha de acreedor ó deudor solo relativa, para que ella invalide la declaración ésta debe inspirarse en interés, afecto ú odio.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 168, Ser. 4ª.

5. **Declaración de testigos**—Las declaraciones de los testigos del sumario priman sobre los del plenario en caso de existir contradicción.—Jur. Crim., tom. 8, página 44, Ser. 4ª.

6. **Declaración de testigos**—El que presenta los testigos debe concurrir el día señalado; si los interrogatorios no fueron presentados, no debe fijarse nueva audiencia para las declaraciones.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 194, Ser. 4ª.

7. **Declaración de testigos**—No procede ampliación de las declaraciones prestadas por los testigos si se terminó el acto.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 228, Ser. 4ª.

8. **Declaración de testigos**—Las declaraciones de testi-

3—La prueba de testigos debe ser apreciada conforme á las reglas de la sana critica—art. 303 del Cód. de Proc. Crim.

4—Art. 277 del Cód. de Proc. Crim.

5—Porque respecto de aquéllas no militan las causas que autorizan á sospechar de la imparcialidad de las del plenario.

6—Está dentro del art. 118 del Cód. de Proc.

7—Después de prestada la declaración llegaron á conocimiento de la parte nuevos hechos. Se solicitó que los testigos fueran citados nuevamente, pero no se hizo lugar porque el término de prueba estaba vencido y el examen de los testigos en este caso se haría con violación del art. 483 del Cód. de Proc. Crim.

8—La ley prescribe que los testigos deben examinarse en la audiencia que el juez señale y en su presencia, prestando el juramento ante



gos, no firmadas por el juez y secretario son nulas, y en consecuencia, debe recibirse nuevamente la causa á prueba.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 125, Ser. 3ª.

9. Declaración de testigos—Las declaraciones de testigos para formar prueba plena, deben estudiarse en el conjunto de sus declaraciones, sin que pueda exigírseles uniformidad sobre todos y cada uno de los hechos sobre que deponen.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 198, Ser. 3ª.

1ª. Declaración de la víctima—Acompañada de otras circunstancias resultantes del proceso, basta para formar la prueba mista y fundar la aplicación de la pena no obstante la negativa del reo.—Jur. Crim. tom. 2, pág. 17, Ser. 4ª.

1. Declaraciones—El abogado consultor está obligado

él mismo, en la forma acostumbrada y observándose, dice el art. 1092 del Cód. de Proc., las disposiciones establecidas por los arts. 131 y 133.

1ª—La declaración de la víctima es testimonio habil, adquiere gran fuerza probatoria unida á otras circunstancias concurrentes de prueba. La declaración de un testigo singular, reunida á otras circunstancias puede llevar al ánimo del juez, la certeza que necesita para fundar un fallo condenatorio, como lo demuestra Mittermaier en el «Tratado de la prueba en materia criminal, parte 8.» Verdad es, que entre las reglas de la sana crítica á que deben sujetarse los jueces para apreciar debidamente la fuerza probatoria de los testigos—art. 305, Cód. de Proc. Crim.—debe mencionarse la de no atribuir fuerza de prueba plena á la declaración de un solo testigo, y que esa regla ha sido implícitamente incorporada en la facultad acordada por el art. 306 del Cód. citado; pero también lo es, que la convicción de la delincuencia de los procesados, no debe fundarse en un testimonio singular ni en presunciones ineficaces únicamente, y si solo en el concurso de elementos de uno y otro género de prueba que si aisladamente considerados no son bastantes para descubrir la verdad, lo son sin duda reunidos y combinados entre si.

1—Si bien es verdad que los abogados están en el deber de guardar el secreto profesional, esto tiene lugar en cuanto pueda perjudicar los intereses ó derechos de las personas que han requerido su consejo. Por con-



á prestar declaración en el juicio, si no tiene la dirección del promovido y lo pide la misma parte que lo consultó.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 390, Ser. 3^a.

Declaraciones—Véase: *Testigos presenciales*, núm. 1—*Testigos*, núm. 3—*Víctima*, núm. 1—*Menor*, núm. 1—*Prueba*, núm. 17—*Prueba de tachas*, núm. 2—*Término de prueba*, núms. 9 y 10.

Declaratoria—Véase: *Incapacidad*, núm. 1—*Heredero*, núms. 2 y 3.

1^a. **Declaratoria de ausencia**—Con presunción de fallecimiento, es de competencia del juez del último domicilio del ausente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 80, Ser. 3^a.

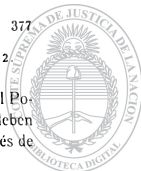
1^b. **Declaratoria de herederos**—Procede ésta sin publicación de editos, si han justificado su carácter y no pretenden ser únicos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Ser. 3^a.

Declaratoria de herederos—Véase: *Hermanos naturales*, núm. 1.

siguiente, y tratándose de un interrogatorio presentado por la misma parte á quien el letrado hubo de prestar sus servicios y patrocinar como abogado en el mismo asunto que promovió después bajo la dirección de otro, desaparece la razón que pudo tener en vista para dejar de prestar la declaración respecto de los hechos que pueden haber llegado á su conocimiento, desde que, el secreto profesional solo podría guardarse en cuanto pudiera perjudicar los intereses ó derechos de las personas que han requerido su consejo. Otra cosa sería si se tratase de establecer hasta qué punto los abogados deban guardar el secreto que se les hubiere confiado por sus respectivos patrocinados cuando fueran llamados ante la justicia, á prestar sus declaraciones como testigos, por otras personas que no fueran aquellas que hayan requerido su consejo, ó en los casos de mediar interés público.

1^a—Véase: *Ausente con presunción de fallecimiento*.

1^b—El juez Méndez Paz no hizo lugar á la declaratoria por ser una práctica «inconcusa é invariable.» La Cám. revocó el auto diciendo, que para ser declarado heredero basta justificar el carácter hereditario, siempre que no se pida la declaratoria de únicos.



Declaratoria de incapacidad—Véase: *Curador*, núm. 2.

Declaratoria de quiebra—Véase: *Quiebra*, núm. 4.

1^a. Decretos del Poder Ejecutivo—Los decretos del Poder Ejecutivo publicados en el «Boletín Oficial», deben ser tenidos por auténticos, y forman prueba después de su publicación.—Jur. Com., tom. 7, pág. 84, Ser. 4^a.

Defectos—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1—*Contrato de compraventa*, núm. 13—*Comprador judicial*, núm. 7.

Defecto del endoso—Véase: *Nulidad de la ejecución*, número 3.

Defecto de forma—Véase: *Ausente*, núm. 2.

1. Defecto legal—No existe en la demanda si se indica el lugar donde están los documentos en que se funda el derecho alegado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 355, Ser. 3^a.

Defecto legal—Véase: *Excepción de defecto legal*, números 2, 5, 10, 12 y 13.

1^b. Defectos de procedimientos—La nulidad por defectos del procedimiento debe ser reclamada y resuelta ante el inferior para que pueda conocer de ella el Superior.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 167, Ser. 3^a.

Defectos de procedimiento—Véase: *Nulidad de la ejecución*, núm. 2.

Defectos del título—Véase: *Remate judicial*, núms. 27 y 28.

Defensa—Véase: *Abogado* núm. 7—*Demandado*, número 1^b.

Defensa propia—Véase: *Homicidio en defensa propia*, núm. 1.

Defensor —Véase: *Pena*, núm. 2.

1^a—Véase: *Autenticidad*, núm. 1.

1^b—Así resulta de la disposición del art. 240 del Cód. de Proc.



1^a. Defensor de ausentes—La nulidad del procedimiento fundada en la falta de nombramiento de defensor de ausentes para el reconocimiento de la firma, debe ser rechazada.—Jur. Civ., tom. 12, págs. 109, 279 y 371, Serie 4^a.

2^a. Defensor de ausentes—En el juicio ejecutivo el defensor de ausentes solo debe ser nombrado para notificarle la citación de remate.—Jur. Com., tom. 8, págs. 109, 235, 270 y 371, Ser. 4^a.

3. Defensor de ausentes—No procede la nulidad de la ejecución fundada en la falta de intervención del defensor de ausentes en el reconocimiento de la firma en rebeldía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 15, Ser. 4^a.

4. Defensor de ausentes—Es privativo del juez de la causa el nombramiento de defensor del ausente.—Jur. Civil, tom. 8, pág. 127, Ser. 3^a.

1^b. Defensor del reo—El procesado por delitos acusables por el Ministerio Fiscal, no puede nombrar representante ó procurador; su derecho se limita á la designación de defensor letrado.—Jur. Crim., tom. 1, página 278, Ser. 4^a.

2^b. Defensor del reo —Si el reo, al serle notificada la sentencia, manifiesta su conformidad, el recurso de apela-

1^a—Véase: el núm. 3; y verb. *Citación de remate*, núm. 4.

2^a—Véanse: el núm. 1; y verb. *Citación de remate*, núm. 4.

3—Los arts. 466, 468 y 471, demuestran que el nombramiento de defensor, solo procede después de la traba del embargo.

4—Véase la nota del verb. *Ausente*, núm. 1.

1^b—Hasta la promulgación del Cód. de Proc. Crim., les era prohibido á los procesados la representación por apoderados—Ley 6^a, tit. 1^o, Part. 7^a.—Promulgado dicho Cód., el único derecho que en él se les acuerda, es el de la defensa *personal* con la limitación establecida en el art. 9^o, que queda librada al prudente arbitrio judicial.

2^b—Véase: verb. *Apelación*, núm. 13.



ción interpuesto por el defensor no basta para agravar la pena.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 256, Ser. 4^a.

3^a. Defensor del reo—Procede la nulidad del procedimiento si el reo carecía de defensor.—Jur. Crim., tomo 4, pág. 227, Ser. 4^a.

Deficiencia—Véase: *Informe ampliado*, núm. 1.

1. Defraudación—La defraudación por actos sucesivos cualquiera que sea el monto de la suma defraudada, solo debe castigarse con arreglo á la mayor suma que se haya apropiado el reo en las diversas ocasiones que ha reiterado el delito.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 103, Serie 4^a.

2. Defraudación—No procede la escarcelación bajo fianza en el sumario por defraudación, si existe reincidencia ó reiteración.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 138, Ser. 4^a.

3. Defraudación—Contra el Banco Nacional, su cono-

3^a—Art. 19 de la Const. Nac.

1—Véase: verb. *Actos sucesivos*, núm. 1.

2—Art. 377 del Cód. de Proc. Crim.

3—La Sup. Corte de Just. Federal ha declarado en varios de sus fallos dictados en causas civiles y criminales, que el Banco Nacional es el Banco que la Const. ha autorizado á crearse por los poderes federales. En cualquier clase de juicios que aparezcan comprometido dicho Banco ó sus intereses, no puede mirarse como una simple persona jurídica de carácter particular, ni tampoco como cualquiera otra institución puesta bajo el amparo de la autoridad nacional por su ley de concesión, sino como un ente jurídico de carácter especial cuyo origen está en la Const. misma. Tratándose en el caso del sumario de la averiguación de delitos cometidos contra dicho establecimiento, es á la Justicia Federal á la que corresponde su conocimiento por tratarse de un establecimiento donde el Gobierno Nacional tiene absoluta y exclusiva jurisdicción—inc. 4^o, art. 23, Cód. Pen.—La Sup. Corte en la causa seguida contra Teodoro Brasch y otros por defraudación al Banco Nacional de Corrientes, resolvió que los tribunales ordinarios de la Cap. son incompetentes para conocer en estas causas. Puede verse



cimiento corresponde á la jurisdicción federal.—Jur. Criminal, tom. 2, pág. 87, Ser. 4ª.

4. Defraudación—Comprobada la inexistencia de delito, procede el rechazo de la querella.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 91, Ser. 4ª.

5. Defraudación—Castigada con arresto de un año, debe ser sometida á la jurisdicción correccional.—Jur. Criminal, tom. 2, pág. 149, Ser. 4ª.

6. Defraudación—La acción civil sobre rendición de cuentas no interrumpe el término que la ley fija para la prescripción del derecho de acusar por defraudación al mandatario.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 152, Ser. 4ª.

7. Defraudación—La mutilación ó destrucción de docu-

asimismo el verb. *Banco Nacional*, núm. 1 del tom. 4º de la Inst., cuya nota consagra estensamente los fundamentos de esta doctrina.

4—Arts. 433 y 434 del Cód. de Proc. Crim.

5—Art. 28 del Cód. de Proc. Crim.

7—El delito de defraudación legislado en el inc. 14 del art. 203 del Cód. Pen., no implica en sí el solo hecho de mutilar un documento si no va acompañado con la intención dolosa de ejecutar el acto criminal, pues como lo dice Viada, explicando el sentido de la palabra *defraudación* en disposición análoga á la que ahora se trata, sobre el Cód. español: «Es preciso ante todo, para que haya estafa, que exista una defraudación, esto es, que se cause un perjuicio real y efectivo á un tercero, ó cuando menos se intente causarle.» Si bien por nuestro Cód. Pen. en su art. 6º, la voluntad criminal se presume en la ejecución de hechos clasificados de delitos, también es verdad que la escluye cuando resulte una presunción contraria de las circunstancias particulares de la causa. El inc. 14 del art. 203, Cód. Pen., no es aplicable á todo el que mutila documento como aquel cuya destrucción dió origen á esta causa sino á los que cometan defraudación por ese medio. La defraudación como propósito y como efecto, y la mutilación como medio de realizarla, son los elementos constitutivos del delito previsto en ese inciso. Todos estos casos—dice el Dr. Rivarola en su *Exposición y Crítica del Cód. Pen.*, explicando el art. 203 y refiriéndose al inc. 14, son otros tantos ejemplos de la idea de defraudación



mentos privados, no constituye defraudación si no se justifica plenamente la intención de defraudar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 155, Ser. 4^a.

8. Defraudación—Por medio de la falsificación de la firma del damnificado, debe ser calificada y penada como estafa.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 289, Ser. 4^a.

9. Defraudación—Entre mandante y mandatario solo puede iniciarse acción criminal por defraudación después del juicio civil de rendición de cuentas.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 416, Ser. 4^a.

10. Defraudación—Reconocido el contrato de mutuo, la insolvencia del mutuario no importa una defraudación.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 423, Ser. 4^a.

11. Defraudación—Siempre que al apropiarse el reo los fondos, tenga la seguridad de serle imposible su de-

en todos ellos enunciada sin estar definida en ninguno de ellos, pero cuyos elementos he mencionado al preocuparme de la distinción entre el dolo civil y el dolo criminal. En la defraudación hay *siempre engaño* que produce perjuicio para uno y beneficio para otro—Obra cit., núm. 839.—La mutilación ó destrucción de documentos, no constituye por sí defraudación, y la voluntad de defraudar ó sea el dolo determinado de cometer ese delito, no es siempre inherente á ese hecho, por lo cual algunos Cód. como el Español, lo califican ya como tal delito, ya como simple daño como puede verse en Pacheco.

8—Porque tal circunstancia es más bien calificativa que de agravación, y porque no debe ella apreciarse como agravante cuando es inherente al delito de que se trata, según enseña Viada, tom. 1^o, página 288.

9—De lo espuesto por el querellante resultaba que él había tenido negocios con el querellado, que no estaban definitivamente liquidados, y por los cuales debía acudir ante quien correspondía, sin que entre tanto pueda decirse que tales hechos constituyen un delito.

10—Por cuanto el mutuario se hace dueño de la cosa recibida en préstamo en mérito de un contrato legalmente celebrado.

11—Porque lo hace sabiendo que no podría devolverlos y cometió así, consciente y voluntariamente, una distracción fraudulenta de dichos



volución, existe la intención criminal que la ley exige para determinar la defraudación.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 39, Ser. 4^a.

12. Defraudación—Determinado y confesado el delito por el acusado no procede el sobreseimiento, aun cuando el acusador reconozca la falta de intención criminal del reo y la autorización anterior para disponer bajo condición de los fondos defraudados.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 132, Ser. 4^a.

13. Defraudación—No procede su acusación sin previa acción civil de rendición de cuentas si el acusado tenía carácter legal al administrar los fondos.—Jur. Crim., tomo 3, pág. 214, Ser. 4^a.

14. Defraudación—Importa una defraudación la distracción aun sin ánimo de apropiárselos, de objetos que

fondos. Este es el caso de nuestro art. 203, inc. 6º, Cód. Pen. y que se halla consagrado también por la doctrina de los criminalistas, entre ellos Chauveau et Helie, núm. 2274; Viada, tom. 3º, pág. 515, y Rivala, Esp. y Crit. del Cód. Pen., núm. 846.

12—La resolución decía así: «En cuanto á la acción pública, se extinguiría si fuese cierto que el procesado dispuso del dinero por autorización de quien tuviese facultad para dársela, en cuyo caso lo habría recibido en préstamo, pero lo manifestado en el escrito es lo contrario no solamente de lo dicho en la denuncia, sino también de lo confesado por el reo, habiéndose espuesto por éste y por el denunciante que el procesado no entregaba el dinero bajo el pretexto de que los socios no le pagaban, y que habiéndolo gastado no lo pudo devolver cuando le fué exigido. La confesión del reo prestada en las condiciones espresadas en el art. 316 del Cód. de Proc. Crim. prueba acabadamente el delito según el art. 321, y subsiste y surte todos sus efectos legales mientras no se retracte en la forma establecida en el art. 319, de donde se sigue que el escrito no ha modificado las condiciones del proceso.»

13—En este caso corresponde una acción de rendición de cuentas puramente civil.

14—Véase verb. *Custodia*, núm. 1.



tenía bajo custodia.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 17, Serie 4^a.

15. Defraudación —La falta de entrega por el corredor de Bolsa de las diferencias que el juego produzca en beneficio de su mandante, no puede fundar una acusación de defraudación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 158, Ser. 4^a.

16. Defraudación—Para que exista, el acusador debe justificar que solo el reo pudo apropiarse los fondos: la

15—Véase: verb. *Corredor*, núm. 5.

16—El procesado fué acusado de defraudación por su patrón en cuya casa era cajero, por haberse encontrado una falta de 1604 pesos en la caja cuyas llaves guardaba. No se produjo prueba de ningún género para justificar que se hubiese cometido ese delito, sino el hecho material de la falta de ese dinero, y las constancias de autos demuestran que el reo era un hombre de costumbres y de vivir modestísimos y que no había hecho gastos extraordinarios. Ahora bien, el hecho de ser el guardador de la llave de la caja de donde faltó el dinero, imponería responsabilidades al cajero y constituiría una fuerte presunción, aunque no prueba plena de la voluntad criminal. Pero se justificó en el proceso que la caja tenía dos llaves, y dos testigos mayores de toda excepción, declararon que una noche, después de ser sospechado el reo, y haberse ausentado de la casa y antes de que entregara la llave que tenía en su poder, esa caja ya estaba abierta y el patrón examinaba los papeles que en ella había. Esta circunstancia basta, no solo para que no se pueda acusar de delito al reo sino hasta para extinguir toda responsabilidad. A esto debe agregarse que el querellante dijo que la caja no tenía sino una llave, y lo repitió después, y manifestó más tarde de que ignoraba si había otra llave; pero afirmó siempre que él no había tenido esa otra llave, lo que estaba contradicho por la prueba que se ha mencionado. Se había constatado en el proceso que el reo desapareció de la casa de comercio y no volvió hasta algunos días después, pero las constancias de autos, hacían ver que en esos días estuvo con socios de la casa, que habló de falta que existía y que buscaba los medios de arreglar aquel incidente. De esta ausencia, que terminó con presentarse él mismo á los tres días, no puede deducirse una prueba de delito, desde que no existan otras presunciones que reúnan las condiciones exigidas por el art. 358 del Cód. de Proc., pues bien puede atribuirse al temor que como cajero



desaparición aun reconocida por el acusado, no basta para dar por comprobada la existencia del delito.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 290, Ser. 4^a.

17. Defraudación—El acusador que no la justifica debe ser condenado en las costas del juicio.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 290, Ser. 4^a.

18. Defraudación—El apoderamiento y disposición como propios de objetos y papeles ajenos importa este delito y como tal debe ser penado, aun cuando por la prueba no puede ser determinado el valor de dichos objetos.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 297, Ser. 4^a.

19. Defraudación—El mayor ó menor valor en que el denunciante fije la defraudación, no basta para calificar de dolosa la acusación, y probada la existencia del delito es improcedente la acusación por calumnia que el reo inicie fundada en la diferencia de valor.—Jur. Crim., tom 5, pág. 317, Ser. 4^a.

20. Defraudación—Los Tribunales de la Capital carecen de jurisdicción para entender en el juicio por defrau-

tenía por las responsabilidades en que podía haber incurrido por la falta que había notado. La cuestión á resolver era la clase de responsabilidad que tenía el reo en el déficit comprobado de la caja. Además del daño material, se requiere, para la existencia del delito, la intención dolosa del agente. El hecho de haber sido el reo cajero de la casa acusadora, de haber reconocido la falta de 1.604 pesos de la caja á su cuidado, no basta para constituirlo reo del delito de defraudación. El elemento moral, es decir, la intención por parte del reo de defraudar, apropiándose el dinero que faltaba de la caja, no resultaba de autos.

17—Art. 144 del Cód. de Proc. Crim.

19—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 10.

20—La justicia ordinaria de la capital, es territorial, y sus jueces no tienen competencia para juzgar y penar delitos cometidos en país extranjero salvo los casos determinados por las leyes—art. 25, Cód. de Proc. Crim.



dación si el delito ha sido cometido en el extranjero, aunque querellante y querellado tengan su domicilio en la República al deducirse la acusación.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 329, Ser. 4^a.

21. Defraudación—Para que exista calumnia debe imputarse al acusador la consumación de un delito acusable por el Ministerio Fiscal; la explotación si bien importa una falta de moralidad no puede considerarse defraudación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

22. Defraudación—Procede el sobreseimiento con costas al querellante si la defraudación imputada al procurador ó depositario judicial no resulta justificada.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 268, Ser. 4^a.

23. Defraudación—El depósito judicial á la orden de un juez, de fondos pertenecientes á terceros, aleja toda idea de apropiación ó distracción en provecho propio, y por consiguiente no puede ser calificado como delito de defraudación.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 34, Serie 4^a.

24. Defraudación—La retención que hace el mandatario en concepto de comisión y gastos, no puede calificarse como delito de defraudación en tanto se trate de una cantidad aproximada al importe.—Jur. Crim., tom. 7, página 34, Ser. 4^a.

24^b. Defraudación—La entrega hecha por el mandatario á un tercero de una suma en pago de deudas no justificadas, importa una distracción que se convierte en defraudación

21—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 16.

22—Véase: verb. *Costas*, núm. 27.

23—Véase el núm. 39.

24—Porque en este caso no existe la obligación de entregar esa suma—art. 203, inc. 6º del Cód. Pen.—La doctrina sentada en este sumario está de acuerdo con lo resuelto en el núm. 39.



si no es devuelta en oportunidad.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 34, Ser. 4^a.

25. Defraudación—De tres mil pesos moneda nacional, debe ser castigada con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 34, Ser. 4^a.

26. Defraudación—El dolo, en las transacciones que sean ó no civiles, no puede ser calificado como defraudación ó estafa.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 88, Ser. 4^a.

27. Defraudación—Por más de seis mil pesos moneda nacional, debe ser castigada con cuatro años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 330, Ser. 4^a.

28. Defraudación—El comitente á quien el rematador no rinde cuenta de su cometido en el término que fija la

25—Art. 202, inc. 5° del Cód. Pen.

26—Para la existencia del delito de estafa, se necesita que haya de por medio nombre supuesto, calidad simulada, ardid, engaño, falso título ó influencia mentida—art. 202 del Cód. Pen.—cualquiera de estos elementos caracterizan ese delito, así como el de defraudación. Se trataba de la realización de unas operaciones de seguros en las que no procedían con falsía sino que explotaban la ignorancia del agricultor incauto, á quien solicitaban para el negocio, dada la forma en que se distribuiría el valor de las primas cobradas. Este punto cae bajo la jurisdicción del derecho comercial y si tanto el Cód. de Com. como el Cód. Pen. no espresan castigos por tales actos, el juez es el que menos se halla habilitado para improvisarlos: *ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*.

27—Art. 204, inc. 6° del Cód. Pen.

28—Con escepción de los casos enumerados en el art. 1104, Cód. Civ., ó de otros exceptuados espresamente por la ley—art. 1105—el ejercicio de la acción criminal no se halla sujeto al de la acción civil que pudiera emanar del mismo hecho en que se funda aquélla, y por el contrario la regla consignada por el art. 1101, es que aquélla puede preceder á ésta, y que si se interpone después de intentada, suspende la resolución del juicio civil hasta que sea fallado el criminal. La circunstancia de que la cuestión en que el querellado funda su escepción, sea por su naturaleza de previa decisión, no autoriza á concluir, ni que



ley, tiene derecho para acusarlo por defraudación, y el Juez de Instrucción debe conocer y fallar de la rendición de cuentas que presente.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 395, Ser. 4^a.

29. Defraudación—Por medio de la falsificación de marcade fábrica, es de competencia de la justicia federal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 428, Ser. 4^a.

30. Defraudación—Entre socios ó comuneros no puede existir defraudación sin previo juicio de liquidación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 305, Ser. 4^a.

31. Defraudación—Justificada la simulación del documento de propiedad de muebles, su venta por el poseedor propietario no puede ser calificada como defraudación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 188, Ser. 4^a.

32. Defraudación—No procede la escarcelación bajo fianza si no puede determinarse el monto de la de-

deba ser resuelta por otro juez que el de lo Criminal, ni que éste deba resolverla como artículo de previo y especial pronunciamiento. Cuando la perpetración del delito se hace derivar de la existencia ó ejecución de un contrato, enseña Chauveau, invocando la jurisprudencia constante de la Corte de Casación y la autoridad de los autores que cita, la cuestión prejudicial que surge sobre ello, cae bajo la jurisdicción del Juez del Crimen, y tal jurisdicción es competente para declarar la existencia del contrato y apreciar sus condiciones—núm. 2505.—Esa doctrina es la misma seguida por nuestro Cód. Civ., según se deduce de los arts. citados, y de los 1102 y 1194, con su nota explicativa—véanse núms. 33 al art. 1097, y 42 al 1104 de la Explicación y Crítica del Dr. Segovia.

29—Véase: *Competencia federal*, núm. 2.

30—De acuerdo con la doctrina sentada en el núm. 39.

31—Véase la nota precedente.

32—Se dijo que no era procedente la escarcelación porque *prima facie* la pena que le correspondería al procesado por el delito de defraudación de que se le acusaba, excede al límite que prescribe el artículo 376, Cód. de Proc.Crim., para que se pueda conceder la libertad bajo fianza.



fraudación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 285, Ser. 4^a.

33. Defraudación—La suma que recupere el damnificado por una defraudación, no hace disminuir la penalidad del delito.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 178, Ser. 4^a.

34. Defraudación—El reconocimiento del carácter de socio en el acusado, no permite calificar el hecho como defraudación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 294, Ser. 4^a.

35. Defraudación — Por mayor valor de 6000 pesos, debe ser penada con cinco años de penitenciaría si existe reiteración.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 22, Ser. 4^a.

36. Defraudación—La falsificación de un pagaré y su ejecución, aun cuando por medio de engaño se haya conseguido la firma auténtica, importa la consumación del delito de defraudación; no puede calificarse como tentativa, aun cuando no se haya conseguido hacer efectivo el cobro.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 22, Ser. 4^a.

37. Defraudación—Por actos sucesivos, solo puede ser penada con arreglo á la mayor suma distraída en un solo acto, cualquiera que haya sido el monto de la cantidad defraudada.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

38. Defraudación—La acusación de defraudación del

33—Porque la defraudación se consuma por la entrega de los fondos—art. 202 del Cód. Pen.

34—Siendo socio no es de aplicarse el precepto del art. 204 del Cód. Pen., pues éste habla de *propiedad ajena*.

35—Art. 202, inc. 6° del Cód. Pen.

36—Art. 203, Cód. Pen., incs. 7° y 8°. Se trataba de documentos hechos suscribir con engaño, y de abusos de firmas en blanco, estendiendo documentos de obligación, en perjuicio de quien dió la firma, que son los casos legislados en los dos incisos antes citados, debiendo considerarse como consumados con esto, dichos delitos, como lo enseñan uniformemente los autores, entre otros Carrara, Programma, Parte General, tit. 4°, § 2348.

37—Véase: *Actos sucesivos*, núm. 2.

38—Véase: *Cuestiones prejudiciales*, núm. 2.



mandante al mandatario, debe sustanciarse sin que por el Juzgado Civil se resuelva el litigio sobre rendición de cuentas, que no puede calificarse de cuestión prejudicial. —Jur. Crim., tom. 10, pág. 173, Ser. 4ª.

39. Defraudación—Los que han recibido con obligación de entregar ó restituir, y á la vez les asiste derecho

39—El Dr. Esteves al fundar su voto en esta cuestión decía con mucho acierto: «Tratándose de los casos de defraudación previstos en el inc. 6º, art. 203, Cód. Pen., es indispensable para que exista el delito, que haya voluntad de perjudicar á otro, por medio de la negativa de lo recibido, de la apropiación ó distracción del dinero, efectos ó cualquiera cosa mueble recibido por título que produzca obligación de entregar ó devolver. Sucede en tales casos, lo que con el delito de falsedad, en que no basta para su existencia que haya alteración de la verdad y perjuicio de tercero, sino que se requiere además que esa alteración haya sido hecha con el propósito criminal de ocasionar tal perjuicio ó con los delitos de injuria y calumnia en que se requiere el dolo especial de vejear y perjudicar á quien se ofende. No debe confundirse la intención de delinquir, dice Haus, con su motivo determinante. Se puede violar intencionalmente la ley sin propósito malévolo... y de ahí se sigue, que ni la intención de dañar—*malitia*—ni el designio de procurar para sí ó para otros provechos ó ventajas ilícitas—*fraus*—pueda considerarse por regla general como condiciones de culpabilidad en materia penal. Sin embargo, esa regla no es absoluta. Hay infracciones de naturaleza especial, para cuya existencia no basta que sean cometidas conscientes y voluntariamente, se necesitan además que sean el resultado de una intención maligna ó fraudulenta, de modo que la culpabilidad depende de la criminalidad del motivo que ha determinado al agente. Debe, pues, distinguirse la culpabilidad general—*dolus generalis*—que es condición general de todo crimen y de la mayor parte de los delitos, pero que no siempre basta para imprimir carácter delictuoso á un hecho ilícito, y la culpabilidad especial—*dulos specialis*—que consiste en el propósito de perjudicar ó de procurarse á sí mismo ú otro, ventajas ilícitas. Si el dolo general es condición tácita de los crímenes y aun de los delitos no exceptuados por la ley ó su naturaleza, el dolo especial no es un constitutivo de la infracción, sino cuando la ley lo requiere en términos formales, incluyendo en la definición misma del crimen ó delito el propósito malévolo ó la intención fraudulenta, ó uno y otra—*Droit Penal Belge*, tom. 1º, núms. 302 y 304—y



de retener ó compensar, no podrán ser considerados reos de defraudación, por el hecho de apropiarse ó distraer lo que lícitamente creyeron que podían retener ó compensar.

—Jur. Crim., tom. 10, pág. 278, Ser. 4ª.

40. Defraudación—Para que pueda clasificarse el delito como defraudación, debe resultar claramente la existencia de intención dolosa, y en perjuicio de tercero, no basta la mora en la devolución: si ésta ha sido sometida á decisión judicial, debe ser juzgada y resuelta por los jueces civiles.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 278, Ser. 4ª.

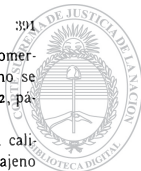
Defunción—Véase: *Información supletoria*, núm. 1.

Delincuente—Véase: *Incapacidad*, núm. 1—*Delito*, número 21.

1. Delito—Aun supuesta la existencia de él, no procede la detención de los culpables por omisión ó negligencia cuya responsabilidad es meramente civil.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 215, Ser. 4ª.

acclarando en las notas con ejemplos la esposición del testo, dice: «el acreedor que no pudiendo obtener el pago de una deuda líquida y exigible quita á su deudor lo que le es debido, no comete robo por que no procede con intención fraudulenta»—nota 10.—El robo, la distracción, el abuso de confianza, la estafa, el engaño, etc., suponen intención fraudulenta»—nota 13.—La doctrina enseñada por el criminalista belga, es perfectamente aplicable en nuestro país, dados los términos de los arts. 6, 202 y 203, Cód. Pen. De aquí debe concluirse que si bien la regla general es que en la ejecución de los hechos calificados de delito se presume la voluntad criminal, esa regla debe aplicarse muy prudencialmente cuando se trata de hechos que pueden caer bajo el imperio de la ley penal, pero que pueden también no salir de la esfera de la ley civil. Los que han recibido con obligación de entregar ó restituir y que á la vez les asista derecho de retener ó compensar, no podrían ser considerados reos de defraudación por el hecho de apropiarse ó distraer lo que pudieron lícitamente retener ó compensar. La voluntad criminal presumible por la ley, cedería en tal caso á la presunción contraria resultante de las constancias de la causa.

40—Véase la nota precedente.



2. Delito—Las irregularidades de los libros de comercio no pueden ser calificadas como delitos en tanto no se justifique plenamente el dolo.—Jur. Crim., tom. 2, página 215, Ser. 4^a.

3. Delito—Para que el hecho delictuoso pueda calificarse de casual, es menester que sea evidentemente ajeno á la voluntad del autor.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 319, Ser. 4^a.

4. Delito—La falta de pago de una obligación personal no importa un delito, aun cuando se hayan recibido los fondos de un tercero con ese objeto.—Jur. Crim., tomo 2, pág. 330, Ser. 4^a.

5. Delito—No puede ser calificado como tal la falta de fondos de una oficina pública en tanto no se justifique que es el resultado de una voluntad criminal.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 203, Ser. 4^a.

6. Delito—Los medios que la ley fija para la compro-

6—De las declaraciones de testigos, resultó demostrado que entre la tarde del 29 de Junio de 1890, la víctima penetró corriendo en un conventillo, herida ya en la calle y perseguida por dos primos de ella. Ya en el interior del inquilinato, la víctima entró á la habitación de un tercero, situada en el fondo de la casa, y tras de él entraron también sus perseguidores quienes le dispararon dos tiros más de revólver infiriéndole asimismo una profunda herida de cuchillo en el cuello, dejándolo muerto en el mismo instante, después de lo cual fugaron. Los vecinos de la casa sacaron el cadáver de la víctima á la calle donde lo dejaron hasta el siguiente día, como á las 11 a. m. en que el hermano de la víctima fué con un carro municipal y recogió el cadaver. El hecho de la muerte violenta causada se hallaba también corroborado por la confesión de uno de los inculpados, quien dijo: «que sabe que lo mataron el día 29 de Julio último—1890—en la calle Belgrano, entre Pasco y Pichincha.» Así, aun cuando por las circunstancias en extremo anormales por las que atravesaba esta ciudad en el día del suceso y sus inmediatos subsiguientes, no se hizo anotación del fallecimiento de la víctima en el Registro Civil, ni en los libros del Cementerio de la Chacarita y no había, por consiguiente, partida de defunción, ni las



bación judicial de la existencia de un delito pueden ser su-

autoridades de Policía ó de Instrucción Criminal, pudieron intervenir oportunamente para hacer los reconocimientos y practicar las demás diligencias de comprobación inmediata que corresponden en tales momentos, las declaraciones numerosas de los testigos que depusieron en el proceso, y que uniformemente afirmaron haber visto el cadáver, tanto en el momento que siguió á la muerte, como al día siguiente cuando lo llevó el hermano á las 11 a. m., algunos de los cuales presenciaron también como fué muerta la víctima y cuántas heridas le fueron inferidas: todos estos testimonios, apreciados según la sana crítica y las demás reglas consignadas en los arts. 306 y siguientes del Cód. de Proc. Criminales, parecen suficientes para formar la prueba supletoria que autoriza el art. 108 del Cód. Civ., y bastan por consiguiente para comprobar el homicidio perpetrado. Verdad es, que el art. 209 del Cód. de Proc. determina la forma en que el Juez Instructor ha de hacer constar el cuerpo del delito, con sus circunstancias materiales, en los homicidios; pero esto, que puede y debe exigirse siempre que las circunstancias lo permitan, no limita dicha comprobación á esos solos medios, ni excluyen otros que pueden producir igual é inequívoca convicción de la existencia del delito. «Si es cierto, dice Bonnier, que deben los jueces aplicarse con el mayor cuidado á buscar sus huellas; es imposible admitir que la falta de vestigios materiales, pueda asegurar la impunidad del acusado cuya culpabilidad se ha probado por medio de testimonios directos. Si así fuera, bastaría á un asesino aniquilar el cuerpo de su víctima para librarse de toda penalidad. No hay duda que es necesario que se haya cometido; pero la existencia de ese delito puede justificarse de una manera indirecta, puesto que la misma culpabilidad es susceptible de probarse de esa manera»—Tratado de las Pruebas, núm. 109. Véase también Mittermaier, Tratado de la prueba, pág. 148.—Estas ideas, que amplían la autorizada opinión de D'Aguesseau, espuesta en su informe LI, de que, «el cuerpo del delito no es otra cosa que el delito mismo, cuya existencia se prueba por testigos dignos de fe, concordes entre sí», tienen perfecta aplicación al caso, pues como se ha visto, por la anomía notoria en que se hallaban todos los servicios públicos en esta ciudad, durante la revolución de Julio de 1890, lo que según es también público y han tenido oportunidad de constatarlo los tribunales, ocasionó el que se hiciesen inhumanidades sin la identificación de los cadáveres y sin otras indicaciones que la de N. N., heridas de bala, no ha sido posible en el caso practicar reconocimientos, exhumación y autopsia del cadáver, ni agregar la par-



plidos por prueba testimonial en los casos en que por anormalidad de los acontecimientos haya sido imposible la adopción de las medidas legales.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 410, Ser. 4^a.

7. Delito—El juez no puede delegar en el secretario la verificación de las piezas que importan la comprobación material del delito.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 161, Ser. 4^a.

8. Delito—No obstante los malos antecedentes del procesado, debe ser absuelto en tanto no exista prueba de que cometió el delito.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 341, Ser. 4^a.

9. Delito—No existe delito ni aun tentativa si el acusado desistió de su comisión por voluntad propia, aun después de practicados actos preparatorios.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 53, Ser. 4^a.

10. Delito—No procede la prosecución del sumario si el hecho que funda la querella no puede calificarse de delito.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 275, Ser. 4^a.

11. Delito—La detención por la Policía no puede fundar una acción por calumnia si el denunciante no imputó al detenido delito alguno.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 392, Ser. 4^a.

tida del Registro Civil, correspondiente á la defunción; pero á pesar de esto, los numerosos testimonios que recordados anteriormente, con los cuales concuerda la declaración del mismo reo en la parte que dice haber sabido que en lugar y día indicado mataron á su primo, son suficientes para formar en la más plena y segura convicción de la existencia del delito de homicidio perpetrado en la persona de la expresada víctima.

7—Debe hacerlo personalmente por ser propio de sus funciones.

8—Véase: *Antecedentes del procesado*, núm. 1.

9—Art. 14 del Cód. Pen.

10—Art. 200 del Cód. de Proc. Crim.

11—Véase: verb *Calumnia*, núm. 20.



12. Delito—La imputación de haber buscado asesinos

12.—La acusación versaba sobre calumnia. El Juez de 1ª Inst. dijo: «que el acto imputado por Palla á Grasuchi es el de *tentativa de homicidio*, pues buscar asesinos para matar una persona constituye una manifestación exterior de la resolución de cometer un delito del cual surge responsabilidad como autor principal—arts. 8 y 21, inc. 3º del Cód. Penal.»—Parece que hay error manifiesto al conceputar que buscar asesinos para matar á una persona es una tentativa de homicidio, y que por consiguiente la imputación de tal hecho importa calumnia. El Código Penal en el art. 8º dice que hay tentativa cuando la resolución de cometer un delito ha sido manifestada por actos exteriores que tengan relación directa con el delito. La índole abstracta del asunto y la circunstancia de tratarse de un concepto genérico de actos punibles relacionados con la criminalidad en sus diferentes aspectos, ha dado lugar á que el precepto legal que testualmente queda consignado implique una simple enumeración teórica y que se note en ella la falta de una acentuación suficientemente significativa de lo que deba entenderse por actos exteriores que tengan relación directa con el delito; pero las tradiciones jurídicas y la doctrina de los tratadistas derraman la luz necesaria para ver claro el pensamiento del legislador, y el prudente arbitrio judicial discierne en cada caso el sello característico de la tentativa. El Cód. ha fijado por otra parte una base de criterio, relativa, sin duda, pero no por eso escasa de importancia cuando en el art. 14 ha dicho: «Los actos preparatorios de un delito solo son punibles cuando importan una contravención, salvo disposición expresa de este Código.» En vista de este precepto puede decirse desde luego que la intención por perversa que sea y aun manifestada exteriormente por acumulación de medios é instrumentos para la consecución de un fin criminal, no constituye tentativa, siempre que no importen contravención, *cogitationis penam nemo patitur*. Actos exteriores que tengan relación directa con el delito no pueden ser otros que el principio de ejecución del delito; como cuando se trata de matar, colocarse armado en asecho en un paraje donde debe pasar la víctima elegida, penetrar á buscarla en el sitio donde puede ser hallada, derramar el veneno en la bebida que debe tomar, disparar el arma de fuego ó esgrimir el puñal, etc.—véase en la ley 2ª, tit. 31, Part. 7ª.—¿Ha habido algo que se acerque ó asemeje á estos hechos en la imputación que el querellante quiere atribuir al querellado? Indudablemente no. Habrá habido un propósito de mandato para delinquir, pero esto no constituye delito, como tampoco lo constituiría una situación más avanzada, la tentativa misma del mandato.



para cometer un homicidio por precio, no importa la

Así lo enseñan los tratadistas más autorizados en materia penal. Es evidente por sí mismo, dice el Dr. Tejedor—tom. 1º, pág. 29, curso de Derecho Criminal—que si la proposición es rechazada no constituye —el mandato—más que un acto preparatorio, no sujeto á las disposiciones penales. Cita en apoyo de esta opinión, á Farinacio, pág. 135, núm. 74. En Pacheco, Cód. Pen., concordado y comentado, tom. 1º, pág. 109, se lee lo siguiente: «De la proposición y aun de la conspiración á la ejecución hay á las veces una gran distancia. Basta quizás que no acepte la persona á quien se hace la propuesta para que quede el proyecto criminal reducido á la manifestación del deseo de delinquir; basta tal vez igualmente que algunos de los conspiradores disienta de los otros, cosa muy frecuente, para que no tenga principio, la ejecución del delito. Haus, Principio de Derecho Penal Belga, tom. 1º, página 335, ocupándose de la tentativa de la complicidad se expresa así: «Se pueden dar instrucciones para cometer un delito, se puede proporcionar intencionalmente á alguno los medios adecuados para la perpetración de un crimen. Si aquel que debía ejecutar el proyecto criminal y á quien se ha querido prestar ayuda ha permanecido en la inacción, no hay tentativa de participación. Para hacer más comprensible su pensamiento, dice en la nota 16, lo siguiente: «Alguno compra un veneno y lo entrega á un tercero que había ganado á precio de dinero, para envenenar á una persona.» El mandante es denunciado á la Policía por el mandatario, de modo que el crimen no recibe ningún principio de ejecución. Este hecho no constituye ni una tentativa de envenamiento ni una tentativa de participación en este crimen; él escapa á toda represión. Carrara, en el programa del Curso de Derecho Criminal, ocupándose de la misma materia, dice lo siguiente: «El mandato y la asociación para delinquir pueden ciertamente castigarse como delitos *sui generis*; pero es un error de los más groseros ver en ellos una tentativa del delito al cual se dirigían, porque la tentativa tiene como condición esencial el principio de ejecución del delito querido; y mientras se diga *hac* ó *hagamos* no se empieza á hacer. . . . La complicidad en la tentativa puede existir sin duda, siempre que el autor principal tentó y no consumó. Si el socio que había prometido ayudar al autor principal se detuvo á la mitad de la empresa, y lo dejó solo equivocadamente, se dice que existe una tentativa de complicidad. Aquí hay un hecho principal de ejecución al cual se agrega el hecho del socio, no por una complicidad física tentada sino por una complicidad moral consumada. Pero cuando nada fué hecho por alguno de los acusados



de un delito sino la de falta de moralidad.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 126, Ser. 4ª.

13. Delito—En tanto que no se impute un delito la acusación por calumnia es improcedente.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 125, Ser. 4ª.

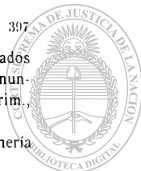
14. Delito—Si de autos no resulta la existencia del delito, procede el sobreseimiento definitivo.—Jur. Crim., tom. 8, págs. 17 y 145, Ser. 4ª.

15. Delito—Si puede ser perseguido por acción fiscal, el abandono de la querella no interrumpe la secuela del juicio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 172, Ser. 4ª.

16. Delito—Aun tratándose de delitos en que solo se procede por denuncia de parte interesada es parte el Ministerio Fiscal desde que se instruye el sumario.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 10, Ser. 4ª.

había complicidad en el pacto—delito *sui generis*—pero es pura poesía hablar de complicidad en el hecho mientras el hecho no existe. Una cosa es decir que el acuerdo precedente vincule á una persona al hecho que sucesivamente se ejecutó por otros, y otra cosa es pretender que el acuerdo supla al hecho que jamás tuvo existencia y haga las veces de aquél.

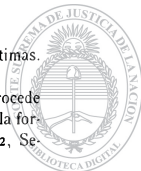
16—El art. 141 del Cód. Pen. solo hace depender la *iniciación* del proceso, de la acusación ó denuncia de las personas que en él se determinan. Siendo este precepto una escepción á la regla de que el procedimiento criminal pueda seguirse de oficio, debe interpretarse estrictamente y limitarse al caso previsto por la ley, esto es, á la iniciación del proceso; no teniendo otro alcance la disposición citada, ni en su letra ni en su espíritu, puesto que son bien conocidas las razones que la inspiran, es indudable que una vez iniciado el proceso su tramitación debe seguirse en la forma ordinaria y con intervención del Ministerio Público, parte esencial siempre que se trate del ejercicio del derecho de castigar. Esta conclusión es la misma que enseña el Dr. Tejedor en el tom. 2º, núm. 24, de su tratado de Derecho Crim., y la que ha sancionado la jurisprudencia de nuestros tribunales, como puede verse en el tom. 8º, 2ª Serie., pág. 168, de los Fallos de la Exma. Cám. de lo Criminal.



17. Delito—En los delitos que pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo, no es necesario que el denunciante justifique el carácter que invoca. — Jur. Crim., tom. 8, pág. 10, Ser. 4ª.

18. Delito—Las personas jurídicas tienen personería

18.—El Dr. Rodríguez Bustamante decía al fundar esta resolución que fué confirmada por la Cámara, que si la teoría contraria fuese aceptada, las personas jurídicas de existencia necesaria, como el Estado, los municipios, las universidades, etc., el acusador público—fiscal—y el juez mismo no podrían seguir á su nombre el procedimiento criminal contra un delincuente ó presunto delincuente, por cuanto esas personas no pueden hacerse pasibles por una acusación calumniosa; y porque la calumnia es un delito, y las personas jurídicas no pueden delinquir, como no puede hacerlo la sociedad en sí á quien representa el Fiscal y el juez. Además en las personas ideales de existencia necesaria ó posible como en los dementes y en los impúberes, no pueden existir los elementos indispensables de la responsabilidad criminal, el dolo y la voluntad de delinquir. Por otra parte, el art. 41 del Cód. Civ. establece terminantemente que las personas jurídicas pueden *intentar*, en la medida de su capacidad de derecho, acciones civiles ó criminales. Las personas jurídicas pueden ejercer todos los actos que no le sean expresamente prohibidos por las leyes generales y sus Estatutos—art. 33, Cód. Civ.—La ley civil establece igualmente, en la disposición antes citada, que respecto de terceros, los establecimientos ó corporaciones con carácter de personas jurídicas, gozan en general de los mismos derechos que los particulares. Como personas capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, pueden ejecutar no solo todos los actos previstos en sus Estatutos, sino todos aquellos que no le son prohibidos por estos, y que los puede ejecutar una persona de existencia visible ó natural. No se puede decir que una persona jurídica no tenga interés en la averiguación del delito y en la represión de los delincuentes, pues hay una íntima relación entre la acción criminal y la civil. «No es posible en mi concepto, dice el profesor Obarrio, desconocer en la persona damnificada el derecho de velar por el castigo del culpable, y tanto más cuanto que el resultado del juicio criminal tiene una influencia decisiva respecto de la existencia de las acciones civiles que nacen del delito.» Se dice que las personas jurídicas solo tiene capacidad para acusar por los delitos del derecho civil, es decir, que en el caso de defraudación ó usurpación de dinero, solo puede perseguir la devolución



para acusar por los delitos de que hayan sido víctimas.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 5, Ser. 4ª.

19. Delito—El sobreseimiento definitivo solo procede si resulta no haber existido el delito que motivó la formación del sumario.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 322, Serie 4ª.

20. Delito—Si puede ser castigado con más de dos años de prisión, no procede la libertad bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 233, Ser. 4ª.

21. Delito—Procede el auto de prisión preventiva si de autos resulta probado el delito y la persona del delincuente.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 275, Ser. 4ª.

22. Delito—Si de autos resulta la comisión de un delito,

de lo usurpado con los intereses de plaza desde el día del delito.—art. 1093, Cód. Civ.,—pues que esa disposición establece solamente lo que debe comprender la indemnización civil, como lo estatuye cuando se trata de un delito contra las personas, independientemente de la pena que corresponde al acto delictuoso, y de la acción para obtener el castigo del culpable. En consecuencia, si el art. 41 del Cód. Civ. faculta á las personas jurídicas para entablar acciones civiles y criminales equiparándolas en derecho á las personas naturales, sobre la venganza ó satisfacción de espíritu que importa el hecho de pedir y obtener la pena por una acusación calumniosa está el interés colectivo de la represión de los delitos públicos, que llevan la perturbación al seno de la sociedad, lo que no sucede en los delitos privados como es el de la calumnia. Las personas jurídicas son consideradas distinta é independientemente de los miembros que las componen, y por lo tanto ellas no pueden cometer delitos privados ni ser pasibles de los mismos. De esto resulta que desaparece ante el interés social la aparente injusticia de que una persona ideal ó con investidura oficial pueda querellarse persiguiendo un castigo y que quede exento de pena en el caso de haber accionado calumniosamente. Esta teoría ha sido consagrada por la jurisprudencia constante de nuestros tribunales, reconociendo personería á las sociedades anónimas para acusar por delitos cometidos contra sus bienes, pudiéndose citar entre otras la querella del Banco de Roma y Río de la Plata contra su gerente Sr. Lavagno.

22—Véase: *Abuso de autoridad*, núm. 4.



ya sea de abuso ó usurpación de autoridad, debe formarse sumario, no obstante el desistimiento del Agente Fiscal.

—Jur. Crim., tom. 9, pág. 290, Ser. 4^a.

23. **Delito**—La resolución, por la Policía, de cuestiones que por la ley deben ser sometidas á los jueces que ella designa, importa el delito de usurpación de autoridad.

—Jur. Crim., tom. 9, pág. 290, Ser. 4^a.

24. **Delito**—No puede calificarse como delito un acto de compraventa perfectamente definido.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 319, Ser. 4^a.

25. **Delito**—Siendo la benignidad el principio fundamental de nuestro sistema penal, solo puede declararse la continuidad del delito, si de su existencia resulta favorecido el reo.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 77, Ser. 4^a.

26. **Delito**—Justificado el delito procede el sobreseimiento provisorio, si no existe prueba contra el acusado.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 181, Ser. 4^a.

27. **Delito**—No procede el sobreseimiento definitivo si de autos resulta la existencia del delito.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 183, Ser. 4^a.

28. **Delito**—No comete delito el que dispone de lo propio aun cuando estuviese embargado, en tanto no se justifique que de ello tenía conocimiento.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 226, Ser. 4^a.

29. **Delito**—Las circunstancias agravantes, calificativas del delito, deben resultar plenamente justificadas para ser tomadas en consideración.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 401, Ser. 4^a.

31. **Delito**—Para que un acto ilícito que no puede cali-

23—Véase: la nota al verb. *Abuso de autoridad*, donde se estudia el caso con detenimiento.

24—Véase: *Compraventa*, núm. 3.

31—Véase: verb. *Acto ilícito*, núm. 1.



ficarse como delito aporte responsabilidad por daños y perjuicios, debe justificarse que el autor tuvo la culpa ó por lo menos procedió con negligencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 304, Ser. 3ª.

32. Delito—El conocimiento de los cometidos dentro de un establecimiento sometido á la jurisdicción exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, corresponde á los tribunales federales.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 243, Serie 4ª.

Delito — Véase: *Actos sucesivos*, núm. 1—*Acusación*, números 2 y 3—*Defensor del reo*, núm. 1—*Lesiones*, números 1, 3 y 8—*Querella*, núms. 1 y 4—*Sobreseimiento definitivo*, núms. 1, 6, 8 y 9—*Sobreseimiento provisorio*, núms. 2, 3 y 4—*Sumario*, núm. 1—*Suspensión de empleo*, núms. 1 y 2—*Bienes ocultados*, núm. 1—*Confesión del reo*, núms. 2, 3, 4, 5 y 6—*Defraudación*, números 4, 12, 16, 23, 36 y 40—*Escarcelación bajo fianza*, núms. 4, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21 y 24—*Falsificación*, núm. 1—*Informe caligráfico*, núm. 1—*Perdón del esposo*, núm. 1—*Sobreseimiento*, núms. 1 y 10—*Abogado*, núm. 7—*Adulterio*, núms. 7, 8 y 9—*Daños y perjuicios*, núms. 4, 17 y 34—*Fallecimiento*, núm. 1—*Hurto*, núms. 4, 5 y 7—*Pena*, núm. 3—*Amenazas*, núm. 1—*Calumnia*, núms. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 y 23—*Encubridor*, núm. 3—*Falsedad de firmas*, núm. 1—*Prisión*, núm. 2—*Testimonio*, núm. 2—*Declaración del reo*, núm. 2—*Declaración de rufianes*, núm. 1—*Diligencia judicial*—*Fractura*, núm. 1—*Injuria*, núm. 11—*Mercederías*, núm. 1—*Absolución del reo*, núm. 3—*Falso testimonio*, núm. 1—*Objetos robados*, núms. 3 y 7—*Simulación*, núms. 4 y 5—*Acción criminal*, núm. 2—*Atenuación*,

32—Art. 23, inc. 4º del Cód de Proc. Crim.



núm. 1—*Bigamia*, núms. 1 y 2—*Bonos*, núm. 1—*Confesión indivisible*, núm. 3—*Instigador*, núm. 1—*Robo*, números 6 y 8—*Banda*, núm. 1—*Desistimiento del acusador*, núm. 1—*Aproximación sexual*, núm. 1—*Coautores*, núm. 1—*Edad de la menor*, núm. 1—*Fianza carcelera*, núms. 10 y 12—*Aprehensión*, núm. 1—*Accidentes*, número 2.

Delitos comunes—Véase: *Calumnia*, núm. 5.

Delito continuo—Véase: *Adulterio*, núm. 4.

1. **Delito correccional**—Lo es la venta de bienes ajenos si la acusación la deduce el comprador.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 201, Ser. 4ª.

Delito mayor—Véase: *Lesiones*, núm. 1.

1. **Delitos públicos**—Debe llevarse adelante el sumario, siempre que de la acusación resulten hechos que justificados sean delitos —Jur. Crim., tom. 2, pág. 243, Ser. 4ª.

1ª. **Demanda**—Reconocida la verdad de ésta procede se condene al demandado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 294, Ser. 4ª.

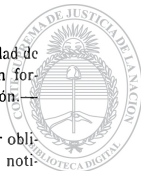
2. **Demanda**—Vencido el término fijado en la póliza del seguro para la prescripción del derecho á reclamar, su interrupción solo puede justificarse por la demanda judicial ó el reconocimiento expreso del derecho reclamado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 53, Ser. 4ª.

3. **Demanda**—La falta de contestación á la demanda y la absolución de posiciones en rebeldía, hacen procedente la condenación del demandado, aun cuando el actor no produzca otra prueba.—Jur. Com., tom. 10, pág. 348, Ser. 4ª.

1—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—Art. 3989 del Cód. Civ.

3—Arts. 100 y 133 del Cód. de Proc.



4. **Demanda**—Contra el juez, no es causa de nulidad de la sentencia, si ella no le había sido notificada, ni en forma alguna se le había hecho conocer su iniciación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 157, Ser. 3ª.

5. **Demanda**—El mandatario general no puede ser obligado á intervenir en demandas que no hayan sido notificadas al mandante directamente.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 393, Ser. 3ª.

6. **Demanda**—Reconocida la verdad de la demanda procede la condenación del demandado.—Jur. Com., tom. 7, pág. 12, Ser. 4ª.

7. **Demanda**—En tanto no se haya entregado copia de la demanda, no corre el término para contestarla.—Jur. Com., tom. 7, pág. 83, Ser. 4ª.

Demanda—Véase: *Libros de comercio*, núms. 1, 2 y 30 —*Notificación por cédula*, núm. 1 —*Copia*, núm. 1 —*Cos-*

4—Se alegó como causa de nulidad de la sentencia, que en la fecha en que ella fué pronunciada existía pleito pendiente contra el juez *a quo*, ante los tribunales de la prov. de B. Aires. El Inferior por el mismo auto en que concedió el recurso, expresó que no tenía conocimiento del litigio á que el apelante se refería. Debe hacerse honor á la palabra del magistrado, cuya manifestación tenía además en su apoyo las mismas actuaciones. Si el recurrente había iniciado demanda contra la persona del juez, ¿porqué no la llevó oportunamente á su conocimiento pidiéndole su separación de la causa? ¿Porqué esperó á que pronunciase su fallo, y porqué recién después de dictado éste, hace valer el impedimento legal? Todo juez, dice el art. 384 del Cód. de Proc., que es halle en alguno de los casos de legítima excusación, se inhibirá manifestando la causa, pero ¿cómo podía inhibirse el Inferior si ignoraba la existencia del pleito? No basta que haya demanda pendiente; es necesario además, que de ella tenga noticia el magistrado, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, según declaración espontánea del mismo.

5—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: verb. *Apoderado general*, núm. 1.

6—De acuerdo con el núm. 1.

7—Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Rebelión*, núm. 1.



tas, núms. 36 y 49—*Excepción de defecto legal*, números 3, 4, 5, 6 y 7—*Excepciones*, núms. 7 y 17—*Prueba de la acción*, núms. 1 y 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 7—*Documento*, núms. 1 y 2—*Tercero*—*Arraigo*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 3—*Prueba de la demanda*, núm. 1—*Apelación*, núm. 9—*Artículos para el consumo*, núm. 1—*Compraventa*, núm. 19—*Documentos acompañados*, núm. 1—*Caución prestada*, núm. 1—*Excepción de prescripción*, núm. 4—*Estranjero*, núm. 2—*Contrato de compraventa*, núm. 16—*Daños y perjuicios*, núm. 22—*Defecto legal*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 30—*Excepción de litispendencia*, núm. 12—*Acción pro-socio*, núm. 1—*Posesión*, núm. 9—*Alegato*, núm. 1—*Alimentos*, núm. 1—*Competencia*, núm. 5—*Contrato verbal*, núm. 3—*Desistimiento de la acción*, núm. 3—*Depósito*, núm. 1—*Excepción de arraigo*, núm. 3—*Jurisdicción del demandado*, núm. 1—*Mandato*, núm. 14—*Facultad especial*, núm. 1—*Filiación legítima*, núm. 1—*Heredero*, núm. 10—*Mandato general*, núm. 2—*Acto comercial*, núm. 2.

1. **Demandas**—El poder general para el cobro de cuentas, es bastante para intervenir en las demandas contra los poderdantes.—Jur. Com., tom. 9, pág. 329, Ser. 4^a.

2. **Demandas**—Del síndico, fundadas en los libros del concurso no pueden calificarse de temerarias, por lo que no procede la condenación en costas.—Jur. Com., tomo 9, pág. 250, Ser. 4^a.

1^a. **Demanda alterada**—Trabado el litigio por demanda y contestación, las partes no pueden alterar el cuasi-contrato que de ellas resulte, ni el Juzgado tomar en

2—Véase: verb. *Costas*, núm. 39.

1^a—Véase: verb. *Contrato*, núm. 6.



cuenta las modificaciones, aun cuando aparezcan consentidas por la contraparte.—Jur. Com., tom. 9, pág. 367, Ser. 4^a.

1^a. **Demanda contestada**—La recusación del juez no interrumpe el término para contestar la demanda.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 333, Ser. 4^a.

1. **Demanda defectuosa**—Si ésta llena los requisitos del Código, la escepción de defecto legal es improcedente.—Jur. Com., tom. 8, pág. 120, Ser. 4^a.

2. **Demanda defectuosa**—La cuenta que no detalla las mercaderías, hace procedente la escepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda.—Jur. Com., tom. 9, pág. 247, Ser. 4^a.

1^b. **Demanda desistida**—Trabado el cuasi contrato por la contestación á la demanda, el desistimiento del actor de la acción deducida y la petición de otros pronunciamientos, importa el término del litigio y obliga al Juzgado á la sustanciación de la nueva demanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 339, Ser. 3^a.

Demanda desistida—Véase: *Escepción de litispendencia*, núm. 1.

1^c. **Demanda de nulidad**—El fallecimiento del demandante

1^a—Según lo dispuesto en el art. 84, Cód. de Proc., solo son admisibles como escepciones dilatorias las enumeradas en el mismo artículo; entre ellas no se encuentra la recusación, habiéndose limitado la ley á señalar á su respecto trámites especiales que no son los marcados para aquéllas. En tal caso la recusación deducida por el demandado antes de contestar la demanda, no puede suspender el término del emplazamiento, pues el ejercicio de la espresada facultad en nada obstaba á la presentación del escrito de contestación ó de escepciones que tuviese que oponer.

2—Véase: *Cuenta detallada*, núm. 1.

1^b—Véase: *Acción desistida*, núm. 1.

1^c—El fallecimiento constaba en autos, y por esto la Cám. dijo que tratándose de una nulidad esencial del procedimiento, atenta la disposición



es causa de nulidad de todo lo obrado después de esa fecha, cualquiera que sea el estado de la causa. — Jur. Com., tom. 10, pág. 197, Ser. 4^a.

1. **Demanda ordinaria**.—El auto que ordena entregar al

del inc. 5º del art. 18 del Cód. de Proc., no puede alegarse la cosa juzgada, mucho más, cuando la prueba del hecho generador de la nulidad constaba de autos, y por documento público como sucedía en el caso que nos ocupa.

1—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos. Esta dijo que disponiendo el art. 505, Cód. de Proc., que en el juicio ejecutivo solo son apelables los autos declarados tales en el tit. XIV del mismo Cód., y no estando enumerados entre ellos el que el juez dicte con motivo de la aplicación de los arts. 525 y 526, contra las pretensiones del ejecutado, como ocurre en el presente caso, declárase improcedente el recurso concedido. Es evidente que la mayoría de la Cám. está en error. La minoría sostuvo la apelabilidad del auto pero sin aducir fundamento alguno. Estamos con la opinión de la minoría, porque aquí no se trata del *juicio ejecutivo*, que es donde está colocado el art. 505, Sección 1ª. Se trataba de la *ejecución de la sentencia*, legislada en la Sec. 2ª á la que no es aplicable el procedimiento de la Sec. 1ª, como no era aplicable tampoco á la Sec. 3ª donde se trata de las tercerías. No es posible afirmar porque esto es tan claro como la luz, que el procedimiento marcado para la Sec. 1ª del tit. XIV sea aplicable á la Sec. 3ª del mismo título, y ¿porqué va á ser aplicable á la Sec. 2ª cuando el Legislador las ha querido seccionar de una manera tan expresa y clara? Si el art. 505 fuese aplicable á la Sec. 2ª, el Juez de 1ª Inst. podría ordenar la venta de un inmueble *sin tasación previa*, y el auto no sería apelable; podría ordenar que se procediese á la venta *sin publicarse avisos* y el auto no sería apelable: si se hubiese tasado el inmueble y se hubiese ordenado la venta por las dos terceras partes de la tasación, y la adjudicación se hubiese hecho por menos de esa base, y el juez aprobase la venta, el auto no sería apelable. Todo esto sería violatorio de la ley, y el auto sería nulo y sin ningún valor, dando lugar á los recursos que acuerda la ley. Pero en el caso que nos ocupa esto es nada al lado de la gran injusticia que se quiere cometer con los ejecutados. Se quiere entregar la suma importe de la ejecución á personas irresponsables, que en su carácter de extranjeros por ejemplo mañana se ausentarían dejando burlados los derechos y las reclamaciones que se pueden formular contra ellas en el juicio ordinario. No puede



ejecutante los fondos depositados por no haberse deducido demanda ordinaria dentro del término, es inapelable.—Jur. Com., tom. 7, pág. 69, Ser. 4^a.

1. Demandado—Si el citado de evicción comparece y acepta el juicio, cesa la intervención del demandado por reivindicación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 3^a.

2. Demandado—Debe comprobar las excepciones que sirven de base á su defensa.—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Ser. 3^a.

Demandado—Véase: *Jurisdicción federal*, núm. 1—*Costas*, núms. 5 y 8—*Excepciones*, núm. 6—*Apoderado general*, núm. 1—*Excepción*, núm. 6—*Excepción de pago*, núm. 1—*Estranjero*, núm. 1—*Demanda*, núm. 6—*Do-*

creerse que la Cám. considere que el auto recurrido no traiga gravamen irreparable, pues se ordena la entrega de una suma importe de la ejecución privándose al ejecutado y despojándolo del derecho que le acuerda la ley para exigir una garantía á las resultas del juicio ordinario. Basta esta sola enunciación para dejar demostrado que el auto trae gravamen irreparable. Los tribunales no pueden con un rasgo de pluma suprimir una garantía acordada por la ley al que ha sido vencido en el juicio sumario por cobro de pesos. La Cám. que resuelve el caso en esta última instancia debe recapacitar sobre la suerte ulterior de los juicios. Ella despoja á los litigantes de un derecho consagrado espresamente por la ley como la última salvación, como el último recurso acordado al que ha sido vencido en un juicio cuyos términos breves y angustiosos impiden la amplitud de la defensa. ¿Es posible que la Cámara que considere el auto de 1^a Inst. que declara no haber lugar á exigir u a fianza que lo ponga al abrigo de las resultas del juicio ordinario no sea apelable? ¿Es posible que un auto de esta naturaleza no sea nulo, y no cause la nulidad del procedimiento por ser violatorio á la ley?

1—El citado de evicción, asumiendo personería sale á la defensa de los derechos que al demandado se reclaman acerca del inmueble objeto de la reivindicación, y es conveniente para la secuela de la *litis*, que una de las partes que litigan no esté investida de una doble representación, como sucedería si se admitiesen las peticiones de ambas partes. En contra. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Evicción*, núm. 1.

2—Leyes 39, tit. 2^o; y 8^a, tit. 3^o, l'art. 3^a.



cumentos agregados, núm. 1—*Mercaderías*, núm. 1—*Apo-derado*, núm. 10—*Confesión ficta*, núm. 1—*Bienes raíces*, núm. 2—*Interdicto de obra nueva*, núm. 1—*Man-dato*, núm. 10—*Prueba*, núm. 19.

Demandados—Véase: *Comunidad de derechos*, núm. 1.

1°. **Demandante**—Cuando el demandante no justifica su acción debe darse por quito al demandado.—Jur. Com., tom. 1, pág. 408, Ser. 4ª.

Demandante—Véase: *Sociedad demandada*, núm. 2—*Chancelación*, núm. 2—*Juzgado*, núm. 1—*Sentencia definitiva*, núm. 4—*Acción reivindicatoria*, núm. 1—*Apo-derado*, núm. 10.

Demora—Véase: *Bultos*, núm. 2.

Denuncia—Véase: *Delitos*, núm. 16—*Curador*, núm. 2.

1. **Denunciante**—Los denunciantes forman prueba respecto á la identidad del reo si existen otras circunstancias que no hagan inverosímil su afirmación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 203, Ser. 4ª.

2. **Denunciante**—En los delitos que pueden ser denunciados por cualquiera del pueblo no es necesario que el denunciante justifique el carácter que invoca.—Jur. Criminal, tom. 8, pág. 10, Ser. 4ª.

3. **Denunciante**—La detención por la Policía, no puede fundar una acción por calumnia, si el denunciante no imputó al detenido delito alguno.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 392, Ser. 4ª.

4. **Denunciante**—No puede ser responsabilizado por el resultado de la causa seguida de oficio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 234, Ser. 4ª.

1ª—Ley 1ª, tit. 14, Part. 3ª.

2—Véase: verb. *Delito*, núm. 17.

3—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 20.

4—Art. 168 del Cód. de Proc. Crim.



5^a. Denunciante—Tiene derecho para apelar, de todos los autos dictados, en la fecha en que asuma el carácter de acusador, pues para él no hacen cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

Denunciante—Véase: *Acciones civiles*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 19.

1. De oficio—El Juzgado puede de oficio ordenar la presentación del original del contrato cuya copia se ha acompañado al iniciar la acción.—Jur. Com., tom. 3, pág. 263, Ser. 4^a.

2. De oficio—El Juzgado no puede de oficio declarar nula una tasación consentida por las partes.—Jur. Com., tom. 5, pág. 140, Ser. 4^a.

3. De oficio—El rechazo de oficio y sin sustanciación de la acusación por injuria no hace cosa juzgada; el querellante puede iniciar acción por calumnia fundada en los mismos hechos.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 143, Serie 4^a.

4. De oficio—El juez puede de oficio revocar la providencia en que reconocía fuerza ejecutiva á una obligación que no revista ese carácter.—Jur. Civ., tom. 7, página 353, Ser. 4^a.

5^b. De oficio—El juicio de concurso es general y al juez que de él conozca deben remitirse los expedientes aun de oficio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 386, Ser. 4^a.

6. De oficio—El denunciante no puede ser responsabi-

5^a.—Véase: verb. *Acusador*, núm. 1.

1.—Véase: verb. *Contrato original*, núm. 1.

2.—Véase la nota del verb. *Bienes raíces*, núm. 1.

3.—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 1.

4.—Ley 2^a, tit. 22, Part. 3^a.

5^b.—Véase: verb. *Concurso*, núm. 2.

6.—Véase: verb. *Denunciante*, núm. 4.



lizado por el resultado de la causa seguida de oficio—Jur. Crim., tom. 9, pág. 234, Ser 4^a.

7. De oficio—Si de autos no resulta comprobada la identidad de la persona, el juez puede de oficio desconocerla, aun cuando las partes no le hayan sometido esta decisión desconociéndola.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 213, Ser. 3^a.

De oficio—Véase: *Acusación*, núm. 3—*Incompetencia*, núm. 1—*Médico*, núm. 1—*Contrato ilícito*, núm. 1—*Costas*, núm. 17—*Sobreseimiento*, núm. 10—*Competencia entre jueces*, núm. 1—*Excepción de incompetencia*, núm. 10—*Honorarios*, núm. 14—*Defensor de ausentes*.

1^a. Departamento alquilado—El sublocatario carece de acción para acusar á otro de violación de domicilio si no se refiere especialmente á su departamento.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 325, Ser. 4^a.

1^b. Dependientes—De comercio, si bien el factor ó de-

7—Se alegó que no habiendo los interesados desconocido la personería ni puesto en duda la identidad de la parte con la persona que siguió el juicio, no le era lícito al juez hacerlo oficiosamente, pues que si bien éste puede suplir lo que es de derecho, no le es lícito invocar hechos no alegados por las partes. A esto se contesta diciendo que, es muy diverso referirse á hechos no mencionados ni constantes en autos, y estudiar los que en ellos se encuentran consignados con más proligidad y detención que lo hubiesen hecho los mismos interesados, viendo en ellos lo que éstos no han observado, y deduciendo consecuencias que aquéllos no hubiesen alcanzado. Una cosa sería también negar la personería de una parte reconocida por la contraria, y otra muy distinta deducir de los hechos la falta de acción y el ningún derecho del demandante, que es lo que vendría á resultar existiendo bastante motivo para dudar acerca de la identidad de las personas presentadas como parte.

1^a—El sublocatario solo sería ofendido si se violase su domicilio, reducido en las casas de vecindad, á su propio departamento.

1^b—Arts. 158 del Cód. de Com. ant., y 157 del vig. Véase: Obarrio, Derecho Comercial, § 153.



pendiente de comercio tiene derecho al cobro de un mes de sueldo al ser despedido, no puede reclamar la parte de las utilidades asignadas para cuando prestaba servicio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 136, Ser. 4.^a

2^a. **Dependientes**—De oficinas autorizadas para otorgar instrumentos públicos, no pueden ser testigos en las escrituras que se otorguen ante otro escribano.—Jur. Com., tom. 3, pág. 420, Ser. 4.^a.

2^b. **Dependientes**—De comercio, los que además del sueldo son retribuidos con una parte de las utilidades, solo tienen derecho á las que según balance resulten en la casa que prestan sus servicios.—Jur. Com., tom. 6, pág. 61, Ser. 4.^a.

3. **Dependientes**—De comercio, la locación de servicios corresponde á la jurisdicción civil, aun cuando se trate de dependientes de comercio.—Jur. Com., tom. 5, página 414, Ser. 4.^a.

Dependientes— Véase: *Fianza civil*, núm. 1—*Cuenta pasada*, núm. 1.

1. **Depositante**—Las diligencias judiciales hechas en beneficio exclusivo del depositante, deben ser á su costa si la testamentaria carece de bienes propios.—Jur. Civ., tomo 12, pág. 111, Ser. 3.^a.

1^a. **Depositario judicial**—La imputación de haber sido

2^a—Arts. 990 y 1004 del Cód. Civ.

2^b—Véase: verb. *Balance*, núm. 2.

3.—El Cód. de Com. vigente ha suprimido el título que existía en el anterior sobre el contrato de locación, y por consiguiente, las disposiciones del Cód. Civ. son las que rijen las relaciones de derecho entre locador y locatario, salvo los casos de excepción á que se refiere el art. 1624, Cód. Civ., 87 y 221, Cód. de Com., entre los cuales no puede comprenderse el que nos ocupa.

1^b—Se trataba de un incidente que por su propia naturaleza y gravedad paralizaba el juicio ejecutivo—art. 405 del Cód. de Proc.



sustituídas por el depositario los mercaderías embargadas debe sustanciarse en incidente separado el que paraliza el juicio ejecutivo.—Jur. Com., tom. 1, pág. 248, Ser. 4^a.

2. **Depositorio judicial**—La remuneración del depositario debe ser proporcionada al valor de los bienes embargados.—Jur. Com., tom. 1, pág. 294, Ser. 4^a.

3. **Depositorio judicial**—Está obligado á entregar el depósito sin perjuicio del cobro de gastos y honorarios, pero no tiene derecho de retención.—Jur. Com., tom. 2, pág. 107, Ser. 4^a.

4. **Depositorio judicial**—Tiene derecho al pago de comisión y gastos y aun á la renuncia del cargo, aunque el mandamiento en que fué nombrado no exista en autos.—Jur. Com., tom. 2, pág. 125, Ser. 4^a.

5. **Depositorio judicial**—No tiene derecho á percibir los gastos de alquiler de casa si el acreedor justificara haberlos pagado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 165, Ser. 4^a.

6. **Depositorio judicial**—Es responsable de los objetos depositados, ó de su valor, si los hubiera dado á un se-

3—La Cámara no trae ningún fundamento en esta resolución, y no podía fundarla en derecho, pues está en abierta oposición con el art. 2218 del Cód. Civ. que autoriza al depositario á retener el depósito hasta el entero pago de lo que se le adeuda con este motivo, pero no por la remuneración, ni por daños y perjuicios, ni por ninguna otra causa estraña al depósito.

4—Concurrían otras circunstancias que hacían presumir la existencia del depósito. Constaba en autos el haberse librado el mandamiento y se espresó por la parte que los bienes se encontraban en poder del depositario.

5—Porque el tercero que hace el pago ignorándolo el deudor se subroga en los derechos del acreedor—art. 658, inc. 3° del Cód. Civ.

6—El Juez de 1ª Inst. dijo que según resultaba, los bienes que se embargaron habían sido vendidos en otro juicio y el acreedor había recibido el importe de su producido; y dado lo espuesto existía imposibilidad para que el ejecutado los presentase, por lo cual no podía hacérsele



gundo embargo sin salvar los derechos del primer ejecutante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 409, Ser. 4^a.

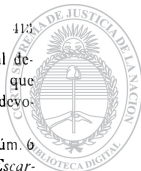
7. Depositario judicial—Los gastos del depositario judicial son á cargo del concurso, aun cuando el depósito sea anterior á la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 4, pág. 231, Ser. 4^a.

8. Depositario judicial—Aun cuando un socio depositario haya firmado por la razón social, él es personalmente responsable de la devolución del depósito.—Jur. Com., tom. 8, pág. 323, Ser. 4^a.

Depositario judicial—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1—*Costas*, núm. 27.

la intimación pedida por el ejecutante y á que se refiere el art. 459 de Cód. de Proc. La Cám. revocó el auto fundándose en que de las actuaciones resultaba la connivencia del depositario con el deudor y que los antecedentes daban mérito para ordenar el arresto del depositario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 459 del Cód. de Proc., y aun para que fuese sometido á la justicia criminal por los indicios de defraudación que los antecedentes recordados ofrecían.

8—La diligencia de embargo se verificó personalmente y solo con uno de los socios, á quien se constituyó depositario, habiendo éste suscrito la diligencia con la firma social. Si bien este hecho puede determinar responsabilidades en el orden civil ó comercial, para el otro socio que no firmó, en ningún caso el hecho personalísimo del socio depositario aceptando el depósito y no devolviéndolo, puede constituir una responsabilidad en el orden criminal sino para el mismo depositario y no para los otros socios, porque la solidaridad social no alcanza sino á los efectos civiles, debiendo las responsabilidades *ex-delicto* probarse y establecerse por la coparticipación en el hecho punible. El arresto decretado contra el depositario infiel es una medida de coerción que reconoce como fundamento y justificativo la existencia de una falta ó delito que debe castigarse; y la coerción como el castigo no pueden caer sino sobre el autor del hecho punible, no pudiendo las convenciones sociales de orden civil ó comercial establecer la solidaridad de los socios en las faltas y en el castigo. La sociedad es una entidad jurídica distinta de las personas que la forman, y no puede aplicarse la sanción del art. 459, Cód. de Proc., sino á las personas de existencia visible que se constituyan en depositarios judiciales.



1^a. Depósito — Justificado el hecho del depósito, al demandado corresponde la prueba de la devolución que alega; si no la presenta, debe ser condenado á su devolución.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 96, Ser. 3^a.

Depósito—Véase: *Accionista*, núm. 1 — *Adulterio*, núm. 6 — *Embargo suspendido*, núm. 1 — *Fiador*, núm. 3 — *Escarcelación bajo fianza*, núm. 17 — *Bienes propios*, núm. 1 — *Embargo de fondos*, núm. 1.

1^b. Depósito en garantía—El dador de una carta de crédito, con depósito en garantía, debe aplicarlo á su cancelación en la fecha que el portador haya hecho uso de ella.—Jur. Com., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

1^c. Depósito judicial—El martillero debe depositar íntegro el producido del remate sin descontar la comisión y gastos.—Jur. Com., tom. 2, pág. 213, Ser. 4^a.

2. Depósito judicial—A la orden de un juez, de fondos pertenecientes á terceros, aleja toda idea de apropiación en provecho propio, y por consiguiente no puede ser calificado como delito de defraudación.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 34, Ser. 4^a.

3. Depósito judicial—Para que la consignación surta los efectos del pago, debe ser judicial; el depósito á la orden del acreedor, carece de valor jurídico.—Jur. Com., tom. 9, pág. 361, Ser. 4^a.

4. Depósito judicial—El dinero efectivo de la testamen-

1^a—El demandado, en la escepción se hace actor—Ley 1^a, tit. 14, Part. 3^a.

1^b—Véase: *Carta de crédito*, núm. 1.

1^c—Tratándose de sumas de dinero provenientes de las cosas que son objeto de litigio, deben ellas ser depositadas en el Banco de la Nación Argentina, con arreglo á la ley de su creación.

2—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 23.

3—Véase: *Consignación en pago*, núm. 5.

4—En el caso que motivó esta resolución, no se discutían los dere-



taria debe depositarse judicialmente si existen menores.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 386, Ser. 3ª.

5. Depósito judicial—Las cuestiones entre el depositante y aquel que tiene á su orden el depósito, deben ventilarse en juicio ordinario.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 204, Ser. 3ª.

Depósito judicial—Véase: *Cargador*, núm. 1.

Derecho—Véase: *Filiación natural*, núm. 5—*Diligencia de prueba*, núm. 2.

1. Derechos y acciones—La venta de los derechos y acciones que puedan corresponder al vendedor como heredero de determinado causante, no comprende los que puedan corresponderle sobre los mismos bienes como sucesor de otros no determinados en la escritura.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 305, Ser. 3ª.

1. Derecho de acusar—No puede sobreseerse la causa contra el prófugo en tanto no haya transcurrido el término que la ley fija para la prescripción del derecho de acusar —Jur. Crim., tom. 5, pág. 106, Ser. 4ª.

2. Derecho de acusar—La paralización de la causa durante un tiempo que no baste para declarar la prescripción del derecho de acusar, debe considerarse circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 401, Serie 4ª.

1ª. Derecho de aprehensión—El derecho de aprehensión chos que el Cód. Civ. acuerda á los padres legítimos respecto de la administración y usufructo de los bienes de sus hijos—arts. 287 y 293—sino que la cuestión versaba sobre si los dineros de los menores, mientras se tramitaba el juicio necesario, debían quedar en poder del padre ó depositario judicial. Se resolvió en el sentido del sumario de acuerdo con la resolución de la Cám. Véase: Inst., tom. 1º, verb. *Padres*, número 1930.

5—Art. 66 del Cód. de Proc.

1ª—Véase: verb. *Aprehensión*, núm. 1.



que la ley concede al particular en los casos de infraganti delito, no puede estenderse á las vías de hecho para impedir la fuga.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 151, Serie 4^a.

1^a. **Derechos del deudor**—Para que el acreedor pueda ejercitar los derechos y acciones del deudor, debe existir subrogación judicial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 14, Serie 3^a.

Derechos litigiosos—Véase: *Tasación*, núm. 1.

1^b. **Derecho á poseer**—El que solo invoca un derecho á poseer, no puede deducir acciones posesorias que la ley acuerda exclusivamente al que posee ó ha poseído.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 348, Ser. 3^a.

1^c. **Derecho posesorio**—La cesión de derechos posesorios es un contrato innominado que no requiere para su validez la forma de instrumento público.—Jur. Civ., tomo 9, pág. 386, Ser. 3^a.

1^d. **Derecho preferente**—El acreedor cuyo derecho preferente se ha reconocido en el estado de graduación de créditos, puede dirigir su acción contra cualquiera de los acreedores de grado inferior que haya afianzado, sin necesidad de hacerlo contra el de último término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 23, Ser. 3^a.

1^e. **Derecho de propiedad**—Puede ser atacado criminalmente, y los tribunales están obligados á tramitar la acción.—Jur. Crim. tom. 2, pág. 397, Ser. 4^a.

1^a —Véase: *Acciones y derechos*, núm. 1.

1^b —Véase: *Acción posesoria*, núm. 1.

1^c —Véase: verb. *Cesión de derechos*, núm. 1.

1^d —Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1.

1^e —La acción deducida se fundaba en el art. 196 del Cód. Pen., y los hechos invocados cuya prueba ofreció el querellante concordaban con dicha disposición.



1°. **Derecho de retención**—El derecho de retención, de los objetos embargados, que la ley acuerda al depositario es solo en cuanto al pago de los gastos sin que pueda hacerlo extensivo al de los honorarios.—Jur. Com., tom. 1, pág. 294, Ser. 4ª.

2. **Derecho de retención**—El depositario está obligado á entregar el depósito sin perjuicio del cobro de gastos y honorarios; pero no tiene derecho de retención.—Jur. Com., tom. 2, pág. 107, Ser. 4ª.

3. **Derecho de retención**—El escribano secretario de un laudo arbitral, no tiene derecho de retención sobre el espediente hasta tanto se le paguen las costas.—Jur. Comercial, tom. 6, pág. 274, Ser. 4ª.

4. **Derecho de retención**—Los que han recibido con obligación de entregar ó restituir, y que á la vez les asiste el derecho de retener ó de compensación, no podrán ser considerados reos de defraudación por el hecho de apropiarse ó distraer lo que lícitamente creyeron que podían retener ó compensar.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 278, Serie 4ª.

5. **Derecho de retención**—El cargador tiene derecho de retención sobre mercaderías porteadas, en tanto no le sea satisfecho el valor de los fletes ó se deposite judicialmente la diferencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Serie 4ª.

6. **Derecho de retención**—La revocación de una orden de retención, no importa obligación de entregar, si por mo-

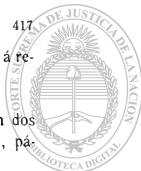
1ª—Véase: verb. *Depositario judicial*, núm. 3. Art. 2218 del Cód. Civ.

2—Véase: *Depositario judicial*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Costas*, núm. 28.

4—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 39.

5—Véase: verb. *Cargador*, núm. 1.



tivos especiales el tenedor se considera con derecho á retener.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 178, Ser. 4^a.

Derrumbe—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 29.

1. Desacato á la autoridad—Debe ser penado con dos años, si el reo es reincidente.—Jur. Crim., tom. 4, página 354, Ser. 4^a.

2. Desacato á la autoridad—El disparo intencional de arma, de fuego con las circunstancias agravantes de desacato á la autoridad, y el haber causado lesiones, debe ser penado con dos años y seis meses de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 349, Ser. 4^a.

3. Desacato á la autoridad—Agravado con lesiones, debe ser penado con dos años de prisión, si el reo es reincidente.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 52, Ser. 4^a.

4. Desacato á la autoridad—El atentado á la autoridad, agravado por un desacato anterior, debe ser penado con un año y ocho meses de prisión, si existen circunstancias atentatorias.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 49, Ser. 4^a.

5. Desacato á la autoridad—Con armas, agravado con lesiones, debe ser penado con un año y ocho meses de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 362, Ser. 4^a.

6. Desacato á la autoridad—Y atentado con armas, debe ser penado con dos años de prisión, si el reo es reincidente.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 412, Ser. 4^a.

7. Desacato á la autoridad—Agravado con lesiones, debe ser penado con dos años de prisión, si el reo

1—Arts. 84, inc. 20, 234 y 235 del Cód. Pen.

2—Arts. 87 y 99 del Cód. Pen.

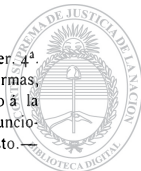
3—De acuerdo con el núm. 1.

4—Véase: *Atentado á la autoridad*, núm. 9.

5—Arts. 85 y 235 del Cód. Pen.

6—Véase: *Atentado con armas*, núm. 5.

7—Véase el núm. 3.



era reincidente.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 373, Ser. 4^a.

8. Desacato á la autoridad—La provocación con armas, á un agente de orden público, importa un desacato á la autoridad, y si este se encuentra ejerciendo sus funciones, debe castigarse al reo con seis meses de arresto.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 242, Ser. 4^a.

1^a. Desalojo—El lindero que por temor de derrumbe se ve oblicado al desalojo de la propiedad, solo puede reclamar, como daños y perjuicios, el valor de la locación durante el tiempo que dure la reconstrucción de la pared medianera.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 428, Ser. 3^a.

2. Desalojo—El reconocimiento del carácter de locatario en los juicios de desalojo, debe fijarse dentro de corto término.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 422, Ser. 3^a.

3. Desalojo—En el juicio por desalojo no procede la citación por edictos.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 429, Serie 3^a.

Desaparición—Véase: *Defraudación*, núm. 16.

Descendientes—Véase: *Información*, núm. 2.

Desconocimiento—Véase: *De oficio*, núm. 7—*Filiación natural*, núm. 2.

Desglose—Véase: *Copia*, núm. 1.

1^b. Desheredación—La esposa es parte en la testamen-

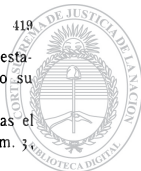
8—Arts. 237 y 238 del Cód. Pen.

1^a—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 29.

2—El juez había fijado el juicio verbal para 27 días después!! La Cámara revocó el auto ordenando al Inferior que fijara el término máximo de 7 días. Y aun este término es excesivo: tres días debiera ser el máximo tratándose de un juicio tan sumario como el de desalojo.

3—Véase: *Citación por edictos*, núm. 2.

1^b—Mientras tanto el título de tal heredera subsiste y no puede considerarse como desheredada, hasta que como lo dispone el art. 3746 del Cód. Civ., los herederos prueben que ha habido justa causa de desheredación y sea así declarado. Establecer por el mero hecho de dis-



taría del marido, no obstante las declaraciones del testamento, en tanto no se declare en juicio contradictorio su desheredación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 95, Ser. 4ª.

1. Desistimiento—Debe ser condenado en las costas el acusador que desiste de la querella.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 226, Ser. 4ª.

Desistimiento—Véase: *Costas*, núms. 14 y 19—*Querella*, núm. 3—*Agravios*, núm. 1—*Juicio de conciliación*, nú-

ponerlo así el testador, que los herederos forzosos pierden su título, es dar á aquél la facultad de disponer de su patrimonio á su arbitrio las declaraciones hechas en su testamento solo prueban su voluntad, pero no los derechos que se atribuyen en perjuicio de terceros mientras no estén comprobados por otros títulos. El art. 627 del Código de Proc. establece, que son parte legítima en el juicio testamentario, todos los que tengan en la sucesión algún derecho declarado por las leyes; y si bien el testador niega implícitamente ese derecho á la que fué su esposa, el artículo 3570 del Cód. Civ. citado, declara al cónyuge sobreviviente heredero forzoso del pre-muerto. Esta disposición debe subsistir hasta tanto no sea resuelto que se ha perdido ese carácter, y el mismo art. 627 citado, así lo determina cuando dice «no obstante cualquier prohibición del testador.» Aun cuando el derecho á la herencia le haya sido negado, es parte legítima en el juicio. Si esta negativa es ó no fundada, debe ser resuelta en oportunidad; en ese ínterin el cónyuge puede vigilar el juicio sucesorio en la parte que pudiera corresponderle.

1.—La cuestión de saber si las costas deben ser á cargo del que desiste de su acción, ha sido resuelta contradictoriamente, no solo por la Cámara de lo Civil, sino también por la S. C. N. Casos en que se ha resuelto por la Cám. de lo Civ. que las costas son á cargo del desistente—tom. 3º, pág. 37, Ser. 4ª; tom. 10, pág. 62, Ser. 4ª; tom. 8º, págs. 472 y 515, Ser. 1ª.—Casos en que se ha resuelto que el desistente no debe pagar las costas—tom. 3º, pág. 54, Ser. 4ª; tom. 6º, pág. 401, Ser. 2ª.—Como se ha dicho también, la S. C. N. ha resuelto la cuestión contradictoriamente, si bien alegando razones de mucho peso para exonerar de las costas al desistente. En el caso que registra en el tomo 13, pág. 364, Ser. 2ª, se dijo; que la imposición de las costas no procedía, mientras que resolvió lo contrario en el tom. 18, pág. 158, Ser. 2ª. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Costas*, núms. 37 y 63.



mero 1—*Sobreseimiento*, núm. 10—*Querellante*, núm. 2—*Acción desistida*, núm. 1—*Comprador judicial*, números 3, 4, 6, 7 y 8—*Contrato de compraventa*, núm. 13—*Remate judicial*, núms. 15, 17, 20, 28 y 30—*Ventas judiciales*, núm. 1.

1°. Desistimiento de la acción—La declaración del acusador de que remite la pena, renunciando á las acciones y derechos que la sentencia pueda concederle, no importa un desistimiento de la acción.—Jur. Crim., tom. 9, página 328, Ser. 4ª.

3. Desistimiento de la acción—El desistimiento de la acción, por error en el demandado, no obliga á deducir nueva demanda.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 198, Ser. 3ª.

2. Desistimiento de la acusación—La nulidad del desistimiento de la acusación, debe recibirse á prueba.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 239, Ser. 4ª.

1^b. Desistimiento del acusador—Hace procedente el sobreseimiento definitivo, si de actos no resulta la existencia de un delito.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 134, Ser. 4ª.

1. Desistimiento del Agente Fiscal—Si de autos resulta la comisión de un delito, ya sea de abuso ó usurpación de autoridad, debe formarse sumario, no obstante el desisti-

1ª—Véase: verb. *Acusador*, núm. 2.

3—Habiendo el actor incurrido en error en cuanto á la designación de la persona demandada, desistió de su acción y pidió que la demanda se entendiera con el verdadero demandado. El juez no hizo lugar por que esta petición debía ser materia de un nuevo pleito. La Cámara revocó el auto diciendo: que no se trataba en el caso, del desistimiento hecho, sino de encaminar la acción instaurada. Debe tenerse presente que el nuevo demandado aceptó su rol de tal y á pesar de ello el juez no aceptó la sustitución pedida.

2—Véase: *Acusación desistida*, núm. 1.

1^b—Arts. 434 y 435 del Cód. de Proc. Crim.

1—Véase: *Abuso de autoridad*, núm. 4.



miento del Agente Fiscal.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 290, Ser. 4^a.

1. Desistimiento de compra—No procede con pérdida de la seña en las compras en remate judicial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 134, Ser. 3^a.

2. Desistimiento de compra—No procede el desistimiento de la compra en remate judicial por el retardo con que el vendedor entregue la cosa vendida.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 139, Ser. 3^a.

3. Desistimiento de compra—Si la compra en remate judicial se hizo por un precio determinado, no procede el desistimiento por la disminución en más del vigésimo, sin perjuicio de la rebaja proporcional.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 140, Ser. 3^a.

4. Desistimiento de la compra—La imposibilidad del vendedor de presentar títulos ó perfeccionar los existentes, permite al comprador optar por el desistimiento sin ulterior responsabilidad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 50, Serie 3^a.

5. Desistimiento de la compra—Del comprador en remate judicial, solo es permitido con la responsabilidad sobre diferencia de precio y gastos, la pérdida de la seña no procede.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Ser. 3^a.

6. Desistimiento de la compra—No debe hacerse lugar al desistimiento del comprador en remate judicial, fundado

1—De acuerdo con la jurisprudencia de la Cám. Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 7. En el tom. 5^o, Inst., verb. *Remate judicial*, núm. 3 se estudia el caso detenidamente.

2—Véase: *Compraventa*, núm. 5.

3—Véase: verb. *Compraventa*, núm. 6.

4—Véase: *Comprador judicial*, núm. 4.

5—Véase: *Comprador judicial*, núm. 6.

6—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 32.



en la imposibilidad de cumplir el contrato.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 411, Ser. 3^a.

7. Desistimiento de la compra—No procede el del comprador en remate judicial después de la oportunidad que la ley fija.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 433, Ser. 3^a.

1^a. Desorden—Teniendo jurisdicción propia el comisario de policía para castigar la ebriedad y el desorden, no puede imputársele abuso de autoridad por ese hecho.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

Desorden—Véase: *Injurias*, núm. 2—*Abuso de autoridad*, núm. 3.

1^b. Despachante de aduana—El despachante de aduana en su carácter de comisionista, solo tiene acción contra el que contrató sus servicios, sin que pueda responsabilizar al propietario de las mercaderías despachadas.—Jur. Com., tom. 4, pág. 20, Ser. 4^a.

1^c. Desperfectos—El lindero solo tiene derecho á cobrar los desperfectos que haya sufrido su propiedad por la reconstrucción de la pared medianera, pero nó los perjuicios por los alquileres dejados de percibir.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 223, Ser. 3^a.

Despoblado—Véase: *Robo*, núms. 3 y 5.

Destierro—Véase: *Adulterio*, núm. 3.

Destinatario—Véase: *Empresa de ferrocarril*, núm. 1.

Destitución—Véase: *Síndico*, núm. 2—*Calumnia*, número 5.

1^d. Destrucción de documentos—No constituye defraudación.

7—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 11.

1^a—Véase: *Abuso de autoridad*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 1.

1^c—Véase: verb. *Alquiler*, núm. 1.

1^d—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 7.

ción si no se justifica plenamente la intención de defraudar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 155, Ser. 4^a.

Detalles—Véase: *Declaración de testigos*, núm. 1.—*Prueba plena*, núm. 1.

1 Detención—El auto que ordena la simple detención á

1—El tit. 17, lib. 2º del Cód. de Proc. en lo Crim. hace especial distinción de la detención y de la prisión preventiva, fijando una línea bien marcada de separación entre ambas. Y en corroboración de esta consideración puede verse el informe del autor del proyecto original de este Cód., Dr. D. Manuel Obarrio, en el que se espresa en la pág. 37, que establece un título especial para la detención y prisión preventiva del encausado, marcando una línea de separación entre una y otra, y abrazando en sus preceptos todo lo que el interés público y las garantías particulares exigían en una materia que afecta ese interés y esas garantías de una manera directa é inmediata. Por consecuencia de esta doctrina, el art. 364 en los diversos incisos, deja al prudente arbitrio del juez, el discernimiento de los casos en que deba decretar la detención de las personas para la comprobación del delito y del delincuente. Así el inc. 2º de dicho artículo, autoriza al juez del sumario para la detención de las personas que encontrase en el lugar de la ejecución de un delito, tan solo porque lo creyese conveniente, y en el inc. 1º, cuando no fuese posible individualizar la persona de su autor y hubiesen dos ó más sobre quienes pueda recaer la responsabilidad penal. Como se ve, si en tales casos procediese el recurso de apelación, de los detenidos en los primeros momentos del sumario, se entorpecería la acción de la justicia, precisamente en los instantes más premiosos del procedimiento, llegando por la repetición y tramitación de tales recursos á frustrarse completamente la investigación del delito y del delincuente. Es por eso, que el art. 365, para conciliar esta amplia facultad de acción de que se hallan investidas las autoridades competentes en interés de la causa pública, con los respetos y garantías que se merece la libertad individual, ha fijado el término de 48 horas á esta especie de detención, bajo la responsabilidad del juez que la dicte. Por otra parte, el recurso sería completamente ineficaz para los fines que puede proponerse un detenido, desde que su resolución siempre había de ser fuera ya del término de 48 horas antes espresado, por no haber un trámite especial y más breve que el ordinario para la decisión de las apelaciones de esta especie—art. 543, Cód. de Proc. Crim.





los efectos de la investigación, no es susceptible del recurso de apelación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 155, Ser. 4^a.

2. Detención—Por la Policía, no puede fundar una acción por calumnia, si el denunciante no imputó al detenido delito alguno.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 392, Serie 4^a.

3. Detención—No procede la de la acusada de adulterio, si está depositada en casa de confianza.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 428, Ser. 4^a.

Detención—Véase: *Nulidad del sumario*, núm. 1.

Detenida—Véase: *Madre*, núm. 1.

Detentador—Véase: *Acción reivindicatoria*, núm. 3.

Deterioros—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 23.

Deuda—Véase: *Papeles de comercio*, núm. 1—*Adjudicación in solutum*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 34—*Extinción de deuda—Escepción de inhabilidad de título*, núm. 18—*Defraudación*, núm. 24—*Chancelación*, número 2.

1. Deudas del causante—La acción para el cobro de

2—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 20.

3—Véase: verb. *Adulterio*, núm. 6.

1—El art. 3284, inc. 4° del Cód. Civ., igual al 634 del de Proc., al disponer que deben entablarse las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de la herencia, ante el juez que conoce en el juicio sucesorio, ha establecido implícitamente que los pleitos á que dichas acciones den lugar deben considerarse como incidentes de la testamentaria, como lo son en efecto. Mientras los bienes de la sucesión permanecen indivisos, todos ellos están afectados al pago de las deudas del causante; pero desde el momento en que se practica la cuenta de división y partición, dejan de ser bienes testamentarios y conviértense en bienes particulares de los herederos á quienes se han adjudicado. La entidad jurídica llamada sucesión ó testamentaria también desaparece con el hecho de la división; y así como los bienes que no han sido materia directa de la cuenta particionaria, quedan en condominio entre los herederos en la proporcionalidad es-



deudas del causante, debe dirigirse contra los herederos individualmente, si se deduce después de practicada la división y partición de herencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 439, Ser. 3ª.

Deuda líquida—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 38.

1ª. Deuda negada—Si por haberse negado en absoluto la deuda, no se ha discutido ni probado el precio de los objetos y su monto total, procede el juramento estimatorio.—Jur. Com., tom. 9, pág. 349, Ser. 4ª.

Deuda pública—Véase: *Bonos*, núm. 1.

1ª. Deudor—Para que el acreedor pueda ejercitar los derechos y acciones del deudor, debe existir subrogación judicial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 14, Ser. 3ª.

Deudor—Véase: *Costas*, núms. 4 y 40—*Embargo*, números 4 y 15—*Excepción de pago*, núm. 2—*Inhibición*, núms. 1 y 6—*Bienes muebles*, núms. 2, 3 y 4—*Compulsa*, núm. 1—*Embargo preventivo*, núm. 9—*Obligación alternativa*, núm. 1—*Comisión del síndico*, núm. 1—*Contrato*, núms. 3 y 4—*Mandamiento*, núm. 1—*Acreedor hipotecario*, núm. 2—*Excepción de pago*, núm. 10—*Fiador*, núm. 1—*Cesión de un pagaré*, núm. 1—*Declaración de testigos*, núm. 4—*Pago*—*Citación*, núm. 1—*Citación de remate*, núm. 4—*Compraventa*, núm. 19—*Domicilio del deudor*, núm. 2—*Firma reconocida*, núm. 3—*Gastos*, número 2—*Alhajas del deudor*, núm. 1—*Cuenta corriente*, núm. 1—*Bienes embargados*, núm. 8—*Excepción de nulidad*, núm. 7—*Honorarios*, núm. 19—*Contrato de compraventa*, núm. 12—*Contrato de fianza*, núm. 1—*Banco*

establecida en esa cuenta, así también las deudas del causante se dividen entre los herederos en la misma proporción—Véase la nota del codificador al inc. 4ª citado.

1ª—Art. 220 del Cód. de Proc.

1ª—Véase: verb. *Acciones y derechos*, núm. 1.



de la Provincia, núm. 1—*Condiciones*, núm. 4—*Obligación*, núm. 2—*Herederos*, núm. 10.

Deudores—Véase: *Moratorias*, núm. 7.

1^a. Deudor solidario—Procede mandamiento contra otro deudor solidario, si los bienes embargados no cubren manifiestamente el crédito y los intereses y costas.—Jur. Com., tom. 5, pág. 381, Ser. 4^a.

Devolución—Véase: *Abogado*, núm. 4—*Contrato de transporte*, núm. 1—*Defraudación*, núms. 11 y 40—*Embargo*, núm. 12—*Sociedad disuelta*, núm. 5—*Costas*, número 18—*Bienes propios*, núm. 1—*Heredero*, núm. 4—*Depósito*, núm. 1.

Día—Véase: *Apelación*, núm. 2—*Notificación personal*, núm. 2—*Notificación por nota*, núm. 1—*Arbitros*, número 6.

Días hábiles—Véase: *Testigos*, núm. 2.

1^b. Día señalado—El que presenta los testigos, debe concurrir el día señalado; si los interrogatarios no fueron presentados, no debe fijarse nueva audiencia para las declaraciones.—Jur. Com., tom. 10, pág. 194, Ser. 4^a.

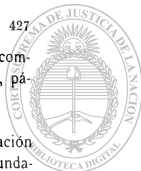
Día señalado—Véase: *Posiciones*, núm. 2.

1^c. Diario—El uso del título de un diario no puede ser

1^a—La circunstancia de haber bienes embargados no puede invocarse para negar el embargo de otros, desde que esa medida de seguridad tiene por objeto garantizar el pago total del crédito y costas del juicio, y debe por consiguiente recaer sobre los bienes suficientes para cubrir ambos—art. 471 Cód. de Proc.—tampoco puede obstar tal circunstancia al segundo mandamiento de ejecución y embargo contra el otro de los firmantes de una obligación solidaria á quien aun no se la había intimado su abono.

1^b—Véase: *Declaración de testigos*, núm. 6.

1^c—El actor se presentó pidiendo que se ordenara la suspensión de la inscripción de una marca que consistía en el título de un diario. El derecho de acordar ó negar la inscripción de una marca de comercio



prohibido sin juicio contradictorio, cuya decisión compete á los tribunales federales.—Jur. Com., tom. 10, página 199, Ser. 4^a.

Diario.—Véase: *Avisos*, núm. 1.

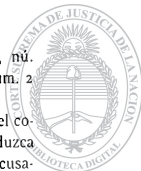
1^a. Dictamen pericial—Es esencial para la apreciación de la reticencia alegada por el asegurador, como fundamento de la nulidad del contrato del seguro.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. Dieta—De los miembros del Congreso Nacional, no es embargable.—Jur. Com., tom. 2, pág. 112, Ser. 4^a.

está conferido especial y privativamente á la autoridad administrativa establecida en la ley de creación de la Oficina de marcas de fábrica, no siendo por lo tanto de la competencia de los jueces ordinarios el ordenar la suspensión del trámite de inscripción que se solicitaba. En el caso que nos ocupa se trataba de un nombre ó denominación comercial que por la ley citada está equiparada á una marca de comercio ó industria, y le es por lo tanto aplicable lo dicho respecto á las marcas de comercio. La notificación que se solicitaba pidiendo se prohibiese la publicación que hacia del diario de cuyo título se trataba, no es procedente, porque la publicación importa un acto de posesión del título ó designación comercial, que como se ha visto está equiparado á la marca de comercio, por más que la designación comercial no necesite ser registrada para dar derechos. En este caso, toda cuestión relativa al uso del título tiene que resolverse teniendo en vista las disposiciones de la ley de creación de la oficina de marcas, que determinan las responsabilidades en que incurre el que usa indebidamente de una marca de comercio ó una designación industrial. Estando el juicio regido por una ley especial del Congreso, correspondería ser resuelto por los tribunales federales, de acuerdo con la ley de 14 de Setiembre de 1863. Por otra parte, nadie puede ser privado de hacer lo que la ley no prohíbe: y atento ese precepto constitucional no puede ser privado el uso del título de un diario mientras no sea vencido en juicio por quien lo reclame como propiedad suya.

1^a—Véase: verb. *Asegurador*, núm. 4.

1^b—Es doctrina admitida por la jurisprudencia de esta Cám., que los privilegios é inmunidades que la Constitución acuerda á los miembros del Congreso Nacional, como una garantía de independencia en el ejercicio de sus funciones, alcanza también á sus dietas.



Diferencia—Véase: *Comitente*, núm. 2—*Calumnia*, número 10—*Asegurado*, núm. 1—*Bienes vendidos*, núm. 2—*Comprador*, núm. 6.

1^a. Diferencias de Bolsa—La falta de entrega por el corredor de Bolsa de las diferencias que el juego produzca en beneficio de su mandante, no puede fundar una acusación de defraudación.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 158, Serie 4^a.

2. Diferencias de Bolsa—Reconocido que la operación verificada entre corredores con ó sin comitentes, se resolvía con el pago de las diferencias, debe rechazarse la acción en que se exija el cumplimiento como contrato de compraventa.—Jur. Com., tom. 8, pág. 202, Ser. 4^a.

1^b. Diferencia de precio—El desistimiento del comprador en remate judicial, solo es permitido con la responsabilidad sobre diferencia de precio y gastos; la pérdida de la seña no procede.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Serie 3^a.

Dilatoria—Véase: *Escepción de falta de personería*, número 7—*Escepción dilatoria*, núm. 2.

Diligencias—Véase: *Acusación*, núm. 2—*Nulidad del juicio*, núm. 2—*Peritos*, núm. 3—*Término extraordinario*, núm. 4.

1^c. Diligencias esenciales—Debe declararse la nulidad del juicio si en diligencias esenciales no se han llenado las formalidades que la ley exige.—Jur. Crim., tom. 8, página 180, Ser. 4^a.

1^d. Diligencia judicial—La falsedad de una diligencia ju-

1^a—Véase: verb. *Corredor*, núm. 5.

2—Véase: *Contrato entre corredores*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Comprador judicial*, núm. 6.

1^c—Art. 138 del Cód. de Proc. Crim.

1^d—Se trataba de una falsedad cometida en instrumento público, impu-



dicial importa un delito cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción criminal.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 369, Ser. 4^a.

Diligencias judiciales—Véase: *Nulidad del procedimiento*, núm. 2—*Prescripción*, núm. 3—*Depositante*, núm. 1.

1^a. **Diligencias preparatorias**—No procede nulidad de la ejecución fundada en la falta de citación del Defensor de Ausentes para las diligencias preparatorias del juicio.—Jur. Com., tom. 8, págs. 235 y 371 Ser. 4^a.

2^a. **Diligencias preparatorias**—Solo pueden decretarse como previas las diligencias determinadas espresamente en la ley.—Jur. Com., tom. 10, pág. 201, Ser. 4^a.

Diligencias preparatorias—Véase: *Absolución de posiciones*, núm. 1.

1^b. **Diligencias de prueba**—No practicadas por incuria de la parte, no deben serlo después de vencido el término de prueba.—Jur. Com., tom. 5, pág. 95, Ser. 4^a.

2. **Diligencias de prueba**—El incidente sobre revocatoria de un auto durante el término de prueba, no lo suspende y la parte debe pedir las demás diligencias que crea necesarias á su derecho.—Jur. Crim., tom. 5, página 151, Ser. 4^a.

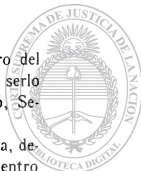
3. **Diligencias de prueba**—No practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no pueden serlo después de vencido.—Jur. Com., tom. 5, pág. 429, Ser. 4^a.

tada al procesado en su carácter de Oficial de Justicia, penada, según lo dispone el art. 281 del Cód. Pen., con tres á seis años de penitenciaría é inhabilitación perpetua para empleo de la misma clase y multa de 200 á 2.000 pesos, cuyo conocimiento es de la exclusiva competencia de la justicia criminal, según lo establece el art. 31 del Cód. de Proc. en lo Crim.

1^a—Véase: *Citación de remate*, núm. 4.

2^a—Art. 70 del Cód. de Proc.

1^b—Art. 118 del Cód. de Proc.



4. Diligencias de prueba — No practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no deben serlo antes de los alegatos.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 426, Serie 4^a.

5. Diligencias de prueba—Las diligencias de prueba, deben ser pedidas en tiempo hábil para evacuarse dentro del término.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 346, Ser. 4^a.

6. Diligencias de prueba—La falta de papel sellado implica negligencia de la parte y deja sin efecto las diligencias de prueba no cumplidas en oportunidad.—Jur. Civ., tom. 7, pág. 412, Ser. 4^a.

7. Diligencias de prueba—Si la prueba es impertinente, el Juzgado puede denegar su diligenciamiento.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 256, Ser. 4^a.

8. Diligencias de prueba—Solo deben practicarse después de vencido el término de prueba, aquellas diligencias cuyo cumplimiento ha urgido el interesado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 240, Ser 4^a.

9. Diligencias de prueba—No practicadas por negligencia de la parte, no deben serlo después de vencido el término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 346, Ser. 4^a.

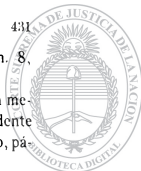
11. Diligencias de prueba—No pueden evacuarse después de vencido el término de prueba, las diligencias que aunque ordenadas dentro de él, la parte no urgió su cumplimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 384, Ser. 3^a.

12. Diligencias de prueba—No pueden quedar sin efecto

7—Esta resolución está en contra de la jurisprudencia establecida en la casi totalidad de los casos resueltos. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Diligencias de prueba*, núm. 18.

8—La parte había dejado pasar tres meses sin pedir el señalamiento de nuevo día para el examen de los testigos.

12—Porque el juez exhortado no tiene jurisdicción para resolver sobre este punto.



por disposición del juez exhortado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 98, Ser. 3^a.

13. Diligencias de prueba—El Juzgado puede para mejor proveer decretar diligencias, aun cuando el incidente no se haya recibido á prueba.—Jur. Civ., tom. 10, página 92, Ser. 3^a.

14. Diligencias de prueba—Las diligencias de prueba pedidas dentro del término, pero sin tiempo habil para su cumplimiento, no deben ser tomadas en consideración al sentenciar.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3^a.

15. Diligencias de prueba—Resultando de autos justificada la negligencia de la parte, deben quedar sin efecto las diligencias de prueba ordenadas.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 110, Ser. 3^a.

16. Diligencias de prueba—Las diligencias de prueba no practicadas dentro del término por negligencia de la parte, no deben evacuarse después de vencido.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 226, Ser. 3^a.

17. Diligencias de prueba—A la parte corresponde urgir para que sean practicadas dentro del término.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 138, Ser. 4^a.

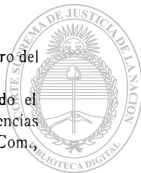
18. Diligencias de prueba—Pedidas en oportunidad pueden ser practicadas después de vencido el término.—Jur. Com., tom. 2, pág. 141, Ser. 4^a.

19. Diligencias de prueba—Pueden recibirse fuera del término de prueba, si la falta es imputable al Juzgado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 187, Ser. 4^a.

13—Se trataba de una cuestión sobre intereses moratorios, la que el Juzgado no podía resolver sin dejar establecido cuál era el interés que el Banco cobraba en esa época.

14—Art. 118 del Cód. de Proc.

17—Art. 477 del Cód. de Proc. Crim.



20. Diligencias de prueba—Deben ser pedidas dentro del término.—Jur. Com., tom. 2, pág. 383, Ser. 4ª.

21. Diligencias de prueba—Después de presentado el alegato, no puede pedirse el cumplimiento de diligencias de prueba no evacuadas durante el término.—Jur. Com., tom. 2, pág. 389, Ser. 4ª.

1ª. Dinero—En efectivo, de la testamentaria, debe depositarse judicialmente, si existen menores.—Jur. Civ., tomo 8, pág. 386, Ser. 3ª.

Dinero—Véase: *Escepción de pago*, núm. 2—*Orden de pago*, núm. 1.

1ª. Dinero del reo— Encontrado en poder del reo y depositado como de su pertenencia, responde á las costas del juicio, aun cuando no haya sido embargado en la debida oportunidad.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 419, Serie 4ª.

Dinero robado—Véase: *Abuso de confianza*, núm. 1.

1ª. Dirección del abogado—La intervención del abogado en los incidentes de la testamentaria, supone que también la tiene en el espediente principal, y en consecuencia, el término para la prescripción de cinco años, solo empieza á correr desde que aparece en autos la dirección de otro letrado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 170, Ser. 3ª.

1ª. Directores—Los terceros que contraten el seguro con sociedades no inscriptas en el Registro Público de Comercio, no pueden reclamar de ésta sino de los directores personalmente, los seguros verificados contravi-

21—El art. 118 dice que «podrán los interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos.»

1ª—Véase: verb. *Depósito judicial*, núm. 4.

1ª—Véase: verb. *Costas*, núm. 22.

1ª—Véase: verb. *Abogado*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Compañía de seguros*, núm. 1.



niendo disposiciones de los estatutos de la compañía.—
Jur. Com., tom. 10, pág. 425, Ser. 4^a.

Director—Véase: *Inhabilidad sobreviniente*, núm. 1

Director del diario—Véase: *Publicación acusada*, número 2.

Discusión—Véase: *Circunstancias atenuantes*, núm. 2—
Homicidio simple, núm. 3—*Amenazas*, núm. 1—*Homicidio sin circunstancias*, núm. 7—*Costas*, núm. 44.

Disolución—Véase: *Sociedad desuelta*, núms. 1, 3, 4 y 6.

1^a. Disolución de una sociedad—La prueba de la disolución de una sociedad justificada por instrumento público, debe revestir igual carácter.—Jur. Civ., tom. 10, página 295, Ser. 3^a.

1^b. Disparidad de cultos —La nulidad del matrimonio fun-

1^a—Arts. 1184, inc. 1^o, y 1191 del Cód. Civ.

1^b—La esposa entabló demanda contra su esposo, para que se declarase nulo su matrimonio celebrado en 1867 ante el pastor de la Iglesia Evangélica Alemana, por pertenecer ella en esa época, como continuaba perteneciendo hasta la época de la demanda, a la comunión católica, sin que en su matrimonio interviniese la iglesia católica, y sin que posteriormente se celebrara el matrimonio ante el párroco católico, en cuya parroquia se encontraba avicindada, ni ante ningún otro cura párroco ó sacerdote católico. Oído el demandado, se espidió sosteniendo la procedencia de la acción deducida. De los documentos exhibidos por los interesados, resultaba plenamente justificado el matrimonio celebrado en 1867 ante el pastor de la Iglesia Evangélica Alemana, apareciendo ambos contrayentes como protestantes. Resultaba asimismo justificado, que la esposa al contraer matrimonio con el demandado pertenecía á la religión católica, en cuya comunión continuó siempre. Dados estos antecedentes, no es dudoso que la ley que rige el caso no es la de matrimonio de 12 de Nov. de 1888, sino la ley canónica vigente en la época en que se celebró el referido matrimonio. Con efecto, el art. 109 de la ley citada, dice testualmente: «Cuando se tratase de un matrimonio celebrado con anterioridad á esta ley y la acción de nulidad se fundare en un impedimento, se aplicarán las



dada en la disparidad de cultos, debe ser juzgada y resuelta con arreglo á las leyes que regían cuando tuvo lugar el acto.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 313, Ser. 3ª.

1. Disparo de arma de fuego—El disparo de arma de fuego con circunstancias atenuantes, debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 170, Ser. 4ª.

2. Disparo de arma de fuego—El disparo de arma de fuego agravado con lesiones debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 376, Ser. 4ª.

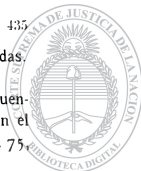
3. Disparo de arma de fuego—Contra una persona, sin lesionarla, debe ser castigado con dos años de prisión en tan-

disposiciones de esta ley; si la acción se fundare en defectos de forma, se aplicarán las canónicas.» Ahora bien, la acción de nulidad instaurada, se fundaba en el defecto de forma de que adolecía el matrimonio que contrajo en 1867, por no haberse celebrado, siendo ella católica, con intervención de la iglesia católica y ante el párroco católico. No son entonces de aplicación las disposiciones de la ley de matrimonio á que se refiere la primera parte del artículo transcrito, sino las leyes canónicas según lo dispuesto en la segunda parte del mismo artículo, desde que la acción instaurada se fundaba en el defecto de forma que la demandante atribuía á su matrimonio. Por las leyes canónicas como por el Código que incorporó á nuestra legislación civil esas leyes—artículos 167, 181 y 182 del Cód. Civ.—el matrimonio entre católicos ó entre un católico y un cristiano no católico, debía celebrarse ante el párroco ú otro sacerdote, con licencia de éste ó del ordinario y en presencia de dos ó tres testigos, siendo declarados nulos é irritos los que se celebraren sin estas solemnidades. Asi lo tiene declarado el Concilio de Trento en la sesión 24, cap. 1º—véase: *Devoti*, Instituciones Canónicas, pág. 171—en el caso que nos ocupa, se habían llenado los requisitos de forma establecidos por las leyes canónicas vigentes en 1867 en que se celebró el matrimonio, produciendo esa omisión la nulidad del acto, de conformidad con la disposición del art. 1044 del Código Civil.

1—Arts. 52, 83 y 99 del Cód. Pen.

2—Arts. 52, 99 y 120 del Cód. Pen.

3—Arts. 52 y 99 del Cód. Pen.



to no se justifique la existencia de intenciones homicidas.

—Jur. Crim., tom. 3, pág. 395, Ser. 4^a.

4. Disparo de arma de fuego—Para evitar las consecuencias de una agresión provocada, debe ser penado con el mínimun que la ley fija.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 75, Ser. 4^a.

5. Disparo de arma de fuego—Contra una persona, sin intención homicida, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 358, Ser. 4^a.

6. Disparo de arma de fuego—Intencional, y con las circunstancias agravantes de desacato á la autoridad y haber causado lesiones, debe ser penado con dos años y seis meses de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 349, Serie 4^a.

7. Disparo de arma de fuego—Si las lesiones causadas con arma de fuego requieren mayor pena que la fijada á los disparos, éstos solo se consideran como el medio

4—Arts. 52 y 99 del Cód. Pen. Este último art. señala una misma é idéntica pena, de uno á tres años de prisión, para el delito *sui generis* de disparar intencionalmente una arma de fuego contra una persona, sea que se cause ó no heridas, á la que corresponde pena menor. Al reprimir la ley con pena tan severa el abuso de las armas de fuego por el peligro que en sí encierra el hecho, no tuvo en cuenta el resultado real del disparo, pues lo mismo lo pena cuando no produce lesión alguna, que cuando causa una que tenga pena menor, según resulta de los términos espresos del art. 99 citado; y así como no hay dos delitos y por consiguiente la agravante de reiteración, cuando el homicidio se comete con un disparo de arma de fuego, ni se considera agravante de una lesión curable en más de un mes ó que se dejó deformidad notable, el hecho de que ella se produjo con bala, tampoco puede considerarse que exista dicha agravante de reiteración cuando el balazo solo causó lesión leve. Así lo ha entendido también esta Cám. en la causa que se registra en el tom. 8º, Ser. 2ª, pág. 97.

5—Art. 99 del Cód. Pen.

6—Véase: *Desacato á la autoridad*, núm. 2.

7—Véase: *Confesión del reo*, núm. 3.



por el cual se cometió el delito, si requieren una pena menor solo se conceptúan circunstancia agravante del disparo de arma de fuego.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 277, Ser. 4ª.

8. Disparo de arma de fuego—Contra una persona sin causarle lesiones, para ser penado como tentativa de homicidio, debe existir plenamente probado que ese fué el objetivo del ataque.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 214, Ser. 4ª.

9. Disparo de arma de fuego—Contra una persona, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 202, Ser. 4ª.

8—«Cuando un hecho concreto constituye un delito propio, determinado, ó individualmente penado, no es legalmente procedente atribuir una mayor intención al delincuente en la estensión del mal para calificar el hecho con mayor gravedad, salvo si circunstancias muy señaladas y bien determinadas no demuestran por modo claro y evidente esta mayor trascendencia en la intención.»—Sentencia del Superior Tribunal de España, de 25 de Octubre de 1986, Viada, tom. 1º, pág. 61.—Todo el que dispara una arma de fuego contra una persona, comete un delito previsto y penado por el Cód. Si por ese medio causa la muerte, será reo de homicidio, si causa lesiones graves sufrirá la pena que el Cód. señala, pero si causa solamente lesiones leves ó si no hiere á nadie, ¿podrá el solo hecho de disparar el arma ser considerado como tentativa de homicidio? El Cód. dispone lo contrario en su art. 99. Para que la tentativa de homicidio exista, es necesario que por otros hechos, además del disparo de arma de fuego, resulte probada la resolución de cometer el delito: la voluntad homicida. Y tratándose de hechos cometidos en un acceso de furor ó de irritación, la ciencia jurídica aconseja dudar de la importancia de la voluntad del agente y resolver la duda en sentido favorable. El texto expícito del art. 8º del Cód. Penal exige para que haya tentativa, que exista la resolución de cometer el delito y que ésta se manifieste por actos que tengan relación directa con él; y en estas breves palabras está comprendida toda la doctrina. Los requisitos indispensables para la tentativa de un delito son: resolución, voluntad positiva de cometer ese delito y no otro; actos exteriores que con ese mismo delito tengan relación directa.

9—Arts. 52 y 99 del Cód. Pen.



10. Disparo de arma de fuego—Intencional, debe ser penado con dos años de prisión, si no está justificada la intención homicida.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 19, Serie 4ª.

11. Disparo de arma de fuego—Intencional contra una persona, debe ser penado con dos años de prisión, si existen circunstancias agravantes y atenuantes.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 66, Ser. 4ª.

12. Disparo de arma de fuego—Con circunstancias atenuantes, debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 214, Ser. 4ª.

13. Disparo de arma de fuego—Contra una persona, debe ser penado con año y medio de prisión, si está reconocida la ebriedad del reo.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 274, Ser. 4ª.

14. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una persona que ejerce autoridad, debe ser penado con dos años y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 126, Ser. 4ª.

15. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una persona sin causar lesiones, debe ser penado con un año de prisión, si existió provocación y el reo es menor de edad.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 147, Ser. 4ª.

16. Disparo de arma de fuego—Intencional, debe ser penado con un año de prisión, si está probada la provo-

10—De acuerdo con el principio sentado en el núm. 8. Arts. 52 y 99 del Cód. Pen.

11—Arts. 52, 53, 83, 84 y 99 del Cód. Pen.

12—Arts. 52, 53, 83 y 99 del Cód. Pen.

13—Arts. 52, 81 y 99 del Cód. Pen.

14—Arts. 52, 84, 87, 99 y 235 del Cód. Pen.

15—Arts. 52, 83, incs. 2ª y 7ª; y 99 del Cód. Pen.

16—Véase la nota precedente.



cación, aun cuando haya causado lesiones.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 199, Ser. 4^a.

17. **Disparo de arma de fuego**—Contra una persona, que que no causa lesiones, debe ser penado con un año de prisión, si existen circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 77, Ser. 4^a.

18. **Disparo de arma de fuego**—Debe ser castigado con tres años de prisión el disparo de arma de fuego, si existen las circunstancias agravantes de reiteración y atentado á la autoridad.—Jur. Crim. tom. 6. pág. 407, Ser. 4^a.

19. **Disparo de arma de fuego**—Intencional, contra una persona, debe ser castigado con dos años de prisión, si no existen circunstancias.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 311, Serie 4^a.

20. **Disparo de arma de fuego**—Debe ser penado con año y medio de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 188, Ser. 4^a.

21. **Disparo de arma de fuego**—Intencional, contra una persona, debe ser castigado con dos años y medio de prisión si hubo reiteración y el reo era reincidente.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 227, Ser. 4^a.

22. **Disparo de arma de fuego**—Intencional, contra una persona, debe ser castigado con un año de prisión, si existen atenuantes.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 245, Ser. 4^a.

23. **Disparo de arma de fuego**— Si de los antecedentes del hecho existen motivos fundados para temer una agresión, debe calificarse de legítima defensa el disparo de arma de fuego con lesiones contra el que llevó el ataque,

18—Arts. 52, 83, 87 y 99 del Cód. Pen.

19—Arts. 52, y 99 del Cód. Pen.

21—Arts. 81, 84 y 99 del Cód. Pen.

22—Arts. 52 y 99 del Cód. Pen.

23—Véase: verb. *Agresión*, núm. 1.



aun cuando el peligro no resulte inminente.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 315, Ser. 4^a.

24. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una persona, debe ser penado con un año de prisión, si existen las circunstancias atenuantes de ebriedad y provocación, aun cuando haya producido lesiones.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 73, Ser. 4^a.

25. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una persona, sin circunstancias agravantes ni atenuantes, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 33, Ser. 4^a.

26. Disparo de arma de fuego—La repetición del disparo de arma de fuego como acto conjunto sin solución de continuidad, no puede calificarse como reiteración.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

27. Disparo de arma de fuego—Intencional, contra una persona, debe ser penado con un año y ocho meses de prisión, si no está probada la tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

28. Disparo de arma de fuego—Si fueron dirigidos contra distintas personas, existe reiteración.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 381, Ser. 4^a.

29. Disparo de arma de fuego—Intencional, debe ser penado con dos años y medio de prisión, si la reiteración tuvo lugar contra diversas personas.—Jur. Crim., tomo 9, pág. 381, Ser. 4^a.

30. Disparo de arma de fuego—El disparo de arma de arma de fuego contra una persona, debe ser penado con

24—Véase: verb. *Arma de fuego*, núm. 3.

26—Véase: verb. *Arma de fuego*, núm. 4.

27—Véase: verb. *Arma de fuego*, núm. 5.

28—Véase: la nota del verb. *Arma de fuego*, núm. 6.

29—Véase la nota precedente.



dos años de prisión si no existen circunstancias.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 361, Ser. 4^a.

31. Disparo de arma de fuego—Debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 401, Ser. 4^a.

32. Disparo de arma de fuego—Debe ser penado con año y medio, de prisión si existen circunstancias atenuantes.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 355, Ser. 4^a.

Distracción—Véase: *Custodia*, núm. 1.

División—Véase: *Deudas del causante*, núm. 1.—*Tasación nula*, núm. 1.

1. Divorcio—La acusación criminal por adulterio puede coexistir con la acción civil de divorcio, siempre que tengan por base actos ó delitos distintos aunque de la misma especie.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 269, Ser. 4^a.

2. Divorcio—Justificada la sevicia y malos tratamientos, debe decretarse el divorcio.—Jur. Civ., tom. 10, página 131, Ser. 3^a.

3. Divorcio—Justificado el adulterio debe decretarse el divorcio.—Juv. Civ., tom. 10, pág. 200, Ser. 3^a.

4. Divorcio—Fundándose la acción de divorcio en la causal de adulterio, la prueba privilegiada ó de presunciones es admisible.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 200, Serie 3^a.

5. Divorcio—Solo debe hacerse lugar al divorcio, si se encuentran plenamente justificadas las causales por las que, según la ley, debe decretarse.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 179, Ser. 3^a.

6. Divorcio—Es facultativo de los jueces la designa-

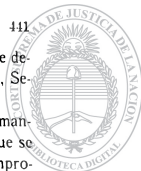
1—Véase: verb. *Adulterio*, núm. 7.

2—Arts. 64 y 67, incs. 5^o y 6^o de la ley de 1889.

3—Véase: *Adulterio*, núm. 2.

4—Véase: *Adulterio*, núm. 1.

6—Tratándose de los efectos del divorcio, la ley de Matrimonio es-



ción del padre que debe tener los hijos después de declarado el divorcio.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 323, Serie 3^a.

1^a. Documento—Si se indica claramente en la demanda la oficina pública donde existe el documento en que se funda el derecho, la escepción de defecto legal es improcedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 157, Ser. 4^a.

2. Documento—El documento sin firma, aunque la tenga impresa, no puede ser calificado como instrumento privado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 250, Ser. 4^a.

Documento—Véase: *Aval*, núm. 1—*Prueba escrita*, número 4—*Inhibición*, núm. 3—*Posiciones*, núm. 32—*Chancelación*, núm. 2—*Mercaderías fiadas*, núm. 1—*Escepción de pago*, núm. 11—*Prueba escrita*, núm. 3.

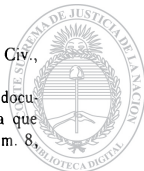
1^b Documentos—Las partes demandantes no están obli-

tablece que una vez pronunciado aquél cada uno de los cónyuges podrá fijar su domicilio ó residencia donde lo crea conveniente, aunque sea en el extranjero, pero que si tuviese hijos á su cargo no podrá transportarlos fuera del país sin licencia del juez del domicilio. Los hijos menores de cinco años quedarán á cargo de la madre y los mayores de esta edad se entregarán al esposo que á juicio del juez sea más á propósito para educarlos sin que se pueda alegar por el marido ó por la mujer preferente derecho á tenerlos. Tales son las prescripciones de los arts. 72 y 76 de la ley de Matrimonio concordantes en todas sus partes con las contenidas en los arts. 209 y 213 del Cód. Civ., que antes regía y dados los antecedentes que pueden haber servido de fundamento á la sentencia de divorcio. Librada esta cuestión al prudente arbitrio judicial, el juez debe consultar el interés y conveniencia de los menores, al confiar su tenencia definitiva á uno de los esposos.

1^a—Arts. 71 y 72 del Cód. de Proc.

2—Art. 1012 del Cód. Civ.

1^b—No existe en la ley disposición alguna que haga pesar sobre el demandante la obligación de presentar los documentos que solicite la parte contraria, pues esto importaría obligar á una de las partes á suministrar la prueba á la otra, lo que no es admisible en derecho. El art. 2417 del Cód. Civ. dispone que la exhibición de las cosas muebles debe ser



gadas á presentar los que exija la contraria.—Jur. Civ., tom. 5, pág. 83, Ser. 4^a.

2^a. **Documentos**—La falta de presentación de los documentos en que se funda la demanda, no basta para que proceda la escepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 396, Ser. 3^a.

3. **Documentos**—El intermediario en un contrato, ya sea comisionista ó martillero, está obligado á la exhibición de sus libros de comercio, y al reconocimiento de los documentos que lleven su firma.—Jur. Civ., tom. 10, página 120, Ser. 3^a.

1^b. **Documentos acompañados**—Que el actor está obligado á acompañar con la demanda, son aquellos en que funda su derecho; los que tienen por objeto probar un hecho negado al contestar, pueden ser presentados durante el término de prueba.—Jur. Com., tom. 9, pág. 349, Serie 4^a.

2^b. **Documentos acompañados**—Deben ser desglosados y devueltos los acompañados á la contestación de la demanda si no se presenta la copia.—Jur. Com., tom. 2, página 177, Ser. 4^a.

1. **Documentos agregados**—Aun cuando en el traslado de los documentos que presenta el demandado, el actor

exigida en la forma que lo dispongan las leyes de procedimientos judiciales, y no conteniendo nuestra ley disposición alguna referente á ese punto resulta que la prescripción del referido artículo, no es aplicable al caso en cuestión.

2^a—Así lo tiene establecido la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Escepción de defecto legal*, núm. 16; y *Documentos*, núm. 24.

3—Véase: verb. *Contrato*, núm. 10.

1^b—Así lo enseñan los prácticos y lo establece la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Documentos*, núms. 3 y 7; y tom. 2^o, mismo verbo

2^b—Véase: verb. *Copia*, núm. 1.



alegue hechos nuevos, no debe oírsele nuevamente si está consentido el auto que manda agregar el escrito.—Jur. Com., tom. 7, pág. 405, Ser. 4^a.

2^a. Documentos agregados—La procedencia de la agregación de documentos presentados durante el término de prueba, solo puede ser juzgada al dictar la sentencia definitiva.—Jur. Com., tom. 8, pág. 178, Ser. 4^a.

1^a. Documento falso—La acusación sobre falsedad de un documento no debe ser suspendida por la ejecución iniciada en juicio civil, pues no está comprendida en las cuestiones prejudiciales que la ley declara.—Jur. Criminal, tom. 9, pág. 242, Ser. 4^a.

Documento falsificado—Véase: *Falsificación de documento*, núm. 1.

1^b. Documentos habilitantes—La escepción de falta de personería en el apoderado es improcedente, si se funda en la falta de transcripción en el poder de los documentos habilitantes; basta la sola referencia de que existen en el Registro.—Jur. Com., tom. 6, pág. 115, Ser. 4^a.

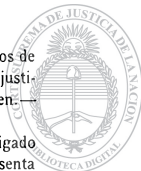
2^b. Documentos habilitantes—La transcripción que la ley argentina exige para justificar la personería del otorgante

2^a—Arts. 108 y 217 del Cód. de Proc.

1^a—Véase: *Cuestiones prejudiciales*, núm. 3.

1^b—Art. 1003 del Cód. Civ. Véase la nota siguiente.

2^b—Debe tenerse presente que los poderes otorgados en el extranjero son regidos en su forma y solemnidad por las leyes del país donde se hubiesen otorgado—art. 12 del Cód. Civ.—La forma de un acto jurídico es el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que corresponde observar al tiempo de celebrarse dicho acto, tales como la escritura del mismo, que se haga por escribano u oficial público—art. 974—debiendo también contarse entre ellas la de la transcripción de los documentos habilitantes, pues que á éstos y demás solemnidades mencionadas se refiere el art. 1004 cuando dice: «La inobservancia de otras formalidades no anula la escritura.». Cuando una



en representación, no es aplicable á los instrumentos de mandato otorgados en el extranjero, en tanto no se justifique que las leyes de aquel país también la exigen.—Jur. Com., tom. 3, pág. 231, Ser. 4^a.

1^a. **Documento multado**—El acreedor no está obligado al pago de la multa si el concurso es el que presenta el documento en que se ha infringido la ley de papel sellado.—Jur. Com., tom. 8, pág. 330, Ser. 4^a.

1^b. **Documento privado**—Procede la prueba pericial para el cotejo de la letra de un documento privado, aun

escritura pública aparece competentemente otorgada por un oficial público, se presume que ese funcionario conoce perfectamente las leyes de su país, y que por consiguiente, el que alega la nulidad del acto por él autorizado, se encuentra en el deber de comprobarlo. Esta es la jurisprudencia sentada por nuestros tribunales, de una manera uniforme. Véase: Jur. Com., tom. 3^o, págs. 231 y 247, Ser. 4^a; tom. 8^o, pág. 154, de la misma Ser.

1^a—Véase: verb. *Concurso*, núm. 4.

1^b—Se trataba de producir la prueba por examen pericial de la autenticidad de la letra de una tarjeta atribuida á una de las partes litigantes; esta prueba fué denegada bajo la base de que ella no podía recaer sobre un documento firmado, pues no lo estaba. Según el art. 19 de la Const. Nac., ningún habitante de la Nac. Arg. debe ser privado de lo que la ley no prohíbe. En esta garantía comprende la defensa en juicio de la persona y de los bienes, declarada inviolable por el art. 18 de la misma; y la denegación de un medio de prueba de esos derechos, cuando tal medio de prueba no está escludido, importa afectar estas garantías y privarle á la parte de hacer en su defensa lo que la ley no prohíbe. Aun cuando por los arts. 1031 y 1032 del Cód. Civ., los instrumentos privados pueden probarse directamente por el reconocimiento de las firmas de los que aparecen firmándolos ó sus sucesores, si éstos no la reconocen, ó si los firmantes han fallecido, se recurre al cotejo y otros medios de prueba, según el art. 1033. No se percibe motivo jurídico para aceptar la prueba de instrumentos firmados, por el cotejo de letras y todos los demás medios de prueba, y negarlos cuando se trata de que estas probanzas recaigan sobre la letra del cuerpo del documento atribuido á la persona á quien se opone, pues no teniendo la prueba otro objeto que llegar de un hecho conocido á otro



cuando no esté firmado por la parte á quien se atribuye.—Jur. Com., tom. 5, pág. 350, Ser. 4ª.

2. **Documento privado**—No procede la protocolización de la copia de un documento privado.—Jur. Com., tomo 8, pág. 308, Ser. 4ª.

3. **Documento privado**—Que se opone á terceros solo tiene fecha cierta desde su presentación en juicio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 383, Ser. 4ª.

4. **Documento privado**—Emanado del mandatario y otorgado en ejercicio del mandato, no puede ser desconocido por el mandante, pues la ley lo conceptúa como

desconocido, que se trata de averiguar, lo mismo se obtiene esta demostración probando que una firma pertenece á una persona, viva ó fallecida, que el que la letra con que está escrito el documento sin firma, pertenezca á dicha persona. Esta conclusión está confirmada por el art. 208 del Cód. de Com., que en materia mercantil admite para demostrar los contratos, la prueba de presunciones, de donde se desprende que el cotejo de documentos no firmados está comprendido entre las pruebas admisibles, puesto que no puede negarse que él sea ó pueda ser una presunción. Estando establecido por el art. 1190 del Cód. Civil, que los contratos se prueban por el modo que dispongan los Códigos de Proc. y no estableciéndose en él, que solo los documentos firmados por las partes puedan ser susceptibles de prueba de cotejo de letras, no puede esta prueba restringirse. Es el caso que no era oportuno pronunciarse ni estaba en cuestión el mérito probatorio que pueda tener el cotejo de letras ó examen pericial, porque ésta es materia de la sentencia en cuya estación solamente el juez puede hacer mérito de la prueba—art. 217, Cód. de Proc.

2—El art. 1031 del Cód. Civ. dice que todo aquel contra quien se presente un documento está obligado á declarar si la firma es ó no suya. Para reconocer una firma es necesario que ella exista. La firma debe ser original, porque una copia de la firma no es la firma del individuo. Y como para practicarse cualquier documento privado debe el firmante reconocer si la firma que se le presenta es ó no suya, resulta que esa firma copiada no puede ser materia de un reconocimiento legal.

3—Art. 1035 del Cód. Civ.

4—Art. 1946 del Cód. Civ.



espedido personalmente por él.—Jur. Com., tom. 9, página 349, Ser. 4ª.

5. **Documento privado**—Emanado de terceros, carece de valor legal si no se justifica su autenticidad—Jur. Com., tom. 9, pág. 357, Ser. 4ª.

6. **Documento privado**—Los documentos privados cuya autenticidad es discutida, no pueden servir para el cotejo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

7. **Documento privado**—La autenticidad de la firma en documento privado, debe justificarse por información sumaria para que proceda el embargo preventivo, si el crédito es de mayor cuantía.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 397, Ser. 3ª.

8. **Documento privado**—Declarada la adulteración de un documento privado que la parte pretende hacer valer en juicio, procede su remisión al Juzgado de Instrucción para la averiguación del delito.—Jur. Crim., tom. 1, página 417, Ser. 4ª.

Documento privado - Véase: *Adulteración de un documento*, núm. 2 — *Escepción de espera*, núm. 1, 2 y 3 — *Defraudación*, núm. 7.

1ª. **Documentos reconocidos**—Si el acusado por calumnia no ha pedido en oportunidad prueba testimonial, no procede el reconocimiento de documentos emanados de terceros.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 117, Ser. 4ª.

1. **Documento secuestrado**—Con objeto de la instrucción criminal, debe ser devuelto al propietario con tes-

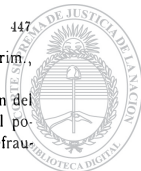
5—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 9.

6 —Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 3.

7—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 4.

8—Véase: *Adulteración de un documento*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 22.



timonio de las demás contancias que solicite.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 312, Ser. 4^a.

1^a. Documento simulado—Justificada la simulación del documento de propiedad de muebles, su venta por el poseedor propietario no puede ser calificada como defraudación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 188, Ser. 4^a.

1^b. Dolo—En tanto no se justifique plenamente, las irregularidades de los libros de comercio no pueden ser calificadas como delitos.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 215, Ser. 4^a.

2^a. Dolo—En las transacciones, sean ó no civiles, no puede ser calificado como defraudación ó estafa.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 88, Ser. 4^a.

Dolo—Véase: *Dación de pago*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 40—*Fuerza irresistible*, núm. 1.

1^c. Domicilio—El sublocatario carece de acción para acusar á otro de violación de domicilio, si no se refiere especialmente á su departamento.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 325, Ser. 4^a.

2^b. Domicilio—Las alhajas que el deudor lleve encima no deben embargarse, si el mandamiento ordena solo las que se encuentran en el domicilio.—Jur. Com., tom. 9, pág. 258, Ser. 4^a.

3. Domicilio—Justificado el domicilio en jurisdicción

1^a—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 31.

1^b—Véase: verb. *Delito*, núm. 2.

2^a—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 26.

1^c—Véase: verb. *Departamento alquilado*, núm. 1.

2^b—Véase: *Alhajas del deudor*, núm. 1.

3—El art. 85 del Cód. de Proc. dice que si el demandante no tiene su domicilio en la Capital, podrá el demandado pedir el arraigo del juicio. El verbo *tiene* se refiere al día en que se instaure la demanda. Una vez deducida la acción puede el actor cambiar su domicilio sin estar obligado á arraigar el juicio.



del Juzgado al iniciarse el juicio, la escepción de arraigo es improcedente.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 297, Ser. 4^a.

4. Domicilio—La ley presume que los muebles son del locatario principal; al ejecutante corresponde en caso de tercería, la prueba de que pertenecen al que temporalmente tiene en la casa domicilio.—Jur. Com., tom. 10, pág. 246, Ser. 4^a.

5. Domicilio—Los tribunales de la República son competentes para conocer en el cumplimiento de contratos sobre bienes situados en su jurisdicción, aun cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 360, Ser. 3^a.

Domicilio—Véase: *Notificación por cédula*, núms. 3 y 4—*Posiciones*, núm. 1—*Embargo prendario*, núm. 1—*Escepción de nulidad*, núm. 1—*Arraigo*, núm. 1—*Lugar designado*, núm. 1—*Tercería de dominio*, núm. 22—*Contrato*, núm. 3—*Defraudación*, núm. 20—*Violación de domicilio*, núms. 5, 6 y 7—*Concurso*, núm. 5—*Escepción de arraigo*, núm. 3.

1. Domicilio accidental—La notificación de la citación de remate al esposo, en un domicilio accidental, invalida la que con anterioridad se hubiere hecho á la ejecutada, como asimismo la ampliación que del término se le hubiere concedido.—Jur. Civ., tom. 6, pág. 236, Ser. 4^a.

2. Domicilio accidental—Aun cuando se desempeñen funciones públicas, que pudiesen justificar un domicilio accidental, se tendrá por permanente si á él se había trasladado el asiento de la familia con anterioridad.—Jur. Com., tom. 8, pág. 63, Ser. 4^a.

4—Arts. 1558 y 2412 del Cód. Civ.

5—Véase: *Bienes raíces*, núm. 2.

1—Véase: *Citación de remate*, núm. 3.

2—Arts. 90, 94 y 748 del Cód. Civ.



1ª. Domicilio del ausente.—La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, es de competencia del juez del último domicilio del ausente. —Jur. Civ., tom. 10, pág. 80, Ser. 3ª.

Domicilio constituido.—Véase: *Notificaciones en el domicilio*, núm. 1.

1ª. Domicilio del ejecutado.—No siendo esencial á la validez del juicio ejecutivo que se notifique al firmante el auto que dió por reconocida la firma en rebeldía, el error en el domicilio en que se ha dejado la cédula, no puede fundar la escepción de nulidad de la ejecución.—Jur. Com., tom. 7, pág. 20, Ser. 4ª.

2. Domicilio del ejecutado.—El pago de la letra aunque firmada en distinta jurisdicción, puede ser exigido en el domicilio del deudor.—Jur. Com., tom. 8, pág. 63, Serie. 4ª.

3. Domicilio del ejecutado.—Los tribunales de la Capital son incompetentes para conocer en juicios iniciados contra personas domiciliadas fuera de su jurisdicción.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 90, Ser. 3ª.

4. Domicilio del ejecutado.—El cumplimiento de una obligación de hacer, debe exigirse en el domicilio del deudor, aun cuando el bien esté situado en otra jurisdicción y en ella se haya firmado el contrato.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 132, Ser. 3ª.

5. Domicilio del ejecutado.—La notificación en el domicilio del firmante es válida y produce efectos legales, aun

1ª—Véase: *Ausente con presunción de fallecimiento*, núm. 1.

1ª—Véase: verb. *Cédula equivocada*, núm. 1.

2—Art. 606 del Cód. de Com.

3—Art. 4 del Cód. de Proc.

4—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 12.

5—Véase: verb. *Ausente*, núm. 2.



cuando accidentalmente se encuentre ausente; y la nulidad de la ejecución por defecto de forma de la notificación debe ser desechada.—Jur. Com., tom. 1, pág. 114, Ser. 4^a.

1^a. Domicilio falso—Las costas son á cargo del demandante que denunció el domicilio del demandado, siempre que se justifique ser falso.—Jur. Com., tom. 2, pág. 110, Ser. 4^a.

Domicilio legal—Véase: *Notificación personal*, núm. 3.

1^b. Domicilio de los testigos—Es imputable á la parte el error en el domicilio de los testigos que presenta.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 398, Ser. 4^a.

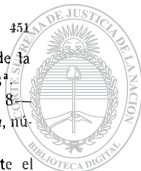
1. Domicilio violado — La violación de domicilio con fuerza y por vías no destinadas á la entrada, debe ser castigada con dos años de prisión y quinientos pesos de multa.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 25, Ser. 4^a.

1^c. Dominio—Justificada la propiedad en virtud de título adquisitivo en forma, se supone el dominio y posesión

1^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 5.

1^b—Después de vencido el término de prueba se dijo que un testigo fuese citado en un domicilio nuevamente denunciado, pues había habido error en el establecido anteriormente. No se hizo lugar, porque son imputables á las partes las consecuencias de no haber averiguado oportunamente el verdadero domicilio de los testigos por ellas presentados—arts. 903 y 904, Cód. Civ., y 118, Cód. de Proc.

1^c—Se trataba de un título de adquisición anterior á la vigencia del actual Cód. Civ. La escritura pública importa una tradición y el hecho de manifestar en un instrumento redactado ante un oficial público, la intención de transferir un bien inmueble, equivale al acto de la entrega, á la facultad de tomar la cosa por el adquirente. La ley 8^a, tit. 3^o, Part. 3^a, equiparando la entrega de los instrumentos de propiedad, á la de la misma cosa dice: «ó faziendo otra carta de nuevo ó dandogela»; igualmente lo establecen así las leyes 17 y 44 de Toro, hablando de mejoras y mayorazgos: «ó le oviere entregado ante escribano la escritura de ello»—García Goyena, comentarios al art. 1385 del Cód. Civ. español.—



desde la fecha del título, y en consecuencia procede la reivindicación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 225, Ser. 3^a.

Dominio—Véase: *Tercería de dominio*, núms. 2 y 8.—*Contrato de prenda*, núm. 1.—*Acción reivindicatoria*, número 1.—*Nulidad de títulos*, núm. 1.

1—**Donación á la mujer**—Los muebles que durante el matrimonio adquiriera la mujer, debe juzgarse que pertenecen á la sociedad conyugal en tanto no se presente prueba escrita de la donación; la testimonial no basta para dar por comprobado el hecho.—Jur. Com., tom. 2, pág. 358, Ser. 4^a.

Si bien es cierto, que en las cosas que se adquieren por tradición, ese acto material es indispensable para la sucesión en el dominio cuando ha habido escritura otorgada, esa operación real no es necesaria, y la escritura importa jurídicamente la posesión—pág. 193, tomo 10, F. S. C. P.

1—El art. 975, Cód. Civ., dispone que en los casos en que la expresión por escrito fuese exclusivamente ordenada, *no puede ser suplida por ninguna otra prueba*. El art. 1193 prescribe que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 200 pesos, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos; y según el art. 1224 *«si no hubiese prueba por escrito de los muebles y cosas fungibles que durante el matrimonio adquieran marido ó mujer, por herencia, legado ó donación, debe juzgarse que pertenecen en común á ambos esposos.»* La ley exige, pues, *prueba por escrito*, para probar el título de adquisición que la demandante invocaba, y esa prueba no puede ser suplida por ninguna otra, según el art. 975. La testimonial es improcedente. Es cierto que según el art. 1815, Cód. Civ., la donación de cosas muebles ó títulos al portador puede ser hecha sin un acto escrito, por la sola entrega de la cosa ó del título al donatario, pero si ese artículo no exige como forma del contrato instrumental, los arts. 1224, 975 y 1193 la exigen en este caso como prueba, y el primero de esos artículos por ser de especial aplicación, prima sobre la disposición general del art. 1815, citado.



1^a. Ebriedad—Teniendo jurisdicción propia el Comisario de policía para castigar la ebriedad y desorden, no puede imputársele abuso de autoridad por ese hecho.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 126, Ser. 4^a.

2. Ebriedad—Consuetudinaria, no puede aceptarse como circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 6, página 373, Ser. 4^a.

Ebriedad—Véase: *Disparo de arma de fuego*, núm. 13 —*Arma de fuego*, núm. 3.

1. Edad de una menor—Para que exista violación, debe estar plenamente justificada la edad de la menor; si existen motivos fundados para dudar, debe calificarse el delito como estupro.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 389, Serie 4^a.

1. Edad del reo—La del reo debe tenerse por comprobada por su simple declaración si el Ministerio Fiscal no la ha puesto en duda.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 325, Ser. 4^a.

1^b. Edictos—Deben ser publicados inmediatamente que

1^a.—Véase: *Abuso de autoridad*, núm. 2.

1^b.—El sumario no espresa lo resuelto por la Cámara. El caso es el siguiente: El auto ordenando la publicación de edictos fué dictado



se ordena el emplazamiento.—Jur. Com., tom. 2, página 116, Ser. 4^a.

2. **Edictos**—Para la venta en la Bolsa de Comercio de los títulos dados en prenda, no es necesaria la publicación de edictos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 425, Ser. 4^a.

3. **Edictos**—Las omisiones en la publicación de edictos del remate judicial, no autorizan á declarar la nulidad de la venta.—Jur. Com., tom. 5, pág. 116, Ser. 4^a.

4. **Edictos**—La reposición del auto de quiebra puede pedirla el fallido contando el término desde la publicación de los edictos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 86, Serie 4^a.

5. **Edictos**—El anuncio por edictos que fija la ley para

el 14 de Nov. No se publicaron enseguida sino durante la feria del mes de Enero. Se mandó que se publicaran nuevos edictos porque según el Juez de 1^a Inst. la publicación se había hecho durante un mes inhábil. La Cámara confirmó el auto fundándose en que el Secretario había entregado los edictos mandados publicar con fecha 14 de Nov. del 92, y que había habido término hábil para la presentación del citado antes de la feria, si se hubiera hecho la publicación ordenada inmediatamente, lo que no se verificó por culpa del interesado.

2—Porque la segunda parte del art. 385, Cód. de Com., es aplicable por analogía, y porque el art. 309, Cód. de Proc., se refiere únicamente á la venta de muebles ó alhajas que deban esponderse al examen del público.

3—Se habían llenado los requisitos establecidos en los arts. 310 á 315 del Cód. de Proc.

4—El juez Dr. Peyret no hizo lugar á la reposición fundado en que la parte había pedido revocatoria fuera del término acordado por el art. 1398 del Cód. de Com. La Cámara revocó el auto diciendo que el fallido había solicitado revocación del auto de quiebra, antes de que éste fuera publicado y no constando que hubiese él tenido noticia del mismo antes de la fecha del edicto. Y teniendo en cuenta además que tampoco se había dado al recurso de reposición, la sustanciación prescripta en el art. 1398, Cód. de Com.

5—Cuando el art. 313 del Cód. de Proc. ordena que el remate se anuncie por un término que no baje de 15 días ni exceda de 30, se

el remate judicial es solo el que debe hacerse fijándolos en los lugares de costumbre.—Jur. Com., tom. 6, pág. 273, Ser. 4^a.

6. Edictos.—No procede la citación por edictos para absolver posiciones.—Jur. Com., tom. 7, pág. 351, Serie 4^a.

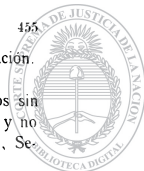
7. Edictos.—La falta de mandamiento contra el deudor

refiere tan solo á los edictos que debe fijar el Escribano en las puertas de la Secretaría y sitios públicos de costumbre: el término de diez publicaciones se refiere á los diarios.

6—La citación del litigante que deba absolver posiciones en juicio, según se desprende de los arts. 127 y 136 del Cód. de Proc., debe hacerse por cédula ó personalmente. El art. 127 del Cód. de Proc. determina, que el que haya de declarar sea citado por cédula con un día de intervalo bajo los apercibimientos de la ley, lo que excluye la citación por edictos que no podría hacerse en esa forma. Además, no teniendo domicilio constituido en el lugar del juicio el que haya de absolver posiciones, previene el art. 136 del mismo Cód., que se dará comisión al efecto al juez respectivo. De todo ello resulta que en uno y otro caso se tiene siempre el medio de hacer efectivo el recurso de la absolución de posiciones que tiene todo litigante. Por otra parte, el litigante tiene la posibilidad de hacerlas absolver por el apoderado de la contraparte cuando tiene poder bastante para ello. La citación para absolver posiciones trae aparejados apercibimientos serios, como los que establecen los arts. 127 y 133 del mismo Cód., y ella no debe hacerse sino en la forma espresamente determinada por la ley, interpretando ésta restrictivamente. Esta es la jurisprudencia constante de ambas Cámaras. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Posiciones*, núms. 4 y 6.

7—El Defensor fundó la nulidad en la circunstancia de haberse trabado el embargo sin requerirse previamente al deudor ó á su representante, el mismo defensor, para el pago de la cantidad demandada, violándose así lo dispuesto en el art. 471 del Cód. de Proc. No existe tal violación desde que el requerimiento no era posible hacerlo en la persona del deudor, por ignorarse su paradero, ni tampoco en la del Defensor, puesto que éste no se nombró con arreglo al texto espreso de dicho artículo sino después de practicado el embargo de bienes, embargo que el inc. 3º del mismo prescribe que «se practicará aun cuando el deudor no se halle presente», lo que quiere decir que no es indispensable para





citado por edictos no es causa de nulidad de la ejecución.

—Jur. Com., tom. 8, pág. 270, Ser. 4^a.

8. **Edictos**—Procede la declaratoria de herederos sin publicación de edictos si han justificado su carácter y no pretenden ser únicos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Serie 3^a.

9. **Edictos**—Procede la citación del demandado por edictos, aun cuando la ausencia sea accidental.—Jur. Civil, tom. 12, pág. 424, Ser. 3^a.

10. **Edictos**—En el juicio por desalojo, no procede la citación por edictos.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 429, Serie. 3^a.

1. **Edificación**—La tercera de dominio sobre la construcción, deducida por el propietario locador, debe ser rechazada si la ejecución se sigue para el cobro precio de la edificación.—Jur. Com., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

la traba del embargo el previo requerimiento del deudor ó de su defensor en los casos de ausencia. Las disposiciones del art. 471 están calculadas para evitar los perjuicios y fraudes á que pudieran dar lugar los deudores, ausentándose ú ocultándose con el objeto de eludir el embargo de bienes, como enseña Caravantes—núm. 1157—sobre el art. 955 de la antigua ley de enjuiciamiento civil española, que fué modificado por el 1444 de la ley vigente, facultando al juez para acordar á instancia del actor que se proceda al embargo sin hacer previamente requerimiento de pago al deudor, cuyo domicilio se ignora.

8—El Juez de 1^a Inst. Dr. Méndez Paz, no hizo lugar á la declaratoria de herederos por ser una práctica *inconcusa é invariable* la publicación de edictos. La Cámara revocó el auto porque los pretendientes solo pedían ser declarados herederos, pero no únicos. Este juez no pierde ocasión para desbarrar. Los absurdos más grandes los afirma en una forma enfática muy suelto de cuerpo y como si estampara una verdad como un templo.

9—Véase: verb. *Ausencia*, núm. 2.

10—Véase: *Citación por edictos*, núm. 2.

1—De acuerdo con la doctrina sentada en la nota del verb. *Construcción*, núm. 1.



Edificio—Véase: *Posesión*, núm. 11.

1^a. **Edificios**—Los edificios construidos en terreno ajeno con conocimiento y aquiescencia del propietario responden siempre por el precio de construcción cualquiera que fuese el motivo en que se funde la rescisión del contrato.—Jur. Com., tom. 1, pág. 120, Ser. 4^a.

Edificios construidos—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1.

1^b. **Editor**—En tanto no exista en la querella determinada acusación, el editor no está obligado á presentar el autor de la publicación acusada.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 258, Ser. 4^a.

Editor—Véase: *Calumnia*, núm. 11.

Educación común—Véase: *Herencias transversales*, número 1.

Efectos—Véase: *Detención*, núm. 1.

Efectos legales—Véase: *Ausente*, núm. 2—*Notificación personal*, núm. 3—*Apelación*, núm. 3.

Efectivo—Véase: *Amortizaciones parciales*, núm. 1.

1^c. **Ejecución**—Los gastos de la ejecución son á cargo del deudor si no paga antes del requerimiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 179, Ser. 4^a.

2. **Ejecución**—Surtiendo la consignación los efectos del pago desde su aceptación, los gastos y honorarios son de cuenta del ejecutante.—Jur. Com., tom. 8, pág. 163, Ser. 4^a.

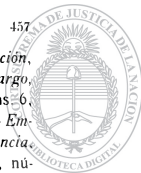
Ejecución—Véase: *Acreedor hipotecario*, núm. 1—*Acreedor privilegiado*, núm. 2—*Escepción de inhabilidad de título*, núms. 2, 4, 8 y 18—*Escepciones*, núm. 1 y 3

1^a—Véase: verb. *Construcción*, núm. 1.

1^b—De acuerdo con otra resolución de la misma Cám. del 15 de Oct. de 1892, en el caso de Tesco con La Prensa.

1^c—Véase: *Consignación en pago*, núm. 3.

2—Véase: *Consignación en pago*, núm. 3.



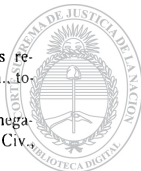
—*Honorarios*, núms. 6 y 11—*Nulidad de la ejecución*, núms. 2, 3, 9 y 10—*Quiebra*, núms. 2 y 3—*Embargo*, núms. 12 y 16—*Escepción de falta de personería*, núms. 6, 8, 9 y 10—*Escepción de litispendencia*, núm. 4—*Embargo suspendido*, núm. 1—*Escepción de incompetencia*, núm. 6—*Falsedad del protesto*, núm. 1—*Inhibición*, número 3—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Contrato civil*, número 1—*Escepción de transacción*, núm. 4—*Letra de cambio*, núms. 7, 9 y 17—*Cédula equivocada*, núm. 1—*Tercería de dominio*, núm. 12—*Apoderado*, núms. 4 y 9—*Bienes propios*, núm. 1—*Escepción de falsedad*, número 9—*Firma reconocida*, núm. 5—*Martillero*, núm. 7—*Concurso*, núm. 8—*Escepción de quita*, núm. 2—*Escepción de pago*, núms. 7, 8 y 12—*Costas*, núms. 40 y 51—*Defensor de ausentes*, núm. 3—*Defraudación*, núm. 36—*Domicilio*, núm. 4—*Escepción de espera*, núm. 7.

Ejecutado—Véase: *Consignación en pago*, núms. 1, 2 y 6—*Honorarios*, núm. 6—*Tercerista*, núm. 1—*Citación de remate*, núms. 1 y 3—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Embargo*, núm. 13—*Escepción de incompetencia*, núm. 7—*Posesión de semovientes embargados*, núm. 1—*Escepción de falsedad*, núm. 7—*Muebles*, número 3—*Costas*, núms. 44 y 46.

Ejecutante—Véase: *Costas*, núms. 1, 11, 15, 23 y 37—*Depositario judicial*, núm. 6—*Embargo*, núm. 3—*Tercerista*, núm. 1—*Testigos*, núm. 1—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Escepción de incompetencia*, núm. 7—*Escepción de extinción*, núm. 1—*Posesión de semovientes embargados*, núm. 1—*Demanda ordinaria*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 8—*Muebles*, núm. 3.

1. **Ejecutoria**—Procede la de una sentencia dictada en

1.—De acuerdo con la nota del verb. *Actos extranjeros*, núm. 1.



país extranjero, si se pide acompañando todos los recaudos que exigen las leyes argentinas.—Jur. Com., tomo 8, pág. 154, Ser. 4^a.

2^a. **Ejecutoria**—En los juicios voluntarios, la denegación de una petición no causa ejecutoria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 110, Ser. 3^a.

Eliminación—Véase: *Pena*, núm. 5.

1^a. **Embargable**—El contrato de renta vitalicia no se encuentra comprendido entre las pensiones que la ley declara no embargables.—Jur. Com., tom. 8, pág. 316, Ser. 4^a.

1^b. **Embargo**—El constructor del buque, aun cuando lo retenga indebidamente en su poder, solo puede exigir el embargo del precio de venta en tanto no se haya verificado su crédito.—Jur. Com., tom. 2, pág. 104, Ser. 4^a.

2^b. **Embargo**—La dieta de los miembros del Congreso Nacional, no es embargable.—Jur. Com., tom. 2, página 112, Ser. 4^a.

3. **Embargo**—Debe ordenarse como lo pide el ejecutante si está autorizado por la ley.—Jur. Com., tom. 2, pág. 124, Ser. 4^a.

4. **Embargo**—El deudor, en cuyo poder se embargan

2^a—El Dr. Méndez Paz, en contra de lo dictaminado por el Ministerio Fiscal y por el Pupilar, no hizo lugar á una reposición porque el auto estádo consentido. La Cám. lo revocó por la razón espuesta en el sumario.

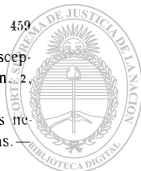
1^a—Véase: *Contrato de renta vitalicia*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Buque*, núm. 1.

2^b—Véase: verb. *Dieta*, núm. 1.

3—La Cám. dijo que atento lo dispuesto en el art. 471 del Cód. de Proc., el embargo debía trabarse por la suma necesaria para cubrir el capital, intereses y costas.

4—El ejecutante no puede tener mayores derechos de los que tendría el ejecutado, el cual si se le negara la existencia de la deuda por



los fondos, por un tercero, puede oponer á éste las excepciones que tenia contra su acreedor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 182, Ser. 4ª.

5. Embargo—Solo puede subsistir sobre los bienes necesarios para cubrir el crédito, sus intereses y costas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 254, Ser. 4ª.

6. Embargo—Siendo la posesión de muebles presunción de propiedad, el ejecutante que pidió el embargo no debe ser condenado en las costas de la tercera.—Jur. Com., tom. 2, pág. 384, Ser. 4ª.

7. Embargo—Deducida oposición y justificada por escritura pública la propiedad, debe quedar sin efecto el embargo sin ulterior juicio.—Jur. Com., tom. 2, página 393, Ser. 4ª.

por ejemplo, tendría necesariamente que seguir el correspondiente juicio contra su deudor.

5—Art. 471 del Cód. de Proc.

6—Véase: verb. *Costas*, núm. 11.

7—Según el art. 993, Cód. Civ., el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil ó criminal de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por el mismo, ó que han pasado en su presencia; y lo hace no solo entre las partes sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos en ellas—art. 994, ib.—El ejecutante no redarguyó de falsa la escritura presentada por el actor sino que se limitó á alegar como fundamento de su oposición, que la venta á que ella se refería era simulada, lo cual no destruye la fuerza probatoria del instrumento, mientras no se pruebe y se declare por ejecutoria la simulación. Con arreglo á las prescripciones citadas y á las antiguas leyes 114 á 118, tit. 18, Part. 3ª, ha sido doctrina y jurisprudencia admitida por nuestros prácticos y tribunales, que cuando terceras personas se presentan en un juicio oponiéndose al embargo de bienes por razón de dominio, acreditando éste por instrumento público, debe alzarse el embargo llanamente—Castro, *Práctica Forense*, número 458.



8. **Embargo**—No puede pedirse ante el Juez de la Capital el levantamiento de un embargo ordenado por un juez de distinta jurisdicción.—Jur. Com., tom. 2, página 400, Ser. 4^a.

9. **Embargo**—Siendo la posesión una presunción de propiedad tratándose de bienes muebles, la simple oposición del poseedor basta para el levantamiento del embargo.—Jur. Com., tom. 2, pág. 412, Ser. 4^a.

10. **Embargo**—Si manifiestamente, los bienes no son suficientes, debe ampliarse el embargo.—Jur. Com., tomo 2, pág. 419, Ser. 4^a.

11. **Embargo**—El acreedor del propietario tiene derecho para embargar el precio de la locación.—Jur. Com., tom. 2, pág. 420, Ser. 4^a.

12. **Embargo**—No procede su levantamiento y la devolución de los títulos, en tanto no se haya pagado los los gastos de la ejecución.—Jur. Com., tom. 3, pág. 215, Ser. 4^a.

8—La parte que se considere agraviada con una medida de esa naturaleza, debe ocurrir al juez que la ordenó, pues el exhortado no puede inmiscuirse por carecer de jurisdicción.

9—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: verb. *Bienes embargados*, núm. 8. Art. 2413 del Cód. Civ.

10—Art. 471 del Cód. de Proc.

11—Las relaciones de derecho entre sublocador y el arrendador propietario de la casa, no pueden llegar hasta privar al acreedor de éste, de la facultad que le asiste para solicitar el embargo del precio de la locación en el juicio ejecutivo fundado en acciones rescisorias que pueda tener el referido sublocador, las que por su naturaleza corresponden á un juicio ordinario, el que según doctrina corriente no puede paralizar la acción ejecutiva.

12—Los bienes embargados responden á toda la ejecución en la que están comprendidos el capital, los intereses y las costas. Mientras todo esto no se pague, la ejecución debe seguir adelante y ésta puede hacerse efectiva sobre el bien embargado.



13. **Embargo**—El ejecutado carece de personería para discutir y defender derechos de un tercero fundados en la prioridad del embargo.—Jur. Com., tom. 4, pág. 398, Ser. 4ª.

14. **Embargo**—La presentación de bienes suficientes á embargo, hace procedente el levantamiento de la inhibición general.—Jur. Com., tom. 5, pág. 140, Ser. 4ª.

15. **Embargo**—Para que proceda el embargo de los bienes denunciados, estos deben estar en poder del deudor.—Jur. Com., tom. 7, pág. 67, Ser. 4ª.

16. **Embargo**—Los requisitos que la ley exige para la traba del embargo pueden afectar la validez de éste, pero

13—El ejecutado opuso la escepción de litispendencia alegando como fundamento de ella, que los bienes que se le habían embargado en este juicio ya lo han sido en juicio ejecutivo pendiente que otro acreedor privilegiado le seguía ante otro juez por alquileres devengados. Lo que en realidad corresponde es que su acreedor haga valer el privilegio referido por medio de la respectiva tercería; pero para ello no tiene personería el ejecutado.

14—Arts. 453 y 474 del Cód. de Proc.

15—Cuando en el mandamiento no se designase bienes á embargo para el caso que el deudor no pagase en el acto de ser requerido, entonces se embargan los que se designen por el ejecutante, siempre que el deudor se halle en posesión de ellos.

16—La nulidad alegada se fundaba en que el embargo preventivo que precedió al juicio, fué trabado sin las formalidades prescriptas por los arts. 451 y 471, Cód. de Proc. Basta esa simple enuenciación para comprender que la nulidad alegada era improcedente. El embargo de bienes, no es trámite esencial del juicio ejecutivo, sino una simple medida de seguridad establecida en favor del acreedor; y cuando se solicita preventivamente y con antelación al juicio ejecutivo, es de todo punto independiente de éste. No puede, por tanto, afectar á la validez de los procedimientos de la ejecución. Desde que el juicio ejecutivo puede seguirse aun sin mediar embargo de bienes, según lo tiene resuelto la Cám., los vicios de que pudiera adolecer el embargo trabado afectaría en todo caso al embargo mismo, pero no al juicio ejecutivo.



no fundar la nulidad de la ejecución. —Jur. Com., tom. 7, pág. 302, Ser. 4^a.

16^b. **Embargo**—Las alhajas que el deudor lleva encima no deben embargarse, si el mandamiento ordena solo el de las que se encuentran en el domicilio. —Jur. Com., tom. 9, pág. 258, Ser. 4^a.

17. **Embargo**—La oposición del locatario al embargo, hace procedente la tercería, salvo que el ejecutante justifique que los muebles eran de propiedad del sublocatario. —Jur. Com., tom. 10, pág. 72, Ser. 4^a.

18. **Embargo**—Solo procede el levantamiento del embargo sin tercería, si los bienes no se encontraban en poder del deudor al hacerse el embargo. —Jur. Com., tomo 10, pág. 176, Ser. 4^a.

19. **Embargo**—Solo procede decretarse inhibición contra el rebelde, si el mandamiento de embargo no diere resultado. —Jur. Com., tom. 10, pág. 207, Ser. 4^a.

20. **Embargo**—Si la rebeldía del demandado hace procedente el embargo, el acreedor tiene derecho para retirar la caución prestada para conseguir el embargo preventivo. —Jur. Com., tom. 10, pág. 211, Ser. 4^a.

21. **Embargo**—No comete delito el que dispone de lo propio, aun cuando estuviese embargado, en tanto no se justifique que de ello tenía conocimiento. —Jur. Com., tom. 10, pág. 226, Ser. 4^a.

16^b—Véase: *Alhajas del deudor*, núm. 1.

17—El inquilino principal tiene la presunción de propiedad de los bienes que en el predio locado se introducen: si el ejecutante de un sublocatario quiere embargar esos muebles, debe destruir esa presunción legal—Art. 2412 del Cód. Civ.

18—Véase: *Bienes embargados*, núm. 8.

19—Art. 437 del Cód. de Proc.

20—Véase: *Caución prestada*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Delito*, núm. 28.



22. Embargo—El instrumento privado solo tiene fecha desde su presentación en juicio, en consecuencia si funda una tercería, no forma prueba por ser de fecha posterior al embargo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 250, Serie 4^a.

23. Embargo—Justificado con semiplena prueba la irrevocabilidad del mandato, el embargo pedido por el mandatario, debe subsistir aun cuando el mandante pida su levantamiento.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 95, Ser. 3^a.

24. Embargo—Para fijar la forma de venta del terreno embargado, debe existir conformidad de partes.—Jur. Civil, tom. 12, pág. 417, Ser. 3^a.

Embargo—Véase: *Acreeedor privilegiado*, núm. 3—*Nulidad del procedimiento*, núm. 1—*Tercería de dominio*, núm. 5—*Bienes particulares*, núm. 1—*Costas*, núm. 22—*Alquiler*, núm. 4.

1^a. Embargo de bienes—Si se traba en virtud de exhorto, no procede mandamiento ni expresión de cantidad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 3^a.

2. Embargo de bienes—Solo procede la inhibición cuando no se conocen bienes para el embargo.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 86, Ser. 3^a.

Embargo de bienes—Véase: *Depositario judicial*, número 6.—*Tercería de dominio*, núm. 4.

1^b. Embargo de bienes muebles—Solo procede el embargo de bienes muebles, si el deudor tiene la posesión.—Jur. Com., tom. 5, pág. 93, Ser. 4^a.

22—Art. 1035 del Cód. Civ.

24—Porque esa forma puede afectar los derechos de las partes.

1^a—Véase: *Bienes embargados*, núm. 9.

2—Véase: verb. *Bienes*, núm. 1.

1^b—Véase: *Bienes muebles*, núm. 3.



2. Embargo de bienes muebles —No es necesaria tercera si el opositor al embargo de muebles tenía la posesión.—Jur. Com., tom. 6, pág. 217, Ser. 4^a.

3. Embargo de bienes muebles —Solo puede hacerse efectivo si el deudor tiene la posesión.—Jur. Com., tomo 8, pág. 178, Ser. 4^a.

1^a. Embargo de bienes propios—El tercero que para evitar el embargo de bienes propios denunciados como del ejecutado, deposita una suma a nombre propio, tiene derecho a exigir su devolución y debe serle acordada, pero si deduce tercera, debe ser rechazada con costas.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 69, Ser. 4^a.

1^b. Embargo de entradas—No procede el embargo total de las entradas de un establecimiento, si ese hecho puede hacer imposible su funcionamiento regular.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 3^a.

1. Embargo de fondos—En tanto no conste la existencia de embargo, deben entregarse los fondos depositados.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 85, Ser. 3^a.

1. Embargo levantado—Debe levantarse el embargo sin sustanciación si el opositor justifica la propiedad y posesión de los bienes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 301, Serie 4^a.

2—Así lo tiene establecido la jurisprudencia. Véase: *Bienes embargados*, núm. 8.

3—Véase: *Bienes muebles*, núm. 4.

1^a—Véase: *Bienes propios*, núm. 1.

1^b—Esa forma no puede satisfacer en manera alguna los intereses del acreedor a cuyo pedido se decreta el embargo, pues, si quedara subsistente en su totalidad, haríase imposible sufragar los gastos que el establecimiento origine, y sería forzoso suspenderlos, causando con ello un serio perjuicio al deudor y al acreedor, desde que desaparecerían las sumas destinadas a responder al embargo.



1^a. Embargo prendario—No debe concederse fuera del domicilio del deudor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 117, Ser. 4^a.

1. Embargo preventivo—Para dictar embargo preventivo fundado en una obligación firmada por poder, debe acompañarse el instrumento en que consta tal facultad.—Jur. Com., tom. 1, pág. 247, Ser. 4^a.

1^a—La Cám. al resolver esta cuestión dijo, que si bien el auto ordenaba que el diligenciamiento de dicho embargo se hiciese en el domicilio del deudor, en vez de practicarse en la calle ó en cualquier otro paraje público donde se hallare, como lo pretendía el ejecutante, tal limitación solo ha podido tener por objeto el evitar al deudor un vejamen innecesario, desde que los mismos objetos denunciados pueden serle embargados hallándose en su domicilio, lo cual ciertamente no perjudica al recurrente. Nosotros diríamos que esto *ciertamente* trae perjuicios al ejecutante, pues el dinero que una persona se pone en el bolsillo para salir á la calle lo saca cuando entra en su casa. Además, las alhajas no se llevan por lo regular dentro de casa por aquellas personas que tratan de eludir responsabilidades. Cuando á un deudor contra quien se ha librado un mandamiento prendario se le encuentra en la calle se le debe invitar á entrar á alguna parte. Así se le evita el vejamen de que habla la Cám., y se niega á entrar, cuya será la culpa del acto que la justicia se ve obligada á ejecutar.

1—La disposición del art. 470 del Cód. de Proc. es terminante cuando impone á la parte el deber de acompañar el instrumento probatorio siempre que la obligación haya sido firmada por autorización. Si bien esta prescripción se encuentra ubicada en el título del juicio ejecutivo, debe aplicarse por analogía al caso en que se trata de un embargo preventivo, puesto que en este título no se advierte nada al respecto y solo se manda por el art. 443, inc. 2^o, que debe abonarse la firma del deudor, por información sumaria. Tratándose de una medida tan grave como es el embargo preventivo, no puede admitirse como bastante para dictarlo, que solo se acredite por información la autenticidad de la firma de la persona que procede con autorización, pues que esto importaría eludir el cumplimiento de lo dispuesto por el art. 470 antes citado. Es deber de los jueces, al decretar estas medidas, aplicar estrictamente la ley, en garantía de los derechos de los litigantes, y evitar perjuicios que más tarde sería difícil reparar.



2. **Embargo preventivo.**—Procede el embargo preventivo, aun cuando no se acompañe el pagaré, siempre que por el testimonio de protesto personal conste su existencia.—Jur. Com., tom. 1, pág. 263, Ser. 4^a.

3. **Embargo preventivo.**—Procede el embargo preventivo por el resultado de una compulsa.—Jur. Com., tom. 1, pág. 271, Ser. 4^a.

4. **Embargo preventivo.**—El simple recibo de las mercaderías, aun abonada la firma, no basta para decretarlo.—Jur. Com., tom. 2, págs. 99 y 133, Ser. 4^a.

5. **Embargo preventivo.**—La rebeldía por no usar de un derecho, no basta para fundar un embargo preventivo el que solo procede contra el declarado rebelde.—Jur. Com., tom. 2, pág. 188, Ser. 4^a.

6. **Embargo preventivo.**—Para que la compulsa de los libros de comercio lo haga procedente, debe presentarse al

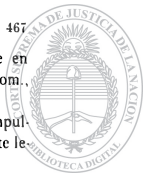
2—La escritura de protesto acredita la confesión de la deuda hecha por el deudor y hace procedente el embargo preventivo—art. 443, inciso 2° del Cód. de Proc.

3—Art. 443, inc. 4°, del Cód. de Proc.

4—El recibo estaba firmado por una persona que se dijo dependiente del que recibió las mercaderías. No se exhibió el instrumento de autorización, por cuya causa no se hizo lugar al embargo preventivo—art. 443, inc. 2°.—El instrumento tiene que ser atribuido al deudor, según disposición terminante de este artículo.

5—El embargo preventivo autorizado por el art. 437 del Cód. de Proc., se refiere al caso en que el litigante hubiese sido declarado rebelde en la forma que lo establece el art. 433 del mismo Cód., y no cuando la rebeldía solo tiene por objeto dar por decaído el derecho que ha dejado de usarse.

6—El art. 443 del Cód. de Proc., autoriza el embargo preventivo siempre que el acreedor justifique a lo menos por una semi-plena prueba, la existencia del crédito y la necesidad del embargo para garantizar su derecho. Uno de los casos en que puede pedirse el embargo, es cuando la deuda está justificada por los libros de comercio llevados en debida forma por el actor —inciso 4°, art. 443.— Y para que



Juzgado el conjunto de las operaciones constante en todos los libros que determina el Código.—Jur. Com., tom. 2, pág. 256, Ser. 4^a.

7. **Embargo preventivo**—No puede fundarlo, la computación de libros llevados en el extranjero, aun debidamente legalizada.—Jur. Com., tom. 2, pág. 272, Ser. 4^a.

8. **Embargo preventivo**—Si bien los bienes particulares de los socios solo pueden ser ejecutados después de los de la sociedad, pueden sin embargo ser embargados preventivamente.—Jur. Com., tom. 2, pág. 399, Ser. 4^a.

pueda decirse que tal justificación existe, es necesario que se examinen ó compulsen por lo menos los libros que el art. 44 del Cód. de Comercio declara indispensables, porque solo en virtud del control resultante de la conformidad de los respectivos asientos, es que pueden esos libros ser considerados como medios de prueba, entre comerciantes—art. 63, Cód. de Com.—Debiendo compulsarse y agregarse en copia á los autos, todos los asientos que en los diferentes libros indispensables del actor existiesen con referencia á las cuentas con el demandado, para que el Juzgado, examinándolos, pueda estimar si la deuda que se reclama y á causa de la cual se pedía el embargo preventivo está justificada por esos libros de comercio—art. 443, Cód. de Proc.—y no puede sustituirse, por el del contador que se limita á afirmar que aparece, en los libros del actor, un saldo determinado á cargo del demandado, sin copiar la cuenta, ni los asientos respectivos, ni manifestar si se ha limitado á leer lo escrito en el libro mayor ó de cuentas corrientes, como parecía deducirse del informe presentado.

7—Si bien el art. 443, inc. 4^o, Cód. de Proc., autoriza el embargo preventivo cuando la deuda esté justificada por los libros de comercio llevados en debida forma por el acreedor que pide el embargo, para que tal justificación exista es necesario que ella resulte de los libros que el art. 44, Cód. de Com., declara indispensables y que se hallen llevados con las formalidades exigidas por el mismo Código; de donde se deduce que son los libros llevados en el país y rubricados por las autoridades del mismo, los que pueden invocarse como medios probatorios en juicio.

8—Art. 691 del Cód. Civ. y 443 del de Proc. Véase: *Bienes particulares*, núm. 1.



9. **Embargo preventivo**—Solo procede, en juicio ordinario, si existe confesión expresa ó ficta del deudor.—Jur. Com., tom. 4, pág. 255, Ser. 4^a.

10. **Embargo preventivo**—Procede si la compulsa de la cuenta corriente justifica un saldo deudor.—Jur. Com., tom. 5, pág. 90, Ser. 4^a.

11. **Embargo preventivo**—Solo procede la inhibición cuando no se conocen bienes del deudor para el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 5, pág. 93, Ser. 4^a.

12. **Embargo preventivo**—Las órdenes para el envío de mercaderías, no bastan para hacer procedente el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 7, pág. 68, Ser. 4^a.

13. **Embargo preventivo**—Si la compulsa pone de manifiesto irregularidades en la forma de llevar los libros, no procede el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 7, página 345, Ser. 4^a.

14. **Embargo preventivo**—La forma irregular en que

9—Art. 448 del Cód. de Proc.

10—Véase: verb. *Compulsa*, núm. 2.

11—Según lo dispuesto por el art. 461 del Cód. de Proc., la inhibición general de vender ó gravar bienes, solo puede pedirse contra el deudor en los casos de embargo preventivo, cuando éste no pudiese hacerse efectivo por no conocersele bienes. El actor al solicitar que se decretase la inhibición general del ejecutado, lejos de afirmar que no le conocía bienes que pudiesen embargársele, sostuvo ó enunció precisamente lo contrario, pues decía que dicho ejecutado «trata de enajenar los bienes que posee». En consecuencia, no procedía dictar la inhibición general, y correspondía por lo mismo, que dejase sin efecto dicha medida.

12—No están comprendidas entre los documentos enumerados por los arts. 443 y 465 del Cód. de Proc.

13—Véase: verb. *Compulsa*, núm. 7.

14—El embargo preventivo ordenado lo fué en virtud de la disposición del art. 443, inc. 2º del Cód. de Proc., «y por lo tanto esa resolución se ajustaba á estricto derecho.» Las razones alegadas para fundar los recursos de nulidad y apelación no afectaban al decreto de em-



se practique el embargo preventivo, no es casual suficiente para fundar su nulidad ó revocatoria.—Jur. Com., tomo 7, pág. 366, Ser. 4^a.

15. **Embargo preventivo**—Revocado. importa atentar á la cosa juzgada, si el Inferior lo dicta sin nuevos antecedentes — Jur. Com., tom. 8, pág. 148, Ser. 4^a.

16. **Embargo preventivo** —Las constancias de los libros auxiliares de comercio no pueden fundar un embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 314, Ser. 4^a.

17. **Embargo preventivo**—Los libros de comercio no llevados en forma, no pueden fundar un embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 151, Ser. 4^a.

18. **Embargo preventivo**—La incompetencia del Juzgado, no puede fundar la nulidad del embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 8, pág. 153, Ser. 4^a.

19. **Embargo preventivo**—Los gastos del embargo preventivo son á cargo del acreedor, si el deudor paga el día bargo preventivo en sí mismo, sino á la manera en que se le dió cumplimiento, y en consecuencia, ni podía determinar su nulidad ni autorizar su revocación, decía la Cám.

15—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 4.

16—Para que los libros puedan fundar un embargo preventivo, deben reunir los requisitos especificados en las notas de los núms. 6 y 7.

17—El art. 443 del Cód. de Proc., al autorizar el embargo preventivo fundado en los libros de Com., exige en su inc. 4^a, que los libros estén llevados en *debida forma* por el actor. Véanse las notas 6 y 7.

18—Art. 463 del Cód. de Proc.

19—El Inferior dijo, que habiéndose abonado la obligación en el día de su vencimiento, esto era prueba evidente de la improcedencia de la medida solicitada, y por consiguiente el acreedor debía abonar las costas. Esta resolución fué confirmada *por sus fundamentos* y parece estar en oposición con lo resuelto en el verb. *Cosías*, núm. 40. Sin embargo no es así, por cuanto en el caso del sumario el deudor pagó al vencimiento de la obligación, mientras que en el otro la deuda no fué saldada sino después de vencida la obligación. En el caso del sumario no hubo mora, mientras que en el otro sí la hubo.



del vencimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 300, Ser. 4^a.

20. **Embargo preventivo**—Es facultativo del Juzgado la apreciación de la caución ofrecida para el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 239, Ser. 4^a

21. **Embargo preventivo**—Procede fundado en un contrato bilateral, si se justifica el cumplimiento por parte del que lo pide u ofrece cumplirlo.—Jur. Com., tom. 9, pág. 265, Ser. 4^a.

22. **Embargo preventivo**—Procede contra el que ha consentido que se le declare rebelde.—Jur. Com., tom. 9, pág. 303, Ser. 4^a.

23. **Embargo preventivo**—No procede el de bienes que se encuentran en poder de tercero que alega ser su propietario.—Jur. Com., tom. 9, pág. 341, Ser. 4^a.

24. **Embargo preventivo**—Si los libros de comercio no han sido llevados en forma, el embargo preventivo es improcedente.—Jur. Com., tom. 9, pág. 345, Ser. 4^a.

25. **Embargo preventivo**—Aun cuando el asunto se encuentre sometido á árbitros, el Juzgado puede dictar embargo preventivo, en tanto aquel tribunal no se encuentre constituido.—Jur. Com., tom. 10, pág. 170, Serie 4^a.

26. **Embargo preventivo**—Las costas del embargo preventivo son á cargo del deudor, aun cuando pague antes de librarse mandamiento en la ejecución.—Jur. Com., tomo 10, pág. 209, Ser. 4^a.

20—Véase: verb. *Caución ofrecida*, núm. 1.

21—Véase: verb. *Contrato bilateral*, núm. 2.

22—Arts. 437 del Cód. de Proc.

23—Así resulta de lo dispuesto en el art. 478 del Cód. de Proc.

24—Art. 443, inc. 4º del Cód. de Proc.

25—Art. 222, inc. 3º del Cód. de Proc.

26—Véase el núm. 19.



27. **Embargo preventivo**—Si la rebeldía del demandado hace procedente el embargo, el acreedor tiene derecho para retirar la caución prestada para conseguir el embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 211, Serie 4ª.

28. **Embargo preventivo**—La acción de liquidación de sociedad, no basta para fundar un embargo preventivo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 232, Ser. 4ª.

29. **Embargo preventivo**—La acción de petición de he-

27—Véase: verb. *Caución prestada*, núm. 1.

28—La acción deducida por el actor tenía por objeto conseguir la disolución y liquidación de la sociedad celebrada entre él y el demandado. Por consiguiente, no se trataba de una acción reivindicatoria, nacida del dominio ó condominio sobre bienes determinados, sino de la acción *prosocio* nacida del contrato. Por esa razón el embargo preventivo no puede ser decretado al amparo del art. 447, Cód. de Proc. Tampoco se halla autorizado por ninguno de los arts. del tit. XIII, porque la calidad de acreedor ó deudor de los socios entre sí, ó de la sociedad para con ellos, deberá resultar de la liquidación á practicarse, salvo el caso en que el socio ó socios se encuentren en caso semejante á cualquier tercero, acreedor de la sociedad—art. 442, Cód. de Com.—Pendiente la liquidación de la sociedad, ningún socio puede exigir la entrega del haber que le toca en la división de la masa social, mientras no estén cubiertos todos los créditos pasivos de la compañía ó se hubiese depositado cantidad suficiente para el pago, y su derecho solo alcanza á exigir el depósito de las cantidades que se fuesen liquidando—art. 442, citado.—Por otra parte, dados los términos de los arts. 447 y 456, el embargo nunca puede autorizarse sino sobre la cosa ó cosas determinadas, mueble ó inmueble que sea materia del litigio, ó por cantidad líquida, la que deberá *expresar siempre el mandamiento*, cuando se trate de cobro de dinero. En el juicio de liquidación no ocurre ni lo uno ni lo otro, pues mientras la liquidación de la sociedad no se practique, es legalmente imposible saber si el activo social excede al pasivo, y cuál sea en tal caso la parte que corresponda á cada uno de los socios. Este caso está de acuerdo con otro resuelto. Véase: Inst., tom. 3º, verb. *Embargo preventivo*, núm. 9.

29—Se dice que tratándose de una acción reivindicatoria procede el embargo preventivo y que como la acción de petición de herencia



rencia hace procedente el embargo preventivo. — Jur. Civ., tom. 8, pág. 92, Ser. 3ª.

30. **Embargo preventivo**—No procede el fundado en la reivindicación, si la demanda no se dirige contra el tercer poseedor. — Jur. Civ., tom. 8, pág. 115, Ser. 3ª.

31. **Embargo preventivo**—Declarada la improcedencia del embargo preventivo, el que careciendo de derecho lo obtuvo, es responsable de los daños y perjuicios causados. — Jur. Civ., tom. 9, pág. 287, Ser. 3ª.

le está equiparada, cuando ésta se entabla también procede dicha medida provisoria. Pero yo pregunto. ¿Basta que se entable la acción reivindicaria para que el embargo preventivo proceda? Se contesta terminantemente que no. Para que proceda el embargo preventivo se requiere que la petición esté fundada y que el derecho sea claro. Así es que se exigen recaudos para que el embargo preventivo pueda dictarse. Esta es la jurisprudencia sentada constantemente por la Exma. Cám., como puede verse en los casos publicados en el tom. 1º, pág. 354 Ser. 3ª, Jur. Civ.; tom. 5º, pág. 393, Ser. 4ª; tom. 10, pág. 68, Ser. 4ª; tom. 1º, pág. 71, Ser. 3ª. La jurisprudencia fundada en la ley, exige como recaudo la constatación evidente del derecho. Así lo tiene resuelto en el caso que puede verse en el tom. 1º, pág. 94, Ser. 2ª, donde se decretó el embargo preventivo fundado en las partidas presentadas en autos. En este caso hubo un voto en desidencia. En el caso publicado en el tom. 6º, página 430, Ser. 3ª, se dijo que el embargo preventivo solo procede para garantizar derechos reconocidos. Cuando no hay derechos constatados la medida no procede. Hay un caso especial que legisla para el que nos ocupa, ó mejor dicho, que sirve de norma de conducta. En el tom. 4º, pág. 220, Ser. 4ª, se lee lo siguiente: «Para que proceda el embargo preventivo en la petición de herencia, deben acompañarse los recaudos necesarios.» Esto es esencial, esto es indispensable. Igual cosa se resolvió en el caso que corre publicado en el tom. 11, página 229, Ser. 4ª. Por último, en el caso de que la filiación fuese declarada, ese auto no sería suficiente para decretar un embargo preventivo como lo tiene resuelto la misma Cám. en el caso que corre publicado en el tom. 3º, pág. 423, Ser. 6ª.

31—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Véase: Inst., tomo 5, verb. *Daños y perjuicios*, núm. 4.



32. **Embargo preventivo** — Para que proceda sobre el bien reivindicado, deben acompañarse justificativos que hagan verosímil la acción. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 71, Ser. 3^a.

33. **Embargo preventivo** — Procede contra el declarado rebelde. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 90, Ser. 3^a.

34. **Embargo preventivo** — Para decretarlo debe abonarse la firma si la deuda es de mayor cuantía. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 3^a.

35. **Embargo preventivo** — La petición de herencia hace procedente el embargo preventivo, pero solo de la parte que pueda corresponder al peticionante. — Jur. Civ., tom. 10, pág. 93, Ser. 3^a.

36. **Embargo preventivo** — Llenados los requisitos de la ley, procede el embargo preventivo. — Jur. Civ., tom. 11, pág. 197, Ser. 3^a.

37. **Embargo preventivo** — Si de la escritura resulta cantidad líquida por parte de precio, procede el embargo preventivo. — Jur. Civ., tom. 11, pág. 199, Ser. 3^a.

38. **Embargo preventivo** — No procede el embargo preventivo, si de la escritura no resulta deuda líquida. — Jur. Civ., tom. 11, pág. 223, Ser. 3^a.

39. **Embargo preventivo** — La sentencia que impone una obligación de hacer, no puede fundar un embargo preventivo. — Jur. Civ. tom. 12, pág. 392, Ser. 3^a.

40. **Embargo preventivo** — La autenticidad de la firma de un documento privado debe justificarse por información

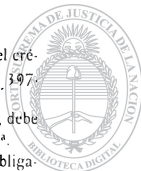
32 — De acuerdo con los principios sentados en la nota del núm. 29. Véase: *Bien reivindicado*, núm. 1.

33 — Arts. 33, 439 y 437 del Cód. de Proc.

34 — Arts. 443, inc. 2º del Cód. de Proc.

35 — Véanse los núms. 29 y 32.

40 — Art. 443, inc. 2º del Cód. de Proc.



sumaria para que proceda el embargo preventivo si el crédito es de mayor cuantía.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 397. Ser. 3ª.

41. **Embargo preventivo**—Dictado indebidamente, debe ser levantado.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 403, Ser. 3ª.

42. **Embargo preventivo**—Es procedente si la obligación de dar consta en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 410, Ser. 3ª.

43. **Embargo preventivo**—No procede embargo preventivo por honorarios, si no existe regulación.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 423, Ser. 3ª.

1. **Embargo suspendido**—Si en el acto del embargo y para obtener su suspensión, un tercero se obliga á depositar el importe reclamado, procede ejecución contra él.—Jur. Com., tom. 5, pág. 90, Ser. 4ª.

Empate—Véase: *Síndico*, núm. 5.

Emplazamiento—Véase: *Estado de sus negocios*, núm. 1—*Notificación por cédula*, núm. 1—*Edictos*, núm. 1—*Competencia*, núm. 5.

Empleados—Véase: *Escribano secretario*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 18.

Empleados públicos—Véase: *Honorarios*, núm. 14.

1ª. **Empleado suspendido**—La pena de suspensión de empleo, solo puede ser aplicada ante la jurisdicción criminal.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 228, Ser. 4ª.

Empleo—Véase: *Suspensión de empleo*, núms. 1 y 2.

Empresa—Véase: *Carta de porte*, núm. 1—*Contrato de transporte*, núm. 1—*Daños y perjuicios*, núm. 14.

1ª. **Empresa de ferrocarril**—Las empresas de transportes

43—Porque no hay deuda líquida, dice la Cám.

1ª—Arts. 28, incs. 1ª y 2ª del Cód. de Proc. Crim., y 244 del Cód. Penal.

1ª—Art. 187 del Cód. de Com.



por ferrocarril están obligados á entregar al destinatario la carga dentro del término que fija el Código de Comercio—una hora por cada diez kilómetros—bajo pena de perder el precio de transporte.—Jur. Com., tom. 1. página 333, Ser. 4ª.

2. **Empresa de ferrocarril**—Es responsable del valor de las mercaderías ó animales cuyo transporte se le confia siempre que no justifique que la pérdida ó extravío es imputable al cargador.—Jur. Com., tom. 3, pág. 359, Serie 4ª.

3. **Empresa de ferrocarril**—La expedición de boletos de pasaje por una empresa de transporte por ferrocarril, para recorrer las vías de otra, importa el cumplimiento de un mandato, y en consecuencia, la responsabilidad por los accidentes recaen siempre sobre la propietaria de la vía, aun cuando no lo fuera del vehículo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3ª.

4. **Empresa de ferrocarril**—Las de ferrocarril son responsables de los daños y perjuicios causados á los pasajeros, por accidentes debidos á su negligencia, aun cuando no puedan ser calificados como delitos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3ª.

5. **Empresa de ferrocarril**—Las convenciones por las cuales las empresas se libentan de toda responsabilidad por el material destinado al servicio recíproco, no pueden ser opuestas á terceros que no han tomado parte en esas convenciones.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Serie 3ª.

2—Art. 162 del Cód. de Com.

3—Véase: *Accidentes*, núm. 1.

4—Véase: *Accidentes*, núm. 2.

5—Véase: verb. *Convenciones*, núm. 1.



Empresa de ferrocarril — Véase: *Daños y perjuicios*, número 1.

1ª. **Empresa de transporte** — La recepción y remisión de un bulto, no importa por parte de ésta un reconocimiento de la existencia de las mercaderías detalladas por el cargador. — Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 4ª.

2ª. **Empresa de transporte** — La demora en la entrega de los bultos las obliga a la devolución del flete cobrado. — Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 4ª.

3ª. **Empresa de transporte** — Que contrata el transporte es la única responsable de la entrega en el punto convenido, sin perjuicio de las responsabilidades en que con respecto a ella incurran otras empresas cuyas vías tengan necesidad de usar para el cumplimiento del contrato de porte. — Jur. Com., tom. 9, pág. 37, Ser. 4ª.

Enajenación — Véase: *Bienes ocultos*, núm. 1.

Encausado — Véase: *Fiador*, núm. 3.

1. **Encubridor** — Que conociendo el hecho y la procedencia del dinero acepta una participación, no puede alegar inculpabilidad. — Jur. Crim., tom. 3, pág. 183, Ser. 4ª.

2. **Encubridor** — El hecho de tener en su poder objetos robados, si bien no basta para castigar al tenedor como autor del robo, permite penarlo como encubridor. — Jur. Crim., tom. 3, pág. 187, Ser. 4ª.

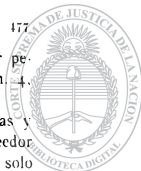
3. **Encubridor** — Debe ser penado como tal el poseedor de un objeto robado cuya tendencia de buena fe no puede justificar en tanto no exista prueba plena de haber sido el autor del delito. — Jur. Crim., tom. 4, pág. 251, Ser. 4ª.

--

1ª — Véase: verb. *Bultos*, núm. 1.

2ª — Véase: *Bultos*, núm. 2.

3ª — Véase: *Contrato de transporte*, núm. 3.



4. **Encubridor**—El encubridor del robo, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 32, Ser. 4^a.

5. **Encubridor**—Aun cuando de las circunstancias y antecedentes existan presunciones de que el poseedor del robo fué el autor, si no existe prueba plena, solo puede ser penado como encubridor.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 21, Ser. 4^a.

6. **Encubridor**—El encubridor de un robo con violencia en las cosas, debe ser castigado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 263, Ser. 4^a.

7. **Encubridor**—Solo puede calificarse y penarse como encubridor, al poseedor de los objetos robados á quien presunciones vagas indican como autor principal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 263, Ser. 4^a.

8. **Encubridor**—El conocimiento de que los objetos que se pretende enajenar son robados, permite calificar y penar al poseedor como encubridor del hurto, pero no como autor principal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 137, Ser. 4^a.

9. **Encubridor**—Del delito de hurto, cometido por un menor, debe ser castigado con un año de arresto.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 118, Ser. 4^a.

1. **Endosante**—Que ha pagado la letra, puede ejecu-

4—Arts. 42, inc. 3^o; 43, 54, inc. 6^o; y 52 del Cód. Pen.

6—Arts. 42, inc. 3^o, y 43 del Cód. Pen.

7—Arts. 42, inc. 3^o, y 43 del Cód. Pen.

8—Arts. 42 y siguientes del Cód. Pen.

9—Arts. 43 y 193, inc. 2^o del Cód. Pen.

1—Aunque según el protesto, aparezca como tenedor de la letra un tercero, esa circunstancia no obsta á que otro pueda ejecutar la letra por cuanto el hecho de presentarla uno de los endosantes hace presumir que la ha retirado según los usos comerciales.



tarla, aun cuando del protesto aparezca en poder de un tercero.—Jur. Com., tom. 2, pág. 251, Ser. 4^a.

2^a. **Endosante**—El endosante que paga el pagaré se subroga al tenedor que lo protestó.—Jur. Com., tom. 7, página 347, Ser. 4^a.

Endosante—Véase: *Letra de cambio*, núm. 1—*Protesto*, núm. 3—*Endoso*, núm. 1—*Excepción de caducidad*, número 5.

1. **Endoso**—El tenedor de un pagaré que á su vencimiento no lo protesta, pierde toda acción contra el endosante, cualquiera que sea la forma del endoso.—Jur. Comercial, tom. 6, pág. 117, Ser. 4^a.

2^b. **Endoso**—El que no reúne los requisitos que determina el Cód., vale como simple mandato para el cobro, y el endosante, aun notificado del protesto, no es responsable de su importe al tenedor.—Jur. Com., tom. 8, pág. 275, Ser. 4^a.

3. **Endoso**—El posterior al protesto no transfiere la propiedad de la letra ó pagaré.—Jur. Com., tom. 8, página 132, Ser. 4^a.

2^a—De acuerdo con el principio sentado en el número precedente. Si los pagarés han sido endosados, y después de protestados por el tenedor, aparecen en poder de uno de los endosantes, ese hecho hace presumir que él lo ha abonado y que por consiguiente ha vuelto á ser legítimo tenedor de la obligación.

1—Art. 619, 740, 626, 627 y 628 del Cód. de Com.

2^b—Según el art. 624, Cód. de Com., el endoso por el cual se transfiere la propiedad de una letra de cambio, es una verdadera cesión sometida en sus formas y en sus efectos á las disposiciones del Cap. 5^o, tit. X, lib. 2^o de dicho Cód. El art. 626 enumera los requisitos que debe contener el endoso para ser completo, y el 628 dispone, que no siendo en blanco el endoso, ó no teniendo los requisitos establecidos en el art. 626 *valdrá como simple mandato*, al efecto de autorizar al tenedor á exigir el pago, ó hacer protestar la letra.

3—Arts. 635 y 741 del Cód. de Com.



4. **Endoso**—Las escepciones personales que el firmante del pagaré pueda oponer al endosante, son improcidentes contra el tenedor de un pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 9, pág. 5, Ser. 4^a.

5. **Endoso**—Si el endoso de la letra no llena los requisitos de la ley, él solo importa un mandato á los efectos del cobro, con cargo de devolver.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 96, Ser. 3^a.

Endoso—Véase: *Falsedad del endoso*, núm. 1—*Nulidad de la ejecución*, núm. 3.

1^a. **Enfermedad**—Si los informes médico-legales sobre la duración de la incapacidad para el trabajo son contradictorios, el presentado durante ó al terminarse la enfermedad, prima sobre el del primer momento, y también sobre los verificados por referencias durante el plenario.—Jur. Com., tom. 8, pág. 37, Ser. 4^a.

Enfermedad—Véase: *Pocisiones*, núm. 1.

Engaño—Véase: *Confesión retractada*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 36—*Actos de la esposa*, núm. 1.

Ensañamiento—Véase: *Homicidio premeditado*, núm. 1.

Entrada—Véase: *Robo*, núm. 8—*Domicilio violado*, número 1.

1^b. **Entradas**—No procede el embargo total de las entradas de un establecimiento, si ese hecho puede hacer

4.—Arts. 740, 741 y 669 del Cód. de Com.

5.—Arts. 803 y 804 del Cód. de Com. ant.

1^a—El último informe es el único que puede servir de base para una apreciación exacta de la importancia de las lesiones. El informe espedido inmediatamente de producido el hecho no merece entera fe, por cuanto los datos que proporciona respecto al tiempo de la incapacidad para el trabajo, no pueden tener el mismo grado de certidumbre que los que se obtienen en un reconocimiento posterior, verificado cuando la enfermedad ha recorrido casi todo su curso.

1^b—Véase: *Embargo de entradas*, núm. 1.



imposible su funcionamiento regular. —Jur. Civ., tomo 10, pág. 99, Ser. 3^a.

Entrega—Véase: *Cesación de pagos*, núm. 2—*Nulidad de un contrato*, núm. 1—*Acciones ó títulos*, núm. 1—*Comprador de mercaderías*, núm. 2—*Contrato de transporte*, núm. 3—*Moneda de oro*, núm. 2

Entrega judicial—Véase: *Adjudicaciones in solutum*, núm. 1.

Error—Véase: *Domicilio de los testigos*, núm. 1—*Cédula equivocada*, núm. 1—*Pago por error*, núm. 1—*Juzgado*, núm. 1—*Sentencia definitiva*, núm. 4—*Costas*, número 49.

Errorres del procedimiento—Véase: *Recusación con causa*, núm. 6.

1^a. **Escalamiento**—El robo con escalamiento, debe ser castigado con tres años de prisión, si existe reiteración y el reo era reincidente.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 31, Ser. 4^a.

Esoalamiento—Véase: *Robo con escalamiento*, núms. 1, 2, 3, 4 y 5—*Robo de noche*, núm. 1—*Robo de menor valor*, núm. 1.

1^b. **Escarcelación bajo fianza**—No procede la escarcelación durante el sumario, si el delito es pasible de pena que exceda al máximo de la fijada para la escarcelación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 139, Ser. 4^a.

2. **Escarcelación bajo fianza**—No procede la escarcela-

1^a—Arts. 190 y 191 del Cód. Pen.

1^b—El art. 376 del Cód. de Proc. Crim. establece que cuando el hecho que motivó la prisión del procesado solo tenga pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximo no exceda de dos años de prisión, ó una y otra conjuntamente podrá decretarse la libertad provisoria siempre que preste caución bastante.

2—Véase la nota precedente.



ción bajo fianza, si el delito es pasible de más de dos años de prisión. — Jur. Crim., tom. 1, pág. 262, Serie 4^a.

3. Escarcelación bajo fianza—La sentencia del Inferior que decreta el sobreseimiento, hace procedente la escarcelación bajo fianza, en los delitos que la ley permite. — Jur. Crim., tom. 1, pág. 306, Ser. 4^a.

4. Escarcelación bajo fianza — Aun cuando el reo sea acusado de tentativa de homicidio, procede la escarcelación si del sumario resulta no existir el delito. — Jur. Crim., tom. 2, pág. 425, Ser. 4^a.

5. Escarcelación bajo fianza—Del reo de adulterio, no

3—El art. 504 del Cód. de Proc. Crim. autoriza la escarcelación bajo fianza, cuando el Juez de 1^a Inst. sobresee definitivamente. Esa escarcelación procede no obstante el recurso de apelación que se interponga, y aunque la escarcelación no fuese procedente por tratarse de un delito no escarcelable, esto es, aunque el delito merezca más de dos años de prisión—art. 376, mismo Cód.

4—Para que la prisión preventiva proceda se requiere que la existencia del delito esté justificada cuando menos por una prueba semiplena, y que hayan indicios suficientes á juicio del juez para creer que el detenido es responsable del hecho—art. 366 del Cód. de Proc.— Si estos requisitos son indispensables para que el presunto reo sea constituido en prisión preventiva, con mucho más motivo se podrá eximir de esa prisión á un detenido, que según el criterio judicial, no ha cometido el hecho que se le imputa, ni existe semiplena prueba de que él sea el autor del hecho.

5—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos, fundándose ésta en que según la jurisprudencia establecida por la Cám. de lo Crim., en los casos de escarcelación bajo fianza, debe estarse al título del delito acusado, prescindiendo de las circunstancias agravantes ó atenuantes que puedan modificar la pena. Siendo el delito acusado el de adulterio, previsto y penado en el art. 123 del Cód. Pen., cuya pena excede del límite fijado para la escarcelación bajo fianza: ésta no puede concederse atento el precepto espreso de la ley. La minoría opinó en contra por los fundamentos aducidos en el caso de Dalmiro Mendieta, resuelto el 31 de Oct. de 1892, que hasta hoy no ha sido publicado.



procede en tanto no exista sentencia.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 242, Ser. 4^a.

6. Escarcelación bajo fianza—Procede ésta, siempre que de los antecedentes de la causa resulte la falta de intención criminal del acusado.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 180, Ser. 4^a.

7. Escarcelación bajo fianza—Procede en los delitos penados con destierro.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 227, Serie 4^a.

8. Escarcelación bajo fianza—Procede si las lesiones corresponden á la jurisdicción correccional.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 355, Ser. 4^a.

9. Escarcelación bajo fianza—No procede en el delito de falsedad en documento público cometida por un funcionario público.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 372, Ser. 4^a.

10. Escarcelación bajo fianza—La sentencia que da por compurgado el delito con la prisión sufrida, no permite la escarcelación si es apelada por el reo.—Jur. Crim., tomo 5, pág. 374, Ser. 4^a.

11. Escarcelación bajo fianza—El juez no puede resol-

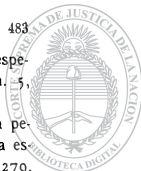
7—Porque la pena de destierro es limitada y no privativa de la libertad.

8—El art 28 del Cód. de Proc. Crim. señala como limite para el conocimiento de las causas de jurisdicción correccional los delitos cuya pena no pase de arresto ó prisión que no exceda de un año; y como la escarcelación procede siempre que la pena no esceda de dos años, resulta que el sumario es exacto.

9—Porque el art. 281 del Cód. Pen. castiga este delito con tres á seis años de penitenciaría; y de acuerdo con lo prevenido en el art. 376 del Cód. de Proc. Crim., no procede la escarcelación en este caso.

10—Porque en este caso no hay absolución, y por consiguiente no concurre la condición requerida por el art. 504 del Cód. de Proc. Crim. para que la escarcelación sea procedente.

11—Con la elevación de los autos al Superior queda en suspenso la jurisdicción del Inferior, y carece la consecuencia de imperio para dic-



ver sobre la escarcelación bajo fianza en tanto el expediente se halle ante el Superior.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 104, Ser. 4^a.

12. Escarcelación bajo fianza—Si el máximo de la pena fijada al delito es más de dos años, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 279, Ser. 4^a.

13. Escarcelación bajo fianza—No procede la escarcelación bajo fianza, si existe concurrencia de delitos.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 77, 94 y 100, Ser. 4^a.

14. Escarcelación bajo fianza—No procede la escarcelación bajo fianza, si del informe médico resulta que puede existir pérdida de un miembro.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 116, Ser. 4^a.

15. Escarcelación bajo fianza—El auto que concede ó deniega la escarcelación bajo fianza, no hace cosa juzgada.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 356, Ser. 4^a.

16. Escarcelación bajo fianza—No procede la escarcelación bajo fianza, si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 421, Ser. 4^a.

17. Escarcelación bajo fianza—El fiador debe depositar la suma en que se fijó el monto de la fianza en caso de no presentar al escarcelado.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 430, Ser. 4^a.

tar resolución alguna. Este caso está de acuerdo con otro publicado en el tom. 6º, pág. 351, Ser. 1ª de los fallos de la Cámara de lo Criminal.

12—De acuerdo con el núm. 1.

13—Art. 153 del Cód. Pen., y 376 y 477 del Cód. Proc. Crim.

15—Véase: *Cosa juzgada*, núm. 3.

16—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

17—Arts. 392 y 394 del Cód. de Proc. Crim.



18. Escarcelación bajo fianza—No procede si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 169, Ser. 4ª.

19. Escarcelación bajo fianza—No procede si el delito puede ser castigado con más de dos años de prisión, aun cuando el acusador fiscal haya pedido esa pena.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 14, Ser. 4ª.

20. Escarcelación bajo fianza—No procede si no puede terminarse el monto de la defraudación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 285, Ser. 4ª.

21. Escarcelación bajo fianza—Si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 273, Ser. 4ª.

22. Escarcelación bajo fianza—No procede si *prima facie* resulta la existencia de reiteración.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 280, Ser. 4ª.

23. Escarcelación bajo fianza—Debe justificarse en au-

18—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

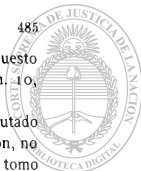
19—La escarcelación bajo fianza, solo procede cuando el hecho que ha dado lugar á la prisión tiene pena pecuniaria ó corporal cuyo máximo no exceda de dos años de prisión—art. 376, del Cód. de Proc. Crim.—El delito, en el caso que nos ocupa, se imputó al procesado; tenía una penalidad mayor, pues aun considerándolo comprendido en el inc. 1º del art. 120 del Cód. Pen., la pena podía ser hasta de tres años de prisión. La circunstancia de haber pedido el Min. Fiscal solo dos años de prisión, no puede tener influencia para la decisión del incidente, pues no obstante la petición de aquél, el reo puede ser condenado á una pena más grave, y la ley no autoriza la escarcelación sino á condición de que en ningún caso pueda corresponder mayor pena que la de dos años.

20—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 32.

21—Véase: verb. *Delito*, núm. 20.

22—Arts. 376 y 377 del Cód. de Proc. Crim.

23—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 3.



tos la responsabilidad y arraigo del fiador propuesto para la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 186, Ser. 4^a.

24. **Escarcelación bajo fianza**—Si el delito imputado puede ser castigado con más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tomo 10, pág. 229, Ser. 4^a.

Escarcelación bajo fianza—Véase: *Dafraudación*, número 2.

1. **Escepción**—Opuesta la escepción, procede se sustancie con arreglo á derecho, si es de las permitidas por la ley.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 281, Ser. 4^a.

2. **Escepción**—La confesión calificada del hecho no importa para el acusado una escepción cuya prueba está obligado á presentar.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 330, Serie 4^a.

3. **Escepción**—Aun cuando la parte califique indebidamente la escepción que opone, la Cámara puede entrar á su conocimiento.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 384, Ser. 4^a.

4. **Escepción**—La demasia de los bienes embargados, no puede fundar una escepción al carácter ejecutivo de la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 411, Ser. 4^a.

5. **Escepción**—Probada la existencia de los hechos, la prueba de la escepción de que eran lícitos, correspon-

24—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

1—Arts. 448 y 454 del Cód. de Proc. Crim.

2—Véase: verb. *Confesión calificada*, núm. 1.

3—Se opuso la escepción de novación, pero de los hechos resultaba que la escepción era de espera. Fué rechazada por cuanto el art. 676 del Cód. de Com. solo la admite cuando ella resulta probada por escritura pública ó documento privado judicialmente reconocido.

4—Véase: verb. *Bienes embargados*, núm. 1.

5—Los hechos y antecedentes de la causa, lejos de constituir una prueba de la inocencia del acusado, establecían una presunción vehe-



de al acusado.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 146, Ser. 4ª.

6. **Escepción**—El reconocimiento de que la garantía era hasta una suma determinada, no importa una escepción cuya prueba corresponde al demandado.—Jur. Com., tomo 6, pág. 45, Ser. 4ª.

7. **Escepción**—El auto que corre traslado por su orden de la prueba de la escepción, es inapelable.—Jur. Com., tom. 9, pág. 342, Ser. 4ª.

8. **Escepción**—Procede la condenación en costas, si se rechaza la escepción deducida por ser temeraria.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 125, Ser. 3ª.

9. **Escepción**—La escepción de la ley que permite informar á los presentados como testigos, no es aplicable á las posiciones las que deben ser absueltas personalmente.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 122, Ser. 3ª.

10. **Escepción**—La de quita condicional es improcedente como escepción, en tanto no se justifique que el deudor cumplió la condición.—Jur. Com., tom. 6, página 329, Ser. 4ª.

Escepción—Véase: *Espera*, núm. 1—*Escepción de incompetencia*, núms. 15 y 16—*Inhabilidad de título*, números 1 y 2—*Falsedad del endoso*, núm. 1—*Nulidad de la ejecución*, núm. 2—*Declaración personal*, núm. 1.

1. **Escepciones**—Si el ejecutado no justifica las escepciones

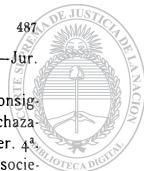
mentísima de culpabilidad. Ante esas constancias no es posible aceptar el dicho del acusado alegando la inocencia de sus actos.

7—Véase: verb. *Auto inapelable*, núm. 1.

8—Véase: verb. *Costas*, núm. 43.

9—El art. 202 del Cód. de Proc. se refiere exclusivamente á las declaraciones de testigos. En la ley de enjuiciamiento, no existe disposición alguna que exonere á los litigantes de la obligación de comparecer personalmente á absolver posiciones.

1—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Escepciones*, núm. 4.



ciones opuestas, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 2, pág. 53, Ser. 4^a.

2. **Escepciones**—Las costas del incidente sobre consignación son de cargo del ejecutado, en caso de ser rechazadas las escepciones.—Jur. Com., tom. 2, pág. 111, Ser. 4^a.

3. **Escepciones**—Comprobada la existencia de la sociedad demandada, deben rechazarse las escepciones opuestas por quien no haya justificado su personería.—Jur. Com., tom. 2, pág. 139, Ser. 4^a.

4. **Escepciones**—El deudor en cuyo poder se embargan los fondos por un tercero, puede oponer á éste las escepciones que tenía contra su acreedor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 182, Ser. 4^a.

5. **Escepciones**—La sentencia de remate solo es apelable cuando se han opuesto escepciones é intentado probarlas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 261, Ser. 4^a.

6. **Escepciones**—La sentencia de remate es inapelable si no se intenta probar las escepciones opuestas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 429, Ser. 4^a.

6^b. **Escepciones**—Procede el rechazo de las opuestas,

2—Véase: verb. *Consignación en pago*, núm. 1.

3—La existencia de la sociedad ejecutada estaba comprobada en autos. El poder en virtud del cual se presentó un apoderado fué otorgado por la misma persona cuyo nombre llevaba la razón social y por un hijo de éste. La razón social decía Fulano de Tal é hijos. No estando otorgado el poder á nombre de la razón social, se declaró que el apoderado no la representaba competentemente.

4—Véase: verb. *Embargo*, núm. 4.

5—Art. 501 del Cód. de Proc. Debe tenerse presente que cuando las escepciones son de puro derecho, la sentencia será siempre apelable, porque el derecho no se prueba. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Apelable*, núm. 2.

6—Véase la nota precedente.

6^b—Véase el núm. 1.



si el demandado no las justifica plenamente.—Jur. Com., tom. 3, pág. 113, Ser. 4^a.

7. **Escepciones**—Después de la contestación de la demanda en rebeldía, no pueden oponerse.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 259, Ser. 4^a.

8. **Escepciones**—Adolece de nulidad la sentencia dictada sin recibir á prueba las escepciones opuestas, si ellas fueran de las que la ley declara admisibles en el juicio ejecutivo, y esa nulidad puede ser declarada aun de oficio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 93, Ser. 4^a.

9. **Escepciones**—No procede la suspensión del término

7—Arts. 443 y 445 del Cód. de Proc. Crim.

8—Siendo admisibles las escepciones opuestas, el procedimiento, para ser válido, debe sujetarse á las prescripciones de los arts. 490 á 496 del Cód. de Proc., porque no es lícito separarse del orden que la ley establece para administrar justicia—art. 58 del mismo Cód.—y no puede en consecuencia, pronunciar sentencia de remate sin abrir el término de prueba que prescribe el art. 490. La omisión de ese trámite vicia de nulidad la sentencia porque es un trámite sustancial del juicio, sin que á ello obste lo dispuesto en la primera parte del art. 240, Cód. de Proc., porque los efectos á que ese artículo se refiere son los que no afectan á la esencia y forma sustancial del juicio, que no son renunciabiles por las partes, sino á aquellos que no revisten esa calidad, en corroboración de lo cual puede verse la Ley 15, tít. 22, Part. 3^a, y la glosa de Gregorio López «ca ordenadamente.» La nulidad mencionada es, absoluta y declarable de oficio, con arreglo á la Ley 5^a, al fin, tít. 26, Part. 3^a, vigente aun en esta Capital, con arreglo á los arts. 240 y 814 del Cód. de Proc., y 318, Ley Org. de 1886.

9—El término de prueba en el juicio ejecutivo no puede suspenderse ni prorrogarse sino de conformidad de partes—art. 493, Cód. de Proc. Por consiguiente, ese término tiene el carácter de perentorio, según la prescripción del art. 46, inc. 4^o del Cód. antes citado. Lo contrario importaría desnaturalizar los procedimientos marcados para el juicio ejecutivo. El pedido de suspensión no importaría otra cosa sino obtener el término extraordinario á que se refiere el art. 113 del Cód. citado, que solo es de aplicación al juicio ordinario, como se ha declarado en diversos casos.



de prueba de las escepciones.—Jur. Com., tom. 5, página 138, Ser. 4^a.

10. **Escepciones**—El auto que las recibe á prueba en juicio ordinario, es inapelable.—Jur. Com., tom. 5, página 377, Ser. 4^a.

11. **Escepciones**—Las escepciones opuestas fuera del término, deben ser rechazadas sin sustanciación.—Jur. Com., tom. 6, pág. 236, Ser. 4^a.

12. **Escepciones**—El término para oponer escepciones es fatal é improrrogable.—Jur. Com., tom. 8, pág. 150, Ser. 4^a.

13. **Escepciones**—La recusación del juez debe hacerse en el escrito en que se opongan las escepciones, pues la recusación no suspende el término para oponerlas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 150, Ser. 4^a.

14. **Escepciones**—La sentencia de remate es inapelable, si no se produce prueba de las escepciones.—Jur. Com., tom. 8, pág. 326, Ser. 4^a.

15. **Escepciones**—El término para contestar el traslado

10—Arts. 87, 105 y 226 del Cód. de Proc.

11—El término establecido por el art. 485 del Cód. de Proc., es perentorio.

12—Art. 485 del Cód. de Proc.

13—Los términos judiciales empiezan á correr desde el emplazamiento, citación ó notificación—art. 41, Cód. de Proc.—El término del art. 83 para oponer escepciones es perentorio ó fatal, y por lo tanto, improrrogable—arts. 42 y 46 del mismo Cód.—En esa clase de términos se tendrá por decaído el derecho por su solo transcurso. El derecho de recusar sin causa, acordado por el art. 466, Cód. de Proc., no puede producir la suspensión de tal término, pues en nada se opone á ser ejercido conjuntamente con el señalado en el art. 83, para oponer escepciones por vía de artículo previo, y contestar la demanda.

14—Véanse los núms. 5 y 6.

15—El solo transcurso de un término legal, no es bastante para incurrir en la pérdida del derecho que dentro de él debía ejercitarse, á no



de la escepciones, ni su prórroga, es fatal.—Jur. Com., tom. 10, pág. 225, Ser. 4^a.

16. **Escepciones**—El término para oponer escepciones es perentorio y por su simple transcurso se pierde el derecho, sin que sea necesaria rebeldía, debe dictarse sentencia de remate.—Jur. Com., tom. 10, pág. 234, Ser. 4^a.

17. **Escepciones**—En la prórroga concedida para contestar la demanda, no pueden oponerse escepciones.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 105, Ser. 3^a.

18. **Escepciones**—El actor puede oponerlas á la contrademanda.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 365, Ser. 3^a.

19. **Escepciones**—Deben ser rechazadas las escepciones no justificadas por el ejecutado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 118, Ser. 3^a.

20. **Escepciones**—En los juicios de interdicto, las escepciones deben justificarse en el mismo acto del juicio

ser el caso que se trate de términos perentorios—art. 45, Cód. de Proc.—Cuando los plazos legales no revisten este carácter, la pérdida del derecho se opera solamente después de acusada por la otra parte la correspondiente rebeldía—artículo citado.—En consecuencia, no siendo perentorio el término para contestar el traslado de las escepciones dilatorias—art. 46—ni habiéndose acusado rebeldía al demandante, éste podría legalmente evacuarlo, aun después de vencido el plazo respectivo.

16—Art. 486 y 487 del Cód. de Proc.

17—Se trataba de escepciones dilatorias, siendo perentorio el término para oponerlas, su vencimiento daba por decaído el derecho de deducirlas—arts. 45, 46, inc. 1^o, y 83 del Cód. de Proc.

20—Opuesta la escepción de incompetencia de jurisdicción, como cuestión previa, debe probarse ésta en el mismo acto en que se formule, por tratarse de un juicio sumario con un procedimiento especial determinado por la ley. Admitir la apertura de la escepción á prueba, implicaría acordar mayor extensión á la prueba de la escepción que al fondo del asunto, desde que el art. 571 del Cód. de Proc. ordena sustanciar todo el juicio en un solo acto.



verbal; no procede la apertura de un término de prueba.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 83, Ser. 3ª.

21. **Excepciones**—Las excepciones opuestas fuera del término, no deben ser tomadas en consideración.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 119, Ser. 3ª.

22. **Excepciones**—Las excepciones no justificadas expresamente, no pueden considerarse virtualmente comprendidas en el convenio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 189, Ser. 3ª.

23. **Excepciones**—Es improcedente el recurso concedido de la sentencia de remate, si el ejecutado no opuso excepciones.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 12, Ser. 3ª.

24. **Excepciones**—En el juicio ejecutivo solo son aceptables las excepciones en la oportunidad que la ley señala.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 408, Ser. 3ª.

Excepciones—Véase: *Falta de personería*, núm. 1—*Novación*, núm. 1—*Seguro*, núm. 1.

Excepcionante—Véase: *Pago—Prescripción rechazada*, núm. 1.

1. **Excepción de arraigo**—No procede la del acusador en juicio criminal.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 369, Ser. 4ª.

2. **Excepción de arraigo**—Justificado el domicilio en jurisdicción del Juzgado al iniciarse el juicio, la excepción de arraigo es improcedente.—Jur. Com., tom. 9, pág. 297, Ser. 4ª.

21—Véanse los núms. 16 y 17.

22—Véase: verb. *Convenio*, núm. 1.

23—Art. 501 del Cód. de Proc.

24—Los arts. 485 á 487 del Cód. de Proc., establecen que solo dentro de tres días perentorios de la citación de remate pueden oponerse excepciones.

1—Esto sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en los art. 172 y 177 del Cód. de Proc. Crim.

2—Véase: verb. *Domicilio*, núm. 3.

Excepción de caducidad



3. **Excepción de arraigo**—Procede la excepción de arraigo si el demandante tiene su domicilio fuera de la jurisdicción del Juzgado.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 202, Ser. 3^a.

1. **Excepción de caducidad**—La excepción de caducidad fundada en la falta de protesto del pagaré es improcedente si se opone al firmante, que se conceptúa aceptante de la obligación.—Jur. Com., tom. 1, pág. 109, Ser. 4^a.

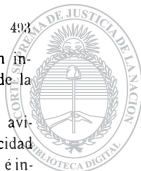
2. **Excepción de caducidad**—La excepción de caducidad de la obligación por falta de protesto del pagaré, es improcedente si se deduce por el firmante.—Jur. Com., tom. 1, pág. 114, Ser. 4^a.

3. **Excepción de caducidad**—De una letra, cualquiera que sea el número de firmantes de un pagaré á la orden se conceptúan todos aceptantes, si no resulta del mismo

3—Art. 85 del Cód. de Proc.

1—La excepción opuesta se fundaba en las disposiciones de los artículos 676, 714, 723 y 741 del Cód. de Com. Si bien es cierto que por el art. 676, es admisible la excepción de caducidad contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, el art. 741 limita la regla del art. 740, diciendo: que todo cuanto se ha establecido respecto á las letras de cambio, servirá igualmente de regla para los pagarés, *en cuanto pueda ser aplicable*. En el caso presente no se trataba de una letra de cambio, en la cual existe librador y endosante, sino de simples pagarés á la orden, en los cuales no aparecía otro aceptante sino el mismo ejecutado. En consecuencia, las disposiciones de los arts. 714 y 723, carecen por completo de aplicación. La falta de protesto de los pagarés, no enerva la acción ejecutiva que tiene contra el ejecutado la persona á cuya orden se hubiesen estendido dichos documentos. Los pagarés no endosados, si bien constituyen una promesa cambiaria, ni la aceptación ni el pago se le delegan á un tercero, sino que su suscriptor es á la vez girante, girado y endosante. En tal caso, cualesquier que puedan ser los efectos de la omisión del protesto, como librador y endosante, siempre se conservarían las acciones contra el mismo suscriptor como girante. Esto lo ha reconocido ya la jurisprudencia de esta Cám., y lo enseña también la doctrina—Segovia, Explicación y Crítica del Cód. de Com., núms. 2255, 2257 y 2483.

2—De acuerdo con el núm. precedente.



que tengan distinto carácter y en consecuencia están inhabilitados para oponer la excepción de caducidad de la letra.—Jur. Com., tom. 2, pág. 69, Ser. 4^a.

4. **Excepción de arraigo**—La falta de protesto y aviso respectivo, pueden fundar la excepción de caducidad opuesta por el firmante del aval, pero no la de falsedad é inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 3, pág. 300, Ser. 4^a.

5. **Excepción de arraigo**—De una letra, fundada en la falta de aviso del protesto al endosante, es improcedente si se justifica su remisión al correo.—Jur. Com., tom. 7, pág. 5, Ser. 4^a.

6. **Excepción de arraigo**—Reconocida la autenticidad del instrumento privado que justifica la simulación del pagaré, procede la excepción de caducidad si el juicio se sigue entre los mismos firmantes.—Jur. Com., tom. 9, pág. 25, Ser. 4^a.

7. **Excepción de arraigo**—Si los hechos en que se funda la inhabilidad del título hacen procedente la excepción de caducidad, el Tribunal debe así declararlo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 127, Ser. 4^a.

1. **Excepción de compromiso**—Es inadmisile en la eje-

5—Arts. 663, 664, 676 y 740 del Cód. de Com.

6—La caducidad de una letra ocurre cuando el tenedor de hecho ha omitido cumplir en la debida oportunidad, algunas de las formalidades prescriptas en los arts. 652, 654, inc. 1º, 655, inc. 1º, 661, 663, 666 y 714, Cód. de Com., relativamente á la presentación, para la aceptación y pago, protestos, avisos, etc., etc. Por tales omisiones una letra válidamente espedida, viene á quedar sin las condiciones necesarias para hacer eficaz por vía ejecutiva la acción que de ella emerge, y se dice que está perjudicada. Pero esto supone naturalmente la existencia de una letra válida y que solo posteriormente, y por haber sobrevenido algunas de las omisiones ó defectos recordados, ha venido á perjudicarse ó caducar.

1—Arts. 740, 741 y 676 del Cód. de Com.



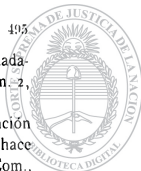
cución de un pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 2, pág. 45, Ser. 4^a.

2. **Excepción de compromiso**—Si el ejecutado al oponerla no espone los hechos en que la funda, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 374, Ser. 4^a.

1. **Excepción de defecto legal**—Es improcedente aun

2—Se dijo que la excepción no era procedente porque el art. 676 no la enumera, y porque no se indicaba en el escrito, en qué consistía ella.

1—El escrito de demanda reunía todos los requisitos que debe contener la acción instaurada, nombre y domicilio del actor, nombre y domicilio del demandado, lo que se pide, los hechos que la motivan y la razón porqué se pide. Aparentemente el hecho se confunde en él con el derecho, pero esto proviene de que el demandante puede hacer derivar éste de aquél. La función de los hechos en la jurisprudencia, dice el Dr. Vélez Sarsfield, es una función eficiente. No hay derecho que no provenga de un hecho, y hay ciertos hechos que tienen especialmente por objeto establecer entre las personas relaciones jurídicas ó que vienen á ser fuentes inmediatas del derecho—nota al tít. 1º, lib. 2º, Sec. 2ª, Cód. Civ.—En tal caso, afirmar el hecho, es exponer el derecho y así se ve por el modelo de demanda inserto en la ley 40, tít. 2º, Part. 3ª, que la exposición del derecho ó la razón de la petición se contiene en la afirmación de un hecho como decía esa Ley: «Ante vos D. Fulan, Juez de tal lugar, yo tal ome me vos querello de Fulan, que me debe tantos maravedís *que le presté*. Onde vos pido que le mandeles por juicio que me los dé.» Por ese formulario, que el legislador presenta para que se comprenda más fácilmente su intención, no obstante hallarse suficientemente espresada, se ve que el hecho y el derecho se hallan espuestos en esta lacónica frase «Que le presté.» Así en la compraventa por ejemplo ¿el hecho de la compra de efectos, da derecho á las partes para demandar la suma que importan? Ese es un punto de derecho que también puede dar lugar á una cuestión de esa naturaleza, según las excepciones ó defensas que el mismo demandado alegue, y las condiciones en que se haya celebrado la venta. El art. 71, Cód. de Proc., no exige que al fundar el derecho se cite la ley ó los autores que apoyen las pretensiones del actor, como lo prescribe el mismo Código, cuando ha querido que se absorbe tal requisito—art. 239—Según el inc. 5º de aquel artículo, basta esponer suscintamente el dere-



cuando espuesto el hecho el actor no cite determinada-
mente la ley que ampare su derecho.—Jur. Com., tom. 2,
pág. 101, Ser. 4ª.

2. **Excepción de defecto legal**—La simple invocación
del derecho sin determinar la disposición espresa, hace
improcedente la excepción de defecto legal.—Jur. Com.,
tom. 2, pág. 118, Ser. 4ª.

3. **Excepción de defecto legal**—Es improcedente si la
demanda determina claramente su origen y objeto.—Jur.
Com., tom. 3, pág. 231, Ser. 4ª.

4. **Excepción de defecto legal**—En el modo de proponer
la demanda, si el escrito espone claramente los hechos
y el derecho del actor, debe ser rechazada.—Jur. Com.,
tom. 3, pág. 254, Ser. 4ª.

5. **Excepción de defecto legal**—Espuestos en la demanda
los hechos y el derecho que de ellos surge, la excepción de
defecto legal, es improcedente.—Jur. Com., tom. 3, pá-
gina 263, Ser. 4ª.

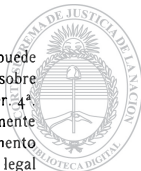
6. **Excepción de defecto legal**—Si la demanda reúne los
requisitos de la ley, la excepción de defecto legal debe
ser rechazada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 117, Ser. 4ª.

7. **Excepción de defecto legal**—La falta de oblación de

cho; y esto se cumple espresando con claridad las razones en que se
funda la acción, aunque ello puede hacerse con solo tres palabras, co-
mo en el ejemplo de la ley 40 citada.

2—Véase la nota precedente.

7—Si el demandante ha incurrido ó no en la multa estipulada
en el compromiso arbitral, y si tiene ó no derecho para demandar la
nulidad de éste sin depositar previamente el importe de dicha multa,
son puntos que se refieren al fondo de la cuestión, puesto que importan
la negación de aquel derecho que en manera alguna puede dar margen
á una excepción de defecto legal, como se pretendía, pues para la admi-
sibilidad de ésta debe fundarse en la inobservancia de los requisitos
del art. 71 del Cód. de Proc., que es á los que se refiere el art. 84.



la multa estipulada en el compromiso arbitral, no puede fundar la excepción de defecto legal de la demanda sobre nulidad del laudo.—Jur. Com., tom. 5, pág. 123, Ser. 4^a.

8. **Excepción de defecto legal**—Si se indica claramente en la demanda la oficina pública donde existe el documento en que se funda el derecho, la excepción de defecto legal es improcedente.—Jur. Com., tom. 5, pág. 157, Ser. 4^a.

9. **Excepción de defecto legal**—Es improcedente si la demanda llena los requisitos del Código.—Jur. Com., tom. 8, pág. 120, Ser. 4^a.

10. **Excepción de defecto legal**—La cuenta que no detalla las mercaderías, hace procedente la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda.—Jur. Com., tom. 9, pág. 247, Ser. 4^a.

11. **Excepción de defecto legal**—La falta de presentación de los documentos en que se funda la demanda no basta para que proceda la excepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 396, Ser. 3^a.

12. **Excepción de defecto legal**—Presentado el contrato en que se funda la acción, es improcedente la excepción de defecto legal.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 113, Ser. 3^a.

13. **Excepción de defecto legal**—Es improcedente la excepción de defecto legal, si la demanda espresa los hechos y el derecho que de ellos surge.—Jur. Civ., tomo 11, pág. 234, Ser. 3^a.

14. **Excepción de defecto legal**—En el modo de proponer la demanda no la constituye el hecho de no acompa-

8—Véase: verb. *Documento*, núm. 1.

10—Véase: *Cuenta detallada*, núm. 1.

11—Véase: *Documento*, núm. 2.

12—Véase: verb. *Contrato*, núm. 9.

14—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 3.



ñarse el contrato de sociedad al deducir la acción entre socios.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 220, Ser. 4^a.

1^a. Escepción dilatoria—Debe rechazarse la escepción dilatoria de falta de personería, si se funda en la falta de derecho—Jur. Civ., tom. 8, pág. 398, Ser. 3^a.

2^a. Escepción dilatoria—No procede la de falta de personería, si se funda en la falta de derecho—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 3^a.

3^a. Escepción dilatoria—El término para oponer escepciones dilatorias es perentorio.—Jur. Civ., tom. 11, página 215, Ser. 3^a.

Escepción dilatoria—Véase: *Apoderado*, núm. 10.

1^b. Escepción de espera—Opuesta á la ejecución de un pagaré á la orden, es improcedente si no se justifica por escritura pública ó documento privado judicialmente reconocido.—Jur. Com., tom. 2, pág. 45, Ser. 4^a.

2^b. Escepción de espera—Opuesta á una letra de cambio es improcedente, si no se acompaña la escritura pública ó el documento privado judicialmente reconocido.—Jur. Com., tom. 4, pág. 384, Ser. 4^a.

3. Escepción de espera—Es improcedente, si del documento privado en que se funda no resulta claramente concedida.—Jur. Com., tom. 5, pág. 5, Ser. 4^a.

4. Escepción de espera—Es improcedente aun cuando se justifique la promesa de retardar el cobro, en tanto

1^a—De acuerdo con la jurisprudencia constante de los tribunales. Véase: Inst., tom. 5^o, verb. *Escepción dilatoria*, núm. 1.

2^a—Véase la nota precedente.

3^a—Arts. 42, 46 y 83 del Cód. de Proc.

1^b—Arts. 676, 740 y 741 del Cód. de Com.

2^b—De acuerdo con la ley y la jurisprudencia.

4—El ejecutado fundó la escepción alegada, en un documento del cual resultaba que el ejecutado se comprometió á renovar el pagaré por un tiempo que arreglarían de mutuo acuerdo. Bastaba la lectura



no haya existido el acuerdo de voluntades sobre el término.—Jur. Com., tom. 6, pág. 326, Ser. 4^a.

5. **Excepción de espera**—Aun probada por instrumento privado judicialmente reconocido, la excepción de espera, debe ser rechazada si el término acordado se encuentra vencido sin haberse verificado el pago.—Jur. Com., tomo 6, pág. 385, Ser. 4^a.

6. **Excepción de espera**—Opuesta á la ejecución de una letra de cambio ó pagaré, solo puede justificarse por instrumento público ó privado reconocido judicialmente por el acreedor.—Jur. Com., tom. 7, pág. 159, Ser. 4^a.

7. **Excepción de espera**—Debe rechazarse, si el ejecutado no la justifica.—Jur. Com., tom. 10, pág. 387, Ser. 4^a.

1^a. **Excepción de extinción**—No procede la de la obligación, si el ejecutante no intervino en el contrato en que se funda.—Jur. Com., tom. 5, pág. 321, Ser. 4^a.

1^b. **Excepción de falsedad**—Del endoso de la letra por no existir el endosante, importa la inhabilidad del título y es

de dicho documento para persuadirse de que él por sí, no podía importar para el acreedor la obligación de esperar al deudor, desde que la espera que se comprometía á conceder dependía, en cuanto al término, del acuerdo de los contratantes. Ese acuerdo no existió según resultó de la prueba producida, y los jueces no pueden suplirlo porque la ley no autoriza á ello.

1^a—Las obligaciones se estinguen por los medios enumerados en el art. 724, Cód. Civ.; pero de esos medios, los únicos que pueden invocarse contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, son los que expresa el art. 832, Cód. de Com. vig., cuando se otorgó el documento —676 del que rije—esto es, pago, compensación y quita ó renuncia. El ejecutado opuso una en género, pero cuya especie no correspondía á ninguna de las tres únicas que pudo oponer, según los artículos citados.

1^b—La inhabilidad del título fundada en la falsedad del endoso que aparecía firmado, estaba basada en el hecho de que la mencionada firma no existía en el momento del endoso, ni existió después. Si esto



en consecuencia admisible como excepción.—Jur. Com., tom. 2, pág. 303, Ser. 4^a.

2. Excepción de falsedad—Fundada en ser falsa la diligencia de protesto es improcedente, si se opone á un pagaré cuya autenticidad no se pone en duda.—Jur. Com., tom. 4, pág. 387, Ser. 4^a.

3. Excepción de falsedad—Fundada en el origen de la obligación, es improcedente en el juicio ejecutivo.—Jur. Com., tom. 4, pág. 406, Ser. 4^a.

4. Excepción de falsedad—Fundada en el reconocimiento de la firma en rebeldía, debe ser rechazada si se reconoce su autenticidad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 235, Ser. 4^a.

5. Excepción de falsedad—La adulteración de una letra de cambio en requisitos esenciales, como ser la fecha y el lugar del pago, hacen procedente la excepción de falsedad.—Jur. Com., tom. 5, pág. 239, Ser. 4^a.

6. Excepción de falsedad—No procede la excepción de fuese exacto, resultaría que el endoso es falso, y como el endoso falso, según el art. 629, Cód de Com., no trasmite la propiedad de la letra de cambio y por lo mismo, ésta carecía de acción ejecutiva, es una excepción aceptable ante el art. 676, que establece contra esa acción ejecutiva la excepción de falsedad.

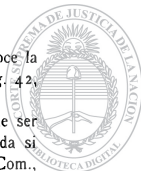
2—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 5.

3—La Cámara no resolvió tal cosa: por el contrario, dijo que «la excepción de falsedad alegada *es procedente por derecho*.» Pero como la prueba incumbía al excepcionante, y como éste no la produjo correspondía su rechazo.

4—La falsedad que se menciona en el art. 852 del Cód. de Com., anterior, se refiere á lo sustancial del título, como lo ha establecido ya la jurisprudencia de la Exma. Cám. en diversos casos—véase Caravantes.

5—Véase: verb. *Adulteración de una letra*, núm. 1.

6—El instrumento privado, reconocido judicialmente por la parte á quien se opone, ó declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscrito y sus



falsedad fundada en la falta de causa, si se reconoce la autenticidad del pagaré.—Jur. Com., tom. 6, pág. 42, Ser. 4ª.

7. **Escepción de falsedad**—Fundada en el hecho de ser falsa la causa espresada en la letra, debe ser rechazada si el ejecutado no la justifica debidamente.—Jur. Com., tom. 7, pág. 209, Ser. 4ª.

8. **Escepción de falsedad**—Improbada, hace procedente se lleve adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 7, página 302, Ser. 4ª.

9. **Escepción de falsedad**—De la firma, debe ser rechazada la nulidad de la ejecución por defectos del procedimiento en la notificación para el reconocimiento de la firma, si al mismo tiempo no se ha opuesto la escepción

sucesores; y el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido—arts. 1026 y 1028, Cód. Civ.—Los motivos ó propósitos que indujeron al ejecutado á suscribir el documento, ó sea la causa que originó la obligación que contrajo al suscribirlo, no pueden servirle de fundamento para redarguirlo de falso en el juicio ejecutivo, ni destruir la fuerza probatoria que los artículos citados dan al reconocimiento practicado. Esta ha sido la jurisprudencia de la Cám., pero ella está en oposición con el espíritu de la ley y con la opinión de los prácticos. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Escepción de falsedad*, núm. 1. Pueden verse los fundamentos de nuestra opinión en contra del sumario en el verb. *Escepción de inhabilidad de título*, núm. 12, tom. 5º de la Inst.

7—La escepción fué rechazada, diciendo la Cámara: «en cuanto á la de inhabilidad del título, los hechos en que se fundaba eran la falsedad de la causa de la letra por lo que no es procedente, ni se ha probado.»

8—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: Inst., verb. *Escepciones*, núm. 1 de este tomo.

9—Hecha la citación de remate, no se opuso la escepción de falsedad ni se pretendió negar la autenticidad de la firma. Y como este reconocimiento era el único objeto de aquellas diligencias, resulta que no negada la firma, no procede la escepción.



de falsedad de la firma que suscribe el pagaré.—Jur. Com., tom. 8, pág. 104, Ser. 4^a.

1. Escepción de falta de personería — Reconocida por la presentación de nuevo poder la procedencia de la escepción de falta de personería por la carencia de facultad para entender en el juicio, no procede la condenación en costas al escepcionante.—Jur. Com., tom. 1, pág. 301, Serie 4^a.

2. Escepción de falta de personería—Opuesta al contestar la demanda, es procedente si el actor no justifica su defecho.—Jur. Com., tom. 2, pág. 135, Ser. 4^a.

3. Escepción de falta de personería—No procede la prueba, si se funda en una copia equivocada y se presenta

1—El apoderado se presentó con un testimonio espedido por un secretario, acreditando que el poder original quedaba agregado á los autos. La parte contraria dijo que con esto no se llenaba la exigencia del art. 14 del Cód. de Proc., y que por consiguiente, la personería no estaba debidamente acreditada. El Inferior dijo que el documento llenaba los requisitos legales de acuerdo con lo establecido en el art. 979, inc. 2º del Cód. Civ., rechazando la escepción con costas. Apelada la resolución, resolvió el Superior el punto diciendo: «que sea cual fuere la legalidad y procedencia de las escepciones opuestas, no es posible sostener su admisibilidad después de la nueva escritura de mandato presentada, y por consiguiente el auto apelado es arreglado á derecho, en cuanto manda contestar la demanda»—art. 98 del Cód. de Proc.

2—La escepción de falta de personería en el demandante fué opuesta por el demandado al evacuar el traslado de la demanda, no como escepción dilatoria de previo y especial pronunciamiento, sino según él mismo lo dijo, como una razón general de defensa, por lo cual concluía solicitando que se dictase en oportunidad sentencia definitiva rechazando la acción instaurada. El actor para comprobar la personería que se le desconoció, solamente presentó una escritura pública pretendiendo demostrar con ella que el acreedor del demandado le había hecho cesión de su crédito contra el deudor demandado, lo que en realidad no resultaba de ello. En tal concepto el actor no tenía personería para demandar.



nuevamente el poder.—Jur. Com., tom. 2, pág. 194, Serie 4^a.

4. **Escepción de falta de personería**—Como dilatoria, solo puede fundarse en la incapacidad para comparecer en juicio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 254, Ser. 4^a.

5. **Escepción de falta de personería**—La ratificación equivale al mandato y hace improcedente la escepción de falta de personería por carecer de la facultad de demandar.—Jur. Com., tom. 3, pág. 263, Ser. 4^a.

6. **Escepción de falta de personería**—Es improcedente si se opone á la ejecución fundada en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 352, Ser. 4^a.

7. **Escepción de falta de personería**—No procede ésta como dilatoria si se funda en la falta del derecho invocado en la demanda.—Jur. Com., tom. 4, pág. 183, Ser. 4^a.

8. **Escepción de falta de personería**—Es improcedente la opuesta á la ejecución de una sentencia.—Jur. Com., tom. 4, pág. 25, Ser. 4^a.

9. **Escepción de falta de personería**—Puede ser opuesta

4—Esta es la doctrina correcta; sin embargo de que en algunos casos las Cáms. se separan de ella para consignar un principio contrario como puede verse en el verb. *Apoderado*, núm. 10. El sumario está de acuerdo con la gran mayoría de los casos resueltos. Véase: Inst., tomo 5º, verb. *Escepción dilatoria*, núm. 1.

5—Arts. 1936 y 1937 del Cód. Civ.

6—Art. 676 del Cód. de Com.

7—Véase el núm. 4.

8—El art. 539 del Cód. de Proc. no la comprende entre las que enumera.

9—No puede invocarse la prescripción del art. 676 del Código de Comercio, por imperativos que sean sus términos, para declarar que dicha escepción es improcedente en el juicio ejecutivo por cobro de letras de cambio, ó documentos equiparados á ellas. Es admisible la escepción de falta de personería, porque esa escepción como las de incompetencia de jurisdicción y litispendencia, es de aquellas que

á la ejecución fundada en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 378, Ser. 4ª.

caen exclusivamente bajo las prescripciones de las leyes de procedimientos, que según el precepto de nuestra Const. Nac. corresponde ser sancionadas por las legislaturas de Provincia. Esas excepciones emanan, pues, de las leyes de forma y no afectan á la acción ejecutiva del título ó sea al derecho de ejecutar que de él nace y pueden por eso mismo, oponerse, no obstante, lo dispuesto en el art. 676, puesto que éste solo excluye las excepciones perentorias que afectan al título mismo, en cuyo caso, no se encuentran las que solo se refieren al orden de proceder, siendo ésta la doctrina enseñada por el Dr. Segovia y seguida repetidas veces por la jurisprudencia de nuestros tribunales. La exclusión de nuestro párrafo, dice el Dr. Segovia, explicando el último del art. 676 y robusteciendo la autoridad de su opinión con La Serna, Manresa, Reus y otros autores, es relativa á las excepciones perentorias, es decir, concernientes á la deuda misma, ó *contra la acción ejecutiva de la letra cambio*, como dice el proemio del artículo, así es que las dilatorias, incompetencia de jurisdicción, falta de personería en el ejecutante ó su apoderado, defecto legal en el modo de proponer la demanda, la falta de citación de remate y alguna otra, son puramente relativas al procedimiento, y serán siempre admisibles como lo establecen generalmente los Cód. y leyes de enjuiciamiento y los autores. El Cód. de fondo, no ha debido ocuparse de una materia que le toca al procedimiento, la procedencia de la excepción dilatoria habia de apreciarse con arreglo á la respectiva ley de procedimiento. Pero es opinión por las razones espuestas y lo establecido en el art. 318, Ley Org., y 488, Cód. de Proc., que la excepción alegada por el ejecutado es de las admisibles aun en el juicio ejecutivo, á pesar de que el título en que se funda la demanda, letras de cambio, vales ó pagarés á la orden. No consideró que en el presente caso fuese ella procedente, porque tal excepción, solo puede fundarse en la incapacidad civil para estar en juicio por sí ó por otro como actor ó demandado—Ley 1ª, tít. 3º, Part. 3ª; Esteves Sagui, Tratado Elemental de Proc., núms. 257 y 258; Malaver, Curso de Proc., núm. 626 y 627, y Carabantes, número 607—y no es de ese hecho de donde había derivar el ejecutado la que opuso contra el ejecutante, sino de la circunstancia de haberse hecho el endoso en su favor, después de vencida la letra, circunstancia que podrá afectar el derecho mismo que el ejecutante reclamaba como adquirente del crédito, pero de ningún modo su capacidad para estaren juicio en su propio nombre. Por ello, no se consideró del caso resolver si





10. Excepción de falta de personería.—Opuesta á la ejecución, solo puede fundarse en la incapacidad; si hace á su

ese endoso debe ó no producir los efectos de una cesión, conforme al art. 1456, Cód. Civ.; esto es, si el ejecutante ha adquirido ó no la propiedad del crédito, y en consecuencia, desde que el ejecutante había iniciado el juicio, en ejercicio de un derecho que crea tener contra el ejecutado, y éste no desconoció que el ejecutante fuese persona *sui juris*, la excepción opuesta debe desecharse. Por estos fundamentos, se resolvió la cuestión en el sentido del sumario. En contra, véase: Inst., tom. 5º, verb. *Excepción de falta de personería*, núm. 12; tomo 4º, mismo verb., núm. 6; y tom. 1º, mismo verb. núms. 1046 y 1049.

10—El documento era una letra de cambio girada á la orden del mismo librador, según lo definen los arts. 598, 604, inc. 1º, y 606 del Cód. de Com., igual este último al 783 ant. Como la letra fué endosada después de vencida, no era endosable, según el art. 635, Cód. de Com., y su propiedad es trasmisible en la forma prescrita por el Cód. Civ. para la cesión de créditos no endosables. Según el art. 1456 del Cód. Civ., la cesión puede tener la forma de un endoso, y según el 1457, la propiedad del crédito cedido, pasa al cesionario por el efecto de la cesión con la entrega del título. Como en el caso, no se trataba de la conservación de derechos, respecto de terceros que tengan interés legítimo en contestar la cesión, sino del cobro del documento mismo, hecho al deudor cedido, el reconocimiento judicial que de ese documento se ha hecho por demanda del cesionario, tiene para él todos los efectos de una debida notificación de la cesión, y desde luego, estaban llenados todos los requisitos exigidos para la transferencia de créditos no endosables. No podían invocar el demandado, falta de personería fundado en que el endoso fuese hecho después del vencimiento, porque dicho endoso tiene, por el hecho de ser el que lo invoca el mismo aceptante de la letra, y haber reconocido judicialmente su autenticidad, todos los efectos de las cesiones de créditos no endosables, debidamente hechas, uno de cuyos efectos es la transferencia de la propiedad de tal crédito, como queda demostrado. Por consecuencia, aun cuando este documento quedase en las condiciones de obligación mercantil, por no haber sido protestado, como se ha resuelto en los casos de Rey González con Pedro Ballesteros, fallo de 8 de Mayo de 1993; y del Banco Francés y Río de la Plata contra Paul Mauriceil, fallo del 16 del mismo mes, y su fuerza ejecutiva nace del art. 465, Cód. de Proc., la excepción de falta de personería fundada en el endoso



falta derecho, debe ser desechada.—Jur. Com., tom. 4, pág. 378, Ser. 4^a.

11. Excepción de falta de personería—Por no ser el acusador la persona aludida en la publicación acusada, es improcedente.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 163, Ser. 4^a.

12. Excepción de falta de personería—Es improcedente si el poder ha sido otorgado por los socios que componen la sociedad, aun cuando no se haya transcrito el contrato social.—Jur. Com., tom. 7, pág. 74, Ser. 4^a.

13. Excepción de falta de personería—En el apoderado, es improcedente si se funda en la falta de transcripción en el poder de los documentos habilitantes; basta la sola referencia de que existen en el Registro.—Jur. Com., tom. 6, pág. 105, Ser. 4^a.

14. Excepción de falta de personería—Si se funda en la falta de derecho, debe ser rechazada como dilatoria.—Jur. Com., tom. 8, pág. 120, Ser. 4^a.

15. Excepción de falta de personería—Es improcedente en el apoderado, por carencia de facultad, en virtud de que siendo varios los pagarés en el poder se determi-

cuando solamente se apoya en que fué hecho después del vencimiento, es improcedente y debe ser desechada. Esta resolución ha venido á reformar la jurisprudencia anteriormente establecida por la Cám. El voto del Dr. Esteves sirvió de fundamento al fallo que fué dictado por mayoría de votos.

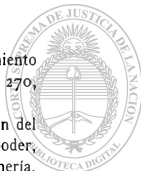
11—El hecho de si se ha aludido ó no al querellante en la publicación acusada, es materia de prueba conjuntamente con los demás elementos constitutivos del delito.

12—En el poder se decía que los otorgantes eran los únicos socios que componían la razón social. En este caso no están obligados á observar la disposición del art. 1004 del Cód. Civ., en cuanto se refiere á procuraciones ó documentos habilitantes.

13—Véase: verb. *Documentos habilitantes*, núm. 1.

14—Véanse el núm. 4.

15—Arts. 1936 y 1937 del Cód. Civ.



na uno solo, si el poderdante ratifica el procedimiento respecto á los demás.—Jur. Com., tom. 8, pág. 270, Ser. 4^a.

15^b. Excepción de falta de personería—La atestación del escribano sobre la personería del otorgante del poder, prueba la falsedad de la excepción de falta de personería, en tanto el escepccionante no produzca otros justificativos.—Jur. Com., tom. 9, pág. 53, Ser. 4^a.

16. Excepción de falta de personería—El que reconoció la existencia de la sociedad contratando con ella, no puede escepccionarse de falta de personería por no acompañar el contrato social al exigírsele el cumplimiento de sus obligaciones.—Jur. Com., tom. 9, pág. 297, Ser. 4^a.

17. Excepción de falta de personería—La falta de las for-

16—Véase: verb. *Contrato de sociedad*, núm. 6.

17—Los demandados opusieron la excepción dilatoria de falta de personería en el representante del actor, sosteniendo que el poder presentado por éste, y que había sido otorgado en el extranjero, adolecía de nulidad por no haberse transcrita en él íntegramente el documento que habilitaba á su otorgante para representar á una sociedad que era la demandante, como lo exige el art. 1004 de nuestro Cód. Civ. Según se ve, trátase de un instrumento público otorgado en país extranjero, y en tal caso debe principalmente examinarse si le es aplicable el principio de derecho internacional *locus regit actum*, uniformemente adoptado por la doctrina y la común jurisprudencia de las naciones. Este principio ha sido introducido por una especie de necesidad recíproca entre las naciones, porque como dice Savigni—*Droit Romain*, tom. 8º, § 381—es difícil conocer en el lugar en que se celebra el acto jurídico, las formas legales requeridas por la ley del lugar en que el acto debe producir sus efectos, y más difícil aun, el observarlas completamente; y para no hacer absolutamente imposibles tales actos en un país extranjero, ó para no esponerlos á nulidades por defectos de formas legales que no han sido ciertamente establecidas para crear obstáculos á los negocios civiles, es que desde el siglo XVI se reconoció como principio la regla antes citada—Fiori, *Droit international privé*, núm. 315.—En análogas consideraciones fundó Mr. Portalis, al art. 6º, tit. IV del



malidades exigidas por las leyes argentinas, no puede fundar la escepción de falta de personería, si el poder habili-

Proyecto de Cód. Civ. Francés, y ellas son también las que impulsaron al legislador argentino á incorporar el mismo principio á nuestro Cód., estableciendo en los arts. 12 y 950, que la forma y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público son regidas por las leyes y usos del país en que fueron otorgadas, y con arreglo á ellas debe ser juzgada su validez ó nulidad. Por forma de un acto jurídico se entiende el conjunto de prescripciones legales relativas á las solemnidades que corresponde observar al tiempo de la celebración del acto, tales como la escritura del mismo, que se haga por escribano ú oficial público, la presencia de testigos, etc.—art. 973 del Cód. Civ.—Entre estas formas intrínsecas del acto, deben también contarse las prescripciones relativas á la inserción de los documentos habilitantes, no solamente porque ellas son formalidades instrumentales, es decir, destinadas á figurar en la escritura del acto, sino también porque á ellas se refiere y menciona espresamente el art. 1004 del mismo Código “cuando después de establecer que son nulas las escrituras que no tuviesen la designación de la fecha, nombre y firma de las partes y testigos y la transcripción ó referencia de las procuraciones, declara que ja inobservancia de las otras formalidades, no anula la escritura. El jurisconsulto Dr. Moreno, enuncia claramente igual opinión. Es con arreglo á tales disposiciones legales que la Suprema Corte Nacional ha decidido que la validez de los documentos públicos otorgados en país extranjero, no puede ser impugnada por falta de las formas ó solemnidades exigidas por nuestras leyes, porque solo las leyes del país de su otorgamiento son las que rijen las mencionadas formas de los contratos é instrumentos públicos—Ser. 2^a, tom. 14, página 526—habiendo también juzgado dicho alto Tribunal, que los arts. 1003 y 1004, Cód. Civ., no son aplicables á un poder otorgado bajo el imperio de las leyes de la República Oriental, donde el acto se había practicado, y que en consecuencia, quedaba subordinado á las leyes de dicho Estado, en cuanto á sus formas y solemnidades—Ser. 2^a, tomo 12, pág. 253.—Igual jurisprudencia ha sido también adoptada por la Cám. de lo Com., como puede verse entre otros casos en los fallos de la Ser. 1^a, tom. 3^o, pág. 188; y en las causas Gottof Mayer contra Levy; y de Salvador López y C.^a contra P. Costa. Según lo que queda supuesto, corresponde al escepcionante demostrar, no que el poder presentado por el actor era nulo por carecer de las formalidades prescriptas por nuestras leyes, relativamente á la inserción ó transcripción íntegra



tante ha sido otorgado en país extranjero.—Jur. Com., tom. 9, pág. 304, Ser. 4^a.

18. **Excepción de falta de personería**—Procede como dilatoria si el demandante no justifica que el apoderado representa los derechos del demandado.—Jur. Com., tomo 9, pág. 332, Ser. 4^a.

19. **Excepción de falta de personería**—El rechazo por falta de prueba de la excepción de falta de personería, fundada en el fallecimiento del mandante, no hace cosa juzgada si con posterioridad se justifica el hecho.—Jur. Com., tom. 10, pág. 197, Ser. 4^a.

20. **Excepción de falta de personería**—Puede ser opuesta en el plenario, antes de contestar la acusación, aun

en el poder, del documento que habilitaba al otorgante para representar la sociedad, sino que tal requisito es exigido por las leyes del país de su otorgamiento bajo pena de nulidad. Tal comprobación debe rendirse por el excepcionante, que es á quien incumbe tal obligación, por su doble carácter de actor en su propia excepción y por ser á él á quien en rigor correspondería invocar la ley extranjera para demostrar la nulidad del acto jurídico por él atacado—art. 13, Cód. Civ., y leyes 8^a, tit. 3^o, y 2^a, tit. 14, Part. 3^a.

18—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 10. Este mismo caso después de resuelto por la Cám. en el sentido del sumario por tres de sus miembros constituidos en Trib. de Interlocutorias, fué llevado nuevamente ante ella, pero constituida por uno de los anteriores y los dos otros que no habían conocido en la primera apelación. Como se trataba de una excepción dilatoria, se acompañaron algunos documentos y se pidió que con ellos se confiriese nuevamente el traslado de la demanda. Así se hizo, oponiendo nuevamente el demandado la excepción de falta de personería, pues los documentos acompañados no comprobaban los extremos requeridos: se opuso asimismo la excepción de cosa juzgada. Compuesto esta segunda vez, el Trib., con los Sres. Camaristas Saavedra y Esteves, conocedores á fondo, del procedimiento, resolvieron en contra del sumario. De manera que éste no puede servir ni siquiera como precedente, por haber sido revocado por la misma Cámara.

19—Véase: verb. *Cosa juzgada*, núm. 6.

20—Véase: verb. *Acusación*, núm. 7.



cuando en el sumario se hayan admitido sin discusión. El representante de una persona jurídica á la que se haya retirado la personería, debe justificar nuevamente la que invoca por otro título.—Jur. Com., tom. 10, pág. 240, Ser. 4^a.

21. **Escepción de falta de personería**—Es improcedente como dilatoria, aun cuando la obligación de hacer no esté firmada por el demandado.—Jur. Civ., tom. 12, página 421, Ser. 3^a.

1. **Escepción improcedente**—Resultando de los términos de la esposición que la escepción es inadmisibile, debe declararse su improcedencia.—Jur. Com., tom. 4, pág. 139, Ser. 4^a.

2. **Escepción improcedente**—El reo responde de las consecuencias del acto que pudiesen ser previstas y que hacen improcedente la escepción de que no intentó causar todo el mal que resultó.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 332, Ser. 4^a.

1^a. **Escepción de incompetencia**—Reconocida la distinta residencia de las partes asi como su diversa nacionalidad, procede la escepción de incompetencia de jurisdicción, por corresponder el conocimiento del juicio al fuero federal.—Jur. Com., tom. 1, pág. 186, Ser. 4^a.

2^a. **Escepción de incompetencia**—Por razón de fuero, es improcedente si ambos litigantes son extranjeros—Jur. Com., tom. 2, pág. 344, Ser. 4^a.

3. **Escepción de incompetencia**—El improcedente, si la

21.—Porque esa defensa hace al fondo de la acción.

1^a—Art. 2º, inc. 2º, de la Ley de 14 de Set. de 1863; y art. 100 de la Const. Nac.

2^a—El art. 2º de la nota citada en la precedente, requiere para que el fuero federal proceda, que uno de los litigantes sea extranjero y el otro argentino.

3—Se trataba de una letra firmada en esta Cap., á favor del Bco.



letra se ejecuta en el lugar en que ha sido firmada.—Jur. Com., tom. 2, pág. 57, Ser. 4^a.

4. **Excepción de incompetencia**—Su procedencia hace ineludible la condenación en costas.—Jur. Com., tom. 2, pág. 145, Ser. 4^a.

5. **Excepción de incompetencia**—Es improcedente si se opone á la ejecución fundada en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 3, pág. 352, Ser. 4^a.

6. **Excepción de incompetencia**—Es admisible en la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 57, Ser. 4^a.

7. **Excepción de incompetencia**—Por corresponder al

de la Prov. el que tiene una sucursal aquí, y por consiguiente, éste es su domicilio; el ejecutado estaba domiciliado en la misma ciudad. No procedía la excepción, de acuerdo con lo que disponen los art. 606 del Cód. de Com.; 90, inc. 4º del Cód. Civ.; y 4º del Cód. de Proc. No sucedería lo propio si el demandado estuviese domiciliado fuera de la Capital y se exigiese el cobro ante los Trib. de ésta, pues el arts. 606 del Cód. de Com. así lo autoriza; en este caso, el conocimiento del asunto correspondería al fuero federal—art. 2º, inc. 2º de la Ley de 14 de Set. de 1863—por la distinta vecindad.

4—Véase: verb. *Costas*, núm. 7. Es necesario distinguir si se trata de un juicio ejecutivo ó de uno ordinario: en el primer caso es de precepto legal la imposición de las costas, no así en el segundo. Véase: Inst., tom. 5º, verb. *Costas*, núms. 18, 20, 22, 26, 42; y tom. 4º, mismo verb., núm. 12.

5—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 6. El principio sentado en el sumario no es exacto. Esta jurisprudencia ha sido reformada después que los Dres. Esteves y Saavedra entraron á formar parte de la Cám., estos camaristas han dado el verdadero alcance jurídico al art. 676 del Cód. de Com. Véase: verb. *Excepción de falta de personería*, núm. 9, donde se desarrolla el principio contrario al del sumario.

6—Este caso fué resuelto por los otros tres miembros de la Cámara: de manera que ya es uniforme la idea de la procedencia de esta excepción. Véase el núm. precedente.

7—Art. 2º, inc. 2º de la Ley de Set. de 1863.



fuero federal, procede si el ejecutado es extranjero y el ejecutante ciudadano argentino.—Jur. Com., tom. 5, página 57, Ser. 4^a.

8. **Excepción de incompetencia**—Por la distinta nacionalidad de las partes puede oponerse en juicio ejecutivo antes de la estación fijada para las excepciones.—Jur. Com., tom. 5, pág. 410, Ser. 4^a.

9. **Excepción de incompetencia**—La procedencia de la excepción de incompetencia del Juzgado, hace procedente la devolución al ejecutado de la suma consignada y embargada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 375, Ser. 4^a.

10. **Excepción de incompetencia**—Al vencido en esta excepción corresponde el pago de las costas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 173, Ser. 4^a.

10^b. **Excepción de incompetencia**—El Juzgado no puede

8—La Cám. dijo simplemente que «la excepción de incompetencia de jurisdicción por razón de la nacionalidad de los litigantes, puede alegarse antes de deducirse una acción directa y para escusarse de intervenir en las diligencias preparatorias ó judiciales.»

9—Resuelta la incompetencia del Juzgado, ese expediente queda definitivamente terminado ante esa jurisdicción, siendo evidente el derecho que tiene el demandado para que se le devuelva la cantidad depositada. Por otra parte, la consecuencia de la incompetencia importa justamente desconocer la legalidad de los actos emanados del juez incompetente, en cuyo caso deben volverse las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse esos hechos.

10—De acuerdo con lo resuelto en el núm. 4.

10^b—El demandado opuso por vía de art. previo y dentro del término legal—art 83, Cód. de Proc.—la excepción de incompetencia de jurisdicción. Sin sustanciar y resolver previamente esa excepción en la forma establecida por los arts. 88 y siguientes del mismo Cód, el Juzgado no puede de oficio y sin otro trámite ordenar que el demandado conteste la demanda desde que el art. 83 le acuerda el derecho para no contestarla cuando desconoce la jurisdicción del juez ante quien ha sido entablada.



de oficio desecharla.—Jur. Com., tom. 7, pág. 340, Serie 4^a.

11. **Escepción de incompetencia**—Debe oponerse conjuntamente con las demás previas.—Jur. Com., tom. 7, pág. 357, Ser. 4^a.

12. **Escepción de incompetencia**—Procede la opuesta a la contrademanda, si el conocimiento de ésta corresponde á un juez de distinta jurisdicción por razón de la materia.—Jur. Com., tom. 7, pág. 413, Ser. 4^a.

13. **Escepcion de incompetencia**—La incompetencia del Juzgado para entender en un juicio no puede depender de la existencia de otros de igual naturaleza, aun cuando en ellos pueda fundarse otra escepción.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 153, Ser. 3^a.

14. **Escepcion de incompetencia**—Cualquiera que sea la suma fijada como cuota amortizante de la obligación, la escepción de incompetencia debe ser rechazada si las cuotas que se ejecutan como vencidas, sobrepasan el límite que deslinda jurisdicciones.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 148, Ser. 3^a.

15. **Escepción de incompetencia**—Es admisible en el juicio ejecutivo, fundada en una letra de cambio ó pagaré.—Jur. Com., tom. 6, pág. 183, Ser. 4^a.

15^b. **Escepcion de incompetencia**—La escepción de in-

11—Arts. 83, 86 y 87 del Cód. de Proc.

12—Para que pueda proponerse reconvección ante el juez es indispensable que éste sea competente por razón de la materia, porque si carece de jurisdicción no puede administrar justicia, siendo ésta la doctrina enseñada por Malaver, Curso de Procedimientos Judiciales, núm. 703; Manresa y Reus, Ley de Enjuiciamiento Española sobre el art. 254, § III; Caravantes, núm. 703. Además estaría en contra del espíritu de los arts. 1, 74 y 87 del Cód. de Proc.

13—De acuerdo con la jurisprudencia hoy sustentada por la Cám. Véanse los núms. 5 y 6.



competencia del Juez civil que entiende por recusación de los de comercio, es improcedente.—Jur. Com., tom. 1, pág. 12, Ser. 4^a.

16. **Excepción de incompetencia**—La excepción de incompetencia por corresponder á la justicia federal, debe ser desechada si se justifica que ninguno de los socios que componen la razón social ejecutante, por su nacionalidad, puede dar base á la excepción.—Jur. Com., tom. 1, pág. 61, Ser. 4^a.

1. **Excepción de inhabilidad de título**—Contra la acción ejecutiva de un pagaré á la orden, equiparado por la ley á las letras de cambio, no puede oponerse la excepción de inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 1, pág. 193, Serie 4^a.

2. **Excepción de inhabilidad de título**—Si el pagaré no tiene plazo fijo para el pago, no puede equipararse á la letra de cambio, y en consecuencia procede contra su ejecución la excepción de inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 2, pág. 61, Ser. 4^a.

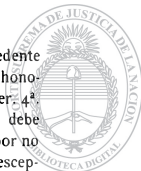
3. **Excepción de inhabilidad de título**—El aceptante no puede alegar la falta de protesto de la letra para enervar su fuerza ejecutiva por inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 2, pág. 344, Ser. 4^a.

16—Art. 10 de la ley de 14 de Set. de 1863.

1—Arts. 676 y 741 del Cód. de Com.

2—El art. 740 del Cód. de Com. requiere, para que un pagaré á la orden sea equiparado á una letra de cambio, que él esté concebido á *plazo fijo*.

3—El defecto del protesto en un pagaré, no causa la pérdida de las acciones del tenedor contra el suscriptor, porque éste es, respecto de aquél, un aceptante. Según lo dispuesto por el art. 666 del Cód. de Com., el tenedor de una letra, que no la hace protestar en tiempo y forma por falta de pago, pierde toda acción contra el librador y endosante y solo la conserva contra el aceptante.



4. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si la ejecución tiene por base una regulación de honorarios consentida.—Jur. Com., tom. 2, pág. 365, Ser. 4^a.

5. **Excepción de inhabilidad de título**—Como tal debe conceptuarse la falsedad del endoso de la letra por no existir el endosante, y es entonces admisible como excepción.—Jur. Com., tom. 2, pág. 303, Ser. 4^a.

6. **Excepción de inhabilidad de título**—Procede si el re-

5—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 1.

6—Para que un título sea habil para ejecutar, además de revestir las formas requeridas por la ley, debe comprobar la obligación con relación á las personas contra quienes se dirija, y tal obligación tiene que derivar forzosamente de una de las cinco fuentes que el derecho y la ley determina: contrato, cuasi-contrato, delito, cuasi-delito y ley—art. 499, Cód. Civ.—A ninguna de ellas puede atribuirse el orijen de la que se pretendía hacer pesar sobre el ejecutante, en el caso que nos ocupa. Las circunstancias de que el crédito que se cobra provenga de gastos necesarios de un juicio ejecutivo, no autoriza á hacerlos pesar sobre el ejecutante, siendo de todo punto inexacta la proposición que se aceptó como verdad en la sentencia de 1^a Inst. de que la condenación en costas en favor de la parte vencedora signifique que ella es quien debe costear en primer término los gastos del juicio, sin perjuicio de que más tarde los repita de la parte. Se comprende que las personas con quienes hubiese contratado el ejecutante, aceptando la locación de sus servicios ó confiriéndoles comisión ó mandato para que lo defendían ó representen, puedan dirigirse contra él para el cobro de sus servicios, sin esperar á las resultas del juicio, ni tener que acudir contra el obligado en último término á resarcirlos. En tal caso su acción nace del contrato, pero no puede admitirse igual conclusión para todos los gastos del juicio por el hecho de que sean necesarios; necesaria también es la defensa y la representación del demandado ausente, porque sin ella no podría seguirse el juicio, y si resultase vencido, no por ello habían de hacerse recaer sobre el vencedor, como quiera que se reconociera preferencia para ser pagados con el producto de los bienes ejecutados antes que el crédito del ejecutante. La regla general es, que antes de mediar declaración judicial al respecto, los gastos del juicio se pagan por las partes en la proporción que corresponda, y los comunes por mitad. Si en el juicio ejecutivo procediera el martillero como comi-



matador nombrado judicialmente dirige su acción contra el ejecutante, después de consentida la sentencia de re-

sionista ó mandatario del ejecutante, se concibe que pretendiera de éste el pago de sus servicios: pero no sucede tal cosa, el martillero procede en nombre y por orden del juez y por cuenta del ejecutado, es éste quien se encuentra sometido á la necesidad jurídica de vender sus bienes—art. 1324, inc. 4º del Cód. Civ.—y es aquél quien decreta esa venta en cumplimiento de la ley. El ejecutante no hace más que ejercer un derecho que el Cód. le acuerda espresamente al pedir la venta y proponer rematador, y al ejercer ese derecho no contrae obligación. Pero si antes de dictarse sentencia de remate pudiera ser cuestionable el derecho del martillero para cobrar del ejecutante su comisión ó gastos, después de ejecutoriada aquélla, la falta de tal derecho parece indiscutible, desde que en esa sentencia queda determinado quien es el deudor de los gastos y costas causados. El vínculo de derecho en virtud del cual puede compelerse al vencido al pago de las costas, surge entonces de la ley, porque ella es la que dispone que las costas del juicio serán todas á cargo de la parte que sea vencida en último grado, con excepción de las correspondientes á cualquier pretensión de la otra parte que haya sido desestimada. Ésta fué la opinión de la mayoría. La minoría dijo: «que según resultaba de los antecedentes de autos, el martillero fué nombrado en el juicio ejecutivo para vender bienes embargados al ejecutado, y habiéndose suspendido los remates por orden del Juzgado, presentó su cuenta de comisión y gastos; esa cuenta fué aprobada con intervención del ejecutante y ejecutado, arrojando á favor del martillero un saldo. La cuestión presente, que comprende todas las excepciones opuestas y sus fundamentos alegados, son las siguientes: No habiendo terminado el juicio ejecutivo ¿está obligado el actor á pagar los gastos y honorarios que hayan causado en beneficio de la acción deducida? Las varias resoluciones de esta Cám. han establecido el principio evidente de que los gastos necesarios para la prosecución del juicio ejecutivo son á cargo del actor, que es quien debe pagarlos para reembolsarse después con los bienes del ejecutado. La sentencia de trance y remate dispone que se haga pago al acreedor del capital intereses y costas, y las costas son los honorarios de su abogado y procurador, el papel sellado y los honorarios y comisiones de los tasadores, martilleros y demás que ocurran. Todos ellos son gastos necesarios para la continuación del juicio, y el acreedor ejecutante debe hacerlos, sin perjuicio de que sea oportunamente reembolsado con los bienes embargados ó que se embargasen.»



mate que hace responsable de todos los gastos al ejecutado.—Jur. Com., tom. 4, pág. 47, Ser. 4^a.

7. **Excepción de inhabilidad de título**—Es inadmisiblesi se opone á la ejecución, fundada en un pagaré á la orden ó letra de cambio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 401, Serie 4^a.

8. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si se opone á la ejecución de un pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 5, pág. 8, Ser. 4^a.

9. **Excepción de inhabilidad de título**—Es improcedente si se opone á la ejecución de un pagaré ó letra de cambio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 18, Ser. 4^a.

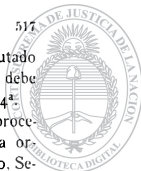
10. **Excepción de inhabilidad de título**—Procede la excepción de inhabilidad del título contra el auto judicial que hace responsable personalmente al representante de una persona jurídica, por actos verificados con motivo de su representación.—Jur. Com., tom. 6, pág. 35, Ser. 4^a.

11. **Excepción de inhabilidad de título**—Opuesta á un pagaré auténtico, es improcedente.—Jur. Com., tom. 6, pág. 42, Ser. 4^a.

12. **Excepción de inhabilidad de título**—La venta de la prenda sin ejecutar los pagarés, es un derecho del acreedor el que no puede fundar la excepción de inhabilidad de título.—Jur. Com., tom. 6, pág. 105, Ser. 4^a.

13. **Excepción de inhabilidad de título**—La excepción de inhabilidad de título, es inadmisiblesi se opone á la ejecución de una letra de cambio ó pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 6, pág. 183, Ser. 4^a.

14. **Excepción de inhabilidad de título**—No es procedente en la ejecución de la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 7, págs. 5 y 209, Ser. 4^a.



15. **Escepción de inhabilidad de título**—Si el ejecutado al oponerla no espone los hechos en que la funda, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 374, Ser. 4^a.

16. **Escepcion de inhabilidad de título** — Es impropiciente si se opone á la ejecución de un pagaré á la orden ó letra de cambio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 270, Serie 4^a.

17. **Escepción de inhabilidad de título**—Procede si la obligación era condicional y no se justifica el cumplimiento

15—Cualquiera que sea la naturaleza del documento que sirve de base á la ejecución y las escepciones que pudieran oponerse, no deben los tribunales tomar en cuenta sino las que se hayan deducido en tiempo y forma, al ser citado de remate el ejecutado.

17—La vía ejecutiva no se concede sino para que los acreedores puedan cobrar de sus deudores morosos, sin las dilaciones y dispendios de un juicio ordinario, aquellos créditos de cuya legitimidad no debe dudarse, racionalmente atendida la naturaleza del documento en que están consignados—Manresa y Reus, tom. 4^o, pág. 262.—Es por eso que la ley ha prevenido al juez, que antes de librar el mandamiento examine cuidadosamente el documento con que se deduce la acción, y muy especialmente también porque esa medida de seguridad, tendente á garantizar la eficacia de la ejecución, es decretada sin audiencia alguna del ejecutado, quien recién citado de remate puede deducir las escepciones legítimas para oponerse á que la ejecución se lleve adelante. Ya esta Cám. ha declarado, lo que es de estricto derecho, que la escepción de inhabilidad de título puede fundarse en un vicio del título mismo; ó en su forma esterna, ó en no estar comprendido entre los que enumera el arts. 465 del Cód. de Proc., ó en que la obligación que espresa el documento contenga condición, plazo ó cualquiera otra cláusula espresada en él, que la defieran, restrinjan ó modifiquen. Esto es lo que precisamente se alegó con razón; y nada supone que durante la secuela del juicio pudiera haberse comprobado el cumplimiento de la condición, desde que esa comprobación no se presente antes de suspenderse la ejecución, pues es á la fecha en que se decretó el embargo, que es menester referirse para considerar si el título que lo obtuvo era ó no habil; si así no fuera, tendría que admitirse que con un documento que no trae aparejada ejecución, pueden autorizarse procedimientos



to de la condición antes de librarse el mandamiento.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 142, Ser. 3ª.

18. **Excepción de inhabilidad de título**—Si la deuda debe ser pagada por cuotas, procede la excepción de inhabilidad de título contra la ejecución que exige el monto total de la obligación.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 148, Ser. 3ª.

19. **Excepción de inhabilidad de título**—El hecho de haber pagado ó no el perito, el impuesto fiscal, no puede fundar la excepción de inhabilidad de título en la ejecución de sus honorarios debidamente regulados.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 5, Ser. 4ª.

20. **Excepción de inhabilidad de título**—Esta excepción es improcedente, si la ejecución se funda en un pagaré á la orden, equiparado por la ley á la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 182, Ser. 4ª.

1. **Excepción de legítima defensa**—No puede alegarla á su favor el agredido que con sus actos ha provocado la agresión, aun cuando sean de tiempo anterior al hecho.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 75, Ser. 4ª.

1ª. **Excepción de legítima defensa**—La indivisibilidad de la confesión del reo, solo permite aceptar las circunstancias que atenúen la pena: la legítima defensa se convierte en excepción y no puede admitirse como presunción si omitió el aviso á la autoridad.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 28, Ser. 4ª.

ejecutivos, que obligarían al deudor, sin motivo alguno, á sujetarse á los angustiosos términos que aquéllos señalan, privándosele de la amplitud de discusión y de medios de defensa que consagra el juicio ordinario.

19—Esta no es una excepción de las admitidas por el Cód. de Proc. que pueda oponerse en el juicio ejecutivo, y mucho más cuando los servicios del contador son practicados á solicitud del mismo ejecutado.

20—Arts. 676 y 741 del Cód. de Com.

1ª—Véase: verb. *Confesión del reo*, núm. 7.



2. **Excepción de legítima defensa**—De resultar clara é inequívoca de los antecedentes personales y de las circunstancias del hecho, debe por lo menos ser verosímil la necesidad de herir ó matar.—Jur. Crim., tom. 7, página 213, Ser. 4^a.

3. **Excepción de legítima defensa**—Debe ser rechazada si la provocación del reo produjo el ataque de la víctima.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 96, Ser. 4^a.

4. **Excepción de legítima defensa**—Si falta prueba sobre la intención con que el particular perseguía al reo, atentando á su persona, debe suponerse que existe derecho en él para repeler la agresión y en consecuencia, procede la excepción de legítima de defensa.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

1. **Excepción de litispendencia**—Fundada en una demanda desistida, es improcedente—Jur. Com., tom. 2, pág. 131, Ser. 4^a.

2^a. **Excepción de litispendencia**—Fundada en un juicio seguido contra un tercero, aunque sea por igual causa, debe ser desechada.—Jur. Com., tom. 2, pág. 344, Serie 4^a.

3^a. **Excepción de litispendencia**—Es admisible en el juicio ejecutivo que tiene por base una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 401, Ser. 4^a.

4^a. **Excepción de litispendencia**—Es improcedente si se

— — — — —

4—Véase: *Agresión legítima*, núm. 1.

2^a—Esto no puede constituir tal excepción, pues ella requiere entre otras condiciones, la de que ambos litigios versen entre las mismas personas, según lo enseñan los prácticos—Caravantes, tom. 2^o, pág. 87, Procedimientos Judiciales.

3^a—Véase: *Excepción de falta de personería*, núm. 9.

4^a—Esta es la doctrina antigua, que ha sido reformada en los últimos tiempos. En este caso se dijo que la excepción de litispendencia no es



opone á la ejecución, fundada en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 4, pág. 190, Ser. 4ª.

5. **Excepción de litispendencia**—Solo es procedente si se funda en un juicio de idéntica naturaleza, entre las mismas personas y fundado en igual causa.—Jur. Com., tom. 4, pág. 401, Ser. 4ª.

6. **Excepción de litispendencia**—Fundada en un juicio

de las enumeradas en el art. 676 del Cód. de Com., en que espresamente se estatuye que cualquiera otra excepción sea de la naturaleza que fuere, no obstará al progreso del juicio ejecutivo. Aun cuando por algunos fallos de esta Cám. se han declarado admisibles algunas excepciones como la declinatoria de jurisdicción deducida por un extranjero y otros, tales excepciones afectaban la sustanciación misma del procedimiento ejecutivo, y desde luego, estos fallos no podrían invocarse como doctrina para aceptar la litispendencia, pues ésta no afecta al procedimiento ejecutivo en parte sustancial. Igual jurisprudencia se ha establecido por esta Cám. en el tom. 3º, Ser. 1ª, pág. 277, y por la Sup. Corte Nac., tom. 4º, Ser. 2ª, pág. 24; tom. 12, pág. 350, y tom. 16, pág. 45. ¿Cuál será la suerte que llegará á caberle á esta cuestión que ha sido y es resuelta en forma tan contradictoria? Por hoy no sabemos á que atenernos, y lo peor del caso es que cualquiera que sea la suerte de la excepción, el vencido debe pagar las costas, por ser ellas de precepto legal.

5—La excepción de *litispendencia*, como dice Caravantes, solo tiene lugar en concurrencia de dos litigios sobre el mismo objeto, entre las mismas partes y por demandas basadas en la misma causa. El fundamento de esta excepción, consiste en que no sería justo obligar á una persona á seguir un nuevo pleito sobre el mismo asunto desde que había ya otro pendiente, porque si se daban sentencias conformes en ambos, se habría seguido un pleito inútilmente, y si eran contradictorias las sentencias, ó serviría la una de excepción de cosa juzgada respecto de otra, ó de no ser así, no podría ejecutarse ninguna—tom. 2º, núm. 607. Por esas mismas razones, la excepción de *litispendencia* solo puede oponerse en el juicio ejecutivo cuando se sigue otro juicio de la misma especie, por el mismo crédito y entre las mismas partes, por ejemplo, si á la vez que se ejecuta por una segunda letra de cambio, se inicia ejecución por la primera.

6—No es procedente esta excepción, puesto que está basada en un



ordinario, es improcedente si se opone en el ejecutivo.

—Jur. Com., tom. 5, pág. 225, Ser. 4ª.

7. **Excepción de litispendencia**—Opuesta en juicio ejecutivo y fundada en un juicio ordinario, es improcedente.

—Jur. Com., tom. 5, pág. 227, Ser. 4ª.

8. **Excepción de litispendencia**—Es admisible en el juicio ejecutivo fundado en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 5, pág. 284, Ser. 4ª.

9. **Excepción de litispendencia**—Solo procede si se funda en juicios de igual naturaleza.—Jur. Com., tom. 5, página 287, Ser. 4ª.

10. **Excepción de litispendencia**—Para que sea admisible en el litigio en que se funda, debe existir identidad de personas.—Jur. Com., tom. 5, pág. 321, Ser. 4ª.

11. **Excepción de litispendencia**—No procede fundada en la existencia del juicio sobre venta de la prenda, si

juicio ordinario y se opone en un juicio ejecutivo, los que son de distinta naturaleza.

7—Por la misma razón de la nota precedente.

8—Así lo tiene declarado esta Cámara—causa CLXV, 4ª Serie, fecha 24 de Agosto de 1892 y otras—la excepción de litispendencia es admisible aunque se trate de letras de cambio ó documentos que le sean equiparados, por ser ella de mero procedimiento y regida por el respectivo Cód., no siendo aplicable á excepciones de esta naturaleza lo dispuesto por el art. 676 del Cód. Com., y también tiene resuelto el punto en una sentencia contraria. Véase el núm. 1.

9—Véanse los núms. 6 y 7.

11—Por cuanto no concurren en el caso las circunstancias indispensables que la constituyen, pues mientras que en uno de los juicios seguidos se trataba del ejercicio de los derechos del acreedor prendario, persiguiendo el cobro de su crédito, en el otro se discutía el derecho de éste á hacerse indemnizar los perjuicios que se decían originados por el acreedor prendario, y en virtud de lo dispuesto en el art. 588 del Cód. de Com., todo lo que establece una diversidad de cuestiones, aun cuando son las mismas partes y el mismo asunto.



la acción se inicia por los perjuicios causados por dicha venta.—Jur. Com., tom. 9, pág. 253, Ser. 4^a.

12. **Escepción de litispendencia**—Procede, si la demanda se funda en los mismos hechos y se invoca el mismo derecho, aunque defieran en la cantidad.—Jur. Civ., tom. 8^a, pág. 136, Ser. 3^a.

13. **Escepción de litispendencia**—Es improcedente si no existe identidad de persona, aun cuando la haya de causa y objeto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 355, Ser. 3^a.

Escepcion de litispendencia—Véase: *Litispendencia*, números 12 y 13.

1^a. **Escepción de novación**—Es improcedente si se opone á la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tomo 4, pág. 384, Ser. 4^a.

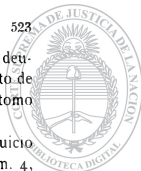
2. **Escepción de novacion**—Las escepciones de transacción y novación, son inadmisibles en la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 90, Ser. 4^a.

1^b. **Escepción de nulidad**—No puede fundarla el hecho:

12.—El hecho de que la nueva demanda reclame una cantidad mucho mayor, no tiene importancia para la resolución del punto cuestionado, desde que esa determinación puede hacerla á su antojo el demandante y desde que en este caso concurren las condiciones necesarias para la admisión de dicha escepción—Caravantes, tom. 2^o, pág. 87.

1^a.—Art. 676 del Cód. de Com.

1^b.—Deducida la acción y pedido el reconocimiento de la firma, el ejecutado fué buscado para notificarle el decreto en que se le citaba á practicar el reconocimiento en el domicilio de su familia, que era también el que él mismo había indicado en el pagaré que motivaba la ejecución. Este procedimiento era arreglado á derecho, tanto por las disposiciones del Cód. Civ.—art. 94—cuanto porque ese era el lugar designado en el documento de cuyo reconocimiento se trataba. Pero al ir á practicarse la diligencia, se informó al secretario que el deudor se encontraba en Necochea. En su virtud y contra las peticiones del actor, se declaró no hecha la citación, y además que no desconociéndose por el peticionante que el deudor se encontraba ausente, no era



de haberse encontrado ausente de su domicilio el deudor, al serle notificado el día para el reconocimiento de firma, si la ausencia fuese accidental.—Jur. Com., tomo 2, pág. 69, Ser. 4^a.

2. **Escepción de nulidad**— Debe rechazarse, si el juicio llena las prescripciones de la ley.—Jur. Com., tom. 4, pág. 411, Ser. 4^a.

3. **Escepción de nulidad**— No siendo esencial á la validez del juicio ejecutivo, que se notifique al firmante el auto que da por reconocida la firma en rebeldía, el error en el domicilio en que se haya dejado la cédula, no puede fundar la escepción de nulidad de la ejecución.—Jur. Comercial, tom. 7, pág. 20, Ser. 4^a.

4. **Escepción de nulidad**—Fundada en la falta de inprocedente que se le citase en ese domicilio indicado en el pagaré, en virtud de lo establecido en el art. 78 del Cód. de Proc. Este procedimiento era arreglado á estricto derecho. Si el deudor se encontraba ausente, debía ser citado allí donde estuviera, y si cambiaba de domicilio ó tuviera domicilio incierto, ó no podía ser habido para notificársele, el remedio lo indica el mismo Cód. La citación ordenada por el art. 468 del Cód., para que produzca efectos legales, debe hacerse en la forma determinada por el art. 77, y en el caso presente era de aplicarse el 78, y en último caso el art. 80. En vez de esto, se ordenó la citación del deudor en el domicilio denunciado por el actor, pero se hizo bajo la responsabilidad de dicha parte, en los términos del art. 77 del Cód. de Proc. Tal fué la citación, según constaba en autos, manifestándose entonces que el deudor se encontraba en el Tandil, á pesar de lo cual continuó el procedimiento como si se hubiera hecho la citación en forma legal. En su consecuencia correspondería declarar procedente nulidad. Pero resultaba de autos, que habiendo comparecido el ejecutado, aunque reclamó de esos actos, no negó su firma, y por el contrario la reconoció positivamente, al deducir la escepción de caducidad que también opuso. Por lo tanto, desde que el deudor reconoció su firma, no era procedente decir de nulidad de los actos que tuvieron por objeto ese reconocimiento.

3.— Véase: verb. *Cédula equivocada*, núm. 1.

4.— Véase: verb. *Citación de remate*, núm. 4.



tervención del Defensor de ausentes en las diligencias necesarias para el reconocimiento de la firma, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 279, Ser. 4^a.

5. **Escepción de nulidad**—Basada en deficiencias del protesto, es improcedente si la ejecución se funda en el reconocimiento declarado en rebeldía, de la firma de la letra.—Jur. Com., tom. 8, pág. 368, Ser. 4^a.

6. **Escepción de nulidad**—Debe ser rechazada la escepción de nulidad, si de autos resultan llenados la requisitos que determina la ley.—Jur. Com., tom. 10, página 132, Ser. 4^a.

7. **Escepción de nulidad**—La falta de diligenciamiento del mandamiento por no estar presente el deudor, no puede fundar la escepción de nulidad.—Jur. Com., tom. 10, pág. 387, Ser. 4^a.

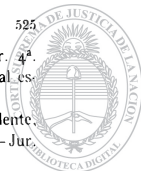
8. **Escepcion de nulidad**—Es admisible la del procedimiento, aun cuando la ejecución se funde en una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 10, pág. 387, Ser. 4^a.

1. **Escepción de pago**—Para que la opuesta á la ejecución de una sentencia sea procedente, debe resultar verificado al acreedor ó á quien legalmente lo represente.—Jur. Com., tom. 2, pág. 49, Ser. 4^a.

1^b. **Escepcion de pago**—La confesión del acreedor de haber contratado por intermedio tercero, exime al demandado de justificar la escepción de haber verificado el pago al intermediario.—Jur. Com., tom. 6, pág. 188, Serie 4^a.

2. **Escepción de pago**—Parcial, fundada en la existencia en poder del acreedor de una suma de dinero, es improcedente si en la fecha del vencimiento de la letra el deudor no facultó espresamente al acreedor para dis-

1^b—Véase: *Confesión del acreedor*, núm. 1.



poner de ella.—Jur. Com., tom. 2, pág. 309, Ser. 4^a.

3. **Excepción de pago**—La prueba corresponde al escepccionante.—Jur. Com., tom. 2, pág. 352, Ser. 4^a.

4. **Excepción de pago**—Parcial, declarada procedente, debe liquidarse el crédito con costas al ejecutante.—Jur. Com., tom. 3, pág. 144, Ser. 4^a.

5. **Excepción de pago**—Improbada la excepción de pago, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 5, pág. 225, Serie 4^a.

6. **Excepción de pago**—Debe rechazarse, si el escepccionante no justifica haberlo verificado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 227, Ser. 4^a.

7. **Excepción de pago**—Justificada la excepción de pago, debe rechazarse la ejecución con costas.—Jur. Com., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

8. **Excepción de pago**—Improbada, debe llevarse adelante la ejecución.—Jur. Com., tom. 9, pág. 61, Ser. 4^a.

9. **Excepción de pago**—El pago del saldo que resultaba después de la quita, basta para justificar la excepción de pago y hace procedente el rechazo de la ejecución.—Jur. Com., tom. 9, pág. 216, Ser. 4^a.

10. **Excepción de pago**—De pago, debe ser rechazada si se funda en el pago parcial del valor de la letra.—Jur. Com., tom. 10, pág. 242, Ser. 4^a.

11. **Excepción de pago**—Para que el documento en que se funda la excepción de pago de una letra, forme prueba, debe referirse espresamente á la obligación.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 76, Ser. 3^a.

10.—El tenedor de una letra ó pagaré tiene el derecho de exigir de cualquiera de sus suscritores, el importe total del pagaré, gastos é intereses—arts. 741 y 742 del Cód. de Com., iguales á los arts. 916, inc. 2^a, y 917 del Cód. de Com. antiguo.



12. **Excepción de pago**—Parcial, opuesta y justificada la excepción de pago parcial, la sentencia de trance y remate, debe pronunciarse sobre el saldo; el rechazo de la ejecución es improcedente.—Jur. Civ., tom. 11, página 389, Ser. 3^a.

1^a. **Excepción personal**—Las que el firmante del pagaré puede oponer al endosante, son improcedentes contra el tenedor de de un pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 9, pág. 5, Ser. 4^a.

1^b. **Excepción de prescripción**—Menor, es improcedente, si se opone como dilatoria, solo la mayor puede resolverse con carácter previo.—Jur. Com., tom. 3, pág. 254, Ser. 4^a.

2. **Excepción de prescripción**—La inacción por mayor tiempo del que fija la ley para el cobro de una deuda en cuenta corriente, hace procedente la prescripción opuesta por el demandado.—Jur. Com., tom. 3, pág. 344, Ser. 3^a.

3. **Excepción de prescripción**—Del derecho de acusar, no procede en tanto no exista acusación.—Jur. Com., tom. 6, pág. 284, Ser. 4^a.

4. **Excepción de prescripción**—Procede la prescripción si

1^a—Véase: verb. *Endoso*, núm. 4.

1^b—Porque ella no se encuentra comprendida entre las que enumera el art. 84 del Cód. de Proc.

2—Arts. 1003 y 1010 del Cód. de Com. ant. Jur. Com., tom. 4, pág. 130, Ser. 1^a.

3—Véase: verb. *Acusación*, núm. 5.

4—La Cám. no dijo que fuese necesaria una interpelación *judicial* para interrumpir la prescripción. El Juez de 1^a Inst. dijo en uno de sus considerandos que «de la prueba producida por el actor no resulta que se haya hecho interpelación alguna durante el tiempo necesario, por la que pudiera dar por resultado la interrupción de la prescripción.» Uno de los Cam. dijo: «Además es necesario que la interpelación se haga judicialmente.» Otro declaró prescripta la obligación fundándose tan solo



el acreedor no justifica la interrupción del término por demanda judicial.—Jur. Com., tom. 10, pág. 68, Ser. 4^a.

5. **Escepción de prescripción**—Aun cuando los hechos en que se funda la escepción, puedan cambiar su denominación legal, los tribunales pueden entrar á su juzgamiento y resolverla con arreglo á la ley.—Jur. Com., tom. 10, pág. 116, Ser. 4^a.

6. **Escepción de prescripción**—Puede la escepción de prescripción de la letra ó pagaré, siempre que durante el término de tres años no se gestione el pago.—Jur. Com., tom. 10, pág. 127, Ser. 4^a.

7. **Escepción de prescripción**—La prescripción liberatoria como acción, debe deducirse ante el juez de turno; el de la causa solo puede resolverla como escepción.—Jur. Comercial, tom. 10, pág. 191, Ser. 4^a.

1. **Escepcion de quita**—Opuesta á la ejecución de un pagaré á la orden, es improcedente si no se justifica por escritura pública ó documento privado judicialmente reconocido.—Jur. Com., tom. 2, pág. 45, Ser. 4^a.

2. **Escepción de quita**—Justificada la escepción de quita

en que cuando se dedujo demanda, ya el término había vencido, sin admitir las consideraciones ni los fundamentos del otro Camarista ni las del Juez de 1^a Inst.. El tercero se adhirió al anterior. De lo espuesto resulta que la ley no exige que la interpelación sea judicial para que intetrumpa la prescripción. Todo lo contrario la ley y la jurisprudencia han consagrado que la interrupción de la prescripción puede operarse por interpelación extrajudicial. Es por esto que la S. C. N. dice en un caso que corre publicado en el tom. 10, pág. 354, Ser. 2^a, que la interrupción de la prescripción no puede resultar sino de requisición judicial ú otro acto equivalente, hecho de una manera personal y directa al acreedor.

5—Véase: la nota del verb. *Acción prescripta*, núm. 2.

6—Art. 848 del Cód. de Com.

7—Véase: verb. *Acción de prescripción*, núm. 1.

1—Art. 676 del Cód. de Com.



debe rechazarse la ejecución — Jur. Com., tom. 9, página 216, Ser. 4^a.

1^a. **Escepción de transacción**—Es inadmisibles en la ejecución de un pagaré á la orden.—Jur. Com., tom. 2, pág. 45, Ser. 4^a.

2^a. **Escepcion de transaccion**—Las escepciones de transacción y novación, son inadmisibles en la ejecución de una letra de cambio.—Jur. Com., tom. 6, pág. 90, Ser. 4^a.

3. **Escepción de transacción**—No es admisible en la ejecución fundada en una letra de cambio.—Jur. Com., tomo 6, pág. 329, Ser. 4^a.

4. **Escepcion de transaccion**—Opuesta á la ejecución de un pagaré, es improcedente.—Jur. Com., tom. 6, pág. 38, Ser. 4^a.

5. **Escepción de transacción**—Si el ejecutado al oponerla no espone los hechos en que la funda, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 374, Ser. 4^a.

1^b. **Escusación**—Es causa legítima de escusación por prejuizgamiento en el Juez de sentencia, haber decretado la elevación de la causa á plenario en el Juzgado de Instrucción.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 9, Ser. 4^a.

2^b. **Escusación**—Habiendo cesado por el cambio de persona, la causa de escusación ó recusación, el espediente

1^a—Art. 676 del Cód. de Com.

2^a—No están enumeradas en la disposición del art. 676 del Cód. de Com. Como la transacción hace al fondo de la causa, el art. citado del Cód. de Com. es perfectamente aplicable.

3—Véase la nota precedente.

1^b—El auto de prisión preventiva, si no importa un prejuizgamiento completo, demuestra desde luego una opinión contraria al procesado que en muchos casos lo colocará en situación de recelar de la serenidad de espíritu que pueda presidir en el fallo definitivo.

2^b—Porque en este caso desaparece la causa por la cual pasó el espediente á otro Juzgado.



debe ser pasado al Juzgado de su procedencia para que continúe entendiendo en él.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 21, Ser. 4^a.

3. **Escusación**—Importa un prejuizgamiento haber dictado auto de prisión preventiva, y es causa de escusación para entender en el plenario.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 23, Ser. 4^a.

4. **Escusación**—La intervención en el juicio como Agente Fiscal, aun sin haber emitido opinión, es causa legal de escusación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 290, Serie 4^a.

5. **Escusación**—La intervención en otra causa en tanto no se haya emitido opinión, no es causa bastante de escusación por prejuizgamiento.—Jur. Crim., tom. 5, página 81, Ser. 4^a.

6. **Escusación**—Para que la amistad íntima sea causal de escusación, debe ser personal con el acusado y no con sus parientes ó allegados.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 145, Ser. 4^a.

7. **Escusación**—El parentesco con el juez que ha dictado la resolución, no es causa de escusación del Camarista que interviene en segunda instancia.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 162, Ser. 4^a.

3—Véase el núm. 1.

4—Art. 75, inc. 4º del Cód. de Proc. Crim.

5—El magistrado se escusó porque había entendido como juez en la causa civil que sirvió de base más tarde á la querella criminal en tela de juicio en el caso presente. Como esta causal no está comprendida entre las enumeradas en el art. 75 del Cód. de Proc., no se hizo lugar á la escusación.

6—Véase: verb. *Amistad íntima*, núm. 1.

7—Porque la enumeración hecha por los arts. 75 y 77 del Cód. de Proc. Crim. es taxativa. El art. 384 del Cód. de Proc. Civ. espresamente dice que la escusación no procede fundada en esta causal.



Excusación— Véase: *Prejuzgamiento*, núm. 1—*Fiador solidario*, núm. 1.

1°. **Escribano**— En el juicio arbitral debe cobrar sus costas por arancel, no procede la regulación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 88, Ser. 4ª.

2. **Escribano**—Para informar sobre puntos de contabilidad, debe nombrarse contador, el Escribano solo es competente para la compulsa ó confrontación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 92, Ser. 4ª.

3. **Escribano**—Del tribunal arbitral, no está obligado á la devolución del expediente, en tanto no se hayan re-puesto los sellos y pagado las costas.—Jur. Com., tomo 5, pág. 119, Ser. 4ª.

Escribano—Véase: *Dependientes*, núm. 1—*Notificación de la sentencia arbitral*, núm. 1.

1. **Escribano de Registro**—La atestación del Escribano sobre la personería del otorgante del poder, prueba la falsedad de la escepción de falta de personería, en tanto el escepcionante no produzca otros justificativos.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 53, Ser. 4ª.

1. **Escribano Secretario**—El oficial público que como

1°— Según el art. 57 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Comercial de 31 de Oct. de 1878, agregada como apéndice del Cód. de Proc., en toda clase de juicios, el actuario formará la correspondiente planilla de costas, en que cargue á cada parte las que haya causado y las comunes á prorrata con estricta sujeción á arancel. Por consiguiente el secretario arbitral no puede pedir regulación de honorarios sino que debe formar la planilla de sus derechos por costas procesales con estricta sujeción á arancel, y por lo mismo no debe el juez fijar el importe de tales derechos en la forma que designa la ley para la regulación de honorarios, ni puede la Cám. pronunciarse sobre el mérito de una regulación impropio.

2—Véase: verb. *Compulsa*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Costas*, núms. 18.



Escribano Secretario autoriza una notificación, es responsable de la falsificación que en ella exista, aun cuando resulte que la notificación fué practicada por otros empleados y la falsedad cometida por un testigo.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 273, Ser. 4^a.

2^a. **Escribano Secretario**—El de un laudo arbitral, no tiene derecho de retención sobre el expediente hasta tanto se le paguen las costas.—Jur. Com., tom. 6, pág. 274, Ser. 4^a.

1^a. **Escrito**—Si no puede fijarse la fecha de la última notificación del auto de prueba, el término corre desde la presentación del primer escrito del último notificado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 99, Ser. 3^a.

2^b. **Escrito**—Acusada rebeldía, debe devolverse el escrito evacuando el traslado después de acusada rebeldía.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 122, Ser. 3^a.

Escrito—Véase: *Acusación*, núm. 2—*Nulidad de un laudo*, núm. 1—*Posiciones*, núm. 7—*Término extraordinario*, núm. 3—*Rebeldía*, núms. 6 y 7—*Escepciones*, núm. 13—*Boleto de compraventa*, núm. 10.

Escritos—Véase: *Abogado*, núm. 7—*Arbitros*, núm. 5.

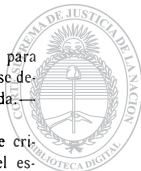
1^b. **Escrito agregado**—Aun cuando en el traslado de los documentos que presenta el demandado, el actor alegue hechos nuevos, no debe oírse nuevamente á aquél si está consentido el auto que manda agregar el escrito.—Jur. Com., tom. 7, pág. 405, Ser. 4^a.

2^a—Véase: verb. *Costas*, núm. 28.

1^a—La circunstancia de no cumplirse con los requisitos legales por falta de notificación en forma, no puede imputarse al litigante, pues la equidad así lo aconseja, no siendo imputable á la parte la sustanciación indebida de una causa.

2^b—Es la única forma de hacerse efectiva la declaratoria de rebeldía establecida por el art. 45 del Cód. de Proc.

1^b—Véase: verb. *Documentos agregados*, núm. 1.



1^a. **Escrito de alegato**—No siendo fatal el término para alegar, el escrito puede ser presentado mientras no se declare decaído ese derecho en virtud de rebeldía acusada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 165, Ser. 4^a.

1^b. **Escrito calumnioso**—El abogado es responsable criminalmente de las imputaciones que se hagan en el escrito de su patrocinado, ya sean calumniosas ó injuriantes.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

1^c. **Escrito devuelto**—Acusada rebeldía se declarará decaído el derecho que se ha dejado de usar, devolviéndose el escrito.—Jur. Com., tom. 7, pág. 415, Ser. 4^a.

1^d. **Escrito inconveniente**—Procede el apercibimiento y la multa disciplinaria, si el escrito contiene frases inconvenientes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 339, Ser. 4^a.

1^e. **Escrito ofensivo**—La pena de testar las palabras de un escrito, solo puede aplicarse si son indecorosas ú ofensivas.—Jur. Com., tom. 8, pág. 339, Ser. 4^a.

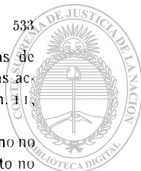
1^a—Véase: verb. *Alegato*, núm. 2.

1^b—Véase: verb. *Abogado*, núm. 5.

1^c—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: verb. *Escrito*, núm. 2. Para la pérdida de un derecho, de que no se ha hecho uso en el término legal, la ley solo exige la simple acusación de rebeldía—art. 45 del Cód. de Proc.—Si bien es cierto que al juez corresponde hacer la declaratoria consiguiente, no es menos cierto que no es esa una facultad de su parte, sino que por el contrario, concurriendo los extremos necesarios, tiene la obligación legal de declarar perdido el derecho de que se trata. Esta interpretación de la ley, resulta de los términos imperativos que emplea el art. 45 citado, al establecer, que acusada la rebeldía *se declarará* la pérdida del derecho, lo que equivale á resolver que esa declaración no es facultativa sino obligatoria para el juez. Siendo esto así y siempre que concurren todos los requisitos á que se refiere la disposición citada del Cód. de Proc. es ineludible decidir que la parte no puede hacer uso del derecho de contestar la demanda.

1^d—Véase: verb. *Apercibimiento*, núm. 1.

1^e—Art. 56 del Cód. de Proc., y 75 de la Ley Org.



2. **Eserito ofensivo** — Deben testarse las palabras de un escrito, ofensivas ó desdorosas, sin perjuicio de las acciones á que pudieran dar origen.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 231, Ser. 3ª.

1ª. **Eserito presentado** — El vencimiento de un término no perentorio, no produce la pérdida del derecho, en tanto no se acuse rebeldía antes de la presentación del escrito. — Jur. Com., tom. 10, pág. 225, Ser. 4ª.

2ª. **Eserito presentado** — No procede la rebeldía, si del cargo de los escritos no resulta la prioridad de la presentación.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 432, Ser. 3ª.

1ª. **Eserito de traslado** — Acusada rebeldía, procede la pérdida del derecho que ha dejado de usarse, aun cuando se provea aquélla después de presentado el escrito evacuando el traslado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 78, Ser. 3ª.

Eserituración — Véase: *Boleto de compraventa*, núms. 6 y 7 — *Condición resolutoria*, núm. 1.

Eseritura — Véase: *Dependientes*, núm. 1 — *Contrato*, número 2.

1ª. **Eseritura pública** — Justificada la existencia del mandato verbal, si el acto para el cual se confirió requería bajo pena de nulidad la escritura pública, el mandante debe ser condenado á reducir dicho mandato á instrumento público, bajo pena de ser responsable de los daños y perjuicios que cause su falta de cumplimiento á esta obligación de hacer.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 5, Serie 3ª.

1ª — Véase la nota del verb. *Excepciones*, núm. 15.

2ª — De acuerdo con varios casos resueltos. Véase: *Inst.*, tom. 5º, verb. *Eserito*, núm. 1; tom. 3º, verb. *Rebeldía*, núms. 4 y 5, y en contra los núms. 1 y 8.

1ª — Véase la nota precedente.

1ª — Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 13.



2. **Escritura pública**—El vendedor no puede invocar la condición resolutoria, si la no escrituración le es exclusivamente imputable: aún después de vencido el término, debe otorgar escritura pública.—Jur. Civ., tom. 9, página 243, Ser. 3^a.

3. **Escritura pública**—Aun cuando exista pacto comisorio, si la condición no se cumplió por culpa del vendedor, el boleto de compraventa debe ser reducido á escritura pública.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 284, Ser. 3^a.

4. **Escritura pública**—Debe convertirse en escritura pública el boleto privado de compraventa, sin resolver sobre aquellas cláusulas ó condiciones que importen el cumplimiento del contrato en él estipulado.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 403, Ser. 3^a.

5. **Escritura pública**—El boleto privado de compraventa de un inmueble, debe reducirse á escritura pública antes de que puedan resolverse judicialmente las cuestiones que se susciten sobre el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 187, Ser. 3^a.

6. **Escritura pública**—Al que alega la nulidad de la escritura por no resultar de ella el propósito de los contratantes, corresponde la justificación de tal extremo.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 129, Ser. 3^a.

7. **Escritura pública**—Las estipulaciones del cuerpo de la escritura de venta de un inmueble con sus accesorios, no pueden ser modificadas por agregaciones hechas al firmarla, en que se niegue su existencia, si resulta falsa la última afirmación.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 129, Ser. 3^a.

2—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 11.

3—Véase el núm. precedente.

4—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 12.

5—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 13.

6—La prueba incumbe al que alega un hecho nuevo en juicio.



8. **Escritura pública**—Reconocida la autenticidad del boleto privado de compraventa, debe ordenarse su inmediata reducción á escritura pública; las objeciones al título solo deben ser juzgadas al exigirse el cumplimiento del contrato.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 329, Ser. 3^a.

9. **Escritura pública**—Es procedente el embargo preventivo si la obligación de dar consta en escritura pública.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 410, Ser. 3^a.

10. **Escritura pública**—El vendedor no puede exigir la oblación del precio antes de otorgar la escritura, si no lo dispuso así la sentencia.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 414, Ser. 3^a.

11. **Escritura pública**—El término fijado en la sentencia para otorgar la escritura, es improrrogable.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 414, Ser. 3^a.

Escritura pública — Véase: *Simulación*, núm. 1—*Embargo*, núm. 7—*Excepción de espera*, núms. 1 y 2—*Propiedad embargada*, núm. 1—*Contrato privado*, núm. 2—*Boleto de compraventa*, núms. 7, 8 y 9—*Contrato de compraventa*, núms. 20 y 28—*Contrato verbal*, núms. 2 y 3—*Embargo preventivo*, núms. 37 y 38—*Obligación de hacer*, núm. 12—*Derechos y acciones*, núm. 1.

1^a. **Escritura simulada**—Bastando la tradición para justificar el contrato de compra, tratándose de mercaderías, la falta de certificados de inhibición para el otorgamiento de la escritura, no hace presumir la simulación de la venta.—Jur. Com., tom. 10, pág. 339, Ser. 3^a.

1^b. **Escritura simulada**—La falta de entrega del precio

8—Véase: *Boleto de compraventa*, núm. 16.

9—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 2.

1^a—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 11.

1^b—Al resolver esta cuestión la Cám. decía: «No me parece que ante todas estas circunstancias indicadoras de la sinceridad de un acto reves-



al firmarse la escritura, no basta para declarar la simulación del acto.—Jur. Com., tom. 10, pág. 339, Ser. 4ª.

2. **Espediente**—Puede presentarse como prueba en un litigio las resultancias del conjunto de otro expediente sin necesidad de determinar las diferentes partes.—Jur. Com., tom. 6, pág. 227, Ser. 4ª.

3. **Espediente**—El juicio de concurso es general y al juez que de él conozca, deben remitirse los expedientes, aun de oficio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 286, Ser. 4ª.

4. **Espediente**—En tanto se verifique el pago de la multa por la infracción á la ley de papel sellado, debe paralizarse el expediente.—Jur. Com., tom. 9, pág. 284, Ser. 4ª.

5. **Espediente**—El auto que manda traer un expediente como prueba, no causa gravamen, y es en consecuencia inapelable.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 103, Ser. 3ª.

6. **Espediente**—Las firmas de un expediente judicial se conceptúan auténticas y pueden servir de base para el cotejo pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

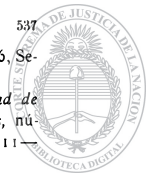
7. **Espediente**—Es improcedente la acción de nulidad de un expediente después de ejecutoriada la sentencia definitiva, aun cuando el fundamento de la acción repose en la carencia de facultades en el mandatario para in-

tido de las formas solemnes de la escritura pública, que no ha buscado para realizarse las sombras y el sigilo que acostumbran á emplear el fraude y la mala fe, sino que por el contrario se ha anunciado públicamente por avisos insertos en los diarios, no me parece, digo, que contra ellos pueda prevalecer la presunción contraria fundada en la falta de numeración del precio, y no encuentro así probada la simulación por las presunciones graves, precisas y concordantes que la doctrina y la jurisprudencia exigen.»

3—Véase: verb. *De oficio*, núm. 5.

6—Véase: verb. *Cotejo*, núm. 1.

7—Véase: verb. *Acción de nulidad*, núm. 2.



tervenir en el juicio.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 16, Serie 3ª.

Espediente—Véase: *Escusación*, núm. 2—*Nulidad de un laudo*, núm. 1—*Venia marital*, núm. 1—*Costas*, números 18 y 28—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 11—*Acusado*, núm. 3—*Abogado*, núm. 1.

1. **Espedientes**—Su agregación como medida probatoria, no está prohibida y su procedencia solo puede ser juzgada al dictar sentencia definitiva.—Jur. Com., tom. 2, pág. 404, Ser. 4ª.

Espedientes—Véase: *Contrato de sociedad*, núm. 13—*Copias entregadas*, núm. 1—*Recursos*, núm. 1—*Transacción judicial*, núm. 5

1—Según el art. 57, inc. 4º, Cód. de Proc., los jueces y tribunales pueden, para mejor proveer, traer á la vista cualesquier autos que tengan relación con el pleito, hallándose en estado. Desde que la ley autoriza á que se dicte tal medida de oficio por el juez para mejor averiguamiento de la verdad, ninguna razón existe para denegarla á las partes cuando ellas la solicitan durante el término de prueba, con el fin de probar sus respectivas pretensiones. La agregación de expedientes como diligencias probatorias, que tengan relación con el pleito, no se halla prohibida, y sí más bien, implícitamente permitida como uno de los medios de prueba escrita ó instrumental. Por otra parte, los principios de nuestra legislación procesal obligan á interpretar extensivamente y en favor de su admisión las diligencias de prueba que las partes pidan en oportunidad legal, pues según la ley 11, tit. 4º, Part. 3ª: «Verdad es cosa que los Judgadores deuen catar en los pleytos sobre todas las cosas del mundo, e por aende, cuando las partes contienden sobre algund pleyto en juyzio deuen los Judgadores ser acuciosos en puñar de saber la verdad del *por quantas maneras pudieren*»: y según el art 108, Cód. de Proc., la apreciación de las pruebas y rechazo de las que no sean pertinentes, solo puede hacerlo el juez al pronunciars entencia definitiva; de todo lo cual se deduce que á pesar de la prohibición contenida en ese artículo, el Cód. ha ampliado el derecho de las partes en favor de la prueba y limitado la facultad del juez, que era sobre este punto más amplia en nuestras antiguas leyes. Ley 27, al fin, título 14, Part. 3ª.



Expedientes criminales—Véase: *Honorarios*, núm. 13.

1. **Espera**—La escepción de espera, es improcedente si el documento privado en que se funda resulta adulterado en la parte pertinente.—Jur. Civ., tom. 1, pág. 417, Ser. 4^a.

Espera—Véase: *Escepción de espera*, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7—*Bienes suficientes*, núm. 1.

1^a. **Esplotación**—Para que exista calumnia, debe imputarse al acusador la consumación de un delito acusable por el Ministerio Fiscal; la esplotación, si bien importa una falta de moralidad, no puede conceptuarse defraudación.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 192, Ser. 4^a.

1^b. **Esposa**—Para que la nulidad de los actos simulados ó fraudulentos practicados por el marido en perjuicio ó fraude de los derechos de la esposa ó de sus herederos, pueda ser declarada, se requiere prueba plena, que corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 9, página 135, Ser. 3^a.

2. **Esposa**—El marido como representante legal de la esposa, carece de personería para pedir la nulidad de actos en que aquélla haya intervenido invocando un carácter falso, pues el derecho favorece á los incapaces cuando son engañados, pero no, si procediendo ellos mismos con malicia se convierten en engañadores.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 213, Ser. 3^a.

3. **Esposa**—Es parte en la testamentaria del marido, no obstante las declaraciones del testamento, en tanto no se declare en juicio contradictorio su desheradación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 95, Ser. 3^a.

Esposa—Véase: *Adulterio*, núms. 3 y 8—*Tercería de*

1^a—Véase: verb. *Calumnia*, núm. 16.

1^b—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Actos de la esposa*, núm. 1.

3—Véase: verb. *Declaraciones del testamento*, núm. 1.



dominio, núm. 2—*Propiedad embargada*, núm. 1—*Sociedad conyugal*, núm. 2—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Herederero*, núm. 8.

Esposa adúltera—Véase: *Perdón del esposo*, núm. 1.

Esposito—Véase: *Filiación legítima*, núm. 1.

1^a. **Esposo**—La notificación de la citación de remate al esposo en un domicilio accidental, invalida la que con anterioridad se hubiese hecho á la ejecutada, como asimismo la ampliación que del término se hubiere concedido.—Jur. Com., tom. 6, pág. 236, Ser. 4^a.

2. **Esposo**—El esposo representante legal de la esposa, está obligado á absolver posiciones.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 431, Ser. 3^a.

Esposo adúltero—Véase: *Acusación*, núm. 1.

1^b. **Establecimiento**—No procede el embargo total de las entradas de un establecimiento, si ese hecho puede hacer imposible su funcionamiento regular.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 99, Ser. 3^a.

1^c. **Estado de graduación**—No puede ser pagado ni aun con garantía, el acreedor de privilegio especial, en tanto no esté consentido el estado de graduación de créditos.—Jur. Com., tom. 7, pág. 86, Ser. 4^a.

1. **Estado de sus negocios**—El emplazamiento para dar explicaciones sobre el estado de sus negocios, es un juicio distinto del iniciado para el cumplimiento de la obligación.—Jur. Com., tom. 1, pág. 267, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Citación de remate*, núm. 3.

1^b—Véase: verb. *Embargo de entradas*, núm. 1.

1^c—El acreedor privilegiado—hipotecario—era á la vez Síndico del concurso, y no existían otros fondos para hacer frente á los gastos causídicos que tienen privilegio hasta sobre el crédito hipotecario. Hay que esperar la liquidación definitiva para poder entregar el saldo que resulte, una vez deducidos aquéllos.



1^a. **Estafa**—El delito de estafa debe seguirse de oficio, aun cuando el querellante haga abandono de la acusación.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 292, Ser. 4^a.

2. **Estafa**—Debe ser penada con un año y medio de prisión, si el reo es menor de 18 años.—Jur. Crim., tomo 2, pág. 325, Ser. 4^a.

3. **Estafa**—El acusado por estafa, no puede hacerse representar por apoderado.—Jur. Crim., tom. 4, página 215, Ser. 4^a.

4. **Estafa**—La estafa de mayor valor, agravada por la reincidencia, debe ser penada con seis años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 116, Ser. 4^a.

5. **Estafa**—La impresión fraudulenta del sello de una repartición pública, importa una falsificación y debe ser penada con dos años y seis meses de prisión, si por ese medio se cometió una estafa.—Jur. Crim., tom. 6, página 377, Ser. 4^a.

6. **Estafa**—El dolo en las transacciones, no puede ser calificado como defraudación ó estafa.—Jur. Crim., tomo 7, pág. 88, Ser. 4^a.

6^b. **Estafa**—La afirmación de soltería por parte de una mujer con objeto de provocar liberalidades, no importa la simulación que la ley estatuye para calificar el hecho como estafa.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 268, Ser. 4^a.

7. **Estafa**—El apoderamiento del cheque, aun cuando no se consigan los fondos, importa la consumación de

1^a— Véase: verb. *Acusación*, núm. 3.

3— Véase: verb. *Apoderado*, núm. 5.

4— Art. 202, inc. 6^o del Cód. Pen.

5— Arts. 202 y 277 del Cód. Pen.

6— Véase: verb. *Defraudación*, núm. 26.

7— Véase: verb. *Cheque*, núm. 2.



la estafa, no puede calificarse como tentativa.—Jur. Criminal, tom. 7, pág. 196, Ser. 4^a.

8. Estafa—La estafa de dos mil pesos, debe ser castigada con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, página 196, Ser. 4^a.

Estafa—Véase: *Prenda*, núm. 1—*Falsificación*, número 1.

1^a. Estampilla—El cheque por giro de dinero debe llevar estampilla, aun cuando no se reciba el importe.—Jur. Com., tom. 5, pág. 409, Ser. 4^a.

1. Estampillas—El impuesto que la ley de sellos fija á determinados funcionarios, en estampillas, puede ser abonado en papel sellado de igual valor.—Jur. Com., tom. 7, pág. 407, Ser. 4^a.

1^b. Estatutos sociales—Los terceros que contratan el seguro con sociedades no inscriptas en el Registro Público de Comercio, no pueden reclamar de ésta, sino de los directores personalmente, los seguros verificados contraviniendo disposiciones de los estatutos de la compañía.—Jur. Com., tom. 10, pág. 425, Ser. 4^a.

2. Estatutos sociales—La manifestación de los socios sobre la no existencia de estatutos ó pacto social, hace fe en juicio, en tanto no sea contradicha por terceros.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 358, Ser. 3^a.

Estatutos—Véase: *Asamblea*, núm. 1.

1^c. Extensión convenida—La frase «ó lo más que resulte entre muros» carece de valor legal, si se justifica que la venta se hizo por extensión convenida entre ambos contratantes—Jur. Civ., tom. 11, pág. 106, Ser. 3^a.

8—Arts. 84, inc. 4^a, y 202, inc. 2^a del Cód. Pen.

1^a—Véase: verb. *Cheque*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Compañía de seguro*, núm. 1.

1^c—Véase: verb. *Contrato de compraventa*, núm. 28.



Estinción—Véase: *Obligación estinguida*, núm. 1.

Estinción de deuda—Véase: *Amortizaciones parciales*, núm. 1.

Estipulaciones—Véase: *Escritura pública*, núm. 7.

1^a. **Estupro**—Corresponde la pena de diez años de prisión, si existen circunstancias agravantes por la simple aproximación sexual; aun cuando no exista estupro el delito se conceptúa violación.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

2^a. **Estupro**—Para que exista violación, debe estar justificada plenamente la edad de la menor; si existen motivos fundados para dudar, debe calificarse y penarse el delito como estupro.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 389, Serie 4^a.

1^b. **Estranjero**—Reconocido el carácter de extranjero en el demandado, la incompetencia de los tribunales de la Capital, debe ser declarada.—Jur. Com., tom. 6, página 232, Ser. 4^a.

2^b. **Estranjero**—El término para contestar, solo se cuenta desde la presentación del demandado, si la notificación hecha por exhorto en el extranjero, no llena los requisitos de la ley.—Jur. Com., tom. 10, pág. 212, Serie 4^a.

3. **Estranjero**—El fuero federal solo puede ser invo-

1^a—Véase: verb. *Aproximación sexual*, núm. 1.

2^a—Véase: *Edad de la menor*, núm. 1.

1^b—Siempre que el actor sea argentino. Art. 2º, inc. 1º de la Ley de Set. de 1863; y de la Const. Nac.

2^b—Argumento del art. 40 del Cód. de Proc.

3—El fuero federal es un privilegio ó una garantía creada en favor del extranjero en litigio con un ciudadano argentino, y al cual puede renunciar ocurriendo á la jurisdicción comun. Cuando ha optado por ésta, no puede ni debe conocer del asunto la justicia federal. Así se dispone en el art. 12, inc. 4º de la Ley de 14 de Set. de 1863, cuyo



cado por el extranjero.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 426, Ser. 3^a.

Estranjero—Véase: *Jurisdicción federal*, núms. 1 y 4—*Embargo preventivo*, núm. 7—*Defraudación*, núm. 20—*Escepción de incompetencia*, núm. 7—*Escepción de falta de personería*, núm. 17—*Bienes raíces*, núm. 2.

Estravío—Véase: *Empresa de ferrocarril*, núm. 2.

1^a. **Evasión**—Del procesado, exime al tribunal de entender en la apelación interpuesta en la parte de la sentencia que se refiere al prófugo.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 356, Ser. 4^a.

1^b. **Evicción**—Si el citado de evicción comparece y acepta el juicio, cesa la intervención del demandado por reivindicación.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 121, Ser. 3^a.

1^c. **Ex-apoderado**—No puede ser presentado como testigo el ex-apoderado ó procurador de las partes.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 135, Ser. 3^a.

Excedente—Véase: *Acreeeder privilegiado*, núm. 3—*Fiador*, núm. 1.

tenor es el siguiente: «Siempre que en el pleito civil, un extranjero demande á una provincia ó á un ciudadano, ó bien el vecino de una provincia demande al vecino de otra ante un juez ó tribunal de provincia, ó cuando siendo demandados el extranjero ó el vecino de otra provincia contesten á la demanda sin oponer la escepción dilatoria, se entenderá que la jurisdicción ha sido prorrogada, la causa se sustanciará y decidirá por los tribunales provinciales y no podrá ser traída á la jurisdicción nacional por recurso alguno, salvo en los casos especificados en el art. 14.»

1^a—Véase: verb. *Apelación*, núm. 6.

1^b—Véase: verb. *Citación de evicción*, núm. 1.

1^c—De acuerdo con la jurisprudencia sentada hasta la época en que se dictó el fallo á que se refiere el sumario. Puede verse el caso de Luis García con Emiliano Díaz. Hoy la jurisprudencia ha cambiado. El ex-apoderado puede ser *presentado* como testigo, pero no puede ser *examinado* sobre hechos que pudieron serle comunicados en su carácter de tal.

1^a. **Exhibición de libros**—De los auxiliares de comercio es obligatoria, si se reconoce su existencia.—Jur. Com., tom. 2, pág. 186, Ser. 4^a.

Exhibición general—Véase: *Libros de comercio*, núm. 1.

Exhortante—Véase: *Juez exhortado*, núm. 1.

1^b. **Exhorto**—Si el embargo de bienes se traba en virtud de exhorto, no procede mandamiento ni expresión de cantidad.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 77, Ser. 3^a.

Exhorto—Véase: *Testigo*, núm. 1—*Estranjero*, núm. 2.

Existencia del delito—Véase: *Sobreseimiento*, núm. 9.

Existencia legal—Véase: *Sociedad disuelta*, núm. 6.

Exoneración—Véase: *Costas*, núm. 46.

1^a—Art. 61 del Cód. de Com.

1^b—Véase: *Bienes embargados*, núm. 9.





1^a. **Factor de comercio** —Si bien el factor ó dependiente de comercio tiene derecho al cobro de un mes de sueldo al ser despedido, no puede reclamar la parte de las utilidades asignadas cuando prestaba servicio.— Jur. Com., tomo 3, pág. 136, Ser. 4^a.

Facturas—Véase: *Contrato de compraventa*, núm. 9.

Facultad—Véase: *Costas*, núm. 3 —*Embargo preventivo*, núm. 1— *Excepción de falta de personería*, núm. 1 y 15 —*Apoderado*, núms. 6 y 7—*Inscripción en la matrícula de comercio*, núm. 1.

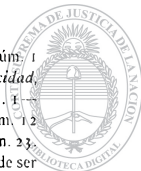
1. **Facultad especial** — Para que el mandatario con poder especial acepte la sustitución del demandado durante la secuela del juicio, se requiere facultad especial en el instrumento de mandato.— Jur. Civ., tom. 12, pág. 117, Ser. 3^a.

Facultades especiales—Véase: *Calumnia*, núm. 3.

1^b. **Falsa causa** —La falsa causa ó causa ilícita alegada como fundamento de la repetición de lo pagado, debe ser plenamente justificada.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 254, Ser. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Dependientes*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Causa ilícita*, núm. 1.



Falsedad— Véase: *Costas*, núm. 3—*Inhibición*, núm. 1—*Confesión del reo*, núm. 1—*Excepción de caducidad*, núm. 4—*Autenticidad*, 5—*Diligencia judicial*, núm. 1—*Excepción de falsedad*, núms. 7 y 8—*Quiebra*, núm. 12—*Falso testimonio*, núm. 1—*Libros de comercio*, núm. 23.

1°. **Falsedad del contrato de seguro**— La declaración de ser propietario del terreno careciendo de título, y aun cuando el acto sea revocable, no importa la falsedad ó reticencia que la ley requiere para declarar la nulidad del contrato de seguro, si el asegurado tenía boleto privado de venta de fecha anterior.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Serie 4ª.

1°. **Falsedad de un documento**—La declaración de falsedad ó adulteración de un documento privado recaída en el juicio civil, no forma prueba en el juicio criminal.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 95, Ser. 4ª.

2. **Falsedad de un documento**—No procede la escarcelación en el delito de falsedad en documento público cometido por un funcionario público.—Jur. Crim., tom. 5, página 372, Ser. 4ª.

3. **Falsedad de un documento**—La acusación sobre falsedad de un documento no debe ser suspendida por la ejecución iniciada en juicio civil, pues no está comprendida entre las cuestiones prejudiciales que la ley declara.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 242, Ser. 4ª.

1°. **Falsedad del endoso**—De la letra, por no existir el endosante, importa la inhabilidad del título, y es en conse-

1ª—Véase: *Contrato de seguro*, núm. 3.

1b—Véase: *Adulteración de un documento*, núm. 2.

2—Véase: *Escarcelación*, núm. 9.

3—Véase: verb. *Acusación sobre falsedad*, núm. 1.

1c—Véase: *Excepción de inhabilidad de título*, núm. 5; y *Excepción de falsedad*, núm. 1.



cuencia admisible como excepción.—Jur. Com., tom. 2, pág. 303, Ser. 4ª.

1. Falsedad de firmas.—El informe caligráfico terminantemente asertivo y corroborante de las constancias de autos, permite declarar la no existencia del delito de falsedad de firmas.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 158, Ser. 4ª.

Falsedad de la firma.—Véase: *Excepción de falsedad*, número 9.

Falsedad de los hechos.—Véase: *Auto de quiebra*, núm. 1.

1. Falsedad de la obligación.—Siendo principio de derecho comercial que los jueces deben fallar á verdad sabida y buena fe guardada, la prueba de presunciones graves, precisas y concordantes, que llevan al ánimo el convencimiento, basta para declarar la falsedad de la obligación, aun cuando exista la firma reconocida.—Juv. Com., tomo 8, pág. 335, Ser. 4ª.

1ª. Falsedad de un pagaré.—La acción criminal de falsedad de un pagaré, no basta para suspender la ejecución ante el Tribunal de Comercio.—Jur. Com., tom. 7, página 343, Ser. 4ª.

1. Falsedad del protesto.—Es improcedente la nulidad de la ejecución, fundada en la falsedad del protesto, si se reconoce la autenticidad de la firma.—Jur. Com., tom. 5, pág. 321, Ser. 4ª.

1ª. Falsedad de un testamento.—La prueba de la falsedad de un testamento ológrafo, después de la protocolización, corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 38, Ser. 3ª.

1. Falsedad de un testimonio.—La expedición por, un funcionario público, de un testimonio cuyo original no existe,

1ª.—De acuerdo con la jurisprudencia. Véase: *Acusación sobre falsedad*, núm. 1.

1ª.—Véase: *Acción de falsedad*, núm. 1.



no importa un delito de falsedad, en tanto no se justifique la intención criminal, ó por lo menos, el perjuicio material que ese acto causó al querellante.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 161, Ser. 4^a.

1. Falsificación—Como medio de cometer la estafa, no puede considerarse delito, ni aun como circunstancia agravante.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 289, Ser. 4^a.

Falsificación—Véase: *Escribano Secretario*, núm. 1—*Defraudación*, núm. 8.

1^a. Falsificación de un pagaré—Y su ejecución, aun cuando por medio de engaño se haya conseguido la firma auténtica, importa la consumación del delito de defraudación; no puede calificarse como tentativa, aun cuando no se haya conseguido hacer efectivo el cobro.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 22, Ser. 4^a.

1^b. Falsificación de bonos—Siendo los bonos emitidos por el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires un título de deuda pública, su falsificación importa un delito acusable por el Ministerio Público.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 362, Ser. 4^a.

1. Falsificación de un documento —Para que pueda darse por comprobada, debe existir en autos el cuerpo del delito, la prueba testimonial que constata la existencia anterior del documento que se dice falsificado no basta para darlo por cometido.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 53, Ser. 4^a.

1^c. Falsificación de marca de fábrica.—La defraudación por medio de la falsificación de marca de fábrica, es de competencia de la justicia federal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 428, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 36.

1^b—Véase: verb. *Bonos*, núm. 1.

1^c—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 29.



1ª. Falsificación de sello—La impresión fraudulenta del sello de una repartición pública, importa una falsificación y debe ser penada con dos años y seis meses de prisión si por ese medio se cometió una estafa.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 377, Ser. 4ª.

1. Falso testimonio—El delito de falso testimonio solo puede ser perseguido si se justifica la falsedad de la deposición de los testigos.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 288, Ser. 4ª.

Falta de causa—Véase: *Excepción de falsedad*, núm. 6.

Falta de cumplimiento—Véase: *Daños y perjuicios*, números 32 y 33.

Falta de delicadeza—Véase: *Calumnia*, núm. 17.

Falta de denuncia—Véase: *Seducción de menores*, número 1.

Falta de derecho—Véase: *Excepción de falta de personería*, núms. 7, 10 y 14—*Excepción dilatoria*, núms. 1 y 2.

Falta de discernimiento—Véase: *Menor*, núm. 1.

1. Falta de moralidad—La imputación de falta de moralidad, es acusable por injuria.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 126, Ser. 4ª.

Falta de moralidad—Véase: *Calumnia*, núm. 16.

Falta de peligro—Véase: *Alevosía*, núms. 1, 2 y 3.

1ª. Falta de personería—Las excepciones de falta de personería é inhabilidad de título son improcedentes si se oponen á la ejecución de un pagaré equiparado por la ley á la letra de cambio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 353, Ser. 4ª.

1ª. Falta de personería—No procede la excepción dilatoria de falta de personería, si se funda en la fal-

1ª—Véase: verb. *Estafa*, núm. 5.

1ª—Art. 676 del Cód. de Proc.

1ª—Véase: *Excepción dilatoria*, núm. 2.



ta de derecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 87, Ser. 3^a.

Falta de personería.—Véase: *Costas*.—*Excepción de falta de personería*, núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21.—*Documentos inhabilitantes*, número 1.—*Excepción dilatoria*, núm. 1.

Falta de protesta.—Véase: *Contrato modificado*, núm. 1.

Falta de protesto.—Véase: *Excepción de caducidad*, números 1 y 2.

Falta de prueba.—Véase: *Daños y perjuicios*, núm. 9.

1. Fallecimiento.—Violento de una persona, á los efectos de la comprobación de un delito, cuya partida de defunciónno haya podido anotarse en el Registro Civil, puede ser comprobado por información.—Jur. Crim., tomo 3, pág. 410, Ser. 4^a.

2. Fallecimiento.—El fallecimiento del procesado hace procedente el fenecimiento del juicio criminal: las indemnizaciones, deben exigirse ante la jurisdicción civil á la cual deben transferirse los bienes.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 229, Ser. 4^a.

3. Fallecimiento.—De un socio, faculta al sobreviviente para continuar el juicio, pero el poder debe ser otorgado en ese carácter y no á nombre personal.—Jur. Com., tom. 9, pág. 308, Ser. 4^a.

4. Fallecimiento.—Del demandante, es causal de nulidad de todo lo obrado después de esa fecha, cualquiera que sea el estado de la causa.—Jur. Com., tom. 10, pág. 197, Ser. 4^a.

5. Fallecimiento.—La declaración de ausente con presunción de fallecimiento, es de competencia del juez del

1.—Véase la nota del verb. *Delito*, núm. 6.

2.—Véase: *Bienes del procesado*, núm. 1.

4.—Véase: *Demanda de nulidad*, núm. 1.

5.—Véase: *Ausente con presunción de fallecimiento*, núm. 1.



último domicilio del ausente.—Jur. Civ., tom. 10, página 80, Ser. 3ª.

Fallecimiento—Véase: *Herida*, núm. 1—*Homicidio por malos tratamientos*, núm. 1—*Seguros*, núm. 8—*Concurso*, núm. 8—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Honorarios*, núm. 18—*Colegatarios*, núm. 1—*Filiación natural*, núms. 1 y 4—*Apoderado*, núm. 4.

1º. **Fallido**—La presentación de un escrito del fallido pidiendo el levantamiento del auto de quiebra, interrumpe el término que la ley fija para la revocación.—Jur. Com., tom. 5, pág. 128, Ser. 4ª.

2. **Fallido**—La compra del activo y pasivo de un concurso, no importa una cesión de créditos, y en consecuencia el fallido no está obligado á absolver posiciones en los juicios que se sigan contra los deudores.—Jur. Com., tom. 8, pág. 231, Ser. 4ª.

3. **Fallido**—Declarada la quiebra, el fallido solo puede hacer convenios con sus acreedores en la oportunidad y forma que determina el Cód.—Jur. Com., tom. 8, página 317, Ser. 4ª.

Fallido—Véase: *Quiebra*, núm. 5—*Honorarios*, núm. 9—*Acreedores reconocidos*, núm. 1—*Concordato*.

Fallo—Véase: *Peritos*, núms. 1 y 2—*Defraudación*, núm. 28.

1. **Familia**—Aun cuando se desempeñen funciones públicas que pudieran justificar un domicilio accidental, se tendrá por permanente, si á él se había trasladado el asiento de la familia con anterioridad.—Jur. Com., tom. 8, pág. 63, Ser. 4ª.

1º—Véase: verb. *Auto de quiebra*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Concurso*, núm. 3.

3—Véase: verb. *Contrato con los acreedores*, núm. 1.

1—Véase: verb. *Domicilio accidental*, núm. 2.



1ª. **Fecha**—De la escritura anterior á la en que se contrajo la obligación ejecutada, es presunción de la realidad del contrato.—Jur. Com., tom. 4, pág. 309, Ser. 4ª.

Fecha—Véase: *Papel sellado*, núm. 1—*Contrato bilateral*, núm. 1—*Obligación alternativa—Adulteración de una leira*, núm. 1—*Reposición de sellos*, núm. 1—*Acusador*, núm. 1—*Carta de crédito*, núm. 1—*Garantía*, número 3—*Contrato de seguro*, núm. 3—*Embargo*, núm. 22—*Copias*, núm. 2—*Escrito*, núm. 1—*Acto jurídico*, número 1—*Chancelación*, núms. 2 y 3—*Alegato*, núm. 1—*Arrendamiento*, núm. 2—*Competencia*, núm. 5—*Contrato de compraventa*, núm. 26—*Dominio*, núm. 1—*Poseedor*, núm. 1.

1ª. **Fechas**—Si de los recibos del demandante resulta una suma mayor de la que cobra, se conceptúa chancelada la deuda, aun cuando del informe pericial resulte que las fechas han sido escritas en distinta época que el cuerpo del documento.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 272, Serie 3ª.

Fecha anterior—Véase: *Aval*, núm. 1.

1ª. **Fecha cierta**—Los documentos privados que se oponen á terceros, solo tienen fecha cierta desde su presentación en juicio.—Jur. Com., tom. 8, pág. 383, Ser. 4ª.

2. **Fecha cierta**—El instrumento privado solo tiene fecha desde su presentación en juicio; en consecuencia, si funda una tercera, no forma prueba por ser de fecha posterior al embargo.—Jur. Com., tom. 10, pág. 250, Serie 4ª.

1ª—Véase: verb. *Contrato*, núm. 2.

1ª—Véase: *Chancelación*, núm. 2.

1ª—Véase: verb. *Documento privado*, núm. 3.

2—Véase: verb. *Embargo*, núm. 22.



Fecha cierta—Véase: *Instrumento privado*, núm. 2.

Fecha de la entrega—Véase: *Nulidad de un contrato*, núm. 1.

1^a. **Fecha estipulada**—Para que el contrato de compraventa de acciones ó títulos al portador surta efectos legales, la consignación judicial de los que fueron materia del contrato, debe verificarse en la fecha estipulada para la entrega.—Jur. Com., tom. 9, pág. 10, Ser. 4^a.

Fecha del pago—Véase: *Compraventa*, núm. 19.

Fecha posterior—Véase: *Notificación por nota*, núm. 1.

1^b. **Ferrocarril**—Las empresas de transportes por ferrocarril están obligados á entregar al destinatario la carga dentro del término que fija el Código de Comercio—una hora por cada diez kilómetros—bajo pena de perder el precio del transporte.—Jur. Com., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

2. **Ferrocarril**—La expedición de boletos de pasaje por una empresa de transporte por ferrocarril, para recorrer las vías de otra, importa el cumplimiento de un mandato, y en consecuencia, la responsabilidad por los accidentes recae siempre sobre la propietaria de la vía, aun cuando no lo fuera del vehículo.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3^a.

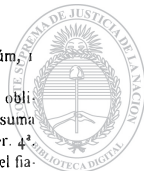
3. **Ferrocarril**—Las empresas de ferrocarril son responsables de los daños y perjuicios causados á los pasajeros, por accidentes debidos á su negligencia, aun cuando no puedan ser calificados como delitos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Acciones ó títulos*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Empresa de ferrocarril*.

2—Véase: *Accidentes*, núm. 1.

3—Véase: *Accidentes*, núm. 2.



Ferrocaril—Véase: *Término para el transporte*, núm. 1.
Daños y perjuicios, núm. 1.

1. **Fiador**—Por cantidad determinada, no queda obligado por el excedente si el deudor ha pagado igual suma que la afianzada.—Jur. Com., tom. 6, pág. 45, Ser. 4^a.

2. **Fiador**—Presentado y aceptado por el Juzgado el fiador de arraigo, debe contestarse la demanda.—Jur. Com., tom. 6, pág. 238, Ser. 4^a.

3. **Fiador**—Si éste no presenta al encausado, debe depositar el valor en que se fijó la fianza.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 287, Ser. 4^a.

4. **Fiador**—El fiador debe depositar la suma en que se fijó el monto de la fianza en caso de no presentar al escarcelado.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 430, Ser. 4^a.

5. **Fiador**—Debe justificarse en autos la responsabilidad y arraigo del fiador propuesto para la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 186, Ser. 4^a.

6. **Fiador**—Puesta en duda la responsabilidad del fiador, procede su justificación.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 99, Ser. 3^a.

Fiador—Véase: *Crédito bancario*, núm. 1.

1^a. **Fiador solidario**—No puede exigir que el acreedor haga escusión en los bienes del deudor.—Jur. Com., tomo 3, pág. 354, Ser. 4^a.

1^b. **Fianza**—La cesación de pagos del comprador per-

2—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 2.

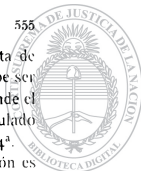
3—Art. 392 del Cód. de Proc.

4—De acuerdo con el núm. precedente. Puede verse asimismo el verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 17.

5—Véase: verb. *Arraigo*, núm. 3.

1^a—Art. 191 del Cód. de Com. ant., y 207 del vigente; 701 y 705 del Cód. Civ.

1^b—Véase: verb. *Cesación de pagos*, núm. 2.



mite al vendedor la rescisión del contrato de venta de mercaderías á plazo, sin exigir la fianza, que debe ser presentada en tiempo por el comprador, si pretende el cumplimiento del contrato, dentro del plazo estipulado para la entrega.—Jur. Com., tom. 1, pág. 76, Ser. 4^a.

1^b. Fianza.—La fijación de la fianza y su calificación es facultativa del Juzgado.—Jur. Com., tom. 9, pág. 238, Ser. 4^a.

2. Fianza.—Aunque obligación accesoria, debe ser otorgada en papel sellado, siempre que se encuentre en instrumento separado.—Jur. Com., tom. 2, pág. 402, Serie 4^a.

3. Fianza.—No puede exigirse afiançe el juicio el que se ausenta, si ha nombrado apoderado para que intervenga.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 383, Ser. 3^a.

4. Fianza.—En tanto el acreedor no cumpla las condiciones que impuso al deudor en el contrato de fianza, no puede exigir las obligaciones que corresponden al fiador.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 371, Ser. 3^a.

5. Fianza.—El acreedor cuyo derecho preferente se ha reconocido en el estado de graduación de créditos, puede dirigir su acción contra cualquiera de los acreedores de grado inferior que haya afianzado, sin necesidad de haberlo contra el de último término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 23, Ser. 3^a.

1^b—La Cámara dijo, que siendo facultativo del Juzgado la calificación de la caución ofrecida, según el art. 453 del Cód. de Proc., y que dando con ello terminado el incidente, según lo expresa la disposición del art. 454. Esta doctrina no es la correcta como lo sostenemos en el verb. *Fianza*, núm. 6 del tom. 5^o de la Inst.

3—Véase: verb. *Apoderado*, núm. 1.

4—Véase: *Contrato de fianza*, núm. 1.

5—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 1.



Fianza—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núms. 1, 2, 3, 5 y 24—*Fiador*, núms. 1 y 3—*Arraigo*, núm. 3.

1. **Fianza carcelera**—No procede la escarcelación bajo fianza, si la pena puede exceder de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 14, Ser. 4ª.

2. **Fianza carcelera**—Procede la escarcelación bajo fianza, si la pena pedida por el Ministerio Fiscal al entablar la acusación, no excede de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 136, Ser. 4ª.

3. **Fianza carcelera**—No procede la escarcelación bajo fianza en el sumario por defraudación, si existe reincidencia ó reiteración.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 138, Serie 4ª.

4. **Fianza carcelera**—Procede la escarcelación bajo fianza, siempre que de los antecedentes de la causa resulte la falta de intención criminal del acusado.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 180, Ser. 4ª.

5. **Fianza carcelera**—Si el máximum de la pena fijada al delito es de más de dos años, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 279, Serie 4ª.

6. **Fianza carcelera**—La comparecencia del reo libera de toda responsabilidad al fiador y chancela ipso facto la fianza.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 297, Ser. 4ª.

7. **Fianza carcelera**—La del cómplice de adulterio, debe ser de poca importancia.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 303, Ser. 4ª.

2—Art. 376 del Cód. de Proc. Crim.

3—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 2.

4—Véase: verb. *Escarcelación bajo fianza*, núm. 6.

5—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 12.

6—Art. 393 del Cód. de Proc. Crim.

7—Véase: verb. *Adulterio*, núm. 12.



8. **Fianza carcelera**—No procede la escarcelación bajo fianza, si no puede determinarse el monto de la defraudación.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 285, Ser. 4^a.

9. **Fianza carcelera**—No procede la escarcelación bajo fianza, si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 169, Ser. 4^a.

10. **Fianza carcelera**—Si el delito puede ser castigado con más de dos años de prisión, no procede la libertad bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 233, Ser. 4^a.

12. **Fianza carcelera**—Si el delito puede ser penado con más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 273, Ser. 4^a.

13. **Fianza carcelera**—Si el delito imputado puede ser castigado con más de dos años de prisión, no procede la escarcelación bajo fianza.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 229, Ser. 4^a.

1. **Fianza civil**—Que el comerciante exige á su dependiente, es un acto civil.—Jur. Civ., tom. 2, pág. 389, Serie 4^a.

1. **Filiación legítima**—Al que invoca la filiación legítima corresponde la prueba; el demandado que afirma el carácter de espósito, no está obligado á justificarlo.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 152, Ser. 3^a.

2. **Filiación legítima**—Las afirmaciones de las partidas de matrimonio del demandante, aun justificando la intervención de los pretendidos padres, no bastan para pro-

8—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 32.

9—Véase: *Escarcelación bajo fianza*, núm. 18.

10—Véase: verb. *Delito*, núm. 20.

12.—De acuerdo con el núm. 10.

13—Véanse los núms. 10 y 12, y *Escarcelación bajo fianza*, núm. 24.

2—La Cám. dijo que la filiación no se había probado, porque ni el padre ni la madre suscribían la partida.



bar la filiación legítima.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 152, Ser. 3ª.

1.—**Filiación natural**—Después del fallecimiento del padre, la prueba que haga presumir la filiación natural, no basta para declararla, es necesario justificar plenamente la posesión de estado.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 49, Serie 3ª.

2. **Filiación natural**—El desconocimiento de la filiación natural en instrumento público, por aquél á quien se imputa la paternidad, impide la declaración judicial de ese hecho.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 217, Ser. 3ª.

3. **Filiación natural**—Para que la legitimación por subsiguiente matrimonio pueda ser declarada, es indispensable justificar la filiación natural.—Jur. Civ., tom. 10, página 217, Ser. 3ª.

4. **Filiación natural**—Si la acción para el reconocimiento de la filiación natural se deduce después del fallecimiento del padre, debe justificarse la posesión de estado.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 5, Ser. 3ª.

5. **Filiación natural**—Las leyes que prescriben los requisitos para justificar la filiación natural, no pueden alterar los derechos adquiridos con arreglo á las anteriores leyes, aunque no hubiesen sido declarados judicialmente.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 198, Ser. 3ª.

6. **Filiación natural**—Debe declararse judicialmente la

1—Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Filiación natural*, núms. 2 y 3.

2—Siempre que no se compruebe por medios probatorios concluyentes la falsedad de tal afirmación. Véase: Inst., tom. 2ª, verb. *Filiación natural*, núm. 5. Puede verse asimismo el tom. 5ª de la Inst., mismo verb., núm. 18.

4—Véase el núm. 1.

5—De acuerdo con la jurisprudencia sentada. Véase: Inst., tom. 5ª, nota del verb. *Hijo natural*, núm. 12.

6—Art. 325 del Cód. Civ.



filiación natural, si de autos resulta plenamente justificada la posesión de estado.—Jur. Civ., tom. 12, página 198, Ser. 3ª.

1. Firma—Los que no son partes en el juicio solo pueden ser presentados como testigos, aun para la autenticación de la firma.—Jur. Com., tom. 6, pág. 278, Serie 4ª.

2. Firma —No procede la prueba sobre autenticidad de la firma de un documento presentado en la absolución de posiciones, si el término está vencido.—Jur. Com., tomo 8, pág. 292, Ser. 4ª.

3. Firma —El intermediario en un contrato, ya sea comisionista ó martillero, está obligado á la exhibición de sus libros de comercio y al reconocimiento de los documentos que lleven su firma —Jur. Civ., tom. 10, pág. 120, Ser. 3ª.

4. Firma—Las firmas de un espediente judicial se conceptúan auténticas y pueden servir de base para el cotejo pericial.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 103, Ser. 3ª.

5. Firma—La declaración de dos testigos, no basta para dar por auténtica la firma de un instrumento privado.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 408, Ser. 3ª.

6. Firma—La autenticidad de la firma en documento privado, debe justificarse por información sumaria para que proceda el embargo preventivo, si el crédito es de mayor cuantía.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 397, Ser. 3ª.

7. Firma—Para decretar un embargo preventivo debe

1.—Véase: verb. *Autenticación*, núm. 1.

3.—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 7.

4.—Véase: *Cotejo*, núm. 1.

5.—Arts. 143 del Cód. de Proc. y 1033 del Cód. Civ.

6.—Véase: verb. *Autenticidad*, núm. 4.

7.—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 34.



abonarse la firma, si la deuda es de mayor cuantía.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 91, Ser. 3ª.

Firma—Véase: *Letra de cambio*, núm. 2—*Defraudación*, núm. 8—*Embargo preventivo*, núm. 4—*Escepción de nulidad*, núm. 1—*Falsedad de firmas*, núm. 1—*Inhibición*, núm. 2—*Escepción de falsedad*, núm. 4—*Falsedad del protesto*, núm. 1—*Peritos*—*Tasación*—*Apoderado*, núm. 8—*Defensor de ausentes*, núm. 1—*Domicilio del ejecutado*, núm. 2—*Instrumento firmado á ruego*, número 1—*Autenticidad*, núm. 1—*Boleto de compraventa*, núm. 8—*Carta misiva*, núm. 1—*Contrato*.

1ª. **Firma auténtica**—La falsificación de un pagaré y su ejecución, aun cuando por medio de engaño se haya conseguido la firma auténtica, importa la consumación del delito de defraudación; no puede calificarse como tentativa, aun cuando no se haya conseguido hacer efectivo el cobro.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 22, Ser. 4ª.

1ª. **Firma impresa**—El documento sin firma aunque la tenga impresa, no puede ser calificado como instrumento privado.—Jur. Com., tom. 10, pág. 250, Ser. 4ª.

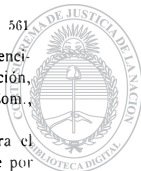
1ª. **Firma reconocida**—No siendo esencial á la validez del juicio ejecutivo que se notifique al firmante el auto que da por reconocida la firma en rebeldía, el error en el domicilio en que se ha dejado la cédula, no puede fundar la escepción de nulidad de la ejecución.—Jur. Com., tom. 7, pág. 20, Ser. 4ª.

2. **Firma reconocida**—Siendo principio de derecho comercial que los jueces deben fallar á verdad sabida y buena fe guardada, la prueba de presunciones graves,

1ª—Véase: verb. *Defraudación*, núm. 36.

1ª—Véase: verb. *Documento*, núm. 2.

1—Véase: *Cédula equivocada*, núm. 1.



precisas y concordantes que lleva el ánimo el convencimiento, basta para declarar la falsedad de la obligación, aun cuando exista la firma reconocida.—Jur. Com., tom. 8, pág. 368, Ser. 4^a.

3. Firma reconocida.—La citación al deudor para el reconocimiento de la firma de la obligación, se rige por la disposición especial del art. 468 y no por la general que prescribe la forma de la notificaciones.—Jur. Com., tom. 8, pág. 235, Ser. 4^a.

4. Firma reconocida.—Debe ser rechazada la nulidad de la ejecución por defectos del procedimiento en la notificación para el reconocimiento de la firma, si al mismo tiempo no ha opuesto la excepción de falsedad de la firma que suscribe el pagaré.—Jur. Com., tom. 8, página 104, Ser. 4^a.

5. Firma reconocida.—La excepción de nulidad basada en deficiencias del protesto, es improcedente si la ejecución se funda en el reconocimiento en rebeldía de la firma de la letra.—Jur. Com., tom. 8, pág. 368, Ser. 4^a.

6. Firma reconocida.—La nulidad del procedimiento fundada en la falta de nombramiento de Defensor de ausentes para el reconocimiento de la firma, debe ser rechazada.—Jur. Com., tom. 8, pág. 109, Ser. 4^a.

7. Firma reconocida.—Pedido el reconocimiento de la firma de un conforme, ante autoridad delegada, no procede que la misma intime el pago de la obligación.—Jur. Com., tom. 9, pág. 337, Ser. 4^a.

3—Véase: *Citación al deudor*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Excepción de falsedad*, núm. 9.

5—Véase: verb. *Excepción de nulidad*, núm. 4.

6—Véase: verb. *Citación de remate*, núm. 4.

7—Véase: verb. *Conforme*, núm. 1.



8. **Firma reconocida**—No procede la nulidad de la ejecución fundada en la falta de intervención del Defensor de ausentes en el reconocimiento de la firma en rebeldía.—Jur. Com., tom. 10, pág. 15, Ser. 4^a.

9. **Firma reconocida**—Solo procede su reconocimiento en rebeldía, si el firmante ha sido notificado en forma.—Jur. Com., tom. 5, pág. 395, Ser. 4^a.

1^a. **Firma social**—La sociedad es responsable por las obligaciones suscritas con la firma social, siempre que por el contrato el socio tuviera poder de usarla y la operación hubiese sido facultada por el contrato.—Jur. Com., tom. 10, pág. 138, Ser. 4^a.

1^b. **Firma del socio**—Solo puede exigirse el reconocimiento de la firma del socio que ha firmado la obligación.—Jur. Com., tom. 4, pág. 233, Ser. 4^a.

Firmante—Véase: *Ausente*, núm. 2—*Escepción de caducidad*, núms. 1, 3 y 4—*Inhabilidad de título*, núm. 2—*Cédula equivocada*, núm. 1—*Letra de cambio*, número 17—*Protesto*, núm. 5—*Transacción*, núm. 3.

Firmantes—Véase: *Escepción de caducidad*, núm. 6—*Escepciones personales*, núm. 1.

1^c. **Fiscal**—Si el delito puede ser perseguido por acción fiscal, el abandono de la querella no interrumpe la secuela del juicio.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 172, Ser. 4^a.

1^d. **Flete**—La demora en la entrega de los bultos, obliga

8—Véase: verb. *Defensor de ausentes*, núm. 3.

1^a—Véase: verb. *Contrato de sociedad*, núm. 7.

1^b—El reconocimiento de la firma de un documento privado, solo puede exigirse de la persona que lo ha suscrito, porque ese es un acto personalísimo—argumento de los arts. 1037 y 1032, Cód. Civ., y 141, Cód. de Proc.

1^c—Véase: *Delito*, núm. 15.

1^d—Véase: verb. *Bultos*, núm. 2.



á las empresas de transporte á la devolución del flete cobrado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 230, Ser. 4^a.

2. **Flete**—Reconocida la existencia del contrato de transporte, el cargador debe ser condenado al pago de los fletes.—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Ser. 4^a.

3. **Flete**—El cargador tiene derecho de retención sobre las mercaderías porteadas, en tanto no le sea satisfecho el valor de los fletes ó se deposite judicialmente la diferencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 17, Ser. 4^a.

Flete—Véase: *Contrato de transporte*, núm. 1.

Fondos—Véase: *Delito*, núms. 4 y 5—*Embargo*, número 4—*Defraudación*, núms. 11 y 23—*Nulidad de un contrato*, núm. 1—*Cheque*, núm. 2—*Demanda ordinaria*, núm. 1—*Plenario*, núm. 1.

Fondos defraudados—Véase: *Defraudación*, núm. 12.

1^a. **Fondos depositados**—En tanto no conste la existencia de embargo, deben entregarse los fondos depositados.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 85, Ser. 3^a.

Forma determinada—Véase: *Nulidad de un dictamen*, núm. 1.

Forma del pago—Véase: *Obligación sin plazo*, núm. 1.

Formalidad—Véase: *Accionista* núm., 1.

Formalidades—Véase: *Comprador de mercaderías*, número 2—*Excepción de falta de personería*, núm. 17—*Diligencias esenciales*, núm. 1.

1. **Fractura**—Su existencia como base de la distinta calificación del delito, solo puede declararse si existe prueba plena; la simple afirmación del damnificado, ni aun la aseveración del comisario de policía, bastan para

2—Véase: verb. *Contrato de transporte*, núm. 2.

3—Véase: verb. *Cargador*, núm. 1.

1^a—Véase: *Embargo de fondos*, núm. 1.



darla por comprobada.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 305, Ser. 4^a.

Fractura—Véase: *Tentativa de robo*, núm. 3—*Robo*, núm. 7.

1^a. **Frases inconvenientes**—Proceden el apercibimiento y la multa disciplinaria, si el escrito contiene frases inconvenientes.—Jur. Com., tom. 8, pág. 329, Ser. 4^a.

1^b. **Fraude**—Para que la nulidad de los actos simulados ó fraudulentos practicados por el marido en perjuicio ó fraude de los derechos de la esposa ó de sus herederos, pueda ser declarada, se requiere prueba plena, la que corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 135, Ser. 3^a.

2. **Fraude**—La acción de nulidad de los actos jurídicos, fundada en la simulación ó fraude, se prescribe en el término de dos años contados desde la fecha en que se justifica que el actor conoció su existencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 135, Ser. 3^a.

Fraude—Véase: *Dación en pago*, núm. 1—*Acto simulado*, núm. 1.

1^c. **Frutos civiles**—Los frutos civiles de la cosa comprada—arrendamientos—solo corresponden el comprador desde la fecha en que se hizo la tradición; el vendedor tiene derecho al cobro de los vencidos, aun cuando el comprador reuna el carácter de arrendatario.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 62, Ser. 3^a.

1^d. **Fuero federal**—Solo puede ser invocado por el extranjero.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 426, Ser. 3^a.

1^a—Véase: verb. *Apercibimiento*, núm. 1.

1^b—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.

2—Véase: *Acto jurídico*, núm. 1.

1^c—Véase: *Arrendamiento*, núm. 2.

1^d—Véase: verb. *Estranjero*, núm. 3.



Fuero federal—Véase: *Excepción de incompetencia*, números. 1 y 7.

1. **Fuero ordinario**—Los juicios iniciados por un vecino de otra provincia contra uno de la Capital, corresponden al fuero ordenario, si no existe declinatoria expresa.—Jur. Com., tom. 5, pág. 339, Ser. 4^a.

1^a. **Fuerza ejecutiva**—El juez puede de oficio revocar la providencia en que reconocía fuerza ejecutiva á una obligación que no revista ese carácter.—Jur. Com., tom. 7, pág. 353, Ser. 4^a.

Fuerza ejecutiva—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 4 —*Obligación de pagar*, núm. 1.

1. **Fuerza irresistible**—No puede alegarse fuerza irresistible para aceptar la obligación que se clasifica como dolosa, si se justifica que libre y deliberadamente se aprobó sin intervención del acreedor.—Jur. Civ., tom. 11, página 254, Ser. 3^a.

Fuerza legal—Véase: *Carta de porte*, núm. 1.

1^b. **Fuerza mayor**—Los vicios ó defectos del material ó tren rodante no es un hecho imposible de prever, y en consecuencia no puede alegarse como caso fortuito ó de fuerza mayor.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 148, Ser. 3^a.

1. **Fuga**—De un comerciante, denunciada ésta ó la ocultación de un comerciante, procede dictar medidas conservatorias de los bienes.—Jur. Com., tom. 3, pág. 252, Ser. 4^a.

2. **Fuga**—Justificada la del comerciante y el abandono de su casa, procede la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 5, pág. 139, Ser. 4^a.

1^a—Véase: verb. *De oficio*, núm. 4.

1^b—Véase: *Caso fortuito*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Abandono de una casa*.



3. **Fuga**—El derecho de aprehensión que la ley concede al particular en los casos de infraganti delito, no puede estenderse á las vías de hecho para impedir la fuga.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 151, Ser. 4^a.

1^a. **Funcionamiento**—No procede el embargo total de las entradas de un establecimiento, si ese hecho puede hacer imposible su funcionamiento regular.—Jur. Civ., tomo 10, pág. 99, Ser. 3^a.

Funcionarios incompetentes—Véase: *Testigo*, núm. 13.

Funcionario público—Véase: *Calumnia*, núm. 5—*Falsedad de un testimonio*, núm. 1—*Escarcelación bajo fianza*, núm. 9.

Funcionarios públicos—Véase: *Competencia entre jueces*, núm. 1—*Estampillas*, núm. 1.

1^b. **Funciones públicas**—Aun cuando se desempeñen funciones públicas que pudieran justificar un domicilio accidental, se tendrá por permanente si á él se había trasladado el asiento de la familia con anterioridad.—Jur. Com., tom. 8, pág. 63, Ser. 4^a.

3—Véase: verb. *Aprehensión*, núm. 1.

1^a—Véase: verb. *Embargo de entradas*, núm. 1.

1^b—Véase: *Domicilio accidental*, núm. 2.



1^a. **Gananciales**—El impuesto de sello debe recaer sobre los bienes transmitidos por herencia; los que corresponden al cónyuge supérstite por su parte de ganancias, no pueden ser gravados por el impuesto. —Jur. Civ., tom. 8, pág. 119, Ser. 3^a.

Ganúa—Véase: *Robo de menor valor*, núm. 5.

1^b. **Garantía**—No puede considerarse aval el documento de garantía de fecha anterior a la letra, y en consecuencia no puede fundar un juicio ejecutivo.—Jur. Com., tomo 2, pág. 169, Ser. 4^a.

2. **Garantía**—De la obligación principal, aun en forma de carta, está sujeta al impuesto de papel sellado.—Jur. Com., tom. 5, pág. 130, Ser. 4^a.

3. **Garantía**—El dador de una carta de crédito con depósito en garantía, debe aplicarlo a su cancelación en la fecha en que el portador haya hecho uso de ella.—Jur. Com., tom. 9, pág. 415, Ser. 4^a.

4. **Garantía**—Las sumas recibidas por el tenedor en la

1^a—Véase: verb. *Bienes hereditarios*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Aval*, núm. 1.

2—Véase: verb. *Carta garantía*, núm. 1.

4—Véase: verb. *Carta de crédito*, núm. 1.



fecha del vencimiento de un pagaré no protestado, deben imputarse á cuenta y no como garantía.—Jur. Com., tom. 9, pág. 49, Ser. 4^a.

5. **Garantía**—El mandatario está obligado á entregar al mandante la suma recibida en su nombre, sin perjuicio de la garantía que para exonerarse de responsabilidades personales pueda exigirle.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 90, Ser. 3^a.

6. **Garantía**—El reconocimiento de que la garantía era hasta una suma determinada, no importa una escepción cuya prueba corresponda al demandado.—Jur. Com., tom. 6, pág. 45, Ser. 4^a.

Garantía—Véase: *Prenda*, núm. 2—*Crédito bancario*, núm. 1.

Gastos—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1—*Depositorio judicial*, núms. 3, 4, 5 y 7—*Depósito judicial*, número 1—*Honorarios*, núm. 6—*Prescripción de comisión*, núm. 1—*Remate judicial*, núm. 3—*Embargo*, núm. 12—*Escepción de inhabilidad de título*, núm. 6—*Defraudación*, núm. 24—*Consignación en pago*, núms. 3 y 4.

1^a. **Gastos del acreedor**—Surtiendo la consignación los efectos del pago desde su aceptación, los gastos y honorarios son de cuenta del ejecutante.—Jur. Com., tomo 8, pág. 163, Ser. 4^a.

Gastos causidicos—Véase: *Honorarios*, núm. 9.

1^b. **Gastos de la ejecución**—Seguido por un acreedor de privilegio especial, deben ser abonados por él, en tanto su crédito no sea verificado.—Jur. Com., tom. 2, página 210, Ser. 4^a.

5—Arts. 1909, 1913 y 1951 del Cód. Civ.

6—Véase: verb. *Escepción*, núm. 6.

1^a—Véase: *Consignación en pago*, núm. 3.

1^b—Véase: *Acreedor privilegiado*, núm. 2.



2. **Gastos de la ejecución**—Los de la ejecución son a cargo del deudor si no paga antes del requerimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 170, Ser. 4^a.

3. **Gastos de la ejecución**—El desistimiento del comprador en remate judicial solo es permitido con la responsabilidad sobre diferencia de precio y gastos; la pérdida de la seña no procede.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 97, Serie 3^a.

1^a. **Gastos del embargo**—Los del embargo preventivo, son á cargo del acreedor, si el deudor paga el día del vencimiento.—Jur. Com., tom. 8, pág. 300, Ser. 4^a.

1^b. **Gastos del mandato**—El comitente está obligado á pagar al comisionista los gastos que origina el cumplimiento del mandato.—Jur. Com., tom. 10, pág. 390, Ser. 4^a.

1^c. **Gastos de tasación**—Los gastos de tasación y venta del bien hipotecado, aun practicados en ejecución seguida por un tercero, son de cargo del acreedor hipotecario.—Jur. Com., tom. 1, pág. 55, Ser. 4^a.

1^d. **Gente de mal vivir**—Las declaraciones de los rufianes ó alcahuetes forman prueba cuando son testigos necesarios por haberse cometido el delito entre gente de mal vivir.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 353, Ser. 4^a.

1^e. **Gerencia**—Justificado que un agente de la compañía aseguradora recibió aviso del siniestro, la ley considera llenado este requisito del contrato como si fuera hecha la gerencia.—Jur. Com., tom. 10, pág. 5, Ser. 4^a.

2—Véase: *Consignación en pago*, núm. 3.

3—Véase: *Desistimiento de la compra*, núm. 5.

1^a—Véase: *Embargo preventivo*, núm. 19.

1^b—Véase: verb. *Comisionista*, núm. 5.

1^c—Véase: verb. *Acreedor hipotecario*, núm. 1.

1^d—Véase: verb. *Alcahuetes*, núm. 1.

1^e—Véase: *Agente de seguros*, núm. 1.



1. **Gerente**—Reconocida la personería del gerente de una sociedad anónima, no procede la absolución de posiciones del gerente establecido en el extranjero, aun cuando sea el principal.—Jur. Com., tom. 5, pág. 349, Ser. 4^a.

2. **Gerente**—A la mayoría de los socios y de los capitales corresponde el nombramiento de gerente durante la liquidación.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 217, Ser. 3^a.

Gestiones—Véase: *Apoderado*, núm. 3.

Giro—Véase: *Orden de pago*, núm. 1.

Giro de dinero—Véase: *Cheque*, núm. 1.

1^a. **Grado inferior**—El acreedor cuyo derecho preferente se ha reconocido en el estado de graduación de créditos puede dirigir su acción contra cualquiera de los acreedores de grado inferior que haya afianzado, sin necesidad de hacerlo contra el de último término.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 23, Ser. 3^a.

Graduación—Véase: *Fianza*, núm. 5.

1. **Graduación de créditos**—El síndico no puede al presentarla modificar el carácter con que hayan sido verificados.—Jur. Com., tom. 2, pág. 190, Ser. 4^a.

2^a. **Graduación de créditos**—El acreedor no verificado, carece de acción para oponerse al estado de graduación de créditos.—Jur. Com., tom. 5, pág. 379, Ser. 4^a.

3. **Graduación de crédito**—No puede ser pagado ni aun con garantía, el acreedor de privilegio especial, en tanto no esté consentido el estado de graduación de créditos.—Jur. Com., tom. 7, pág. 86, Ser. 4^a.

1^a —Véase: verb. *Acreedor privilegiado*, núm. 1.

2^a —Arts. 1458, 1460 y 1461 del Cód. de Com.

3 —Véase: verb. *Estado de graduación*, núm. 1.

1. **Guía**—Las condiciones impresas en la guía ó carta de porte que la empresa imponga á los cargadores, carecen de fuerza legal en cuanto se opongan á las disposiciones del Código de Comercio.—Jur. Com., tom. 1, pág. 333, Ser. 4^a.

1—Véase: verb. *Carta de porte*, núm. 1.





Hecho—Véase: *Agresión*, núm. 1—*Documentos acompañados*, núm. 1—*Estafa*, núm. 6—*Condiciones*, núm. 3.

Hechos—Véase: *Acusación*, núm. 4—*Declaración de testigos*, núms. 1 y 9—*Prueba plena*, núm. 1—*Calumnia*, núm. 9—*Escepción*, núm. 5—*Libros de comercio*, núm. 9—*Confesión ficta*, núm. 2—*Prueba*, núm. 19—*Cosa juzgada*, núm. 6—*Escepción de caducidad*, núm. 7—*Contrato de sociedad*, núm. 8—*Escepción de litispendencia*, número 12.

Hechos ciertos—Véase: *Posiciones*, núm. 5.

Hechos confesados—Véase: *Posiciones*, núm. 5.

Hechos controvertidos—Véase: *Prueba*, núm. 1.

¹. **Hechos denunciados**—Por el querellante, que no sirvan de fundamento al auto de prisión preventiva, no pueden ser materia de decisión en la sentencia de plenario, si el acusador consintió el auto.—Jur Crim., tomo 10, pág. 278, Ser. 4^a.

¹^b. **Heredero**—Carece de personería para intervenir en la testamentaria, el curador especial de un heredero au-

¹^a—Véase: verb. *Acusador*, núm. 3.

¹^b—Véase: verb. *Ausente*, núm. 1.



sente nombrado por un tribunal extranjero.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 127, Ser. 3ª.

2. **Heredero**—Procede la declaratoria de herederos sin publicación de edictos, si han justificado su carácter y no pretenden ser únicos.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 102, Ser. 3ª.

3. **Heredero**—La nulidad de la declaratoria de herederos, debe deducirse ante el juez en turno, si la testamentaria se encuentra terminada y archivada.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 377, Ser. 3ª.

4. **Heredero**—Es obligatoria la devolución á la masa común, de las sumas recibidas indebidamente por un heredero.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 112, Ser. 3ª.

5. **Heredero**—Para que la nulidad de los actos simulados ó fraudulentos practicados por el marido en perjuicio ó fraude de los derechos de su esposa ó de sus herederos, pueda ser declarada, se requiere prueba plena la que corresponde al que deduce la acción.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 135, Ser. 3ª.

6. **Heredero**—La acción para el cobro de deudas del causante, debe dirigirse contra los herederos individualmente si se deduce después de practicada la división y partición de herencia.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 437, Serie 3ª.

7. **Heredero**—Si la acción ha sido deducida á nombre personal por un heredero, sus coherederos no son parte en el juicio.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 65, Ser. 3ª.

2—Véase: verb. *Declaratoria de herederos*, núm. 1.

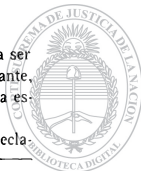
3—Porque se trata de un juicio completamente nuevo.

4—Arts. 784 y 786 del Cód. Civ.

5—Véase: *Acto simulado*, núm. 1.

6—Véase: *Deudas del causante*, núm. 1.

7—Véase: *Acción personal*, núm. 1.



8. **Heredero**—El hermano carece de derecho para ser declarado heredero existiendo la esposa del causante, en tanto no se justifique y declare judicialmente la exclusión.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 175, Ser. 3ª.

9. **Heredero**—Los tribunales no pueden negar la declara-

8—Arts. 3412 y 3414 del Cód. Civ.

9—Si por el hecho de que el causante tenía madre natural, y de que ésta se encontraba viva cuando falleció, no es obstáculo para declarar vacante la herencia y que entre el Fisco en posesión de ella por inacción de la heredera ¿porqué lo sería, para que la tome, un medio hermano natural, por ejemplo, admitiéndosele como heredero? Este se encuentra incontestablemente en grado sucesible, y su derecho por consiguiente, es preferente al del Fisco. Luego, demostrada como debe demostrarse de un modo satisfactorio, la existencia de un hermano natural, la herencia de ninguna suerte puede considerarse vacante. Si el finado tenía madre viva, este hecho podría influir seguramente en el orden de la sucesión transmitiendo aquélla á sus herederos, entre los cuales se contaría el mismo hermano, sus derechos de opción—art. 3316—como también en la manera de dividirse la herencia los interesados, caso de aceptarla, pero jamás podría producir por resultado, el que en justicia se declarase vacante constando que existía un hermano uterino del finado. Las cuestiones que de aquel hecho podrían nacer, solo afectarían á los parientes inmediatos y únicamente versarían entre ellos, sin interesar ya al Fisco; porque éste jamás vendría á concurrir con aquéllos en la herencia *ab intestato*, y mucho menos podía pretender preferencia desde que solo hereda en su defecto—art. 3588.—Hay más, según el sistema del Cód., el derecho hereditario corresponde al mismo tiempo á todos los parientes que se encuentren en grado sucesible, aun cuando sea preferente el de los más inmediatos, pero sin que ninguno de ellos pueda ser excluido de la herencia por la consideración de que exista otro más próximo, mientras éste no reclame y haga valer sus derechos—art. 3424.—La madre natural, tampoco hereda al hijo *ipso jure*, sino que necesita gestionar judicialmente su reconocimiento y la declaración de sus derechos—art. 3412—que ella puede, si quiere, renunciar ó abandonar tácita ó espresamente pero sin que su inactividad ó la de sus sucesores pueda ser obstáculo al ejercicio de sus derechos á otros parientes de diversa línea ó más distante, aunque todavía en grado sucesible. Si la madre del causante falleció sin reclamar, ni hacer valer los suyos á la herencia intestada de su hijo na-



toria de herederos fundados en que los de grado más próximo no han obtenido tal declaratoria por inacción.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 167, Ser. 3ª.

10. **Heredero**.—Los herederos que no han sido puestos en posesión judicial de la herencia, carecen de acción para demandar á los terceros deudores de la sucesión.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 175, Ser. 3ª.

Herederos.—Véase: *Querella*, núm. 3.—*Seguros*, núm. 8.—*Reivindicación*, núm. 8.

1ª. **Herederos forzosos**.—Que tienen posesión desde la muerte del causante, pueden reivindicar directamente sin que les sea obligatorio pedir previamente la nulidad de la venta.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 96, Ser. 3ª.

2ª. **Heredero forzoso**.—Al cónyuge supérstite que pretende la herencia, corresponde la prueba de la inexistencia de herederos forzosos.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 395, Serie 3ª.

1ª. **Herencia**.—Procede la inhibición si se deduce petición de herencia y está justificado el carácter hereditario.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 109, Ser. 3ª.

2ª. **Herencia**.—El impuesto de sello, debe recaer sobre los bienes transmitidos por herencia; los que corresponden

tural, cuya posesión por tanto, jamás obtuvo; y si nadie se presentó tampoco en representación suya á deducirlos después, dando lugar con esto á que la herencia se tenga por vacante, tales derechos no son un obstáculo legal para que un pariente con derecho á heredar, cual lo es sin duda el hermano, en competencia solo con el Fisco, se pretenda heredero, y deba ser reconocido por tal, pues que lo es en realidad.—arts. 3424, 3587 y 3588.

10.—Art. 3414 del Cód. Civ.

1ª.—Véase la nota del verb. *Comprador*, núm. 4.

2ª.—Véase: verb. *Cónyuge supérstite*, núm. 2.

1ª.—Véase la nota del verb. *Embargo preventivo*, núm. 29.

2ª.—Véase: *Bienes hereditarios*, núm. 1.



al cónyuge superstite por su parte de gananciales, no pueden ser gravados por el impuesto.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 119, Ser. 3^a.

3. **Herencia**—La jurisdicción del juez de la testamentaria, cesa después de hecha y aprobada la partición de la herencia.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 58, Ser. 3^a.

4. **Herencia**—La petición de herencia hace procedente el embargo preventivo, pero solo de la parte que pueda corresponder al peticionante.—Jur. Civ., tom. 10, página 93, Ser. 3^a.

Herencia—Véase: *Hijos*, núm. 1—*Deudas del causante*, núm. 1—*Acción reivindicatoria*, núm. 3—*Bienes de la esposa*, núm. 1—*Herederó*, núm. 10.

1^a. **Herencia vacante**—No puede declararse vacante la herencia si existen hermanos naturales uterinos que gestionen la declaratoria á su favor.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 167, Ser. 3^a.

1^b. **Herencias transversales**—El impuesto á favor de la

3—Art. 634 del Cód. de Proc., y 3284 del Cód. Civ.

4—Véase: verb. *Embargo preventivo*, núm. 14.

1^a—Véase la nota del verb. *Herederó*, núm. 9.

1^b—El punto sobre que debía recaer la resolución del tribunal ha sido materia de largos y luminosos debates á que otros asuntos análogos han dado lugar. Fué primeramente dilucidado ante una de las Cáms. de Apelación, en la anterior organización judicial, y llevado más tarde á la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviendo en definitiva este alto Tribunal, que la ley de la provincia de Buenos Aires de 26 de Setiembre de 1875, de cuya aplicación se trataba, es repugnante á la Constitución Nacional. Más tarde, la misma cuestión se trajo al conocimiento de la Cám. de lo Civ. y después de oído el Fiscal, se resolvió que la citada ley que fija un impuesto sobre herencias transversales, repugna á la Constitución Nacional, y por consiguiente es inaplicable después de tal declaración hecha por la Corte Suprema de Justicia Nacional. Los antecedentes de esas dos resoluciones se registran respectivamente en el tom. 14, Ser. 2^a, pág. 647 de



Educación Común sobre los legados y herencias trans-

los Fallos de la Suprema Corte, 9º, Ser. 1ª, pág 76 de los de la Cám. de lo Civ. Se trataba en este caso, de la inconstitucionalidad de la ley de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 26 de Setiembre de 1875, por la que se estableció un impuesto á las herencias transversales destinado al fomento de la educación común, y para resolverla es necesario esponer algunos antecedentes á que se refería la demanda, así como los argumentos que han servido de base para su resolución. La demanda fundaba su derecho en un fallo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia Nacional, en 1882, en la causa seguida por doña Tomasa Vélez Sarsfield, y pedía se declare inconstitucional la referida ley, mandando en consecuencia se le devolviese el depósito que había hecho por el impuesto que le correspondía pagar. Antes de pronunciarse aquel fallo por la Suprema Corte, los tribunales de la Provincia habían resuelto la cuestión rechazando la acción deducida por la misma interesada. En su discusión, la mayoría de los miembros que componían entonces la Cám. de Apelaciones en lo Civil, espuso entre otras consideraciones: que no se altera el derecho de testar, porque la transmisión de la propiedad dispuesta por el testador esté sujeta á un impuesto, siempre que éste por su exceso no haga ilusoria la voluntad de aquél, como no lo hacía en el caso del sumario en que el impuesto era solo de un diez por ciento, que no era incompatible con el más amplio derecho de testar, y que el mismo impuesto introducido en Roma por la ley Julia, donde era conocido con el nombre *Vicesima Hereditarium*, coexistió con el mismo derecho de testar, de que entre los romanos se encuentran vestigios aun en los orígenes de su historia; Que en España ha coexistido también y se encuentra consignado en las leyes del tit. 5º, lib. 3º del Fuero Juzgo; Que ha coexistido y coexiste también en Francia, en Inglaterra, en Bélgica, en Prusia, como ha coexistido entre nosotros bajo el nombre de impuesto fiscal sobre las herencias transversales, y entre estrafios con el derecho de testar, consignado en las leyes españolas y patrias que nos han regido en materia civil hasta 1871; Que la dirección general de escuelas, no es un heredero, que ella solo tiene una acción personal contra éste y los legatarios en proporción de lo que deben recibir, acción que no es la de petición ni la de división de la herencia, sino una *conditio est leges*, y que si aquella dirección es parte legítima en el arreglo y liquidación de toda testamentería en que aparezca interesado el fondo de escuelas, era tan solo para facilitar el ejercicio de su acción personal que podría de otra manera ser burlado ó fácilmente limitado. Entretanto, en otro orden de



versales, no importa una restricción al derecho de tes-

ideas se dijo, que la ley mencionada no se encontraba en oposición con la facultad de testar, ni tampoco importaba una violación ó negación del derecho de usar y disponer de la propiedad garantida por la Constitución Nacional en sus arts. 14 y 17, por cuanto las leyes que establecen impuestos, cuando no dejeneran en espoliación, jamás violan aquel derecho, teniendo ellas por objeto garantizar su existencia, como los demás derechos ya naturales ó creados por la ley civil. Si aquella ley, se dijo también, importara una negación del derecho de usar de la propiedad, en el mismo caso se hallarían todas las leyes de impuestos, porque todas exigen del contribuyente una parte de su propiedad; Que los impuestos no tienen su fundamento en la facultad de los poderes públicos para reglamentar el ejercicio de los derechos garantidos por la Constitución, sino en su propia causa, que es la causa del gobierno, del poder, la necesidad de que cada uno contribuya á sostener este poder para asegurarse el goce pacífico de sus bienes y el respeto de su persona; Que si en Inglaterra, como lo dice Blackstone, no puede decirse vulnerado el derecho de propiedad por los impuestos creados por el Parlamento, cualquiera que ellos fuesen, menos podría decirse entre nosotros garantido como está también desde que el Congreso ó la Legislatura de la Provincia hayan establecido impuestos sobre ellos, porque tanto el pueblo de la Nación como el de la Provincia, han delegado en los respectivos cuerpos legislativos la facultad de establecerlos y que ningún impuesto creado por la última, teniendo por base la igualdad consagrada por el art. 16 de la Const. Nacional, y que no degenera en confiscación ó espoliación, ni sea de aduanas, de tránsito, de puertos, ó de exportación, puede ser opuesto á dicha Const.; y que ésta finalmente, al establecer la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas, no ha entendido sentar un precepto económico, sino un principio político y social cual es la igualdad de todos ante la ley, cuyo fin es el de que todos contribuyan también en proporción de sus medios al sostenimiento de las cargas generales, lo que no aparece desconocido en manera alguna por la ley citada y la que recae tan solo sobre un bien que el heredero no había comprendido entre sus recursos ordinarios, no siendo por lo mismo injusto y perjudicial sino por un exceso. Estas consideraciones entre otras aducidas por el Dr. Basavilbaso, miembros de aquella Cám. entonces, fundaron en mayoría de votos la resolución citada, y por la que se declaró que la ley en cuestión no era contraria á la Const. Nacional ni al Cód. Civ. vigente. Llevada la cuestión al conocimiento de la Suprema Corte por el re-

tar, y en consecuencia no repugna á la Constitución Nacional.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 186, Ser. 3ª.

curso que se interpuso por parte de la señora Vélez Sarsfield, aquel alto Tribunal declaró en mayoría que la ley citada es repugnante á la Const. Nac. en cuanto altera y modifica las disposiciones del Cód. Civ. sobre sucesión testamentaria, revocando en consecuencia la sentencia pronunciada por los tribunales de Provincia. La Suprema Corte no ha entrado al examen de la cuestión del poder que conservan las provincias para establecer impuestos, por considerarla fuera de oportunidad, dice en el último considerando de su sentencia; y estudiando la cuestión tan solo con relación á los principios consagrados por el Cód. Civ., cuyas prescripciones no puede alterar ninguna ley de Provincia, declara que el impuesto destinado al fomento de las escuelas comunes crea verdadero derecho sucesorio, una legítima forzosa que el Cód. Civ. no ha establecido, y que por lo tanto se modifican y amplían sus disposiciones; agrega que esta modificación resulta mas evidente tratándose de una sucesión testamentaria deferida únicamente por la voluntad de la testadora, por cuanto esta voluntad viene á ser de hecho coartada al señalarse á una décima parte de la herencia, otro destino del que tuvo en vista la autora de la sucesión, imponiendo además á los interesados mayores en todos los casos el gravamen de la participación judicial, cuando según el Cód. pueden á simple mayoría de personas, hacerlo estrajudicialmente. Se dijo por la Cám. que en el caso del sumario no puede decirse que el fallo pronunciado por la S. C. N. en la causa mencionada, sea bastante para fundar jurisprudencia, pues él no puede tener más alcance que para el caso resuelto y contra él puede invocarse la sanción del mismo Cong. de la Nación, que posteriormente por la ley de 8 de Julio de 1884, ha establecido el mismo impuesto en su art. 44, para el fomento de la educación común en esta Capital. Verdad es que existe otro antecedente, emanado de la misma Cám. de lo Civ., en el que se declaró también por mayoría de votos, que el impuesto en cuestión era repugnante á la Const. de la Nación y por consiguiente, inaplicable después de la declaración hecha por la Suprema Corte en la causa de la señora Vélez Sarsfield. Véase: pág. 66, tom. 9º, Ser. 1ª. Pero es de tenerse presente, que este fallo y el de la Suprema Corte, son los dos únicos que se han pronunciado en esta cuestión, que en ninguno de ellos ha habido unanimidad, y que mientras en el primero el Fiscal sostenía la inconstitucionalidad de la ley, en el segundo el Procurador General de la Nación sostenía lo con-





1. Herida—Si la herida por su gravedad pudo causar

trario, aduciendo sólidas argumentaciones. No es, pues, el caso de poder afirmar que existe una jurisprudencia establecida al respecto, aunque la cuestión ha sido ámpliamente debatida en los fallos recordados. Los que han sostenido la inconstitucionalidad de la ley, reconocen que el impuesto establecido por ella, lejos de pugnar, armoniza con las leyes de la Nación, y que así resulta por el hecho de haber sido espresamente reconocida por el Gobierno de la Nación en los arreglos celebrados con el de la Provincia de Buenos Aires al federalizar este municipio, y por el más elocuente aun, de que ese mismo impuesto y en la misma forma ha sido adoptado por el Congreso de la Nación como se dijo antes, en la Ley de Educación Común en esta Capital. No es de oportunidad ni necesario entrar al examen de la cuestión de si el Cong. ha podido ó no sancionar esa ley, es decir, si pueden aducirse contra ella las mismas observaciones que se han aducido contra las leyes de la Provincia. Basta saber que el Congreso tiene por la Constitución la facultad de alterar, modificar ó corregir las prescripciones del Cód. Civ. cuya sanción le fué espresamente acordada; como tiene igualmente la facultad de establecer impuestos, y ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Cap. de la Nación. No es de oportunidad, ni es necesario, porque no está en este caso en discusión la inconstitucionalidad de esa ley ni su perfecta vigencia en este municipio; por más que respecto de ella pudieran hacerse las mismas argumentaciones, por los que sostienen que el impuesto establecido sobre las herencias transversales ataca la libertad de testar consagrada por el Cód. Civ. El señor Fiscal de la Cám. estudiando la cuestión, decía en el juicio testamentario de doña Juana Canedo de Wilson, que la cláusula contenida en la ley de cesión, de que mientras el Honorable Congreso no determinase al respecto, continuarían vigentes en la Capital los impuestos establecidos, con escepción de los que se espresaban, no importó ciertamente otra cosa que una garantía estipulada en favor del municipio, de que éste no sería gravado con impuestos nuevos y arbitrarios; de ninguna suerte el que tampoco pudiera suprimirse ninguno de los existentes y que viceversa, al aceptar la Nación por acuerdo del Ejecutivo la indicada condición y al dejar subsistente esos impuestos no los aprobaba, sin embargo, prestándole su autoridad y convirtiéndolos en nacionales, caso que solo el Congreso pudiera hacer, aunque agrega, en el concepto de que fuesen arreglados á la Constitución. Estas conclusiones importan, pues, reconocer la constitucionalidad de esa ley, su reconocimiento y aprobación por la



la muerte, el autor debe ser penado como reo de homicidio, sin que puedan admitírsele escepciones injustificadas

sanción de una ley nacional como ocurre actualmente en presencia de la ley de 8 de Julio de 1884, vigente en esta Capital. Aparte de estas consideraciones, es hoy un principio elemental y reconocido, que el poder de imponer es concurrente á la Nación y á las provincias, con escepción de lo que espresamente está reservado á la primera, desde que como lo dice Tiffany, en su obra de Derecho Constitucional, ningún gobierno puede sostenerse sin los medios de crear una renta conveniente, y ésta es una de las altas prerrogativas de la soberanía. Por consiguiente, y no habiendo en la Constitución Nacional, ni en la ley civil, disposición alguna que espresamente prohíba el someter á impuesto la transmisión de la propiedad por sucesión, no puede decirse que la ley que lo ha establecido en la forma en que aparece en el presente caso es repugnante á la misma Constitución como se alega. Una decisión constitucional de los Tribunales Federales de los Estados Unidos, contenida en la obra de Bump, traducida por el Sr. Calvo, establece que un Estado tiene autoridad para imponer la propiedad real y personal de todas las corporaciones, incluyendo las compañías de transportes, precisamente como puede imponer una propiedad semejante cuando pertenezca á naturales, y en la misma estensión. Tal impuesto puede crearse sobre una avaluación, ó puede ser una sisa, y al exigir una sisa de las corporaciones, un Estado no está obligado á imponer una suma fija por las franquicias ó el valor de ellas; pero puede exigir una contribución graduada, ya sea proporcionada al valor de los privilegios concedidos, ó á la estensión de su ejercicio. Ningún modo de efectuar esto, y ninguna forma de espresión, que no tenga un sentido y un alcance mayor, puede considerarse como violando la Constitución—tom. 1°, pág. 98, núm. 297.—Otra decisión establece igualmente que el poder de contribución de un Estado, es uno de los atributos de su soberanía. Que cuando no ha habido tratado con el Gobierno Federal, ó cesión de jurisdicción para los objetos especificados en la Constitución, este poder alcanza á todas las propiedades y negocios dentro del Estado, que no son propiamente denominados los medios del gobierno general. Este poder puede ser ejercido á discreción del Estado—tom. 2°, pág. 245, núm. 2422.—Estos antecedentes de una autoridad irrefutable, concurren á demostrar la perfecta validez y constitucionalidad de la ley de que se trata, desde que por ella no aparece violada ninguna prerrogativa, ningún privilegio de los que corresponden al gobierno general.



sobre si el fallecimiento puede imputarse á otras causas.

—Jur. Crim., tom. 1, pág. 424, Ser. 4^a.

2. **Herida**—Corresponde al Juez del Crimen conocer en la acusación, si existe duda sobre la gravedad de los heridas.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 285, Ser. 4^a.

3. **Herida**—Para que una lesión ó herida se repunte mortal, basta que la lesión sea la causa eficiente de la muerte.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 73, Ser. 4^a.

4. **Herida**—Siempre que por los antecedentes del hecho y la situación de las heridas quede justificada la intención de matar, existe y debe calificarse al reo como autor de tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 186, Ser. 4^a.

5. **Herida**—Si la muerte sobreviene por una causa inmediata, no imputable al autor de las heridas, éste solo puede ser castigado como autor de tentativa de homicidio, aun cuando se encuentre plenamente justificado que las heridas eran necesariamente mortales.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 186, Ser. 4^a.

1^a. **Hernando**—Corresponde el máximo de la pena si las lesiones, sin intención homicida, han sido inferidas á un hermano.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 316, Ser. 4^a.

Hernando—Véase: *Heredero*, núm. 8.

Hermanos—Véase: *Pupilo*, núm. 1.

1^b. **Hermanos naturales**—No puede declararse vacante la herencia, si existen hermanos naturales uterinos que gestionan la declaratoria á su favor.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 167, Ser. 3^a.

2—Véase: verb. *Acusación*, núm. 6.

3—Véase: *Causa eficiente*, núm. 1.

1^a—Arts. 84, inc. 1^o; y 120, inc. 2^o del Cód. Pen.

1^b—Véase la nota del verb. *Heredero*, núm. 9.



1ª. Hijo—El reconocimiento que los padres naturales deben hacer para heredar á sus hijos, no debe revestir una forma determinada, basta la forma tácita que resulta de la posesión de estado.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 70, Ser. 3ª.

Hijos — Véase: *Información supletaria*, núm. 2—*Comprador*, núm. 4.

1ª. Hijo menor—La responsabilidad que la ley impone á los padres por los daños causados por sus hijos menores, solo puede hacerse efectiva cuando habiten con ellos y estén bajo su poder.—Jur. Com., tom. 7, pág. 351, Serie 4ª.

2. Hijo menor—La madre tiene personería para inter-

1ª—Los arts. 3584 y 3597 del Cód. Civ., ni en su letra ni en su espíritu, exigen otra cosa que el reconocimiento que han de hacer los padres en vida de sus hijos naturales para poder heredarlos. El derecho hereditario es recíproco y descansa en un perfecto pié de igualdad. «Pues que el hijo natural heredará á su padre, dice nuestro codificador en su nota al art. 3584, no hay razón para privar á éste de la sucesión de su hijo.» Si la ley solo exige el reconocimiento de los padres naturales para que proceda su derecho hereditario, sin determinar espresamente la forma de ese reconocimiento, si es de doctrina y de jurisprudencia que el reconocimiento que determina la posesión de estado prima sobre todo otro medio probatorio, llamándosele la prueba en carne y hueso, si en igualdad de caso para la procedencia del derecho sucesorio del hijo natural, es bastante la misma posesión de estado, no obstante que la ley exige también el reconocimiento lo mismo que en los artículos 3584 y y 3597 ya citados—Cód. Civ., art. 3577—no puede negarse en buena lógica que cuando una madre ó un padre ha reconocido públicamente á su hijo natural como tal, prestándole sus cuidados, dándole su nombre, cuando éste ha sido bautizado como tal hijo, cuando todo demuestra la concurrencia del *nomen, tractatus, fama*, constitutivos de la posesión de estado, no haya de darse á los padres naturales la herencia de su hijo en el mismo caso en que á éste se habría dado lo de aquéllos.

1ª—Véase: verb. *Daños y perjuicios*, núm. 111.

2—Véase: verb. *Asesinato*, núm. 1.



venir como parte acusadora en el sumario formado por homicidio del hijo.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 325, Serie 4^a.

3. **Hijo menor**—El padre que no tenga los hijos en su poder, tiene derecho para verlos en los días y á las horas que los tribunales determinen.—Jur. Civ., tom. 11, página 323, Ser. 3^a.

4. **Hijo menor**—Es facultativo de los jueces, la designación del padre que debe tener á los hijos después de declarado el divorcio.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 323, Serie 3^a.

Hijos menores—Véase: *Adulterio*, núm. 11.

Hijos naturales—Véase *Alimentos definitivos*, núm. 1.

1^a. **Hijuela**—Es título suficiente para justificar la propiedad de los bienes adjudicados.—Jur. Com., tom. 2, pág. 279, Ser. 4^a.

1^b. **Hipoteca**—No procede la nulidad de la tasación del bien hipotecado fundada en la falta de intervención del síndico del concurso de uno de los condóminos, si en el juicio no existía noticia de la declaración de quiebra.—Jur. Com., tom. 5, pág. 340, Ser. 4^a.

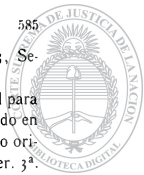
2. **Hipoteca**—La letra de cambio ó pagaré á la orden es obligación comercial, aun cuando se encuentre garan-

4—Véase: verb. *Divorcio*, núm. 6.

1^a—Véase: verb. *Bienes adjudicados*, núm. 1.

1^b—Véase: verb. *Condómino*, núm. 2.

2—El hecho de que una hipoteca haya sido constituida en garantía de un pagaré, no cambia su naturaleza, ni modifica sus efectos, porque la hipoteca es siempre y en todos los casos un accesorio de la obligación principal á la cual garante y cuya naturaleza no puede alterar, como lo expresa el Dr. Vélez Sarsfield en la nota al art. 3112, Cód. Civ. No puede existir el derecho real de hipoteca, sin la preexistencia de un crédito al cual sirva de garantía.



tido con hipoteca.—Jur. Com., tom. 6, pág. 183, Serie 4^a.

3. **Hipoteca**—Es competente el juez de la Capital para la ejecución hipotecaria, si el inmueble está situado en su jurisdicción, aun cuando el contrato haya tenido origen fuera de ella.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 124, Ser. 3^a.

4. **Hipoteca**—Tácita, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene hipoteca tácita sobre los bienes de sus deudores.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 344, Ser. 3^a.

4^b. **Hipoteca**—El préstamo ó mutuo entre comerciantes, aun cuando accesoriamente se encuentre garantido con hipoteca, es un acto de comercio cuya nulidad ó validez deben juzgar los tribunales de lo Comercial.—Jur. Civ., tom. 8, pág. 120, Ser. 4^a.

5. **Hipoteca**—La cancelación de una hipoteca importa la del préstamo que garantía, y en consecuencia la nueva hipoteca importa una novación de la anterior.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 344, Ser. 3^a.

Hipoteca—Véase: *Tasación nula*, núm. 1.

1. **Homicidio**—Para que la circunstancia de haberse cometido de noche, pueda considerarse agravante, debe estar justificado que hubo mayor alarma.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 11, Ser. 4^a.

2. **Homicidio**—Si fué resuelto como medio de practicar el robo, debe castigarse al reo como autor de asesinato y penársele con presidio por tiempo indeterminado, si la pena de muerte fuese inaplicable por existir

3—Véase: *Contrato hipotecario*, núm. 1.

4—Véase: *Banco de la Provincia*, núm. 1.

4^b—Vérse: *Acto comercial*, núm. 1.

5—Véase: verb. *Cancelación*, núm. 4.

1—Art. 84, inc. 13 del Cód. Pen.

2—Véase la nota del verb. *Asesinato*, núm. 1.



una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 94, Ser. 4^a.

3. **Homicidio**—Si la muerte sobreviene por una causa inmediata, no imputable al autor de las heridas, éste solo puede ser castigado como autor de tentativa de homicidio, aun cuando se encuentre plenamente justificado que las heridas eran necesariamente mortales.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 186, Ser. 4^a.

4. **Homicidio**—Corresponde la pena de seis años de y medio de presidio á la tentativa de homicidio con una circunstancia atenuante.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 186, Ser. 4^a.

5. **Homicidio**—Siempre que por los antecedentes del hecho y la situación de las heridas, quede justificada la intención de matar, existe y debe clasificarse al reo como autor de tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, página 186, Ser. 4^a.

6. **Homicidio**—La madre tiene personería para intervenir como parte acusadora en el sumario formado por el homicidio del hijo.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 325, Serie 4^a.

7. **Homicidio**—El disparo intencional de arma de fuego contra una persona, debe ser penado con año y ocho meses, si no está probada la tentativa de homicidio.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 376, Ser. 4^a.

8. **Homicidio**—Para que las lesiones corporales, ca-

6—Véase: verb. *Acusación*, núm. 9.

7—Véase: *Arma de fuego*, núm. 5.

8—Para que las lesiones corporales capaces de producir la muerte puedan ser castigadas como tentativa de homicidio, es indispensable que las constancias de la causa revelen de un modo inequívoco la existencia del *animus occidendi* en aquel que las infirió, porque cuando esto no consta, el hecho cae bajo las reglas generales de los arts. 4 y 6 del



paces de producir la muerte, puedan ser castigadas como tentativa de homicidio, debe ser plenamente probada la voluntad de matar.—Jur. Crim., tom. 9, pág. 396, Serie 4^a.

Homicidio—Véase: *Lesiones*, núms. 2, 4, 8 y 9—*Prova-*
cación del reo, núm. 1—*Delito*, núm. 12—*Tentativa de*
homicidio, núm. 9.

1^a. **Homicidio con alevosía**—La tentativa de homicidio con alevosía, aun cuando no haya herido á la víctima, debe ser penado con doce años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 216, Ser. 4^a.

1. **Homicidio sin circunstancias**—En pelea ó riña, debe ser penado con seis años de presidio.—Jur. Crim., tomo 2, pág. 11, Ser. 4^a.

2. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con ocho años de penitenciaría, si el reo es mayor de sesenta años.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 361, Ser. 4^a.

3. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 349, Ser. 4^a.

Cód. Pen. Este presume el dolo indeterminado ó voluntad criminal en el que ejecuta un hecho prohibido por la ley penal. Aquél especializa el dolo por el resultado de la acción, y con arreglo á ese resultado manda se castigue al autor. La ley presume la intención de conseguir un resultado dado, por la naturaleza de los actos exteriores realizados, y solo cuando tales actos según las nociones de la experiencia general acostumbran á producir *inmediata y necesariamente* un resultado criminal determinado, dispone se tenga por cierto que ese resultado entró en las previsiones del culpable, á no ser que justifique lo contrario por pruebas manifiestas. Las circunstancias en que se perpetre el delito, el arma empleada y el lugar de la herida, pueden autorizar una creencia contraria, pero no bastan para dejar en el ánimo, el convencimiento de que el delincuente procediera con la voluntad determinada de matar, y no tan solo con la de herir.

1^a—Arts. 95, inc. 1^o; y 12, inc. 1^o del Cód. Pen.



4. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con ocho años de presidio que deberá cumplirse en la Penitenciaría, si el reo es menor de edad pero mayor de 18 años.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 28, Ser. 4^a.

5. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 131, Ser. 4^a.

6. **Homicidio sin circunstancias**—El homicidio sin circunstancias, debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim. tom. 6, pág. 163, Ser. 4^a.

7. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con seis años de presidio, si está comprobada la existencia de discusión.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 159, Ser. 4^a.

8. **Homicidio sin circunstancias**—Debe ser penado con seis años de presidio.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 163 y 318, Ser. 4^a.

10. **Homicidio sin circunstancias**—Y que por la carencia de antecedentes se puede suponer la falta de voluntad de causarlo, debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 58, Ser. 4^a.

1. **Homicidio sin circunstancias atenuantes**—Ni agravantes, debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 174, Ser. 4^a.

1^b. **Homicidio sin circunstancias atenuantes**—Ni agraven-

8—Se alegó que la víctima había increpado al delincuente la circunstancia de que estuviera insultando á una anciana y teniendo en cuenta que si bien la intromisión del procesado no es legalmente justificable ni puede servirle de circunstancia atenuante, puede ser invocada por los jueces para usar de su prudente arbitrio en la aplicación del inc. 2º del art. 96, ya que en ese inciso no es aplicable la regla del art. 52, ni otra circunstancia para recorrer la escala, que las que puedan influir en el arbitrio del juez, por ello si es legal la pena impuesta, lo es asimismo la aplicación del minimum.



tes, debe ser penado con ocho años de presidio.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 24, Ser. 4^a.

2. **Homicidio sin circunstancias atenuantes**—Ni agravantes, debe ser penado con seis años de presidio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 283, Ser. 4^a.

1. **Homicidio con circunstancias atenuantes**—El homicidio con dos ó más circunstancias atenuantes, debe ser penado con tres años de penitenciaría. — Jur. Crim., tom. 1, pág. 366, Ser. 4^a.

2. **Homicidio con circunstancias atenuantes** — Debe ser castigado con tres años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 249, Ser. 4^a.

3. **Homicidio con circunstancias atenuantes**— Debe ser penado con tres años y medio de penitenciaría, si el reo es menor de edad.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 73, Serie 4^a.

4. **Homicidio con circunstancias atenuantes** — Debe ser castigado con tres años de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 96, Ser. 4^a.

1. **Homicidio con una circunstancia atenuante**— Corresponde la pena de cuatro años y medio de presidio aun cuando existan otras que se destruyen por las agravantes. —Jur. Crim., tom. 1, pág. 65, Ser. 4^a.

2. **Homicidio con una circunstancia atenuante**—Debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría. —Jur. Crim., tom. 6, pág. 416, Ser. 4^a.

3. **Homicidio con una circunstancia atenuante** — Simple, debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.— Jur. Crim., tom. 2, pág. 78, Ser. 4^a.

1. **Homicidio con dos circunstancias atenuantes**—Debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaría.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 184, Ser. 4^a.



1^a. **Homicidio en defensa propia**—Procede la absolución del homicida, si de su confesión resulta haber obrado en defensa propia y no existe otra prueba.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 365, Ser. 4^a.

1^b. **Homicidio por imprudencia**—Sin voluntad criminal, debe ser penado con seis meses y medio de arresto.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 319, Ser. 4^a.

1^c. **Homicidio por malos tratamientos**—El fallecimiento de un menor por malos tratamientos de la persona que lo ha tenido á su cargo, debe ser penado como homicidio y castigado con cuatro años de presidio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 332, Ser. 4^a.

1^d. **Homicidio en pelea**—O riña, debe ser penado con tres años de presidio, si el reo es menor de diez y ocho años.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 179, Ser. 4^a.

1^e. **Homicidio con premeditación**—Debe ser penado con quince años de presidio.—Jur. Crim., tom. 2, pág. 34, Ser. 4^a.

1^f. **Homicidio con premeditación**—Y con ensañamiento, que por las condiciones de la víctima demuestran la perversidad del reo, debe ser penado con quince años de presidio.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 423, Ser. 4^a.

2. **Homicidio con premeditación**—Y valiéndose de la superioridad del sexo, debe ser castigado con diez años de

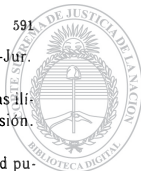
1^a—Art. 434, inc. 3º del Cód. de Proc. Crim.

1^b—Se consideró como cometido el homicidio por culpa grave—arts. 18, inc. 2º; 52 y 96, inc. 2º del Cód. Pen.

1^c—Los actos de crueldad cometidos contra la indefensa víctima del delito, no tienen calificación correcta en nuestro Cód.; pero no pudiendo elevarse la pena establecida por los arts. 63 y 96, inc. 3º del Cód. Pen., debe comprenderse el caso en el inciso del último artículo citado.

1^d—Arts. 83, inc. 2º; y 96, inc. 3º del Cód. Pen.

1^e—Véase: la nota al verb. *Alevosía*, núm. 1.



penitenciaria, si el reo es mayor de sesenta años.—Jur. Crim., tom. 10, pág. 329, Ser. 4^a.

1^a. **Homicidio provocado**—Por la víctima con injurias ilícitas y graves, debe ser penado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 28 y 129, Ser. 4^a.

1^b. **Homicidio simple**—Si la herida por su gravedad pudo causar la muerte, el autor debe ser penado como reo de homicidio sin que pueda admitirsele excepciones injustificadas sobre si el fallecimiento puede imputarse á otras causas.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 424, Ser. 4^a.

2. **Homicidio simple**—Debe ser penado con cuatro años y seis meses de presidio, si en el autor no existió intención homicida.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 121, Ser. 4^a.

3. **Homicidio simple**—Precedido de discusión y vías de hecho, debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 344, Ser. 4^a.

4. **Homicidio simple**—Debe ser penado con cuatro años y medio de presidio.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 295, Ser. 4^a.

5. **Homicidio simple**—Con provocación de la víctima aceptada por el reo, debe ser penado con tres años de penitenciaria.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 213, Ser. 4^a.

6. **Homicidio simple**—Corresponde la pena de ocho años de presidio al homicidio simple sin circunstancias.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 41, Ser. 4^a.

7. **Homicidio simple**—Por provocación de la víctima, debe ser penado con cuatro años y medio de penitenciaria.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 80, Ser. 4^a.

1^a—Art. 97 del Cód. Pen.

1^b—Véase: verb. *Herida*, núm. 1.

4—Art. 96 del Cód. Pen.

5—Art. 97 del Cód. Pen.



1^a. **Homicidio voluntario**—Debe calificarse de homicidio voluntario, el cometido sin intención de matar á persona determinada.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 65, Ser. 4^a.

1^b. **Honorarios**—El hecho de haber pagado ó no el pe-rito el impuesto fiscal, no puede fundar la escepción de inhabilidadde título en la ejecución de sus honorarios debidamente regulados.—Jur. Com., tom. 1, pág. 5, Ser. 4^a.

2. **Honorarios**—Los honorarios devengados ante un Juez de Instrucción, deben ser ejecutados ante la misma jurisdicción.—Jur. Crim., tom. 1, pág. 240, Ser. 4^a.

3. **Honorarios**—Si por error el abogado y procurador

1^a—Para que el homicidio exista, basta la voluntad de matar á una persona indeterminada, basta el hecho material y la muerte de una persona. Haus, tom. 1^o, núm. 312, *Principes Generaux du Droit Penal*, dice: «cuando el agente ha ejecutado el hecho con una intención indeterminada de dañar, se le debe imputar como voluntario é intencional el resultado de su acción cualquiera que él sea.» *Dolus indeterminatus determinatur eventus*. El atentado cometido voluntariamente con una intención indeterminada de dañar, si ha causado la muerte de la persona que ha sido objeto de él, es un homicidio voluntario no calificado de asesinato—núm. 313; y muy especialmente el núm. 315.—Los casos de homicidio simplemente culpables que traen los autores y mencionaban las leyes antiguas, son muy distintos del que nos ocupa. El que disparando una arma de fuego que creía no estaba cargada, hiriese á otro, los farmacéuticos, médicos, cirujanos, parteras que por ignorancia dan muerte á la persona á quien asisten, ó para quien preparan los medicamentos, los que descargan armas cazando en lugares prohibidos, son reos de homicidio culpable, porque non pusieron y tan gran guarda como debieran ó hicieron cosas en ante porque viera la ocasión.—Ley 5^a, tít. 8^o, Part. 7^a; Haus, núm. 326.

1^b—Véase: *Inhabilidad de título*, núm. 19.

2—Las costas procesales son indudablemente incidentes de los juicios en que se han causado y debe conocer de las gestiones que á ellos se refieran los jueces que conocen en lo principal. Así resulta de las disposiciones del tít. 7^o, lib. 1^o del Cód. de Proc. Crim., y especialmente del art. 147 de dicho Cód.

3—Véase: verb. *Abogado*, núm. 4.



vencidos, han cobrado honorarios regulados al vencedor, la Cámara carece de jurisdicción para obligarlos á su devolución—Jur. Com., tom. 1, pág. 268, Ser. 4^a.

4. **Honorarios**—Si las partes alegan hechos que justificados hagan improcedente la regulación de los honorarios, debe recibirse á prueba el incidente—Jur. Com., tom. 1, pág. 310, Ser. 4^a.

5. **Honorarios**—No son de cargo del deudor los honorarios y costas, siempre que se verifica el pago antes de librarse mandamiento.—Jur. Com., tom. 1, pág. 412, Ser. 4^a.

6. **Honorarios**—Del abogado del ejecutado, no pueden ser pagados de los fondos de la ejecución en tanto no se haya satisfecho el crédito y gastos del acreedor.—Jur. Com., tom. 2, pág. 134, Ser. 4^a.

7. **Honorarios**—El poder especial caduca por la terminación del juicio y no es bastante para intervenir en el incidente sobre regulación de honorarios.—Jur. Com., tom. 2, pág. 151, Ser. 4^a.

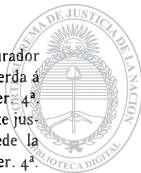
8. **Honorarios**—En el incidente sobre regulación de honorarios después de terminado el juicio, debe intervenir personalmente el acusado condenado á su pago.—Jur. Com., tom. 2, pág. 151, Ser. 4^a.

5—Véase: verb. *Costas*, núm. 4.

6—En los gastos de la ejecución de que habla el art. 527 de la Ley de Proc. Civ., no están comprendidos los honorarios del abogado del deudor ejecutado.

7—Una vez terminado definitivamente el juicio, debe aplicarse el art. 1972 del Cód. Civ., y 18, inc. 4º del Cód. de Proc. Esto sucede cuando el apoderado es especial. Cuando es general tiene siempre personería, porque el poder no caduca.

8—Véase la nota precedente.



9. **Honorarios**—Los gastos de abogado y procurador del fallido, no gozan del privilegio que la ley acuerda á los causídicos.—Jur. Com., tom. 3, pág. 13, Ser. 4^a.

10. **Honorarios**—En tanto no resulte plenamente justificada en autos la obligación de pagarlos, no procede la acción ejecutiva.—Jur. Com., tom. 4, pág. 194, Ser. 4^a.

11. **Honorarios**—Los peritos tienen derecho á cobrarlos, si han presentado su trabajo antes de suspenderse la ejecución.—Jur. Com., tom. 5, pág. 135, Ser. 4^a.

12. **Honorarios**—El juez que conoce en la causa, cualquiera que sea su jurisdicción, es el competente para entender en el cobro de honorarios.—Jur. Com., tom. 5, pág. 165, Ser. 4^a.

13. **Honorarios**—Los médicos de policía carecen de derecho para cobrar honorarios en los expedientes criminales entre partes, en que intervengan á requisición de los jueces de Instrucción.—Jur. Crim., tom. 7, páginas 391 y 392, Ser. 4^a.

14. **Honorarios**—De los peritos nombrados de oficio—no empleados á sueldo—deben ser abonados por el po-

9—Se trataba de honorarios devengados con posterioridad al juicio de quiebra.

10—Véase: verb. *Acción ejecutiva*, núm. 1.

12—El juicio en este caso es un incidente de aquel en que se devengaron los honorarios.

13—Los médicos de Policía forman parte del personal de esa repartición y están por consiguiente obligados como tales á prestar los servicios que les fuesen ordenados por los jueces de Instrucción, con arreglo á lo dispuesto en los arts. 185 y 347, Cód. de Proc. Crim.

14—El art. 168 del Cód. de Proc. en lo Crim., expresa: *que el denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento judicial, ni incurre en responsabilidad alguna*, salvo el caso de calumnia. La disposición legal citada, es precisa y terminante y aplicable al caso de denuncia, y de ella se deduce que el denunciante no contrae en el procedimiento del proceso responsabilidad alguna.



der ejecutivo.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 392, Ser. 4^a.

15. **Honorarios**—Surtiendo la consignación los efectos del pago desde su aceptación, los gastos y honorarios son de cuenta del ejecutante.—Jur. Com., tom. 8, página 163, Ser. 4^a.

16. **Honorarios**—El ejecutado puede pedir en cualquier estado del juicio la regulación de honorarios, sin que pueda fundarse la nulidad en el hecho de no haber presentado su cuenta los interesados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 192, Ser. 4^a.

17. **Honorarios**—Los acreedores con privilegio general—honorarios de abogado y síndico—solo tienen prelación sobre los de privilegio especial—alquileres—en la parte necesaria para la venta de los bienes afectados.—Jur. Com., tom. 10, pág. 214, Ser. 4^a.

18. **Honorarios**—El juez de la causa debe practicar la regulación de honorarios, aun cuando el deudor haya fallido.—Jur. Com., tom. 10, pág. 239, Ser. 4^a.

19. **Honorarios**—Los peritos tasadores solo pueden

15—Véase: *Consignación en pago*, núm. 3.

16—Atento la naturaleza del juicio ejecutivo y lo dispuesto en el art. 507, Cód. de Proc., no es el caso de procederse en la regulación con arreglo a los arts. 65 y 67 del apéndice, sino con los arts. 62 y 63.

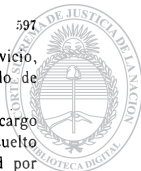
17—Véase: verb. *Acreedor privilegiado*, núm. 4.

19—Esta cuestión fué resuelta por mayoría de votos, diciendo ésta que la tasación de los bienes embargados se ejecuta en los juicios ejecutivos, bajo la autoridad del juez, son las partes las que hacen el nombramiento de peritos—art. 512, Cód. de Proc.—es decir, que son éstas las que contratan los servicios del tasador. La intervención del juez no tiene, pues, otro objeto que revestir el acto de las solemnidades necesarias para darle toda su eficacia legal; y desde luego, es evidente que esa intervención, dado el objeto especial y limitado que tiene, no puede llegar a modificar las relaciones jurídicas que nacen del contrato de locación de servicios celebrado entre las partes y los tasadores. El art. 63 del Apéndice del Cód. de Proc., refiriéndose a los honorarios

exigir ejecutivamente el cobro de sus honorarios á la

de cualquier perito en los casos de condenación en costas, deja amplia libertad á las partes en cuanto á la determinación de su importe, y esto demuestra plenamente que es el contrato, ante todo, lo que gobierna las relaciones de las partes con los peritos; de modo que la circunstancia de que se haga la operación pericial bajo la autoridad del juez, como la de que una de las partes sea condenada en costas, en nada modifica ni altera la situación respectiva que el contrato crea á las partes. Supóngase que en un juicio, el tasador hubiera convenido con el actor en hacer su trabajo por mil pesos, y que á consecuencia de la oposición del ejecutado, por ser él quien en definitiva debe pagar, se fijase por el juez en quinientos pesos los honorarios del tasador. ¿Tendría derecho ó nó éste en tal caso para cobrar al actor los mil pesos convenidos? El art. 63 citado, dice espresamente que sí, lo que significa con toda claridad que el vínculo jurídico que nace del contrato, no se habría modificado en manera alguna por el hecho de la condenación en costas impuesta al ejecutado. La condenación en costas, sea declarada por el juez, sea impuesta por la ley, no puede producir el resultado de cambiar la persona del deudor respecto del acreedor, que no consiente en semejante sustitución y cuyo título nace de un contrato que no puede ser modificado sin el concurso de su voluntad. De otro modo, si la condenación en costas tuviera por virtud efectuar un cambio en las personas de los contratantes, se habrían alterado fundamentalmente y sin objeto alguno todos los principios legales vigentes en materia de contratos. Ahora bien, como no hay razón que justifique esta derogación de los principios generales, debe concluirse, como resulta claramente del art. 63 del Cód. de Proc., que el efecto propio y único de la condenación en costas, es autorizar al vencedor para que reclame directamente del vencido el pago de los gastos, sin perjuicio de que en sus relaciones con los terceros cuyos servicios ha utilizado, se someta á las reglas generales de derecho. Esta conclusión surge también de otra consideración de distinto orden. Es regla elemental de procedimiento que las sentencias solo pueden ser invocadas á favor ó en contra de los personas que han intervenido en el juicio en que han sido dictadas. Pues bien, en virtud de esa regla, es obvio que la condenación en costas pronunciada en favor de una de las partes, solo puede ser invocada por ella, y que carecería de título cualquier extraño al juicio que pretendiera algún derecho fundado en una sentencia que no puede aprovecharle ni perjudicarle. Estas consideraciones y teniendo en cuenta que la acción que ejercitaba el ejecutante





parte con quien hayan contratado la locación del servicio, sin perjuicio de que perciban el precio del producido de los bienes.—Jur. Com., tom. 10, pág. 372, Ser. 4^a.

20. **Honorarios**—Del curador provisorio, son á cargo del denunciado como insano, aun cuando se haya resuelto la improcedencia de la declaratoria de incapacidad por ser una mujer casada la pretendida insana.—Jur. Civ., tom. 9, pág. 413, Ser. 3^a.

21. **Honorarios**—Para que el término de dos años que la ley fija para la prescripción de los honorarios del abogado empiece á correr, el pleito debe haber terminado por sentencia ó transacción.—Jur. Civ., tom. 10, pág. 170, Ser. 3^a.

22. **Honorarios**—La testamentaria solo debe pagar los honorarios devengados en interés de la masa.—Jur. Civ., tom. 11, pág. 248, Ser. 3^a.

23. **Honorarios**—Es improcedente la ejecución por honorarios contra el mandatario, aun cuando resulte que él los percibió de la parte condenada en costas.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 384, Ser. 4^a.

24. **Honorarios**—No procede el embargo preventivo por honorarios, si no existe regulación.—Jur. Civ., tom. 12, pág. 423, Ser. 3^a.

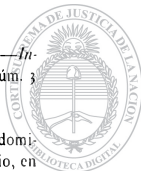
es la que nace del contrato celebrado con el ejecutado, y teniendo presente además la jurisprudencia constante y uniforme de nuestros tribunales á este respecto, como puede verse en el tom. 3^o, pág. 554, Ser. 1^a de los Fallos de la Cám. Civ.; tom. 7^o, pág. 101, Ser. 2^a de los de la Cám. Com.; tom. 1^o, pág. 72; y 3^o, pág. 231, Ser. 2^a de la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de Buenos Aires, resolvió la mayoría la cuestión en el sentido del sumario.

20—Véase: *Curador*, núm. 2.

21—Véase: verb. *Abogado*, núm. 2.

23—Véase: *Costas*, núm. 51.

24—Porque no hay deuda líquida.



Honorarios—Véase: *Derecho de retención*, núm. 1.—*Inhabilidad de título*, núm. 3.—*Depositario judicial*, núm. 3.—*Excepción de inhabilidad de título*, núm. 4.

Hora señalada—Véase: *Posiciones*, núm. 7.

1°. **Horas hábiles**—No puede existir violación de domicilio, tratándose de la entrada en una casa de negocio, en horas hábiles.—Jur. Com., tom. 8, pág. 359, Ser. 4ª.

1. **Hurto**—Corresponde la pena de dos años de prisión al cometido sin circunstancias.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 175, Ser. 4ª.

2. **Hurto**—De menor valor, con reiteración y abuso de confianza, debe ser penado con un año de arresto.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 392, Ser. 4ª.

3. **Hurto**—Por mayor valor, con las circunstancias agravantes de ser de noche y reincidencia, debe ser penado con tres años de prisión.—Jur. Crim., tom. 3, página 406, Ser. 4ª.

4. **Hurto**—Cometido por el autor de un robo, debe considerarse circunstancia agravante del primer delito.—Jur. Crim., tom. 3, pág. 425, Ser. 4ª.

5. **Hurto**—El fin más ó menos lícito que se proponga el reo al apoderarse de la cosa ajena, no puede alterar la clasificación del hecho como delito.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 121, Ser. 4ª.

6. **Hurto**—Clandestino y con abuso de confianza, debe ser penado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 4, pág. 88, Ser. 4ª.

7. **Hurto**—Castigado con pena menor, solo se conceptúa circunstancia agravante del delito que merezca otra mayor.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 79, Ser. 4ª.

8. **Hurto**—De objetos cuyo valor no alcance á mil

1ª—Véase: *Casa de negocio*, núm. 1.



pesos pasando de quinientos, debe ser penado con dos años de prisión, si existen antecedentes que permitan la atenuación de la pena.—Jur. Crim., tom. 5, pág. 311, Ser. 4^a.

9. Hurto—De muebles, cuyo valor excede de quinientos pesos, corresponde á la jurisdicción criminal.—Jur. Criminal, tom. 5, pág. 356, Ser. 4^a.

10. Hurto—El hurto de más de quinientos pesos moneda nacional, debe ser penado con tres años de prisión, si existe reincidencia.—Jur. Crim., tom. 6, pág. 151, Serie 4^a.

11. Hurto—El encubridor del delito de hurto cometido por un menor, debe ser castigado con un año de arresto.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 118, Ser. 4^a.

12. Hurto—El conocimiento de que los objetos que se pretende enajenar son robados, permite calificar, y penar al poseedor como encubridor del hurto, pero no como autor principal.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 137, Ser. 4^a.

13. Hurto—El hurto reiterado de objetos cuyo valor no alcanza á quinientos pesos moneda nacional, debe ser penado con un año de arresto.—Jur. Crim., tom. 7, pág. 286, Ser. 4^a.

14. Hurto—El hurto cuyo valor no excede de quinientos pesos moneda nacional, debe ser castigado con dos años de prisión.—Jur. Crim., tom. 7, págs. 54 y 125, Serie 4^a.

15. Hurto—Reiterado, de objetos cuyo valor excede de quinientos pesos, debe ser castigado con dos años de prisión, si el reo es menor de quince años.—Jur. Crim., tom. 8, pág. 258, Ser. 4^a.

11—Véase: verb. *Encubridor*, núm. 9.

12—Véase: verb. *Encubridor*, núm. 8.

16. **Hurto**—Sin circunstancias atenuantes ni agravantes, debe ser penado con dos años de prisión. — Jur. Crim., tom. 2, pág. 5, Ser. 4^a.

Hurto—Véase: *Acumulación de penas*, núm. 1.



FE DE ERRATAS

TOMO VI — PRIMERA PARTE



Pág.	Núm.	Línea	Dice	Léase
9	2	4	252	257
.	5	4	388	389
16	nota 1	39	Code explotación	Code exploitation
64	2	4	466	166
70	1	2	274	272
99	1 ^a	3	4 ^a	3 ^a
104	nota 1 ^b	2	5 y 6	5 y 6 del mismo verb.
105	3	3	apoderado	poderante
106	7	4	279	276
128	8	2	existencia	inexistencia
137	1	3	9	8
152	1 ^b	2	la	de
184	7	3	Civ.	Com.
198	1 ^a	3	215	152
222	22	4	6	8
238	1	3	Com.	Civ.
245	3	5	4	6
253	14	3	Com.	Civ.
276	2	5	362	361
281	1	3	Civ.	Com.
.	3	4	8	5
283	1	4	248	249
294	2	3	Com.	Civ.
300	1 ^b	3	Civ.	Com.
304	nota 2	1	Anterior	Anterior
.	1 ^a	5	Civ.	Com.
314	2	4	.	.
315	.	3	.	.
316	3	3	396	306
325	34	5	Civ.	Com.
347	31	3	148	251
352	1 ^a	3	1	2
353	2	3	275	175
362	9	4	Civ.	Com.
367	30	5	9	10

Pág.	Núm.	Línea	Dice	Léase
368	31	7	9	10
370	32	3	.	11
"	33	4	.	.
"	34	6	.	.
371	35	3	.	.
375	9	5	8	12
378	3	4	Civ.	Com.
382	14	3	17	187
404	1a	3	Civ.	Com.
408	4	3	.	.
411	6	4	400	408
426	verb. <i>Dia</i>	1	núm. 2	núm. 7
430	5	3	Civ.	Com.
"	6	4	.	.
"	9	3	.	.
438	nota 1 ^b	38	se	no se
440	1	4	tom. 2	tom. 3
442	1 ^b	2	Civ.	Com.
448	3	3	.	.
"	1	5	.	.
450	1 ^b	3	.	.
456	1c	2	.	.
464	1a	6	.	.
478	nota 1	1	619	629
483	13	1	477	377
488	4	1	Escep. de arraigo	Escep. de caducidad
"	5	.	.	.
"	6	.	.	.
"	7	.	.	.
502	nota 9	33	funda	funde
530	1	4	Civ.	Com.
532	1 ^d	3	339	329
"	1c	.	.	.
538	1	.	Civ.	Com.
557	1	2	.	.
565	1	3	ordenario	ordinario
573	6	4	437	439
585	4 ^b	5	Civ.	Com.
587	3	3	349	249



